

CRÓNICAS DEL ESTALLIDO



EL OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES EN AMÉRICA LATINA (OMAL) (www.omal.info) es un proyecto creado por la Asociación Paz con Dignidad en el año 2003, con el objetivo de investigar, documentar y sistematizar los impactos sociales, ambientales, culturales, económicos y sobre los derechos humanos que son generados por la actuación de las empresas transnacionales en América Latina. OMAL estudia la presencia de multinacionales españolas en esa región, para lo cual trabaja en red con organizaciones sociales, políticas y sindicales, así como con instituciones, universidades, ONGD y centros de estudios de América Latina y del Estado español.



Paz con Dignidad (www.pazcondignidad.org) es una organización sin ánimo de lucro, creada en 1995, que trabaja por la transformación del actual modelo neoliberal y trata de incidir en las causas que originan las desigualdades y las injusticias, a través de la defensa de los derechos humanos, la solidaridad y la cooperación internacional.

Esta publicación cuenta con la colaboración de:



AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO



GOBIERNO VASCO



LA COORDINACIÓN POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CODPI) es el espacio de trabajo y acción conjunta conformado por las organizaciones alterNativa-Intercambio con Pueblos Indígenas, Almaciga, Mugarik Gabe y la Asociación Periferias para promover, desde el Estado español, el ejercicio efectivo de los derechos humanos, individuales y colectivos, de los pueblos indígenas.

La CODPI se fundamenta en la especialización de cada una de sus organizaciones en el trabajo con estos pueblos, a favor del reconocimiento de sus derechos y de la construcción de sus modelos de desarrollo, a partir de sus propias visiones, necesidades y sueños. Trabajamos con colectivos y autoridades indígenas, así como con sus redes de apoyo en América Latina y Europa, al tiempo que llevamos a cabo una labor de incidencia política y social a nivel estatal, y de denuncia frente a los actores responsables de vulneraciones de derechos. Más información en www.codpi.org.



DIAGONAL es un periódico de información, investigación y análisis fundado en 2005, que surge y se nutre de los movimientos sociales. Tanto en su versión quincenal en papel como en la web (www.diagonalperiodico.net), *Diagonal* apuesta por una información rigurosa y de calidad. Para asegurar la independencia de la línea editorial, *Diagonal* no acepta publicidad de grandes empresas, no depende de ningún grupo económico y se financia gracias a una red de 5.000 suscriptores que conforma el accionariado popular de este medio. También en la forma de funcionar *Diagonal* es diferente: las decisiones se toman en asamblea, no hay jefes de redacción ni directores y los nodos territoriales son autónomos.

MARTÍN CÚNEO Y EMMA GASCÓ

CRÓNICAS DEL ESTALLIDO

VIAJE A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
QUE CAMBIARON AMÉRICA LATINA

Icaria  Antrazyt
AMÉRICA LATINA

Diseño de la cubierta: Adriana Fàbregas

Fotografía de la cubierta: Nicolas Pousthomis (Cooperativa Sub).
Foto tomada en Buenos Aires (Argentina) en el levantamiento popular
del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Corrección: Syntagmas

Icaria editorial, s. a.
Arc de Sant Cristòfol, 11-23
08003 Barcelona
www.icariaeditorial.com

Primera edición: Noviembre de 2013

ISBN: 978-84-9888-555-2
Depósito legal: B. 26364-2013

Fotocomposición y mapas: Syntagmas

Impreso en Romanyà/Valls, s. a.
Verdaguer, 1, Capellades (Barcelona)



Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España
(CC BY-NC-ND 3.0 ES)

Este libro ha sido impreso en papel 100% Amigo de los bosques, proveniente de bosques sostenibles y con un proceso de producción de TCF (Total Chlorine Free), para colaborar en una gestión de los bosques respetuosa con el medio ambiente y económicamente sostenible.

ÍNDICE

Prólogo, *Raúl Zibechi* 9

Introducción 15

ARGENTINA

«Murió Néstor» 19

«Alegría» 25

«Está usted despedido, jefe» 38

Hacia la Patagonia 47

Los colores de Zanón 59

En el país de la soja 67

Ruta 40 hacia el norte 72

BOLIVIA

El gasolinazo 77

Mamá Coca 79

«La primera victoria contra el neoliberalismo» 86

«El temblor viene de abajo» 91

El Alto de pie 100

«El fin de los libros sagrados» 108

«Un Estado salpicado de pueblo» 111

«Un paraguas contra la lluvia ácida neoliberal» 119

PERÚ

- Las diez vidas de Hugo Blanco 125
- Entre el Ejército y Sendero 134
- «Dueñas de su destino» 144
- El ritmo del Chino... en la cárcel 150
- Tarde, pero puntual 155

ECUADOR

- El primer barril de petróleo 173
- Los guardianes de la selva 183
- «Como la paja del páramo» 191
- En Ecuador también: «Que se vayan todos» 205
- La Revolución Ciudadana 209
- «Extractivismo del siglo XXI» 216

COLOMBIA

- Cauca: «Tierra para la gente, gente para la tierra» 221
- Chocó: palenques, cimarrones y comunidades negras 238
- «Este corrido se les ha terminado» 249
- La potencia del dolor 255

NICARAGUA

- Victorias y derrotas de la Nicaragua sandinista 267
- La revolución de las mujeres 270

EL SALVADOR

- La campana que salvó a Guarjila 291
- La mara neoliberal 315

GUATEMALA

- ¿Problemas de memoria? 333
«Las mujeres rompen el terror» 339
Después de la tormenta 345
Una nueva era para las comunidades mayas 356

MÉXICO

- De Chiapas al cielo 369
Los machetes de Atenco 378
La Comuna de Oaxaca 388
Presidente deslegitimado busca guerra 394
«La Parota ya cayó» 399



PRÓLOGO

Raúl Zibechi*

La historia de los que no tienen historia

Aunque existe una larga experiencia que avala la importancia de las pequeñas iniciativas locales en la gestación de los movimientos que han cambiado el mundo, así como de las innovaciones que nacen en los márgenes y luego se difuminan hacia el resto de la sociedad, el pensamiento hegemónico en las izquierdas y las academias sigue centrado en los grandes acontecimientos y en el papel de los dirigentes. Como si la historia y los relatos políticos y sociales fueran escritos en torno a los sucesos en las grandes alamedas y por las intervenciones providenciales de los líderes, opacando así la cotidianeidad de la gente común en la que unas y otros beben y se alimentan.

Esta historia de episodios heroicos y acontecimientos trascendentales tiene, desde hace medio siglo, una contrahistoria que aún no ha conseguido instalarse en el alma y en el cuerpo de nuestras izquierdas sociales y políticas. En la historia tradicional del movimiento obrero, como señala Castoriadis, «las fechas de las huelgas y las insurrecciones reemplazan en ella a las batallas, los nombres de los líderes o de los militantes heroicos a los de reyes y generales»¹. Son relatos producidos por una cultura elitista que se resiste a dar paso a nuevos modos de sentir la vida; una vieja cultura que se asienta en la inercia de cierto

*Periodista, escritor y activista uruguayo. Editor del semanario *Brecha*.

1. CASTORIADIS, C. (1979), *La experiencia del movimiento obrero*, vol. 1, Tusquets, Barcelona, p. 16.

sentido común que es funcional a las nuevas capas de jerarcas, encajados en la protesta popular, pero que al reproducir viejos paradigmas anuncian que los cambios son tan superfluos como poco duraderos.

En los márgenes del relato hegemónico empiezan a aparecer otros relatos, que ponen en el centro a la gente común, a los más diversos *abajos*, a los ninguneados de siempre: mujeres indias y negras, niñas y niños, situados siempre en el escalón simbólico más bajo del imaginario político y social. Aunque duela decirlo, la izquierda y la academia encuentran razones para no considerarlos sujetos, sino apenas seguidoras, aplaudidoras, personas que solo entran en la historia a través del discurso del dirigente, en general varón, escolarizado, bienhablante y, por tanto, referente ideal para analistas que, en general, son reclutados en ese mismo estrato social y cultural.

Por el contrario, los relatos y análisis políticos, históricos o periodísticos deberían parecerse a un arcoíris en el cual quepan todas las formas de ver y sentir el mundo, sin que ninguna se coloque encima de la otra, para que contengan tantos colores como la vida misma, cada uno con sus matices, gradaciones y escalas. La historia de la gente común no puede reflejarse en un tapiz de un solo color o en un relato único, que siempre serán afines a las clases dominantes. Una historia monocolor sería como un monocultivo, homogéneo, igual a sí mismo, un desierto incapaz de reflejar la diversidad de la vida real de los hombres y mujeres que hacen la historia.

Ciertamente, hilvanar escritos inspirados en esta concepción del mundo requiere de las artes y talentos de los artesanos. Personas capaces de cincelar historias de vida, esculpir narraciones y repujar relatos con la delicadeza, la perspicacia y la ternura del artesano. Quiero decir que no se puede poner a la gente común en el centro del escenario sin amarla, sin dejarse estremecer por sus sufrimientos y regocijarse con sus contentos. Lo que supone, a la vez, respeto sin veneración, ternura sin caridad.

Colocar a la gente común en el centro de un relato, de una narración política, histórica o periodística, implica poner en juego una manera de ver el mundo, de situar a los seres humanos en él, pero también de situarse uno mismo en ese mundo y en esos relatos. Implica, sobre todo, *jugar-se*, en sus dos sentidos: correr el riesgo y descubrirse, mostrarse. Correr el velo de la distancia objetiva para implicarse junto con otros en una relación necesariamente horizontal. Solo en ese tipo

de relación entre iguales, entre sujetos diferentes, pueden emerger historias que serían rigurosamente ocultadas apenas el entrevistado perciba la menor intención de convertirlo en objeto de estudio.

El trabajo realizado por Emma Gascó y Martín Cúneo es el de dos artesanos viajeros que, recorriendo este continente, se redescubren a sí mismos a medida que van recorriendo comunidades, pueblos, gentes otras, tan cercanas y tan diferentes. En ese viaje, un verdadero viaje interior, el diálogo que descubre a los diferentes es un espejo en el que mirarse, mirarnos, descubriéndonos en otras y en otros.

Aparecen así, ante el lector, las más pequeñas, las más dignas, las hacedoras de buena parte de lo nuevo que está sucediendo en este continente. Las Madres de Ituzaingó, en Córdoba (Argentina), mujeres que atravesaron el dolor de sus hijos mutilados por las fumigaciones del agronegocio y se pusieron en marcha. «Mujeres comunes», como dicen ellas mismas; muy pocas, pero tan activas que lograron romper el muro de silencio con el cual el sistema enclaustra a los de abajo en las periferias, porque son seres prescindibles para la acumulación de capital. Con matices, es la misma historia que nos cuentan Emma y Martín sobre las mujeres quechuas de Ayacucho, como Mamá Angélica, que movieron cielo y tierra para encontrar a sus hijos desaparecidos en la guerra sucia de los ochenta. Una vez más, pobres, pocas, empecinadas, como las Madres de Soacha en la periferia de Bogotá, que sacaron a la luz una de las más tenebrosas maniobras del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para justificar el asesinato de jóvenes inocentes y poder cumplir con la cuota de muertos que requieren los presupuestos de la guerra interior.

Por momentos, puede pensarse que se trata de un memorial de agravios, de la suma infinita de agresiones que sufren los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los campesinos, los sectores populares urbanos. No es ese el centro, porque Martín y Emma no colocan a sus entrevistados como víctimas que piden, sino como sujetos dignos en resistencia. Esa es una de las grandes virtudes de este trabajo: mostrar que se puede, que es posible superar el dolor, la derrota y la humillación. Por eso en estas páginas veremos que en ocasiones los sujetos no tienen nombre y apellido, que se llaman comunidad, barrio, pueblo, sujetos colectivos como las decenas de comunidades mayas que se reinventan a sí mismas en la defensa de la vida frente a los grandes proyectos del capital.

Que la gente común es capaz de emanciparse por sí sola es algo que aprendimos en los libros hace más de un siglo. Si creemos de verdad en esa afirmación, debe hacerse carne en hechos concretos, como los que describe y analiza este libro. Parece necesario recordarlo, una y otra vez, cuando la religiosidad política hegemónica nos habla de líderes y caudillos —respetables muchas veces— sin conectarlos con los hechos y las luchas que les dieron vida.

Quiero comprender este libro, si Emma y Martín me lo permiten, un libro que cuenta historias maravillosas y es un libro también maravilloso, como un toque de atención a cierta euforia progresista-izquierdista que recorre la región y cuyas realizaciones han sido mitificadas en el Norte. Como si los gobiernos estuvieran construyendo una sociedad justa o realizando alguna venturosa revolución desde arriba.

Más allá de lo que cada cual piense de los actuales procesos latinoamericanos, Emma y Martín nos están diciendo que solo mirando hacia abajo y en horizontal, podemos entender algo de lo que viene sucediendo en la última década. Que si nos limitamos a los discursos de los dirigentes, a las leyes aprobadas por los gobiernos y a los programas que anuncian, por más interesantes que nos parezcan, no habremos entendido sino una mínima parte de esta realidad.

Las claves de lo que sucede en el escenario público hay que buscarlas en las prácticas cotidianas de los sectores populares, como afirma James Scott: «Siempre que limitemos nuestra concepción de *lo político* a una actividad explícitamente declarada, estaremos forzados a concluir que los grupos subordinados carecen intrínsecamente de una vida política»². Concentrarnos en el continente que está detrás de la costa visible de la política parece un paso necesario para comprender, que es el primer acto de la creatividad humana.

Por último, felicitarlos por el trabajo, por el modo de escribirlo y de transitarlo, porque nos están hablando de una ética que los narradores y escritores debemos respetar, reglas no escritas que apuntan a la lealtad con los protagonistas, que es un modo de ver el mundo y de vivirlo que anuncia todo un programa de vida, más valioso aún porque no se declara, simplemente se hace.

2. SCOTT, J.C. (2000), *Los dominados y el arte de la resistencia*, México, ERA, p. 233.

AGRADECIMIENTOS

A Dardo Cúneo (el viejo), Fanny Yest y Emma Rey, que nos mostraron el camino. A nuestros padres y madres, que nos dieron el empujón. A nuestros hermanos, que siempre nos apoyaron.

A todas las personas que encontramos en la ruta y que aceptaron compartir sus experiencias y sus aprendizajes, ahora también con vosotros.

A Omal, Codpi y Diagonal, que creyeron en el proyecto. A todas las personas que participaron en el crowdfunding que permitió terminar de financiar la publicación de este libro.

A todas aquellas personas que nos orientaron, nos dieron claves para entender, nos recibieron con los brazos abiertos, nos corrigieron. Sin estas personas este libro no hubiera sido posible: Olga Abad, Carlos Aguirre Rojas, Ros Amils, Mario Amorós, Juan Ávila, Caroline Betemps, Anna Bikel, Vicent Boix, Andrés Cabanas, Olmo Calvo, Pablo Carmona, Kistiñe Cárcamo, La Casa de los Sueños, María José Castro, Sergio de Castro, Óscar Ceballos, Irene Cuesta, Soraya Constante, Diana Cordero, Blanca Crespo, Lola Cubells, Fernán Chalmeta, Rodolfo Chávez, Jesús Espasandín, Carmen Fabián, Karin de Fries, Marco

Gandarillas, Gardenia, Anouk Garrigues, Juan Pablo Guzmán, Domingo Hernández Ixcoy, Luis Hernández Navarro, Bea Huber, Anaïs Huerta, Dolores Jarquín, Diego Jiménez, familia Lestard, Edu León, María Lohman, Lucía Losoviz, Teresa Lozano, Decio Machado, Betty Matamoros, Luis M., Fernando Molina, Julio Montoya, Roberto Montoya, Ana Belén Negrete, Federico Orchani, Daniel Ota, Vicente Otero, Eduardo Pérez, Fabián Pierucci, Nicolas Pousthomis, Pedro Ramiro, Pato Realpe, María Fernanda Restrepo, Fernanda Rojas, Héctor Rojo, Miguel Romero, Hernán Scandizzo, Mar Soler, Jorge Valiente, Omar Vera, María del Carmen Verdú, Miguel Villafranca, Pablo Villegas, Beatriz Yarza, Vicente Zapata, Lorena Zelaya y Raúl Zibechi.

«A los resistentes pasados, presentes y futuros»
(Dedicatoria de la serie *V, invasión extraterrestre*, 1983)

INTRODUCCIÓN

¿Por qué un libro sobre victorias de movimientos sociales en América Latina?

Rescates del FMI condicionados a recortes sociales, despidos y privatizaciones, toda una batería de medidas ultraortodoxas para reducir la prima de riesgo y conseguir financiación para países en ruina tras décadas de especulación desenfrenada... Instituciones y partidos políticos desacreditados por unos niveles inéditos de corrupción y por su complicidad en el empobrecimiento de millones y millones de personas...

¿Hablamos de Argentina, Bolivia o Ecuador? ¿O más bien de España, Grecia o Portugal? Más allá de las diferencias evidentes, las semejanzas son asombrosas. Acercarse a los procesos de implantación del neoliberalismo en América Latina y a las luchas que consiguieron resquebrajar su aplicación puede resultar más útil que nunca en los países europeos estrangulados por las exigencias del FMI y las instituciones financieras de la Unión Europea. Sobre todo cuando los partidos y los sectores económicos responsables de la crisis entonan una y otra vez el estribillo que ya hizo famoso Margaret Thatcher en los ochenta para justificar las políticas neoliberales: «No hay alternativa».

En el caso de América Latina, millones de campesinos, indígenas, desempleados, trabajadores precarios y personas procedentes de sectores marginales, organizados en movimientos sociales de base, consiguieron frenar privatizaciones, expulsar multinacionales, propiciar o tumbar leyes y crear alternativas económicas para cientos de miles de

personas. También fueron claves en la destitución de dos presidentes neoliberales en Bolivia, tres en Ecuador y cuatro en Argentina.

Esta es la historia que cuenta *Crónicas del estallido*, una historia basada en los testimonios de más de doscientos activistas, entrevistados durante un viaje de quince meses, 10.000 kilómetros hacia el norte por la carretera Panamericana, desde Argentina a México. No es un ensayo, ni un libro de Historia. Tampoco pretende ser objetivo ni exhaustivo: no están reflejados todos los países ni mucho menos todos los movimientos, ni todos los puntos de vista. Es un libro que recoge relatos de personas corrientes que, en contextos de adversidad o niveles paralizantes de violencia, se coordinaron para mejorar sus condiciones de vida, para exigir justicia o para detener el saqueo de los bienes comunes, ya sean tierras, recursos naturales, empresas públicas o elementos tan básicos para la vida como el agua. Todas las historias tienen algo en común: de alguna manera, lo lograron.

Las fábricas recuperadas, los cocaleros bolivianos, los forajidos ecuatorianos, las comunidades negras del Pacífico colombiano, los movimientos de mujeres en Nicaragua, los barrios empobrecidos que frenaron la privatización de los servicios públicos o las decenas de pueblos que vencieron a multinacionales mineras y petroleras son algunos de los protagonistas de este libro.

Son historias que van moldeando la frontera de lo posible: lo que antes parecía imposible ahora ya no lo parece tanto. Una experiencia contagia a la otra. «Si en Atenco frenaron un aeropuerto, ¿por qué aquí no vamos a impedir la represa de La Parota?», decían las comunidades campesinas de Acapulco. «Si las Madres de Plaza de Mayo pudieron, ¿por qué no nosotras?», fue lo que pensaron tantos colectivos que hicieron frente a las dictaduras o la violencia extrema que acompaña los procesos de saqueo. Mujeres que plantaron cara al genocidio y, al hacerlo, comenzaron a desmontar la espiral de impunidad que se reproduce hasta el presente. Un trabajo, también, por la recuperación de la memoria que no se puede separar del ciclo de luchas contra el neoliberalismo. La escritora Naomi Klein lo decía de esta forma: «Hasta que no se rompió la amnesia, Argentina no volvió a ser un país capaz de resistir de nuevo».

En el centro de esa resistencia, en países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala o México, se posicionaron los

pueblos indígenas, «pueblos enteros prescindibles en el esquema neoliberal», según el analista mexicano Gustavo Esteva, pero que «por estar sentados sobre los recursos naturales» se convirtieron en uno de los sectores más afectados. También fueron, junto con la población sin trabajo, sin tierra, sin servicios básicos, los primeros en enfrentarse al modelo económico y político neoliberal. La práctica de democracia horizontal y participativa de tantas comunidades indígenas, así como su particular relación con los bienes naturales han aportado, además, elementos para renovar el discurso y potenciar alternativas, no solo en América Latina, sino en países de todo el mundo. Cuando el modelo neoliberal arruinó también a la clase media, el estallido fue inevitable.

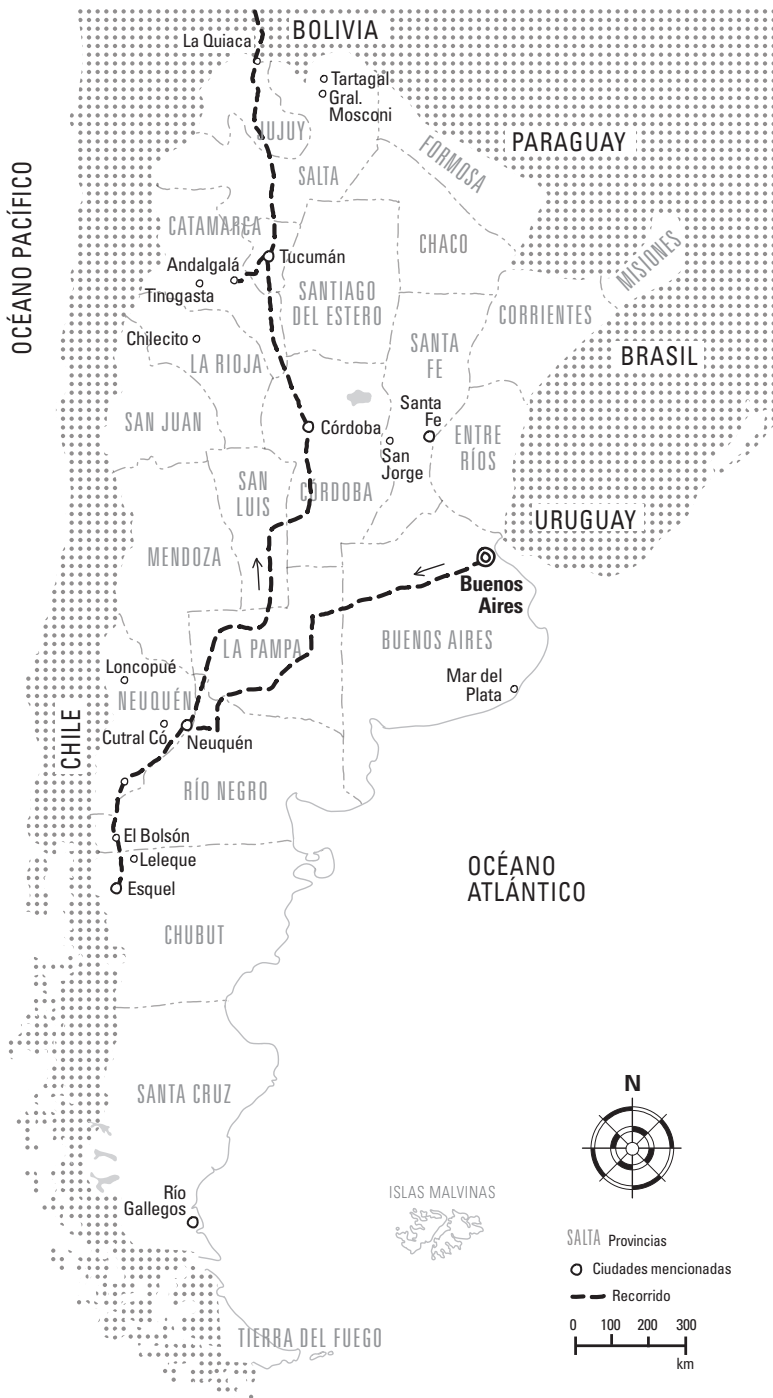
Si antes parecía que una formación política solo podía llegar al poder —y conservarlo— si aceptaba como religión las recetas ultraortodoxas del FMI, después del estallido en la mayoría de los países de América Latina los partidos políticos solo podían llegar al poder —y conservarlo— si asumían buena parte de las demandas sociales de estos movimientos, muchas en el discurso y algunas en la práctica.

Una ola de nuevos gobiernos, llamados «progresistas» o adscritos al «socialismo del siglo XXI», reemplazó en casi todos los países a la vieja cohorte de partidos tradicionales, ahogados por casos de corrupción, señalados por el electorado como los responsables de la ruina económica y la pérdida generalizada de derechos.

Más allá del debate sobre la naturaleza de estos nuevos gobiernos, parece haber un punto de acuerdo: en estos países, el neoliberalismo basado en las privatizaciones, en los recortes y el pago de la deuda en detrimento de los gastos sociales ya es parte del pasado.

Pero estos avances tampoco significan una ruptura total con las políticas neoliberales. Frente a la renovada entrega del territorio y los recursos naturales a las viejas y nuevas potencias en busca de financiación para unas economías todavía dependientes, los movimientos sociales han vuelto a las calles, a bloquear carreteras, para enfrentarse, incluso, a gobiernos que afirman defender sus intereses.

Frente al pesimismo del «todo sigue igual» y el «nada cambia», las historias recogidas en este libro se empeñan en demostrar lo contrario: que los movimientos sociales han contribuido —y contribuyen— de forma determinante a transformar los consensos sociales que marcan el destino de países enteros, que «se puede».



ARGENTINA

«Tienen el poder y lo van a perder»
(Las Manos de Filippi, «Sr. Cobranza», 1995)

«Es que hay un gigante, que se hizo grande
el 19 y 20, ¡y está que arde!»
(Las Manos de Filippi, «Sr. Esperanza», 2004,
en referencia a la revuelta del 19 y 20 de
diciembre de 2001)

«Murió Néstor»

DÍA 1 / 27 DE OCTUBRE DE 2010 / BUENOS AIRES

La frase estaba en boca de todos. Desde las 9:15 horas, cuando los médicos certificaron su muerte, la noticia se había instalado en las televisiones y en las portadas de las ediciones especiales de los periódicos. Miles de simpatizantes se acercaban a la Plaza de Mayo, centro neurálgico de la vida política del país. Carteles impresos en apenas unas horas con mensajes de «Por siempre, Néstor», «Fuerza, Cristina» o «Néstor vive» cubrían todas las paredes y las omnipresentes marquesinas verdes. En la Casa Rosada, sede del Gobierno, se empezaba a preparar el último adiós de Néstor Kirchner.

A media tarde, la concentración en la Plaza de Mayo empezaba a ser multitudinaria. Una cola de veinticinco manzanas esperaba para entrar en el salón donde Cristina Fernández, presidenta desde 2007, velaba el ataúd cerrado de su esposo. Detrás del féretro, los retratos de Juan Domingo Perón, Evita y el Che Guevara. Siete años atrás, un 25 de mayo de 2003, Kirchner se había convertido en presidente con el 22% de los votos, la cifra más baja de la historia argentina¹.

1. El expresidente Carlos Saúl Menem ganó la primera vuelta con el 24%. Seguro de su derrota, Menem no se presentó a la segunda vuelta y Kirchner fue nombrado presidente sin necesidad de una nueva votación.

Un inmenso altar espontáneo con fotos, recortes, velas y carteles escritos a mano se levantaba en las rejas de la Casa Rosada. Cuando este político de apellido impronunciable asumió la presidencia se seguía escuchando en la misma Plaza de Mayo el cántico de la revuelta de diciembre de 2001: «Que se vayan todos, que no quede ni uno solo». Una revuelta que tumbó a cuatro presidentes en dos semanas. ¿Qué había pasado desde entonces en Argentina?

«Cosas que antes parecían imposibles»

—No nos venga aquí a patotear² —le había soltado Néstor Kirchner a George W. Bush en la cumbre de jefes de Estado de Mar del Plata de 2005, donde el guion diplomático decía que debía firmarse el ALCA, el tratado de libre comercio para toda América que Estados Unidos buscaba desde hacía años.

—Estoy un poco sorprendido. Aquí pasó algo que no tenía previsto —le dijo George W. Bush a Néstor Kirchner a manera de despedida. El presidente estadounidense tuvo que irse del balneario bonaerense sin nada. El ALCA había muerto.

Era uno de los momentos estelares de este político peronista. Otro fue en 2004, cuando con la palabra «proceda» ordenó al jefe del Ejército que descolgara con sus propias manos, subido a una silla, los cuadros de los dictadores Videla y Bignone de la Escuela Mecánica de la Armada, la principal sede del horror del último Gobierno militar.

Sin embargo, su primera gran actuación no fue como político, sino como extra en la película *La Patagonia rebelde*³. El guion, que repasa la historia de las huelgas anarquistas y la represión del Ejército a principios de siglo en el sur de Argentina, se basó en un libro escrito por el historiador Osvaldo Bayer. Con 83 años, sigue siendo uno de los mayores conocedores de la otra historia argentina.

En el barrio de Belgrano, Bayer vive entre libros y plantas que cuelgan en un patio acristalado, también lleno de libros. Las fotos y los periódicos antiguos completan el hábitat de este escritor. Bayer

2. Tratar de imponer algo con violencia o intimidación.

3. Dirigida por Héctor Olivera en 1974 y protagonizada por Héctor Alterio y Federico Luppi, entre otros.

se detiene frente a una foto desteñida. Decenas de anarquistas en la salida de la Sociedad Obrera de Río Gallegos. Poco después, en 1921, muchos de ellos serían fusilados, junto con otras 1.500 personas, por rebelarse contra las inhumanas condiciones de trabajo en los *frigoríficos* y en las haciendas.

Oswaldo Bayer ha visto de todo y puede confirmarlo: el sepelio de Kirchner ha sido el tercero más importante de la historia argentina, después del de Perón y el de Evita. «Hay que reconocer que con el matrimonio Kirchner se han logrado cosas que antes parecían imposibles», apunta. Y comienza a enumerar. La derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final permitió juzgar y condenar a los responsables de la dictadura. La estatización de los fondos de las jubilaciones privadas, el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la nacionalización de Aerolíneas Argentinas o la recomposición de la Corte Suprema, entonces en manos de jueces neoliberales, según Bayer, fueron «otras de las muchas medidas dejadas de lado» por los gobiernos anteriores. Sin embargo, Bayer reconoce que no se han producido cambios estructurales: «No hay una democracia verdadera mientras haya villas miseria».

Muchas demandas históricas de los movimientos, entre ellas el aumento de las ayudas o una mayor cobertura para los jubilados, se habían convertido en realidad con el kirchnerismo. Pero hubieran sido «impensables» sin las movilizaciones que sacudieron el país entre 1997 y 2003, afirma Eduardo Lucita, de Economistas de Izquierda. «El kirchnerismo es resultado directo de la gran crisis de 2001», sentencia.

Las multitudinarias asambleas barriales que cuestionaban la política tradicional, las redes de trueque, las caceroladas contra la banca, los cortes de ruta de los piqueteros, las fábricas recuperadas, la lucha de las organizaciones de derechos humanos cambiaron la sociedad argentina. También, de alguna manera, la forma de hacer política.

¿Cómo hacen huelga los desocupados?

BARRIO DE SAN TELMO / BUENOS AIRES

Buenos Aires es una inmensa extensión urbana de casi 2.750 kilómetros cuadrados y trece millones de habitantes. La ciudad está

marcada por tres constantes: la cuadrícula, dibujada desde la colonia; la pampa, circunstancia obligada por la geografía; y el *collage*, fruto de la falta de regulación y las sucesivas migraciones.

San Telmo es el barrio más antiguo y escenario de una de las primeras grandes movilizaciones sociales del siglo xx en Argentina: la huelga de inquilinos. Cinco millones de inmigrantes habían llegado al país en apenas treinta años. La mayoría de ellos vivía hacinada en conventillos⁴ de barrios como San Telmo. En 1907, más de 140.000 personas en cerca de 2.400 conventillos se coordinaron para no pagar el alquiler ante la subida de los precios. Y consiguieron hacerlo durante tres meses. La movilización, liderada por las mujeres inmigrantes, logró frenar el aumento, cuenta Osvaldo Bayer.

En una casa antigua del barrio se sitúa la sede porteña del Frente Popular Darío Santillán, una de las organizaciones «piqueteras» que ha mantenido una mayor autonomía con respecto al kirchnerismo. En una habitación cercana, pasado el patio, acaba de terminar una comida popular para gente del barrio sin recursos.

—Había una situación de no creer en las instituciones, en la Corte Suprema, en ningún partido, en el sistema político de elección en sí. Si en las asambleas barriales se encontraban con un político, lo escracheaban espontáneamente —dice Carina López, integrante del Frente desde sus inicios, en referencia a los años de la gran crisis de 2001.

—Y no importaba si era del partido socialista, del Partido Justicialista, radical⁵, vecinalista... —añade Franco Basualdo, también del Frente Popular Darío Santillán.

—Entonces, si vos lo veías pasar por la calle, lo matabas al tipo —dice López.

En las elecciones legislativas de 2001, el voto en blanco y el voto nulo, el llamado «voto bronca», se había convertido en la primera fuerza. Después de diez años de neoliberalismo y créditos del FMI condicionados a privatizaciones y recortes, el desempleo había llegado al 25% y la pobreza afectaba a más de la mitad de la población.

4. Viviendas colectivas características de principios de siglo, construidas alrededor de un patio.

5. El Partido Justicialista (PJ) es uno de los nombres que adoptó el peronismo. La Unión Cívica Radical (UCR) es el otro partido histórico argentino.

En 1994, la Marcha Federal llevó a 50.000 personas de todos los rincones del país a la Plaza de Mayo para protestar por las políticas neoliberales de Carlos Saúl Menem. Dos años después, el movimiento de trabajadores desocupados se convertiría en la expresión más evidente de que algo iba mal en Argentina.

Una de las primeras revueltas se produjo en junio de 1996 en Cutral Có (Neuquén). La demanda de empleo y ayudas sociales hizo que los caudillos locales fueran sobrepasados por la población. La Policía se vio incapaz de contener la protesta y tuvo que retroceder entre una lluvia de piedras. Durante seis días los piquetes cortaron el acceso a la ciudad. Al año siguiente, volvían los cortes de ruta a Cutral Có. Una empleada doméstica de veinticuatro años, Teresa Rodríguez, moría por las balas de la Policía.

El otro gran foco del movimiento piquetero fueron las ciudades petroleras de General Mosconi y Tartagal, en la provincia de Salta, donde la privatización de YPF había dejado miles de desempleados. Las puebladas de 1997, 1999, 2000 y 2001, organizadas por la Unión de Trabajadores Desocupados, «se grabaron en el imaginario popular», apunta Federico Orchani, uno de los portavoces del Frente en la capital. La represión de los cortes de ruta en estas dos ciudades dejó cinco muertos.

Desde finales de los ochenta, cientos de miles de argentinos habían dejado de pertenecer a la histórica institución de la clase media. La gran Confederación General del Trabajo (CGT) no parecía reaccionar ante este desclasamiento generalizado. Una multitud de colectivos, pequeños partidos de izquierda y sindicatos alternativos organizaron secciones de desempleados. Pero una fórmula destacó sobre las otras: los movimientos de trabajadores desocupados (MTD).

Para Carina López, la particularidad de los MTD residía en que se planteaban «politizar» la reivindicación de trabajo, de subsidios y de alimentos para los comedores populares. Con la asamblea como espacio de decisión, proponían «salidas colectivas» para la situación de pobreza que se vivía: «En vez de cobrar 150 pesos, se cobraban cincuenta y se ponían cien para alguna problemática puntual del barrio». La primera tarea de un MTD en un galpón comunitario era montar un comedor y asegurar «la copa de leche» para los más pequeños. «Lográbamos que el Gobierno mandara

polenta⁶ y las compañeras del barrio conseguían carne y verdura en los negocios de la zona».

El método para llamar la atención era el corte de ruta. Hacia finales del siglo xx, los neumáticos incendiados y las piedras que bloqueaban el tráfico se habían convertido en una estampa típica en los accesos de Buenos Aires y en las principales carreteras del interior. Tanto como la entrevista al conductor indignado en los grandes medios de comunicación. Para Basualdo, el método de lucha era una adaptación de los tradicionales piquetes de los sindicatos a la nueva situación social, donde los trabajadores eran desocupados o precarios, donde un tercio de la población vivía en la indigencia. «No había otras formas de protesta —dice López—. Una marcha no servía para nada. Los primeros cortes eran de dos o tres días, hasta conseguir algo». Para esta activista, la revuelta del 19 y 20 de diciembre de 2001 cambió por completo la correlación de fuerzas. «Recién después, a mediados de 2002 se hacía un corte y en seguida se conseguían cosas».

Pese a los intentos de contener el descontento popular, la movilización no dejaba de crecer. La lucha de los desocupados llegó a su momento más alto el 26 de junio de 2002 en el corte del Puente Pueyrredón, que une la capital con el *conurbano*. La secuencia de fotos en las que un grupo de policías remata a sangre fría a los piqueteros Darío Santillán y Máximo Kosteki en la estación de Avellaneda bloqueó las aspiraciones del entonces presidente provisional, Eduardo Duhalde. Néstor Kirchner fue presentado como su «hombre de paja». Pero él tenía sus propios planes.

El kirchnerismo

La salida de la crisis, explica el economista Eduardo Lucita, fueron dos medidas que no tomó el kirchnerismo, sino dos administraciones provisionales anteriores. La primera decisión fue no pagar la deuda externa durante 38 meses. «Esto permitió al Estado salir de la crisis financiera. Y no vinieron los marines, ni pasó nada», dice. La otra medida fue la devaluación del peso, que dejó de estar atado al dólar, algo «que pulverizó los salarios», pero permitió la recuperación de

6. Comida popular de raíz italiana preparada con agua, leche y harina de maíz.

las finanzas del Estado al mejorar la competitividad de los productos argentinos, al tiempo que ponía freno a las importaciones.

«En 2002, todos estaban en la calle para conseguir cosas —explica Basualdo—. A partir de 2003, el kirchnerismo empezó a dar alimentos, planes, subsidios, hasta cargos en el Estado a las organizaciones que decidían no mostrar un antagonismo al proyecto. Y una política muy dura de cerrar puertas a quienes se mantenían en las calles. En 2003 y 2004 empezó a haber más trabajo, precario, en negro, pero trabajo. Es un momento en el que gran parte de las organizaciones de desocupados sufrió divisiones. Un grupo se fue al kirchnerismo. Otras organizaciones siguen pensando que la calle es la forma de reivindicar». Las divisiones internas afectaron a todos los movimientos que habían protagonizado las movilizaciones de los años anteriores.

—El kirchnerismo es quien mejor lee el proceso de lucha e incluso se adueña de alguna de sus banderas y las reivindica —apunta Orchani—. Uno de sus objetivos es ponerle un freno, un dique de contención a todas a esas luchas y expresiones populares.

—¿Se terminó el «que se vayan todos»?

—Esa consigna que era tan fuerte en 2001 termina con todos gobernando de nuevo —dice Orchani.

Aunque con distintas caras, «habían vuelto todos». Pero el país al que regresaron ya no era el mismo.

«Alegría»

BARRIO DE VILLA CRESPO / BUENOS AIRES

«Diálogo, burguesía, proletariado, América Latina, explotación, cambio de estructuras, capitalismo». Si su hijo menciona alguna de estas palabras, tenga cuidado. Puede estar expuesto a la «infiltración marxista en las escuelas». O por lo menos eso decía un manual difundido por el régimen militar destinado a los padres. Era el año del Mundial de Fútbol de 1978.

Enrique Fukman caminaba por el centro de Buenos Aires cuando un Ford Falcon se detuvo en seco. Bajaron tres personas y lo arrojaron en la parte trasera del coche, en el suelo, atado y enca-

puchado. Encapuchado entró en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) y encapuchado permaneció durante los siguientes seis meses y medio. Le pusieron grilletes en los pies y lo interrogaron con las descargas eléctricas de la picana y las zambullidas ahogantes del submarino. Quince meses después lo soltaron. Todavía no sabe por qué no pasó a engrosar la lista de los 30.000 desaparecidos de la última dictadura (1976-1983). Que no se «meta en política» fue lo único que le dijeron antes de dejarlo en la puerta de su casa. Entonces tenía veintitrés años. Había sobrevivido al más temido centro de torturas y exterminio de Argentina. Cinco mil personas pasaron por sus dependencias. Solo doscientos salieron con vida.

—¿Qué hacés? —dijo su madre en cuanto abrió la puerta.

—Me largaron.

Enrique Fukman había empezado a militar en 1972, con apenas quince años de edad. Atrás quedaban dos décadas de proscripción de las listas peronistas y de alternancia de gobiernos militares y gobiernos civiles bajo tutela del Ejército. La vuelta del exilio de Juan Domingo Perón, que asumió su tercera presidencia en septiembre de 1973, no hizo más que acentuar el crecimiento de todo tipo de organizaciones de izquierda. Era el *boom* de los movimientos de liberación nacional, la influencia del 68 y de la Revolución cubana en toda América Latina.

Pero también proliferaron los grupos de extrema derecha. Algunos de ellos, como la Alianza Anticomunista Argentina —la Triple A—, hundían sus raíces en las instituciones del Estado. José López Rega, la mano derecha de Perón en esos años, era de hecho el líder de esta organización paramilitar. Por sus aficiones esotéricas lo llamaban *el Brujo*. Tras la muerte de Perón en 1974, su tercera esposa, Isabel Martínez, se convirtió en presidenta y López Rega en el auténtico poder en la sombra. Conocidas fueron las frustradas ceremonias del Brujo para traspasar a *Isabelita* el carisma del cadáver embalsamado de Evita. El golpe militar del 24 de marzo de 1976 sistematizó el exterminio de las organizaciones y los activistas de izquierda iniciado por la Triple A.

Enrique Fukman tiene la barba canosa de un yogui hindú. Apenas supera el metro sesenta de altura. En una cafetería de Corrientes y Scalabrini Ortiz bebe tónica y habla sin parar. En 1985 se incorporó a la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos. Han pasado 32 años desde su secuestro.

—¿Que qué se siente? Imaginate ese día de diciembre de 2009, cuando en el juicio empezaron a entrar los culpables. Primero entró Adolfo Donda, jefe de operaciones de la ESMA. Y de repente me di cuenta de que estaba esposado. Si me preguntan qué sentí en ese momento, yo digo con total honestidad: alegría. Con lo que nos cuesta conseguir cosas, con lo que a los pueblos les cuesta, cada vez que conseguimos algo no viene mal disfrutarlo. Conseguir que se abran los juicios fue una lucha muy dura.

«Olé olé olé olá»

Tres años antes del juicio a la ESMA, el 19 de septiembre de 2006, se desarrollaba otro momento histórico de la lucha contra la impunidad. En un juzgado de La Plata, a 56 kilómetros de la capital, el juez Carlos Rozanski leía la sentencia del primer juicio contra los responsables de los crímenes de la dictadura después de la anulación de las leyes de amnistía de 1987.

—El Tribunal Oral Federal n° 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo —leyó el juez ante un auditorio expectante de cámaras, carteles y pañuelos blancos.

No quedaba ni un espacio libre. Muchos seguían desde fuera del juzgado el juicio contra uno de los máximos responsables de la Policía de la provincia de Buenos Aires durante el último Gobierno militar. Un «shhhhh» generalizado obligó a callar al ansioso auditorio. La voz del juez se hizo escuchar entre el vocerío.

—Primero. Rechaza por improcedente los planteos por inconstitucionalidad y nulidad efectuados por los señores defensores. Segundo. Condena a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua en... —el juez Carlos Rozanski no pudo terminar la frase. Un clamor hizo temblar la sala durante varios minutos.

El acusado, de pie, como iluminado, besó una cruz dorada y abrió las manos mirando al cielo. Etchecolatz arrojó un beso hacia la audiencia y el público estalló, algunos intentaron llegar hasta el condenado, otros le tiraron pintura roja, la mayoría sostenía fotocopias de quienes fueron sus víctimas y gritaba cánticos futboleros. «Olé olé olé olá, como a los nazis les va a pasar, donde vayan los iremos a buscar». Una mujer se lleva las manos a la cabeza. Otros

se abrazan. El griterío se convierte en aplauso. Afuera, centenares de personas celebraban el veredicto.

Pese a que el juicio a Etchecolatz fue el primero en empezar, por su complejidad, no fue el primero en terminar. Un mes antes, *el Turco* Julián, un torturador del centro clandestino Olimpo, había sido condenado a veinticinco años. Otros factores, sin embargo, convirtieron la condena de Etchecolatz en algo especialmente memorable.

Miguel Etchecolatz no era un soldado raso ni un oficial menor. Era la mano derecha del general Ramón Camps, jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires, y había tenido a su cargo veintitún campos de detención y exterminio. Pero el significado que tenía esa condena para los presentes en la sala es difícil de entender sin un hecho que devolvió al pasado a muchos de ellos. Un día antes de la condena, uno de los testigos presenciales, detenido y torturado por el propio Etchecolatz, no pudo llegar al juzgado. Su nombre era Julio López. Había sido secuestrado por segunda vez. Nunca más se supo de él. Era el desaparecido 30.001.

Las viejas tácticas de poco sirvieron. El día del juicio, una vez que volvió el silencio a la sala, el juez Rozanski pudo terminar de leer la sentencia:

—Todos estos delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina.

La sala volvía a estallar.

Era la primera vez que la justicia usaba esa palabra: *genocidio*. «Un genocidio quiere decir que un grupo desde el Estado decide exterminar a un sector de la población para cambiar las condiciones socioculturales de un país —argumenta Enrique Fukman—. Y nosotros empezamos a preguntar: ¿a quién se quiso exterminar? ¿Y cuáles son las condiciones socioculturales que se quisieron cambiar? Y ahí te empezás a encontrar que el grupo genocida no está formado solamente por los militares, sino también por los grupos económicos, los sectores políticos que los representan, los medios, la Iglesia como institución. Y por otro lado, ¿qué es lo que pretendían? Lo que querían es romper los lazos sociales, exterminar toda forma de organización. ¿Para qué? Para implementar un modelo económico, el del neoliberalismo, algo que no podían hacer de otra forma».

Al día siguiente de la condena a Etchecolatz, en todas las calles de la ciudad, en los túneles del *subte*, cualquiera podía leer las pa-

labras *genocidio*, *genocida* en los grandes titulares de los periódicos. «Para nosotros lo importante es profundizar en este debate, porque no nos sirve solo meter a los milicos en cana⁷, bueno, está bien, en lo personal es un gusto, pero realmente no nos sirve solo eso. Porque seguimos soñando con construir el mundo que soñábamos cuando empezamos a militar allá en 1972».

Un largo camino

Azucena Villaflor era un ama de casa de 53 años. Tenía cuatro hijos. Uno de ellos, Néstor, fue secuestrado y desaparecido junto con su novia el 30 de noviembre de 1976. Cuando Azucena hacía cola en la Vicaría Castrense para obtener información sobre su hijo encontró a otras madres en su misma situación.

—Individualmente no vamos a hacer nada. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a la plaza —dijo entonces Azucena.

El 30 de abril de 1977 catorce madres dieron la vuelta a la Plaza de Mayo por primera vez. Para reconocerse se pusieron en la cabeza telas de pañales y marcharon alrededor de la plaza todos los jueves, de dos en dos, agarradas del brazo, para poder burlar así la legislación que prohibía concentraciones de más de tres personas.

El 8 de diciembre de 1977, cuando Azucena Villaflor volvía de comprar un ejemplar del periódico donde las Madres de Plaza de Mayo habían publicado la primera lista de desaparecidos, fue secuestrada por un comando dirigido por un joven militar que se había infiltrado meses antes en la organización, Alfredo Astiz, también conocido como *el Ángel Rubio* o *el Ángel de la Muerte*. Después de pasar por la ESMA, Azucena Villaflor fue arrojada desde un avión militar, junto con otras dos madres, al océano Atlántico. Pero el terror no paralizó el movimiento. Cada vez más madres se unían a las vueltas a la plaza. La Copa Mundial de Fútbol de 1978 puso al país bajo los focos. Frente a la campaña de negación del régimen con el lema «Somos derechos y humanos», las Madres consiguieron que el mundo supiera que en Argentina había desaparecidos.

7. Militares en la cárcel.

Desde finales de 1977, se unieron las Abuelas de Plaza de Mayo. Comprendieron que su tarea era distinta que la de las Madres. Ellas tenían la certeza de que sus nietos, robados por los militares en los centros de detención, vivían. Su misión era encontrarlos y «devolverles la identidad». Para eso era necesario convertirse en investigadoras, bucear en los archivos, en las casas cuna, las maternidades, los hospitales e incluso camuflarse de «viejas chochas».

A partir de 1981 las grandes Marchas de la Resistencia, convocadas todos los años por las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, convirtieron en masivos los reclamos por los derechos humanos y el fin de la dictadura. El fracaso de la guerra de las Malvinas, en 1982, no pudo esconder por más tiempo una crisis económica fulminante. La dictadura no tardó en caer.

Los primeros resultados del movimiento comenzaron a palpase. El informe *Nunca más*, encargado en 1983 por el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín, juntó 50.000 páginas de testimonios. Los juicios a las Juntas, en 1985, encarcelaron a muchos de los principales responsables de la dictadura, entre ellos, a los jefes de las juntas militares: Videla, Massera, Viola o Galtieri. Por primera vez en la historia de América Latina, se juzgaba y condenaba a ex jefes de Estado por crímenes de lesa humanidad.

«Estatua de sal»

Pero ese incipiente despertar quedó interrumpido en 1987 con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, decretadas por Alfonsín tras una asonada militar. Después de estas leyes solo quedaban en la cárcel los máximos jefes de las juntas. Otros altos funcionarios que «recibieron órdenes», como fue el caso de Etchecolatz, quedaron en libertad. La ley de Punto Final, por su parte, decretaba la prescripción de la mayoría de los crímenes de la dictadura. En 1989 y 1990, el Gobierno de Carlos Saúl Menem terminó el trabajo con los indultos a los máximos jefes de las juntas. Después de cinco años de cárcel, Videla y los otros principales responsables del genocidio quedaban en libertad.

—Durante la dictadura hubo un sector que logró vencer el miedo y resistió, la enfrentó hasta que otros sectores se sumaron a esa lucha, hasta que al final la dictadura cayó —explica Fukman—.

Este paso desde un sector minoritario hasta un sector mayoritario también ocurrió en los noventa. «Dejen de mirar para atrás», decían entonces.

—Menem decía que «si no se aprende a olvidar, se convierte uno en una estatua de sal»...

—Lo que pasa es que el pueblo había comprado eso de que estábamos por entrar en el Primer Mundo. Entonces había que dejar de mirar para atrás. Y no solo en derechos humanos, sino en todos los aspectos de la vida política, social, cultural o económica del país —dice Fukman mientras vacía otra tónica y hace girar el hielo.

Menem hablaba en 1996 de un sistema «de vuelos espaciales que quizá se instale en la provincia de Córdoba» que permitiría llegar en media hora a cualquier rincón del planeta. El *boom* económico había convertido Buenos Aires en una de las quince ciudades del mundo con mayor número de rascacielos. Pero el futuro tendría que esperar. Para Fukman, el resurgir del movimiento de derechos humanos en los noventa estuvo acompañado del fin de esa ilusión de entrada en el Primer Mundo. A medida que se agudizaba la crisis, aumentaba la pobreza y el desempleo, crecía la demanda de justicia.

En 1995, un campamento de setenta hijos de desaparecidos dotaba de otra pata al movimiento. En unos años ya sumaban seiscientos los integrantes de Hijos⁸. El 24 de marzo de 1996, cuando se cumplían veinte años del golpe, 200.000 personas clamaban contra la impunidad en una marcha por el centro de Buenos Aires.

«La situación iba golpeando la conciencia de la sociedad. Si no estamos en el Primer Mundo, ¿dónde estamos entonces? Para saberlo era necesario mirar para atrás», dice Fukman. Para la escritora y activista Naomi Klein, que vivió en Buenos Aires en 2003, «hasta que no se rompió la amnesia, Argentina no volvió a ser un país capaz de resistir de nuevo»⁹.

La presión de los grupos de derechos humanos consiguió que se iniciasen en 1998 los Juicios de la Verdad. Ochocientos testigos y 2.200 expedientes pasaron por estas sesiones realizadas en un

8. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio.

9. OROZCO, K. (2007), «La memoria es nuestra única esperanza», *Diagonal*, diciembre de 2007.

juzgado de La Plata. Sin embargo, las leyes de amnistía impedían que tuvieran efectos penales. El único hueco dejado en las leyes de 1987, el secuestro de niños, permitió ese año a las Abuelas de Plaza de Mayo iniciar un juicio contra Videla.

Junto con el corte de ruta, el final de los noventa vio nacer otra novedosa forma de protesta. Una exdetenida acudió a una consulta médica en un hospital de Buenos Aires y descubrió que entre los trabajadores figuraba un médico llamado Jorge Magnaco. Nadie en el hospital donde trabajaba, ni en el bar donde tomaba café, ni en la tienda del barrio donde compraba, sospechaba que ese hombre maduro, calvo y de barba blanca recortada había sido el encargado de los partos en el centro de exterminio de la ESMA.

Durante cuatro viernes seguidos los Hijos marcharon desde el sanatorio hasta la casa del médico. Pegaron carteles con su cara y el relato de sus crímenes. Repartieron panfletos contando quién era su compañero de trabajo, quién era su vecino. Había nacido el «escrache»¹⁰, una modalidad de lucha que se generalizó contra todos los represores que conseguían identificar. Con la crisis de 2001, esta ruidosa herramienta se extendió a los políticos y bancos responsables de la ruina del país. «Ante la ausencia de justicia hagamos que el país sea su cárcel», se convirtió en el lema. En el caso de Magnaco, los resultados fueron inmediatos: fue despedido de su trabajo y en una reunión de la comunidad de su edificio le pidieron que se marchara¹¹.

«Una situación insostenible»

Las noticias de los juicios iniciados en Francia, Italia o España a finales de los noventa «empezaban a generar una situación realmente insostenible para los argentinos», afirma Fukman. Los juicios «rebotaban y volvían» sobre el país. Los periódicos difundían las citaciones judiciales de jueces extranjeros, el relato de sus crímenes, las solicitudes de extradición, las peticiones de detención al Gobierno argentino. La situación empezaba a ser paradójica: «El único lugar en

10. Uno de los precedentes del escrache es la lucha de la activista alemana Beate Klarsfeld y su marido contra excargos nazis a partir de los años sesenta.

11. CASCIERO, R. (2002), «La revolución del sabemos lo que hicieron», *Página12*, 21 de marzo de 2002.

el mundo donde nuestros propios verdugos podían vivir en libertad era acá, porque si salían afuera eran automáticamente detenidos», dice Fukman. Esta realidad volvía a quedar en evidencia con la detención del capitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo en México en el año 2000. Enrique Fukman lo había conocido en la ESMA.

—Esto... no puede ser que vos no conozcás a nadie que podamos chupar —le dijo *Marcelo*, alias de Ricardo Miguel Cavallo, la primera vez que lo vio. Fukman recuerda que en la pared tenía colgado un cartel de un general francés de la guerra de Argelia con una frase inquietante: «Si alguien quiere vencer a un pueblo, debe estar dispuesto a meter la mano hasta en la mierda»¹². Cuando fue detenido en Cancún, el exmarino se disponía a tomar un avión a Buenos Aires para eludir la orden internacional de detención emitida por el juez español Baltasar Garzón.

«La gota que rebasó el vaso fue concretamente esa imagen de Cavallo fugándose a la Argentina para quedar libre. En ese momento la economía entra en un momento crítico y a finales de 2001 el sistema estalla en toda su dimensión».

Vientos de cambio, cambio de vientos

No se habían cumplido cien días de gobierno de Néstor Kirchner cuando a petición de la diputada de izquierdas Patricia Walsh se debatía en el Congreso la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Era el 13 de agosto de 2003. Enrique Fukman preparaba en la salida del hemiciclo una camioneta para seguir la sesión con imagen y sonido. Estaba haciendo las conexiones cuando salió del edificio Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, famoso escritor y periodista desaparecido en la dictadura. «Compañeros, me acaba de llamar Camaño», soltó la diputada.

Eduardo Camaño, el presidente de la Cámara de Diputados, le había dicho que subiera a su despacho, que tenía que darle un mensaje importante del presidente Kirchner. Patricia Walsh subió a su despacho.

12. BIANCO, A. (2006), «Perfil de un represor a sus anchas», *Página12*, 2 de agosto de 2006.

—¿Y cuál era el mensaje? —le preguntó la diputada a Camaño.

—Recibí la orden de Presidencia de que si retiran el tema de los indultos, la orden nuestra es votar el proyecto —dijo Camaño, en referencia al proyecto de anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Todos los activistas congregados la miraron con la boca abierta. Los jefes de las juntas militares seguían gozando de la libertad que les habían proporcionado los indultos de Menem. Renunciar a revisarlos suponía dejar de lado una de las reivindicaciones históricas, pero tampoco podían dejar pasar la oportunidad de terminar con las dos leyes de amnistía de los tiempos de Alfonsín.

—¿Dijiste que sí, no? —le preguntaron con ansiedad los congregados.

—Sí, claro que retiramos lo de los indultos —les dijo Patricia Walsh.

Fukman recuerda que Adriana Calvo, extitular de la asociación, fue de las primeras en reaccionar. También había sido la primera en declarar en el juicio a las juntas en 1985. Murió en 2010 sin ver concluida una lucha a la que tanto había aportado.

—Bueno, empecemos a preparar los changuitos¹³ para llevar todas las querellas —dijo Adriana Calvo.

La idea era empezar a «inundar» los tribunales, cuenta Fukman.

Después de la anulación de las leyes de amnistía en el Congreso, la oposición inició un debate sobre la legalidad de la medida. Finalmente la Corte Suprema validó la decisión tomada. «Es curioso —comenta Fukman— porque había dos jueces que venían de la época anterior y cambiaron de postura. Uno de esos jueces explicó por qué había sacado una conclusión diferente: “La justicia tiene que seguir los vientos políticos”. Y los vientos políticos habían cambiado».

El camino hacia el reinicio de los juicios estaba abierto: todos los juicios paralizados en 1987 comenzaron a activarse. Los indultos a los jefes de las juntas fueron anulados en 2006. «A los Kirchner nunca antes de ese momento les habían importado los derechos humanos. Entonces, ¿qué les llevó a cambiar de política? —se pregunta Fukman—. Creo que Kirchner empieza a ser consciente de

13. Carritos de la compra.

este cambio en el consenso social. Descubre que esa búsqueda de apoyo no perjudica su alianza con los sectores industriales, con los grandes capitales, y ve que puede acumular poder a partir de ahí».

A principios de 2013, más de mil represores habían sido procesados. De ellos, 378 habían sido condenados¹⁴, incluidos muchos de los altos mandos de las juntas —Videla, Massera, Viola o Menéndez—, y muchos de los cargos medios y los torturadores más conocidos, como Alfredo Astiz o Adolfo Scilingo. El trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo ha permitido que 102 nietos secuestrados hayan recuperado su identidad.

Tres horas son demasiadas para estar sentados en una cafetería. Por una calle del barrio de Villa Crespo, grabadora apagada, la conversación parece diferente.

—Se habla mucho de las Madres, las Abuelas, los Hijos... pero ¿por qué se habla tan poco de los supervivientes?

—No se perdona el estar vivo —responde Fukman sin apenas pensar la respuesta—. Si te fijás, todos los líderes de Montoneros o del ERP¹⁵ que murieron son considerados como héroes. En cambio, los vivos son mirados con sospecha. Cuando desaparecíamos decían «por algo será» y cuándo aparecíamos decían «por algo será». Ocurre que somos los más peligrosos, la demostración viviente de lo que pasó, los únicos que pueden señalar a los culpables.

Enrique Fukman sigue sin saber por qué lo «largaron». Tal vez, dice, para «sembrar la desconfianza» o para completar el círculo de terror. «Como si pensarán que nunca les iba a pasar nada. Y casi lo consiguen».

¿Y los derechos humanos después de la dictadura?

BARRIO NORTE / BUENOS AIRES

Walter Bulacio y otros diez amigos, todos menores de diecisiete años, fueron detenidos a la entrada del concierto de Patricio Rey y sus

14. GINZBERG, V. (2013), «El año de los megajuicios», *Página12*, 2 de enero de 2013.

15. Ejército Revolucionario del Pueblo, guerrilla marxista liderada por Mario Roberto Santucho, asesinado y desaparecido en julio de 1976.

Redonditos de Ricota. Walter Bulacio fue golpeado y torturado en la comisaría 35 de Núñez, en la capital. Murió a la semana por los golpes. La dictadura había terminado hacía mucho. Era el año 1991.

En la celda donde pasaron la noche, uno de los jóvenes había raspado en la pared los once nombres, la fecha y una frase: «Caímos por estar parados». En Argentina «parado» también significa estar de pie.

La frase sirvió de inspiración para María del Carmen Verdú, que se convirtió en abogada de la familia. Junto con otros abogados, activistas y familiares de víctimas, creó en 1992 la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), también iniciales de «corré, pibe». La acción de Correpi impidió que la causa judicial de Walter Bullacio fuera archivada definitivamente y consiguió que la Corte Interamericana de Justicia obligara a la Justicia argentina a reanudar el juicio.

«Correpi surge porque nadie más trataba estos casos. Allá por fines de los ochenta, los grupos históricos tenían una agenda acotada a lo que había sucedido hasta diciembre de 1983», cuenta Verdú. La desprotección de los jóvenes de los barrios pobres, de las villas, frente a los abusos policiales, se debía también a una «cuestión de clase», apunta: «En una ocasión me dijeron que no podía comparar a los revolucionarios de los setenta con los tres negros¹⁶ de Budge que estaban en una esquina tomando cerveza».

En mayo de 1987 tres adolescentes habían sido asesinados por la Policía en Ingeniero Budge, una localidad del empobrecido sur del Gran Buenos Aires. «Si lo mató Balmaceda no se puede hacer nada»¹⁷, decían algunos vecinos en referencia al agente que había apretado el gatillo. Sin embargo, los familiares y conocidos de estos tres amigos decidieron no callarse. Para Verdú, esta fue la primera experiencia de organización barrial para exigir justicia en un caso de

16. *Negro* o *cabecita negra* es uno de los tantos apelativos racistas y clasistas utilizados en Argentina para denominar a la enorme capa de población, mestiza en su mayoría, que empezó a instalarse en la periferia de las grandes ciudades a mediados del siglo xx.

17. RODRÍGUEZ, C. (2007), «Budge fue un ejemplo, ahora nadie se calla», *Página12*, 6 de mayo de 2007.

violencia policial. La acción penal llevada a cabo por Correpi permitió condenar a Balmaceda y otros dos policías a once años de cárcel.

El delito de protestar

En 2006, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo abandonaban las históricas Marchas de la Resistencia. «Ya no tenemos un enemigo en la Casa de Gobierno», dijo entonces Hebe de Bonafini, una de las fundadoras de las Madres. María del Carmen Verdú no comparte esta visión: al mismo tiempo que perseguía a los criminales de la dictadura, el kirchnerismo endurecía las penas contra las personas que «alteraban la paz social».

En 2012, más de 4.000 personas tenían juicios abiertos por distintos tipos de reclamos sociales, según un informe realizado por Correpi y otras organizaciones, como la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos. Según el mismo informe, desde que Néstor Kirchner asumió el poder, diecinueve activistas han sido asesinados por la Policía o sectores vinculados con los poderes políticos.

Uno de ellos fue Mariano Ferreyra, activista del Partido Obrero, apenas siete días antes de la muerte de Néstor Kirchner. Unos empleados «tercerizados» del ferrocarril reclamaban condiciones dignas de trabajo cuando una «patota»¹⁸ de la Unión Ferroviaria —gremio afiliado a la CGT— atacó con armas de fuego la protesta, ante la pasividad de la Policía. Los abogados de las víctimas, entre los que se encontraba María del Carmen Verdú, consiguieron condenas para los responsables materiales y también contra el exsecretario de la Unión Ferroviaria, José Ángel Pedraza, como autor intelectual. Una sentencia comparable, según declaró Verdú, a una jugada de ajedrez: «Entregaron a una torre y algunos peones para proteger a la reina».

De la misma forma que las empresas «tercerizan» la producción para incrementar las ganancias, Verdú habla de una «tercerización de la represión». Y pone otro ejemplo: «En 2004, cuando los Kirchner viajaron a Tucumán para un acto público, los desocupados de la zona se habían organizado para manifestarse contra el Gobierno. Quien los reventó a golpes no fue la Policía, fue otra organización

18. Grupo violento asociado a la burocracia del sindicato CGT.

de desocupados que entonces apoyaba al Gobierno. Ejemplos como ese hay a patadas». Cuarenta y ocho manifestantes habían sido asesinados por la Policía en los peores años de la crisis, la mayoría el 19 y 20 de diciembre de 2001. Después de eso, el Gobierno central ha procurado no cargar con más muertos. Para Verdú, han sido la «burocracia sindical» y las policías provinciales quienes han asumido la represión de las movilizaciones sociales.

Frente a casos como estos, desde Correpi se organizan con las víctimas y en los barrios más humildes. En Villa Fiorito, en la periferia de Buenos Aires, «cuando un pibe cae injustamente preso, la familia le va a golpear la puerta a la Ramona, conocida como la referente de Correpi, porque ella es la que sabe qué hacer en una comisaría, la que sabe organizar en seguida a los vecinos y llena la comisaría de gente», cuenta Verdú. Ramona Núñez era la madre de Jorge *Chaco* González, torturado y asesinado por dos policías en Lomas de Zamora, a las afueras de Buenos Aires, en diciembre de 2002.

Desde la creación de Correpi, la organización ha logrado más de quinientos años¹⁹ en condenas para policías, gendarmes, agentes del servicio penitenciario, prefectos y vigilantes privados. Unos logros que consiguen poco a poco transmitir la idea central del trabajo de Correpi: con elecciones también puede haber torturas, también puede haber activistas perseguidos y asesinados, también hay que luchar por los derechos humanos.

«Está usted despedido, jefe»

ALREDEDORES DEL CONGRESO / BUENOS AIRES

Era 28 de diciembre de 2001. Una semana antes el presidente Fernando de la Rúa había tenido que abandonar la Casa Rosada en helicóptero. Las movilizaciones de ahorristas, desempleados y ciudadanos indignados no cesaban. Al contrario. Un cacerolazo

19. Para este cálculo, Correpi computa veinte años para las condenas de prisión perpetua.

resonó en toda la ciudad. Por la noche, las vallas que protegían la Casa Rosada aparecían dobladas como si fueran de alambre y la sede del Gobierno había sido cubierta de pintadas. Dos oficinas del Banco Galicia, una sucursal del Banco Ciudad, otra del Banco Lloyds y otra del Banco Río fueron arrasadas por los manifestantes. Ni el mismísimo Congreso se salvó. Cientos de personas derribaron las vallas y entraron por una de las puertas. Arrojaron cortinas, muebles, sillones a la calle y los quemaron en las puertas del histórico edificio.

A trescientos metros de allí, entre las avenidas Corrientes y Entre Ríos, tenía lugar otra historia: el hotel Bauen, uno de los más famosos de Buenos Aires, echaba el cierre y dejaba a ochenta personas en la calle.

Diez años después, el hotel ha recuperado buena parte de su esplendor y da trabajo a más de 150 personas. El *hall* hierve de movimiento y los clientes hacen cola en los ascensores. A primera vista podría parecer un hotel de tres o cuatro estrellas relativamente común. Pero no lo es. En 2003, el Bauen fue ocupado por sus exempleados. Después de una larga lucha le han devuelto la vida. Ahora son ellos mismos los que gestionan el hotel.

Marcelo Ruarte lleva desde 1980 en el Bauen. Empezó trabajando en la recepción. Después de pasar por *bellboy*, se convirtió en conserje. Con la recuperación de la empresa llegó a ser presidente de la cooperativa. Como a tantos otros, el cierre del hotel lo dejó sin ningún ingreso.

En esos años, 7.000 empresas habían cerrado. La clase media había perdido sus ahorros o los tenía retenidos por el «corralito». Por si fuera poco, el fin de la convertibilidad y la devaluación del peso resucitó a un viejo conocido: la inflación. La necesidad de cubrir las necesidades básicas obligó a buscar alternativas. Entre ellas, soluciones que no pasaban por el dinero. En pocos meses se contabilizaban en todo el país unos 5.000 clubes de trueque, en los que llegaron a participar unos 2,5 millones de personas. Vegetales de los huertos urbanos, ropa y otros objetos de segunda mano, pero también servicios de albañilería, fontanería o peluquería se intercambiaron con distintos sistemas de crédito y monedas propias. La familia de Marcelo Ruarte preparaba empanadas y luego las cambiaba por fruta o una sesión con el dentista.

Marcelo Ruarte pasaba a menudo por la puerta del hotel, que seguía abandonado. Poco a poco empezó a surgir la idea. Junto con

otros exempleados se acercaron a las asambleas de otras empresas recuperadas. Sobre todo al IMPA, una fábrica metalúrgica controlada por sus trabajadores desde 1998. En esos momentos, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, liderado por Eduardo Murúa, impulsaba las «tomas». Ruarte y otros extrabajadores del Bauen empezaban a «soñar con volver».

La decisión se tomó en marzo de 2003 en una asamblea en la imprenta recuperada Chilavert. Se había corrido la voz entre los exempleados. Pero solo nueve acudieron. Entre ellos, Gladis Alegre, ahora trabajadora del Bauen recuperado. «Yo dije que nos iban a pegar, que era una cosa imposible. Murúa nos explicó cómo se inició el IMPA, cómo se inició Chilavert. Nos dio fuerzas a los que estábamos. Para mí era una aventura que nunca había imaginado ni soñado»²⁰.

El 21 de marzo de 2003 por la noche, quince extrabajadores del Bauen, apoyados por integrantes de otras fábricas recuperadas, entraron al hotel. Solo fue necesario deshacerse de un candado. Otra trabajadora del Bauen, Arminda Palacios, recuerda ese momento: «Fuimos andando a la recepción, cuando vimos que había luz... Nos abrazamos y empezamos a llorar». El primer paso estaba dado.

La historia del Bauen, la historia argentina

En 1978 el régimen militar inauguraba uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires como parte de la infraestructura para el Mundial de Fútbol. Construido en apenas cinco meses, contaba con veinte pisos, 222 habitaciones, piscina, piano bar, ocho salones para eventos de alto *standing* y un teatro con cuatrocientas butacas. No tardó en convertirse en un lugar de encuentro de la alta sociedad de la época. Para la construcción del hotel, el Estado otorgó una línea de crédito al empresario Marcelo Iurcovich. Ese crédito nunca fue devuelto.

Era una práctica habitual en tiempos de la dictadura. La congelación de los sueldos y la prohibición de la actividad sindical vino acompañada de una política monetaria neoliberal que convirtió la especulación en el negocio más rentable. «La plata dulce» fue el nombre que recibió aquella época de viajes al extranjero y productos

20. Entrevista sobre la historia del hotel Bauen grabada por el grupo Alavío.

importados. Pero la «plata dulce» no duró. La deuda externa se cuadruplicó, las industrias quebraron y se volvió a desatar la inflación. Todo el sistema bancario entró en crisis.

En 1982, el año de la guerra de las Malvinas, uno de los personajes recurrentes de la historia argentina entraba en acción. Se trataba de Domingo Felipe Cavallo, por entonces presidente del Banco Central. Ante la inminente quiebra bancaria, impulsó la nacionalización de toda la deuda privada. Socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, una fórmula que volvería a repetir en sus siguientes apariciones estelares.

Pero por esas épocas, la situación económica no parecía afectar todavía al Bauen. Tampoco cuando en 1989 la inflación alcanzó el 3.000% y el presidente Raúl Alfonsín tuvo que adelantar el traspaso del poder. Ese mismo año, una de las salas del Bauen fue utilizada por el candidato peronista Carlos Saúl Menem para lanzar su campaña a la presidencia.

«No puede ser que nosotros hayamos tenido diez años de Méndez, es una cosa de locos», dice Ruarte. Alrededor de la figura de Menem se han extendido algunas supersticiones. En primer lugar, no se debe mencionar su nombre. Es preferible llamarlo *Méndez*, *el Turco*, *el Patilludo* o *Elquetedije*. En caso de que su nombre sea pronunciado con todas sus letras, para evitar la mala suerte las mujeres deben tocarse un pecho y los hombres un testículo. El mismo Kirchner lo hizo en el Congreso dos veces.

Pese a que Menem se había opuesto a la venta de las empresas públicas en tiempos de Alfonsín, una de las primeras medidas de su presidencia, en agosto de 1989, fue un amplio plan de privatizaciones. En la presentación del paquete de medidas lo acompañaba Roberto Dromi, «gerente de privatizaciones», según se llamaba a sí mismo. Este funcionario presentó el primer mandamiento del llamado Decálogo Menemista de la Reforma del Estado con un acto fallido: «Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado».

Con este lapsus, Dromi inauguraba la década neoliberal. La confusión también daba inicio a una lluvia de actos fallidos de políticos menemistas que irían desvelando inconscientemente los planes más íntimos del Gobierno. La filosofía la había expresado mejor que nadie el derechista Álvaro Alsogaray, colaborador entonces del Gobierno: «Achicar el Estado es agrandar la nación».

Adelina de Viola, del mismo partido que Alsogaray y entonces miembro del Gobierno de Menem, se dejó traicionar por el subconsciente en la televisión: «Hay que sacar ese decreto para que lo inmoral y lo legal sea lo mismo». «Para que Argentina se desarrolle debemos dejar de robar dos años por lo menos», dijo en la televisión el sindicalista menemista Luis Barrionuevo. Pero fue el propio Menem quien lo dijo más claro en otro lapsus en una entrevista telefónica: «Yo me pongo al frente de la corrupción».

«Quitarles los medios a la gente»

En 1991, ante un rebrote de hiperinflación, hacía una nueva entrada estelar Domingo Cavallo, nombrado ministro de Economía. Traía una *solución* bajo la manga: atar el peso al dólar con un cambio de uno a uno. La «convertibilidad», combinada con la aplicación de los planes de ajuste del FMI y la privatización de todas las empresas públicas, pareció dar resultados en los primeros años. Se llenaron las arcas y la inflación desapareció. Se empezaba a hablar del «milagro argentino».

Pero en la segunda mitad de la década, los índices de pobreza y desempleo se dispararon. Según el economista Marcelo Lascano, la convertibilidad no solo propició importaciones de una forma irracional, sino que también se convirtió en un obstáculo para las exportaciones y para la industria nacional. Una vez vendidas las «joyas de la Corona», el déficit se solucionó pidiendo más dinero en el exterior. Al final de la década, la deuda externa se había duplicado.

Entonces sí, la situación económica empezaba a afectar al hotel Bauen. Los despidos mermaban la plantilla y los contratos cada vez eran más precarios. Sin embargo, durante toda la década de los noventa, la cercanía del Congreso convertía sus salones en uno de los sitios predilectos de la alta clase política para todo tipo de eventos.

En el salón Cascada del Bauen, Roberto Alemann, ministro de Economía durante los últimos años de la dictadura, explicaba ante una distinguida audiencia de empresarios los motivos que le habían llevado a rechazar la oferta de Menem de convertirse en el nuevo ministro del ramo en 1996, cuando la situación económica empezaba a complicarse: «Hoy es distinto, tienen más poder de decisión ustedes, los empresarios, que el propio ministro de Economía».

Y en 1997 en los salones del Bauen se lanzaba la Alianza, una coalición de partidos de centro-izquierda, que se proponía arrebatar el poder al menemismo con un programa —también lanzado poco después en el Bauen— basado en el rechazo a la corrupción y al modelo económico. Dos años después, el candidato de la Alianza, Fernando de la Rúa, llegaba a la presidencia. Pero las promesas de cambio se quedaron en el programa. En marzo de 2001, al borde del abismo económico, Fernando de la Rúa —«ese lentísimo presidente Frenando de la Duda», tal como lo llamaba el dibujante Nik— nombró a un nuevo ministro de Economía. Adivinen. Una vez más, Domingo Cavallo.

«Quien gobierna la Argentina es el presidente Cavallo», dijo entonces en otro acto fallido el expresidente Raúl Alfonsín. Pero para actos fallidos ninguno como el del propio Domingo Cavallo, que revelaba con estas palabras textuales su plan para salir de la crisis: «Hay que crear un clima de confianza, quitarle los medios..., los miedos, los miedos a la gente».

En ese año, el presupuesto dedicaba más dinero a pagar la deuda que al conjunto formado por Educación, Sanidad y la jubilación de 1,3 millones de personas. Ni los planes de ajuste ni los rescates financieros a cambio de más ajustes y recortes sirvieron. Ante la fuga masiva de capitales, Cavallo impulsó a principios de diciembre de 2001 el «corralito». Quedaba prohibido sacar dinero de los bancos. El cóctel para el estallido estaba servido.

Ocurrió el 19 y el 20 de diciembre de 2001. Los saqueos de supermercados se extendieron por toda la ciudad y el Gran Buenos Aires. Los ahorristas salían a miles y escracheaban todo banco que encontraban a su paso. Miles de personas se enfrentaban a la Policía, que respondía con fuego real. El primer día dimitió Cavallo; el segundo, el presidente del Gobierno. La represión ordenada por Fernando de la Rúa había dejado 39 muertos en todo el país.

El país, el hotel, en ruinas

La crisis, agudizada en 2002, continuaba cerrando empresas y fábricas. Los patrones a menudo preferían abandonar sus negocios para no hacerse cargo de las deudas y de la plantilla que quedaba en la calle. No sin antes llevarse todo lo que tuviera algún valor.

Este vaciamiento, que había dejado el país en ruinas, había hecho estragos en el Bauen.

Cuando los quince extrabajadores del hotel consiguieron encender las luces de la recepción aquel 21 de marzo de 2003 empezaron a darse cuenta de que no sería nada fácil devolverle el esplendor al Bauen. «El hotel estaba pelado cuando vinimos. Lo único que quedaba eran camas vacías, polvo por todos lados, ratas, cucarachas, no había ropa de cama, no había mantelería, vajilla. Fue como empezar de cero», recuerda Ruarte.

Pronto se dieron cuenta de que la *toma* era la parte más sencilla del lema de todas las empresas recuperadas: «Ocupar, resistir, producir». Para poder llevar algo de dinero a sus familias tuvieron que pedir limosna en la calle. «Estábamos recagados de hambre, queríamos plata. Vos dejás una familia con tus hijos ahí y no podés decirles que en un año empiezan a comer. Salíamos acá con nuestra alcancía al semáforo o participábamos en algunas marchas y nos daban algo de dinero».

No tardaron en dominar la segunda parte de la santa trinidad de las fábricas recuperadas: la resistencia. «Teníamos que hacer guardia de manera permanente. Había un acoso de la justicia, de la Policía, que venía a romper las bolas. Pero fuimos aprendiendo a hacerles frente y a discutir en los despachos de los jueces, de los políticos».

Solo faltaba la tercera. «¿Qué es lo que está más potable?», se preguntaron los exempleados del Bauen, que ya sumaban cerca de cuarenta. «Los salones», fue la respuesta unánime. Limpiaron y rasquetearon los suelos de madera, lavaron las cortinas y empezaron a «producir». El primer evento fue una fiesta de quince años, toda una presentación en sociedad en Argentina.

«Como eran pisos de madera, no solo nos interesaba la plata, también la cera, viruta para rasquetear... los inicios nuestros fueron con el trueque... parte dinero, parte insumos», cuenta Ruarte. Comida, productos de limpieza o medicinas servían de pago por el uso de los salones por los que habían pasado los políticos más odiados del momento.

La ayuda más inesperada

En 2003, el aspecto de la fachada del Bauen no había variado desde el cierre: un muro tapaba la entrada principal. Pero los salones

empezaban a funcionar. Con los insumos y el dinero que iban consiguiendo habilitaban nuevos espacios. La fábrica de cerámica recuperada Zanón donó el material para el piso del bar y dinero para una caja registradora. Los apoyos llegaban cuando más se necesitaban. Y de los sitios más inesperados. En concreto de un Gobierno. ¿Del argentino? No. Del de Venezuela.

A finales de 2004, desembarcaba en el país la filial argentina de la petrolera venezolana PDVSA. Para la inauguración tenían previsto traer a ochenta niños y niñas crecidos en barrios marginales de Caracas que formaban la banda sinfónica Jóvenes Arcos. Los trabajadores del Bauen consiguieron una entrevista con la embajada venezolana.

—En principio faltan ochenta colchones, sábanas, líneas telefónicas...

—Está bien. ¿Cuánta plata? —resolvió el representante de la embajada.

La idea era sencilla: la embajada adelantaba el dinero del hospedaje para que pudieran tener listas las habitaciones. Pero la inversión venezolana no era suficiente. Para volver al trabajo, los empleados del Bauen tenían que violar la ley. Habían conseguido un reconocimiento como «custodios» del hotel para evitar que continuara el vaciamiento, pero la justicia prohibía expresamente el usufructo del lugar. Convocaron una asamblea de todos los integrantes de la cooperativa, unos cincuenta para ese entonces. Muchos de ellos, reconoce Ruarte, no podían ni pagarse el pasaje del colectivo o del subte.

—Bueno, compañeros, acá no hay más vuelta que darle —dijo Ruarte, que entonces era presidente de la cooperativa—. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos boludeando acá, robándonos entre nosotros? Para que la embajada haga esta inversión hay que sacar la empalizada. Aquí no hay tu tía, vamos para adelante, rompamos todo, a la mierda.

Al otro día se levantaron a las cuatro de la mañana y «voló todo a la mierda», dice Ruarte. Una hora después de tirar el muro de la entrada los patrulleros rodeaban el hotel. «Hubo empujones, piñas van, piñas vienen, pero bueno... nos pusimos a laburar²¹. Eso sí, nos dejaron un poli de consigna», se ríe Ruarte.

21. Trabajar.

Compraron colchones, camas, sábanas y televisores. Instalaron las líneas telefónicas, limpiaron el sarro de los inodoros, limpiaron dos pisos de los veinte del edificio y después de unos días de intenso trabajo habían recuperado dieciséis habitaciones. «Y los niños no solamente estuvieron para la inauguración de la filial, sino que después siguieron tocando. Acá tenían todo el hotel para ellos, para ensayar... Todo el día escuchábamos música clásica. ¿Te imaginás?», dice Ruarte. Con esa música pusieron en marcha la maquinaria del hotel. Poco a poco fueron recuperando todos los pisos restantes, los salones y el teatro de cuatrocientas butacas. En algunos años el Bauen generaba más puestos de trabajo que en sus mejores épocas. Una vez más, era el centro neurálgico de Buenos Aires, pero ya no de la clase política que llevó el país a la ruina, sino de los movimientos sociales que planteaban alternativas.

«Cada día que pasa yo me digo “loco, no nos equivocamos, no ganarás el mejor sueldo del país, ni del mundo, pero es una guita que la generarás vos”», dice Ruarte. Cuando en junio de 2007 llegó la orden de desalojo, 10.000 personas rodearon el hotel. La Policía no intervino. La orden de desalojo sigue vigente, pero «ningún juez se atrevió a aplicarla», comenta Ruarte.

El trabajo, un «bien de utilidad pública»

Dentro del Bauen, unas plantas más arriba, se ubica la sede de Facta, una federación que coordina el trabajo de setenta cooperativas autogestionadas en todo el país, el Bauen entre ellas. Fabián Pierucci, uno de sus portavoces, habla de los logros del movimiento. Para Pierucci, la crisis de 2001 y el movimiento de empresas y fábricas recuperadas produjeron un cambio en la forma en que la sociedad percibe el trabajo. Ya no se trataba de un asunto meramente privado, un contrato entre un individuo y una empresa. Cuando el desempleo pasa a ser masivo deja de ser un asunto privado para transformarse en un «drama público». El desocupado acaba siendo sostenido por su familia, por sus vecinos, por sus conocidos y se «terminan deteriorando el conjunto de relaciones y la propia vida». El aumento alarmante de la inseguridad, de los robos y los secuestros era solo uno de los aspectos que más preocupaba a la castigada clase media y a los medios masivos.

Cuando la crisis se hizo insoportable, el derecho a la propiedad entró en confrontación con el derecho al trabajo, con el derecho a la vida. «En la tensión entre estos dos derechos, el derecho a la vida ha tenido cierta preponderancia», afirma Pierucci. Una tensión que también se evidencia en el debate entre legalidad y legitimidad. ¿Qué tiene más peso: un derecho tan básico como el trabajo o una legislación que lo hace imposible? Según afirma Pierucci, en muchos casos la legitimidad ha terminado imponiéndose a la legalidad. Un ejemplo es el propio Bauen, cuya orden de desalojo hasta hoy nunca fue ejecutada.

En otras ocasiones este cambio de mentalidad se ha traducido en cambios legislativos. Numerosas empresas recuperadas han sido legalizadas después de que las leyes las definieran como «bienes de utilidad pública». De la misma forma que el Estado puede expropiar terrenos para construir una carretera, el movimiento de empresas recuperadas había conseguido que el trabajo se empezara a considerar como un «bien público».

En 2003 había 128 empresas recuperadas en Argentina. En 2010, el número se había elevado a 205, según un estudio realizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Casi 10.000 trabajadores participan en estas empresas. Si en los peores momentos de la crisis apareció como una «tabla de salvación», en las épocas de «bonanza», dice uno de los responsables de este estudio, el movimiento no ha dejado de crecer.

Hacia la Patagonia

DE BUENOS AIRES A ESQUEL (PROVINCIA DE CHUBUT)

Casi dos horas de viaje se necesitan para dejar atrás las últimas casas bajas del Gran Buenos Aires y entrar en esa llanura interminable que en las escuelas llaman pampa húmeda. Cerca del kilómetro 444, la carretera y los años han enterrado lo que había sido hace tiempo una de las «fronteras con el indio». La zanja de Alsina, con dos metros de profundidad, tres de ancho y 360 kilómetros de largo, resguardaba las haciendas de las incursiones de los nativos.

Pero a los grandes terratenientes de la Sociedad Rural, creada en 1876, no les pareció suficiente.

Osvaldo Bayer, además de investigar sobre el movimiento obrero, ha dedicado buena parte de su vida a darle la vuelta a uno de los mayores tabúes de la historia argentina: el exterminio de los pueblos que habitaban el territorio antes de la llegada de los españoles. Los «grandes héroes de la patria», dice Bayer, además de los que lucharon en la independencia, son los de la Conquista del Desierto, tal como se sigue conociendo aquel episodio, iniciado en 1879.

Para Bayer, este «genocidio» fue el origen del actual reparto de la tierra en Argentina. Tras la campaña se entregaron 42 millones de hectáreas a 1.800 estancieros integrantes de la Sociedad Rural, que habían cofinanciado la expedición militar. Después de este acto fundacional de la economía argentina, «la única reforma agraria que ha habido es que los estancieros tuvieron muchos hijos y las herencias fueron repartiendo la tierra». Ninguno de los gobiernos posteriores se atrevió a modificar este hecho.

«Tierras libres de indios que podían cercarse a voluntad con ese maravilloso hilo metálico, el alambrado», era el sueño de Julio A. Roca, jefe militar de la Conquista del Desierto. Al menos 14.000 indígenas fueron masacrados. Otros 14.000 terminaron como esclavos, aunque teóricamente la esclavitud había sido abolida en 1813.

A medida que el autobús deja atrás la provincia de Buenos Aires y se interna en la provincia de La Pampa, los árboles se van convirtiendo en arbustos y la vegetación se vuelve amarilla. Aparecen los primeros cactus. Es la pampa seca.

Con el ejemplo de la guerra contra el indio de Estados Unidos, cuenta Bayer, «a los sobrevivientes se los aisló completamente en las zonas de menos producción. Para los que se salvaron, empezó un periodo de indigencia».

El Alto Valle del Río Negro y Neuquén, famoso por el cultivo de manzanas, peras y uvas, es el punto de entrada a la Patagonia, la región más austral del país. Las poblaciones que rodean el valle van desapareciendo a medida que los ríos quedan atrás. Vuelve el desierto, la tundra, con arbustos todavía más bajos por el viento y el frío. Al frente, la cordillera de los Andes se va haciendo cada vez más grande.

Entre vientos de más de cien kilómetros por hora, la cordillera ha creado un refugio natural entre cerros nevados, bosques de árbo-

les milenarios y lagos de postal. Los mapuches, «gente de la tierra» en su lengua original, han vivido desde siempre en estos parajes, a ambos lados de la cordillera. Tras la campaña del general Roca, el interés de colonizadores, turistas y empresas multinacionales, en ese orden, no ha dejado de crecer.

Uno de los primeros extranjeros en fijarse en estas tierras fue Hernando Arias de Saavedra, en 1604. *Hernandarias* se embarcó en una expedición para encontrar la Ciudad de los Césares de la Patagonia. También llamada la Ciudad Errante o Elelín, había sido descrita como una ciudad de planta cuadrada, con templos y calles de oro macizo. Algunas versiones hablaban de dos cerros, uno de diamante y el otro de oro.

Durante trescientos años, dice el historiador Enrique de Gandía, la leyenda «enloqueció a guerreros y frailes, arrastrándolos, como fascinados, de un extremo a otro de la Patagonia». A principios de siglo XXI, la búsqueda parecía haber concluido con éxito. Pero los exploradores eran esta vez muy distintos. Trabajaban para la empresa minera canadiense Meridian Gold. La Ciudad de los Césares, en efecto, tenía una planta casi cuadrada. No tenía calles de oro, pero sí varios cerros alrededor. Los 30.000 habitantes de la ciudad ignoraban que uno de los picos que veían todos los días, a seis kilómetros de distancia, estaba lleno de oro. La población de Esquel tampoco sabía que en su tranquilo pueblo se libraría la primera gran batalla contra los nuevos conquistadores.

Esquel, cianuro y almendras

El hallazgo pudieron leerlo todos los habitantes de Esquel en el diario. Una mina de oro, inversiones y cuatrocientos puestos de trabajo. Un panorama prometedor, sobre todo para los 6.000 desempleados que había en la ciudad en 2002. Para presentar el proyecto la empresa convocó a una primera reunión. A Marta Sahores, como profesora de Química en la Universidad de la Patagonia, le entró curiosidad. En la entrada de la charla se encontró con otra profesora de la facultad. Se sentaron juntas. La sala estaba llena.

—El cianuro es menos venenoso que la lavandina [lejía] que se vende en los supermercados cerca de las góndolas de la comida

—decía un hombre vestido con un traje azul. Sin duda intentaba evitar una «innecesaria» preocupación por el uso de uno de los ingredientes básicos para la extracción de oro en las minas a cielo abierto.

Las dos químicas se miraron. Marta Sahores no pudo evitar levantar la mano. Pero el hombre del traje azul continuaba hablando.

—Cianuro hay en las almendras amargas, en el humo de cigarrillo... Si el cianuro fuera veneno yo estaría envenenado, porque el azul es ferrocianuro férrico —decía mientras mostraba su traje azul y señalaba a otros oyentes con prendas azules— y vos y vos y vos...

Las dos profesoras de Química interrumpían, cuando les dejaban. A la salida del acto siguieron hablando. «¡Qué responsabilidad la nuestra!», dijo Marta Sahores. Eran las únicas dos expertas en química de Esquel. El hombre del traje azul que hablaba sobre la inocuidad del cianuro era gerente de ventas, según se enteraron después.

El local de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la Minería está a unos pocos metros de la plaza principal. Mate en mano, Sahores describe cómo se extrae el oro de la montaña en una mina a cielo abierto: explosiones de material contaminante, diques precarios de material tóxico, cianuro, temblores y el uso de millones y millones de litros de agua por día.

Marta Sahores se acerca a una maqueta de Esquel y de las montañas de los alrededores, entre ellas el cerro donde Meridian Gold quiso instalar la mina. «Trescientos miligramos de cianuro resultan letales para un ser humano. Iban a usar seis toneladas por día, aquí, a 6,2 kilómetros de la ciudad, con caída para acá», dice mientras señala la ruta que tomaría cualquier escape, directo hacia Esquel.

«Vecinos informan a vecinos»

Sea cual sea la hora, las calles de Esquel permanecen semidesiertas. Pero sobre todo cuando se va el sol y empieza el frío. Las bandurrias, pájaros de pico largo y combado, cruzan las calles y se posan en las plazas. Solo las pintadas del «no a la mina» atestiguan que fue real que este pueblo, con cierto aire al Cicely de la serie *Doctor en Alaska*, derrotó a una multinacional.

Pablo Quintana entra en el pub irlandés. La llegada de la minera no solo no le dio trabajo, sino que se lo quitó. Su oposición a la mina provocó su despido del *Diario de Chubut*. Al principio, como la

mayoría de los vecinos, no veía demasiados inconvenientes. Pero al poco tiempo empezó a circular información sobre las consecuencias de un emprendimiento de esa magnitud. «Era como tener una bomba de tiempo a seis kilómetros», dice Quintana. La mina Bajo de la Alumbreira, inaugurada en 1997 en la provincia de Catamarca, servía de advertencia de las desastrosas consecuencias sociales y ambientales de la llamada megaminería. El aumento de las desigualdades, la contaminación y el agotamiento de los acuíferos eran algunas de ellas. Pero había muchos más motivos para oponerse: según disponían las leyes aprobadas durante el menemismo, solo el 3% de las ganancias producidas por la megaminería se quedaba en el país.

A mediados de 2002, Pablo Quintana y otros conocidos empezaron a reunirse, a hablar por teléfono, a intercambiarse correos electrónicos. En el salón de la escuela n° 205 hicieron la primera reunión. Eran unas sesenta personas. La siguiente semana ya superaban las cien. «A partir de ahí fue como una bola de nieve». Se había creado la primera Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la Minería.

La asamblea utilizaba los mensajes de texto, los *mails*, las *panfleteadas*, las pegatinas, pero resultó claro que no bastaba. La primera movilización fue convocada para el 24 de noviembre de 2002. Mil personas se juntaron ese día. La situación seguramente empezó a preocupar a la empresa porque, según cuenta Marta Sahores, recibió tres llamadas anónimas con amenazas. «Me dijeron que si no me dejaba de joder con el cianuro iba a quedar tendida en la plaza», cuenta.

Una semana después, la ciudad vivía su segunda muestra de rechazo. Ahora, eran 3.000 personas las que gritaban contra la mina en una marcha por el centro. «Ese día quedé tendida en la plaza, pero de feliz, porque había venido mucha gente de la comarca», relata Sahores.

El equilibrio de fuerzas estaba cambiando. La empresa minera reaccionó aumentando la presión. «Yo lo viví en carne propia —cuenta Pablo Quintana—. El diario en el que trabajaba era un fluir de información de diverso tipo, pero en enero de 2003, ¡plaf!, el diario dio un vuelco total. Me empezaron a rechazar todas las notas y al mismo tiempo en el periódico aparecían jugosísimos espacios publicitarios de la minera».

Con la población movilizada fuera de la municipalidad, el Consejo aprobó la convocatoria de un plebiscito. El primer referéndum en Argentina sobre la minería a gran escala ya tenía fecha: el 23 de marzo de 2003.

A medida que se acercaba el día, la tensión aumentaba. La manifestación más multitudinaria fue la del cierre de campaña, el día antes de la votación. Nueve mil personas marcharon por el centro en la mayor movilización de la historia de Esquel. El Gobierno municipal y la minera Meridian Gold, para cerrar la campaña, hicieron un concierto gratuito en el gimnasio municipal. Como artistas invitados, Ráfaga, un grupo de cumbia conocido en todo el país, con bebida y choripán incluidos.

Había llegado el día. «Todos teníamos miedo. No creíamos que podían haber convocado un plebiscito sabiendo que iban a perder. Creíamos que había gato encerrado, que iba a haber fraude. No sé de dónde vino el error de cálculo», dice Quintana.

El referéndum no era vinculante ni tampoco obligatorio, como sí lo son las elecciones en Argentina. Sin embargo, aquel día acudió a votar el 70%, un porcentaje cercano al registrado en las elecciones *de verdad*. Al cierre de la votación, a las 18:00 horas, el resultado no podía ser más rotundo: 1.500 personas a favor de la mina; 11.062 personas, el 82%, en contra. La victoria se convirtió en festejo. «A la noche la gente estaba como loca, dando vueltas por todos lados. Yo recuerdo salir del local y llegar a la plaza abarrotada de gente, algunos con antorchas, con pancartas, un momento de absoluto festejo», recuerda Quintana.

El día anterior al plebiscito, en la gran marcha de cierre, Marta Sahores no podía creer lo que veía: «En un pueblo de 30.000 habitantes, había 9.000 en la calle, sin organización, unos hacia un lado, otros hacia otro...». De repente descubrió entre los manifestantes a un grupo de niños, todos equipados con la misma camiseta de fútbol, relucientes. Le entró la curiosidad.

—Chicos, ¿qué pasa?, ¿no estuvieron jugando al fútbol, que están todos limpios?

—No, estas nos las regalaron los mineros y las guardamos para festejar el triunfo del «no a la mina».

«¡Eso fue apoteósico! Hubo compra de voluntades a granel, empanadas, asados, vino... Trajeron un conjunto musical gratis. La

gente aceptó las empanadas, fue a ver al conjunto que le gustaba, pero luego votó lo que le parecía», dice Sahores.

Un antes y un después

A los pocos días, el Gobierno declaró que el proyecto no se iba a realizar. A la semana, los vecinos se enteraban de la última iniciativa de la Meridian Gold: había contratado a una consultora para analizar por qué un pueblo como Esquel había decidido rechazar su proyecto. «Nos cayó fatal. ¡Nos iban a psicoanalizar masivamente para saber por qué nos oponemos a un modelo de desarrollo que nos quieren imponer!», se ríe Quintana.

Un año después, en 2004, la provincia de Chubut aprobó la Ley 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto. Una decisión que imitarían luego las provincias de Mendoza, San Luis, Tucumán, La Pampa, Córdoba y Tierra del Fuego²². «Creo que los propios pobladores de la ciudad no percibimos la enorme dimensión de lo que ha significado esta experiencia. Hoy se puede hablar de un antes y un después en los emprendimientos mineros en Argentina. A partir de lo vivido acá, con la eclosión social que se provocó, hubo un replanteo entre el común de los ciudadanos. Muchos teníamos la imagen de la minería con el casquito, el pico y la pala. Nada más lejos de lo que significa un emprendimiento minero a cielo abierto a gran escala. Ver que una localidad puede paralizar un proyecto de un grupo económico multinacional, que contaba con el beneplácito del poder político, de los medios de comunicación, marcó un hito».

A finales de 2008, el debate de la megaminería llegó al Congreso. Los diputados aprobaron por unanimidad una ley que protegía los glaciares de la explotación minera. Pero la presidenta Cristina Fernández vetó el proyecto. Cuando en septiembre de 2010, la ley de glaciares volvió a aprobarse en el Congreso, ya no hubo veto. Pero el gobernador de San Juan, el kirchnerista José Luis Gioja, aclaró que no aplicaría la ley en su provincia, donde se encuentra la mina Pascua-Lama de Barrick Gold, la minera más grande del mundo. Según el diputado Miguel Bonasso, examigo del matrimonio Kirchner

22. Las provincias de La Rioja y Río Negro firmaron prohibiciones semejantes, pero luego dieron marcha atrás.

y uno de los autores de la ley de glaciares, detrás de esta actitud existe una «corrupción estructural» que vincula a funcionarios y políticos kirchneristas con las empresas mineras.

Esquel fue el primer pueblo de Argentina que consiguió expulsar a un gigante minero con la movilización ciudadana. Pero no sería el último. Había demostrado que se podía hacer. Las empresas mineras y las autoridades también aprendieron de la experiencia y del estudio psicológico encargado por Meridian Gold. Los distintos gobiernos provinciales evitaron por todos los medios repetir un referéndum parecido. Pero en el caso de Loncopué no lo pudieron impedir. Nueve años después, en junio de 2012, este pequeño pueblo de la provincia de Neuquén decidía por abrumadora mayoría prohibir la minería a cielo abierto en todo el municipio. Si el de Esquel fue el primer plebiscito para prohibir la megaminería, el de Loncopué fue el primero de cumplimiento obligatorio en la historia argentina.

El matrimonio mapuche que venció a Benetton

ESQUEL / PROVINCIA DE CHUBUT

Los murales y pintadas contra la minería, por el agua y la vida decoran la mitad de los muros y paredes blancas de Esquel, recordando una certeza que comparten todos los que consiguieron echar a la minera en 2003: mientras siga habiendo oro debajo de la montaña no podrán estar completamente tranquilos.

Son las diez de la noche en la librería Macayo, ubicada en la calle comercial. Gustavo Macayo abre la persiana metálica y ceba unos mates, especiados con manzanilla y otros yuyos de la zona. Heredó la librería de su padre. Después de viajar por América Latina, volvió para encargarse del local y convertirse en abogado de todas las *causas perdidas* de la región. Pese a que su ámbito son los juzgados, no le gusta darle demasiada importancia al trabajo de los abogados: «La verdadera victoria no se da en los tribunales, sino en la calle, en la conciencia de la gente».

Una de las primeras *causas perdidas* que defendió Gustavo Macayo fue la defensa de la comunidad mapuche Vuelta del Río, amenazada

por los terratenientes vecinos. Hasta la fecha, este abogado ha defendido a más de veinticinco comunidades indígenas en conflicto de tierras.

En las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro se estima que hay entre 150.000 y 300.000 mapuches²³. Muchos viven en comunidades rurales, la mayoría de las veces sin título que valide su propiedad. Pero cerca del 60% habita en las ciudades, casi siempre en condiciones de pobreza en las periferias urbanas. Era el caso de Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco. Al día siguiente de que ocuparan un terreno al norte de Esquel, Gustavo Macayo se convirtió en su abogado. La tierra la reclamaba como suya nada menos que el gigante textil italiano Benetton.

Rosa Nahuelquir nació en la comunidad de Cushamen. Un antepasado de Rosa, Miguel Ñancuche Nahuelquir, había negociado a fines del siglo XIX con el mismísimo general Julio A. Roca la entrega de esas tierras para algunas comunidades que habían sobrevivido al avance militar. Pero su familia fue obligada a emigrar a la ciudad.

«Mis padres dejaron la tierra porque llegó un terrateniente y les quitó el campo, con todas las trampas que había antes... les daban vino y les hacían firmar que esa tierra les pertenecía a ellos», recuerda. En la cocina de la casa familiar en Esquel, Rosa ceba un mate. En la ciudad tuvo que enfrentarse a la discriminación por ser mapuche. «En la escuela, los maestros te hacían conocer bien cuál era tu papel por el hecho de llevar el apellido Nahuelquir. Cuando hablaba con mis hermanos en nuestra lengua nos hacían callar, nos daban un reglazo en la cabeza y a un rincón, cinco horas ahí, paradita». Una discriminación que continuaba en el mundo del trabajo: «Por ser mapuche tenía que quedarme en el molde, sin reclamar, que venga otro y reclame, otro que sepa hablar mejor o que sea más blanquito».

En Esquel trabajó durante veinte años para la empresa textil Texcom, la más grande de la ciudad, cobrando ochenta centavos, medio euro, la hora. «¿Quién ganaba ahí? —se pregunta Rosa—. El que ganaba era el patrón, porque con ese dinero yo no hacía nada».

23. En el sur de Chile, del otro lado de la frontera, más de 600.000 personas se reconocen como mapuches. Sin embargo, muchos colectivos indígenas sostienen que las estadísticas esconden una población mapuche mucho mayor. Los conflictos de tierra y la represión de la Policía y el Ejército se han extendido en la última década por la falta de respuesta administrativa ante las demandas de la población indígena.

En 2001, la crisis económica la dejó en la calle, al igual que a otras quinientas personas de la fábrica.

Junto con su marido, Atilio, tomaron la decisión de «volver a la tierra». Para empezar a vivir «sin patrones» eligieron unos terrenos que habían pertenecido durante generaciones a la familia de Atilio, cerca de Leleque, cien kilómetros al norte de Esquel. Cuando el 23 de agosto de 2002, Rosa y Atilio ingresaron en el terreno no se imaginaban a quién se tendrían que enfrentar para alcanzar su sueño. La compañía italiana Benetton no tardó en denunciar por usurpación al matrimonio mapuche.

La imagen de un matrimonio indígena sacándole los colores a Benetton llamó la atención de medios de comunicación nacionales e internacionales, y despertó la solidaridad del movimiento indígena y de derechos humanos del país. Pero esta *historia humana* tenía un trasfondo histórico y político. «Nos encontramos con una bomba enorme, con algo completamente tapado durante más de cien años», cuenta Macayo.

Al investigar el origen de la supuesta propiedad de Benetton sobre esas tierras salió a la luz un escándalo de corrupción que se remontaba a 1896, diez años después del fin de la Campaña del Desierto. En ese año, el presidente argentino José Evaristo Uriburu donó 900.000 hectáreas a diez ciudadanos ingleses anónimos. Estos ciudadanos ingleses traspasaron a su vez esas tierras a la Argentinean Southern Land Company Ltd., una «empresa fantasma creada con el único propósito de recibir la donación de esas tierras», precisa Macayo. Esa donación, que se saltaba toda la legislación de la época, había permanecido en secreto hasta entonces. Después de pasar por muchas manos, esas 900.000 hectáreas fueron compradas por Luciano Benetton en la década de los noventa. Pocos años después de la compra, relata Rosa, la compañía «empezó a incorporar tierras, poniendo alambres al arroyo, al cementerio... Hoy no se puede pasar ni para ir a pescar ni para ir de una comunidad a otra».

«Volver a la tierra»

A la ocupación le siguió, dos meses después, un desalojo. «Fue brutal, nos tiraron todo, la casita, las plantas, los animales, le pasaron la máquina para que no quedara ningún rastro», recuerda Rosa. Cuando en mayo de 2004 comenzó el juicio por usurpación, el caso ya había pasado a las portadas de los principales periódicos argentinos. El juez retiró los cargos por usurpación, pero reconoció la propiedad de Benetton sobre la tierra. «Si el juez hubiera estado tan acertado no hubiera transpirado tanto. Esa noche no sé cuántos pañuelos se habrá secado ese juez. Sudaba como testigo falso», dice.

A finales de 2004, Rosa y Atilio viajaron a Roma para hablar con Luciano Benetton. «Benetton decía que no entendía nada, que no sabía por qué queríamos esa tierra y no otra, pero cuando el encuentro se puso un poco más calentito, ahí sí que entendió... Se comprometió a dar solución al asunto». Escribieron cartas, se reunieron con personalidades, autoridades, pero sin resultado. «A veces nos dicen que somos brutos, que no sabemos esperar. Entonces les demostramos que sí podíamos hacerlo: desde 2004 hasta 2007 esperamos una respuesta, pero como no llegó decidimos volver al lugar».

El 14 de febrero de 2007, esta vez con el apoyo de otras comunidades, volvieron a ocupar la tierra. En esta ocasión ninguna fuerza policial acudió a desalojarlos. «La repercusión que estaba teniendo el caso influyó para que no nos desalojaran esta vez. Pasaron tres meses sin que ningún juez quisiera agarrar la causa. Creo que muchos tenían miedo de ser denunciados o de lo que dijeran los periódicos».

La lucha del matrimonio mapuche contra Benetton significó un nuevo impulso para las recuperaciones de tierra por parte de comunidades. «Después de nuestra recuperación muchas comunidades tomaron ese ejemplo de que se podía luchar y recuperar nuestra cultura», dice Rosa. Según el periódico *Página12*, en la última década las comunidades mapuches, apoyadas por el Consejo Asesor Indígena (CAI) y la Confederación Mapuche de Neuquén, recuperaron 233.000 hectáreas de territorio ancestral. Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco, como tantos otros, han demostrado que es posible «volver a la tierra». Ya no tienen miedo de pronunciar sus apellidos mapuches.

La otra cara de la postal

EL BOLSÓN / PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Recto por la ruta 40, 162 kilómetros al norte de Esquel, se llega a El Bolsón, la primera población de la provincia de Río Negro. El Bolsón tiene la apariencia de un artificial pueblo turístico, famoso por su feria de artesanía y la cercanía del lago Puelo. Pero más allá de las pocas calles asfaltadas se entra en otra realidad. Hasta siete viviendas recuperadas por familias mapuches, ocupaciones de terrenos en los alrededores y uno de los centros de operaciones del CAI, la organización indígena que impulsa las recuperaciones de tierras en la provincia.

Aunque el auge de las organizaciones mapuches se había iniciado en los años setenta, para el abogado Gustavo Macayo el año 1992 tuvo un significado especial: «Los pueblos indígenas se dan cuenta de que no pueden retroceder más, y si después de quinientos años siguen vivos, con posibilidades de repensar su historia, es porque han tenido una gran capacidad de resistencia. Es el momento en que no quieren retroceder más y empiezan a avanzar». En 1997, una asamblea del CAI en Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Río Negro, daba por finalizada «la etapa administrativa» al comprobar que el Estado no tenía voluntad de devolver las tierras usurpadas. Había que pasar a la acción.

Los conflictos por la tierra se multiplicaron a partir de 2001, no solo por el proceso de recuperación de la identidad del pueblo mapuche, sino por el aumento de las presiones sobre las tierras de las comunidades. A las presiones del negocio turístico e inmobiliario, se sumó el ingreso de compañías petroleras y mineras en los territorios mapuches.

Daniel Otal siguió de cerca esta evolución. Después de participar en sus primeros años en el CAI, siguió investigando los conflictos de tierras y trabajando en medios comunitarios. Coloca las tapas de empanadas en una mesa y las va rellenando con cebolla frita, carne picada y tomate. Y aceitunas. Mientras, habla de la nueva hornada de estancieros que llegaron a las tierras patagónicas, multinacionales y millonarios europeos y norteamericanos que «con cierto grado de corrupción necesaria» se fueron convirtiendo en propietarios de grandes extensiones de tierra. «En un contexto de agotamiento de

los recursos naturales, esta es una región que tiene todavía glaciares, agua, bosques nativos, un territorio casi virginal para una mirada de continentes prácticamente agotados, sobresaturados de población».

Daniel Ojal muestra la forma de colocar los dedos para hacer el repulgue, el cierre de cada empanada. «El único obstáculo que han encontrado las multinacionales ha sido la respuesta social», añade. Para este periodista, los cambios que se han producido en los últimos años van más allá de las recuperaciones: «Charlando con la gente que hace las recuperaciones te das cuenta de que esta situación provoca que se revise el espíritu de la ley, que se venía asumiendo como divino. Estos gestos de determinación, de resolver los problemas por ellos mismos, les llevó a plantearse hasta la ilegitimidad de la ley. Les llevó a entender que buena parte de las leyes son una construcción de las clases dominantes desde el origen del Estado. Y este aprendizaje es intransferible y se hace palmo a palmo. Permite reconstruir una legitimidad cuestionando la ley sin sentirse delincuentes, sino con todo el derecho. Este es un pavimento ideológico de construcción social muy fuerte».

Los colores de Zanón

NEUQUÉN / PROVINCIA DE NEUQUÉN

Quinientos cuarenta kilómetros al norte, una vez más en el Alto Valle, se sitúa la ciudad de Neuquén, una población capicúa sin particular encanto, pero con gran efervescencia social. Las Madres de Plaza de Mayo, organizaciones de desocupados, un animado movimiento estudiantil y diversos partidos de izquierda convierten el centro de la ciudad en un hervidero de manifestaciones. Pero sobre todo un movimiento convirtió esta capital patagónica en centro de todas las miradas: la experiencia de Zanón.

Zanón es una de las fábricas de cerámica más grande de Argentina. En la línea de esmalte, todos los trabajadores vestían de verde. Los empleados de los hornos, de rojo. Los del tercer fuego, de amarillo. Los mecánicos, de azul. La entrada ordenada de los obreros en esta fábrica de 70.000 metros cuadrados, vista desde la carretera provincial

nº 7, debía de ser un impactante espectáculo multicolor. No por nada se consideraba un «privilegio» entrar a trabajar en Zanón.

Hoy todos los trabajadores de Zanón visten de marrón. Pero gestionan la fábrica a través de una asamblea, cobran prácticamente lo mismo, han conseguido crear más puestos de trabajo que su antiguo dueño y revierten parte de las ganancias en la comunidad. Antes de la toma, si se negaban a hacer horas extras, eran despedidos. Con la gestión obrera todo cambió. «Poco después de poner a funcionar otra vez las máquinas, a veces nos llamaban a la una o a las dos de la mañana, que había una rotura y había que venir, pero uno venía encantado, como si fuera a cobrar un millón de dólares», dice Reinaldo Giménez, trabajador de Zanón, mientras comprueba el agua para el mate. El fuego donde se calienta la *pava*, en la sala de descanso, se mantiene siempre encendido.

La fábrica fue inaugurada en 1979 por el empresario italiano Luis Zanón. Al igual que ocurrió con el hotel Bauen, la fábrica se levantó con fondos públicos, nunca devueltos, y sobre tierras públicas, cedidas por el Gobierno. Durante los años noventa recibió más subvenciones millonarias del Estado y llegó a exportar a 33 países. Sin embargo, las condiciones de trabajo cada vez eran peores.

En esos años, Enrique Catrupán empezó a trabajar en Zanón. De apellidos mapuches, se reivindica descendiente de las tribus que combatieron hasta el último momento contra el Ejército. Don Catrupán trabajaba en el campo. Tal vez por eso el cambio fue tan brusco para él: «Para mí Zanón fue como un campo de concentración, perdí la libertad. Nunca me adapté. No lo podía soportar. Vos no podías salir del sector, tenías que estar permanentemente en tu puesto. Uno no podía conversar con su compañero».

El color de la ropa permitía saber de inmediato a qué sector pertenecía cada trabajador. Sin embargo, quienes vivieron esa época lo primero que destacan es que no se conocían entre ellos. Ni siquiera a la hora de comer coincidían.

—Sería una conclusión que sacaba la empresa: si estos se juntan se arma el despelote²⁴ —dice Reinaldo Giménez—. Yo a este no lo conocía, y tenemos la misma antigüedad. —Reinaldo señala a don Catrupán.

24. Caos, *despiporre*.

—Uno no podía presentar certificados médicos, si llegabas un par de minutos tarde te amonestaban —cuenta Marcelo Morales, otro trabajador de Zanón.

La fábrica era una gigantesca cadena de montaje. Los obreros, piezas de la maquinaria.

—Me había mentalizado de que me iba a morir bajando cajas, porque yo trabajaba en Selección, con los productos terminados. «No, vos te morís bajando cajas», me decían constantemente.

Reinaldo Giménez rellena el mate y lo pasa al siguiente.

Alejandro López entró en la fábrica en 1992, junto con otros 140 trabajadores. Los mitos se deshacían rápido en Zanón. Ni las fábricas multicolores son reductos de paz y armonía, ni los sindicatos defienden siempre a los trabajadores. «El sindicato decía que los nuevos empleados venían a reemplazar a los viejos. Toda la fábrica estaba dividida. Y nosotros no podíamos decir nada. Si abríamos la boca nos echaban», cuenta López, alzando la voz entre el ruido de las máquinas y el polvo rojizo posado en todas las superficies de la línea de esmaltado. El sindicato de ceramistas, una de las secciones de la central mayoritaria CGT, «hacía las listas negras con todos los trabajadores que había que despedir», explica López.

«La patronal empezó a hostigar cada vez más, todos los años despedía a compañeros y nos quería hacer rebajas salariales. Además, nos exigía ritmos de producción muy acelerados. Antes teníamos un muerto por año», cuenta.

En 1998, la camada que había ingresado seis años antes empezó a pensar en cambiar la situación. «Nos empezamos a organizar de manera clandestina, porque acá no podías reunirte, no podías hablar», relata. Uno de los espacios de encuentro fue alrededor de dos tópicos argentinos: la carne y el fútbol.

En el principio fue el fútbol

Óscar Ceballos, *Chimango*, como lo conocen en Zanón, se encargó de realizar talleres de comunicación en los inicios de la recuperación de la fábrica. Es una de las personas que más ha estudiado una de las facetas menos conocidas de este proceso: el papel del fútbol en los momentos previos a la toma de la empresa. Los obreros de Zanón no se conocían, pero compartían el gusto por el fútbol. «Empeza-

ron a darse cuenta de que alquilar las canchas salía muy caro, que era mejor alquilar un predio y hacer las canchas ellos mismos», cuenta. Pronto, cada uno de los catorce sectores tenía un equipo de fútbol. Cada domingo encendían un fuego, todos llevaban carne, la echaban sobre la parrilla y compartían el asado. Trabajadores de distintos sectores empezaban a conocerse y a presentarse a sus familias, cuenta Chimango.

Y cada equipo tenía un delegado, que no solo se preocupaba por quién jugaba y a qué hora era el partido, sino que empezaba a servir para compartir información sobre los abusos laborales, la falta de medidas de seguridad o sobre la supuesta crisis que vivía la fábrica, la excusa siempre utilizada para justificar nuevos despidos. El Club Obrero Ceramista, tal como lo llamaron, «fue el primer espacio experimental de autogestión», dice Chimango. Fue un lugar de encuentro, debate y también de toma de decisiones.

La primera gran apuesta fue crear una lista propia, la Lista Marrón, y quitarle la fábrica al sindicato «de la patronal». No fue necesario un programa radical, sino solo un único compromiso: «Que no se iban a vender». Y además una fórmula, que se convertiría en sagrada: ningún representante puede acudir solo a ninguna reunión con la patronal o el Gobierno y cuando un dirigente termina su mandato vuelve al mismo puesto del que salió. La victoria de la Lista Marrón, en 1998, fue aplastante. Dos años después, la Lista Marrón fue elegida también para la dirección de todo el sindicato ceramista de Neuquén, que agrupa a otras tres fábricas.

«Antes, las decisiones las tomaban los delegados sindicales. Nosotros dijimos que había que cambiar eso. La base tiene que ser parte de las decisiones. Es sano tener desconfianza. Hay que confiar en los métodos, no en las personas», afirma López. El cambio en la dirección sindical tuvo efectos rápidos. «En aquel momento comenzamos a tener triunfos, aumento salarial, se pararon los despidos... Empezamos a mostrar que era mentira que trabajar acá era un privilegio».

Los primeros ensayos

A partir de 1998, las visitas de los delegados de la Lista Marrón a las oficinas de la patronal para exigir mejores condiciones de trabajo se convirtieron en habituales.

—No hay plata.

—¿Cómo que no hay plata? Si nosotros producimos todos los días, y todos los días salen camiones de acá de la fábrica, se vende todos los días, lo vemos.

—No hay plata —era la última palabra de los dueños de la fábrica.

A los trabajadores algo no les cuadraba. Y empezaron a hacer números. La línea de esmalte «fue el corazón del control obrero parcial». Un palé tiene setenta metros cuadrados, suficiente para el piso de toda una casa. Si en un turno hacían veinte palés, obtenían 1.400 metros cuadrados. Y si otro compañero en otro turno hacía veinte palés, y a la noche también, el resultado era de sesenta palés por línea. Si lo multiplicaban por las quince líneas de producción ya se podían hacer una idea de la producción de la fábrica. Habían empezado a ensayar el control obrero: podían exigir aumento salarial o el fin de los despidos con las cuentas de la fábrica por delante. «Eso nos posicionó de modo diferente. La empresa nunca más pudo ganar un conflicto», dice Alejandro López.

En sus mejores épocas, Zanón empleó a cerca de quinientos trabajadores. A principios del año 2001, quedaban 380. A pesar de que el Gobierno provincial había prestado millones de dólares a la empresa para pagar los sueldos atrasados, hacía dos meses que los trabajadores no cobraban nada. La plantilla fue a la huelga durante 34 días. Pero Luis Zanón ya había tomado una decisión: cerrar la fábrica. Ante la amenaza de apagar los hornos, los trabajadores pasaron la noche en las instalaciones y el 1 de octubre no dejaron entrar a los gerentes. Ese día, ellos también tomaron su decisión: no iban a perder su puesto de trabajo. Instalaron una carpa en la entrada de la fábrica.

«El 1 de octubre de 2001 quedamos todos afuera. “Vamos a pelearla”, dijimos. Y ahí estuvimos cinco meses, cinco meses viviendo del pueblo. Salíamos a la ruta o íbamos a la universidad y a los centros comerciales, y cambiábamos un panfleto por un alimento», recuerda Reinaldo Giménez. A principios de 2002, una jueza dio la razón parcial a los trabajadores: el dueño había incurrido en un cierre patronal, por lo que autorizaba a que los trabajadores vigilaran la fábrica para evitar un vaciamiento. Ellos lo llamaron «guardia obrera». También les permitía disponer del 40% del *stock* de las cerámicas para pagar los salarios adeudados.

Con ese material hicieron un nuevo ensayo. Esta vez, el ensayo general antes del gran estreno. Sacaron el material a la entrada de la fábrica y empezaron a gestionar la venta de las cerámicas. «Creo que todos los compañeros aprendimos algo. Pero llegó un momento en que no había más que vender», dice Marcelo Morales.

El estreno

En esos tiempos, el secretario general del sindicato —ya en manos de la Lista Marrón— era Raúl Godoy, uno de los habituales de los partidos de los domingos. «Cuando nos hacen menos de siete goles nosotros celebramos», solía decir, según recuerda Chimango. Un día, Reinaldo Giménez se acercó a Raúl Godoy, que militaba en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), de orientación trotskista.

—Mirá, Raúl, yo tengo familia... sin abandonar esto voy a empezar a buscar otra cosa, porque esto va complicado.

—Mirá, te vamos a necesitar.

—¿Para qué?

—Porque sos el único gasista —le dijo Godoy.

—¿Y para qué querés gas? ¿Para calentarte en el invierno?

—No, vamos a poner a producir la fábrica.

No había muchas opciones. «Empezábamos a producir o teníamos que ir a cortar puentes por 150 pesos. Nos parecía mejor ponernos a trabajar. Aparte, sabíamos hacerlo. De hecho no nos habíamos dado cuenta que sabíamos hacerlo tan bien», dice Reinaldo.

En una asamblea, los 240 trabajadores que habían resistido los cinco meses aprobaron volver al trabajo. Esta vez sin patrones. FaSinPat, Fábrica Sin Patrones, fue el nombre que eligieron. El 2 de marzo de 2002 ponían en marcha cuatro hornos. Los inicios de FaSinPat estuvieron llenos de obstáculos. El mismo Luis Zanón, en cuanto vio que la fábrica no solo no estaba quebrada sino que contrataba a más trabajadores, incrementó la presión judicial. Cuatro órdenes de desalojo fueron paralizadas en los juzgados. La quinta, el 8 de abril de 2003, tuvieron que pararla los trabajadores de Zanón. Y otras 5.000 personas que rodearon la fábrica.

—Fue uno de los momentos más difíciles que recuerdo en estos diez años —dice Marcelo Morales—. En ese desalojo sabíamos que podían pasar muchas cosas, caer detenido o que un compañe-

ro perdiera la vida. Habíamos puesto gente en el perímetro de la fábrica, por todos lados, en los techos, ya teníamos decidido cómo organizarnos para el ataque. Sabíamos que el poder tiene mucha más gente, más armas, pero nosotros estábamos decididos a que no les resultara fácil. Era una cosa emocionante.

—Yo no sé si es correcto contarlo —dice don Catrupán—, pero ya estábamos acá, bien preparados, con nuestras bombitas molotov, de acá no nos sacaban, estábamos muy mentalizados. Si teníamos que dar la vida por esto, la dábamos. Y esto lo digo con emoción, porque yo tengo una militancia del setenta, cuando desaparecieron muchos compañeros... yo creo que esto que tenemos nosotros en esta fábrica era lo que quería aquella generación que desapareció. Por eso me siento orgulloso.

—Vinieron los sindicatos²⁵ con la Policía —cuenta Reinaldo Giménez—, vieron que había tanta gente... que se tuvieron que ir como vinieron. Y lo que nos llena de orgullo es que esos mismos que nos vinieron a desalojar fueron los que tuvieron que aceptar la mayoría de las condiciones cuando nos entregaron la fábrica como cooperativa. Eso va a quedar plasmado en los libros durante mucho tiempo, porque eso no se logra todos los días.

Aquel día paralizaron el desalojo y el 12 de agosto de 2009, después de años de marchas, cortes de ruta y una acampada frente al Congreso, conseguían la expropiación definitiva. «El día de la expropiación terminamos como a las tres de la mañana, fue un acto impresionante, fue una marcha monstruosa. La gente se emocionaba, nos emocionábamos todos», cuenta Reinaldo.

El secreto

La relación de Zanón con los movimientos y las organizaciones de la ciudad fue una de las claves del éxito de esta fábrica recuperada. En los primeros meses, cuando la venta del *stock* de cerámica apenas alcanzaba para la subsistencia, hicieron su primera aportación a la comunidad: el suelo de cerámica de la sala de espera del hospital de Centenario, una población cercana. Y en 2004, construían un

25. Personas encargadas de liquidar los bienes de una empresa en quiebra.

centro de salud en el barrio Nueva España. Y en 2006, después de que fallecieron en un accidente los padres de una familia numerosa en una localidad cercana, los trabajadores decidían en asamblea construir una casa para los hijos. Además, a la hora de contratar nuevos empleados, siempre se han dirigido al movimiento de trabajadores desocupados de Neuquén.

«Nosotros siempre decimos que las puertas de Zanón están abiertas, porque la comunidad fue el pilar fundamental para que nosotros estemos ahora acá», dice Marcelo Morales. Al fin y al cabo, «la plata que le dio el Gobierno a Luis Zanón era de la comunidad». Y parece que la experiencia de Zanón es contagiosa. De las cuatro fábricas que agrupa el sindicato de ceramistas de Neuquén, solo queda una con patrón. Las otras tres son gestionadas por los trabajadores. Reinaldo Giménez ya no baja cajas, aunque quizás en algún momento vuelva a hacerlo, ya que todos los puestos son rotativos. Como parte de la comisión política pudo viajar a Europa para hablar de la experiencia.

Ahora 460 personas trabajan en Zanón. Solo cincuenta de ellas son mujeres. Elisa del Carmen lleva un año y medio en la cooperativa. Participa en la Comisión de Mujeres y por la noche estudia para terminar la secundaria en la escuela para adultos que funciona dentro de la fábrica. La hora de la lactancia o el «día femenino», una jornada al mes libre para las mujeres, son algunos de los intentos de FaSinPat para equiparar la situación de las mujeres. Pero, según Elisa del Carmen, siguen sin ser suficientes. «Para las mujeres es mucho más difícil poder participar en otras actividades fuera del trabajo, porque nosotras seguimos siendo las encargadas de la casa, de los hijos», dice.

Sin embargo, Elisa del Carmen afirma sentirse «orgullosa» de formar parte de la fábrica. «Allá donde hemos ido de viaje, vos decís que trabajás en Zanón y es una cosa muy fuerte, te piden que les cuentes y te hacen preguntas de todo tipo». Antes se consideraba un privilegio trabajar en Zanón. Para algunos, ahora sí lo es. «Si yo tuviera un patrón, no estaría acá —dice don Catrupán—, no tomaría un té o un mate cuando yo quiero. Nunca me pude adaptar a este sometimiento, así que, gracias a Dios, y lo digo con tanto orgullo, no me pudieron dominar. Nunca tuve miedo, me amenazaron un montón de veces con que me iban a echar... Y bueno, se fueron todos y yo estoy acá».

En el país de la soja

ITUZAINGÓ ANEXO / CÓRDOBA

En la provincia de Córdoba, en el centro del país, los campos de soja son parte constitutiva del paisaje. A finales de los noventa, el *boom* de este cultivo literalmente acordonó los barrios del sur de la segunda ciudad más grande de Argentina.

Sofía Gática comenzó a darse cuenta de que algo iba mal en Ituzaingó Anexo, uno de esos barrios de la periferia de Córdoba. Pañuelos blancos en la cabeza de las mujeres, niños con mascarillas, bebés con malformaciones... Algo los estaba enfermando. «Era una situación a la que nos habíamos acostumbrado», cuenta Sofía. Su propia hija murió al nacer por una rara malformación en el riñón.

Como ninguna autoridad iba a hacerlo, Sofía comenzó en 2001 a investigar: «Empecé a llamar casa por casa y las madres me contaban su situación y me decían que tal o cual vecino también estaba enfermo. Uno te llevaba al otro. Al enterarse, otras madres se iban sumando. Nos conocimos así, llamando puerta por puerta», cuenta Sofía mientras termina de llenar de yerba la calabaza del mate, acompañante obligatorio de todas las conversaciones.

No necesitaban ser médicas para saber que algo estaba pasando. Corina Barbosa se junta a la conversación alrededor de la mesa: «Era el saber común, ver a un vecino que se muere de cáncer, a cincuenta metros una nena de tres años que se te enferma de leucemia, en una casa de por medio una niña de catorce años... Yo empecé por defender a mi hijo, que estuvo internado; ahora todavía tiene cuatro agroquímicos en la sangre». Pero entonces no sabían qué estaba provocando esa epidemia. Las calles del barrio, todas con nombres de químicos famosos, parecían una broma macabra.

Puerta a puerta, este grupo de vecinas elaboró una cartografía del barrio. «El mapa de la muerte», lo llamaron. En la cuadrícula de Ituzaingó Anexo colocaron puntos de colores con las enfermedades de cada persona. Con el resultado de esta encuesta casera consiguieron que el Gobierno analizara los agentes contaminantes en el barrio. Los estudios encontraron plomo, cromo y arsénico de las fábricas de la zona, fuertes campos magnéticos de las líneas de

alta tensión, contaminación por bifenil policlorado (PCB)²⁶... Pero su incidencia era mínima frente al verdadero veneno que los estaba enfermando: los agroquímicos que los productores de soja transgénica fumigaban por tierra y aire a escasos metros de las viviendas. Cuando volvieron a ver el mapa de la muerte todo cobró sentido: los casos más graves aumentaban exponencialmente a medida que se acercaban a los campos de soja que rodean el barrio.

«Nosotros vivimos ahí enfrente del campo —cuenta Corina—, pasaban las avionetas y bañaban con agroquímicos a nuestros chicos mientras jugaban. El campo se nos venía encima». El enemigo no podía ser más poderoso: los grandes productores agropecuarios y un modelo económico basado en la producción de soja transgénica.

Contamíname

En 1996, el Gobierno de Menem aprobó la introducción de una variedad de soja transgénica diseñada especialmente por Monsanto para resistir la acción de herbicidas como el glifosato o plaguicidas como el endosulfán. En 2009, la mitad de las tierras cultivadas en Argentina estaban sembradas con soja transgénica. La provincia de Córdoba es la principal productora del país. Estos cultivos para la exportación, destinados para agrocombustibles, aceites o alimentos para animales, ocupan cerca del 80% de la superficie agrícola de la provincia, según un estudio del Grupo de Reflexión Rural (GRR).

Además de las fumigaciones, el modelo sojero trae aparejado otros problemas, denuncia el GRR: las fumigaciones crean un «desierto verde» donde no sobrevive nada más que la soja. La falta de rotación de tierras y su uso intensivo produce el avance imparable de la desertización: «No crece nada después», dice Mauricio Berger, investigador de la campaña Paren de Fumigar.

Los altos precios internacionales y la creciente demanda del mercado chino han propulsado la expansión de los cultivos de una forma «tan desmedida» que se han «aprovechado los lugares más insólitos para el cultivo de soja», explica Berger. Pueblos, escuelas

26. El PCB es un agente altamente contaminante utilizado en los transformadores eléctricos.

rurales o barrios de las periferias de las ciudades han quedado rodeados de campos de soja. Entre ellos, el barrio de Ituzaingó Anexo.

Pioneras

Para Mauricio Berger, la lucha de las Madres de Ituzaingó estuvo marcada por el signo de la gran crisis de 2001. «A finales de los años noventa fue tal la desviación de una mínima representación democrática en favor de los *lobbies* empresarios», que todos los ciudadanos afectados por distintas cuestiones se organizaron por fuera del Estado, los sindicatos y los partidos tradicionales.

Cuando las Madres empezaron a manifestarse, no existían en Argentina estudios consistentes ni leyes que regularan las fumigaciones de agrotóxicos sobre centros urbanos. Eran pioneras en terreno desconocido. «Al principio, mucha gente en el barrio nos llamaba las locas», dice Sofía Gática. Actualmente cada vez son más los informes científicos y médicos, tanto en Argentina como en el resto del mundo, que confirman la relación entre agroquímicos, cánceres, enfermedades respiratorias, malformaciones y daños en el material genético.

Los años 2001, 2002 y 2003 fueron de mucha movilización para las Madres de Ituzaingó. «Salíamos y cortábamos la ruta. Después íbamos al centro de la ciudad y cortábamos la Colón y General Paz, donde va todo el tráfico. Éramos pocas, pero hacíamos mucho ruido», dice Corina. En otras ocasiones, las Madres se metían en los campos de soja para enfrentarse a las «máquinas mosquito», los tractores fumigadores. «Lo que nosotras hicimos fue difundirlo. Llamaba la atención que mujeres comunes salieran a la calle a hacer tanto barullo», condensa Corina.

La lucha de las Madres empezó a dar sus primeros frutos a principios de 2002. Después de que fueran detectados agrotóxicos en los pozos utilizados para el consumo, las Madres lograron que el barrio fuera conectado a la red de agua corriente. Y en mayo de 2002, las Madres conseguían que las autoridades declararan el barrio en emergencia ante la «altísima tasa de casos de leucemia» y prohibieran la fumigación aérea a una distancia de 2.500 metros del barrio mientras durara la emergencia. Otra ley prohibía la fumigación aérea en todo el ejido urbano de la ciudad de Córdoba. Se empezaban a dar los primeros pasos en una legislación que controlara los agroquímicos.

Pero la historia de las Madres no termina aquí. Entre querellas, cortes y petitorios, consiguieron que la provincia de Córdoba aprobara a mediados de 2004 la Ley de Agroquímicos, que establece la frontera de las fumigaciones en quinientos metros para las terrestres y 1.500 para las aéreas. Aunque la ley fue muy criticada por las propias Madres al considerarla insuficiente, tiempo después sería de gran ayuda para su lucha.

Mientras tanto, las Madres comenzaban un interminable recorrido por las instituciones del Gobierno nacional. Sin respuesta. «[La Secretaría de] Derechos Humanos se ha borrado con el tema de la salud. Pareciera que los derechos humanos son solo los de la dictadura militar», critica María Godoy, otra de las madres sentada en la mesa. El recorrido las llevó a otros países, como Brasil o Paraguay, donde descubrieron que el monocultivo de soja y los agroquímicos provocan los mismos efectos devastadores.

Los pueblos fumigados

La lucha de las Madres sentó un precedente. «En otros lugares de Argentina estaba pasando exactamente lo mismo, pero no se estaba dando a conocer», recuerda Godoy. En 2006, las Madres empezaron a recorrer los pueblos de la provincia de Córdoba. «En Colonia Caroya pasaba lo mismo, en Jesús María igual, en Las Peñas, en Toledo, en San Francisco, en Villa Rosario», enumera. Muchos de estos pueblos de la provincia, como Oncativo o Anisacate, empezaron a imitar la estrategia de las Madres.

Frente a la falta de controles y la complicidad de los alcaldes con los productores sojeros, los mismos vecinos organizaron encuestas caseras para identificar en la cuadrícula del pueblo las enfermedades que les estaban afectando. También esta fue la estrategia utilizada por movimientos campesinos que participan en la campaña Paren de Fumigar, como la Unión Campesina del Noroeste o el Mocase, una organización que agrupa a más de ocho mil familias en la provincia de Santiago del Estero y que tiene en el agronegocio de la soja su peor enemigo.

En la provincia de Córdoba se multiplicaron las iniciativas para prohibir las fumigaciones en los alrededores de los pueblos o para elaborar ordenanzas que fueran más allá de la ley provincial, que

sigue considerando el glifosato como «poco peligroso». En 2012, hasta doce pueblos de la provincia habían conseguido aprobar leyes más restrictivas para los agroquímicos que la ley impulsada en 2004 por las Madres de Ituzaingó.

La lucha de los pueblos fumigados se propagó a otras provincias sojeras como Santa Fe, Buenos Aires o Entre Ríos, y a provincias con gran presencia de cultivos transgénicos de arroz, como el Chaco. Un caso paradigmático es el de la localidad de San Jorge, en la provincia de Santa Fe. Frente a una epidemia de casos de cáncer, malformaciones y trastornos reproductivos, los vecinos consiguieron establecer la frontera de las fumigaciones en ochocientos metros.

El primer juicio por fumigaciones ilegales

La Ley de Agroquímicos de la provincia de Córdoba volvió a dar que hablar en febrero de 2008. Tras ser avistado un avión que fumigaba sobre las viviendas de Ituzaingó Anexo, dos sojeros y un fumigador fueron detenidos y procesados gracias a la ley aprobada en 2004. En agosto de 2012 comparecieron en el primer juicio en Argentina por fumigaciones ilegales. Fueron hallados culpables, aunque consiguieron eludir la cárcel.

«Lo importante es que esto sea el principio —dice Corina Barbosa—, para que después le siga la legislación de toda la Argentina». Para María Godoy las responsabilidades no se limitan a los sojeros: «Los que tendrían que ir presos son los funcionarios que permitieron que esto pase. El Gobierno sabe lo que está pasando, pero no le interesa, solo se preocupa por sus negocios». En 2010 las exportaciones argentinas de soja y derivados sumaron casi 26.000 millones de dólares. De esa cantidad, algo más de 9.000 millones corresponde al Estado. Unos ingresos que se han convertido en uno de los principales soportes de la política social del kirchnerismo, todo gracias al aumento generalizado del precio de las materias primas experimentado desde 2003.

«Ahora todos dicen lo bueno que era Kirchner y resulta que nos dejó Argentina llena de soja y un montón de gente peleando y defendiéndose como puede», concluye Sofía Gática. Las Madres de Ituzaingó, al igual que las Madres de Plaza de Mayo, hablan de genocidio, de un «genocidio silencioso». Ellas no han conseguido frenarlo, pero han dado el primer paso: le han puesto nombre.

Ruta 40, rumbo norte

DE ANDALGALÁ A LA QUIACA (FRONTERA CON BOLIVIA)

Andalgalá es la segunda ciudad más poblada de la provincia de Catamarca. Cualquiera lo diría. Para llegar desde la capital más cercana, San Miguel de Tucumán, son necesarias seis horas a través de caminos de tierra. La selva tucumana se va haciendo más densa a medida que el autobús trepa en la sierra del Aconquija. La espesura, que sirvió de refugio a la guerrilla del ERP a principios de los setenta, desaparece del otro lado de las montañas para dejar paso a un paisaje árido de colinas pobladas de cactus.

El autobús desciende por las estribaciones de la sierra y se interna en la provincia de Catamarca. El valle, un auténtico oasis irrigado por el río Andalgalá, se despliega en medio del desierto. En las tierras cercanas a la ciudad crecen frutales, vides, nogales, algodón, en una explosión de naturaleza entre cerros de tierra seca.

—Yo mañana paro a la minera —dijo Aldo Flores cuando terminaron de ver el documental *Las fuentes del jardín de tus arterias*, que juntaba las experiencias de Esquel y de tantos otros pueblos que consiguieron detener estos megaproyectos.

A la mañana siguiente, el 15 de diciembre de 2010 a las cinco de la madrugada, el abogado Sergio Martínez, empleado de la fiscalía, recogió a Aldo Flores en su casa. A las 6:30 horas estaban plantados en Chaquiago, a las afueras de Andalgalá, cortando el camino que lleva directamente al cerro donde se instalaría el proyecto Agua Rica. Poco tiempo antes, se había filtrado un mapa que hablaba del fin del pueblo. No era solo que la empresa canadiense Yamana Gold proyectase una mina a cielo abierto que consumiría 300 millones de litros de agua por día en una región que ya sufre cortes de agua en verano. Resulta que hasta la mismísima plaza principal de Andalgalá estaba concesionada.

El corte de ruta y las asambleas, a la sombra de un algarrobo, fueron creciendo. «Con el tiempo la gente se iba sumando. Al principio eran dos, luego veinte y después ya éramos cincuenta. Durante todo el verano familias enteras venían y se quedaban por la noche», dice Ruth Vega, maestra de escuela y participante de la asamblea desde sus inicios. «Llegamos al 25 de diciembre y pasamos

la Navidad allá, encontrándole ese gusto, mezcla de aventura, de sentir que le estábamos dando un contenido a nuestras vidas. La gente empezó a encontrarse, a mirarse, a compartir, a saber tomar un mate con el otro», cuenta Aldo Flores. Una vecina llevó un día una estatua de la Virgen del Valle, patrona de Catamarca. Otro joven, una foto del Che Guevara.

Dos meses después del inicio del corte, el 15 de febrero de 2010, una retroexcavadora atravesó Andalgalá junto a cincuenta efectivos de la Policía local, de la Infantería y del grupo especial de operaciones. Todos los *celulares* empezaron a sonar. Más de 1.500 personas acudieron a defender el corte del Algarrobo. Los vecinos se tiraban delante de las máquinas, la Policía golpeaba a los manifestantes, caían los gases lacrimógenos. Cuando Aldo Flores recuerda esos momentos se ríe: «En medio de la locura, de los heridos, me llamaban por teléfono, y me preguntaban: “Aldo, ¿cómo estás?”. Y yo decía: “Inmensamente feliz”. Yo tenía una alegría en medio de esa balacera, de ver que esa gente se había levantado y estaban defendiendo la vida de la comunidad».

La retroexcavadora consiguió atravesar el corte, pero solo fue el inicio de una larga noche. Los manifestantes se dispersaron en grupos y destrozaron con piedras la sede de la minera, la fiscalía, los negocios de empresarios promineros y la municipalidad. La Policía estaba desbordada. Cuando llegaban, las columnas de manifestantes ya estaban apedreando otro edificio. Hasta las cinco de la mañana duraron los disturbios.

Al día siguiente, el juez de minas Raúl Cerda ordenó la suspensión del proyecto «hasta que se restablezca la paz social». Aunque nadie en Andalgalá sabe muy bien qué significa exactamente esto, cuatro años después de aquel 15 de febrero, el proyecto todavía no se había iniciado. El corte de ruta se mantiene. De la misma forma que las asambleas bajo el algarrobo. Cuatro años después, Yamana Gold sigue patrocinando festivales de folclore en la plaza central. Pero los cristales de su sede siguen rotos.

Rebelión en el supermercado minero

«Ustedes, lamentablemente, no van a poder pasar», fue lo que dijo Eliana Carpio en Tinogasta, también en la provincia de Catamarca,

tras cruzar su coche ante seis camiones de la minera. La australiana Jackson Minerals pretendía instalar en los alrededores una mina a cielo abierto de uranio. Desde 2007, la lucha de la Asamblea de Autoconvocados por la Vida ha conseguido expulsar a la empresa australiana y contener hasta el momento el proyecto de su sucesora, la canadiense Cat Gold.

«El niño nació a las tres, pueden visitarlo después de las cinco», fue el mensaje de texto en clave que los vecinos de Chilecito y Famatina, en la provincia de La Rioja, se mandaron para iniciar en 2007 el bloqueo al campamento de la Barrick Gold, que pretendía explotar oro en el cerro Famatina. Quince días sin alimentos ni suministros fue suficiente para que la minera renunciara al proyecto, cuenta Jenny Lujan, de Chilecito. Sin embargo, continuaron con el corte de ruta, a 2.800 metros de altura, durante dos años y medio, en una movilización protagonizada sobre todo por mujeres.

Los conflictos se suceden a lo largo de la cordillera. Las asambleas, coordinadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas, han conseguido frenar en muchos casos a las transnacionales. Jenny Luján señala la responsabilidad del Gobierno: «Si las mineras están acá es porque nuestros gobernantes lo permiten. Y no solo eso, sino que van a buscarlos. Gobiernos progresistas dicen ser, pero entregan al capital nuestros territorios. Nosotros hemos logrado que Barrick Gold abandonara, pero el negocio continúa».

Carretera al norte por la ruta 40, que recorre cinco mil kilómetros desde la Patagonia, las formaciones rocosas adquieren formas oníricas. El soroche comienza a sentirse en la Quebrada de Humahuaca, un estrecho cañón entre cerros de todas las formas y colores. A los lados de la carretera y del río Grande, apenas un hilo de agua en diciembre, campesinos cultivan maíz y papas en sus diminutas parcelas. En La Quiaca, el último pueblo antes de la frontera, mujeres indígenas trasiegan con fardos que duplican su tamaño. En la aduana, miles de estudiantes argentinos hacen cola para iniciar lo que se ha convertido en el viaje iniciático por excelencia: Quebrada de Humahuaca, Salar de Uyuni, Potosí, lago Titicaca, Machu Picchu y de vuelta a casa. Seis horas en el puesto fronterizo y ya es Bolivia.



- ALTIPLANO**
 y altas cumbres:
 3.000 m - 6.000 m

- ESTRIBACIONES,**
 valles, Yungas,
 ceja de selva:
 1.000 m - 3.000 m

- TIERRAS BAJAS:**
 Chaco y Amazonía:
 0 m - 1.000 m



- BENI Departamentos
- Ciudades mencionadas
- Recorrido
- 0 50 100 150
km

BOLIVIA

«Si con el nombre de indios nos humillaron y nos explotaron, con el nombre de indios nos liberaremos» (Tupaj Katari, 1781)

El gasolinazo

DÍA 71 / 6 DE ENERO DE 2011 / DE VILLAZÓN A COCHABAMBA

En Villazón, el primer pueblo después de la frontera, el mercado asciende en cuesta hacia la estación de autobuses. Como en una continuación de los puestos, abigarrados a ambos lados de la calle principal, los vendedores de pasajes gritan los destinos: «¡Potosí, Potosí, Potosí!». Los turistas argentinos, armados con mate, guitarra y pesos para cambiar, fotografían el «nuevo mundo» en el que acaban de entrar.

La vestimenta, los sonidos del aimara y el quechua o las 1.555 variedades de papas son solo una muestra de una cultura viva que ha logrado sobrevivir, con las particularidades del mestizaje, tres siglos de colonia española y dos siglos de República dominada por los descendientes de los españoles. Una vez en territorio boliviano no se tarda en comprobar que para una buena parte de la población el castellano es su segundo idioma. En el censo de 2012, el 41% de los bolivianos se había reconocido como indígena¹.

En el mercado todavía no habían retirado los adornos navideños, restos de unas fiestas cualquier cosa menos tranquilas. Desde antes

1. Las cifras de población indígena varían sensiblemente en función de las preguntas realizadas en los censos. En 2001, el 62% de los bolivianos se había reconocido como indígena. Y en 1996, el 16%.

de cruzar la frontera ya se oían rumores. Colas en las gasolineras, neumáticos quemados, bloqueos... algo importante estaba pasando. Una semana después de los disturbios producidos por la subida del precio de los combustibles casi no quedaban rastros de una de las peores crisis del Gobierno de Evo Morales. Apenas algunas pintadas en los desfiladeros de piedra de Tupiza o los carteles panorámicos con el eslogan «Mandar obedeciendo».

«Nosotros como Gobierno no vamos a frenar este proceso, sino que vamos a facilitar la movilización de las masas [...] y ojalá que los movimientos sociales nos rebasen». Así había hablado en 2007 Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. En las Navidades de 2010, su deseo pareció cumplirse. Sin que nadie las convocara, decenas de miles de personas salieron a protestar en todos los rincones del país. Sin esperar las directivas de las organizaciones sociales, muchas de ellas afines al Gobierno, salieron para tumbar el decreto supremo 748, más conocido como el «gasolinazo».

Y si García Linera no estaba del todo contento era porque había sido él mismo quien había anunciado por televisión el 26 de diciembre de 2010 el aumento del precio de la gasolina y del diésel entre un 72% y un 83%.

—¿Cuál es su grado de lealtad? —preguntó por teléfono Evo Morales al alto mando militar. Eran los peores momentos del gasolinazo. El canciller David Choquehuanca había dicho en el Consejo de Ministros que si no retiraban el decreto «se terminaba el proceso de cambio».

—Señor presidente, si sale El Alto² nosotros no salimos a reprimir —dijo el militar, según el relato de Andrés Soliz Rada, ex ministro de Hidrocarburos del primer Gobierno de Evo Morales.

Otra de las bases del proceso parecía peligrar si el Gobierno seguía con sus planes, cuenta Soliz Rada.

—¿Están o no con el Gobierno y el presidente? —preguntó Evo Morales en una reunión a puerta cerrada con las federaciones cocaleras del Chapare.

2. La ciudad de El Alto está situada a cinco kilómetros de La Paz. Jugó un papel clave en la caída del presidente Sánchez de Lozada en 2003 y de Carlos Mesa en 2005.

—Presidente, estamos con usted al ciento por ciento, pero no garantizamos que las bases no nos puedan sobrepasar. Si hay un bloqueo general de caminos en el Chapare por el gasolinazo nosotros no lo podemos parar.

Con la melodía y base electrónica de «Tu vuò fà l'americano», en los puestos callejeros sonaba el estribillo «No hay pollo en el mercado». Aunque la masiva reacción popular había conseguido tumbar el decreto, la subida de la gasolina ya se había trasladado a muchos alimentos y al transporte. La crisis situaba la imagen del Gobierno en su peor momento desde que Morales asumió el poder en 2006.

Mientras el Gobierno calificaba de «neoliberales» las protestas contra el gasolinazo, en las ciudades se sucedían las marchas y los disturbios por el alza del costo de la vida, unas movilizaciones que se veían replicadas en los siguientes meses por las protestas indígenas contra las grandes infraestructuras, por los reclamos sindicales, por las demandas de los médicos, los maestros, los policías, los transportistas. Unas protestas atenuadas por una pregunta repetida en mil conversaciones: «Si no es Evo, ¿quién?». Imágenes de un proceso de cambio que no parece tener marcha atrás.

Mamá Coca

SEDE DEL COLECTIVO SOMOS SUR / COCHABAMBA

Albino Paniagua miraba la televisión en su casa del Chapare, el trópico selvático del departamento de Cochabamba. La hora, 22:07. El día, Nochevieja de 2010. Todavía no había tomado ni un vaso de vino. En la pantalla, Evo Morales hablaba. A Albino le costaba entender lo que estaba diciendo el presidente: «Hemos decidido, en esta conducta de mandar obedeciendo al pueblo, abrogar el decreto supremo 748».

—¡¡Rosa, ¿qué me has dado en el refresco?!! —le dijo Albino a su esposa.

Su perplejidad no venía de ese número, de sobra conocido desde que el Gobierno anunciara la subida del precio del combustible. La cuestión era otra. Albino Paniagua conoce a Evo Morales desde

hace más de veinte años y nunca lo había visto dar marcha atrás. «El Evo nunca ha bajado, nunca ha retrocedido, nunca... Yo he vivido con él desde 1988 y conozco al Evo. Él siempre decía: "Hay que armar, hay que trabajar. Si nos vamos a lanzar a alguna cosa es para ganar, no para perder, y nunca hemos perdido. Si estamos solos, tenemos que medir. Eso se llama calcular. ¿Vamos a ganar o vamos a perder?", decía el Evo. "¿Nos lanzamos o no nos lanzamos a un bloqueo?, ¿qué dicen?". Era increíble».

Desde niño, Albino ha vivido en el trópico, a unos cien kilómetros cuesta abajo desde Cochabamba, donde la gran meseta del Altiplano comienza a descender hacia la selva, camino de las tierras bajas. Este campesino quechua vivió la transformación que experimentó el Chapare en los años ochenta. Los colonos, quechuas y aimaras emigrados de los valles y el Altiplano, expulsados por la miseria del campo y la crisis de la minería del estaño, cultivaban la hoja de coca en terreno ganado a la selva. La falta de mercados para otros productos de la zona, como el banano o la piña, hizo que la coca se transformara en la única fuente de ingresos para decenas de miles de familias.

Un regalo de los dioses

La mitología inca narra que Inti, el dios sol, ordenó a su esposa y hermana, la diosa luna, que sembrara el arbusto sagrado para aliviar el cansancio y el hambre de los humanos. La hoja de coca, usada antes de la conquista en rituales y como medicamento, no solo no fue perseguida por los invasores españoles, sino que su uso se extendió para aumentar la resistencia de los indígenas en las minas. Los conquistadores llegaron a convertir la hoja de coca en una especie de salario para la extenuada mano de obra.

Albino Paniagua saca su chuspa, una bolsa de tela tejida a mano llena de hojas de coca, y comparte con los invitados. Empezó a participar en los sindicatos cocaleros en 1985. Su primera función: secretario de actas. Sus dos hijos menores se sientan junto a él y escuchan la historia de su vida.

«Nosotros nunca hemos defendido el narcotráfico, siempre hemos pedido que se respete tal como es nuestra hoja, porque en su estado natural no es dañina. Como países andinos es parte de nuestra

cultura, es ancestral, es un hábito», dice Albino mientras selecciona las hojas en mejor estado. Las toma por el tallo y las muerde.

En Cochabamba se sitúa el mercado más grande de Latinoamérica. Un paseo entre las grandes bolsas llenas de hojas de coca o una vuelta por cualquier calle de la ciudad de la «eterna primavera» bastan para comprender el lema más repetido por el movimiento: «La coca no es cocaína». El principal uso es la extendida costumbre del coqueo o *pijcheo*: se mastican las hojas hasta formar una bola, el *akulliku*, que se mantiene horas entre la mejilla y la mandíbula. Además de ser un estimulante como el café o el té, es un elemento nutritivo en la dieta de la población más pobre de Bolivia. También se utiliza para rituales, para medicinas, infusiones, harinas, mermeladas y hasta para refrescos, jabones o champús. La defensa del buen uso de la hoja de coca y un desarrollo alternativo para la zona han sido una constante entre las demandas del movimiento cocalero.

«Para que el mundo lo sepa, yo *pijcheo* desde mis veinte años, nunca me ha faltado la coca. No estoy loco, estoy bien cuerdo, al contrario, me da bastante lucidez», cuenta Albino y relata un momento de su experiencia como dirigente cocalero, cuando sí le faltó la coca.

—¡Albino...! —le llamaron de repente desde arriba del estrado. Le decían que subiera y que hablara para los centenares de campesinos reunidos. Albino se colocó en posición, pero no le salían las palabras, no sabía qué decir, se había olvidado de su chuspa. Habló a la multitud.

—Compañeros, denme unos segundos, que me falta la coca... —dijo.

Si hubiera estado preparado no podría haber salido mejor. La multitud lo aplaudía a rabiar y le ofrecían mil bolsas de coca. En cuanto masticó unas cuantas hojas, el discurso fluyó.

La coca como símbolo

En 1961, la ONU introdujo la hoja de coca en su lista de sustancias prohibidas. En la segunda mitad de los ochenta, pese al escándalo de los «narcovínculos», que señalaban la complicidad de las más altas autoridades bolivianas con los cárteles colombianos y estadounidenses, la política de Washington se centró en atacar al eslabón más débil: los campesinos cocaleros sin otras fuentes de ingresos.

En 1988, la aprobación de la Ley 1008 acentuaba el ingreso del Ejército en el Chapare y la intervención de tropas estadounidenses. En el marco de la «guerra contra las drogas» declarada por Ronald Reagan, Bolivia se había convertido en la segunda misión más numerosa de Estados Unidos en América Latina.

Pero la militarización en el trópico no hizo más que fortalecer a las organizaciones cocaleras, cuenta Albino Paniagua. En los primeros años de la colonización del trópico, el nacimiento de los sindicatos cocaleros había estado unido a la ausencia del Estado. Abrir caminos en la selva, levantar puentes, repartir la tierra, organizar la educación, la salud y, por supuesto, defender sus derechos, eran algunas de las tareas para las que los colonos recurrían al sindicato. Traían de sus lugares de origen, la mina o el *ayllu* —la comunidad indígena—, la tradición de organizarse en pequeñas células y de ahí en sindicatos, subcentrales, centrales y federaciones.

Si el vacío estatal generó el nacimiento de las federaciones cocaleras, la intervención del Estado para acabar con su única fuente de ingresos multiplicó su capacidad de paralizar el país. La ubicación estratégica del Chapare, al borde de la carretera que une el occidente del país con el oriente rico, hizo que los bloqueos se convirtieran en la herramienta más efectiva de reivindicación. El primer bloqueo tuvo lugar en mayo de 1987 en Villa Tunari, capital del Chapare. La actuación de la Policía provocó la muerte de ocho campesinos. Una dinámica que se repitió durante los siguientes quince años. El incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno llevaba a nuevos bloqueos; la intervención de la Policía y del Ejército, a más masacres; el escándalo, a mesas de negociación; y el incumplimiento de los acuerdos, a nuevos bloqueos.

«No teníamos garantías. So pretexto de narcotraficante, a cualquiera lo perseguían, lo podían matar, encarcelar, quitarle sus propiedades, violar a su familia», cuenta Albino. La Unidad Móvil de Patrullaje Rural tenía como misión el control del narcotráfico, pero en la práctica se sucedían los abusos contra los campesinos. Un día, Albino y unos amigos bebían en una chichería³ cuando entró una patrulla militar.

3. La chicha es una bebida tradicional en el mundo andino y en la Amazonía.

—Quiero verlos afuera, indios de mierda, porque este local nosotros lo vamos a copar.

—Pero ¿por qué? —se encaró Albino—. Si nosotros también estamos consumiendo y tenemos derecho.

—¡Carajo, estás opinando! —gritó el militar antes de soltarle una patada. Sus compañeros escaparon. Albino, en el suelo, dolorido por el golpe, intentó «no empeorar las cosas».

—Capitán, está bien, pero me llevo mi chichita al monte, que allí voy a continuar —dijo Albino, y al monte se fue con su balde de chicha, sus hojas de coca y sus cigarros. «Y ahí seguimos tomando», recuerda Albino.

Sánchez de Lozada como símbolo

Si la coca llegó a ser un símbolo de la soberanía y de la identidad indígena gracias al movimiento liderado por Evo Morales, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, llamado *Goni* por amigos y enemigos, se convirtió en la imagen de la intervención estadounidense en Bolivia. Educado en Washington, Boston y Chicago, cuando Goni regresó al país convertido en empresario minero, apenas hablaba castellano. Cuando fue elegido presidente en 1993, tenía un acento inglés tan fuerte que cualquiera podría haberlo confundido con el embajador de Estados Unidos. Con la llegada del nuevo Gobierno, la estrategia en el Chapare cambió: «La situación iba empeorando, vino la erradicación forzosa, sin compensación ni nada. No teníamos derecho a ni una planta», relata Albino.

Ante la política iniciada por el Gobierno de Goni, Albino Panigua se vio obligado a producir clandestinamente en claros que abría en la selva. «Si tenías suerte podías llegar a cosechar algo —cuenta Albino, y se emociona—: Yo me acuerdo de que me duraba un mes un litro de aceite, no podía comprar más. Siempre he sido rebelde y no podíamos soportar más eso. Así que fuimos organizando».

A partir de 1994, se empezaron a crear los comités de autodefensa. Cuando llegaban los «erradicadores» daban la voz de alerta y se enfrentaban a las patrullas en las mismas plantaciones. «En muchos lugares hubo fuertes resistencias. Preferíamos morir, y muchos han muerto. También han muerto algunos policías porque eso era vivir o morir», dice. Aún hoy, Albino llora cuando se acuerda de esos momentos.

A las marchas y los bloqueos se le sumó una tercera vía: la electoral. En 1995, las federaciones cocaleras y otras organizaciones sociales decidieron crear un «instrumento político» para representar en las instituciones las demandas del movimiento. Este «instrumento» se convertiría con los años en el Movimiento al Socialismo (MAS). En las elecciones municipales en el Chapare recogieron los primeros resultados: diez alcaldías y 49 concejalías. Albino Paniagua fue elegido presidente en el municipio de Chimoré. «Ellos siempre decían: “Estos indios, ¿podrán administrar? Dejaremos que se quemen, los dejaremos unos seis meses”. Bueno, nosotros demostramos que podíamos hacerlo. Esto ha ido avanzando como una bola de nieve en las siguientes elecciones a nivel nacional», cuenta Albino.

«Como en el circo romano»

En 1997, un helicóptero de la DEA ametrallaba a cinco campesinos en Eterazama, a veinte kilómetros de Villa Tunari. Ese mismo año, cuatro diputados del «instrumento» entraban en el Parlamento, entre ellos un desconocido Evo Morales. Su disonante denuncia de la militarización del Chapare y la intervención de Estados Unidos en el país captó la atención de las mayorías indígenas y mestizas empobrecidas. Sus llamadas a resistir las agresiones contra los cocaleros sirvieron de excusa para expulsarlo de la Cámara en enero de 2002. «El Evo era la única voz que gritaba en el Parlamento contra toda esa corrupción, todo ese aparato montado como en el circo romano, nosotros veíamos cómo ellos hacían sus cosas mientras estábamos sin poder hacer nada», dice Albino.

Pero con la expulsión de Evo, la derecha solo consiguió el efecto contrario. El mismo resultado obtuvo el embajador estadounidense, Manuel Rocha, cuando advirtió de las consecuencias de «escoger líderes ligados al narcotráfico y al terrorismo», en referencia a Evo Morales y a Felipe Quispe, del Movimiento Indio Pachakutik. Con semejante campaña a su favor, los dos candidatos que hablaban de refundar Bolivia obtuvieron el 20,9% y el 6% de los votos en las elecciones de junio de 2002. Juntos se convertían en la primera fuerza política. Pero el Congreso elegía como presidente una vez más a Sánchez de Lozada. Su partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), había superado al partido de Morales en apenas un 1,5%.

Las primeras victorias electorales del MAS no detuvieron las masacres. «¿Cuántas veces me he salvado de la bala? He visto caer a muchos», dice Albino. Uno de los dirigentes cocaleros que cayó a su lado se llamaba Casimiro Huanca. La barricada principal estaba en Chimoré, la localidad de Albino. Cajas de bananos, piñas, palmitos o maracuyás, que los campesinos no podían vender por los monopolios que controlan el negocio, cortaban la carretera. La intervención militar provocó una desbandada, entre disparos y granadas de gas lacrimógeno. «Es ese, mátenlo», escuchó Albino antes de ver caer a Casimiro Huanca a su lado. Nunca sabrá a quién iba dirigida en realidad esa bala.

La conquista del poder

Desde el año 2000 una ola de movilizaciones recorría Bolivia, como «dos fuerzas sísmicas» que golpeaban las bases de la sociedad, según explica el sociólogo aimara Pablo Mamani. Para este profesor, un epicentro, de carácter aimara, se situaba en el Altiplano y en la ciudad de El Alto. El otro, en el Chapare cocalero, con conexiones con Cochabamba y su Coordinadora del Agua.

«Son como dos volcanes, como dos sismos subterráneos, que van creando ondas expansivas cada vez más grandes. Cuando estas dos ondas chocan entre sí, el Estado entra en el momento de colapso histórico». La caída del presidente Sánchez de Lozada, tras la guerra del gas en octubre de 2003, fue uno de los puntos culminantes de este proceso de «ocupación milimétrica del espacio donde el Estado tenía legitimidad».

La identificación entre la defensa de la hoja de coca y la resistencia frente al intervencionismo estadounidense, entre la defensa de los recursos naturales y de los derechos de la población indígena, convirtió a Evo en la personificación de las ansias de cambio. En las elecciones del 18 de diciembre de 2005, Evo Morales obtuvo el 54% de los votos. Poco después, el nuevo Gobierno asumía en las ruinas de Tiwanaku, en una ceremonia cargada de simbología, entre pututus, un instrumento de viento de raíces quechuas, y wiphalas, la bandera de 49 cuadrados y los siete colores del arco iris. Ante 70.000 personas, el primer presidente indígena de Bolivia hablaba del «fin del neoliberalismo», de «una nueva era»

que enterraba cinco siglos de colonialismo. «Si no puedo avanzar, empujarme», dijo entonces Evo Morales.

Para Albino, el principal logro de este proceso de cambio ha sido la derrota de la élite que dominó la política y la economía boliviana en los dos últimos siglos: «Ellos no han querido entender y no les ha gustado, después de todo este tiempo que han sido patrones, que han tenido a su esclavo, que ahora las cosas cambien, que ese esclavo ahora les dé órdenes, que les diga cómo se debe hacer. Ellos no quieren aceptar esto».

«La primera victoria contra el neoliberalismo»

PLAZA PRINCIPAL / COCHABAMBA

—Hay que nacionalizar los hidrocarburos, pero de verdad —dice un hombre de mediana edad, con gorra y camiseta.

—Lo que hay que hacer es botar al Evo —dice otro. Botar en Bolivia y en buena parte de América Latina significa «echar».

—¿Y a quién vas a poner? Si se va Evo vuelve la derecha —responde un joven que se incorpora a la conversación.

No es una tertulia televisiva ni una charla entre amigos, sino parte de los debates espontáneos que tienen lugar todos los días en la plaza principal de Cochabamba. En otro corro, debajo de un pino araucario, un activista de la «universidad popular» que se instala todos los días en la plaza explica el poder de la élite que dominaba el país durante la primera mitad de siglo, la «rosca minera». Simón Patiño, uno de los *barones del estaño*, llegó a ser uno de los hombres más ricos del planeta. Un palacio con jardines versallescos es uno de los recuerdos que dejó en Cochabamba, aunque, según dicen, nunca lo visitó.

—Hay que buscar a otro que continúe el proceso de cambio —le interrumpe un hombre. Diez días después del gasolinazo, la decena de *alumnos* improvisados no está para lecciones de historia.

—Un líder como Evo no surge de repente... se necesitan por lo menos... diez años de trayectoria —dice el activista con paciencia de profesor.

En Cochabamba, el eslogan «proceso de cambio» cobra sentido en las tardes de la plaza. Diez años atrás, en abril de 2000, decenas de miles de personas ocupaban esa misma plaza de edificios amarillos y grandes arcadas. Después de semanas de barricadas conseguían expulsar del país al consorcio de multinacionales Aguas del Tunari, que se había hecho cargo del servicio. «Estamos a punto de lograr la primera victoria contra el modelo económico neoliberal», decía en esos días frente a la multitud Óscar Olivera, líder de la Coordinadora del Agua. «El momento culminante fue cuando el Ejército se acuarteló, la Policía no salió de sus cuarteles, los congresistas desaparecieron, el gobernador se ocultó... no había autoridad legal. La única autoridad legítima era el pueblo, que tomaba las decisiones en grandes asambleas», contaba Olivera en una entrevista.

El agua, la gota

La revolución de 1952, liderada por Víctor Paz Estenssoro, había acabado con el régimen de servidumbre de las haciendas en el Altiplano, incluso durante un tiempo con el Ejército, que había sido reemplazado por milicias campesinas y obreras. El primer Gobierno de este político del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) también había creado muchas de las empresas públicas bolivianas, entre ellas la Comibol, producto de la nacionalización de las minas de Simón Patiño y de otros barones del estaño.

Vueltas de la historia, después de un interludio de dieciocho años de gobiernos militares, fue precisamente el último mandato de Paz Estenssoro (1985-1989) el encargado de iniciar el desmantelamiento de ese modelo de Estado. Las políticas neoliberales del Consenso de Washington encontraron en Bolivia uno de sus terrenos predilectos de experimentación. Como mano derecha del ya envejecido político del MNR hacía su aparición el empresario Gonzalo Sánchez de Lozada, dueño de muchas de las principales minas privadas del país. Cuando en 1993 este hombre de negocios se convirtió en presidente traía en su maletín una oferta que la población boliviana no podían rechazar.

La llamaron *capitalización*. Sobre el papel, no pintaba tan mal: el 50% de cada empresa pública para el capital privado y el otro 50% para todos los bolivianos, como fondo de pensiones. Pero en

la práctica, las multinacionales se hicieron con el control de los hidrocarburos y con el dominio de los sectores estratégicos —la telefonía, la electricidad y las líneas aéreas— sin desembolsar más que «promesas de inversión», explica Marco Gandarillas, director del Cedib, instituto de investigación sobre los recursos naturales con sede en Cochabamba.

En el caso de los hidrocarburos, con la capitalización se les entregó a las multinacionales «sin ningún costo» 148.000 millones de dólares en reservas probadas de petróleo y gas, detalla este investigador. Una ley posterior de Sánchez de Lozada reducía los impuestos a las petroleras del 50% al 18%. En cuanto a la otra mitad de las empresas públicas, la que correspondía a la población boliviana, pasó a ser administrada por dos gestoras de jubilaciones privadas, una de ellas el banco español BBVA.

Las organizaciones sociales se movilizaron para impedir el desmantelamiento del Estado, pero sin éxito. En 1986, una gran marcha de la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, intentó frenar las medidas neoliberales de Paz Estenssoro. Pero la derrota de los mineros, rodeados y aislados por el Ejército, selló la decadencia de la antes todopoderosa organización obrera. Cuando en los noventa el Gobierno entregó sin contrapartidas el petróleo y el gas a las transnacionales ninguna organización pudo hacer frente a la ola privatizadora.

Sin embargo, cuando a finales de 1999, a cambio de créditos condicionados del Banco Mundial, el Gobierno de Hugo Bánzer avanzó en la privatización de uno de los pocos recursos todavía a la venta, el agua, una novedosa alianza frustró sus planes. No eran ya las centrales obreras ni los partidos políticos, sino las «multitudes», según la definición del vicepresidente García Linera⁴: habitantes de los barrios más humildes y los campesinos más pobres de los valles circundantes. Como en Argentina, el desempleo, el trabajo informal, la precariedad, habían cambiado por completo el panorama: el trabajo ya no era el principal lugar para hacer política, sino la comunidad,

4. ESPASANDÍN LÓPEZ, J., e IGLESIAS TURRIÓN, P. (2008), «La globalización y los movimientos sociales bolivianos», en ESPASANDÍN LÓPEZ, J., e IGLESIAS TURRIÓN, P. (coords.), *Bolivia en movimiento*, Viejo Topo, Barcelona.

el barrio, utilizando antiguas y nuevas formas de organización para defender los bienes comunes. En este caso, el agua.

«Calles íntegras de pelea»

En Cochabamba apenas quedan rastros de la guerra del agua, alguna pintada o algún mural. Se hace difícil imaginar las cuatro barricadas en cada una de las esquinas de la plaza, ahora ocupadas por vendedores informales. Igual de lejanas parecen las imágenes de las gigantescas hogueras de facturas impagadas o la estampa de mujeres aimaras y quechuas que encaraban a los soldados. Quedan las imágenes de archivo de las descomunales asambleas, los «guerreros del agua» tirando piedras o devolviendo las granadas de gas, con chapas por escudos, las barricadas en cada calle o el multitudinario entierro de Víctor Hugo Daza, el joven de diecisiete años asesinado por una bala del Ejército.

Cuando a finales de 1999 el recibo del agua llegó a casa de Raúl Olivera pensó que se trataba de un error, la factura se había duplicado. Este activista de la organización ecologista Fobomade tomó rápidamente una determinación. «No voy a pagar. Toda la gente decía que no iba a pagar. Era unánime», cuenta. Pero el precio del agua, que en ocasiones llegó a triplicarse, solo fue uno de los motivos de la rebelión. La Ley 2029, aprobada ese año a medida de la empresa, prohibía a los habitantes de los barrios más pobres, la mayoría de ellos sin acceso a la red de agua, utilizar los pozos y los sistemas comunitarios que recogían la lluvia, la única fuente de abastecimiento de la que disponían. Si querían agua tendrían que pagarla y gastarse en muchos casos un cuarto de sus ingresos. Y los campesinos, organizados en federaciones de regantes, tendrían que renunciar a sus centenarios sistemas de riego comunales y convertirse en clientes de esta corporación controlada por la empresa Betchel, con sede en San Francisco, California. Entre los socios de Betchel se encontraba la multinacional española Abengoa.

Raúl Olivera relata aquellos momentos: «En todos lados había fogatas, hogueras... La gente solo quería llegar a la plaza, tomar la plaza, y decir que no estaba de acuerdo. Ese era su espacio y no lo dejaban. Como la movilización rebasó a la Policía, el Ejército salió también a las calles y disparaba a la multitud. Hubo heri-

dos, detenidos, muertos... Eran calles íntegras de pelea. Al final tuvieron que ceder. Cuando [los manifestantes] entraron en la plaza, el prefecto, las autoridades, recién se dieron cuenta... Y ahí se produjo el cabildo, miles de personas hablaban de no pagar el agua y expulsar a Aguas del Tunari...».

«Su seguridad no está garantizada», le comunicó la Policía a los directivos de Aguas del Tunari. De incógnito salieron de la ciudad y de incógnito abandonaron el país. El 9 de abril de 2000 se anunciaba la rescisión del contrato y dos días después el Parlamento anulaba la Ley 2029, que permitía la privatización de todas las fuentes de agua. El servicio volvía a ser público.

Los barrios de la zona sur

Mery Condori Chávez vio la guerra del agua por la ventana de la casa donde trabajaba como empleada doméstica. Si salía perdía el trabajo. Doña Mery, como la llaman, sigue limpiando y cocinando en la misma casa, pero ya no duerme allí, ahora vive en la zona sur de Cochabamba, donde se concentran los barrios más pobres de la ciudad. Diez años después de los sucesos de abril, la empresa municipal del agua todavía no ha llegado allí. Entre los vecinos construyeron un pozo y un tanque. «Cuando hay harto lluvia, dura el agua. Del tanque se distribuye a cada domicilio. Si no fuera por ese laguito no habría agua», dice con acento aimara. La gestión pública del agua no ha conseguido solucionar muchos de los problemas de abastecimiento. Sin embargo, de no ser por la guerra del agua, doña Mery y sus vecinos tendrían que haber entregado su pozo y su tanque comunitario al consorcio de multinacionales.

Más allá de los discursos, los cambios en los barrios del sur son lentos. «La mayoría son vendedores ambulantes. Venden refrescos, empanaditas, gelatinas. No tienen puestos. El capitalcito que tienen es para diario», cuenta doña Mery. En Bolivia, cerca del 70% de la población activa sigue trabajando en el sector informal.

Sin embargo, doña Mery sí aprecia cambios en la situación de las mujeres: «Antes una mujer no podía expresarse, siempre era discriminada. Y tampoco podía ir al colegio. Ahora hasta las señoras van a la escuela. Con sus hijitos van a clase, agarrados». Ella misma estudió tres años en una escuela de adultos.

También mejoró su situación laboral. Un día, un grupo de mujeres de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar llamó a su puerta. Doña Mery comenzó a conocer sus derechos, muchos de ellos conquistados por este sindicato de trabajadoras domésticas en 2003, tras diez años de lucha. «Yo antes los domingos cocinaba: sopa, segundo y postre. Podía salir a las tres de la tarde y llegar a las seis. Ahora tenemos la libertad de descansar en los días feriados».

—No has venido ayer —le suelta la señora todos los lunes por la mañana.

—Era feriado, me toca descansar —contesta siempre doña Mery. La señora la mira, pero ya no le dice nada.

Doña Mery quiere que Evo siga siendo presidente, pero no de forma incondicional. Exige que «se mantenga todo en el mismo precio, que no suba». Y se pregunta: «¿De qué sirve si no que han nacionalizado? Si el Evo vuelve a subir [la gasolina], la gente va a reaccionar».

«El temblor viene de abajo»

PLAZA DE SAN FRANCISCO / LA PAZ

La carretera entre Cochabamba y La Paz es una de las vías del país que más veces ha sido bloqueada en los últimos veinte años. Y probablemente la que más marchas indígenas y campesinas ha visto pasar. Son 440 kilómetros de ruta que atraviesan los fértiles valles de Cochabamba, las mil estribaciones desérticas de la cordillera y el paisaje seco y frío del Altiplano, siempre cuesta arriba.

La carretera hace su entrada en el área metropolitana por El Alto. Emplazada a más de 4.000 metros, es la segunda ciudad más alta del mundo, después de Potosí. Y la segunda más poblada de Bolivia. Siempre de fondo, los 6.462 metros blancos del Illimani. Las casas precarias de ladrillo se alternan con edificios de cuatro o cinco pisos de un barroco futurista típicamente alteño: ventanas de cristales tintados y carpinterías metálicas de colores vivos, rojos, naranjas, azules, verdes, modeladas con formas geométricas andinas y reminiscencias clásicas. Algunos edificios hasta incorporan chalets

de lujo en las azoteas. Arcadas, balaustres, columnas, balcones y frisos se juxtaponen con referencias a la mitología inca en la expresión arquitectónica de la «burguesía chola», tal como se conoce a esta nueva clase social en ascenso, formada por aimaras y quechuas enriquecidos por el comercio, los transportes o la industria textil.

Pasado el peaje de El Alto la impactante vista de la hollada de La Paz, cuatrocientos metros más abajo, se despliega entre barrios humildes que trepan por los cerros empinados. Al contrario que en Cochabamba y tantas ciudades del mundo, los barrios ricos están situados en el sur, la parte más baja, donde las temperaturas resultan más agradables en invierno.

La plaza de San Francisco, en el centro histórico, es uno de los puntos más animados de La Paz. Vendedores de *souvenirs*, comida rápida y sombreros de lana conviven con los paceños que buscan su minibús entre el caos de voceadores. Solo un poblador local es capaz de entender todos y cada uno de los destinos que estas relaciones públicas del transporte urbano condensan en un grito, como si se tratara de una palabra interminable: «¡Cejaelectropaztaquiñasenkata!». Con un poco de entrenamiento es posible discernir que esa secuencia significa que ese minibús no viene mal para ir a El Alto.

A escasos metros de la iglesia de San Francisco, una de las más viejas de La Paz, el torrente del río Choqueyapu fluye entubado. En tiempo de la colonia, el río marcaba el límite entre la ciudad de los españoles y la ciudad de los indios. El único punto de unión era el puente de piedra de San Francisco. Entre la multitud que espera en la escalinata de la iglesia aparece un hombre de unos 65 años, con bigote, sombrero negro y chaqueta de cuero. Es Felipe Quispe, el histórico líder aimara. Lo acompañan dos jóvenes de Achacachi, el pueblo donde vive, a orillas del lago Titicaca. Está de visita en La Paz, una ciudad que sigue calificando de «colonial», a pesar de que la mayoría de la población se considera indígena o mestiza.

—No tengo problemas con la entrevista. Eso sí, nos tienen que invitar a comer —dice Felipe Quispe señalando a sus dos amigos adolescentes. Un restaurante de menú es el sitio elegido. De primero, sopa de maní.

Desde el Altiplano boliviano, Felipe Quispe se convirtió en uno de los referentes del movimiento indígena. Y también en uno de

los posibles catalizadores de una sociedad convulsionada. El otro candidato era Evo Morales. Felipe Quispe explica el desenlace de esta disputa entre cucharada y cucharada de sopa. Sitúa junto a su plato dos vasos de agua. «Había dos vasos: agua tibia y agua caliente. El agua tibia era Evo. Yo, la caliente».

El sociólogo Pablo Mamani comparte su visión: «Podría haber sido Felipe Quispe, con un discurso más radical. Evo era la salida intermedia, más afín a formas de admitir lo indígena, lo popular, en espacios públicos de poder». La «salida intermedia» ofrecía reformas, cambios, pero aceptables «para sectores de la clase media, ilustrada, liberal, que tuvieron miedo de que la indiada se les vaya por encima, que es lo que Quispe estaba más o menos planteando».

Aunque la figura de Felipe Quispe fue perdiendo notoriedad pública tras la llegada al poder de Evo Morales en 2006, se le sigue conociendo como el Mallku, «Cóndor» en aimara, la autoridad más respetada dentro de una comunidad.

Los orígenes

«Tendríamos que remontarnos más allá, cuando se levanta Tupaj Katari, cuando los indios cercan La Paz y matan a los españoles —dice Felipe Quispe—. Es el único hombre que hizo temblar a la Corona española de esa época. Y murió descuartizado por cuatro caballos. Pero dejó una herencia inmortal. Nosotros nos consideramos como seguidores y continuadores de Tupaj Katari, por eso enarbolamos su bandera⁵, como también su pensamiento medular, el indianismo, que también nos han transmitido nuestros mayores».

Tupaj Katari, al frente de 50.000 indígenas, cercó La Paz durante seis meses en 1781. La rebelión contra el trabajo forzado en las minas y la usurpación de las autoridades indígenas se había

5. La tradición cuenta que la wiphala era utilizada por las tropas de Tupaj Katari, aunque los historiadores descartan esta idea. La bandera fue rescatada por el movimiento katarista y el sindicato campesino CSUTCB. Actualmente es la segunda bandera de Bolivia y el símbolo del MAS.

extendido desde Potosí hasta Perú. En Sorata, en la provincia de La Paz, 16.000 indígenas desviaron un río y construyeron una represa sobre el pueblo, que resistía un asedio de dos meses. Cuando los aimaras quebraron la represa, la riada arrasó las defensas y conquistaron la plaza.

Esta misma táctica fue utilizada por Tupaj Katari en el cerco de La Paz. Según el historiador Alipio Valencia Vega, miles de aimaras trabajaron en la cordillera de Chacaltaya desde los primeros días de octubre de 1781 en la construcción de una gran represa que pudiera romper las defensas de la ciudad española. El 12 de octubre —curiosamente— un gran ruido aterrorizó la ciudad de La Paz. Era la avalancha de agua liberada, que arrasó el puente de San Francisco y tumbó algunos fuertes, pero resultó insuficiente para iniciar el asalto final. La teoría más extendida es que los muros de la represa cedieron por la presión del agua antes de tiempo. Después de una hora de inundación, la última arma, además de los palos y hondas de los 50.000 indígenas de Tupaj Katari, se había secado. El cerco de La Paz no tardó en caer. Tupaj Katari fue descuartizado, no sin antes soltar la profecía más grande de la historia americana: «Volveré y seré millones». Junto con Tupaj Amaru II en Perú y los hermanos Katari en Potosí, se había adelantado treinta años a los primeros gritos de independencia.

Felipe Quispe nació en una familia campesina aimara en la provincia de Omasuyos, cerca de La Paz. No aprendió a hablar español correctamente hasta los veinte años. El inicio de su militancia se remonta a los tiempos del Pacto Militar Campesino. Con la bandera de la revolución de 1952 y una política asistencial, los militares se hicieron poco a poco con el poder y la adhesión del movimiento campesino. Las milicias agrarias creadas con la revolución del MNR terminaron sirviendo como grupos de choque contra las reivindicaciones sindicales de los mineros, reprimidos a bala y sangre. Detrás del discurso nacionalista del general René Barrientos, que había llegado al poder con un golpe de Estado en 1964, se hallaba una política de sumisión a Estados Unidos en el contexto de la guerra fría. Bajo su mandato, en 1967, se realizó la operación que terminó con la ejecución del Che Guevara en La Higuera, en el departamento de Santa Cruz.

«En los años sesenta yo estaba prestando el servicio militar. En esa época había una línea política anticomunista muy fuerte. A pesar de que nosotros habíamos nacido en una comunidad no sabíamos qué era el comunismo —cuenta el Mallku—. Había un oficial, de nombre Aurelio Torres, que repartía unos folletos que decían que iban a matar a nuestros abuelos y que nos iban a quitar nuestras tierras, que todo iba a ser en común, que no iba a haber iniciativa privada... Bueno, yo también estoy en contra de la iniciativa privada, porque vengo de una comunidad, pero eso de que iban a matar a mi abuelo, que me iban a quitar mi tierra, mis animales... eso no me convencía. Una vez que salí del cuartel, en 1964, busqué el *Manifiesto comunista*. Y después busqué otros libros de Carlos Marx y otros autores, pero nunca encontraba eso de que me iban a quitar mi tierra, nunca encontraba que iban a matar a mis mayores».

En las comunidades

La oposición de Felipe Quispe a la dictadura de Hugo Bánzer —un militar entrenado en la Escuela de las Américas, que había llegado al poder con un golpe de Estado en 1971— lo llevó a refugiarse en Santa Cruz, donde trabajó como jornalero hasta 1977. La alianza entre el Ejército y las organizaciones campesinas a cambio de prebendas se había debilitado tras la llegada de Bánzer, que se ganó la enemistad de grandes sectores del campesinado con subidas de impuestos y sucesivas masacres. En 1979, la creación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), con una dirección combativa, y el bloqueo de caminos que paralizó el país durante una semana sepultó para siempre el Pacto Militar Campesino, una red clientelar de cooptación que había pervivido por más de una década y media.

En esos años, Felipe Quispe empezaba a trabajar en la organización desde las comunidades. «Nosotros salimos de la escuela marxista. Estaban hablando de Marx, de Lenin, de la lucha armada, de la lucha de clases, y nuestra gente no entendía nada, entendía cero, ni jota, las orejas totalmente metidas. Pero pronto nosotros hemos cambiado de discurso, hemos empezado a hablar de nuestros incas, de nuestros antepasados, de Tupaj Amaru, de Tupaj Katari,

del *ayllu* comunitario, y la gente comenzaba a levantar la cabeza y se ponían como las llamas, con las orejas para arriba», recuerda Quispe mientras imita la figura de este camélido típico de la cordillera.

A finales de la década, Felipe Quispe participó en diversas organizaciones kataristas hasta que en 1980, el golpe de Estado de Luis García Meza lo obligó a tomar el camino del exilio. De Perú pasó a México, y de ahí a Guatemala y a El Salvador. Una experiencia que le serviría años después, cuando tomó las armas en un intento de terminar con la histórica explotación de los indios por parte de los *q'aras*⁶, tal como los aimaras y los quechuas llaman a la población no indígena.

El intento guerrillero

Tras una década de trabajo en las comunidades del Altiplano, en 1990 Felipe Quispe se incorporó al Ejército Guerrillero Tupaj Katari. Lo acompañaba el actual vicepresidente Álvaro García Linera. La estrategia de este grupo pasaba por iniciar un levantamiento popular, al estilo de la revuelta de Tupaj Katari de 1781, armando a las comunidades.

El Mallku no desaprovecha ocasión para descalificar al actual vicepresidente. «Ellos no eran nada. Habían leído los setenta tomos de Lenin, las obras escogidas de Mao, los tres tomos de *El capital*, pero no sabían cómo organizar una emboscada, no sabían cómo entrar a un banco. Sin embargo, nosotros ya estábamos de vuelta, porque habíamos viajado a Centroamérica, estuvimos en el FMLN de El Salvador, y en el EGP⁷ de Guatemala... Todo eso nos sirvió para entrenar luego a la gente aquí, en la cordillera de los Andes». Quispe suelta una parrafada en aimara.

—¿Ni jota, no? —pregunta levantando la mirada del plato de sopa para ver si habíamos entendido algo—. ¿Cómo crees que alguien que no habla nuestro idioma va a ser el ideólogo de los indios?

6. La palabra *q'ara* literalmente quiere decir «pelado», «desnudo», «carente de bagaje cultural, que domina en forma ilegítima apropiándose de los bienes y los recursos» de los *jaqis*, «personas», según la socióloga Silvia Rivera.

7. Ejército Guerrillero de los Pobres, una de las cuatro organizaciones que terminaron formando la guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Quispe sigue hablando de Linera: «Para ser nuestro ideólogo primero tiene que saber nuestro idioma, porque el idioma es ideología, el idioma es pensamiento. Nosotros pensamos diferente, venimos de otra cultura, no hemos nacido en el hospital, hemos nacido en una choza, ahí nos han cortado nuestro cordón umbilical».

El intento guerrillero no duró demasiado. En 1992, cuando todavía se encontraba «en proceso de organización y de *propagandización*», el ejército katarista fue desbaratado por la Policía. El 19 de agosto, Felipe Quispe fue detenido y encerrado en la cárcel de máxima seguridad de San Pedro, la más grande de Bolivia, en La Paz.

—¿Por qué hacen esto? —le preguntó entonces la periodista Amalia Pando.

—Para que mi hija no sea tu empleada doméstica —le respondió.

El proyecto de «enarbolar la bandera de Tupaj Katari encima del Illimani» tenía que esperar. En cuanto a la wiphala, «hasta esa fecha no la conocía nadie», apunta Quispe. «La wiphala es nuestra, nosotros la hemos impuesto, con las armas, por las buenas y por las malas», dice. Ahora es el símbolo oficial del Gobierno al mismo nivel que la bandera boliviana. Hasta los policías la llevan en sus uniformes.

El Altiplano en llamas

En 1998, las movilizaciones consiguieron sacar a Felipe Quispe de la cárcel. En ese mismo año fue elegido secretario ejecutivo del gran sindicato campesino CSUTCB. Entre 1998 y 2001 se transformó en uno de los opositores más destacados a la política neoliberal del exdictador Hugo Bánzer, en esos años convertido una vez más en presidente, esta vez por las urnas. Quispe empezaba a ser conocido como el Mallku.

«Nosotros solíamos llegar con las manos vacías, hambrientos como un perro vagabundo, así hemos andado, comunidad por comunidad, hablando aimara, y en las comunidades nos daban de comer. Ese trabajo viene de los años setenta. No ha caído del cielo, no es milagro, tampoco los maestros dioses nos lo han dado —recuerda—. Para organizarnos nos copiamos de nuestros antepasados, del

inca, de la mita⁸. Tres comunidades entraban a bloquear el camino a las siete de la mañana y se quedaban todo el día y toda la noche. Y al día siguiente, a las siete salían y otra comunidad llegaba y relevaba. Si están todos los días se cansan. En cambio, con tropa fresca no».

En abril de 2000, al mismo tiempo que los vecinos de Cochabamba expulsaban a Aguas del Tunari, se generalizaban los bloqueos en las provincias del Altiplano paceño. Además de antiguas reivindicaciones educativas y económicas relacionadas con el desarrollo de las comunidades, la población indígena y campesina se movilizó contra la ley que permitía la privatización del agua, un recurso que hasta entonces era gratuito para los campesinos.

«Tuvimos que detener ese proyecto de ley que ya estaba entrando al Parlamento, aplazarlo, hasta hoy, porque nos querían cobrar el agua —cuenta el Mallku—. Dice nuestra gente: “Estos españoles, estos *q’aras*, han venido acá a hacernos trabajar para ellos, a hacernos pagar impuestos; nosotros no vamos a pagar, que paguen ellos, que son los inquilinos”». Además de las demandas concretas, el alzamiento incorporaba la reivindicación de «la nación aimara», la creación de un nuevo Estado indígena.

Durante los once días que duró el levantamiento de abril de 2000, las comunidades indígenas ejecutaron por primera vez el Plan Pulga, tal como lo llamó Quispe, un bloqueo generalizado de caminos en el Altiplano, gracias al «sembrado de piedras» a lo largo y ancho de las carreteras⁹.

El epicentro de todas las batallas

A este «primer ensayo» de abril de 2000, le siguió un nuevo levantamiento. «Para nosotros, los ministros de Estado, así se llamen de izquierda o derecha, son lo mismo. Ellos han estudiado en las universidades de privilegio de Estados Unidos y Europa, se preparan

8. Algunas investigaciones señalan que el imperio inca concebía la mita como un trabajo obligatorio, pero rotativo y comunitario. Los españoles la convirtieron en una fuente de trabajo esclavo para las minas.

9. REA CAMPOS, C.R. (2003), *Conflictos y alianzas alrededor de lo indio en la construcción democrática de Bolivia como nación: movimientos y luchas indias preelectorales 2002*, Clacso, Buenos Aires.

para manejanos, para matarnos —dice el Mallku—. Ellos decían: “Vamos a cumplir, vamos a traer tractores, van a tener una universidad, ustedes van a tener seguro social indígena originario, ustedes van a gozar de banco propio, van a tener caminos”. Nosotros les dimos noventa días. El Gobierno no cumplió y entonces estuvimos obligados a salir nuevamente a bloquear los caminos y las carreteras, y cercar la ciudad de La Paz, no dejar que entrara ningún alimento».

Este nuevo levantamiento, iniciado en junio de 2000 y radicalizado en septiembre, se extendió a todo el país. Al «sembrado de piedras» en las rutas que llegan a La Paz se unieron los cocaleros de Evo Morales, que cortaron las carreteras que unen Cochabamba con la capital y con Oruro. Evocando el cerco de Tupaj Katari de 1781, la capital quedó completamente incomunicada. Solo los aviones Hércules de las Fuerzas Armadas podían entrar en La Paz con provisiones.

El «epicentro de todas las batallas» fue la localidad de Achacachi, a orillas del lago Titicaca. «En Achacachi hemos destruido todos los poderes estatales, ya no había juez, ya no había Policía, no había Tránsito, no había [sub]prefecto, ya no había nada. Todo indio. Y lo administraban los dirigentes del lugar. El levantamiento de Achacachi es la toma del poder total», sentencia Quispe.

Desde la expulsión de las instituciones de Achacachi se instauraron las autoridades tradicionales comunitarias. «El policía trae ladrón; el Ejército, guerra; y el subprefecto, corrupción», dijo entonces el Mallku ante las acusaciones de la prensa de que Achacachi se había convertido en «una ciudad sin ley».

Los intentos del Ejército de recuperar Achacachi y sus alrededores llevaron a la creación del Cuartel General de Qalachaka, situado a la entrada del pueblo. «Para impresionar a la prensa poníamos armas viejas de la Segunda Guerra Mundial, armas que utilizaron los alemanes —esas las tenemos todavía—, y sobre esas las armas automáticas y, más arriba, armas más pesadas, por eso el Ejército tenía miedo de entrar», dice el Mallku. El llamamiento de Felipe Quispe para hablar con Hugo Bánzer de «presidente a presidente» no podía ser más simbólico. Los Ponchos Rojos, un protoejército aimara que portaba fusiles máuseres de la guerra del Chaco (1932-1935), eran otro símbolo de este poder paralelo que crecía en el Altiplano desde el epicentro de Achacachi.

En julio de 2001, los tanques rodeaban este pueblo de 15.000 habitantes para poner fin al levantamiento. Pero no consiguieron entrar en Achacachi ni deponer el control comunal de la zona. «En 2001 en Huarina [a diez kilómetros de Achacachi], mataron a nuestros hermanos, los bombardearon, han utilizado tanques, ametralladoras, aviones... Hubo muchos muertos, aunque nosotros también matamos», dice el Mallku. Ninguno de los gobiernos posteriores consiguió entrar en Achacachi. Hasta la llegada de Evo Morales. «Cuando el Evo llegó todo ha puesto, todo completo, ahora hay Ejército, hay Policía...», protesta.

Tras el éxito de los bloqueos, el Mallku fundó el Movimiento Indio Pachakutik, que obtuvo el 6% en las elecciones de 2002. Pese a que el auge de la figura de Evo Morales comenzaba a quitarle protagonismo, el Mallku cumpliría todavía un papel en las movilizaciones del año siguiente, en la ya histórica guerra del gas de octubre de 2003. Pero su rol no fue tan determinante como la prensa del momento y el Gobierno se empeñaban en señalar. Tampoco Evo Morales estaba detrás del levantamiento, pese a las acusaciones directas de Sánchez de Lozada. Después de los primeros días, las organizaciones sociales habían sido sobrepasadas por la población, que se coordinaba en los barrios, en cada calle de El Alto para hacer frente al Ejército. Felipe Quispe ya había cumplido su misión, decía Félix Patzi, ministro de Educación en los primeros años del Gobierno del MAS: «Haber levantado el orgullo indígena en el campo y en la ciudad». Nada de lo que ocurriría después hubiera sido igual sin esta «misión histórica».

El Alto de pie

CEJA / CIUDAD DE EL ALTO

Casualidades de la historia boliviana, fue precisamente en El Alto donde se instaló en 1781 el campamento de los indígenas sublevados contra la colonia, desde donde Tupaj Katari dirigió el asedio a La Paz. Desde el centro de la ciudad era posible ver, cuatrocientos metros más arriba, a los prisioneros españoles ahorcados en altísimas estructuras de madera. Con la misma mezcla de temor y respeto

han seguido alzando la vista los sucesivos ocupantes del Palacio Quemado, sede del Gobierno.

La Ceja de El Alto es el centro neurálgico y paso obligado para todos los vehículos que quieran bajar a la ciudad colonial. En El Alto se ubica el aeropuerto internacional y muchas de las industrias que abastecen La Paz, entre ellas todos los grandes depósitos de gasolina. Una de las pocas estatuas al Che Guevara fuera de Argentina y Cuba marca el paso de las decenas de miles de minibuses que conectan las dos ciudades. «Con el referente de octubre, muchos de los gobiernos que han venido después ya ven El Alto como un gigante que puede levantarse y derrumbar gobiernos», dice Mónica Apaza, aimara de veintiocho años. En el levantamiento de octubre de 2003 era secretaria de Juventudes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto.

El secreto de la fuerza de esta ciudad de 1,2 millones de habitantes reside en su tejido social. Desde «lo más pequeñito a lo más grande», explica Mónica Apaza, los alteños se articulan en clubes deportivos, clubes de madres, sindicatos de lustracalzados, chóferes, vendedoras del mercado, comités de vigilancia, organizaciones juveniles, en grupos universitarios o en las filiales alteñas de las principales organizaciones del país. Pero si de algún lugar proviene esa capacidad de «derrumbar gobiernos» es de las juntas vecinales. Cada zona, en ocasiones apenas una manzana, tiene un presidente elegido por una asamblea vecinal, que se reúne cada mes. La otra característica es, por supuesto, la identidad. «La mayoría de El Alto se ha constituido desde su nacimiento como gente emigrante del campo que ha venido aquí a vivir. Esa es nuestra identidad, como cultura aimara».

Mónica Apaza empezó a participar en la Fejuve en 2002, con dieciocho años, poco después de terminar el colegio. En su barrio, como en la mayoría de los barrios de El Alto, no tenían agua, ni alcantarillado, ni gas, ni hospitales. Esas carencias la llevaron a integrarse en las juntas vecinales. «Lo que une a la gente, desde lo más pequeño, son las necesidades que tenemos. En El Alto hay una gran necesidad de servicios básicos y eso articula», explica. Cuando estalló la guerra del gas, en octubre de 2003, ella era la más joven de la directiva. Le tocó estar en el centro de la acción, como miembro de la Comisión Política de esta federación.

«El gas es nuestro»

El desencadenante de la revuelta que tumbaría a Sánchez de Lozada fue el plan del Gobierno de exportar gas a Estados Unidos a través de Chile, dos países, según el imaginario popular, enemigos de los intereses bolivianos¹⁰. Mientras la inmensa mayoría de la población no tenía cubiertas sus necesidades básicas, tres multinacionales, una de ellas la española Repsol, se quedarían con el 82% de los beneficios de la operación.

El estallido social estuvo precedido de una serie de movilizaciones, en un principio independientes entre sí. En febrero de 2003, las negociaciones del Gobierno de Sánchez de Lozada con la misión del FMI llevaron a la creación de un impuesto del 12% sobre los salarios. Los enfrentamientos entre los grupos especiales de la Policía y soldados de la guarnición militar del Palacio Quemado convirtieron la céntrica plaza Murillo en una zona de guerra. En un ensayo de lo que vendría después, Sánchez de Lozada huyó del palacio durante unas cuantas horas. Treinta muertos y una movilización multitudinaria que duró tres días hicieron que Goni retirara el impuestazo, mientras la misión del FMI permanecía encerrada en un hotel de cinco estrellas. Unos meses más tarde, a principios de septiembre, los vecinos de El Alto obligaban al alcalde de esta ciudad a retirar un nuevo impuesto sobre la vivienda.

El 8 de septiembre, una marcha a La Paz encabezada por Felipe Quispe se sumó a las protestas. En la radio San Gabriel, el Mallku inició una huelga de hambre para exigir la liberación de Edwin Huampo, una autoridad indígena acusada de la muerte de dos personas en un acto de justicia comunitaria. A la huelga de hambre se le añadieron, a mediados de septiembre, los bloqueos protagonizados por las comunidades aimaras del Altiplano para detener el plan de exportar gas a Estados Unidos y por la nacionalización de los hidrocarburos. El intento de acabar con el bloqueo, que impedía el paso desde hacía más de una semana a decenas de camiones y un autobús con turistas, terminó con cinco muertos. Entre ellos, una niña de ocho años que miraba por la ventana el espectáculo

10. Bolivia perdió su salida al mar tras una guerra con Chile entre 1879 y 1883.

de las tropas militares y los helicópteros de guerra enfrentándose a los comuneros.

La matanza provocó la furia de la población aimara, tanto de las comunidades como de El Alto. A una manifestación masiva convocada el 19 de septiembre le siguió la huelga general de la COB. Los mineros de Huanuni comenzaron la marcha hacia La Paz. Al tiempo, se multiplicaban los bloqueos de caminos de los cocaleros en Cochabamba y en los Yungas, en la provincia de La Paz, y de los campesinos de la CSUTCB de Felipe Quispe en el resto de los accesos a la capital.

Aunque la oposición a los planes del Gobierno de exportar el gas a través de Chile no era nueva y los bloqueos en el Altiplano llevaban casi un mes, el principal impulso para terminar con el Gobierno de Sánchez de Lozada provino de un paro indefinido decidido por la Fejuve de El Alto. La organización convocó a todos los presidentes de zona, en representación de cerca de seiscientas juntas vecinales, a una asamblea general. El 8 de octubre El Alto inició una vez más el cerco a La Paz.

Mónica Apaza señala el avance que se había producido en las demandas de las juntas vecinales: ya no se luchaba solo por los servicios básicos del barrio, la lucha era por defender los recursos naturales de todo el país. «Había una conciencia generalizada de toda la población de luchar por algo que era nuestro, no era una lucha por El Alto, aquí no hay petróleo, no hay gas... El gas es lo único que tenemos en Bolivia; como nación, teníamos que luchar».

Pero los levantamientos no alteraban los planes del Gobierno. Si el Rey Sol, Luis XIV de Francia, al parecer nunca dijo su frase más famosa, «el Estado soy yo», nadie puede decir lo mismo de Sánchez de Lozada, que la pronunció palabra por palabra con su acento inglés y en cadena nacional. Pocos días de bloqueo habían dejado sin gasolina los 58 surtidores de La Paz y El Alto. El Gobierno envió tropas para recuperar el control. El primer objetivo militar: que los camiones cisterna, acompañados de un convoy del Ejército, atravesaran las barricadas para abastecer la ciudad.

La organización de las juntas vecinales se reveló efectiva para armar la resistencia. Incluso frente a un ejército. Centenares de presidentes de zona se reunían «fuera de las horas de lucha», a las cinco o las seis de la mañana, cuenta Apaza, para decidir la estrategia que se desarrollaría a lo largo del día.

Al poco tiempo, el problema del abastecimiento empezaba a preocupar también a los vecinos. «Era el tercer día y nosotros no sabíamos cómo iba a hacer la gente para comer. Entonces lo que hicimos fue hablar con los mercados para que abrieran a las cuatro de la mañana. Y nosotros se lo comunicábamos a los vecinos a través de los presidentes de zona; los presidentes llamaban a asamblea, y así los vecinos sabían que los mercados iban a abrir a esa hora... Las caseras¹¹ iban a vender a las cuatro, todos al mercado a la madrugada, hasta las seis y media, que cerraban... y otra vez a la movilización todo el día. Al día siguiente, igual: abrían los mercados por la madrugada y los cerraban para las movilizaciones».

Dos elementos, relacionados con la cultura aimara, cuenta Mónica Apaza, permitieron sobrevivir los once días de levantamiento, «y treinta días, si hubiera hecho falta». El primero eran las despensas: «Nosotros, como la mayoría de El Alto somos aimaras y tenemos la costumbre de guardar la comida, papas, chuños¹², nosotros teníamos eso, no podíamos morir fácilmente por once días de paro en El Alto». El segundo era el trueque, una costumbre que se generalizó en el levantamiento. «Mi mamá tenía papas y las iba a cambiar por carne o por arroz», cuenta.

No quedaba ni un transporte en toda la ciudad. En las primeras jornadas, Mónica salía caminando a las tres y media de la mañana para llegar a las reuniones con los presidentes de zona. Después de volver a su casa le esperaba un día entero de movilizaciones, para volver una vez más por la noche a las reuniones. «Era bien cansado... pero pensándolo bien ni me daba cuenta si estaba cansada o no, recién ahora me doy cuenta». Las mujeres no solo eran las encargadas de gestionar las despensas y las ollas comunes que se montaban en plena calle con la comida que aportaban los vecinos. También eran mayoritarias en las protestas, cuenta Mónica Apaza. Cuando los presidentes de zona no llamaban a la movilización «eran las mujeres las que se organizaban y convocaban».

11. Vendedoras del mercado.

12. Los chuños son papas (patatas) sometidas a un proceso de deshidratación, que permite su conservación durante años. Es una de las bases de la alimentación de la población más pobre de Bolivia.

«Vamos a meter bala»

«Si quieren diálogo sobre el gas, habrá diálogo sobre el gas; si quieren guerra por el gas, habrá guerra por el gas, y vamos a meter bala», dijo Sánchez de Lozada el sábado 11 de octubre en un encuentro con representantes de la Iglesia y la prensa. Ese mismo día, con munición de guerra, el Ejército y la Policía disparaban contra los vecinos que bloqueaban el paso de los camiones cisterna que salían de la planta de Senkata, en El Alto. Las primeras masacres generalizaron la rebelión. Miles de alteños rodearon el convoy militar, que fue obligado a refugiarse en un cuartel de la zona. Los choques entre las fuerzas militares y los manifestantes se extendieron por todo El Alto y los barrios más elevados de La Paz. Tanques que ametrallaban a los manifestantes por las laderas, helicópteros y francotiradores que disparaban sobre civiles, madres gritando sobre sus hijos asesinados... Las muertes alimentaban la revuelta.

Era un Ejército contra cientos de miles de personas desarmadas. Al igual que la tropa de Tupaj Katari, los vecinos tenían palos, piedras y hondas, pero además algún cóctel molotov y algunos *cachorros* de dinamita. Bien colocada, la carga permitió derribar tres de las seis pasarelas de la Ceja de El Alto, auténticas moles de cemento que terminaron de bloquear el acceso a la ciudad. En el barrio alteño de Villa Tunari, la prensa local hablaba de catapultas, con «latas, tablones, pitas y bañadores de aluminio» como munición. Los vecinos bloquearon las calles con autobuses, carrocerías viejas, piedras, maderas, incluso con gigantescos vagones de tren descarrilados. En las principales avenidas, inmensas zanjas cavadas en el asfalto y en la tierra hacían imposible el tránsito.

Setenta y siete muertes y cuatrocientos heridos por las balas de la Policía y el Ejército hicieron que la demanda del gas y la Asamblea constituyente pasaran a un segundo plano. La primera demanda ya era innegociable: la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. «Como un gigante que duerme, en el momento en que lo despiertas no descansa hasta que termina lo que ha empezado —dice Mónica Apaza—. Era como si la sangre de ellos nos llamara a nosotros. El carácter de los alteños, de los aimaras, es que somos tercicos, decimos una cosa, y esa cosa va... El cansancio, el desánimo, no nos ha derrumbado... hemos podido enfrentar eso

porque teníamos una cosa fija: nuestros hermanos han caído, tiene que irse el Gobierno, se va y se va».

Goni hablaba de un proceso «sedicioso» financiado desde el exterior, liderado por Evo Morales y Felipe Quispe, pero al cuarto día de movilizaciones ya ni la Fejuve dirigía a los manifestantes. «Después de las masacres aquí en Río Seco y en Senkata, ya nos ha sobrepasado la misma base, la misma gente se empezó a organizar, ya no había una dirección», cuenta Apaza. Al igual que el resto de los directivos de la organización vecinal, Mónica se sumó como una más a los bloqueos. Los dirigentes ya no podían reunirse en la sede de la Fejuve, en la Ceja, ocupada por los militares, ni utilizar sus teléfonos, intervenidos por la Policía.

«Nuestra lucha ha sido desde abajo, no había alguien arriba que nos dijera “hagan esto, digan esto, muévanse”. Éramos nosotros, todos nosotros movilizándonos. No estaba Jaime Solares¹³ como líder, no estaba Evo Morales como líder, no estaba Felipe Quispe como líder, no estaba Abel Mamani¹⁴... Otros líderes ahora dicen: “Nosotros estábamos en octubre, nosotros somos los que hemos derribado a Goni”. Y la verdad es que no estaban ahí».

El profesor Pablo Mamani siguió de cerca el levantamiento de octubre. Pese a que llevaba tiempo viviendo en El Alto confiesa que nunca había imaginado que sus habitantes fueran capaces de una resistencia semejante. «En esos momentos descubrimos que éramos sujetos históricos capaces de hacer más de lo que habíamos pensado, y en ese momento descubrimos que la historia está aquí, que nosotros somos la historia, no ellos».

Recordar aquellos días sigue siendo doloroso para Mónica Apaza: «Me ha tocado levantar muertos, me ha tocado llevar gente herida al hospital. Agarrar en mis manos y que en mis manos se mueran muchas personas». Las noticias y las imágenes de las masacres extendieron las protestas por todo el país. Los cocaleros, los indígenas del Altiplano, los mineros de Potosí y Oruro, dinamita en mano, todos

13. Líder minero de la COB.

14. En 2004, Abel Mamani asumió la dirección de la Fejuve de El Alto. Cobró notoriedad en la expulsión de la multinacional Aguas del Illimani de El Alto. Fue ministro del Agua en los primeros años del Gobierno de Evo Morales, pero un escándalo terminó forzando su dimisión.

se unían a los bloqueos y avanzaban hacia el Palacio Quemado. El 16 de octubre, en una gigantesca manifestación, «todo El Alto bajó a La Paz». Las huelgas de hambre se extendían a todos los rincones de Bolivia. La situación era insostenible para Sánchez de Lozada. La toma militar de El Alto había fracasado. «La prensa ya estaba en contra del Gobierno, los políticos ya lo han dejado, se ha quedado solito, se ha quedado tan solo que ha decidido alejarse, renunciar y escaparse», explica Apaza. Al igual que el presidente argentino Fernando de la Rúa dos años antes, escapó en helicóptero. Después de unas breves escalas se instaló en Estados Unidos¹⁵.

El Alto estaba en ruinas. Seguía sin tener acceso a los servicios más básicos y tocaba enterrar a los muertos, reconstruir las calles, las pasarelas, volver a la vida cotidiana, devolver los vagones a sus raíles. Pero pronto pudo verse que la experiencia había servido. A finales de 2004 y principios de 2005, un nuevo paro indefinido coordinado desde la Fejuve consiguió expulsar a la multinacional francesa Suez, dueña de Aguas de Illimani. Al igual que en Cochabamba años atrás, meses de protestas y cuatro días de paro forzaron al Gobierno a rescindir el contrato de esta empresa que subía las tarifas en función del valor del dólar y pretendía cobrar el equivalente a siete salarios mínimos para conectar las zonas más alejadas a la red de agua. Decenas de miles de alteños bajaron a festejar la rescisión del contrato a la plaza de San Francisco de La Paz.

El nuevo presidente, Carlos Mesa, tuvo que enfrentar cuarenta protestas diarias. Cuando se negó a nacionalizar los hidrocarburos en cumplimiento de la Agenda de Octubre, la movilización de El Alto y otros sectores sociales llevaron al Congreso a aprobar una ley que subía los impuestos a las petroleras del 18% al 50%¹⁶. Pero no era la nacionalización que pedían. Otras tres semanas de paro, liderado por las juntas vecinales de El Alto y otros movimientos, bastaron para que Carlos Mesa dimitiera el 9 de junio de 2005. Las

15. En agosto de 2011, dos ministros y cinco jefes militares fueron condenados por los crímenes de octubre. Sánchez de Lozada sigue viviendo en Estados Unidos con una orden de búsqueda y captura emitida por la justicia boliviana.

16. Después del referéndum de julio de 2004.

movilizaciones de El Alto lograron que el primero en la sucesión constitucional, Hormando Vaca Díez —relacionado con la derecha oligárquica de Santa Cruz— rechazara el cargo, y que se adelantaran las elecciones, en las que arrasó Evo Morales.

«Cuando ha entrado el Evo decidimos darle total respaldo al Gobierno, hubo muchas equivocaciones, nos ha mentido en varias cosas, como en el tema de la nacionalización, por ejemplo, que no es una nacionalización, es una renegociación de los contratos, que no es lo que nosotros pedíamos», dice Mónica Apaza.

Sin embargo, «a pesar de todas estas cosas», afirma que seguirá apoyando al Gobierno del MAS. «¿Por qué?, me dirás. Porque al final el Evo es la única persona que nos representa, hasta que no haya otro igual que nosotros no vamos a decir que se vaya». Inmediatamente explica lo que quiere decir con esto: «Nuestra lealtad no es con la persona, es con lo que queremos cambiar. Porque si fuera solo al Evo, como persona, yo creo que ya muchos lo habrían dejado, con todas las cosas que nos ha hecho... Es al proceso mismo al que somos leales».

«Sí —prosigue sin dudar Mónica Apaza—, las muertes, las caídas, todo lo que hemos vivido valió la pena. Estamos en un proceso que nunca se hubiera dado en Bolivia si no hubiera sido por esto».

«El fin de los libros sagrados»

BAR CARCAJADA / LA PAZ

En las calles de La Paz personas disfrazadas de cebra intentan sin mucho resultado ordenar el tránsito. En el Mercado de las Brujas, las mujeres indígenas venden fetos de llama disecados. Los comercios, los puestos del mercado, las familias en las puertas de sus casas encienden sus *k'was*, parte del ritual de agradecimiento a la Pachamama, la madre tierra. Pasear por La Paz también significa realizar un recorrido por la historia del colectivo Mujeres Creando. Sus grafitis aparecen en la pared menos pensada.

«Mujer que se organiza no plancha más camisas», «No hay nada más parecido a un machista de derechas que un machista de izquierdas», «No saldrá Eva de la costilla de Evo», «Civismo rima

con fascismo», «Desobediencia, por tu culpa voy a ser feliz»... son algunas de las frases que este grupo feminista grafiteaba con letra cursiva ligeramente inclinada. Las acciones artísticas de este colectivo, creado por María Galindo y Julieta Paredes en 1992, han llevado a sus integrantes a la comisaría en más de una ocasión. En 2002, sus fundadoras tomaron caminos diferentes. «Nos habíamos convertido en un grupo muy famoso internacionalmente, pero nos habíamos alejado de la gente», explicaba Julieta Paredes en una entrevista. Desde entonces, esta activista de origen aimara ha seguido trabajando para crear un feminismo «a medida de las comunidades», un feminismo comunitario.

En el bar Carcajada, Julieta Paredes habla de la ilusión generada por los primeros años de Evo Morales mientras comparte unas cervezas. «El primer Gobierno ha intentado responder a los movimientos sociales, de hecho ellos han sido los que han propuesto, bien o mal, ministros, viceministros...».

Durante las dos décadas anteriores, el Estado había sido conducido, según describe Paredes, por políticos preparados en las mejores universidades del mundo. «¿Y qué han hecho del país? Se lo han entregado a los depredadores. ¿Qué logros ha tenido la política neoliberal de esos *yuppies* de terno¹⁷? ¡Nada! Durante todo el primer periodo nuestras hermanas y hermanos, muchos de ellos campesinos de áreas rurales han tomado el Gobierno, y ahí empezaron a aprender, al hacerlo, porque esto también es nuestro».

La Asamblea constituyente, entre 2006 y 2007, una eterna demanda de los movimientos sociales para la refundación del país, fue para Julieta Paredes el punto culminante de la participación popular. «El proceso de la nueva Constitución ha significado desmitificar los libros sagrados —dice—. Pudimos escribir nuestras ideas, nuestra concepción de la sociedad. Pudimos hacerlo, aunque éramos analfabetas, analfabetos, nuestras hermanas y nuestros hermanos que nunca habían estado en la escuela, igual han podido opinar... y lo pudimos escribir, y lo que se puede escribir mañana lo podemos borrar y podemos reescribir. Todo esto es muy

17. Pantalón, chaleco y chaqueta.

dignificador de nuestra palabra, nuestro pensamiento y nuestros sueños. Porque hemos ido allí, hacíamos fila, pedíamos la palabra y nos escuchaban».

«La comunidad está tuerta, manca y coja»

Julieta Paredes no comparte la extendida teoría de la complementariedad armónica e igualitaria entre hombres y mujeres que supuestamente existía antes de la llegada de los invasores españoles. Sin embargo, no duda al afirmar que la situación de las mujeres en América era «mucho mejor que en Europa, donde no tenían derecho a la tierra, no eran consideradas personas y eran propiedad del padre para luego pasar a serlo del esposo».

Cuando llegaron los españoles se produjo lo que Paredes llama «un entronque patriarcal». El control de los hombres sobre las mujeres se acentuó con la potestad que le daban a los varones los virreyes, la Iglesia y la Biblia. «Por eso nosotras siempre decimos que hemos ido de mejor a peor con la invasión colonial, con la modernidad». Ni siquiera la República, que quitó más tierras a los indígenas que la colonia, ni la reforma agraria de 1953, que entregó las tierras directamente a los hombres, cambió la situación.

Julieta Paredes confronta el feminismo comunitario al feminismo de tradición occidental, que «reclama derechos individuales». «Nosotras, en nuestro feminismo comunitario, partimos de otro lugar, porque no nos plantamos individualmente, nosotras nos plantamos lado a lado con los hermanos. Desde una identidad común planteamos una propuesta política, ya no individualista, sino de todos mis derechos en la comunidad. Eso presupone que nos reconocemos como parte de las mismas discriminaciones, opresiones y explotaciones que sufren nuestros hermanos, con la denuncia de que ellos en la comunidad se convierten en nuestros opresores y nuestros explotadores».

La presencia de las mujeres indígenas en las movilizaciones previas a la llegada de Evo Morales fue decisiva. «Si no hubiera sido por las mujeres no hubieran resistido ni tres días», puntualiza. Sin embargo, Paredes habla de un «sistemático ocultamiento e invisibilización» de la participación política, económica y teórica de las mujeres. «Esto tiene como consecuencia que la comunidad

hoy está tuerta, está manca y está coja». Julieta Paredes se tapa un ojo con una mano. «Los hermanos están mirando con un solo ojo creyendo que lo miran todo». Julieta destapa un ojo y tapa el otro. «Ellos miran una parte. Nosotras tenemos esta otra mirada», dice y vuelve a cambiar las manos de posición. «Y esta es la mirada, esta es la mano y este es el pie que faltan a la comunidad», dice mientras se toca cada uno de los miembros mencionados.

Para la autora del libro *Hilando fino*¹⁸, la participación de las mujeres en el proceso de cambio «no es un favor, ya no es una concesión, una caridad que puede hacer el hermano Evo. Es una obligación de todo gobierno y comunidad. Porque si no, pasa lo que está pasando hoy. El proceso se tropieza, se cae, porque piensan que están mirando, pero se olvidaron del otro lado. Y de ese lado están viniendo golpes, las corrupciones, los autoritarismos, las jerarquías, la rosca...».

Para esta activista eso es lo que pasó con el gasolinazo: «La respuesta al gasolinazo ha sido planteada por las mujeres, y los hombres han tenido que salir. El pueblo se rebela porque el Evo es soberbio, creía que la gente no iba a hacer nada... Y el lunes lo íbamos a empezar a voltear. Ya pasó el tiempo de decir la derecha, la derecha... la derecha está derrotada». Paredes habla de un proceso vivo, que no pertenece a Evo Morales: «Si hemos tenido capacidad de reaccionar es porque hemos estado trabajando por el proceso. Hemos podido reaccionar porque estamos con el proceso desde otro lugar».

«Un Estado salpicado de pueblo»

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA / LA PAZ

En el edificio de la Vicepresidencia, en el centro de La Paz, discurre una reunión de asambleístas del MAS. Los sombreros negros de copa y las polleras, las faldas de las mujeres del Altiplano, las pieles

18. PAREDES, J. (2008), *Hilando fino: desde el feminismo comunitario*, CEDEC, La Paz.

cobrizas y los mantos con tejidos andinos hablan de tiempos muy diferentes. Hace unos años el mismo espacio estaba copado por diputados blancos, hombres de corbata y estudios en Estados Unidos. Nos recibe Juan Carlos Pinto, compañero de lucha de Álvaro García Linera. Durante años ejerció como asesor de Vicepresidencia para luego ocupar diferentes cargos en el Gobierno del MAS.

«Estamos en la etapa de la revolución democrática y cultural. Algo que en Europa ha pasado hace dos siglos nosotros lo estamos viviendo ahora con el acceso de la mayoría de la población a los puestos del Estado —explica Juan Carlos Pinto—. De alguna manera estamos transformando el Estado. No ha dejado de ser un Estado liberal en su forma de organización, pero está salpicado de pueblo, y esa es una medida auténticamente liberal, la posibilidad de que todos tengan derecho a ser parte».

Pinto abre la puerta de la sala donde Álvaro García Linera suele recibir a la prensa. Se sienta en una de las sillas acolchadas y señala una de las limitaciones de este proceso: «Estamos queriendo construir un nuevo Estado con las estructuras del viejo». Detrás del atril del vicepresidente, las banderas de Bolivia y la wiphala.

«En los primeros tiempos decían: “Este indio no va a aguantar cuatro meses”. Y ya llevamos más de cinco años y en una situación mejor que cualquier Gobierno anterior. Es una demostración de que los siempre olvidados son capaces de administrar el país», dice Pinto.

Las cifras lo confirman. Desde la llegada del MAS, la pobreza bajó del 61% al 49%, según la Cepal, unas cifras, sin embargo, todavía muy superiores a la media latinoamericana. Las reservas internacionales del país nunca estuvieron tan altas, ni se recuerdan tantos años de crecimiento seguidos. «Con las mismas armas nosotros lo hacemos mejor, pero a partir de aquí, ¿hacia dónde vamos?», se pregunta.

El gas, el horno y el pan

Cada Primero de Mayo, como un regalo del Día del Trabajo, el Estado ha ido ganándole terreno al modelo heredado tras veinte años de neoliberalismo. El 1 de mayo de 2006 el Gobierno, con el rótulo de «nacionalización de los hidrocarburos», aumentaba su participación hasta el 51% en las empresas petroleras y gasíferas. El 1 de mayo de

2008 nacionalizaba Entel, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. El 1 de mayo de 2010, expropiaba cuatro empresas eléctricas. El 1 de mayo de 2012, hacía lo propio con las acciones de Red Eléctrica Española en la empresa Transportadora de Electricidad.

Sin embargo, los intentos por recuperar el control de los sectores estratégicos de la economía conviven con la presencia de multinacionales que «continúan con el saqueo», apunta Marco Gandarillas, del Cedib. En 2010, señala, la minería generó 2.000 millones de dólares y los ingresos para el Estado fueron menos de 200 millones.

Para el ex ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada, es con el gas, el recurso más codiciado de Bolivia, donde con más fuerza se repite una historia que empezó hace cinco siglos con la plata del Cerro Rico de Potosí. Una historia que debía terminar con el Decreto de Nacionalización de 2006, una ley que él mismo se encargó de redactar. Sin embargo, la negociación de los nuevos contratos con las petroleras, iniciada unos meses después, terminó limitando la potencia del decreto, según afirma el exministro. Esa fue la razón de su dimisión. Los «contratos de servicio» se habían transformado por las presiones del Gobierno de Brasil en «contratos de producción compartida».

Para que la gente entienda qué es un contrato de servicio, Soliz Rada suele utilizar el ejemplo del pan y el horno: «Yo elaboro pan y lo llevo al horno. El horno me cuece el pan, me entrega el pan y yo le pago por el servicio», dice Soliz Rada. Cuando se elaboraron los contratos con cada una de las multinacionales, los contratos ya no eran de servicio, tal como preveía el Decreto de Nacionalización, sino que se habían convertido en contratos de «producción compartida». Es decir, se le pagaba al horno por cocer el pan y luego se le daba al hornero un porcentaje de la venta del pan.

Para el exministro, la presión de Petrobrás —el mayor productor de gas en Bolivia— y la diplomacia brasileña determinaron las negociaciones: «El presidente más habiloso para hacer daño a los países chicos de América fue Lula, porque te metía el puñal mientras sonreía y te decía: “¿Sabes? A mí me interesa no tener vecinos pobres”».

Los anuncios de los éxitos económicos ocupan la primera página de *Cambio*, el periódico oficialista. Pero las buenas noticias no calman las protestas sociales. Más bien al contrario. A la salida de Vicepresidencia los transportistas bloquean la calle.

Año uno

Alejandro Almaraz se sienta en una cafetería de centro comercial y pide un café con leche. Fue uno de los principales impulsores de las transformaciones agrarias en los primeros años del Gobierno de Evo Morales, sobre todo en la titulación de tierras comunitarias para los pueblos indígenas. Diferencias con la deriva del Gobierno lo alejaron del oficialismo. Para este abogado, la casi total erradicación del trabajo esclavo en el Alto Parapetí (Santa Cruz) y la distribución de 31 millones de hectáreas a campesinos e indígenas han sido dos de los principales logros del proceso de cambio. Para Almaraz, la importancia de esta reforma agraria, realizada en su gran mayoría con tierras que pertenecían al Estado, es que es irreversible: «Cotejando las experiencias mexicana y boliviana, que son historias que tienen mucho que ver, resulta que es más fácil quitarle a todo un país sus hidrocarburos que quitarle a un campesino su tierra».

«Ocupen estas tierras, trabajen estas tierras, cuídenlas, sean prósperos, sean felices, sean libres», decía Almaraz en 2009 a cientos de pobladores de la etnia guaraya en la entrega de 12.000 hectáreas, apropiadas ilegalmente por la familia Marinkovic. La ceremonia no podía ser más emblemática: Branko Marinkovic era el máximo representante de la élite de las tierras bajas, la región que agrupa los departamentos más ricos del país. Todo parecía indicar que el Gobierno había ganado la batalla contra la derecha del Oriente, que había controlado hasta entonces la política boliviana, pero un año antes el choque de intereses podría haber desembocado en un conflicto armado.

La demanda de mayor autonomía de los departamentos de las tierras bajas crecía a medida que sonaban palabras como *nacionalización* o *reforma agraria*. La reacción frente a los cambios fue violenta. En 2008, dos episodios se convirtieron en un espejo de la resistencia de la élite tradicional a los cambios que se estaban produciendo. El primero fue la «humillación de Sucre»: decenas de indígenas fueron expuestos, atados y semidesnudos, en la plaza principal de esta ciudad, donde les obligaron a «pedir perdón». El segundo fue la matanza de Pando: catorce indígenas simpatizantes del MAS fueron asesinados en una emboscada ordenada por los principales dirigentes de este departamento.

En agosto y septiembre de 2008 parecía jugarse el futuro de Bolivia. Los autonomistas, liderados por las autoridades de la Media Luna, ocupaban pozos petroleros y cortaban el suministro de gas a Brasil, bloqueaban rutas, tomaban cientos de oficinas gubernamentales y atacaban sedes de organizaciones indígenas y campesinas. Así describe el desenlace Raúl Zibechi, periodista e investigador sobre movimientos sociales:

Ante la brutal ofensiva de las derechas [...] en Santa Cruz, el bastión popular del barrio Plan 3000 resistió en la calle los ataques armados de los jóvenes «autonomistas». Miles de jóvenes, comunidades urbanas y familias tomaron las calles con sus armas improvisadas y frenaron en seco a las bandas fascistas. En tanto, unos 30.000 campesinos, obreros, indígenas, estudiantes y activistas sociales montaron un gigantesco cerco a la ciudad de Santa Cruz. Bloquearon las rutas y amenazaron con marchar y tomar la ciudad, en alianza con la población del Plan 3000. [...] Bastaron unos días de fuertes y ofensivas movilizaciones, y de acciones contundentes del Estado para que la oligarquía se rindiera dispersándose¹⁹.

La derecha había perdido la iniciativa. Pero todavía le quedaba un recurso. Sus parlamentarios seguían bloqueando la nueva Constitución, que había sido aprobada por la Asamblea constituyente el 15 de diciembre de 2007 y que llevaba guardada en un cajón desde hacía casi un año. A mediados de octubre de 2008, una gigantesca marcha convocada por los más poderosos movimientos sociales bolivianos avanzaba hacia La Paz. Los mineros de Potosí y Oruro, los sindicalistas de la COB, los cocaleros del trópico, los campesinos indígenas de la CSUTCB, las mujeres de pollera de la Bartolina Sisa²⁰, las juntas vecinales de El Alto, con el mismísimo

19. ZIBECHI, R. (2010), «Desgaste progresista y ofensiva de la derecha», *Diagonal*, febrero de 2010.

20. La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa es la principal organización de mujeres de Bolivia. Nació en los años setenta vinculada a la lucha katarista de la CSUTCB. Formó parte de la creación del instrumento político del MAS y hoy es uno de los principales soportes y aliados del Gobierno de Evo Morales.

Evo en primera fila, rodearon el Congreso para obligar a la derecha a desbloquear el nuevo texto constitucional.

El 21 de octubre, el edificio estaba sitiado por cientos de miles de manifestantes. Mientras tanto, en el interior del Congreso, los representantes del MAS y los partidos de la derecha habían llegado a un acuerdo. La derecha destrababa la convocatoria de un referéndum para aprobar la Constitución, pero a cambio el MAS aceptaba que el Congreso realizara algunos «ajustes». En esa misma sesión, durante interminables horas, se leyeron los 411 artículos de la Constitución. De ellos, 144 fueron modificados.

En algunos casos, los cambios excedían la definición de «ajuste». Uno de los más polémicos fue el cambio del artículo 408, por el cual se abría la puerta a la entrada de transgénicos, algo que quedaba prohibido expresamente en la primera versión²¹. Pero el «ajuste» más cuestionado fue el que afectaba al alcance de la reforma agraria. Cuando los bolivianos votaron el 25 de enero de 2009 para aprobar la Constitución también fueron preguntados sobre la extensión máxima de tierra permitida en Bolivia. El 80,6% votó a favor de que nadie pudiera poseer más de 5.000 hectáreas. Sin embargo, para muchos votantes pasó desapercibido que en ese maratón de cambios del 21 de octubre el Congreso había añadido una frase a ese artículo de la Constitución: «Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución». Con este ajuste, se cerraba la posibilidad de redistribuir las grandes haciendas ya existentes en el oriente y el norte del país. Para Pablo Regalsky, del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino, esta «concesión» se trató de «un pacto de gover-

21. El artículo 408 decía en su primera versión, aprobada por los representantes elegidos para redactar la Constitución, que se «prohíbe la producción, importación y comercialización de transgénicos». En la nueva versión, modificada por el Congreso y aprobada en el referéndum, el artículo ya no hablaba de prohibición sino que estipulaba que «la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley». Esta ley llegó el 26 de junio de 2011: el Gobierno establecía regulaciones para el control y etiquetado de los transgénicos, pero no los prohibía. Detrás de este ajuste estaban los intereses de los grandes productores de soja, que utilizan en su gran mayoría semillas transgénicas.

nabilidad» exigido por Brasil, que temía que un conflicto en Bolivia pusiera en peligro el abastecimiento de gas para su industria.

Pese a los cambios de última hora, la nueva Constitución seguía teniendo avances importantes. Entre las demandas históricas de los movimientos recogidas en el texto destacan la prohibición de privatizar la gestión del agua, una mayor participación del Estado en la economía, la protección de la hoja de coca en su estado natural, la prohibición de bases militares extranjeras o la figura del referéndum revocatorio para todos los cargos electos. Amnistía Internacional la definió como «la mejora más significativa en los derechos económicos, sociales y culturales que se ha vivido en decenas de años».

«Yo no soy el proceso»

La Constitución, aprobada por el 61%, se convertía en la decimoséptima del país, la primera en ser sometida a la voluntad popular. En diciembre de 2009, Evo Morales ganaba las elecciones con el 64%. Para describir el resultado de la confrontación entre los movimientos sociales y los grupos dominantes, el sociólogo Pablo Mamani utiliza el fútbol: «Ganamos de local y visitante, en nuestra cancha y en la cancha de ellos, en la forma liberal y en la forma comunitaria», en las urnas y en las calles.

Pero esta victoria abriría una nueva etapa de confrontaciones: «Ahora vivimos un nuevo escenario, en el que ellos son una parte de la crítica, pero sale desde dentro de nuestra cancha otra crítica, otras voces diciendo: “Hermano, estás fallando”». En 2010, año uno de la derrota de la derecha, los conflictos sociales volvieron a estallar. Por primera vez desde que Evo Morales asumió el poder ya no era la derecha la que cortaba los caminos para forzar cambios en el Gobierno, sino una vez más campesinos, trabajadores, indígenas, vendedores, transportistas y vecinos de los barrios más pobres. «En este escenario —dice Mamani—, el Gobierno ya no sabe moverse. A todos los califica de derechista, de enemigo, de neoliberal». Para este sociólogo, el Gobierno «sigue leyendo este momento de la historia» como en los momentos de la guerra contra la derecha.

A lo largo de 2010 la situación de pobreza sublevó a las poblaciones de Potosí y de Caranavi, en los Yungas cocaleros de La Paz, con dos estudiantes muertos tras la intervención de la Policía. A

finales de abril de 2010, las demandas salariales hicieron que Pedro Montes, líder de la COB, se viera obligado a convocar la primera huelga general contra el Gobierno del MAS, después de que un sector de las bases se declarara en huelga de hambre. Por primera vez en cinco años, Evo Morales no podía participar de los actos del Primero de Mayo. Hasta sectores del movimiento indígena comenzaban a enfrentarse al Gobierno. En concreto la Conamaq y la Cidob²², por la construcción de grandes infraestructuras y proyectos mineros en territorios indígenas.

En 2011 y 2012, el conflicto alrededor de la carretera que atravesaría el territorio indígena del Tipnis llevó al enfrentamiento entre las organizaciones indígenas de las tierras bajas por un lado, y el Gobierno y el movimiento cocalero por el otro. La represión policial de una de las marchas, que dejó 280 heridos entre los indígenas, provocó la dimisión de dos ministros y un viceministro de Evo Morales.

La carretera del Tipnis forma parte de un plan de infraestructuras que afecta a todo el continente, conocido por las siglas IIRSA. «Si vemos el trazado de las carreteras, estas coinciden con áreas protegidas y zonas indígenas, donde están las reservas de gas, los recursos mineros, madereros —dice John Zambrana, de la organización ecologista Fobomade—. El objetivo es el aprovechamiento de esos recursos naturales para luego ser exportados como materia prima. Continúa con un modelo extractivista, sin tener beneficios por la industrialización».

«Evo Morales tendría que tomar sus propias palabras, creérselas cuando dice “yo no soy el proceso, el proceso es el pueblo, el dueño del Gobierno es el pueblo” —señala Alejandro Almaraz—. Eso no solamente debe ser así, sino que actualmente es así. En la medida en que los actos del Gobierno se distancien de los objetivos del

22. El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) tiene presencia sobre todo en el Altiplano. La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) es la principal organización de las tierras bajas de Bolivia. La marcha por el Territorio y la Dignidad, de 1990, fue la primera gran puesta en escena del movimiento indígena en Bolivia: consiguió 1,5 millones de hectáreas para los pueblos amazónicos, entre ellos el territorio del Tipnis.

proceso, como ya está ocurriendo, esto va a quedar más patentizado en un escenario de conflicto».

Para el sociólogo Pablo Mamani, el gasolinazo dejó a la vista la complejidad de las relaciones entre el MAS y las organizaciones, muchas de ellas alineadas con el Gobierno. Para entenderlo, Mamani propone un juego. Dibuja un círculo en una libreta. «Imaginemos que hay un *dentro* y un *fuera* del poder». *Dentro* está el Estado, el Gobierno, las instituciones, «que siempre han mantenido un discurso anticampesino, antiindígena». *Fuera* están los movimientos, las comunidades, los barrios. Con la llegada de Evo «la novedad es que muchos movimientos rompen el caparazón colonial del Estado para meterse *dentro*, para tratar de reformarlo desde *dentro*, cosa que han logrado en cierto modo, pero que no han conseguido en su gran mayoría. El gasolinazo hizo que los que estaban *dentro* tengan que salir *fuera*, retroceder, acercarse a sus bases para no terminar botados. La fuerza de *fuera* es tan fuerte que hace tener miedo al Gobierno de Evo Morales y entonces anula el gasolinazo».

Hay muchas versiones sobre el cálculo que llevó al MAS a decidir el gasolinazo. Pero todas coinciden en cuál hubiera sido la consecuencia si no lo hubiera retirado: la caída inmediata del Gobierno. «Si no puedo avanzar, empujarme», había dicho Evo cuatro años antes en Tiwanaku. Aunque después de anulado el decreto 748, el Gobierno seguía defendiendo su necesidad, de alguna forma el eslogan «mandar obedeciendo» se había hecho realidad.

«Un paraguas contra la lluvia ácida neoliberal»

BARRIO DE TEMBLADERANI / LA PAZ

Si la televisión y la publicidad fueran un reflejo de la sociedad, habría que darle la razón a la miss cruceña 2004, que decía que los bolivianos son blancos, altos y hablan inglés. Hasta los pósters de las chicas *playboy* que cuelgan como altares en todo tipo de comercios parecen provenir de otro mundo, sin conexión aparente con una ciudad mayoritariamente mestiza e indígena. Las cremas blanqueadoras se venden en los puestos callejeros, apenas una manta sobre el suelo,

junto a las latas redondas y achatadas de Mentisán, un bálsamo de eucalipto y menta que sirve prácticamente para todo.

—¿Qué queda en la sociedad boliviana de los tiempos de la colonia?

—Todo —resume Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga y autora del libro *Oprimidos pero no vencidos*²³—. El sentido común es un sentido común colonizado porque ha incorporado la valoración positiva de lo europeo, lo extranjero, lo norteamericano y la desvalorización de lo propio.

Rivera, con el Colectivo 2, construye ladrillo a ladrillo, viga a viga, un centro cultural en Tembladerani, un barrio popular de La Paz. Una de las formas de avanzar en la «descolonización», dice, es volver a unir el trabajo físico con el intelectual. Mientras desgrana la sociedad boliviana y las contradicciones del proceso de cambio, tritura pacientemente con un mortero piedras para fabricar argamasa.

Cuatro botellas de cerveza y lijar dos vigas de madera no parece precio demasiado alto para hablar con una de las pensadoras más lúcidas de Bolivia. «Existe una internalización del racismo. Muchos sectores populares que han sufrido la discriminación procuran, por ejemplo, que sus hijos ya no hablen aimara y encaminarlos hacia una modernidad entre comillas», dice. Convoca a los otros miembros del colectivo para abrir las cervezas. Solo hay un vaso. Se llena, se tira el primer sorbo a la tierra y se bebe. Se pasa al siguiente, que repite el ritual —la challa— de agradecimiento a la Pachamama.

«Ahora la gente indígena se siente orgullosa de ser indígena. Ya no es tan grave como era hace unos años. Ahorita hay más resistencia, más capacidad de oponerse a ese maltrato cotidiano, las trabajadoras del hogar se han organizado, hay muchísimas empresas comunitarias, campesinas, hay exportadores de quinua, exportadores de lana, de alpaca que son comunarios indígenas».

No solo en el Altiplano, sino también en la Amazonía, Silvia Rivera identifica «un lindo proceso de fortalecimiento, pero no de ese indio tradicional, puro para el turismo, sino de lo que siempre

23. RIVERA CUSICANQUI, S. (2003), *Oprimidos pero no vencidos*, Yachaywasi, La Paz.

fue lo indígena, más moderno que la élite, que siempre tuvo y que sigue teniendo rasgos señoriales, arcaicos, feudales».

Unos cambios que no transitan necesariamente por las mismas vías que las políticas del Gobierno de Evo Morales. «Hay todo un discurso muy bonito de la Pachamama, Bolivia ha sido el único país que ha votado en contra en la cumbre del clima de Cancún y, sin embargo, están haciendo unas hidroeléctricas inmensas, unas represas que van a inundar tierras indígenas, minas a cielo abierto, una cantidad de cosas que demuestran que el proyecto es neodesarrollista. Y en ese sentido incluye el desprecio por lo indígena, por lo que también es racista».

Para Silvia Rivera, la principal transformación que ha vivido Bolivia va mucho más allá del Gobierno de Evo. «Este es un momento, una especie de paraguas que nos protege de la lluvia ácida neoliberal. Y ese paraguas nos permite que cada quien haga lo suyo. Y hay mucha práctica de la micropolítica, cantidades de pequeñas iniciativas autogestionarias, populares, que son lo que más vale de este proceso que estamos viviendo, en tanto que antes eso era poco menos que trabajar en la clandestinidad. Hoy día, puedes hacer eso, puedes también protestar, puedes cambiar un gasolinazo. Hay un sentido de que hay un poder en nuestras manos, que es el poder de la sociedad sobre el Estado».

«Un proceso de largo recorrido»

DE LA PAZ A DESAGUADERO (FRONTERA CON PERÚ)

Para salir de La Paz en dirección a la frontera con Perú, hay que atravesar una vez más El Alto. Las viviendas son cada vez más precarias y los mercados más rurales a medida que el centro de la ciudad va quedando atrás. Allí recalán los recién llegados de las comunidades aimaras, que utilizan El Alto como base para probar suerte en la ciudad. A los lados de la carretera, dispersos grupos de casas de adobe y ladrillo salpican una fértil meseta contenida entre dos cadenas montañosas. A la derecha una lengua de cordillera de cerros nevados. El tamaño de las parcelas, producto de la reforma agraria de 1953, dio pie a la creación de un neologismo: el *surcofundio*.

El autobús avanza hacia el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Allí, la mitología sitúa el nacimiento de la dinastía inca; y la historia, la cuna de la civilización de Tihuanaco, la decana de todas las culturas andinas. En los alrededores de este lago también fue donde más calaron a partir de los setenta las ideas indianistas y kataristas, que impulsaban la recuperación de la «memoria larga» de la colonia, según palabras de Silvia Rivera²⁴. Cuando «la memoria larga» logró entroncarse con la «memoria corta» de la explotación y el racismo cotidianos, fue posible tomar conciencia de «estar viviendo como extranjeros en la propia tierra».

El ciclo de movilizaciones iniciado en el año 2000 y la llegada de Evo Morales al Gobierno ha acelerado un proceso iniciado en las décadas anteriores. El sociólogo Pablo Mamani habla de un lento proceso de «implosión» hacia dentro de las comunidades que terminó explotando «en la cara de los opresores». Después de una cuesta, el lago Titicaca aparece en el horizonte, como una línea azul entre los *surcofundios*.

Para Mamani hay razones para ser optimista: este proceso situará a la sociedad boliviana en un punto histórico muy diferente. «No vamos a haber retrocedido ni adelantado, sino que nos habremos movido en la espacialidad de la historia a otro punto, y podremos desde ese otro punto mirar el mundo, el poder, la política, la economía... Lo que la gente está pensando, lo que está diciendo, lo que está soñando va mucho más allá del Gobierno de Evo, al mismo tiempo que está agradecida a muchas cosas que hizo».

«Esta historia no se ha acabado —concluye Mamani—; no sabremos cuándo se acaba porque es un proceso de largo recorrido. En términos políticos e históricos es muy emocionante: algo que no sabías que podías hacer resulta que puedes hacerlo, lo descubres y eres tú, somos nosotros y es el momento más emocionante de cualquier pueblo».

24. RIVERA CUSICANQUI, S. (2008), «Enseñanzas de la insurgencia étnica en Bolivia», en ESPASANDÍN LÓPEZ, J., e IGLESIAS TURRIÓN, P. (coords.), *Bolivia...*, op. cit.



- | | | | |
|-------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 Amazonas | 8 Cusco | 14 Lambayeque | 20 Piura |
| 2 Ancash | 9 Huancavelica | 15 Lima | 21 Puno |
| 3 Apurímac | 10 Huánuco | 16 Loreto | 22 San Martín |
| 4 Arequipa | 11 Ica | 17 Madre de Dios | 23 Tacna |
| 5 Ayacucho | 12 Junín | 18 Moquegua | 24 Tumbes |
| 6 Cajamarca | 13 La Libertad | 19 Pasco | 25 Ucayali |
| 7 Callao | | | |

PERÚ

«La revolución no es muerte, ni imposición, ni sometimiento, ni fanatismo. La revolución es vida nueva, es convencer y luchar por una sociedad justa, digna, solidaria» (María Elena Moyano, líder feminista y comunitaria)

Las diez vidas de Hugo Blanco

DÍA 168 / II DE ABRIL DE 2011 / DE DESAGUADERO A CUSCO

En Desaguadero, la basura se acumula en los márgenes del Titicaca. Cambistas pertrechados con mantas y calculadoras ofrecen soles desde sus taburetes de plástico. Turistas y comerciantes hacen equilibrios para trasladar sus bultos en carros arrastrados por bicicletas. Las construcciones de adobe, el paisaje semiárido y el carácter combativo de la población aimara podrían hacer dudar sobre el lado de la frontera en el que se está. Sobre todo si coincide con bloqueo de caminos. Pero los carteles electorales hacen imposible la confusión.

El día antes, 10 de abril de 2011, Ollanta Humala —un excoronel entrenado en la Escuela de las Américas que sus oponentes se empeñaban en llamar «el Hugo Chávez peruano»— y Keiko Fujimori —hija del expresidente Alberto Fujimori— habían pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Cada muro, cada roca, cada casa se habían convertido en anuncios proselitistas. ¿Keiko o Humala? «Sobre Ollanta Humala hay dudas; sobre Keiko Fujimori hay pruebas». La frase del politólogo estadounidense Steven Levitsky se convirtió en una de las más repetidas en los siguientes meses.

Cuatrocientos kilómetros al noroeste, sin bajar en ningún momento de la cordillera, el autobús llega a Cusco, la antigua capital del

Imperio inca. Los sillares de hasta catorce aristas, sumamente útiles en zonas sísmicas, siguen sosteniendo muchas de las construcciones dejadas por los españoles. Por una de las empinadas cuestas aparece Hugo Blanco bajo la lluvia. El histórico líder campesino trepa con facilidad por el empedrado resbaladizo con su sombrero de paja y sus sandalias de indio.

«El gato peruano tiene siete vidas, el gato sueco nueve», dice mientras se sirve un mate de coca, ya a cubierto. En sus casi ochenta años de vida, hasta nueve veces le vio la cara a la muerte, según su propia cuenta. Sin embargo, a medida que avanza en su relato queda claro que se ha dejado unas cuantas veces fuera. Condenas de muerte, tiroteos, secuestros, intentos de asesinato, alguna enfermedad, catorce huelgas de hambre, torturas y cárceles... Y siempre la muerte salió perdiendo.

Pese a haber nacido en 1934 en una familia de clase media, Hugo Blanco decidió, como su admirado escritor José María Arguedas, ser indio. Un hecho marcó su infancia: el hacendado Bartolomé Paz ordenó marcar con un hierro candente sus iniciales en el trasero de un campesino indígena. En esos años en Perú seguía vigente el gamonalismo, un sistema de servidumbre heredado de la colonia.

Después de estudiar y trabajar como obrero en Argentina, donde vivió los dos golpes militares que acabaron en 1955 con el Gobierno nacionalista de Juan Domingo Perón, volvió a su región natal, el Cusco. Allí empezó a trabajar en una hacienda de la provincia de La Convención, en la zona de Chaupimayo, donde se empezaban a formar sindicatos para luchar contra el gamonalismo. Eran los años sesenta. El hacendado permitía que el campesino cultivara un pedazo de tierra, pero en pago debía trabajar en la hacienda y realizar toda clase de labores para el patrón: sembrar sus tierras o trabajar como sirviente doméstico —*pongo*— para el señor, entre una larga lista de abusos.

El escritor y antropólogo José María Arguedas fue quien mejor retrató las humillaciones vividas por los campesinos de las haciendas. El cuento *El sueño del pongo* sigue siendo uno de los favoritos de Hugo Blanco. Un patrón maltrataba a su siervo día tras día, lo obligaba a ladrar y a arrastrarse como un perro. Un día, el pongo se acerca al señor y frente a todos los siervos le dice que la noche pasada soñó con él. El patrón le pide que le cuente el

sueño. El campesino procede: el patrón y el pongo están muertos, desnudos los dos frente a san Francisco. El santo ordena a un ángel traer una copa de oro con miel para verterla encima del patrón. «Así tenía que ser», dice el hacendado. El pongo continúa con el sueño: san Francisco ordena al ángel de «menos valer» que traiga un tarro de gasolina con excremento humano y que lo unte sobre el indio. «Así tenía que ser», dice el señor. Pero el sueño del pongo no terminaba ahí. San Francisco da su última orden: que se lamen el uno al otro por toda la eternidad.

La justicia que el pongo de José María Arguedas consiguió en la otra vida gracias a un santo, la consiguieron los campesinos de las haciendas de la zona de La Convención y Lares gracias a una huelga indefinida. «Imagínense lo aventurero que es el trotskista Blanco, que tiene a su sindicato en huelga nueve meses, decían los estalinistas de la Federación de Trabajadores del Cusco», recuerda Blanco. Pero no era una huelga al uso. Cuando un obrero hace huelga, pierde su salario y puede ser despedido. Pero ¿qué ocurre cuando un campesino hace una huelga que consiste en no trabajar para el señor y dedicarse a cuidar su propia tierra y esa huelga se contagia a todas las haciendas de una región? Es la revolución. La reforma agraria desde abajo.

Pero muchos hacendados se negaban a firmar los pliegos de reclamaciones, ni aceptaban reconocer los sindicatos. Las demandas iniciales de los campesinos —jornadas de ocho horas, el fin de los maltratos, libertad sindical— fueron sobrepasadas por la huelga, que se convirtió en un cuestionamiento directo a la estructura semifeudal de la tierra. Con la consigna «Tierra o muerte», llegó a haber cien haciendas en huelga.

Guerrilla en legítima defensa

Los hacendados comenzaron a portar armas, a disparar al aire, a amenazar de muerte a los «indios ladrones», tal como los llamaban. Los campesinos denunciaron los hechos a la Guardia Civil, pero se encontraban con un muro. «Indios sinvergüenzas, ustedes cara de quejarse, le están robando la tierra al patrón y él tiene derecho a matarlos como perros», fue una de las respuestas que recibieron, según cuenta Blanco. Ante la complicidad de la Policía, muchos

afectados acudieron a la recién creada Federación Provincial de Campesinos en La Convención.

Organizaron comités de defensa. Lo primero era conseguir armas. En previsión de un estallido, las autoridades prohibieron su venta en el sur de Perú. «Pero como los comerciantes son capitalistas dijeron: “Ah, las armas están prohibidas en el sur del Perú, eso quiere decir que tienen buen precio, vamos a llevar allá”». Solo faltaba el dinero para comprarlas. Una noche cargaron con el ganado del hacendado y lo vendieron. «Al día siguiente la carne se vendió más barata que nunca».

En un principio los grupos de autodefensa cumplieron con su objetivo: los hacendados rebajaron la violencia de las amenazas. Pero las críticas de la derecha al Gobierno militar por permitir esta «alteración del orden» determinaron el inicio de una escalada represiva. Mataron a un campesino y «a culatazos» entraban en las asambleas de los sindicatos. En medio de esta contraofensiva, un hacendado allanó acompañado de un policía la vivienda del secretario general del sindicato local. No encontraron más que a un niño de once años. «El chiquito, como no sabía dónde estaba, empezó a llorar y de un balazo el patrón le rompió el brazo, en presencia del policía. Entonces el compañero vino a buscar ayuda. A mí ya me perseguían en esa época», cuenta.

—¿A qué autoridad puedo quejarme? —preguntó el campesino desesperado.

Reunidos cuatro sindicatos, los representantes decidieron enviar una comisión encabezada por Blanco para pedir cuentas al patrón. «Teníamos que pasar dos puestos de la Policía antes de llegar a esa hacienda. Uno logramos eludirlo, pero el otro no». Frente al puesto, un policía hacía como que leía el periódico.

—Señor, quiero hablar con usted —dijo Blanco.

—Sí, pase —el policía lo invitó a entrar.

—¿Sabe que en esta hacienda el patrón ha herido a un niño? Ahora nos están mandando en comisión para pedirle cuentas, pero como no tenemos suficientes armas estamos viniendo a llevar las armas de acá... —decía Hugo Blanco mientras iba sacando el revólver—. Así que usted levante las manos y quedese tranquilo, nosotros vamos a sacar las armas y no va a pasar nada.

—Ah, si ustedes quieren las armas yo se las voy a dar...

—Usted quédese tranquilo, levante las manos o disparo —subió la voz Blanco.

El policía se puso de pie, pero en vez de levantar las manos intentó sacar el arma. Hugo Blanco disparó. El agente alcanzó a desenfundar el revólver y a disparar, pero ya se caía. «Un segundo más me demoraba y era yo el muerto —cuenta—. Empezó el tiroteo. Solo después de una granada de mano casera se rindió el otro guardia». Trajeron al enfermero de Pucyura, el pueblo donde se encontraban, pero no fue suficiente para salvar al policía herido.

Esos tiempos de clandestinidad, entre tiroteos con la Policía y noches a la intemperie, contribuyeron a la creación de decenas de sindicatos y la extensión de la huelga campesina. Pero el cerco se estrechaba alrededor de la columna de Hugo Blanco.

—¡Quieto, saca las manos! —gritó el policía que lo encontró.

—¿Voy a sacar las manos o voy a estar quieto? —contestó Blanco.

«Muchas veces en mi vida he tenido miedo, pero en esos momentos acostumbro a estar tranquilo», se ríe. Era mayo de 1963. Comenzaban sus años de prisión.

«Tierra o muerte»

En el cuartel del Ejército, en Cusco, Blanco entabló amistad con los guardias. «Cada día les daban charlas anticomunistas, por temas. Y yo les daba la contracharla. Me contaban los abusos, la corrupción, y sacábamos un boletín: *El Guardia*». Fueron casi tres años de incomunicación, a la espera de ser juzgado.

Las sesiones del consejo de guerra empezaron en 1966 en la lejana ciudad costera de Tacna. «Aprovechamos políticamente la audiencia. Durante tres años les habían repetido a los compañeros que detuvieron conmigo que lo único que tenían que decir para librarse es que eran campesinos analfabetos, que el comunista Hugo Blanco los había engañado. Pero ninguno dijo eso». Cuando Hugo Blanco entró en la audiencia pública, vio a treinta de sus compañeros.

—¡Tierra o muerte! —gritó Blanco, puño en alto.

—¡Venceremos! —gritaron los treinta.

Uno de los fiscales solicitó la pena de muerte para Hugo Blanco. Y parecía claro que la sentencia sería condenatoria.

—¿Tiene algo que agregar? —dijo el juez.

—Sí —respondió Blanco—. Si los cambios sociales que ha habido en la zona de La Convención merecen la pena de muerte, estoy de acuerdo con ella. ¡Pero que sea este [señalando al que la había pedido] quien dispare con su propia mano! ¡Que no manchen con mi sangre las manos de subalternos porque ellos son hijos del pueblo y por lo tanto mis hermanos!

Antes de que la sentencia fuera leída, Blanco volvió a gritar «Tierra o muerte», pero en esa ocasión, también el público respondió la arenga. El juez no tardó en desalojar la sala. La campaña internacional para pedir su liberación e impedir que fuera ejecutado —Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir fueron las caras más visibles— funcionó. La opción de la pena de muerte fue descartada, pero fue condenado a veinticinco años de prisión.

La mecha de la reforma agraria

A pesar de su detención, la reforma agraria en el sur de Perú ya estaba en marcha. Hugo Blanco reconstruye la reflexión del Gobierno de la época: «Estos indios se han acostumbrado durante más de diez meses a vivir sin trabajar para la hacienda. ¿Cómo vamos a conseguir que vuelvan a servir al patrón? Eso se va a convertir en un incendio. Mejor sacamos una ley de reforma agraria, pero solo para esta zona». Y eso fue lo que hicieron. Pero, como era de esperar, la rebelión se extendió por otras regiones. En esos años, la Administración de Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) había reemplazado al Gobierno militar.

«A La Convención le han dado tierras porque agarraron las armas, y a nosotros nada» era, a su vez, la reflexión de los campesinos que se lanzaban a la toma de tierras en todo Perú. Entonces los militares dijeron: «Este Belaúnde va a incendiar todo el país, mejor nosotros tomamos el poder y lo que hemos hecho en La Convención lo hacemos en todo el Perú».

Y así lo hizo el Ejército, comandado por Juan Velasco Alvarado, que tomó el poder en 1968 con un programa nacionalista y popular, combinado con recortes en las libertades públicas. La expropiación de las petroleras, la nacionalización de sectores claves de la economía y una amplia reforma agraria que acabó definitivamente con el gamonalismo fueron algunas de las medidas de este general que

gobernó de facto entre 1968 y 1975. «El gamonalismo de todas formas hubiera muerto, pero hubiera sido sustituido por el capitalismo agrario. Ahora el Perú sigue siendo el país de Latinoamérica que tiene mayor porcentaje de la tierra en manos de los campesinos, ya sea individual o colectivamente, gracias a la lucha del campesinado», reconoce Hugo Blanco.

Después de que Blanco se negara a colaborar con el Gobierno de Velasco Alvarado, en 1970 fue deportado a México. Tras un breve paso por una cárcel para extranjeros en calidad dudosa, consiguió llegar a Argentina. Pese a tener los papeles en regla, fue encarcelado en la prisión de Villa Devoto, en Buenos Aires, por permanencia ilegal.

Era el año 1971. En Argentina gobernaba el general Alejandro A. Lanusse. En un principio lo destinaron con los presos comunes. Allí lo felicitaron.

—Che, ¿vos sos peruano? Mis respetos, viejo, ustedes trabajan muy bien —le dijo un recluso.

Pero no era por la lucha en el campo. «El preso era carterista y entre los carteristas los peruanos son los mejores», se ríe Blanco. Entre todas las prisiones por las que pasó, Villa Devoto sigue siendo de la que guarda peor recuerdo: «Pronto se dieron cuenta de que era político y me mandaron con los del ERP [Ejército Revolucionario del Pueblo]. Pucha, ahí la represión fue jodida. Llegaban y gritaban “¡alto!” y todos teníamos que quedarnos quietos y decían “¡desnúdense!”, “¡agarren sus cosas, afuera, vístanse, de cara a la pared, sin hablar!”. Al volver al pabellón, al ajedrez le faltaban seis piezas, habían roto las cartas de la mamá, de la enamorada, las fotografías...».

Chile y Argentina, junio y septiembre

La denuncia internacional de su encarcelamiento le abrió las puertas de Chile. El primer golpe militar contra el Gobierno de Salvador Allende, en junio de 1973, lo sorprendió cuando militaba en el cordón industrial Vicuña Mackenna, donde era el responsable del boletín informativo. Hugo Blanco se encargó de señalar en la publicación el siniestro parentesco con los alzamientos militares que acabaron con el Gobierno de Perón en Argentina. En ambos casos, el golpe de prueba fue en junio. Y el definitivo en septiembre. A él le tocó vivir de cerca los cuatro golpes. En el primer levantamiento

militar contra Perón, el 16 de junio de 1955, el bombardeo de la Plaza de Mayo había dejado 364 civiles muertos. «Todos a los camiones, golpe en Buenos Aires», fue la consigna, recuerda Blanco. «Los del Gran Buenos Aires fueron los primeros en llegar, asaltaron las armerías, quemaron las iglesias, quemaron el arzobispado», relata.

Pero los militares argentinos aprendieron la lección. El siguiente golpe, en septiembre del mismo año, no se inició en Buenos Aires, sino en Córdoba, en el interior del país. «Perón dijo: “Ustedes tranquilos, yo voy a sofocar eso”. Mandó una guarnición para que aplastara a los insurrectos y la guarnición se plegó al golpe. Perón decía que la obligación de los obreros es “ir del trabajo a casa y de casa al trabajo”, que no había que hacer como esos comunistas que quemaron las iglesias y asaltaron las armerías. Pero había sido el pueblo peronista el que había hecho eso. Hasta que solo quedó Buenos Aires». La Marina amenazó con bombardear la capital si Perón seguía en el poder. Perón finalmente dimitió y huyó del país.

En el primer golpe de Chile, en junio de 1973, los obreros del cordón Vicuña Mackenna organizaron la resistencia.

—¿Ya han nombrado a los mensajeros para comunicarse con las otras fábricas? —preguntó Hugo Blanco.

—Compañero, esto no es Chaupimayo, acá hay teléfono —le dijeron.

—¡¡Han cortado!! —se escuchó el grito, poco después, cuando las líneas quedaron inutilizadas por el Ejército.

El primer intento había fracasado, pero los rumores de un nuevo golpe crecían. «Unos compañeros estaban encargados de la defensa armada, y tenían que reunirse... pero no se reunían. “¿Va a haber reunión o no va a haber reunión?”, preguntamos. Hasta que al final nos dijeron la verdad. No quieren que nos armemos porque hay militares constitucionalistas que apoyan el régimen y el partido no quiere perder su apoyo. Uno de esos militares constitucionalistas era Augusto Pinochet. Frenaban, frenaban, hasta que ya fue demasiado tarde». Cuando Pinochet lideró el segundo golpe, el 11 de septiembre de 1973, apenas algunos barrios pudieron sostener una breve resistencia.

Hugo Blanco no tenía vínculos con el Gobierno, pero también estaba en la lista negra. Desde la clandestinidad empezó a buscar la forma de abandonar el país. En esta ocasión no fue la suerte ni

su pericia lo que le salvó la vida, sino la ayuda del embajador sueco Harald Edelstam. «Mandó que me afeitara, que me pusiera el terno de su hermano, corbata negra, anteojos, me hizo lavar la cara, me hizo sacar una foto y me dio un carné: Hans Blum, consejero de la embajada sueca. En su carro salí, mostré el documento, no abrí la boca por supuesto y me dejaron pasar».

Secuestrado en la *Operación Cóndor*

En 1973, Hugo Blanco se instaló en Suecia. Después de recorrer buena parte de Europa occidental dando charlas sobre el golpe de Chile, emprendió una gira por Estados Unidos. Cuando estaba por concluir su recorrido por 48 ciudades hablando sobre los derechos humanos en América Latina, estalló una gran huelga general en Perú. Era julio de 1977. «Dejaron entrar a los exiliados, llamaron a la Asamblea constituyente y yo regresé con mi proyecto de Constitución ultraizquierdista bajo el brazo», cuenta. Hugo Blanco volvía a pisar suelo peruano como un hombre libre y como candidato a la Asamblea constituyente por el Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular (Focep).

«Había espacios de televisión gratuitos para los candidatos, y en ese momento se había vivido un paquetazo, un alza de precios tremenda, y yo estaba deprimido, pensaba que lo iba a hacer mal», recuerda. Pero no tardó en inspirarse.

—Bueno, compañeros, acabamos de sufrir un paquetazo terrible —dijo Hugo Blanco en la televisión—. ¿Qué hacer contra eso? ¿Votar por mí? No, que voten por mí o que no voten por mí da igual, lo que tenemos que hacer es estar todos como un puño los días 27 y 28 que ha llamado la Confederación General de Trabajadores del Perú a un paro. ¡Todos en el paro!

A las cinco horas, «así, candidato y todo», volvía a estar preso. Pero esta vez el Gobierno tenía pensado un destino diferente para el líder campesino, una solución definitiva para su caso: la Argentina del general Videla. En un avión del Ejército, junto con otros detenidos políticos, Hugo Blanco fue conducido hasta Jujuy, en el norte argentino.

Los militares lo trasladaron en una avioneta a Buenos Aires, donde volvió a visitar los calabozos de la Policía de investigaciones.

«Afortunadamente un periodista de Jujuy vio cómo bajábamos del avión y sacó una foto, por eso no nos desaparecieron», explica. Una de las teorías es que Francisco Morales Bermúdez, presidente peruano de facto entre 1975 y 1980, había permitido el secuestro y deportación de cuatro miembros del grupo Movimiento Peronista Montonero residentes en Perú como parte de la *Operación Cóndor*. La eliminación de Hugo Blanco y los otros presos políticos sería un favor a cambio de este servicio prestado. Pero aquella foto desbarató sus planes. No fue la última vez en que estuvo a punto de morir. Quedaba Hugo Blanco para rato.

Entre el Ejército y Sendero

BARRIO DE SANTA BEATRIZ / LIMA

Las regiones de Perú están delimitadas por los Andes. Hacia el este y el oeste de la cordillera descienden los principales ríos. Hacia el Atlántico, en caudalosos afluentes del río Amazonas, que cruzan una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Hacia el Pacífico, en aislados ríos que literalmente serpentean entre las piedras, la arena y los arbustos bajos del desierto. Alrededor de los valles que irrigan estos ríos se asentaron culturas milenarias como la de Nasca y hoy se encuentran algunas de las principales ciudades de Perú. Entre ellas, Lima, que con sus 8,5 millones de habitantes en su área metropolitana concentra casi la tercera parte de la población del país.

Los primeros habitantes de la capital se instalaron en el valle del río Rímac, pero la llegada de migrantes del campo llevó al crecimiento de la ciudad sobre kilómetros y kilómetros de desierto. Muchos de estos «barrios jóvenes» están todavía contruidos con adobe, ladrillo y cañas, sin apenas servicios. En Lima, 800.000 habitantes siguen sin tener acceso al agua potable.

El contraste entre las barriadas del extrarradio y los anuncios de multinacionales sobre los rascacielos de cristales tintados del centro financiero de la ciudad no puede ser más brusco. Las autopistas, que multiplican los carriles, no parecen pertenecer al mismo país que las precarias construcciones que acompañan el viaje desde la

frontera con Bolivia. «Hay dos Perús: el Perú legal, que es Lima, y el Perú real», resume Miguel Palacín, expresidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

Cualquiera lo diría con un simple paseo por el centro o por la parte moderna de Lima, pero cerca de la mitad de la población peruana es indígena o afrodescendiente¹. Palacín intenta explicar el racismo en Perú, y «su espejo» ampliado, el racismo limeño: «Si alguien viene hablando quechua aquí es excluido. Pero no es que Lima sea así. Lima tiene un porcentaje muy alto de población migrante. Aquí cerquita, toda la noche se hacen negocios en quechua. Todos los que vienen con productos de la sierra acá son quechuahablantes, los que van a comprar de madrugada son quechuahablantes y los intermediarios también. El negocio se hace en lengua y estilo quechua. Sale el sol y desaparece el quechua. Aparece la cultura criolla».

A pesar de las semejanzas en la historia y la composición étnica con los países vecinos, en Perú no ha habido un movimiento indígena fuerte, como en Ecuador o en Bolivia. Entre una larga lista de razones, apunta este líder indígena, destaca la herencia del conflicto armado interno (1980-2000). Una idea que comparte Hugo Blanco: «Hubo 70.000 muertos, la mayoría de ellos indígenas. Sendero Luminoso mató a muchos dirigentes obreros, dirigentes de tomas de tierras... Los que no estaban con ellos eran traidores. También sirvió como excusa al Gobierno para asesinar a líderes campesinos, para meterlos presos, para torturarlos... Todo eso llevó a un retraso tremendo. Antes de Sendero, la Confederación Campesina del Perú tenía bases en casi todo el país. Después de la guerra interna, en tres o cuatro departamentos nada más».

Sin embargo, para Miguel Palacín en los últimos años, en concreto desde mayo de 2008, el movimiento indígena y campesino ha comenzado a recuperarse: «Acordamos cerrar en los territorios, trabajar con las bases y empezamos a hacer movilizaciones largas, de quince días, un mes... Hoy hemos logrado ser parte del movimiento social. Ya no somos auditores de ONG, ahora somos actores».

1. Al igual que en el resto del continente, las cifras son polémicas. Según los diferentes estudios y censos, la población afrodescendiente oscila entre el 3% y el 10%, y la indígena entre el 16% y el 50%.

Los perros de Teng Siao Ping²

La mañana del 26 de diciembre de 1980 amanecieron en una avenida del centro de Lima decenas de perros muertos, colgados de postes de la luz. Los viandantes observaban la escena con infinita incomprensión. De los perros colgaba un críptico mensaje: «Teng Siao Ping, hijo de perra». La imagen del policía con pantalones acampanados y camisa de manga corta ajustada desatando a uno de los animales muertos recorrió la prensa internacional e inauguró la década de los ochenta.

Con esta acción, descrita luego como el primer atentado *perro-rista*, Sendero Luminoso hacía su presentación formal en sociedad³. Según el periodista Carlos Decker-Molina⁴, este grupo maoísta dejaba claro desde sus primeras apariciones públicas las líneas que acompañarían toda su trayectoria: frente a las diversas desviaciones, sean chinas, soviéticas, trotskistas o socialdemócratas, Sendero Luminoso asumía su papel de «partido elegido». Su líder, Abimael Guzmán, alias *Presidente Gonzalo*, se erigía como la «cuarta espada de la revolución», junto con Marx, Lenin y Mao.

Las ideas que pregonaba Sendero —marxistas leninistas, pero «principalmente maoístas»— encontraron terreno abonado en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho), donde su fundador, Abimael Guzmán, enseñaba Filosofía desde los años sesenta. Lejos de las aulas, en el campo, Sendero consiguió expandirse con un discurso que se contraponía frontalmente al del Estado. El Estado hablaba en español; Sendero en quechua. El Estado hablaba de Lima, de democracia representativa y del Parlamento; Sendero hacía juicios populares y mataba a los «malos elementos», a los usureros, a los ladrones, a los patrones y los capataces. El Estado prometía y Sendero redistribuía víveres. A pesar de las reformas

2. Teng Siao Ping, más conocido como Deng Xiaoping, fue el máximo dirigente del Partido Comunista Chino entre 1978 y 1997, responsable de la introducción de reformas económicas destinadas a la liberalización de la economía.

3. Meses antes, el 17 de mayo de 1980, Sendero quemó las urnas de las elecciones en Chuschi (Ayacucho).

4. DECKER MOLINA, C. (1986), «Sendero Luminoso: herederos del Inca y seguidores de Mao», *Crisis*, n. 46, septiembre de 1986.

agrarias de la época de Velasco Alvarado, la población campesina e indígena seguía viviendo en la miseria, marginada por el Estado.

Según explica la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el culto a la personalidad dentro de Sendero llevó a sus militantes a considerar a Abimael Guzmán como «la encarnación del pensamiento más elevado en la historia de la humanidad». Este mesianismo tuvo reflejo en las cifras del conflicto armado: de las casi 70.000 personas asesinadas entre 1980 y 2000, la Comisión de la Verdad estima que un 46% fue responsabilidad directa de Sendero Luminoso⁵, un porcentaje que diferencia radicalmente a esta organización del resto de experiencias guerrilleras latinoamericanas.

Ayacucho: estado de sitio

En 1982, Sendero Luminoso dio un golpe de efecto sin precedentes. En la madrugada del 3 de marzo cuatro comandos guerrilleros se hicieron con el control de la ciudad de Ayacucho durante media hora. En ese intervalo consiguieron abastecerse de una gran cantidad de armas y liberar a 304 presos, de los que setenta eran senderistas.

Al estado de emergencia decretado el año anterior, se le sumó la suspensión de las garantías constitucionales. A finales de 1982, las Fuerzas Armadas asumían el control de Ayacucho. La espiral de terror no había hecho más que empezar. Según la Comisión de la Verdad, las detenciones indebidas, la tortura y las desapariciones forzadas «adquirieron un carácter masivo». Para los militares las palabras campesino o indígena se convirtieron en sinónimos de senderista.

Pero la población civil tampoco encontró protección en la guerrilla maoísta. Desde el inicio del conflicto, sectores del campesinado más pobre, dice la Comisión de la Verdad, «se levantaron contra un proyecto que se les imponía por la fuerza». En algunos casos de modo espontáneo, y en otros obligados por las Fuerzas Armadas, en las comunidades se crearon comités de autodefensa, las llamadas

5. Según el informe de la Comisión de la Verdad, el 30% de las muertes fue provocado por agentes del Estado y el 24% por otros actores o circunstancias (rondas campesinas, MRTA, grupos paramilitares, agentes no identificados o víctimas ocurridas en enfrentamientos o situaciones de combate armado).

rondas campesinas. El mejor ejemplo de la relación entre Sendero y las comunidades que no compartían el proyecto del Presidente Gonzalo se llama Lucanamarca.

En abril de 1983, campesinos de la comunidad de Santiago de Lucanamarca lincharon a un senderista en la plaza del pueblo. En respuesta, militantes senderistas, sin apenas armas de fuego, tomaron el pueblo. Masacraron con palos, hachas, cuchillos y picos a 69 personas. El mensaje debía quedar claro: entre las víctimas, dieciocho tenían entre seis meses y diez años. En la llamada «entrevista del siglo» que Abimael Guzmán concedió al periódico marxista *El Diario* en 1988 y que duró doce horas, el Presidente Gonzalo reconocía haber dado la orden de la masacre: «Ahí lo principal fue hacerles entender que éramos un hueso duro de roer, y que estábamos dispuestos a todo, a todo».

Actuaciones como la de Lucanamarca hicieron que el inicial arraigo de Sendero entre el campesinado altoandino se convirtiera en muchos casos en rechazo⁶. Mientras la mayor parte de la población costeña desconocía lo que estaba pasando, la gente más humilde de las regiones más pobres del país⁷ se encontraba asediada entre la actuación de las Fuerzas Armadas y la de Sendero. La Comisión de la Verdad estima que el 75% de las víctimas del conflicto eran quechuhablantes. Y que el 30% de los muertos y las desapariciones fueron responsabilidad de las Fuerzas Armadas.

El principal centro clandestino de reclusión, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada fue el cuartel general Los Cabitos, en la ciudad de Ayacucho. En el sector conocido como La Hoyada, que sirvió de campo de entrenamiento militar para Los Cabitos, se han encontrado un total de cincuenta fosas. Aunque todavía hay discrepancias en cuanto a la cifra, la Fiscalía estima que el conflicto dejó unos 15.700 desaparecidos. Se presume que muchos de los cadáveres de estas personas fueron escondidos por el Ejército en La Hoyada. Casi nadie se atrevía a denunciar estas

6. PIQUERAS, M. (2007), *Informe final: etnicidad, Ejército y Policía en el Perú. Una aproximación*, Crise y Cisepa, Lima, p. 31.

7. Los departamentos más afectados por el conflicto fueron Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín.

desapariciones por miedo a ser calificado de *terruco* [terrorista]. Hasta que llegó Mamá Angélica.

La bala que no mató a Mamá Angélica

Llegaron pasada la medianoche a su casa de adobe, en la periferia de Ayacucho, aparcaron los vehículos fuera y entraron en los dormitorios a patada limpia. Angélica Mendoza de Ascarza fue a encender la luz, pero los militares no le dejaron. Cuando se quiso dar cuenta, estaban vapuleando a uno de sus hijos en el patio de la casa. «Me armé de valor y salí de mi dormitorio, me aferré a mi hijo, y los militares me golpearon y me lo quitaron», contaba Mamá Angélica. «Ya va a regresar, lo estamos llevando para interrogarlo, vengan mañana al cuartel», le dijo uno de los hombres que se llevaron a Arquímedes, que entonces tenía veinte años y estaba a punto de entrar en la universidad⁸.

Al día siguiente, Angélica Mendoza fue al cuartel Los Cabitos, donde negaron que su hijo hubiera sido detenido. También preguntó en otras entidades policiales y militares. Nada. Cuando fue a presentar la denuncia ante el Ministerio Público coincidió allí con otras mujeres. Todas eran campesinas humildes y a todas les habían arrebatado a alguien, a unas un hijo, a otras un marido, a otras un padre.

Angélica Mendoza no dejó de insistir. Iba al cuartel, a la iglesia, a la Fiscalía, caminaba con las otras mujeres por las calles de Ayacucho en señal de protesta. Nadie les daba ningún dato —al menos ningún dato cierto— sobre el paradero de sus familiares y las acusaban de *terrucas*. Era agosto de 1983 y la situación iba a más: cada día había más personas desaparecidas, más huérfanos y más mujeres que, pese al miedo, decidían no quedarse calladas.

Venciendo todos los estigmas que acumulaban en las espaldas, el de *terrucas*, el de mentirosas y el de indias que no hablan bien español, viajaron a Lima para presentar su denuncia ante el Gobierno

8. Según detallaba la documentación elaborada para el evento *Kallpay Warmi: la República nos debe una explicación. Educación, derechos humanos, género y violencia*, Lima, 16 de marzo de 2012.

central. Tenían muy pocos recursos y pasaron la noche en el parque Campo de Marte. A la vuelta, crearon la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos en Zonas de Emergencia (Anfasep). La alcaldesa de Ayacucho, Leonor Zamora, que no se dejó intimidar por las Fuerzas Armadas, les facilitó un espacio para reunirse. Zamora además sacaba *altoparlantes* a la plaza para que las mujeres hicieran públicas sus denuncias. Años más tarde, durante el fujimorismo, Zamora fue desaparecida.

Mamá Angélica no cesó de buscar a su hijo. Con sus compañeras Teodosia, Antonia y Adelina, se metía en los lugares más sórdidos de Ayacucho, en las quebradas donde de vez en cuando aparecían cadáveres y en los botaderos de la ciudad. En una ocasión encontraron más de veinte cadáveres, casi todos sin cabeza, en un vertedero. Acudieron a la Fiscalía para que investigara y protegiera las pruebas. «Mañana, ahora no tenemos tiempo», les dijeron. Al día siguiente los cuerpos no estaban. Ellas no pararon de buscar. Encontraban cadáveres en la tierra, con un tiro en la sien, a veces calcinados, a veces en estado de descomposición y devorados por los perros. Sobre ellas, los gallinazos esperaban su turno. Los militares las amenazaban constantemente:

—¡Vieja de mierda! Sal de ahí o te disparamos —le gritó uno a Mamá Angélica. Un comandante se acercó y le pidió que se retirara. Los otros la amenazaban, le decían que la bala que la mataría valía más que su vida.

—¿Cuánto vale una bala? Te pago el precio de esa bala para que me mates, pero primero hazme ver a mi hijo y luego me iré feliz de este mundo —retó Angélica a un soldado. Nadie disparó.

«Un presidente especialmente sangriento»

En 1985 llegaba a la presidencia un joven político llamado Alan García⁹ con un discurso de cambio de modelo económico. La decisión de suspender el pago de la deuda externa ganaba aplausos en la Asamblea

9. Durante décadas, Alan García fue el líder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), uno de los partidos históricos peruanos, fundado en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre.

General de la ONU y el proyecto de nacionalizar la banca privada simpatías entre los grupos de izquierda de todo el mundo. Pero la crisis económica y una hiperinflación de cuatro dígitos lo llevó a negociar con el FMI y dar por terminados los experimentos económicos. Alan García tampoco cumplió sus promesas de resolver el conflicto armado combatiendo la pobreza que lo alimentaba. La masacre de los penales, en 1986, en donde la Marina de Guerra acabó con el motín de la cárcel de El Frontón a cañonazos y con 250 muertos, confirmaba «el carácter especialmente sangriento» de Alan García, según palabras de Hugo Blanco. Casi tanto como las masacres de campesinos en Accomarca (1985), Cayara (1988) o Pucallpa (1989).

Accorralado por casos de corrupción, Alan García dejó un país en bancarota y con una clase política desacreditada. ¿Quién mejor que un reconocido profesor universitario de Matemáticas, sin experiencia política previa, para arreglar una inflación anual del 2.773%? Más si prometía hacerlo sin recurrir a un fuerte ajuste económico.

«Un presidente como tú», decía la campaña de Alberto Fujimori. Y no precisamente porque este ingeniero de origen japonés apodado *el Chino* se pareciera en mucho a la mayoría de la población peruana. Subido al *Fujimóvil*, que él mismo había diseñado, vestido de poncho y con el tradicional gorro con orejeras, el discurso nacionalista y popular del Chino se coló entre las casas de adobe de los barrios sin asfaltar.

Pero nada más llegar al Gobierno, Fujimori no solo impulsó las recetas neoliberales que tanto había criticado a su contrincante, el escritor Mario Vargas Llosa, sino que implantó medidas todavía más radicales. En agosto de 1990, las protestas contra el *fujishock* se saldaron con tres muertos, una oleada de disturbios, saqueos en Lima y 6.000 detenidos. Las palabras del ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, en la presentación del plan no podían ser más gráficas: «Que Dios nos ayude».

Carlos Rivera, de la organización de derechos humanos Iniciativa de Defensa Legal (IDL), conoce muy bien la trayectoria de Alberto Fujimori. Fue uno de los siete abogados de la acusación que consiguió encarcelar al que se considera hoy el séptimo presidente más corrupto de la historia, según un informe de Transparencia Internacional de 2011. Para Rivera, durante el Gobierno de Fujimori se pasó del «pillaje al crimen organizado». Una pieza fundamental fue

la privatización de las empresas estatales, un proceso que implicó el despido de más de 200.000 empleados públicos. Las multinacionales, entre ellas las españolas Telefónica, Repsol, Endesa y BBVA, se hicieron con el sector público por 9.200 millones de dólares¹⁰, aunque solo 7.000 millones llegaron a las cuentas del Estado. Según la Procuraduría, cuando Fujimori huyó del país, 6.000 de esos millones se habían esfumado¹¹. Parte de ese «dinero fresco» que entró en las cuentas del Estado permitió una política asistencialista que dotó al régimen de un importante apoyo popular, cuenta Rivera. A través de los bonos de ayuda, el Gobierno se hacía presente en sectores rurales y urbanos marginales, donde nunca antes había llegado el Estado. Alberto Fujimori se convertía en héroe.

El Grupo Colina y la derrota de Sendero

En 1991, Abimael Guzmán anunciaba que el conflicto había llegado a un «equilibrio estratégico». Según su previsión, en la ofensiva final, las «tenazas de hierro», los asentamientos de la periferia, tomarían la capital. Aunque luego se supo que Sendero apenas contaba con armas, lo cierto era que había ampliado su radio de acción a muchos departamentos. «Guzmán presentó como un logro el haber salido de la selva para abarcar otros territorios. Pero, en realidad, era producto de la derrota política de Sendero ante las rondas campesinas», explica Carlos Rivera.

Según este abogado, Fujimori entendió la importancia de las rondas campesinas y les proporcionó armas, como parte de una estrategia que también daba más peso a la inteligencia *contrasubversiva* para identificar mejor al enemigo y eliminarlo. «Aquí no hay eufemismo que quepa. Eliminar es eliminar a una persona físicamente, sacarla de la faz de la tierra», subraya Rivera.

Para los defensores de los derechos humanos, los noventa fueron el periodo más duro. Francisco Soberón llevaba desde 1982

10. RUIZ CARO, A. (2002), *El proceso de privatizaciones en el Perú durante el periodo 1991-2002*, Ilpes / Cepal, Santiago de Chile.

11. EFE, «Balance del Gobierno de Fujimori: desaparecieron 6.000 millones de dólares de las arcas del Estado», *El Comercio*, 8 de abril de 2010.

apoyando a las personas que denuncian torturas o desapariciones, para «obstaculizar la libre actuación de las operaciones militares o policiales». Desde la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) trabajaba con los grupos que enviaban reportes desde las zonas de emergencia, entre ellos el Anfasep de Mamá Angélica. Pero fue en el Gobierno de Fujimori cuando tuvo que restringir su vida social al máximo: de casa al trabajo y del trabajo a casa, eso sí, cada día con un recorrido diferente y siempre con guardaespaldas. «Hubo amenazas telefónicas, a mi oficina mandaron una ofrenda floral con los nombres de varios activistas de derechos humanos. Ahora se ha descubierto que fue el Grupo Colina». Aunque actuaba como tal, el Grupo Colina no estaba formado por paramilitares, era un destacamento del Ejército que respondía a las órdenes de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, su mano derecha. Por documentos desclasificados, Pancho Soberón sabe que estuvo en su lista de objetivos.

Y el Grupo Colina no se andaba con sutilezas. Una noche de noviembre de 1991, en un edificio del barrio limeño de Barrios Altos, un grupo de vecinos organizó una pollada, una fiesta popular para recaudar fondos, en este caso para la reparación de las tuberías del desagüe. Seis efectivos del Grupo Colina entraron en la casa, ametrallaron con silenciador a los asistentes y se fueron por donde vinieron, ya con las sirenas de los automóviles policiales encendidas. Dejaron quince muertos y cuatro heridos graves. Inteligencia había señalado a las víctimas, erróneamente, como senderistas.

El autogolpe

Una oposición incómoda, que además comenzaba a preguntar por el Grupo Colina, llevó a Fujimori al autogolpe. El 5 de abril de 1992 disolvió el Congreso, cesó a los miembros de la Corte Suprema, destituyó al fiscal de la nación, expulsó a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y al 20% de los jueces de todo el país, para sustituirlos, en menos de una semana, por personal afín a un nuevo régimen civil-militar de carácter dictatorial.

Para el economista Óscar Ugarteche, entre las motivaciones del autogolpe destacaba la urgencia para aplicar las medidas neoliberales: «Como había resistencia popular y política, hizo un golpe de Estado y por decreto supremo autorizó las 772 leyes de las reformas econó-

micas al día siguiente, lunes 6 de abril. Inolvidable»¹². Para Carlos Rivera, la planificación fue minuciosa: «Estaba en marcha un plan de corrupción sistemática, de apropiación de fondos públicos para comprar medios de comunicación, para comprar jueces y fiscales, para ocultar no solo el hecho de haber roto el orden constitucional, sino los crímenes que ahora se sabe que habían estado cometiendo Fujimori, su familia y su gente cercana».

Ese mismo año, Fujimori recibió un regalo inesperado: la detención de Abimael Guzmán en Lima, donde había pasado la mayor parte del conflicto. Era un regalo que el Chino no había pedido y que, según la investigación del periodista Gustavo Gorriti, había estado intentando evitar desde 1990¹³. En un nuevo despliegue de *fujimarketing*, el Chino presentó al reo en una gran jaula, vestido con el traje a rayas de los presidiarios de los dibujos animados. Desde dentro de la jaula, el Presidente Gonzalo se dirigía a las cámaras agolpadas con una arenga, puño en alto, que venía a decir que los contendientes de la Segunda Guerra Mundial preparaban otra tercera y que los peruanos, como hijos del conflicto, no lo podían permitir, que su captura era solo un recodo en el camino. Su captura implicó el desbarajuste de Sendero. Sin embargo, según la Comisión de la Verdad, Fujimori infló la amenaza como excusa durante lo que quedaba de década.

«Dueñas de su destino»

VILLA EL SALVADOR / LIMA

Cientos de activistas tuvieron que exiliarse durante la década de los noventa. Es el caso de Hugo Blanco. A la sentencia de muerte del Servicio de Inteligencia Nacional se le añadió la amenaza de Sendero Luminoso. Lo acusaban, entre otras cosas, de «traidor al campesinado

12. UGARTECHE, Ó. (2011), «Entre el futuro y el pasado», *ALAI-América Latina en Movimiento*.

13. GORRITI, G. (2008), «La orden que salvó a Abimael», *Caretas*, enero de 2008.

por decir que había otra forma de lucha además de la lucha armada», asegura este líder campesino. En 1989, Blanco había participado, como secretario de organización de la Confederación Campesina del Perú, en la ocupación de 1,2 millones de hectáreas en Puno. Tras el autogolpe de 1992, Blanco se exilió en México. Otros activistas que decidieron quedarse fueron asesinados. El caso de Giulia Tamayo, histórica defensora de los derechos humanos, fue distinto.

—A mí lo que me salvó es que llevo en la pierna la bala de Sendero.

—¿La bala de Sendero?

La historia de Giulia Tamayo está íntimamente unida a la historia de una conocida activista y feminista peruana: María Elena Moyano. En 1971, 7.000 familias ocuparon un arenal cercano a Lima. La batalla campal que protagonizaron los recién llegados contra la Policía tenía de fondo chozas improvisadas con mimbres y polvo por todos lados. Hubo varios heridos y un muerto, pero las familias consiguieron quedarse y construir la que después sería llamada «ciudad autogestionaria» de Villa El Salvador: un intento de utopía socialista comunitaria impulsada por sectores humildes. María Elena Moyano había llegado en aquella época y se había convertido desde muy joven en una de las luchadoras sociales más respetadas de la villa, donde hoy viven unas 400.000 personas. Líder popular negra, feminista y educadora, Moyano había organizado un sistema de olla común y había impulsado la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador «para que las mujeres no solo sean masa de trabajo, peonas, en las organizaciones sociales, sino dirigentes».

Cuando a principios de los noventa Sendero Luminoso inició su ofensiva en Lima, Villa El Salvador se convirtió en uno de los principales objetivos. El infalible Pensamiento Gonzalo, elevado por las filas senderistas a carácter científico, dictaba que allí encontrarían uno de los principales apoyos para el asedio definitivo de la capital. Por las noches, la silueta de la hoz y el martillo hecha con hogueras iluminaba los cerros cercanos. Para Sendero, María Elena Moyano era asistencialista y revisionista. Desde 1989 era teniente alcaldesa y, además, formaba parte de Izquierda Unida, una coalición creada en 1980, convertida en la segunda fuerza política en las elecciones de 1985. Decía que «la revolución es la afirmación de la vida», lideraba marchas contra el terror, militaba en el movimiento feminista

popular, estaba orgullosa de su identidad afro y afirmaba no tener miedo de nadie. Retaba a Sendero Luminoso, una y otra vez, a presentar propuestas políticas. Para Sendero, María Elena Moyano era en definitiva «un colchón del sistema».

El 15 de febrero de 1992, la Negra, como le decía con cariño todo el mundo, fue asesinada a balazos en medio de una actividad comunitaria. Ya muerta, los militantes de Sendero dinamitaron su cuerpo.

Con las organizaciones sociales todavía conmocionadas, Giulia Tamayo, la abogada de María Elena, acudió a la morgue a recoger sus restos: «Ese día no había nadie. Estaban todos aterrados. Eran las siete de la mañana y encontré a una mujer con un bebé. ¡Qué extraordinario! —pensé yo— Por lo menos una mujer viene a velar...». Cuando Giulia Tamayo, conmovida, se acercó a abrazar a la desconocida, la mujer la agarró fuerte del brazo.

—¡Perra feminista, te vamos a matar! —le dijo la mujer.

A los pocos días, cuando Giulia Tamayo salía de una reunión, le dispararon. La bala le alcanzó en una pierna.

Paradójicamente, cuenta Tamayo, esa bala se convirtió en un seguro de vida: cuando unos pocos años después comenzó a denunciar que el Gobierno de Alberto Fujimori estaba esterilizando de forma forzada a cientos de miles de mujeres indígenas pobres, ya nadie podía acusarla de *terruca*.

¿Fujimori feminista?

Pekín. Octubre de 1995. En la IV Conferencia sobre la Mujer, que se celebró en la capital china, las delegadas peruanas tuvieron un acompañante inesperado. En efecto: Alberto Fujimori. El Chino se había plantado en Pekín con un programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) bajo el brazo y una sonrisa de actor hollywoodiense en la cara. «¡Las mujeres peruanas deben ser las dueñas de su destino!», había declarado. El Estado permitiría a las familias de bajos recursos acceder a los diferentes métodos de planificación familiar de los que gozan las clases acomodadas. Les proponía reunirse para presentarles la propuesta. «Fue una gran puesta en escena», recuerda Giulia Tamayo, que estaba dentro del comité peruano.

—Tengo que entrar a la reunión. Voy a decirle que lo voy a estar vigilando, que no se atreva a tocar a las mujeres indígenas

—dijo Hilaria Supa, representante de la Federación de Mujeres de Anta. Supa había participado en las tomas de tierra en Cusco desde pequeña y ya era una de las líderes del movimiento indígena más respetadas.

Apenas habían pasado unos meses cuando Hilaria Supa le mandó un *cassette* a Giulia Tamayo. En la cinta, las voces grabadas de campesinas quechuas denunciaban que en algún momento de la jugada fujimorista a la AQV se le había caído la V: ya no se trataba de una anticoncepción quirúrgica voluntaria, sino obligatoria. Tamayo empezó a finales de 1995 a entrevistar a mujeres que habían sido esterilizadas. Con ayuda de Hilaria Supa, Tamayo habló con las mujeres de Anta y Ayacucho. Aun «a sabiendas de que a ellas las podían desaparecer en cualquier momento», fueron las primeras en reaccionar.

Al poco tiempo de iniciar la investigación le llegó también información de Piura, en el noroeste del país. «Encontré evidencias de cuotas: ya no era únicamente que las mujeres me estuvieran diciendo que las habían esterilizado sin su consentimiento, sino que había evidencias de un programa coercitivo. En Piura, en Huancavelica, en la Amazonía... De pronto, se me fue llenando todo el mapa. El informe contenía unos 250 casos, pero había muchos más testimonios». Gracias a su informe, el primero que se realizó sobre las esterilizaciones forzadas, quedó al descubierto el alcance del programa.

Para cumplir con las cuotas, el Gobierno organizaba «festivales» de ligaduras de trompas. En estos festivales había bailes, actividades deportivas, fuegos artificiales y se podía ir al dentista o la peluquería gratis. En otros casos, el despliegue de recursos estatales era menos ostentoso, pero igualmente eficaz. A las mujeres más pobres se les prometía una dentadura postiza, unas gafas o, simplemente, unos kilos de trigo, arroz o harina.

En otras ocasiones, las mujeres ni siquiera sabían que iban a ser esterilizadas: habían ido al dispensario para un control sanitario de sus hijos y habían sido encerradas, en grupos de diez o veinte. Con el pretexto de vacunarlas, las habían anestesiado y, en un visto y no visto, las habían operado. A menudo esto también ocurría inmediatamente después de un parto. Y después de la operación, ninguna asistencia médica. «Muchas de ellas estuvieron tres meses al borde de la muerte. No podían soportar una operación fácilmente: tenían desnutrición, pocas defensas, tuberculosis», relata Tamayo. Se tiene

constancia de dieciocho muertes a raíz de las intervenciones. Pero podrían ser muchas más: las investigaciones apuntan a que 300.000 mujeres fueron esterilizadas entre 1996 y 1998¹⁴.

Mujeres autónomas

La idea de fertilidad de la mujer y la madre tierra están muy unidas en la tradición indígena quechua y aimara. Las mujeres esterilizadas no solo tuvieron que sobrellevar los dolores de intervenciones y postoperatorios mal hechos, sino el estigma ante sus comunidades, que las repudiaban por ser estériles. «Eso las aisló. A muchas las dejaron sus maridos... Estaban destruidas, al principio lo que querían era matarse. Pero el comenzar a unirse, a juntarse, les hizo perder el miedo», explica Tamayo.

En el caso de Anta, Hilaria Supa junto con otras doce mujeres le dieron la vuelta al estigma. Asociaron la defensa de su cuerpo con la defensa de la tierra. Les dijeron a las comunidades: «Están ciegos, encima ustedes nos están destrozando a nosotras, cuando nosotras somos las víctimas de los que han llegado a destrozarnos nuestras comunidades —cuenta Tamayo—. Ellas se vuelven las alertas, no solo reivindicando sus cuerpos, sus propios derechos, sino también como pueblos indígenas, en la protección de la tierra frente a la apropiación de terceros o al uso de pesticidas».

Mujeres que se autodenominan «autónomas» reaccionan de forma similar en la provincia de Piura y en la provincia ayacuchana de Huanta. «Se llaman autónomas porque no quieren recibir órdenes de nadie, quieren encontrar sus propias luchas y sus propios caminos. El Estado quiso clientelizar el movimiento de mujeres. Entonces, querían ser autónomas del Estado. Y de los partidos. Los partidos las dividían, mujeres contra mujeres por las luchas partidarias. Durante el conflicto armado interno, te decían: “¿Estás con Sendero o con el Ejército?”. Quisieron ser autónomas también de los maridos».

14. La cifra más baja es de 215.000 mujeres esterilizadas y la más alta de 320.000. La organización Demus baraja la cifra de 300.000. A 16.000 hombres se les practicó la vasectomía dentro del mismo plan.

«Población excedente»

Para Tamayo, detrás de este programa se escondía una concepción racista y neoliberal de la cuestión de la pobreza: «La forma más rápida para reducir los indicadores de mortalidad materna y la tasa de natalidad, que se veían mal para el Banco Mundial, para todos los criterios de modernidad, era la esterilización». En ese momento se estaba renegociando el pago de la deuda con el FMI y la obtención de nuevos créditos, y en una interpretación neomaltusiana de los motivos de la pobreza, la demografía cobra fuerza: demasiadas personas y pocos recursos.

«Como no se puede llevar el Estado, los colegios, los hospitales, a los Andes, porque sería muy costoso, y no podemos aplastar los Andes, esa población resulta que es excedente», dice Tamayo. Fujimori, el matemático, echó sus cuentas y fijó sus cuotas, particularmente altas en el llamado trapecio andino, formado por Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Apurímac, los departamentos más pobres del país. Para financiar el programa, el Tesoro Público contó con el apoyo de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid), que aportó 36 millones de dólares. El Fondo de Población de la ONU, la fundación japonesa Nippon Zaidan, y la cooperación canadiense y suiza hicieron aportes minoritarios.

Cada mes, Fujimori recibía un informe con el número de esterilizaciones obtenido. Cada hospital o posta tenía unas metas asignadas, en algunos casos se les daba incentivos monetarios, en otros se les amenazaba con el despido. «Como no pude cumplir con la cuota que me exigían, me dijeron que me hiciese la ligadura para no perder mi trabajo. Después de operarme, a los dos meses me despidieron», contaba una enfermera en el documental *Nada personal*¹⁵.

Desde mediados de 1996, gracias a la publicación de pruebas sobre el carácter obligatorio de las esterilizaciones, los colectivos de mujeres consiguieron desacelerar el ritmo de intervenciones. Estas denuncias ponían al Estado en una situación delicada de cara a sus financiadores internacionales. Pero la polémica en toda su fuerza no estalló hasta el 22 de junio de 1998, cuando la periodista

15. CÁRDENAS, C. (2009), documental *Nada personal: implementación de la anticoncepción quirúrgica en el Perú*.

Julia María Urrunaga publicó en el diario *El Comercio* un reportaje sobre el caso de Mamérita Mestanza.

A Mestanza la habían ido a buscar unas diez veces a su casa, le decían que iba a ser encarcelada por tener más de cinco hijos. Después de operarse tuvo una infección. Cinco veces solicitó asistencia médica, sin éxito. Su muerte había dejado siete huérfanos. Como respuesta a la denuncia pública, Fujimori creaba una Fiscalía para investigar las esterilizaciones al mismo tiempo que ordenaba destruir todas las pruebas de la aplicación del programa. Las denuncias se archivaron. Al año siguiente, en 1999, una coalición de organizaciones por los derechos humanos y de la mujer consiguió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptara el caso. Para lograrlo tuvieron que proteger ellas mismas la prueba forense de las vísceras de Mestanza, que estuvieron a punto de perderse. El escándalo desatado detuvo las esterilizaciones.

Giulia Tamayo tuvo intervenido el teléfono y le robaron sus archivos. Resultaba muy incómoda. «En aquel momento, por actuar como defensora de los derechos humanos, el régimen te podía destruir en un santiamén acusándote de terrorista», dice. Pero a Giulia Tamayo ya no podían acusarla de *terruca*. Le había salvado la bala de Sendero.

El ritmo del Chino... en la cárcel

BARRIO SAN ISIDRO / LIMA

Los escándalos por los abusos y la corrupción del régimen se acumulaban sobre la imagen pública de Fujimori. En 1996, el asalto a la embajada de Japón en Lima, tras un secuestro de cuatro meses realizado por el otro grupo guerrillero peruano de la época, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), terminó con catorce ejecuciones extrajudiciales y el Chino paseándose entre los cadáveres como un «samurái sanguinario», en palabras del periodista Gustavo Gorriti. Las investigaciones sobre el Grupo Colina y la polémica sobre las esterilizaciones forzadas acentuaron la imagen de un Gobierno violador de los derechos humanos.

Acompañado de su hija Keiko, convertida en primera dama¹⁶, y después de haber bamboleado las caderas en escenarios de todo el país con la cumbia «El ritmo del Chino», Fujimori ganaba a principios de 2000 unas elecciones envueltas en denuncias de fraude. En la calle, la protesta se hacía más y más acuciante con un nuevo impulso del movimiento estudiantil. En julio de ese año, cientos de miles de personas marchaban desde todos los puntos cardinales hasta el Congreso de la República para pedir la dimisión de Fujimori. El líder de la oposición, Alejandro Toledo, se encargó de capitalizar la marcha de los Cuatro Suyos, llamada así por las antiguas regiones del Imperio inca.

Pero el escándalo que terminaría con el régimen todavía estaba por venir. El 14 de septiembre de 2000, los periodistas Luis Iberico y Fernando Olivera presentaron en rueda de prensa un vídeo en el que Vladimiro Montesinos, el segundo hombre más poderoso del Gobierno, entregaba 15.000 dólares al congresista Alberto Kouri para que se pasase a la bancada fujimorista. Y no era el único. Había cerca de 2.000 vídeos con escenas similares. La prensa no tardó en dar con el nombre perfecto para este caso de corrupción: los *vladivideos*.

En los sillones de cuero de su despacho del Servicio de Inteligencia Nacional, Montesinos sentaba a sus invitados. Sobre la mesa baja contaba los fajos de billetes, que apilaba uno encima de otro, les daba la plata en maletines y se quedaba con estos vídeos de cámara oculta a modo de recibo. En una entrevista posterior, Luis Iberico recuerda el efecto que provocó el primer vídeo: «Pánico entre militares, empresarios, políticos, deportistas, estrellas de la televisión». A los tres días, Fujimori anunció la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional y la convocatoria de nuevas elecciones, a las que él no se presentaría. A bordo del velero *Karisma*, Montesinos huyó del país. Fujimori aprovechó un viaje a Brunéi para quedarse en Japón. Mandó su renuncia por fax.

16. La exesposa de Alberto Fujimori, Susana Higuchi, denunció que fue torturada repetidamente durante el mandato de su marido en los calabozos del Servicio de Inteligencia. En 1994 se divorciaron. Keiko Fujimori, la hija de ambos, ofició de primera dama desde entonces.

Las primeras condenas

La matanza de Barrios Altos había llevado a Fujimori a promulgar en 1995 la ley de amnistía: todas las denuncias contra las fuerzas de seguridad del Estado desde 1980 fueron archivadas, al tiempo que quedaban bloqueadas futuras reclamaciones por violaciones de derechos humanos. Como la vía judicial en el país estaba agotada, en nombre de las víctimas, Aprodeh llevó el caso de Barrios Altos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son de cumplimiento obligado para los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. La iniciativa dio resultados años después: el 14 de marzo de 2001, la Corte Interamericana ordenaba la reapertura de las investigaciones y declaraba «sin valor jurídico» la ley de amnistía de Fujimori.

Además de la anulación de esta ley, el año 2001 trajo otra buena noticia para las organizaciones de derechos humanos: se iniciaban las sesiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, una de las históricas demandas del movimiento. En los años siguientes, se produjeron los principales avances en la búsqueda de justicia. Muchas causas que habían sido largamente documentadas, primero por los organismos de derechos humanos y luego por la Comisión de la Verdad, empezaron a arrojar las primeras condenas. «Nosotros en esa época pensábamos que en un país con las complejidades que tiene Perú iba a ser difícil que la justicia avanzara. Pero ahora que es posible hacer un balance, en ese tema, el más difícil, el más conflictivo y el más crítico, es en el que más se ha avanzado», sostiene Carlos Rivera.

La primera sentencia, en marzo de 2006, fue por el caso Castillo Páez, un estudiante secuestrado y desaparecido por la Policía en 1990. Cuatro agentes fueron sentenciados a quince años de cárcel cada uno en el primer proceso sobre desapariciones forzadas del país. Para Carlos Rivera, uno de los abogados que participó en el juicio, se trató de una sentencia «histórica»: habían conseguido superar el principal escollo en los casos de desapariciones forzadas, la inexistencia de cuerpo del delito.

El aparato de impunidad empezaba a desarmarse. Vladimiro Montesinos, que había sido capturado en Venezuela y extraditado en 2001, acumulaba casi tantas condenas como cuentas bancarias desperdigadas por el mundo. A los casos de corrupción se le sumó en 2005 una condena de 35 años por ser el autor intelectual de la

matanza de Barrios Altos. Según explica Soberón, por su participación en los crímenes del destacamento Colina, actualmente hay procesados más de 35 agentes y más de doce mandos intermedios, entre coroneles y generales. Al igual que el general Hermoza Ríos, encarcelado por su responsabilidad en el caso de Barrios Altos, Vladimiro Montesinos está recluso actualmente en la prisión de máxima seguridad de la base naval de El Callao, unas instalaciones que él mismo mandó construir para confinar a terroristas de alto riesgo, entre ellos el mismísimo Presidente Gonzalo.

«Siéntese bien, señor Fujimori»

Gracias a su doble nacionalidad, el escurridizo samurái había logrado esquivar el avance de la justicia. Desde 2005, Fujimori estaba varado en Chile y el Gobierno de Perú intentaba, sin mucho éxito, extraditarlo. Las denuncias presentadas por las organizaciones de derechos humanos ante el sistema interamericano de justicia fueron determinantes para conseguirlo. El 22 de septiembre de 2007, el Chino volvía a Perú. Y el 10 de diciembre de ese año se iniciaba el juicio contra el expresidente por numerosos cargos, entre ellos, las masacres de Barrios Altos y la Cantuta, donde el Grupo Colina había asesinado a ocho estudiantes universitarios y a un profesor en 1992.

Carlos Rivera había participado en muchos juicios importantes, como el caso Castillo Páez, pero nunca en uno como el de Fujimori. «Cuando supimos que iba a ser un juicio televisado, nos dimos cuenta de su envergadura —cuenta en su despacho el abogado—. Tienes que prepararte como nunca y además es un juicio en el que no solamente lo que dices es importante, sino también los gestos». El primer gesto: no saludar a Fujimori, nunca, en ninguna de las 161 veces que se encontraron en la sala. «Él insistió hasta la cuarta ocasión y entonces ya entendió que había una distancia que su saludo no iba a romper», dice Rivera. La sala principal de audiencias estaba partida en dos. Los familiares y los activistas de derechos humanos se sentaban a un lado. Al otro, los congresistas de Fujimori, su familia y los políticos cercanos.

En las primeras sesiones, la hinchada fujimorista no parecía particularmente inquieta. El expresidente se había puesto de pie y, entre aspavientos teatrales, se había exployado a gritos sobre su

valentía al «derrotar» a Sendero Luminoso hasta llegar a un agudo: «¡Rechazo los cargos! ¡Totalmente! ¡Soooooy inocente!». Pero no tardaron en aparecer los primeros motivos de preocupación. El fiscal José Peláez, que lo llamaba «presidente Fujimori», fue sustituido por Avelino Guillén, que había participado en más de veinte procesos de corrupción relacionados con la red fujimorista. El fiscal Guillén llegó y recompuso las piezas del juicio:

—Acusado Fujimori, ¿me escucha usted?

—...

—Responda, ¿escucha o no?

—Sí...

—Cuando yo hablo, usted responde. En principio, ustedes no vencieron al terrorismo. Esa es una falacia.

—Señor fiscal, por favor, no calificquemos esos temas que no van a cuento —dice la defensa.

—Ya... —Fujimori se ríe repanchigado en la silla.

—Siéntese bien, señor Fujimori, está en una sala de juzgamiento.

Carlos Rivera recuerda muy bien la cara que puso Fujimori en ese momento: «Se da cuenta por primera vez de que está en un juicio». Y no en cualquier juicio. El 7 de abril de 2009 Fujimori fue condenado a veinticinco años de prisión por su responsabilidad en las masacres de Barrios Altos y la Cantuta. «Un hecho histórico para el Perú, para América Latina y para el mundo», recalca Francisco Soberón.

Sin embargo, después de unos años de avances en materia judicial se ha producido un progresivo estancamiento. Como en una película en la que los mismos actores hacen diferentes papeles, a Toledo le sucedió García, el mismo Alan García responsable de las masacres de los penales. Y no estaba particularmente interesado en que avanzaran unos juicios que tarde o temprano podrían condenarlo. A través de una constante confrontación, cuenta Carlos Rivera, Alan García logró ablandar a jueces y fiscales hasta llegar, a finales de 2010, a un 85% de absoluciones.

Pero la labor de los organismos de derechos humanos no solo se mide en condenas. Fue precisamente el trabajo de estas organizaciones para traer al presente los crímenes cometidos por el régimen de Fujimori una de las claves de la derrota de Keiko Fujimori en las elecciones de 2011. Así lo cree Gloria Cano, directora de Aprodeh y parte del equipo de abogados que participó en el juicio contra el

expresidente. En concreto, la evidencia de las esterilizaciones forzadas tuvo un lugar privilegiado en las portadas de los periódicos peruanos en los días previos a los comicios. «Fueron los organismos de derechos humanos y las víctimas las que levantaron su voz contra Keiko Fujimori y marcaron un declive de la expectativa que tenía de hacerse con la presidencia», dice Cano.

El nuevo presidente, Ollanta Humala, «no ha hecho el menor esfuerzo para cumplir las obligaciones que tiene el Estado peruano con las víctimas», añade esta abogada. Pero el trabajo de las organizaciones de derechos humanos continúa. Gracias a la constancia de Adelina, Mamá Angélica y sus compañeras de Anfasep, el rosario de crímenes que rodea Los Cabitos también está siendo investigado. Pese a las trabas y retrasos en el proceso legal que denuncia Cano, el juicio sigue adelante. Se han encontrado tantos restos que Medicina Legal de Ayacucho apenas tiene sitio donde guardarlos. Sin el trabajo que inició en 1983 Mamá Angélica hubiera sido imposible.

Tarde, pero puntual

AREQUIPA / DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Antes de dejar el Gobierno, Fujimori desmontó el aparato de represión coordinado desde el Servicio de Inteligencia. Pero las reformas neoliberales realizadas a lo largo de la década nunca se desarmaron. Sobre ellas, el Gobierno de Alejandro Toledo alcanzó a construir un alto índice de crecimiento económico, que se mantuvo durante el segundo Gobierno de Alan García, hasta llegar al 9,8% en 2008. La cifra de crecimiento contrasta con el aumento de la desigualdad y la brecha entre la ciudad y el campo, donde el 53% de la población sigue viviendo bajo la línea de la pobreza¹⁷.

17. *Encuesta nacional de hogares*, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2012.

También contrasta, por ejemplo, con el índice de malnutrición crónica en Huancavelica, que es del 51,3%¹⁸.

La primera gran revuelta contra este modelo económico heredado por Toledo fue el Arequipazo. La chispa se prendió en junio de 2002 cuando el Gobierno anunció la privatización de la empresa eléctrica de Arequipa, la segunda ciudad más grande del país. En la calle, sectores que llevaban tiempo desmovilizados volvieron a salir. Salieron trabajadores de manufacturas, profesores, funcionarios, obreros de la construcción, estudiantes, hombres y mujeres, gente de todas las edades. Arequipa fue tomada.

La ciudad se declaró en huelga indefinida. Siguiendo el ejemplo argentino, se convocaron caceroladas. El «León del Sur», tal como se conoce a la ciudad por sus históricas revueltas, rugía a las 12:00 y a las 19:00 horas, todos los días. A las barricadas de adoquines que se construyeron en la plaza principal —«la barricada es un acto característico del pueblo arequipeño», contaría más tarde un vecino—, la gente llevaba banderas peruanas: se trataba de una lucha soberanista, contra la venta del patrimonio. La lucha se descentralizó a los barrios y se extendió a otras ciudades del sur: Cusco, Puno, Tacna... Dos personas murieron por las cargas policiales. El nivel de confrontación subía, todavía, un peldaño más. Durante cinco días los arequipeños paralizaron la ciudad. Alejandro Toledo se vio obligado a suspender la venta de las empresas eléctricas de Arequipa y de Tacna, y a pedir disculpas públicamente.

En menos de un año el presidente Toledo había perdido todo su apoyo, hasta llegar al 8% de popularidad en 2003. Según explica el analista Kees Biekart, la creciente conflictividad durante el Gobierno de Toledo sigue un patrón común a muchos países vecinos: el empuje por la democracia se transforma en lucha por los derechos socioeconómicos al chocar con los ajustes y la exclusión social¹⁹.

En 2005, los movimientos populares de dos países vecinos tumbaban gobiernos: en abril, caía el presidente de Ecuador Lucio Gutiérrez; y en junio, el presidente boliviano Carlos Mesa.

18. *Encuesta demográfica y de salud familiar*, del INEI, 2012.

19. BIEKART, K. (2005), «Seven theses on Latin American social movements and political change», *The European Review of Latin American and Caribbean Studies*, octubre de 2005.

En Perú, sin embargo, Toledo se sostuvo. Para Biekart uno de los motivos fundamentales es que las organizaciones sociales estaban todavía recomponiéndose tras el conflicto. Según el líder indígena Miguel Palacín, Perú va con retraso en relación con los procesos en el continente: «Cuando ya todos estaban en un proceso de cambio y abogando por una opción distinta al neoliberalismo, en Perú y en Colombia todavía teníamos gobiernos neoliberales. Ahora otros ya están cuestionando ese proceso de cambio y en Perú recién se acaba de reacomodar ese proceso».

Con el segundo mandato de Alan García (2006-2011), la conflictividad no dejó de crecer. El Gobierno del APRA se vio desbordado por las luchas antimineras, por estallidos sociales como el de Abancay (Apurímac), y por movilizaciones campesinas, docentes y contra la firma del TLC con Estados Unidos. Pero la mayor expresión de ese hartazgo —desde luego la más dramática— fue el Baguazo.

El Baguazo

BAGUA GRANDE Y BAGUA CHICA / DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Son las siete y media de la mañana y en Bagua Grande ya hace calor. En una de las calles cercanas a la plaza de Armas, se sirve desayuno junto al mercado. Pollo o carne asada por 2,5 soles, algo menos de un euro. Con acompañamiento y refresco. Fuera, los mototaxistas leen el diario refugiados bajo los toldos de sus vehículos. Más allá de la plaza, de las juguerías y las tiendas de discos piratas, en una de las calles más alejadas se secan al sol granos de cacao regados sobre un gran plástico negro. A las afueras de la ciudad, los campos de arroz cercanos al río Uctubamba están divididos por palmeras.

Bagua Grande está situada en una de las estribaciones de los Andes que descienden hacia la Amazonía peruana. Una selva de 63 millones de hectáreas que para Alan García es «el primer recurso» del país y que, según escribía en *El Comercio* en 2007, se encuentra en manos «del perro del hortelano»²⁰. Según García, los pueblos in-

20. GARCÍA, A. (2007), «El síndrome del perro del hortelano», *El Comercio*, 28 de octubre de 2007.

dígenas ni aprovechan los recursos ni dejan que nadie lo haga. «Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán», escribió el presidente. De ahí su propuesta de parcelar esas tierras en lotes de 5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, «pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología». Estas tierras estarían destinadas, por supuesto, a grandes empresas, porque no tendría sentido «entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir».

Para facilitar la explotación de la Amazonía, Alan García aprobó en 2008 un paquete de 99 decretos para adecuar la legislación a la firma del TLC con Estados Unidos. Ese año, los pueblos indígenas amazónicos se sumaron a las protestas frente al TLC que mantenían sectores campesinos desde 2005. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —donde están coordinadas 1.350 comunidades, unas 350.000 personas que hablan más de dieciséis idiomas distintos— organizó la oposición a estos decretos por considerarlos, en resumen, una sentencia de muerte. El 1064, por ejemplo, pretendía invalidar el Convenio 169 de la OIT por el que se debe consultar a las comunidades indígenas antes de explotar sus tierras. Otro decreto facilitaba la privatización del agua; otro, la venta de tierras comunales; otros tres, la explotación minera, maderera y de hidrocarburos. Y, para rematar, otro invalidaba la vocación forestal de nada menos que 45 millones de hectáreas, el 63% de los bosques peruanos.

Alan, ¿en qué estabas pensando?

Los pueblos awajún y wampí pertenecen a una de las familias etnolingüísticas más numerosas de la Amazonía. Suman unas 150.000 personas. La historia dice que no se los puede dominar. Lo intentaron los guerreros chachapoyas y el Imperio inca sin éxito. Ni los españoles ni la República lograron entrar en sus tierras. Awajunes y wampís hicieron frente al MRTA y al narcotráfico. Alan García lo iba a tener difícil.

En agosto de 2008, como parte de la lucha contra los decretos legislativos que acababan de ser aprobados, 5.000 indígenas tomaron una hidroeléctrica y mantuvieron durante varios días cortes de carretera y de ríos para impedir la entrada de las empresas extractivas.

Cuando los nativos decidieron levantar la protesta fueron andando hasta la ciudad de Bagua Chica, como la llaman para diferenciarla de Bagua Grande, situada a pocos kilómetros. En una *juguería* de la plaza principal, por encima del sonido de los loros que llega desde el patio interior, Gerzon Danducho Akintui, dirigente awajún, cuenta lo que pasó: «Llegamos cansados, decepcionados... Pero la Policía empezó a tirarnos bombas lacrimógenas, y entonces el pueblo awajún se enfrentó y salió toda la población de Bagua a apoyarnos, y replegaron a la Policía, a piedrazos, a golpes. Pucha, hubo veinte o treinta heridos awajunes... Pero le ganamos a la Policía».

Gracias a la revuelta de agosto de 2008, el Congreso anuló dos de los decretos, el 1015 y el 1073, en el que se reducía el número de votos necesarios en una comunidad para vender tierras colectivas. Aidesep consiguió que el Congreso se comprometiera a debatir el resto. Pero en febrero de 2009 el Congreso se saltó el acuerdo. Entonces los indígenas intensificaron la protesta, a la que se unieron levantamientos en las ciudades amazónicas de Iquitos y Yurimaguas. Cerca de Bagua, 2.000 indígenas —entre ellos, Gerzon Danducho— ocuparon la estación 6 de la empresa estatal Petroperú y paralizaron el bombeo de petróleo. El enfrentamiento del año anterior no era más que un tímido preludio de lo que estaba por venir.

La Curva del Diablo

Por su cercanía a la línea ecuatorial, en el norte de Perú amanece y atardece siempre a la misma hora: a las seis. Eran las cinco y media de la mañana del 5 de junio de 2009. Todavía no había amanecido en la Curva del Diablo, cerca de Bagua Grande. La mayoría de los 5.000 awajunes y wampís que estaban bloqueando la carretera Fernando Belaúnde Terry —parte del corredor interoceánico entre Brasil y Perú— estaba todavía durmiendo sobre el asfalto. Algunos preparaban el desayuno. Ese día volverían a sus comunidades, ya lo habían firmado ante las autoridades policiales. Se marcharían con sus mochilas y con sus lanzas, el símbolo de su identidad milenaria y guerrera²¹.

21. La mayor parte de los detalles de este relato están extraídos de las entrevistas realizadas en Bagua y completados con el informe *Bagua, seis meses después*, publicado por Amnistía Internacional en 2009.

Llevaban allí desde principios de abril, al mismo tiempo que indígenas quechuas, achuar y asháninkas, entre otros, cortaban ríos y carreteras, ocupaban un aeródromo, una central hidroeléctrica y organizaban decenas de marchas. Una rebelión amazónica en toda regla. En la Curva del Diablo se habían mantenido gracias a la solidaridad de la población de Bagua Grande, que había decidido apoyar la protesta, explica Carlos Flores, coordinador de la Radio La Voz de Bagua. En asamblea, las organizaciones de base de la ciudad, los clubes de madres, las rondas campesinas, las órdenes religiosas, los pequeños comerciantes, los farmacéuticos, todo el pueblo, había llegado a la conclusión de que las demandas eran «justas» y se organizaron para abastecer a los indígenas.

Sin embargo, después de tres meses de corte de carretera, la población estaba empezando a sufrir las consecuencias. «El gas había subido de sesenta a 120 soles. Y, aunque no se quejaban, los nativos pensaron que estaban perjudicando a sus propios aliados. Se iban a retirar para luego hacer asambleas en las comunidades y acordar otros métodos de lucha», explica. Pero unas horas antes de que se fueran, un pequeño contingente de las fuerzas especiales de la Policía llegó para desalojarlos. Venían armados con granadas y fusiles AKM-47. La mayoría no conocía la zona y habían estado pidiendo —sin éxito— un guía.

La Policía subió a un cerro junto a la carretera y se parapetó tras sus escudos frente a un grupo de indígenas. No había mucha gente, así que los nativos empezaron a llamar a los demás: «¡Vengan, vengan!». Lo cuenta así una de las mujeres que participó en la protesta: «Todos subieron. Entonces viene la primera bala, a una pierna. Algunos dijeron: “No tengan miedo, que es de juguete”. Enseguida vimos la sangre. Era sangre, ahí inmediatamente la segunda bala, y ya inmediatamente la bala al pecho, justo al que estaba a mi lado. Murió instantáneamente. A este chico le debían haber dado un disparo tan certero, pues tal vez al corazón, qué sé yo, ya blanco, ya muerto, entonces esa fue la palabra mágica: murió, murió, murió un nativo».

Los manifestantes se despertaron con el estruendo de las bombas lacrimógenas y el tiroteo procedente del cerro. Al escuchar la balacera, Santiago Manuín, veterano dirigente awajún, subió a la colina para intentar dialogar. Tenía las manos en alto cuando le dispararon

al estómago. Manuín cayó. Había recibido ocho impactos de bala²². A partir de ese momento se desencadenó una guerra sin metáforas ni disparos al aire. Acababa de empezar el Baguazo. Ese día murieron, al menos, 33 personas, de las cuales 23 eran policías. Cientos resultaron heridas y se recibieron denuncias de 38 desapariciones.

Ninguno de los nativos tenía armas de fuego. Las lanzas eran simbólicas, y no llegan muy lejos. De nada servían frente a los fusiles. Pero muchos de ellos habían sido reservistas del Ejército. No llevaban armas, pero sabían disparar. Al caer Santiago Manuín, los indígenas arrebataron las armas a los policías y las usaron contra ellos. De los doce policías que murieron en la Curva del Diablo, cinco cayeron en el cerro.

La batalla se trasladó del cerro a la carretera, envuelta en el humo de las bombas lacrimógenas, en algunos casos lanzadas desde los helicópteros. De las zonas cercanas habían acudido civiles, que intentaban auxiliar a los heridos. La Policía disparaba directamente al cuerpo y no dejaba entrar a las ambulancias. Radio La Voz de Bagua era el único medio que transmitía en directo. Su señal no tardó en ser cortada. Sus corresponsales siguieron retransmitiendo para otros medios con los teléfonos móviles.

La violencia desatada en la Curva del Diablo se extendió en poco tiempo. La estación 6 de Petroperú seguía tomada por 2.000 awajunes y wampís. Durante los tres meses que llevaban allí, agentes e indígenas habían hecho un pacto de no agresión, casi de convivencia. No iba con ellos la cosa, sino con el Estado. Pero el día del Baguazo todo cambió y todo salió mal. Cuando llegaron las noticias de que sus familiares y compañeros estaban siendo masacrados en la carretera, el enfrentamiento se contagió a la estación de Petroperú. Once policías fueron asesinados con saña en la estación 6.

Mientras tanto, cientos de personas huían desde la carretera a las poblaciones cercanas. Y otras tantas eran detenidas por la Policía y trasladadas. «Uno de los papeles más importantes fue el que adoptaron los pirañitas, los muchachos de mal vivir —cuenta Gerson Danducho—. Paraban los carros de la Policía y rescata-

22. Contra todo pronóstico, Santiago Manuín, dado por muerto en el cerro, logró sobrevivir.

ban a las personas. Luego paraban a todos los autos, camionetas y les decían con una piedra: “O los llevas o te estrello tu auto”. En ocasiones sacaban a los pasajeros y metían a los nativos para enviarlos al pueblo. Llegaban y los repartían entre las monjas, en las casas de no religiosos y les cambiaban la ropa. Un apoyo total. Si no, hubiera habido más muertes».

A Bagua Grande llegaron cerca de mil personas, explica Carlos Flores. «A la media hora apareció la Policía, pero no encontró a nadie, ¿dónde estaban? Se metieron en los hospitales, pero intervinieron las madres españolas que hay acá... Hay una foto de una monja española, viejita, que se para en una puerta, brazos y piernas abiertos y no deja pasar a la Policía». Los hospitales se colapsaron, se atendía en el suelo. Según Aprodeh hubo 189 heridos ese día, 82 de bala.

El enfrentamiento se había extendido también a las poblaciones cercanas. Abel Ticlla Sánchez, que no tenía nada que ver con la protesta, murió por tres balas de la Policía cerca de la plaza de Armas de Bagua Chica. Venía de desayunar junto al mercado. Los disparos también sorprendieron a Leydi Luz Montes Gonzales, de siete años, que estaba jugando cuando recibió un tiro en el tórax. El líder indígena y periodista Felipe Sabio César Sánchez también fue abatido cuando salía del hospital. Un grupo de jóvenes quemó la sede del APRA y otros seis locales institucionales en Bagua Chica.

Para Miguel Palacín la jugada no podía haberle salido peor a Alan García: «El escarmiento que quería hacer el Gobierno con los movilizados le salió al revés. Los que llevaron armas, los que fueron a matar, fueron los que murieron. Un hecho sin precedentes. No solo por las muertes, sino por su significado».

El Congreso tuvo que retroceder. Para Daisy Zapata, vicepresidenta de Aidesep, demasiado tarde, porque para echar marcha atrás «han esperado a que mueran peruanos, que se maten entre peruanos». Dos de los decretos claves fueron derogados: el 1090, que cambiaba la vocación forestal de 45 millones de hectáreas de bosque, y el 1064, que desactivaba el proceso obligatorio de consulta previa.

Para el antropólogo Rodrigo Montoya, el Baguazo ha obligado a replantearse algunas viejas certezas: «Hasta antes de la rebelión amazónica los analistas en los medios de comunicación, los dirigentes de los partidos y la casi totalidad de antropólogos y sociólogos estaban convencidos de que en Perú no pasaría nada

comparable a lo que ocurre en Bolivia o Ecuador. Después de lo ocurrido, tendrán que revisar sus ideas»²³.

Y no era solo una cuestión de la selva peruana. También desde los Andes y en algunos puntos de la costa, las comunidades indígenas y campesinas llevaban años en pie de guerra contra un nuevo desembarco que amenazaba sus territorios: la gran minería transnacional. La primera gran victoria se llamó Tambogrande.

El poder del limón organizado

TAMBOGRANDE / DEPARTAMENTO DE PIURA

El cebiche, ceviche o seviche tiene casi tantas grafías como recetas posibles. En sus muchas variantes, este plato a base de pescado o marisco marinado recorre el Pacífico desde Chile a México. El pescado puede venir acompañado de cebolla roja, maíz, camotes, yuca, chifles, chochos²⁴ o ensalada. Pero todo eso es opcional. Lo que seguro que lleva el ceviche es limón. Todo el mundo lo sabe: «Sin limón no hay ceviche». Ese fue el lema —irrefutable y descriptivo— que ayudó en 2002 a los habitantes de Tambogrande, a 45 kilómetros de Piura, a ganar la batalla contra la minería a cielo abierto.

De la irrigación de San Lorenzo, donde se sitúa Tambogrande, procede el 80% de la producción nacional de limón y el 90% de la exportación de mango de Perú. El mismo jugo de limón que llevan los pisco sour de la mayoría de los bares de copas de Perú. En la carretera a Tambogrande, los limones van y vienen en camiones, camionetas, carretillas y bolsas. Un frenesí frutal que se remonta a finales de los cincuenta, cuando esta zona desértica empezó a tener cultivos de riego tras la construcción de la represa de San Lorenzo. Pequeños productores y comunidades campesinas que consiguieron tierras a través de la reforma agraria empezaron a sembrar. «Plantaban

23. MONTTOYA, R. (2009), «Con los rostros pintados: tercera rebelión amazónica en Perú», *Servindi*, 2 de octubre de 2009.

24. En otras latitudes, a los camotes los llaman boniatos; a los chifles, plátano frito; y a los chochos, altramuces.

los árboles, mango, limón, naranja, tamarindo, y regaban con un balde cada árbol, con las temperaturas de 36 grados del desierto. Eso hizo que le tomáramos mucho cariño a esto», cuenta Ulises García, hijo de Godofredo García Baca, uno de los productores del valle que participó, como tantos, en la construcción de los canales de riego. Con el tiempo, Godofredo daría la vida para salvar Tambogrande.

Vicente Zapata, activista del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, explica que los empresarios de la minera canadiense Manhattan «se confiaron»: no tuvieron en cuenta ni el apego a la tierra ni la capacidad de organización de los habitantes de Tambogrande y los campesinos de los alrededores. «Con el apoyo de la dictadura corrupta de Fujimori se creían que tenían carta libre», afirma.

«No saben con quién se metieron»

«Había rumores de que la Manhattan estaba haciendo perforaciones en el campo, donde la gente no veía, con el cuento de que iban a hacer pozos de agua para las comunidades», recuerda Zapata. Pero en el año 2000 ya habían quedado claras las intenciones de la minera. Según este activista, la Manhattan había «sometido» al alcalde y a otros cargos para que autorizaran las actividades de la compañía. «Aparecieron a las seis de la mañana las máquinas en el centro de la ciudad, a perforar», cuenta. Los 25.000 habitantes del centro urbano no daban crédito: las máquinas amarillas y azules estaban en plena calle, a la salida de sus casas. El proyecto, incluso, contemplaba cambiar el curso del río y perforar debajo de la iglesia y del cementerio. «Cuando la gente se enteró de que el cementerio también iba a ser afectado, reaccionó violentamente. Ahí empieza la bronca», recuerda Zapata.

Una de las caras más visibles del movimiento era Godofredo García Baca. «Tienes que saberte defender, no seas cojudo», le decía Godofredo a Pancho Ojeda, profesor y miembro del Frente, mientras le explicaba las incongruencias del informe de impacto ambiental que había presentado la Manhattan.

Ojeda se sienta en la mesa de profesores del colegio y explica cómo se desarrollaron esos años en los que, precisamente, empezaba la producción agroecológica de Tambogrande. «Acá tenemos graves problemas de agua. Tenemos media hora de riego al día. Imagínate

con una mina», dice. El proyecto consistía en hacer una zanja de un kilómetro por seiscientos metros, y 260 de profundidad. Gran parte del tajo se situaría en la ciudad, pero también afectaría a las zonas de cultivo. El hidrólogo estadounidense Robert Moran viajó a Tambogrande invitado por el Frente y confirmó la probable contaminación de los acuíferos de llevarse a cabo el proyecto. Además, según el informe, 8.000 personas tendrían que ser reubicadas.

«Nos iban a poner al costadito. Sería igual que en Cerro de Pasco [en el departamento de Pasco], donde también se hizo la mina al lado del pueblo, y a medida que fueron escarbando y el socavón iba avanzando, se iba derrumbando y la gente por miedo se iba yendo», denuncia Ojeda. La Manhattan intentaba cortejar a los habitantes de Tambogrande y de la zona agrícola del valle de San Lorenzo con cuatrocientos empleos permanentes durante los doce años que duraría el proyecto. «Pero acá la gente trabaja con su familia y con uno o dos peones. Estamos poniendo 16.000 trabajadores todos los días. Y muchos más en el tiempo de la campaña del limón y del mango», contrapone Ojeda.

Liliana Alzamora Flores entra en la sala de profesores. Por su implicación en la lucha contra la megaminería la tacharon de terrorista. Para demostrar que tenía apoyo social, la empresa minera presentó firmas. Entre ellas, la de Liliana, falsificada. «No saben con quién se metieron», dijo esta profesora, que acabó destapando la falsificación del 80% de las firmas presentadas. Alzamora cuenta que las asambleas del Frente siempre fueron en ese mismo lugar, los domingos, en el colegio. Algunas eran pequeñas, venían cien o doscientas personas. En las grandes se juntaban quinientas o setecientas.

En febrero de 2001, en medio de un paro de 48 horas protagonizado por 10.000 personas, las instalaciones de la Manhattan fueron incendiadas. Godofredo García Baca lo achacó a la frustración que sentía la gente, que veía cómo se vulneraban sus derechos mientras se agotaban las vías legales. Pero todavía no está claro quién provocó el incendio, afirma Vicente Zapata, sobre todo teniendo en cuenta que la minera «fue la más beneficiada». A partir de ese momento, explica, la empresa pasó a la ofensiva, ya entonces con el apoyo del aparato judicial. «En los siguientes días, el fiscal hizo la denuncia penal contra unos doscientos activistas. Pero, cosa rara, no incluyeron en esa denuncia a Godofredo. Para

él ya tenían planeada otra medida de escarmiento. Todo el mundo sabía que él era el líder», dice Zapata.

La rabia canalizada

La mañana del 31 de marzo de 2001, sábado, un sicario disparó a Godofredo García Baca en el corazón, delante de su hijo Ulises. El asesino llevaba la cara cubierta, pero al quitarse la capucha, ya lejos de la camioneta del ingeniero, fue reconocido por una chica de trece años. Ambos eran de la zona. El asesino, según denunció la acusación, era un experto, un profesional de las fuerzas especiales. En el funeral de Godofredo se intercalaron los rezos con los cantos contra la minera. Para los presentes el motivo del asesinato estaba meridianamente claro.

La muerte de Godofredo fue un mazazo para el movimiento, que estuvo a punto de resquebrajarse entre quienes consideraban que había que recurrir a métodos «violentos», cuenta Ojeda, y quienes pensaban que esa estrategia resultaría contraproducente. «Finalmente se fue canalizando y se construyó un método, que era la vía pacífica», dice el profesor. Los activistas del Frente marcharon a Piura, marcharon a Lima, presentaron sus demandas ante el arzobispo, ante el ministro de Agricultura... Y siempre llevaban mangos y limones como armas simbólicas. Se forjó un movimiento cultural en torno al orgullo de la agricultura que se tradujo en disfraces de limones y marineras —canciones similares a la cueca— dedicadas a la figura de Godofredo²⁵.

Durante la campaña electoral de 2001 pareció que se abría una ventana a los tambograndinos. «No hay gringuito por más poderoso que sea que pretenda despojarnos de nuestras tierras [...], nunca dejen que nos arranquen nuestras tierras», dijo el candidato Alejandro Toledo, quien se convertiría en el primer presidente indígena de América en los tiempos modernos. Una vez elegido, Toledo declaró que iba a mantener el contrato con la Manhattan. Entonces, el Frente propuso realizar una consulta popular. «Tam-

25. CABELLOS, E., y BOYD, S. (2007), documental *Tambogrande: mangos, muerte, minería*, Perú.

bogrande comenzó a salir todos los días en el periódico: que la consulta es ilegal, que no es vinculante, que no va a servir de nada... El alcalde era prominero, pero no tenía otra opción que aceptarla, si no quería irse del pueblo», dice Vicente Zapata.

El 2 de junio de 2002, el día de la consulta, el río estaba crecido. Entonces no estaba construido todavía el puente nuevo. Y cada vez que subía el nivel del agua la gente de las comunidades cercanas a Tambogrande tenía que cruzar en llantas hinchables. Todavía junto al río quedan las *champas* donde esperaban a la sombra las familias para ser transportadas al otro lado por los jaladores, los muchachos fuertes que con el agua al cuello cruzaban el río a pie tirando de grandes neumáticos. Ese día, sobre las llantas y bajo el sol, la gente iba vestida de domingo, las mujeres y niñas con vestidos frescos de telas brillantes, los hombres y niños de camisa. Era una fiesta.

—¿Sacaremos el 30%? —preguntaba alguien del Frente.

—¿Estás loco?, ¿qué va a ser?, ¿no ves con qué ganas está viniendo la gente?

El 93,8% de las 27.015 personas que acudieron a votar lo hizo por el no a la mina. Solo 350 personas votaron por el sí. En la Bolsa de Toronto las acciones de la Manhattan bajaron un 28% y un año después, el Estado canceló el proyecto.

«En Tambogrande hemos logrado mucho, pero tampoco hay que confiarse. Había toda una presión para impedir la consulta. A mi hija la sacaron de la universidad y se la llevaron, con cuchillos, y la soltaron a medianoche. Mataron a Godofredo...», dice Ojeda, que ahora es alcalde por Agro Sí, el partido que creó el Frente para asegurarse de que ninguna minera volviera a comprar a ningún alcalde.

Cuando se supo el resultado de la votación, la gente de Tambogrande salió a festejar a la plaza. Llevaban banderas peruanas y pancartas que identificaban de qué caserío procedían. En una se leía «¿Quién mató a Godofredo?». Algunas personas llevaban limones en las manos. Los cantos eran los mismos que en las marchas, solo que ahora eran de celebración. La gente se calla cuando agarra el micrófono Pancho Ojeda: «A partir de hoy vamos a hacer una colecta pública para juntarles el pasaje y que los mineros se puedan ir y lleguen hasta Canadá». Les debieron de llegar los pasajes porque la empresa Manhattan Corporation nunca más volvió a operar en Perú.

Uno, cien, 288 Tambograndes

Tambogrande sentó un precedente de norte a sur de América Latina. Era la primera vez que una población recurría al voto secreto y libre para prohibir la megaminería. La experiencia se replicó en Argentina, en Esquel y en Loncopué; y a partir de 2005 en decenas de comunidades de Guatemala. En 2007, las consultas vecinales en las provincias peruanas de Ayabaca y Huancabamba, también en el departamento de Piura, lograron impedir el proyecto minero Río Blanco.

De los 288 conflictos sociales que conmovieron Perú en 2009, el año con mayor conflictividad según la Defensoría del Pueblo, la mayoría era de carácter medioambiental o estaba relacionada con la distribución del tan cacareado milagro económico. «En los últimos años, la expansión de la economía ha generado expectativas de inclusión en los beneficios del crecimiento y, a la vez, temores sobre el uso y disposición de recursos naturales, de cambios drásticos en sus formas de vida», afirmaba la Defensoría.

En Espinar (Cusco), las protestas contra la contaminación y el saqueo iniciadas en 2009 terminaron en una huelga indefinida y bloqueos contra la minera suiza Xstrata. En Cocachacra (Arequipa), las movilizaciones y una consulta popular consiguieron frenar el proyecto minero Tía María en 2010. Y en abril de 2011, los habitantes de Lircay (Huancavelica) lograron expulsar a la minera Pampamali. En todos los casos con muertos y cientos de heridos. Entre 2006 y 2011, la cifra de muertos en conflictos sociales había ascendido a 195. En 2004, las protestas afectaban a cuatro departamentos. A finales de la década se habían extendido a veinticuatro, es decir, a todos salvo uno.

¿Qué es más importante, el agua o el oro?

A mediados de 2011, los candidatos Keiko Fujimori y Ollanta Humala intentaban canalizar el descontento: «Cambio radical» ofrecía una; «la gran transformación», prometía el otro. Al mismo tiempo, la carretera entre Puno y Desaguadero, la principal frontera con Bolivia, llevaba semanas bloqueada por miles de comuneros que protestaban contra la instalación de la minera canadiense Santa Ana.

Tras un mes de paro conseguían que una de las últimas medidas de Alan García fuera retirar el proyecto. También que los candidatos incluyeran en sus discursos el tema de la minería.

En plena campaña, Humala visitó Cajamarca, el departamento donde la minería a gran escala está más avanzada y donde más reticencia existe a seguir implementándola: en 2004, la oposición a la empresa Yanacocha había conseguido impedir la explotación del cerro Quilish y en 2006 salvó el cerro Carachugo. Cuando Humala los visitó, la población local estaba intentando bloquear el proyecto Conga que, para extraer oro y cobre, prevé el secado de cuatro lagunas en las zonas altas de Cajamarca.

La moda dicta traje de chaqueta oscuro durante la presidencia y poncho perpetuo en temporada electoral. Así lo hicieron Fujimori y Toledo, y así lo hizo Humala para presentarse ante el público cajamarquino, en un mitin a medio camino entre el *show* televisivo y la arenga épica previa a una gran batalla.

—La minería es una cicatriz en el rostro de Cajamarca. He visto un conjunto de lagunas y me dicen que las quieren vender. —Humala hace participar a la audiencia.

—¡Sííííí! —gritan miles de simpatizantes.

—¿Ustedes quieren vender su agua?

—¡Nooooooooo!

—Dicen que las quieren vender a las mineras. ¿Y les han consultado a ustedes?

—¡Nooooooooo!

—Porque... ¿qué es más importante, el agua o el oro?

—El aaaaagua —enloquecen los cajamarquinos.

—Porque ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua, nuestras criaturas toman agua, nuestro ganado toma agua —proclama Ollanta Humala.

Una vez electo presidente, Humala viró y viró hasta declarar lo siguiente: «El proyecto Conga es un proyecto importante para el Perú, porque le va a permitir realizar la gran transformación y la inclusión social que ofrecimos al pueblo peruano». El analista Eduardo Gudynas resume la lógica bajo el agujero de la montaña: «Se genera una situación donde la transición prometida se vuelve imposible, por las consecuencias del extractivismo en varios planos, desde las

económicas a las políticas, como el desplazamiento de la industria local o la sobrevaloración de las monedas nacionales o la tendencia a combatir la resistencia ciudadana»²⁶.

Y la resistencia ciudadana no está precisamente de retirada. El Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca ha conseguido parar el proyecto Conga y el proyecto Cañariaco, de la Candente Copper. En ambos casos, las rondas campesinas están haciendo labores de defensa del territorio. Junto a las lagunas que pretende explotar Yanacocha, las rondas han instalado campamentos de vigilancia. Rosa Huamán, presidenta de las rondas campesinas de Cañaris, explicaba en febrero de 2013 que aunque se suspendan los paros, «la población está tan indignada que en cualquier momento se levanta».

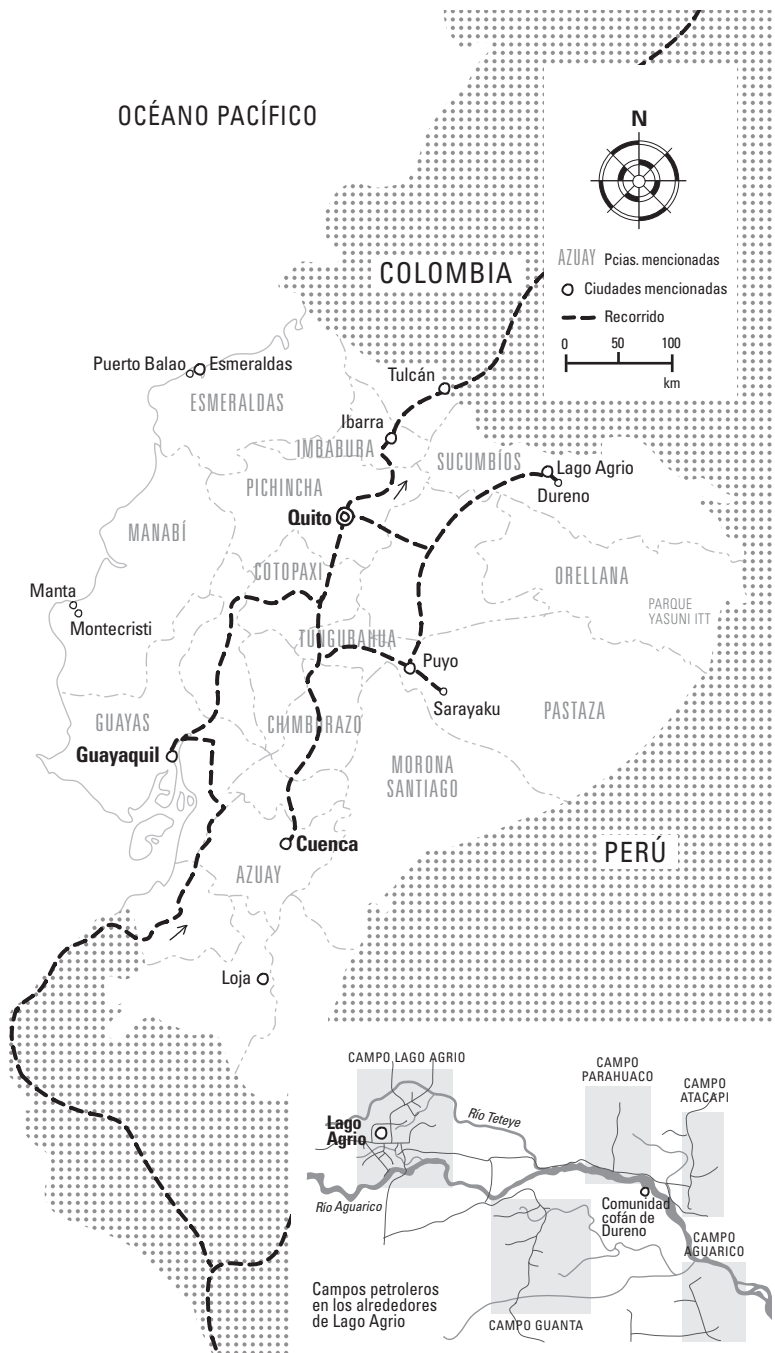
Para Hugo Blanco, que actualmente dirige desde Cusco el periódico *Lucha Indígena*, la principal razón detrás de este nuevo ciclo de luchas hay que buscarla en la renovada ofensiva de las multinacionales y los Estados en busca de recursos naturales para las nuevas y viejas potencias. «La gente en las ciudades cree que los animales y vegetales se producen en el supermercado. Por eso no les importa el campo. La gente del campo, que es la que menos disfruta de las ventajas de la civilización, sabe que de la tierra le viene la vida. Por eso se juega la vida. Dicen que no hay vanguardia política en el Perú. Hay vanguardia política, está en Bagua, en Cañaris, en Espinar, en Cocachacra... Como dijo el subcomandante Marcos, no se trata de tomar el poder, se trata de construirlo. Ellos lo están construyendo sin conocer la existencia del *sub* o de los zapatistas», concluye Blanco.

* * *

Mototaxistas, pescadores, surfistas y tráileres comparten la Panamericana norte en su camino hacia Ecuador. Las casas bajas dan a playas habitadas por pelícanos que degustan las sobras de los pescadores, que se preparan su cevichito en el mar. A la arena llegan los restos del festín: tomates, maíz, raspas de pescado y —cómo no— limones de Tambogrande.

26. GUDYNAS, E. (2013), «Hoy, en América Latina, ¿Marx sería extractivista?», *ALA-América Latina en Movimiento*.

OCEANO PACIFICO



ECUADOR

«A veces separamos a los humanos y a la naturaleza, y yo digo: los humanos ¿qué somos? ¿De qué estamos hechos? ¿Acaso no somos parte de la naturaleza? La naturaleza es la vida. Es la vida misma la que estamos defendiendo» (Blanca Chancoso, líder de la Conaie, Cuenca, 2011)

El primer barril de petróleo

DÍA 196 / 8 DE MAYO DE 2011 / LAGO AGRIO / SUCUMBÍOS

El 26 de junio de 1972, los responsables de la compañía estadounidense Texaco y las máximas autoridades del Gobierno militar de Ecuador inauguraban el oleoducto que conectaba por primera vez la selva amazónica con el Pacífico. La voz nasal del locutor del *Noticiero nacional* sobrevuela sobre imágenes en blanco y negro de gigantescos depósitos circulares, tuberías de cien ramificaciones, uniformes militares y trabajadores anónimos de Puerto Balao, en la costa de Esmeraldas.

Los clarines y aplausos se confunden cuando se anuncia que el primer mandatario girará la llave que abrirá paso al primer barril de petróleo que con sangre y esfuerzo ha serpenteado el territorio nacional. El presidente de la República Guillermo Rodríguez Lara pone en acción la rueda que traerá el bienestar económico a nuestro pueblo.

Sobre una tarima, una manguera rellena el barril de madera. Hasta rebosarlo. Una película negra y viscosa envuelve el primer

barril de petróleo de la Amazonía¹. El público se amontona alrededor del protagonista de la ceremonia.

El pueblo no puede contener su emoción, sus manos encallecidas por el trabajo se mancharon con el negro petróleo que simboliza su esperanza. Hombres, mujeres y niños mancharon sus ropas para guardar un recuerdo imborrable de este día.

Al día siguiente, el barril viajaba a Quito, donde era recibido con todos los honores de un jefe de Estado. El cortejo avanza hasta el templete del Colegio Militar, en medio de un desfile multitudinario. El barril, acomodado sobre una almohadilla, encima de un tanque militar. Con el descubrimiento «de esta nueva riqueza», la voz nasal del locutor auguraba «el inicio de una era de prosperidad».

Cuarenta años después, la región de donde fue extraído el petróleo que llenó aquel barril es una de las más pobres de Ecuador. Y la que presenta mayores índices de cáncer. Lago Agrio fue el nombre que los primeros exploradores de la Texaco utilizaron para bautizar el centro de sus operaciones en medio de los bosques amazónicos. Era la traducción literal de Sour Lake, la pequeña localidad de Texas donde esta compañía inició su camino para convertirse en una de las petroleras más grandes del mundo.

En Lago Agrio, el aire huele a gasolina, la tierra huele a gasolina, el agua huele a gasolina. Los hoteles, las compañías de taxis, hasta los locales de alterne, llevan la palabra «oro negro» en sus rótulos. En una cafetería del centro de la ciudad, Hermenegildo Criollo nos cuenta el primer encuentro con la Texaco. Criollo había nacido en la comunidad indígena cofán de Dureno. Los ríos que rodean la aldea proporcionaban agua para beber y pesca en abundancia; los bosques, animales para cazar y medicinas naturales.

Hermenegildo tiene suficientes años como para recordar la llegada del helicóptero que transportaba a los primeros trabajadores estadounidenses: «Todo el mundo estaba asustado. En nuestra vida habíamos visto algo así, volando por el aire, y nos escondimos en la selva». Era

1. En 1924 se inauguró el primer pozo petrolero ecuatoriano en la península de Santa Elena, pero Ecuador no se convirtió en un gran exportador de crudo hasta 1972 con la construcción de este oleoducto.

1964. Texaco empezaba a levantar la infraestructura del primer pozo, Lago Agrio I. «Teníamos miedo de ir a ver», reconoce. Pero los ruidos de la maquinaria los llevaron a acercarse. «Fuimos caminando y vimos cinco hectáreas de bosque talado, bastante trabajadas, con tractores, aunque entonces no sabíamos cómo explicar a nuestra gente lo que era un tractor. Ellos nos llamaron para que nos acercáramos allí». En aquellos años no hablaban una palabra de castellano, cuenta Criollo. Mucho menos de inglés. «Ellos nos dieron comida, fideos y sardinas. Era la primera vez que comíamos eso. Nos dieron panela², queso, diésel, aunque tampoco sabíamos para qué servía el diésel. Del queso no queríamos saber nada y lo botamos en la selva». Les dieron tres platos y cuatro cucharas. Ese fue el único pago que recibieron a cambio de centenares de miles de hectáreas.

Al poco tiempo, los cofanes advirtieron un cambio en el ruido que venía de las máquinas. La compañía empezaba a perforar. En la orilla del río, muy cerca de la comunidad, apareció una mañana una gran mancha negra.

—¿Qué es esto? ¿De dónde viene? —dijeron en la comunidad. Ni los mayores ni los chamanes habían visto en sus días un derrame de petróleo.

«Ni sabíamos qué era el petróleo —dice Hermenegildo Criollo—. Te manchaba los pies, te manchaba la cara al lavarte, se manchaban la canoa, los remos, las palancas... ¿Y cómo se navega en un río si el remo queda resbaloso? Los pies no los podíamos lavar, lo tratábamos de sacar con arena y tampoco... Se te queda ahí. Con la leña manchada, la comida, todo huele a petróleo. Y vimos que no podíamos seguir viviendo ahí». Tuvieron que trasladar la comunidad hasta la ubicación actual, a veinticinco kilómetros de Lago Agrio. Pero la Texaco no tardó en rodear la zona con más pozos. Uno de ellos, Dureno I, fue instalado dentro del territorio de la comunidad. Los derrames de petróleo y los vertidos tóxicos terminaban en el río que utilizaban los cofanes para beber, para bañarse, para regar sus cultivos, donde bebían los animales. Los que no habían huido aún por el ruido. «Movíamos hacia los lados el petróleo y tomábamos el agua de abajo. No sabíamos que el agua estaba contaminada», dice Hermenegildo.

2. Azúcar sin refinar.

«Y entonces empezaron los dolores de estómago, los dolores de cabeza. Nos bañábamos en el río y todo el cuerpo quedaba con sarpullidos. Eran enfermedades que nunca habíamos visto. Y las tratamos de curar con nuestros medicamentos, con nuestra medicina de la selva, pero no había cura para eso». Su primer hijo falleció a los seis meses por problemas de crecimiento. El segundo nació sano, pero las cosas no tardaron en torcerse. «Cuando tenía tres años, ya podía nadar, caminar en la playa. Yo lo llevé un día al río. Y el niño, mientras se bañaba, tomó agua contaminada. Cuando llegó a la casa empezó a vomitar, y no había cómo parar el vómito. Terminó vomitando sangre. Antes de veinticuatro horas falleció. Dos hijos. Desde entonces yo dije: ¿qué puedo hacer, cómo podemos defendernos de las enfermedades que vienen de todos lados?».

El caso de la comunidad de Dureno no era aislado. Cuando en 1992 Texaco abandonó Ecuador, olvidó llevarse sesenta millones de litros de petróleo que había derramado en el ecosistema amazónico y 68.000 millones de litros de aguas tóxicas que había vertido en los ríos. Una catástrofe ambiental y social solo comparable con las más grandes de la historia: Chernóbil, el derrame de British Petroleum en el golfo de México, Bhopal o el *Exxon Valdez*. Aunque en este caso no se trató de un accidente ni de negligencia, sino de una acción deliberada para ahorrar gastos.

La selva tóxica

—Recién estás empezando a oler combustible. Vas a tener todo el día. Los gases volátiles están en el aire. No es un ambiente apto para sobrevivir —dice Donald Moncayo, uno de los voceros de la Asamblea de Afectados por la Texaco.

Moncayo es el encargado de mostrar a los visitantes, periodistas y activistas las evidencias del desastre ambiental que dejó la Texaco. Vive en la comunidad de Santa Cruz, una humilde barriada de Lago Agrio. Cuenta que su familia se ve obligada a comprar embotellada todo el agua que consume. Tres dólares por día. Una fortuna para la mayoría de la población, que apenas gana siete dólares diarios, comenta.

La primera parada es Lago Agrio II, el segundo pozo perforado por la compañía. Moncayo nació en 1973 a doscientos metros de allí.

Es un colono, como tantas otras miles de personas que empezaron a poblar la región con la llegada de la Texaco.

—A mí me gusta venir a este sitio porque nadie me puede decir qué pasó o qué no pasó. Yo te estoy contando lo que vi, porque yo viví esa vida —dice Moncayo.

En los alrededores del pozo hay tres *piscinas* para desechos tóxicos. En estos agujeros cavados en la tierra, sin ningún revestimiento, la Texaco arrojaba los lodos de perforación, el petróleo de prueba y las aguas de formación, todos elementos altamente tóxicos que intervienen en el proceso de extracción. En ocasiones, cuando las piscinas estaban saturadas, les prendían fuego. De pequeño, Donald solía acercarse a estas hogueras que podían permanecer encendidas hasta cinco días enteros. Al atardecer ponía los granos de cacao a secar junto al calor del petróleo quemado. Otras veces, la Texaco «chupaba» el contenido y lo «regaba» por las carreteras. Es probable que el general Rodríguez Lara no estuviera pensando en camiones resbalando por carreteras empetroladas cuando anunciaba que Ecuador saldría del subdesarrollo «sembrando petróleo».

Donald Moncayo se aleja unos metros de la piscina, hasta llegar al barranco que desciende hacia el estero, el pantano aledaño al río.

—Este es el cuello de ganso —señala una tubería que sale de la tierra.

Cuando llovía torrencialmente, algo más que habitual en la selva amazónica, los lodos tóxicos salían por el cuello de ganso y caían en el estero. Del estero iban por el río Teteyé y el río Aguarico, hasta terminar en el río Amazonas, cuenta. Y del río Amazonas hasta el Atlántico. Hasta en Perú hubo denuncias por contaminación.

Y estas tres piscinas no eran las únicas. Hasta 950 depósitos similares construyó la Texaco. Moncayo desmiente uno de los mitos de la historiografía ecuatoriana:

—La historia del primer barril de petróleo es mentira. El primer barril de petróleo de la Amazonía está en este estero. Esa es la verdadera historia.

Camino a la siguiente parada, las tuberías oxidadas acompañan la carretera como una amenazante advertencia. «Los derrames son pan de cada día», comenta Moncayo. Los oleoductos cruzan los innumerables ríos sujetos con una maraña de cables y alambres. Un peligro que no parece preocupar mucho a los niños de las comu-

nidades, que se bañan entre los tubos, se tiran desde los puentes y toman el sol en las orillas.

Un pozo cerrado con magia

Hasta el año 2000, Moncayo era un «joven más, de los que les importaba un pepino el tema social y ambiental». Pero un derrame cerca de su casa le hizo «abrir los ojos».

—Lávelas, que esas gallinas se salvan —dijo el tasador de la compañía cuando acudió a revisar los daños producidos por el vertido. Ya no era la Texaco, sino la estatal Petroecuador, que había asumido todo el control de los pozos en 1992.

Había visto el derrame, los peces saltar del agua, las gallinas morir lentamente por el petróleo. «Yo dije: “Esta huevada está mal, algo hay que hacer”. Yo veía nacer muchos niños muertos, con malformaciones... He visto tantas cosas, pero nunca abrí los ojos hasta ese día». Ese año entró a formar parte del Frente de Defensa de la Amazonía, una organización formada sobre todo por colonos, que llevaba desde 1994 denunciando el desastre ambiental y social que suponía la explotación petrolera en la región.

Los gérmenes de resistencia frente a las petroleras no provenían solo de los colonos. A finales de los ochenta, al principio de forma aislada, las comunidades comenzaban a resistirse a la entrada de las compañías en sus territorios. Una de las primeras fue Dureno, la comunidad de Hermenegildo Criollo.

Para llegar al poblado hay que cruzar en canoa el gran río Aguarico, atravesado por un aparatoso oleoducto colgante, y caminar por una amplia playa de guijarros redondos. En casas de madera elevadas sobre postes, mil personas siguen viviendo en esta comunidad, aunque no de la pesca y la caza como antes. Cultivan yuca y banano, y elaboran artesanía con semillas. Literalmente rodeado de pozos petroleros, el territorio de Dureno son las 9.500 hectáreas que más se parecen a la selva que encontraron los primeros exploradores de la Texaco en los años sesenta.

No solo estaban rodeados por campos petroleros. El pozo Dureno I se encontraba dentro de la comunidad. Cuando en 1987 la Texaco comenzó a tirar árboles y alisar la tierra para hacer una carretera que atravesaría el territorio cofán, la compañía se encontró

con un imprevisto. Los cofanes habían bloqueado el camino. Incluso llegaron a levantar una pequeña comunidad sobre la carretera, cuenta Alexandra Almeida, de Acción Ecológica. La Texaco tuvo que abandonar el proyecto. El profesor de la comunidad, Eduardo Silvio Chapal, relata aquel momento mientras sus alumnas y alumnos juegan al fútbol en la gran extensión verde con porterías que cumple la función de plaza central. «Estuvimos casi un mes para que saliesen con todas las máquinas. Íbamos por grupos, treinta personas por semana. Hicimos comisiones para que nos llevaran plátano, yuca, chicha», recuerda.

Más de diez años después, el 12 de octubre de 1998, la comunidad de Dureno volvía a convertirse en una fuente de disgustos, esta vez para Petroecuador. «Toda la comunidad nos fuimos para cerrar el pozo», dice el profesor cofán. Tres meses duró el campamento alrededor de la infraestructura. Cerca de quinientos indígenas, muchos procedentes de distintos pueblos de Ecuador y algunos del resto del continente, impedían el acceso a los trabajadores. En la negociación con la compañía, consiguieron que el pozo fuera apagado hasta que terminara la movilización para evitar problemas de salud en los menores. A los dos días, llegaron los militares, pero los cofanes bloquearon la entrada con sus lanzas, cuenta Alejandra Almeida. Cuando finalmente los cofanes se retiraron y Petroecuador volvió a tener acceso a las instalaciones, ni sus mejores técnicos fueron capaces de hacer que volvieran a funcionar. Nadie en la empresa ha podido explicar hasta ahora por qué ese pozo de petróleo de buena calidad se secó. «No sé si es verdad, pero es lo que dicen: llegaron los chamanes, tomaron *yajé* y el pozo se secó», dice Criollo. El *yajé*, también conocido con el nombre de ayahuasca, es un potente alucinógeno utilizado en rituales y ceremonias indígenas. En este caso, al parecer, funcionó.

Indígenas y colonos

Uno de los principales obstáculos para hacer frente a la Texaco era la desconfianza entre los dos principales grupos de afectados por la contaminación: los colonos y los pueblos indígenas. «Los cofanes nos veían como invasores —recuerda Donald Moncayo—. Nosotros tampoco sabíamos, nos decían simplemente que acá había tierras baldías. La Texaco iba abriendo las carreteras y la gente se iba posicionando».

Humberto Piaguaje pertenece al pueblo secoya. Apenas quedan 445 miembros de su cultura milenaria, acechada por los vertidos y los cambios forzados en su forma de vida. «Fue un proceso de construcción bien difícil al inicio», dice. Recuerda cuando Luis Yanza, uno de los primeros colonos, empezaba a convocar reuniones: «La gente decía: “Chuta, ¿cómo nos vamos a unir con los colonizadores? Si ellos también vinieron a destruir nuestra selva”. Pero dijimos: “No, pues, tenemos que luchar más allá de todo eso”. A pesar de haber tantos conflictos, de no conocer la cultura, de hablar otros idiomas, hicimos el Frente de Defensa de la Amazonía».

Años después, en 2001, la organización se amplió con la creación de la Asamblea de Afectados por la Texaco. Hoy Piaguaje ejerce como subcoordinador legal de esta organización que reúne a 30.000 indígenas y colonos. Su principal objetivo se convirtió en conseguir justicia y reparación ambiental y social por todo el daño producido por la Texaco en sus veintiocho años de actividad petrolera.

En 1993, un grupo de abogados, colonos e indígenas ya habían iniciado una demanda en Nueva York contra la Texaco. Pero el juicio fue bloqueado por el equipo de abogados de la compañía. El argumento de la petrolera era que el juicio debía realizarse en Ecuador. «La Texaco consideraba que acá la justicia era muy corrupta y que podía comprar a los jueces con cualquier centavo», explica Alejandra Almeida. En 2002, la petrolera conseguía su objetivo: el juicio de Nueva York era trasladado a Ecuador.

En aquellos años no resultaba extraño que la Texaco, absorbida en 2001 por Chevron, se empeñara en llevar el juicio a Lago Agrio. Para Esperanza Martínez, directora de Acción Ecológica, esta decisión coincide con la etapa dorada del neoliberalismo en Ecuador. En varias resoluciones de los años noventa, el Estado ecuatoriano había eximido a la Texaco de cualquier responsabilidad. «Tú veías cómo todo el aparato del Estado, incluso el Ejército, se ponía del lado de la empresa», cuenta Martínez. Sin embargo, cuando el juicio llegó a Ecuador, el panorama había cambiado. El movimiento indígena había sido clave en la destitución de dos presidentes por sus políticas neoliberales: Abdalá Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en 2000.

Las cosas no salieron como esperaba la compañía, dice Alejandra Almeida: «Ellos no contaron con que la movilización iba a estar vigilante todo el tiempo y eso iba a presionar a los jueces para que

no se pudiesen vender. Teniendo ahí cientos y cientos de indígenas a la puerta de la corte a ningún juez se le iba a ocurrir hacer alguna barbaridad. En Ecuador los juicios se ganan en las calles. Con eso no contaba la Texaco». Un grupo de periodistas comprometidos ayudó a la difusión de la causa de los afectados. Los medios de comunicación empezaron a hablar del «juicio del siglo».

El juicio del siglo

El 23 de junio de 2003 se inició el proceso contra la Chevron-Texaco en Lago Agrio. Como ayudante de los abogados que representaban a los 30.000 afectados figuraba un joven llamado Pablo Fajardo. Estaba a punto de terminar sus estudios de Derecho a distancia. Fajardo había nacido en una familia humilde de colonos, emigrados desde la provincia de Manabí, en la costa pacífica. Había trabajado también algún tiempo para la Texaco. «Cuando había un derrame, en vez de limpiarlo, mandaban cubrirlo con tierra para que no se viera. Decían que lo importante era que no se viera». No tardó en dejarlo.

En 2005, cuando apenas se cumplía un año desde que había terminado la carrera de Derecho, se convirtió en el abogado principal del caso. Se enfrentaba a siete letrados de Chevron. El que menos, tenía veinticinco años de experiencia. En el despacho de Pablo Fajardo en Lago Agrio, más de dos habitaciones enteras son necesarias para almacenar todo el material del juicio, 240.000 hojas que recogen los testimonios de los afectados, los análisis sobre el terreno y los datos de dieciocho años de litigio.

Es difícil imaginar un juicio más desigual. Desde el inicio del proceso, Chevron ha gastado más de mil millones de dólares en abogados y peritajes. «Nosotros hemos tenido que ir rebuscando hasta el último centavo para seguir en esta batalla. Además, ellos tienen recursos para manipular cualquier información, para comprar gobiernos, para sobornar a periodistas, tienen dinero suficiente para manejar el mundo entero».

Estas diferencias no fueron un obstáculo frente a los abogados de Chevron-Texaco. Les respaldaba una evidencia de contaminación que la empresa no se molestó en negar. A lo sumo, intentó matizar. El juicio avanzaba sin buenas perspectivas para la multinacional. Su equipo de abogados probó todas las tácticas. Primero intentó impug-

nar el juicio porque la Asamblea de Afectados era una «asociación criminal» dedicada a extorsionar a la compañía. Luego intentó que el juicio volviera a Estados Unidos con la excusa de que en Ecuador ya no se daban las condiciones para un proceso justo.

No funcionó. La presión fuera de los juzgados era constante. Al igual que las marchas a Quito, apoyadas por grupos ecologistas, la confederación indígena de la Amazonía y la confederación indígena de todo Ecuador, la Conaie³. También fueron habituales las asambleas masivas, las tomas de la Procuraduría y las guardias de vigilancia, todas las horas del día, todos los días del año, para impedir contactos indeseados entre los representantes de la empresa y los jueces.

El 14 de febrero de 2011, la justicia ecuatoriana emitió un fallo. Y lo repitió en enero de 2012: Chevron-Texaco era culpable. Debía pagar 19.200 millones de dólares, la indemnización más alta de la historia de la humanidad.

Los afectados no pensaban convertirse en millonarios entre contaminación y miseria. Los 30.000 demandantes determinaron que el dinero no se iba a repartir individualmente, sino de forma colectiva. La mayoría de la indemnización serviría para la reparación ambiental. El resto, para hospitales, escuelas, suministro de agua potable y otras inversiones para el desarrollo de la región. Ahora solo falta cobrar el dinero, algo que no es sencillo, ya que Chevron no tiene activos en Ecuador. «Tenemos que obligar con la ley a que Chevron pague por el crimen cometido. Allí donde haya activos de Chevron iremos», dice Pablo Fajardo. A principios de 2012, los abogados de la Asamblea de Afectados iniciaban los trámites en Colombia, Canadá, Brasil y Argentina⁴.

Independientemente de lo que ocurra con la indemnización, «el juicio ya es histórico», dice Fajardo. Para este abogado, este

3. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) fue fundada en 1986.

4. En noviembre de 2012, la justicia argentina decretó el embargo de todos los bienes de Chevron en el país. Meses después, coincidiendo con la firma de un gran acuerdo entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la petrolera para explotar el yacimiento de gas de Vaca Muerta (Neuquén), la Corte Suprema argentina dejó sin efecto el embargo. La explotación se realizará con el contaminante método de fractura hidráulica o fracking y afectará a numerosas comunidades mapuches.

proceso no solo afecta a Chevron, a los demandantes y a la Amazonía. «Lo que está en juego es todo un sistema empresarial que por décadas ha cometido enormes crímenes con total impunidad en América Latina, en África y en todas partes del mundo. Este juicio puede cambiar las reglas del juego».

Pablo Fajardo habla de una «guerra de casi cincuenta años» en la Amazonía ecuatoriana. Los primeros veintiocho años fueron una «masacre constante» de la Texaco, que estuvo «bombardeando con tóxicos» el aire, el agua, la tierra, la selva. «Los últimos dieciocho años hemos ido reaccionando poco a poco y hemos podido enfrentar a este poder real. Hasta hace pocos años atrás, la gente en Ecuador y en el mundo pensaba que era imposible que un grupo de indígenas, de campesinos, de gente pobre, de un país *tercermundista* pudiera enfrentar a una empresa poderosa como Chevron. Estamos demostrando que es posible y que se puede hacer, que es posible ir mucho más allá, que se pueden cambiar las cosas, que no son intocables, que ellos no son invencibles».

Los guardianes de la selva

SARAYAKU / PROVINCIA DE PASTAZA

La mayoría de los asistentes nunca había visto un juicio. Mucho menos uno retransmitido en directo por internet. Agolpados en una casa comunal de paredes de madera y techos de palma, una cuarta parte de los 1.200 habitantes de Sarayaku seguían la declaración de sus vecinos a miles de kilómetros, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica. Era el 6 de julio de 2011. El acusado no era otro que el Estado de Ecuador. Los cargos: haber permitido la entrada de la petrolera argentina CGC sin consultar a los pueblos indígenas de la zona y ser cómplice de violaciones de derechos humanos. Siete años antes, el pueblo de Sarayaku había conseguido expulsar a esta empresa de su territorio, convirtiéndose en un ejemplo para centenares de comunidades y pueblos amenazados por la explotación petrolera.

Seis horas de canoa a través del río Bobonaza separan Sarayaku de la ciudad más cercana, Puyo, unos doscientos kilómetros al sur de Lago Agrio. Ni tendido eléctrico ni cobertura telefónica ni carreteras llegan a esta comunidad amazónica. Sus habitantes viven de la agricultura, la caza y la pesca. Decidieron que no permitirían la entrada de las empresas petroleras o madereras. Tampoco de las instituciones del Estado, a las que consideran ajenas y poco democráticas. Sin embargo, no han dudado en instalar placas solares en cada una de las casas —suficiente para algunas horas de luz por la noche—, escolarizar a cada uno de los seiscientos niños que viven en la comunidad o conectarse a internet en una casa comunal a la que llaman «el ciber».

La mayoría viste a la occidental: vaqueros, camisetas, gorras, botas de lluvia y zapatillas deportivas, aunque muchos van descalzos. Las lanzas, los vestidos y los sombreros de colores y plumas se reservan para las ceremonias y los momentos importantes. El contacto con la cultura occidental ha modificado muchas de las costumbres. Pero hay cosas que no han cambiado. Literalmente, la vida de Sarayaku depende de la naturaleza. Aunque, según cuentan, cada vez hay que alejarse más del poblado para encontrar caza. Y cada vez bajan menos peces por el río. Incluso algunos espíritus de la selva, como la anaconda, cuentan los mayores, se han ido hacia zonas todavía más alejadas, expulsadas por el ruido de los motores y la dinamita de las empresas petroleras. «Sin darnos cuenta estamos cambiando —dice Narcisa Gualinga, de 66 años—. Podemos coger las cosas buenas, pero solo las que nos gustan. No las que nos van a hacer daño». Ese equilibrio ha sido una de las búsquedas del pueblo de Sarayaku a lo largo de su historia.

El pueblo del mediodía

«Nos empezaron a decir que nosotros éramos subversivos, guerrilleros, cuando realmente éramos solo un pueblo guerrero, una cosa muy diferente», relata José Santi, un joven que participó con dieciséis años en la lucha contra la petrolera CGC. En la historia de Sarayaku sobran los ejemplos de resistencia. En los años cuarenta, en medio de un conflicto con el vecino Perú, el Ejército ecuatoriano instaló un campamento en estas tierras. Las confiscaciones, el

trabajo forzado y la prohibición de comerciar con Perú terminaron provocando una rebelión. Para los habitantes de la selva nunca habían existido las fronteras. El Ejército tuvo que abandonar el territorio después de que los indígenas atacaran el campamento y quemaran la bandera de Ecuador.

En los años sesenta también decidieron echar a la Iglesia, cansados de los malos tratos, los castigos y las prohibiciones. Se iniciaba entonces el proceso para retomar el control de las autoridades tradicionales, los kurakas, nombrados antes a dedo por los sacerdotes cristianos. Los kurakas ahora son elegidos por consenso por la asamblea de la comunidad, encargada de tomar las decisiones más importantes.

No por nada en la cosmología que los ancianos conservan y transmiten Sarayaku es conocido como el «pueblo del mediodía», el centro de todo, que «jamás caerá, y, si cae, será el último en caer», dice José Gualinga, presidente de Sarayaku.

Pese a la penetración de la Iglesia y del Ejército, y los contactos comerciales con las ciudades más cercanas, no fue hasta el inicio de la actividad petrolera en la Amazonía cuando su forma de vida comenzó a estar seriamente amenazada. La experiencia de las comunidades afectadas por la Texaco influyó de forma determinante en la decisión de no permitir la entrada de las compañías en su territorio. Muchos jóvenes de Sarayaku habían viajado a Lago Agrio para comprobar qué pasaba cuando se permitía la explotación de hidrocarburos.

«En Lago Agrio, los peces están envenenados, no puedes beber el agua del río. El petróleo se te pega a las manos. El ruido afecta a la caza —comenta José Santi, uno de los veinte jóvenes de Sarayaku que participó en este viaje al norte—. Allá todo tiene dueño, están los militares, la guardia, todo está lleno de humo. Los jóvenes de allá nos ayudaron mucho: nos dijeron que no dejemos entrar a las petroleras porque una vez que están dentro, se adueñan y ya todo es de ellos».

Un millón de hectáreas en el Quinto Centenario

En 1989, la petrolera Arco-Agip intentó entrar en territorio de Sarayaku, aunque fracasó ante la oposición de la comunidad. Pero no era sino el principio. En 1992, el avance de las empresas petroleras y madereras llevó al pueblo de Sarayaku a participar en la gran marcha

a Quito. Quince mil personas organizadas en la confederación indígena de Pastaza (Opip) y en la Conaie permanecieron tres semanas en la capital. En el año del Quinto Centenario los pueblos indígenas consiguieron la titulación de más de un millón de hectáreas, 135.000 de ellas para Sarayaku. Según José Gualinga, la idea de la marcha y su planificación surgió de Sararaku y de los líderes de la Opip⁵. El Estado había reconocido la propiedad indígena del suelo. Pero el subsuelo seguía siendo del Estado.

En 1996, el Estado adjudicó a la empresa CGC el llamado bloque 23, con 200.000 hectáreas de bosques amazónicos vírgenes. El 60% del bloque se encontraba dentro del territorio de Sarayaku. La primera estrategia de la compañía fue comprar a los dirigentes. O por lo menos, lo intentó. Así lo cuenta Medardo Santi, que ejercía de kuraka en esos años: «Estaba en la oficina trabajando y llegaron los gringos preguntando por el kuraka. A mí no me dieron confianza y les dije que el kuraka no estaba. Y seguí trabajando. Dijeron que venían de una petrolera. Cuando ya era tarde, yo me fui de allá. Los dejé allí esperando». Como no se iban, Medardo tuvo que cambiar de estrategia. También se cambió de camisa y se puso una gorra. Se presentó ante los gringos como el kuraka, como si fuera la primera vez que los veía.

—¿Usted no es el mismo que estaba antes ahí?

—No, yo no, acabo de llegar —les dijo Medardo.

Medardo cuenta la historia entre risas, en la cocina sin paredes de la escuela, mientras el fuego de leña hierve unas habas. Son las ocho de la noche. Todo el poblado duerme ya. Y a las tres de la mañana, cuenta Medardo, todo el mundo estará despierto, tomando chicha de yuca y preparando las labores del día. Medardo sigue contando la historia: «Luego fuimos a hablar. Los gringos me dijeron que si los ayudaba me daban un maletín con dinero. Pero ¿qué iba a hacer yo? Los líderes que agarran la plata luego se tienen que ir con su familia de la comunidad. ¿Para qué me sirve el dinero si tengo que irme de la comunidad?». La compañía tuvo que afinar sus tácticas.

5. CASTRO, S. DE (2008), «Sarayaku: libertad, tierra, cultura», *Rebelión*, 10 de octubre de 2008.

La petrolera contrató a la empresa Daymi Service S. A., especializada en relaciones comunitarias a través de sociólogos y antropólogos para intentar convencer a los pobladores «con regalos, dinero, comida o calumnias», cuenta José Gualinga. El resultado fue la división entre las comunidades vecinas. Algunas de ellas empezaron a negociar con la CGC.

Las divisiones se daban incluso dentro de los poblados y en el seno de las propias familias. Según Patricia Gualinga, responsable del área de Mujer y Familia en Sarayaku, «si los hombres dudaban, las mujeres dijeron que no desde el principio». Cuando los representantes de la empresa llegaron a Sarayaku las mujeres ya habían tomado una decisión. «Y la decisión era que no se iba a permitir la explotación petrolera. Esa decisión con el tiempo fue respaldada por los hombres».

El 21 de noviembre de 2002, la empresa CGC ingresaba por primera vez en territorio de Sarayaku con la protección de agentes de seguridad privada y del Ejército. Entre los trabajadores de la empresa no faltaban hombres de la zona, cuenta José Gualinga. Cuando estaban acercándose, algunos corrieron al poblado para avisar que la petrolera estaba llegando. Habían entrado seis kilómetros en territorio de Sarayaku. «La gente se fue y quemó los campamentos de la empresa, toda su logística y los trabajadores de la compañía fueron rechazados».

Estado de emergencia

En una asamblea general, el pueblo de Sarayaku se declaró en estado de emergencia. En las fronteras del territorio se instalaron cerca de veinticinco campamentos de «paz y vida» con unas quince personas en cada uno. Con machetes, brújulas y aparatos de GPS deslindaron los límites del territorio abriendo una trocha entre la maleza. En dispersas tiendas de palma, tela o plásticos cerca de seiscientas personas, mujeres embarazadas, a veces con niños a cuestas, ancianos, pero sobre todo jóvenes, resistieron durante cuatro meses la lluvia, el hambre y la ansiedad provocada por los continuos enfrentamientos con los militares y los trabajadores de la empresa.

Equipados con aparatos de radio, los distintos equipos custodiaban los límites del territorio y daban la alarma cuando la

empresa intentaba entrar. Salían al encuentro de los invasores con las caras pintadas con huito —un fruto amazónico—, con las lanzas de chonta —madera de palma— y los rodeaban. Las mujeres avanzaban primero, los increpaban, les quitaban las armas y los obligaban a retirarse. En una ocasión, uno de los equipos formado por mujeres jóvenes capturó a una cuadrilla de obreros de la compañía que bajaba de un helicóptero. Muchos eran de comunidades vecinas. Los condujeron hasta Sarayaku para explicarles en una asamblea por qué se oponían a la petrolera.

—Ya no es tiempo de decir patrón, ahora somos indígenas pensantes —decía una de las mujeres mayores a los trabajadores retenidos, vestidos con monos amarillos⁶.

A principios de 2003, una avanzadilla de trabajadores custodiados por militares volvió a penetrar varios kilómetros dentro del territorio de Sarayaku. Las alarmas funcionaron. Las mujeres rodearon a los militares y les quitaron las armas. El Ejército se vio obligado a negociar para recuperar los fusiles de asalto requisados. Las imágenes de las mujeres entregando las armas a los militares dieron la vuelta al mundo.

Ocho años después, minutos antes de que comience la retransmisión del juicio de la Corte Interamericana, en la casa comunitaria se proyecta un vídeo que rescata esas imágenes. Los niños, sentados en primera fila, se ríen cuando reconocen a alguien de la comunidad, ahora ocho años más viejo, y gritan su nombre. En la pantalla, cada mujer sostiene un pesado fusil de asalto, con las dos manos. El militar espera de pie, con traje de camuflaje, visiblemente incómodo. El oficial levanta las manos para recibir el arma, pero la mujer no ha terminado de hablar. El militar baja las manos y espera a que la mujer decida entregarle el fusil. Una vez que se formaliza la entrega de la primera arma, otra mujer joven da un paso hacia delante y se repite la escena.

—Ustedes los militares están para protegernos, no para defender a las petroleras —decía una de las mujeres con la cara pintada de huito y una lanza de chonta en la mano, antes de entregar el fusil de asalto al desesperado oficial.

6. GUALINGA, E. (2003), documental *Soy defensor de la selva*.

Tras varias sentencias judiciales, entre ellas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2004 la compañía se retiró de la zona. Pese a la victoria conseguida, el impacto en la comunidad de Sarayaku fue enorme. Durante meses las clases estuvieron suspendidas, los cultivos y los proyectos de desarrollo comunitario tuvieron que ser abandonados. Toda la economía del pueblo se volcó en abastecer a los campamentos. «Nuestra vida ha cambiado para siempre», dice Patricia Gualinga.

Uno de los principales problemas que trajo la petrolera, además de la tonelada y media de explosivos enterrados en las zonas de caza, fueron las divisiones dentro de las mismas comunidades y entre las diversas poblaciones de la cuenca del río Bobonaza. Los enfrentamientos terminaron en más de una ocasión con heridos. Sin embargo, las promesas incumplidas de la compañía han hecho que comunidades que anteriormente habían negociado con la CGC, terminaran uniéndose a Sarayaku en la lucha contra la explotación petrolera. Es el caso de Pakayaku.

«Lo que hacía la petrolera era dar arroz, sardinas y la gente se convenía —dice Zenaida Yasacama, presidenta de Pakayaku—. Pero esas cosas no tienen valor, quizá para un día nos sirven, pero el territorio es lo fundamental para la vida. La gente ahora está al tanto de las cosas que pueden pasar y ya nadie quiere a la petrolera». Sin embargo, Canelos y otras comunidades de menor tamaño han llegado a atacar con disparos, palos y machetes a pobladores de Sarayaku.

¿El progreso era eso?

El seguimiento del segundo día de juicio, el 7 de julio de 2011, fue igual de masivo. A pesar de la intermitente conexión satelital, decenas y decenas de personas intentaban seguir las declaraciones a la Corte Interamericana desde fuera de la casa comunal, a través de las tablas, acomodados en las vigas o literalmente subidos a las paredes de madera. Uno de los argumentos de los abogados del Estado ecuatoriano es que Sarayaku había «negado el derecho a la economía y al desarrollo» a las otras comunidades del río Bobonaza. Los vecinos de Sarayaku se escandalizaban. No entendían por qué los letrados del Estado se empeñaban en defender a un Gobierno neoliberal de hace ocho años y a una empresa multinacional.

Los habitantes de Sarayaku tienen un concepto diferente del desarrollo. Para el presidente de Sarayaku, José Gualinga, la riqueza «es tener fauna, selva primaria sin contaminación, un río abundante de peces, una familia que no esté dividida, que haya conocimientos sobre prácticas agrícolas, medicinales, un sistema propio de educación. Sin eso nosotros somos pobres», dice. En una ocasión, un vecino trajo en una lancha un generador eléctrico, cuenta José Santi. Pero hacía tanto ruido que decidieron apagarlo. El progreso no era eso para Sarayaku.

En julio de 2012, la Corte Interamericana finalmente daba la razón al pueblo de Sarayaku: el Estado era culpable de no haber realizado la consulta previa y haber vulnerado los derechos comunales y culturales de este pueblo amazónico. Además de retirar los explosivos que la empresa dejó enterrados en el territorio, debe indemnizar a Sarayaku con 1,4 millones de dólares. Para José Gualinga, la importancia de este «éxito» es, sobre todo, el precedente que sienta para otros conflictos entre transnacionales, el Estado y las nacionalidades indígenas.

«Sarayaku no ha luchado solo por su derecho, por su libertad, ha luchado también por otros pueblos, por el planeta. Luchamos para que se mantenga el mundo —dice Mario Santi—. La tierra es vida, el aire es vida, el agua es vida, es un paraíso, y hay que luchar por él». A mediados de 2013, una nueva ronda de licitaciones petroleras volvía a amenazar la existencia de Sarayaku. El «pueblo del mediodía» ya ha anunciado que no permitirá la entrada de las compañías en su territorio.

Narcisa Santi se sostiene en un bastón de cedro. Resume de esta forma la lucha del pueblo de Sarayaku: «El dinero se acaba. La tierra nunca se acaba si no se contamina. Es la herencia para nuestros hijos».

«Como la paja del páramo»

CENTRO HISTÓRICO / CIUDAD DE QUITO

El volcán Chimborazo es la montaña más alta de Ecuador. Antes de que el Everest fuera medido, se creía que era la más alta del mundo. Con sus 6.310 metros, se resiste a perder su gloria: su cima sigue siendo considerada el punto más alejado del núcleo terrestre, gracias a la forma elíptica de la Tierra. Para los pueblos originarios, que han utilizado durante miles de años el agua de su glaciar, el Chimborazo tiene connotaciones sagradas. Al igual que los catorce montes blancos, escondidos entre nubes, que se despliegan en los 350 kilómetros de la «avenida de los volcanes». El *taita* Chimborazo es el padre; la *mama* Tungurahua —otro volcán que lleva en erupción desde 1999—, la madre. El hijo, según la mitología, es el Guagua Pichincha, uno de los tantos volcanes que conforman los límites de Quito. En las estribaciones de este volcán, todavía activo, las tropas del general Sucre derrotaron a los españoles en la batalla de Pichincha, que decidió la independencia del territorio actual de Ecuador.

El centro histórico de la ciudad se mantiene casi intacto. El núcleo de la vida política es la plaza de la Independencia, donde se levantan la catedral y el palacio de Carondelet, la sede del Gobierno. Los bloques irregulares de su base —según dicen extraídos del palacio de Atahualpa, el último rey inca— es lo poco que queda de la antigua capital. Francisco de Pizarro por el sur y Sebastián de Belalcázar por el norte avanzaban hacia la ciudad siguiendo las pistas del oro. El general Rumiñahui, que lideró la defensa frente a los invasores, prefirió destruir la ciudad antes de que fuera conquistada.

No fue el último intento de resistir a la colonia y, después de la independencia, a la República de los criollos. Francisco Daquilema, Manuela León o Alejo Sáez son solo algunos de los nombres que han quedado en la memoria de los pueblos indígenas ecuatorianos. Todos ellos fueron protagonistas de levantamientos en la Sierra a finales del siglo xix contra el trabajo esclavo y el diezmo, un impuesto heredado de la colonia.

Ya a principios de siglo xx, la dirigente indígena Dolores Cacuango se convirtió en símbolo de la lucha contra la servidumbre y el régimen de las haciendas. Hasta hoy se la considera como una de

las madres del movimiento indígena en Ecuador. También como una precursora de las luchas campesinas que entre los años cincuenta y setenta consiguieron dos reformas agrarias y redistribuir las haciendas en la Sierra. «Las indígenas somos como la paja del páramo⁷, que se la arranca y vuelve a crecer», decía Mamá Dolores.

Con el ingreso de las petroleras en la Amazonía muchos ecuatorianos descubrieron la diversidad de pueblos que habitaban dentro de su propio territorio. Para muchos quiteños, el levantamiento en junio de 1990 de decenas de miles de indígenas de la Sierra, que tomaron la ciudad coincidiendo con la celebración del Inti Raymi⁸, supuso un choque parecido. De esta forma lo describía el investigador Andrés Guerrero:

El 6 de junio de 1990 por la mañana, un quiteño de clase media y en el umbral de los cincuenta años enciende su televisor mientras, como de costumbre, se sienta a tomar su humeante café con leche; entre sorbo y sorbo sigue de reojo los informativos televisados, como todos los días. Pero esa mañana sucede algo imprevisto; sorprendido no puede sacar los ojos de la pantalla; queda absorto y pensativo. Descubre un hecho social inimaginable para la opinión pública ciudadana desde fines del siglo pasado: grupos, multitudes de mujeres, hombres y niños vestidos de poncho y anaco invaden la carretera Panamericana y levantan barricadas; cierran la entrada de varias ciudades; recorren las calles y plazas de las capitales de provincia de la Sierra: exigen la presencia de las autoridades del Estado para que los escuchen y negocien. Son indios. Se cuentan en cientos de miles, un millón, quizás más; manifiestan en los espacios públicos; se manifiestan: hablan. Días luego, encuentro a mi amigo quiteño todavía inquieto por las imágenes que descubrió en la pantalla de su televisor aquella mañana; me confía: «Figúrate, yo que daba por supuesto que ya no quedaban indios en el país, descubro en la televisión que hay millones; salen de todas partes; viven en la miseria»⁹.

7. La palabra *páramo* en la geografía andina hace referencia a zonas muy altas donde son comunes los humedales y los nacimientos de ríos.

8. El Inti Raymi es la celebración indígena más importante en todo el mundo andino. Es una ceremonia en honor al padre sol que se celebra en el solsticio de invierno en el hemisferio sur.

9. GUERRERO, A. (1997), «Poblaciones indígenas, ciudadanía y representación», *Nueva Sociedad*, n. 150, julio-agosto 1997, pp. 98-105.

Un año atrás había caído el Muro de Berlín y el politólogo Francis Fukuyama hablaba en un artículo del «fin de la historia»¹⁰. Margaret Thatcher seguía repitiendo desde el número 10 de Downing Street el eslogan de toda una época: «*There is no alternative*». Faltaban más de cuatro años para el levantamiento zapatista y otros nueve para la eclosión del movimiento antiglobalización en Seattle. El movimiento indígena, que en 1986 se había unificado en la Conaie, hacía su primera demostración de fuerza.

«El indio unido jamás será vencido», «Fuera de aquí las compañías transnacionales» eran algunos de los lemas que se plasmaban en carteles, pancartas y cánticos. Una indígena que participaba en un corte de caminos en la Sierra, con árboles en medio de la carretera, le hablaba a la cámara: «Nuestros hijos se están muriendo de hambre, señor, por eso hemos salido, todas las comunidades de base, ahora no queremos que haya ni un solo grano en los mercados, los mentirosos que se mueran de hambre, señor».

Fukuyama defendía que tras la caída del Muro, ya nada podría impedir el avance del neoliberalismo. Por lo menos en el caso de Ecuador, parecía equivocarse. A lo largo de los años noventa, el movimiento indígena se convirtió en el centro de las «coaliciones políticas», en el centro de la resistencia al ajuste neoliberal, detallaba una investigación del Instituto de Estudios Ecuatorianos¹¹. De la misma forma que ocurrió con el movimiento sindical a inicios de los años ochenta o con los estudiantes en los setenta, un grupo «demográficamente minoritario»¹² logró articular las demandas de la sociedad.

10. El artículo original se publicó en *The National Interest*, n. 16, 1989. Luego, Fukuyama vertió sus teorías en su controvertida obra de 1992 *El fin de la historia y el último hombre* (Planeta, Barcelona), donde defiende que, tras el fracaso de los comunismos del Este, la historia concebida como lucha entre ideologías ha concluido, y solo un mundo basado en la democracia liberal y el libre mercado es viable.

11. OSPINA, P. (2008), «La deriva de una promesa. Movimientos sociales, democracia y neoliberalismo», en Andrade, M., Herrera, S.G., y Ospina, P., *Mapa de movimientos sociales en el Ecuador*, Instituto de Estudios Ecuatorianos, Quito, p. 72.

12. Según el censo de 2011, el 71,9% se identifica como mestizo, el 7,4% como montubio (descendiente de negro, indígena y blanco), el 7,2% como afroecuatoriano, el 7% como indígena y el 6,1% como blanco. Desde la Conaie apuntan que el racismo que pervive en la sociedad lleva a negar la identidad y a esconder un porcentaje de indígenas mucho mayor, entre el 27% y el 45% de la población.

El movimiento indígena se había convertido en un impulsor de cambios en las leyes, en el encargado de articular diversos sectores de la sociedad en levantamientos que tumbaron privatizaciones, anularon aumentos de precios en los servicios básicos y determinaron la caída de dos presidentes por sus políticas neoliberales.

Una década de levantamientos

En el levantamiento de junio de 1990, Luis Macas ocupaba el cargo de presidente de la Conaie. Veinte años después nos recibe en la sede del Instituto Científico de Culturas Indígenas, una especie de *think tank* de la confederación, en la parte moderna de Quito. Lleva un sombrero de ala negro y una larguísima trenza. Perteneció al pueblo saraguro, una de las etnias kichwas que habitan en la Sierra ecuatoriana.

—¿Qué queda de la colonia?

—¿Por dónde empezamos? —se ríe.

Luis Macas nació en 1950 en una comunidad de la provincia de Loja, en el sur del país. De niño ayudaba a su padre a repartir chicha y comida en las mingas, auténticos eventos sociales de apoyo mutuo y trabajo comunitario. Hasta los dieciséis años caminó descalzo. Descalzo también estaba el primer día de colegio, cuando salió de la comunidad para seguir estudiando. Allí tuvo que soportar los pisotones, las burlas y que tiraran de su trenza. Pero no fue un obstáculo para continuar sus estudios. Un doctorado en Derecho y otro en Antropología son una muestra de ello. Las burlas tampoco le llevaron a renunciar a su identidad, tal como hacían tantos jóvenes que aparcaban sus rasgos culturales para ser aceptados.

Los levantamientos indígenas marcaron la década. Desde la dirección de la Conaie, Luis Macas participó en todas las movilizaciones que año tras año hacían vibrar las bases del palacio de Carondelet. La fórmula se repetía: cortes en las rutas provinciales, bloqueos en los accesos de las grandes ciudades y grandes marchas hacia los centros de poder, en concreto, hacia Quito. Casi siempre, el Gobierno se vio obligado a ceder, al menos en parte. En junio de 1990, el levantamiento del *Inti Raymi* resolvió cientos de conflictos de tierras. En 1992, cuando se cumplían los quinientos años de la invasión, los pueblos amazónicos consiguieron 1,2 millones de hec-

táreas. En 1993, junto con otros sectores campesinos y sindicatos, el movimiento indígena frenó la privatización del Seguro Social Campesino. En 1994, tumbó 44 artículos de una ley agraria que pretendía privatizar las tierras comunales. Y en 1995, en coalición con otras organizaciones, evitaba una vez más la privatización de la Seguridad Social y la limitación del derecho a la huelga, entre una larga lista de medidas neoliberales, derrotando al Gobierno en una consulta popular.

En muchas ocasiones, era la base, las propias comunidades, las que arrastraban a la movilización. Fue el caso del levantamiento de 1994. «No nos quedó otra alternativa... La gente dijo: “Bueno, aquí ya basta de trámites, ya basta de gestiones, aquí nos vamos a la movilización”. Y así fue —recuerda Luis Macas, reelegido en esos años como presidente de la Conaie—. Fue un levantamiento increíble. Yo no tenía idea de que iba a suceder aquello, y eso que estaba al frente. Se tomaron las entidades públicas en Ibarra, Loja, Cuenca, en todas las cabeceras provinciales. Acá estuvimos alrededor de unas 200.000 personas... Quito casi tomado».

El éxito de las movilizaciones en las calles y en las carreteras llevó a la Conaie a crear su «instrumento político», el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, y presentar candidaturas propias en las elecciones de 1996 en una alianza con sectores de izquierda. Pero el 17% obtenido por esta coalición palidecía ante el arrollador triunfo en la segunda vuelta de Abdalá Bucaram. «Yo soy el candidato de los que rayan con una chapa de cerveza los Mercedes Benz», decía en campaña este empresario y político, representante de una de las familias más poderosas e influyentes de Guayaquil, la ciudad más poblada del país. El movimiento se encontró con un nuevo desafío: ya no se trataba de tumbar una ley, sino a un presidente que afirmaba ser la «fuerza de los pobres».

«Ya llegó papá, más loco que nunca»

El primer cargo político de Bucaram fue el de intendente general de la Policía de Guayaquil. Su primera medida, una redada contra homosexuales y prostitutas, a quienes hizo desfilas veinticinco manzanas entre insultos y agresiones de la muchedumbre. De la alcaldía de Guayaquil se lanzó a la presidencia. No sin antes pasar

por el exilio de Panamá y acumular 44 juicios por malversación y otros delitos. En sus mítines, Bucaram lograba un curioso cóctel entre arenga incendiaria, concierto de cumbia y *show* televisivo. No había acto en el que faltara su «Rock de la cárcel», que cantaba entre saltos, modelos rubias con poca ropa, sudores y ataques a la oligarquía. «Me siento totalmente Rambo», «¡Soy el loco 00!», «¡Ya llegó papá, más loco que nunca!», «Con Abdalá nos hundimos o nos salvamos, pero no seguiremos como estamos», eran las frases que utilizaba tanto para encandilar a sus fans como para escandalizar a los pelucones¹³.

El contraste con el anterior presidente, Sixto Durán Ballén, un arquitecto conservador de 75 años con una de las mayores colecciones de música clásica de Quito, no podía ser más exagerado. «Yo he sido cuestionado porque mi estómago no tolera el pan amasado con las lágrimas de los huérfanos, porque escucho en mi soledad el llanto perpetuo de los más débiles, hoy necesitados, de los marginados de la nación», decía Bucaram en una de sus intervenciones más memorables.

En los seis meses que estuvo en el palacio de Carondelet, «el Gobierno de los pobres» continuó con la política de ajuste dictada por el FMI en busca de financiación externa e intentó aplicar un amplio plan de privatizaciones, una reforma laboral favorable a los empresarios y un plan para contener la inflación inspirado en la convertibilidad argentina. El mismísimo ex ministro de Economía argentino Domingo Cavallo, unos años antes de impulsar el «corralito», se instalaba en Quito para convertirse en su más fiel asesor. Al mismo tiempo que anunciaba el «fin de la hegemonía de la oligarquía» y se afeitaba el bigote hitleriano en la televisión como acto benéfico para los pobres, Bucaram decretaba aumentos en la electricidad del 320% y del gas en un 417%.

Abdalá Bucaram no solo copió a su homólogo argentino Carlos Saúl Menem su ministro de Economía, parte de su estilo populista y su absoluto desapego por las promesas electorales. También imitó su visión de la política, entendida como el mejor lugar donde hacer negocios. Según el periódico *El Universo*, su primogénito, de dieciocho años, había encontrado un filón en una especie de aduana paralela. Para celebrar su primer millón de dólares había llegado a

13. Pijos, fresas, jailones, chetos, pipis, cuicos, gomelos.

organizar una fiesta por todo lo alto. Un caso de corrupción entre tantos que salpicaban a Bucaram, a su familia y a sus allegados.

Hasta 1997, «la opinión mayoritaria en las calles era que había que aceptar que no se podía derrocar un Gobierno en el Ecuador», dice Edgar Isch, histórico representante del Movimiento Popular Democrático (MPD), un partido de orientación marxista-maoísta con gran presencia en el movimiento docente y estudiantil. Los acontecimientos de febrero de 1997 enterrarían ese principio inamovible.

Una coalición de movimientos y organizaciones populares, indígenas, campesinas, sindicales, estudiantiles y magisteriales, con el nombre de Frente Patriótico, convocó una huelga nacional para anular la batería de medidas neoliberales anunciadas, el aumento de los precios de los servicios básicos y expulsar a Bucaram del poder. Desde el 3 de febrero de 1997 las comunidades indígenas volvían a cavar zanjas y bloquear los caminos. Las organizaciones sociales organizaban consultas, entierros simulados, marchas, caceroladas.

«Ahí ya no fue solamente el movimiento indígena —apunta Luis Macas—, había una movilización de toda la sociedad, especialmente la clase media, los sectores populares, que tenían entonces una organización importante en los barrios suburbanos. Pero el detonante fue la ciudad de Quito, donde se resuelven las cosas, donde el movimiento indígena siempre apuntó».

El 5 de febrero, más de dos millones de personas, según los medios de la época, coincidieron en las calles de Quito para forzar el fin del *bucaramato*. El levantamiento, añade Isch, contó con el apoyo de la clase media, que no podía soportar «la chabacanería gubernamental», y con la aprobación de las élites tradicionales, que veían en Bucaram a un empresario «advenedizo» que favorecía a unos grupos financieros, en concreto al grupo Isaías, en detrimento de otros. También con el beneplácito de las Fuerzas Armadas. Al día siguiente, el Congreso destituyó a Bucaram —como no podía ser de otra forma— por «incapacidad mental». Bucaram volvió a huir a Panamá.

«Se aprovecharon de nuestras luchas»

A las nueve de la noche no queda prácticamente nadie en la sede de Ecuarunari, la organización indígena mayoritaria dentro de la Conaie. Delfín Tenesaca, el presidente de esta federación kichwa de

la Sierra, abre el cierre y nos conduce a su despacho. Desde joven se convirtió en líder comunitario bajo la influencia de la teología de la liberación y del más importante de sus representantes en Ecuador: el sacerdote Leónidas Proaño.

Desde joven, Delfín Tenesaca participó en el movimiento, desde su comunidad de Chimborazo. Alrededor de la Conaie, cuenta, se organizan unas 10.000 comunidades indígenas, con una media de doscientas personas por comunidad. En cada comunidad se eligen por un año, en asamblea y por consenso, a los representantes del cabildo, cinco personas, que pueden ser sustituidas en cualquier momento si así lo decide la asamblea. El cabildo es el encargado de coordinarse con las otras comunidades del cantón, de la provincia, de la zona —sierra, costa y selva— y por último en la Conaie.

Desde una de estas organizaciones de base de la zona de Chimborazo participó en el alzamiento que terminó con el Gobierno de Abdalá Bucaram. El presidente había caído, pero era imposible no sentir cierta frustración: «Los otros partidos políticos se aprovecharon de nuestras luchas, ya estaban organizando la estructura del nuevo Gobierno mientras nosotros, los indígenas, estábamos en las calles reclamando otras cosas. Eso nos ha dolido muchísimo».

Buena parte de las medidas de Bucaram, como el descomunal aumento en el precio del gas, quedaron sin efecto o nunca llegaron a implementarse. Según Luis Macas, «alguna gente acá en la ciudad de Quito recuerda y dice: “Ah, gracias a los indígenas todavía tenemos el subsidio al gas”. Hasta el día de hoy sigue siendo 1,60 dólares el cilindro de quince kilos». El neoliberalismo no solo estaba atacando las comunidades indígenas, estaba poniendo en peligro amplios sectores de la sociedad. Una evidencia que se volvería irrefutable poco tiempo después, cuando todo el sistema colapsó.

«El atraco del siglo»

En la Universidad Católica de Quito, el economista Pablo Dávalos hace un hueco entre dos clases. En una mesa larga del departamento, explica cómo se fraguó «el atraco del siglo», tal como se llamó la operación que permitió a los grupos financieros embolsarse miles de millones de dólares del Estado y de los ahorradores ecuatorianos.

Siguiendo una de las recetas del Consenso de Washington, en 1994, el Gobierno de Durán Ballén aprobó la desregulación del sistema financiero. La falta de control sobre las entidades llevó a una primavera bancaria: una gran cantidad de nuevos bancos empezaron a luchar para atraer los ahorros de los ecuatorianos. La forma de hacerlo, cuenta Dávalos, era ofrecer tasas de interés cada vez más atractivas. «Hasta el 85%¹⁴ llegaron a ofrecer los bancos para captar ahorradores. Estábamos viviendo en una burbuja financiera», explica.

La explosión del poder financiero estuvo acompañada de la creación de grupos de poder «apalancados en el sistema político para generar leyes que consoliden sus posiciones de poder y de mercado», afirma Pablo Dávalos. Estos *holdings* dominaban amplios sectores de la economía, dirigían medios de comunicación y al mismo tiempo «controlaban» a los principales partidos políticos. El grupo Isaías llegó a tener más de doscientas empresas y línea directa con el presidente Abdalá Bucaram.

«Durante los noventa la economía crecía, pero ese crecimiento económico se transfería directamente a estos grupos financieros», señala este economista. En 1999 la pobreza ya afectaba al 69% de la población. Con estas cifras no es extraño que a finales del milenio seis de cada diez préstamos de la banca no pudieran ser devueltos. En agosto de 1998 asumía la presidencia Jamil Mahuad con un discurso de honestidad y eficacia. Sin embargo, el estallido de la burbuja financiera era inminente.

Ante la previsible hecatombe bancaria, los mismos grupos financieros, cuenta Dávalos, «enviaron» al Gobierno de Mahuad una nueva ley a medida de sus necesidades: en noviembre de 1998, el Estado se convertía en el último garante de las deudas de las entidades en caso de quiebra. Una vez que se aprobó esta ley, los bancos «provocaron una caída intencional de todo el sistema financiero», denuncia Dávalos. El Estado entregó el dinero a las entidades para que los ahorros fueran devueltos a los ciudadanos, pero «los grupos financieros se quedaron con el dinero, lo transfi-

14. A principios de 2013, el interés más alto ofrecido por un banco español era del 3,5%.

rieron fuera, lo invirtieron en sus empresas, especularon contra el tipo de cambio y consolidaron más aún sus posiciones de poder. Los depositantes se quedaron sin nada».

El feriado bancario, que mantuvo cinco días las sucursales cerradas, y el congelamiento parcial de las cuentas bancarias, decretado en marzo de 1999, terminó de arruinar a la clase media, 34 meses antes del corralito argentino. Para «equilibrar las cuentas», Mahuad lanzó un paquete de medidas que reproducían una vez más las recetas del Consenso de Washington: privatizaciones, incremento del IVA, reducción de salarios y aumento de las tarifas en los servicios básicos. Fue la mecha de dos levantamientos liderados por la Conaie, en marzo y julio de 1999. La alianza con otros sectores urbanos obligó a Mahuad a dejar en suspenso la aplicación de muchas de las medidas más duras.

Para calmar los mercados, la primera semana del año 2000, Mahuad decretó la dolarización de la economía. La adopción de la moneda estadounidense vino precedida de una macrodevaluación del sucre. La pérdida de poder adquisitivo —los salarios se redujeron en un 40%¹⁵— provocó que entre 1999 y 2001 cerca de un millón y medio de ecuatorianos tuviera que salir del país hacia España, Italia o Estados Unidos.

En esos días una revelación daba algunas pistas sobre el sospechoso comportamiento del Gobierno: Fernando Aspiazu, uno de los empresarios y banqueros más importantes del país, reconoció que había financiado la campaña electoral de Jamil Mahuad con más de tres millones de dólares.

«Era el fracaso del Consenso de Washington —dice con rotundidad Pablo Dávalos—. Lo más interesante es que esa clase media que perdió los ahorros de su vida también perdió la confianza en el sistema político. Antes pensaban que el neoliberalismo era una cuestión de otros países, una cuestión de los más pobres, y que los más pobres impedían la modernización. Pero cuando el neoliberalismo llegó y les golpeó en los bolsillos ahí se dieron cuenta de que los críticos del neoliberalismo tenían razón».

15. LARREA, C. (2004), «Dolarización y desarrollo humano en Ecuador», *Iconos*, n. 19, mayo, pp. 43-53.

El palacio (de Invierno) de Carondelet

En Ecuador, el efecto 2000 sí fue devastador. Nuevos ajustes pactados con el FMI amenazaban la supervivencia de una población cada vez más empobrecida y cada vez más indignada. El nuevo milenio empezó con la formación de los Parlamentos del Pueblo en varias provincias del país con una demanda inédita en el movimiento indígena. Ya no se trataba de frenar una ley o de destituir a un presidente. En esta ocasión la exigencia era la disolución de los tres poderes del Estado y la creación de un nuevo marco político.

Desde el 17 de enero, 10.000 indígenas convocados por la Co-naie habían comenzado a salir de sus comunidades y de las ciudades de la Sierra en dirección a Quito. En atestados camiones, buses y coches avanzaron todo lo que pudieron. Esta vez eran la Policía y el Ejército quienes cortaban las carreteras de acceso a la capital para contener la movilización. Vestir un poncho, un sombrero o un collar indígena era razón suficiente para ser bajado del vehículo y retenido. Las columnas indígenas se disolvieron, se disfrazaron de mestizas, optaron por caminos secundarios, muchos siguieron a pie, en pequeños grupos, se volvieron invisibles. Así lograron traspasar los controles y reaparecer una vez más como indígenas en el parque El Arbolito, donde instalaron el campamento.

El 20 de enero, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia estaban rodeados. El 21 de enero, miles de indígenas consiguieron entrar en el palacio legislativo. Al igual que en 1997, de forma pacífica, sin muertos y apenas heridos. Pero en esta ocasión el movimiento indígena había contado con un nuevo aliado: un sector de oficiales de rango medio liderado por un joven coronel llamado Lucio Gutiérrez. Según las crónicas de la época, unos 350 oficiales y soldados dejaron entrar a los indígenas en el Parlamento.

Al igual que en la caída de Bucaram, también se cruzaban intereses de los distintos grupos de la élite económica. Para algunos analistas, después de claudicar frente a las protestas populares de julio de 1999, directamente Mahuad ya no resultaba útil. Luis Macas lo cuenta desde la óptica de alguien que estuvo en primera línea: «No hay objetivos comunes fuertes en la derecha. Eso contribuye también para que esto rápidamente se deshaga. Estuvimos como tres días en Quito y Mahuad tuvo que marcharse».

Tres horas de «Gobierno popular»

Tras la toma del Parlamento, Lucio Gutiérrez, Antonio Vargas, como máximo líder de la Conaie, y Carlos Solórzano Constantine, expresidente de la Corte Suprema, se convirtieron en los integrantes de un triunvirato de Salvación Nacional designado para sustituir a Jamil Mahuad. Nunca el movimiento indígena había llegado tan lejos en su estrategia de cercar los centros de poder. El presidente Mahuad se vio obligado a huir. Pero la ilusión no duraría demasiado. Horas después, el general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ocupaba el lugar de Lucio Gutiérrez. Nunca se sabrá si fueron minutos o una hora lo que tardaron los líderes de la Conaie en descubrir la jugada del general Mendoza, en comprobar que se habían quedado solos.

Sin el apoyo del Ejército, la revuelta había fracasado. «Una vez más el pueblo ecuatoriano se movilizaba y su esfuerzo era endosado a otros intereses», decía Daniel Suárez, uno de los representantes del partido Pachakutik. Los indígenas comenzaron a retirarse hacia sus comunidades mientras asumía el poder el vicepresidente Gustavo Noboa. Este abogado y empresario de Guayaquil continuó con el plan de dolarización y ratificó la cesión de la base militar de Manta a Estados Unidos, a la vez que llegaba a un nuevo acuerdo con el FMI. Una vez más, financiación a cambio de incrementos en los precios de los servicios públicos y un aumento del IVA, entre una larga lista de medidas clásicas. Y una vez más, en enero de 2001, era el movimiento indígena el que se alzaba para hacer retroceder al Gobierno. Con el eslogan «Nada solo para los indios», la Conaie conseguía un año después de la caída de Mahuad sentar a negociar al nuevo presidente, que tuvo que suspender las medidas más impopulares.

Camino al lado oscuro

Pese a la gran movilización de enero de 2001, el movimiento indígena no estaba pasando por sus mejores momentos. Cuando la Conaie lanzó la propuesta de destituir a los tres poderes del Estado tuvo un amplio respaldo de la sociedad, escribía Pablo Dávalos poco después del levantamiento. «Pero cuando pasó a la acción y con un grupo de militares jóvenes intentó convertirse en gobierno,

paradójicamente, su propuesta perdió legitimidad y credibilidad social». En febrero de 2000, Dávalos vaticinaba que esta deriva podría «implicar la destrucción» de la legitimidad ganada como «contrapoder» en levantamientos, huelgas y cortes de carreteras.

No había sido de un día para otro. Ante la enorme capacidad de movilización demostrada por la Conaie, los gobiernos que siguieron a la caída de Bucaram en 1997 buscaron un acercamiento a este poderoso actor. Además de la participación en la Asamblea constituyente de 1998 con cuatro representantes, el movimiento indígena fue ganando espacios dentro de la Administración para gestionar proyectos de desarrollo o la Dirección de Educación Bilingüe. Para Daniel Suárez, de Pachakutik, «esta corporativización del movimiento indígena» se traducía en muchas ocasiones en la confianza en que «pequeños proyectos paliativos financiados por el Banco Mundial» cubrieran las demandas de infraestructura y de mejores condiciones de vida. Este proceso de «institucionalización» llegó a su nivel más alto con la participación del movimiento indígena en el Gobierno de Lucio Gutiérrez, elegido presidente a finales de 2002.

El cortejo del coronel

Delfín Tenesaca habla del acercamiento de este coronel, perteneciente a la «intelectualidad» del Ejército, al movimiento indígena como si se tratara de un cortejo amoroso: «Apareció Lucio Gutiérrez, queriendo comer juntos, andar juntos, luchar juntos, como que era nuestro compañero... y nosotros creíamos que iba a estar con el pueblo, con la izquierda, para cambiar el país, pero las apariencias engañan, nos equivocamos».

La prensa lo comparaba con Hugo Chávez. Lucio Gutiérrez hablaba de «democracia directa», de «poder popular» en los foros sociales de Porto Alegre. «Tenía un discurso más izquierdista que Lula, más izquierdista que Evo Morales, profundamente antisistema. Si tú lo escuchabas en el 2002 hubieras jurado que Lucio Gutiérrez era un tipo de extrema izquierda», recuerda Pablo Dávalos. Y la sociedad, que «pedía una refundación radical del sistema político», estaba predispuesta a ese discurso.

Lucio Gutiérrez se presentó a las elecciones de 2002 aliado con Pachakutik y el partido comunista-maoísta MPD. El excoronel ganó

en la segunda vuelta. Su contrincante era Álvaro Noboa, un excolaborador de Abdalá Bucaram convertido gracias a la exportación de banano en el hombre más rico de Ecuador.

El primer gabinete de Lucio Gutiérrez incluyó a dos ministros de la Conaie: Luis Macas, en Agricultura, y Nina Pacari, en Relaciones Exteriores. También a un representante del MPD, Edgar Isch, como ministro de Medio Ambiente. Seis meses tardaron en dimitir acusando al Gobierno de Gutiérrez de haberlos traicionado.

Sin embargo, la traición a sus promesas electorales ya se había consumado a la tercera semana de asumir la presidencia. El 15 de enero de 2003, Lucio Gutiérrez se convertía en presidente de Ecuador. El 9 de febrero viajaba a Washington, donde se declaraba «el mejor amigo de Estados Unidos» y firmaba una carta de intención en la sede del FMI donde se comprometía a una batería de privatizaciones y ajustes estructurales para acceder a una nueva línea de créditos. En unos meses había iniciado las negociaciones con George W. Bush para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

«Ese error le va a costar muchísimo a la Conaie —sentencia Dávalos—. Porque esos ministros avalan la política neoliberal. Y todo el prestigio y todo lo acumulado durante los noventa se perdió. Para Lucio Gutiérrez era importante tenerlos a ellos ahí porque eso impedía la capacidad de movilización del movimiento indígena. Por eso todas las reformas que estaban pendientes por las movilizaciones indígenas se impusieron en ese periodo. Y el movimiento indígena, amarrado por esa red de la representación liberal, no pudo oponerse a eso... La Conaie tardó mucho en recomponerse».

Luis Macas, como uno de los integrantes del Gobierno de Lucio Gutiérrez durante los primeros seis meses, reconoce el daño producido: «Definitivamente. El desgaste político que sufrió la Conaie, el movimiento Pachakutik, el movimiento indígena en general, fue terrible». La idea de que era posible modificar el rumbo del Gobierno desde dentro hizo que se prolongara la participación de la Conaie, confiesa Macas. Pero el daño estaba hecho. «Para nosotros clarísimamente fue una losa, un trauma psicológico. ¿Cómo confiar en los compañeros?», dice Delfín Tenesaca. El mismo Antonio Vargas, líder de la revuelta indígena de enero de 2000, se convertía en 2004 en ministro de Bienestar Social de Lucio Gutiérrez.

Cuando un nuevo movimiento social empezó a organizarse para destituir a Lucio Gutiérrez, el movimiento indígena, envuelto en disputas internas y desacreditado, se quedó al margen. ¿Era el fin del movimiento indígena?

En Ecuador también: «¡Que se vayan todos!»

PLAZA FOCH / CIUDAD DE QUITO

Una vez perdido el apoyo de las organizaciones de izquierda, Lucio Gutiérrez no dudó en buscarlo en los partidos tradicionales. Terminó encontrándolo en el partido de Álvaro Noboa y en el de Abdalá Bucaram, que seguía exiliado en Panamá, ahora con 56 juicios en su haber. El precio de Bucaram por sus diputados era poder regresar al país sin ser incomodado por citaciones judiciales.

A finales de 2004, Gutiérrez destituía a todos los vocales del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia. La mayoría de los sustitutos eran personas afines al Gobierno. El nuevo presidente de la Corte Suprema era, de hecho, un devoto seguidor de Abdalá Bucaram. Como era de esperar, el 31 de marzo de 2005 la nueva Corte anulaba los juicios que Bucaram tenía pendientes. Tres días después «el loco» regresaba al país. Quien se había perdido sus apariciones más espectaculares, pudo comprobar que la fama era merecida. Su helicóptero aterrizó entre unas 20.000 personas enfervorizadas. En mangas de camisa gritó que volvía «más maduro, pero más loco que nunca, para romperle el alma a la oligarquía».

Manuela Gallegos nos invita a un café en un pequeño hotel cerca de la plaza Foch, uno de los centros de salida y compras en la zona moderna de Quito. En la segunda vuelta de las elecciones de 2002, salió del país para dejar claro que no iba a votar ni por un militar ni por un empresario bananero. Se reconoce como parte de la clase media, un sector de la población que en Ecuador «siempre da el voto sin mucha expectativa», que pocas veces se moviliza. «La clase media también es muy cómoda. Siempre privilegia, chuta, mi trabajo, mi privilegio... somos vagos, entre comillas». Sin embargo, en esta ocasión, la clase media fue la que empezó todo.

Para Manuela Gallegos, «lo que llenó el vaso» fue el escándalo de la Corte Suprema de Justicia. «En mi caso, fue lo que me llevó a decir “ya basta”. No se puede esperar siempre que las cosas se resuelvan por sí solas, a veces hay que tomar las situaciones en tus manos. Jamás lo hice pensando en la caída de Lucio Gutiérrez».

Esta activista, que tiempo después participó en el primer Gobierno de Rafael Correa, ve semejanzas con el movimiento iniciado en España el 15 de mayo de 2011: «El hartazgo no era solo por Lucio Gutiérrez sino por el sistema político: ya estamos hartos de que nos engañen, de que cada vez que uno confía en darle el voto a un pendejo luego venga y haga otra cosa. Era una forma de decir que estamos hartos de que decidan por nosotros y hagan por nosotros, porque nos representan entre comillas».

Un día, a finales de 2004, un vecino indignado le informó de que se había convocado una reunión en el barrio. En la asamblea se encontró con personas de procedencias ideológicas muy distintas. Gente de clase media urbana, incluso gente de clase media alta. «Cuando se rebasan los límites, te unes en intereses más allá de tus diferencias ideológicas. Y eso fue lo que pasó en Quito».

Empezó a participar en una de las asambleas que se formaron en la ciudad, que agrupaba unas 150 manzanas de la zona moderna. Tras una serie de marchas —una de ellas de cerca de 160.000 personas—, las asambleas convocaron una protesta en la capital y en toda la provincia de Pichincha para el 13 de abril de 2005. Pero esta vez la convocatoria no funcionó. «Eran las diez, once de la mañana y yo decía: “Chuta, es un fracaso”». Pero a las cinco de la tarde miles de quiteños comenzaron a congregarse en la avenida Shyris, en la parte moderna de Quito. «Ahí fue que empezó todo el *relajo*¹⁶ hasta el 20 de abril», cuenta Manuela Gallegos. ¿Qué había pasado entre el fracaso de una convocatoria con apoyo de la prefectura y la alcaldía de Quito y el inicio de una revuelta que tumbaría a otro presidente?

Ese miércoles 13 de abril una señora llamó a la Radio La Luna, una emisora sin fines de lucro de Quito. Sugirió que se hiciera un cacerolazo. «Otras personas llamaron respaldándola, y así fueron

16. Descontrol, lío, *despiporre*, desorden.

pasando la información y el cacerolazo fue un éxito», explicaba a la BBC Paco Velasco, el director de la radio. Otro día, un oyente propuso un «reventón». Y cuando la propuesta se difundió «la gente salió a reventar globos», decía Velasco. Lo mismo ocurrió con el «rollazo», un despliegue de papel higiénico desde los balcones, desde los coches y en las calles, para limpiar la suciedad del régimen. Las protestas en los partidos de fútbol, llamados «golpes de estadio», el «basurazo», el «escobazo» o el «tablazo», eran otras de las innovaciones.

Los celulares, los *mails*, pero sobre todo la radio y la imaginación se convirtieron en las armas de este movimiento espontáneo, autoconvocado y sin líderes aparentes. La avenida Shyris se convirtió en el centro de la indignación ecuatoriana. Las protestas se extendieron por veinte barrios y llegó a haber hasta «cuarenta puntos de concentración espontánea», según publicaba la prensa. El lema «Que se vayan todos», al igual que en Argentina, se convertía en la máxima expresión del movimiento. En los barrios pelucones del norte, pero también en los barrios populares del sur de la ciudad. «En ese momento sentí un gran alivio porque ya se había encendido la mecha, y desde ahí no paró, todos los días hasta que cayó el presidente», dice Manuela Gallegos.

Al movimiento le faltaba un nombre. Se lo dio el mismo Lucio Gutiérrez cuando en la madrugada del 14 de abril los manifestantes organizaron un escrache: se concentraron junto a su casa familiar, gritaron y pitaron frente a la puerta. El presidente los llamó «forajidos». A los radioyentes de La Luna y al resto de los manifestantes les encantó el nombre y empezaron a utilizarlo para identificarse en las llamadas que hacían a la radio. Así sea. La «rebelión de los Forajidos» quedó bautizada.

«Lo más maravilloso era que la gente trabajaba y después del trabajo iba a manifestarse. Fue un despertar increíble», cuenta Manuela Gallegos. Todos los días, pitadas en la puerta de la Corte y concentraciones en la avenida Shyris. Las protestas cada vez eran más numerosas. Jóvenes, universitarios, trabajadores judiciales, maestros, profesionales y, en los últimos días, activistas de los partidos de izquierda. Para María Paula Romo, una abogada entonces de veinticinco años y actual líder de Ruptura 25, los actores fundamentales fueron las mujeres y los jóvenes que reaccionaron ante la

propaganda del Gobierno que decía: «Ustedes a cocinar y ustedes, guambras¹⁷, a aprender para cuando sean grandes»¹⁸.

El 19 de abril, una «gran marcha final» intentó llegar hasta el palacio de Carondelet. Ese día, 100.000 personas se movilizaron. Y 3.000 granadas de gas fueron arrojadas sobre los manifestantes, según publicaba *El Universo*. «La marcha fue tan grande... policías por todos lados, dividiéndonos, llegabas a un lado, te cerraban, luego te dejaban pasar —rememora Gallegos—. Fue una avalancha que llegó a una cuadra del palacio de Gobierno. El bombardeo fue terrible. El parque de El Ejido era una nube de gas». El fotógrafo chileno Julio Augusto García murió a causa de la asfixia.

Al día siguiente, simpatizantes de Lucio Gutiérrez dispararon con armas de fuego a los manifestantes desde las oficinas del Ministerio de Bienestar Social. Como respuesta, un grupo de forajidos entró en el edificio y le prendió fuego. Desde el último piso del Ministerio fue arrojado un retrato enmarcado del excoronel, que se hizo añicos en el suelo. «¡Sí se pudo, sí se pudo!», coreaban los concentrados. Las movilizaciones estaban fuera de control. El comandante de la Policía presentó su dimisión. Los diputados tuvieron que reunirse en el edificio del Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo en América Latina (Ciespal), porque el Congreso estaba cercado por los indignados. Centenares de ellos consiguieron entrar en el palacio legislativo, quemaron los escaños de los parlamentarios y sacaron a la calle la bandera de Ecuador. Los manifestantes habían pasado del «Fuera Lucio» al «Fuera todos».

Los parlamentarios, prácticamente escondidos, se acogieron a un artículo de la Constitución para declarar vacante el puesto de presidente. Para rellenar el hueco, nombraron al vicepresidente Alfredo Palacio. El Estado mayor militar retiró su apoyo a Lucio Gutiérrez y el excoronel huyó del palacio de Carondelet en helicóptero. Cuando intentó dejar la ciudad en un avión, se lo impidieron cientos de manifestantes que ocupaban las pistas del aeropuerto. Dos mil forajidos también rodeaban la Ciespal y bloqueaban la evacuación del nuevo presidente. Cuando Palacio salió al balcón,

17. Muchacho, niño, adolescente.

18. TORRE, C. DE LA, «El Gobierno cayó en las calles», *Hoy Online*.

obligado por los manifestantes que habían conseguido entrar en el edificio, apenas pudo hablar. Desde ya, nadie le escuchó.

—¡Palacio, te advierto, con Quito no se juega! —era el grito de los forajidos.

Las primeras cinco horas presidenciales de este cardiólogo de Guayaquil las pasó encerrado en el sótano de este edificio, rodeado de manifestantes que exigían su dimisión y la de todo el Congreso. Había caído el tercer presidente en siete años.

La Revolución Ciudadana

EDIFICIO DE LA FLACSO / CIUDAD DE QUITO

La participación de la Conaie en el Gobierno de Lucio Gutiérrez situó al movimiento indígena en el peor momento de su historia. Muchos analistas e intelectuales vaticinaban el fin de la organización. Pero no fue así. En cambio, el movimiento inició un proceso de autocrítica y reflexión. «Para nosotros fue una experiencia tenaz, un aprendizaje de que no hay ninguna alternativa si no es desde nuestras luchas, desde nuestros procesos», dice Delfín Tenesaca en la sede de Ecuarunari. Para recomponer el movimiento, tocaba volverse hacia adentro, cuenta Luis Macas: «Teníamos que empezar desde la base, desde las propias comunidades». Este silencioso proceso se había iniciado en diciembre de 2004, cuando Luis Macas fue reelegido como presidente de la Conaie y propuso como principal objetivo retomar el contacto con las comunidades.

En 2005, se veían los primeros resultados. La Conaie renunciaba a una ayuda de cincuenta millones de dólares del Banco Mundial y de la FAO que ella misma administraba, al considerarla perniciosa para el fortalecimiento de las comunidades. Y perjudicial para el país, ya que pasaba a formar parte de la deuda externa.

Para la investigadora Ana María Larrea Maldonado, esta «impresionante capacidad de recomposición» del movimiento indígena se debe al «enorme poder de las comunidades» que llevaron a los dirigentes intermedios, muchos de ellos formados en ese proceso de «institucionalización», a adoptar posturas más

radicales cuando dejaron los puestos administrativos para regresar a las comunidades¹⁹.

El investigador Pablo Ospina habla de un ciclo de vida de los movimientos. Al tiempo de organización le sigue el auge. Y si tienen éxito, un tiempo de cooptación e institucionalización. Seguido tantas veces de un tiempo de crisis y, por último, de reflujo. «Los movimientos sociales están condenados, cuando menos, a morir una vez cada cierto tiempo», escribe Ospina²⁰. Y en el caso de la Conaie, obligados a volver a nacer varias veces, como la «paja del páramo» de la que hablaba Dolores Cacuango.

Ajeno a este nuevo, lento y silencioso resurgir del movimiento indígena, el nuevo Gobierno de Alfredo Palacio no tardó en decirse y hacer exactamente lo contrario de lo prometido cuando asumió la presidencia. Ni Asamblea constituyente, ni expulsión de las fuerzas de Estados Unidos de la base de Manta, ni fin de las negociaciones del TLC. Fue precisamente la oposición a este tratado con Estados Unidos la oportunidad que tuvo el movimiento indígena para demostrar que seguía vivo.

Los efectos devastadores para los agricultores que había tenido el TLC entre México y Estados Unidos pusieron en guardia a las comunidades. «El problema fundamental del TLC es que afecta directamente a los pequeños productores, y dentro de los pequeños productores están las comunidades indígenas dedicadas a la agricultura. Eso hizo que la gente empezara a moverse en todos los lados», cuenta Luis Macas.

Esta «pérdida de soberanía», según la definición de Dávalos, afectaba de forma especial a las comunidades, y no solo por la eliminación de aranceles a la entrada de productos agrícolas subsidiados por el Gobierno de Estados Unidos. Medicamentos, propiedad intelectual, agua, megaminería, explotación petrolera y maderera, transgénicos, eran algunos de los temas que amenazaban particularmente a los indígenas.

19. LARREA MALDONADO, A.M. (2006), «Movimiento indígena, lucha contra el TLC y racismo en el Ecuador», OSAL (*Observatorio Social de América Latina*), n. 19, julio de 2006.

20. OSPINA, P. (2008), «La deriva de una promesa. Movimientos sociales, democracia y neoliberalismo», en ANDRADE, M., HERRERA, S.G., y OSPINA, P., *Mapa...*, op. cit., p. 79.

Antes de iniciar las movilizaciones, cuenta Pablo Dávalos, la organización desarrolló un amplio proceso de formación para explicar en las comunidades qué significaba el TLC. Más de trescientos talleres en todos los rincones del país surtieron efecto. «Para hacerles quedar mal, los medios buscaban al militante más remoto y le hacían preguntas técnicas sobre el TLC, para decir que estas personas estaban siendo manipuladas por extremistas. Pero los medios se encontraron que cada militante, cada comunero sabía perfectamente bien, mejor que las personas de la ciudad, lo que estaba en juego. Y tú tenías a gente de base hablando del *cuarto de al lado*²¹, de los derechos de propiedad, con un lenguaje que era impensable de no haber existido ese proceso de socialización previo».

Quince días duró la movilización, que logró paralizar el país entero entre marzo y abril de 2006, en alianza con otras organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles y ecologistas. Tres demandas se unieron a la paralización del TLC. Una de ellas era la expulsión de la petrolera estadounidense Occidental (OXY) del país. La OXY había vendido el 40% de la compañía a una empresa canadiense saltándose las leyes del país, y encima pretendía que el Estado ecuatoriano le abonara seiscientos millones de dólares por devolución de impuestos. Otra demanda era la expulsión de las tropas estadounidenses de la base de Manta. Y por último, en consonancia con las exigencias de los forajidos, la convocatoria de una Asamblea constituyente.

«Todo el país estaba movilizado —recuerda Luis Macas—. El Gobierno tuvo que desistir. La movilización de los pueblos indígenas fue masiva, pero también de los campesinos, los agricultores, pequeños y medianos, los arroceros y los maiceros de la costa... El levantamiento fue fulminante para el Gobierno». La Conaie había estado cinco años fuera de las calles. Ahora el Estado se veía obligado a ceder una vez más frente a sus demandas: en mayo de 2006 cancelaba el contrato con la OXY. Como «castigo», Estados Unidos suspendió las negociaciones del TLC. Era la demostración. El movimiento indígena no estaba muerto. Las demandas de este

21. El *cuarto de al lado* es una expresión que se utiliza para hablar del sitio de reunión de los distintos *lobbies* con los negociadores de los tratados de libre comercio.

levantamiento se convertirían en la base del programa de un nuevo partido: Alianza País, de Rafael Correa.

¡Dale, Correa!

Rafael Correa dejó de ser un desconocido el 21 de abril de 2005. Alfredo Palacio, convertido en presidente veinticuatro horas antes, lo había nombrado ministro de Economía. Este profesor universitario de 42 años, de formación cristiana y estudios en Estados Unidos y en Europa, no pasó desapercibido. Sus primeras medidas, que priorizaban el gasto social frente al pago de la deuda, así como su discurso antineoliberal, determinaron su salida del gabinete. También fueron su plataforma hacia la presidencia.

Alberto Acosta fue candidato de Pachakutik en 1997 y uno de los intelectuales que se juntaron alrededor de la figura de Correa para fundar Alianza País. «El plan de Gobierno de Alianza País recogía todas estas luchas de los movimientos sociales. No es que un grupo de iluminados nos reunimos y establecimos a partir de nuestros conocimientos académicos un plan de Gobierno», dice en su despacho de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Con la promesa de convertirse en la «partida de defunción de la partidocracia tradicional» y de abordar «un cambio radical en el modelo económico», Alianza País inició la campaña electoral. «¡Dale, Correa!», fue uno de los lemas más repetidos y coreados por sus seguidores. El doble sentido era aprovechado por el candidato, que blandía el cinturón en los mítines como advertencia a la oligarquía y a la clase política.

Hasta aquí, cualquiera podría pensar que se trataba de un «populista» más en la línea de Bucaram o Gutiérrez. Sin embargo, Correa hizo algo que nadie había hecho antes. En las elecciones, no presentó candidatos al Congreso. Era algo inédito en el país, una forma de demostrar su rechazo a un Parlamento «moribundo» y el compromiso del partido con la convocatoria de una Asamblea constituyente.

Cuando el 15 de octubre de 2006 este profesor pasó a la segunda vuelta, la mayoría de las organizaciones sociales apoyó su candidatura. La contienda no podía ser más simbólica. El contrincante era una vez más Álvaro Noboa, el hombre más rico del país. La victoria de Correa fue aplastante. En enero de 2007, Rafael Correa recibía

de las autoridades indígenas de Zumbahua los símbolos del poder. Ese día, anunciaba el final de «la larga noche neoliberal», el final «de la democracia de plastilina».

¿La Constitución más democrática de la historia?

Al igual que en Bolivia, los diputados de la derecha, que controlaban el Parlamento, bloquearon el inicio del proceso constituyente. Correa no tenía parlamentarios, necesitaba el apoyo de los movimientos. En enero de 2007, miles de activistas, campesinos e indígenas rodearon el palacio legislativo para obligar a los parlamentarios a desbloquear la convocatoria. «Únicamente la fuerza ética y moral del pueblo obligará a la partidocracia a obedecer a sus mandantes», dijo entonces Correa. Después de dos citas electorales favorables²², el camino a la Asamblea constituyente estaba despejado.

Las sesiones para la redacción de la nueva Constitución comenzaron el 29 de noviembre de 2007 en una pequeña ciudad costera, Montecristi. Ochenta asambleístas de 130 eran de Alianza País. Como presidente de la Asamblea constituyente fue nombrado Alberto Acosta. En su despacho de la Flacso relata la diferencia de este proceso con los anteriores: «Fue el proceso más democrático de toda la historia constitucional del Ecuador. No solamente hubo un proceso de elección muy democrático y participativo, un proceso de elaboración de la Constitución muy intenso, sino que luego el pueblo la aprobó en consulta popular».

Un pueblo de 25.000 habitantes recibió a más de 150.000 personas, marchas de movimientos sociales, comisiones de todo tipo de organizaciones y partidos de todos los tamaños. Según cuenta Acosta, las mesas constituyentes a lo largo de todo el país fueron otra vía para recoger la opinión de la población. Pero al final, cuenta Acosta, «se priorizaron los tiempos a la calidad del debate constitucional y la participación ciudadana». El presidente Correa no quería repetir la experiencia de Bolivia, donde tres años después de iniciar los debates

22. El 15 de enero de 2007 se realizó un referéndum para aprobar la convocatoria de una Asamblea constituyente. El 30 de septiembre de 2007, las elecciones para determinar la composición de la Asamblea dieron al partido de Correa el 69,47% .

de la constituyente el nuevo texto seguía sin aprobarse. Esa fue la razón del primer alejamiento entre Correa y Acosta. También lo fue el debate sobre si la consulta previa en territorios indígenas sería vinculante, tal como defendía Acosta, o meramente informativa, como finalmente terminó siendo.

Aunque el movimiento indígena tuvo apenas cinco representantes, muchas de sus demandas se vieron reflejadas. La principal fue el reconocimiento de Ecuador como un Estado «plurinacional», una de sus principales reivindicaciones desde 1990. La otra fue la promulgación de los «derechos de la naturaleza», una disposición inédita en la protección del medio ambiente. Así lo cree Luis Macas: «Los derechos de la naturaleza nos van a servir como un instrumento para defender los territorios que hoy están concesionados para la minería. Cuando voy a las comunidades con la Constitución yo digo: “Compañeros, esta es nuestra propuesta política, y sobre esta base hay que trabajar”».

Las luchas ambientales, protagonizadas por los pueblos indígenas y organizaciones como Acción Ecológica, con casos tan emblemáticos como el juicio contra la Texaco o el de Sarayaku, influyeron en la incorporación de una batería de medidas de protección ambiental. Entre ellas, la prohibición de los transgénicos²³ y de las actividades extractivas en áreas naturales protegidas. Por presiones de Correa, se incluyó en la Constitución un supuesto que permitiría hacer una excepción en estas dos prohibiciones: que el presidente lo pida, la Asamblea lo vote y una consulta popular lo apruebe.

Otras demandas de los movimientos que se veían reflejadas en la nueva Constitución eran el reconocimiento de los derechos de los migrantes²⁴, la prohibición de la intermediación y de la tercerización laboral, de la instalación de bases militares extranjeras, así como un

23. En septiembre de 2012, Correa calificó de «error» la prohibición de los transgénicos incluida en la Constitución y dejó abierta la posibilidad de una enmienda que permita modificar el texto.

24. La Constitución consagra la migración como un derecho y elimina la visa para entrar en el país, decisión que ha permitido a decenas de miles de migrantes de todo el mundo recalar en Ecuador, como destino final o como escala en la ruta al norte. Sin embargo, miles de ellos no han podido conseguir permisos de trabajo o residencia al no estar desarrollados los reglamentos correspondientes.

mayor control del Estado sobre los recursos naturales y los sectores estratégicos, como la energía o el agua, que no podrá ser privatizada. A pesar de dar más poder al presidente para decretar leyes y disolver el Parlamento, el nuevo texto dotaba al ciudadano ecuatoriano del derecho de revocar cualquier cargo de elección popular.

Era la etapa dorada del Gobierno de Correa. Anunció que permitiría una base estadounidense en territorio ecuatoriano «siempre y cuando Estados Unidos permita instalar una base militar ecuatoriana en Miami». Pagó la deuda pendiente con el FMI y declaró persona non grata al representante del Banco Mundial. Ordenó el inicio de una auditoría de la deuda externa para identificar los créditos fraudulentos. «Buscaremos no solo sancionar a los culpables, sino también no pagar la deuda ilegítima, ilegal y corrupta», dijo entonces Correa, después de anunciar que Ecuador no pagaría el 37% de los créditos contraídos durante la «larga noche» de gobiernos neoliberales. Redujo sustancialmente la partida presupuestaria destinada a pagar la deuda externa e incrementó la inversión social, los bonos de ayuda y las infraestructuras básicas. Incluso la iniciativa Yasuni-ITT²⁵ colocó a Ecuador en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. La propuesta era sencilla y provocadora: los países desarrollados pagarían al país por no explotar el petróleo de una gran reserva ecológica de la Amazonía.

El 28 de septiembre de 2008, el 63,9% del electorado aprobó la nueva Constitución. «Hoy es un momento histórico que trasciende con mucho a las personas que por accidente, por fortuna, hemos estado más visibles en este proceso, que es de todo un pueblo», dijo un Correa solemne y con su mejor sonrisa el día del referéndum. Una vez aprobado el nuevo texto, el frente común con los movimientos no tardó en romperse.

25. El 15 de agosto de 2013, el Gobierno de Correa daba por finalizada la iniciativa Yasuni-ITT y anunciaba que esta reserva ecológica se abrirá a la explotación petrolera, liderada por capitales chinos.

«Extractivismo del siglo XXI»

CUENCA / PROVINCIA DE AZUAY

En junio de 2011, Cuenca fue tomada por los distintos pueblos de Ecuador. Durante una semana coincidieron en esta ciudad del sur del país integrantes de comunidades de todas las provincias para compartir sus experiencias de lucha en la defensa de la «madre tierra». Los pueblos montubios de la costa, mezcla de indígenas, negros y blancos; los afroecuatorianos de Esmeraldas y del Valle del Chota, descendientes de los campos de esclavos y del naufragio de barcos negreros; los kichwas de los páramos, a más de 4.000 metros de altura; los kichwas de la selva; los shuar, los cofanes, los huaoranis, los secoyas, representantes de más de un centenar de nacionalidades originarias confluían en la ciudad llamada Guapondelig antes de la conquista.

Los reunía un motivo urgente: coordinar la resistencia contra los proyectos petroleros y mineros que Correa ha anunciado como inminentes. A pesar de que la nueva Constitución reconoce «el derecho a la resistencia», el Gobierno tiene procesos abiertos contra más de doscientos activistas con cargos de «terrorismo» y «sabotaje». El delito: oponerse con bloqueos al ingreso en sus territorios de empresas canadienses, chinas, brasileñas o europeas, tanto estatales como privadas. ¿Qué había pasado con el «Gobierno verde» de Correa? ¿Se había producido el cambio de modelo económico?

Para Edgar Isch, el punto de inflexión fue precisamente la aprobación de la nueva Constitución. Los dos primeros años del Gobierno de Correa fueron «progresistas», asegura. «Pero luego inició un proceso de derechización, que se complementa con quienes están formando parte de su Gobierno», dice Isch en referencia a los hermanos Alvarado y Alexis Mera. Al mismo tiempo que se produce «un fortalecimiento del Estado y ciertas acciones de carácter social», como los bonos o los subsidios, avanza la «restitución de algunos aspectos propios del neoliberalismo», como la presencia de multinacionales o la criminalización de la protesta y las organizaciones sociales.

Para Alberto Acosta, «estas graves contradicciones entre el discurso y la práctica» tienen su origen en 2008, cuando comenzó la discusión de las leyes de soberanía alimentaria, de minería y de aguas, que debían desarrollar los principios consagrados en la

Constitución. «Todas estas leyes están abiertamente en contra de la Constitución o no están cumpliendo los mandatos constitucionales», critica Acosta. «Todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista», llegó a decir Rafael Correa.

El problema, señala Alberto Acosta, es que el modelo del Gobierno de Correa repite un esquema basado en la exportación de materias primas sin industrializar cuyos precios son fijados a miles de kilómetros; un modelo basado en actividades extractivas con graves consecuencias ambientales y sociales. Alberto Acosta identifica semejanzas con otros países latinoamericanos, donde los altos precios de las materias primas han permitido una década de bonanza económica y un fuerte aumento del gasto social. Soja y minerales en Argentina. Gas y minería en Bolivia. Petróleo en Venezuela. Petróleo y banano en Ecuador. «En primer lugar no hay socialismo del siglo XXI por ningún lado. Yo lo que distingo es el extractivismo del siglo XXI».

Ante un futuro agotamiento del petróleo, que supone el 45% de las exportaciones del país, Acosta sostiene que la opción del Gobierno es abrir la puerta a la megaminería metálica a cielo abierto. En diciembre de 2011, Correa utilizaba su programa semanal, *Enlace ciudadano*, para enseñar a las cámaras el recurso que permitiría a Ecuador «salir del subdesarrollo»: el primer lingote de oro extraído por la Empresa Nacional Minera. «Es análogo al primer barril de petróleo y significa el comienzo de la era minera responsable en el Ecuador para salir de la pobreza», dijo el presidente en televisión.

Como en los viejos tiempos

Cuando se acercaban sus primeras elecciones, en 2006, el partido de Correa intentó un acercamiento al movimiento indígena para conformar una alianza electoral. Pero la Conaie rechazó la oferta. La traumática participación en el Gobierno de Lucio Gutiérrez estaba demasiado cerca. «Esa experiencia nos dejó muchas lecciones», dice Luis Macas. Una de ellas, preservar la independencia de la organización. Cuando a finales de 2008 empezó la tramitación de la ley de minería y de la ley de aguas, la Conaie podía denunciar frontalmente que ambos proyectos chocaban directamente con la Constitución y la supervivencia de las comunidades.

Poco pudo hacer la Conaie para impedir la aprobación de la ley de minería, que «impulsa la megaminería transnacional en el país», según Esperanza Martínez, de Acción Ecológica. Pero poco después, cuando tocó el turno a la ley de aguas, el movimiento indígena organizó un nuevo levantamiento. En esta ocasión, el Gobierno no pudo mirar para otro lado.

La ley de aguas, según explica esta activista, era la pieza que le faltaba para hacer viable la megaminería en el país. La Constitución había establecido que el consumo humano y la soberanía alimentaria tendrían prioridad sobre todas las demás actividades económicas en relación con el uso del agua. «Lo que quería hacer la ley de aguas era poner una excepción: el agua para la minería tendría prioridad».

La federación kichwa de la Sierra, Ecuarunari, fue la protagonista de este nuevo alzamiento. En mayo de 2009 miles de indígenas y campesinos iniciaron el cerco a la Asamblea legislativa y ahí permanecieron durante quince días para «dejar claro» que no iban a permitir esa ley. Afrodescendientes de Esmeraldas, de la costa de Manabí, bloqueos a lo largo de toda la Sierra... el levantamiento se extendía y radicalizaba con el lema «El agua no se vende, el agua se defiende». Como en los viejos tiempos, el Gobierno se veía obligado a suspender la tramitación de la ley. El movimiento indígena definitivamente no estaba muerto.

La experiencia de dos décadas todavía estaba fresca. «Tú escuchabas a muchos sectores populares cuando votaban por Correa, decían: “Gane quien gane, si no hace bien las cosas lo tumbamos”. La gente siente que tiene esa capacidad. Y esa convicción de que se puede se mantiene hasta ahora», dice Edgar Isch.

La nube y el relámpago

Alberto Acosta reconoce también los avances de la Revolución Ciudadana: «Uno de los elementos importantes es la recuperación del papel del Estado. En Ecuador, el hecho de democratizar la renta minera y petrolera se transforma también en una mayor inversión social, educación, salud y vivienda. En los gobiernos neoliberales se priorizaba el pago de la deuda externa. En este Gobierno, la inversión social. En los anteriores gobiernos, la inversión social no llegaba a un 4% del PIB. En este Gobierno supera el 8%».

Una conquista, señala Acosta, que es producto de décadas de luchas. «Sin esas movilizaciones, sin la resistencia, particularmente de los pueblos indígenas en Ecuador y Bolivia, todos estos gobiernos serían impensables. Estos gobiernos son el resultado directo de la acumulación histórica de las luchas sociales. Lamentablemente, Correa no entiende esa realidad y a momentos asume que es un relámpago a cielo despejado cuando las nubes ya estaban cargadas por las luchas populares».

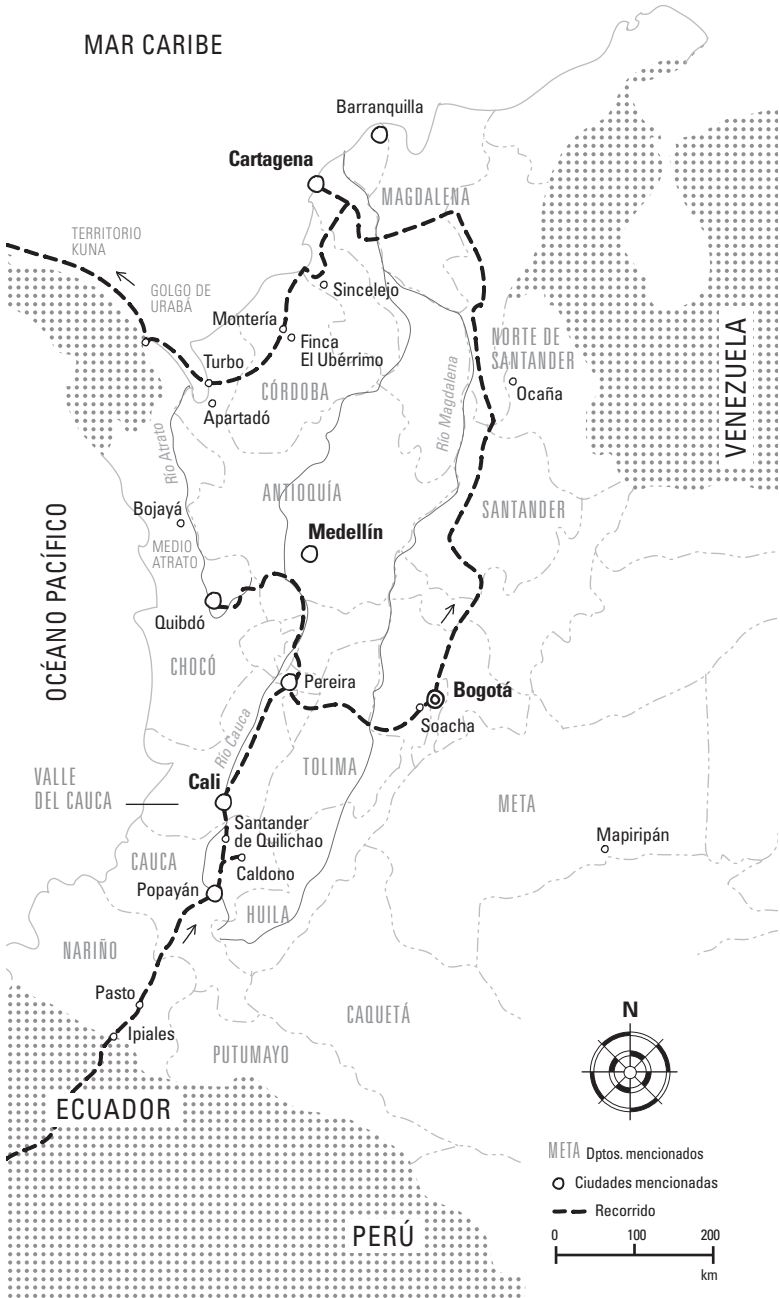
De fondo, según Acosta, se encuentra una idea «liberal» del Estado y la política. «Correa no acabó de entender la propuesta de la Revolución Ciudadana, él se quedó solo con la parte liberal de la ciudadanía, el individuo, y hay que luchar en contra de los intereses gremiales y de los intereses del poder. Y confunde un gremio, o sea, una asociación de banqueros, con una organización indígena o campesina».

«¿Qué futuro le espera al Ecuador, cuando el presidente llega a ser un rehén de los movimientos sociales?», decía el expresidente Jamil Mahuad lleno de tristeza y rencor después de ser destituido en enero de 2000. El investigador Pablo Ospina le respondía²⁶: «Reivindico ese valor de la democracia: todo presidente es responsable de sus actos y *prisionero* de la sociedad a la que se debe. No puede actuar en la impunidad. Una sociedad movilizada es la mejor garantía de una sociedad democrática».

Blanca Chancoso camina por una de las calles blancas y coloniales de Cuenca, en medio de una manifestación por la defensa del agua. En los setenta organizaba comunidades indígenas en su provincia de nacimiento, Imbabura. Ahora es una de las líderes indígenas más respetadas de la Conaie. «Dormidos no estamos. Se produjo una confusión desde que el presidente actual ha adoptado los discursos de la lucha, de la verdadera revolución. Pero nos hemos mantenido alerta. Y la prueba es que, desde que el Gobierno subió, el pueblo indígena nunca ha estado quieto, siempre ha estado movilizado», dice. Incluso consiguió, en el caso de la ley de aguas, torcerle la mano. El movimiento indígena «como la paja del páramo» de Mamá Dolores había vuelto a renacer.

26. OSPINA, P. (2000), «La vuelta a un día de ochenta mundos», *OSAL*, n.1, junio de 2000.

MAR CARIBE



COLOMBIA

«Un mundo nuevo surge hoy de la epopeya de la libertad, nutrida con sangre y con llanto y con tortura. Es un deber responder al llamado de la historia. [...] Cada vez son más amplios los horizontes de libertad, de justicia y de paz».
(María Cano, histórica luchadora sindical, 1945)

«Tierra para la gente, gente para la tierra»

DÍA 270 / 21 DE JULIO DE 2011 / ENTRE PASTO Y POPAYÁN

«Me has dejado el corazón en blanco. / En blanco. / Así queda el corazón cuando llega la pasión / y luego ha marchado». El autobús parece bailar salsa al sortear los baches de la carretera. La radio suena alta. «94.1». Reformada tan solo hace dos años, este tramo de la Panamericana no ha resistido bien los movimientos sísmicos que recorren Nariño. «Radio Policía Nacional». La carretera sube en paralelo a la costa, pero sin apenas conexión con el Pacífico. «Por una Colombia segura y en paz». El *marketing* de la fuerza pública incluye una cuña cantada al estilo años cincuenta por una voz femenina: «Policía Nacional, siempre protegiendo nuestro hogar». Y una voz grave: «Radio Policía Nacional. Desde Popayán, Colombia». Prosigue la salsa.

El autobús entra en el Cauca, uno de los departamentos de Colombia donde el conflicto armado pervive con más violencia. También es una de las regiones con más presencia indígena. En concreto, el 22% de la población del Cauca se reconoce como parte de alguno de los pueblos que habitaban la región antes de la llegada de los españoles. Unos pueblos con una centenaria historia de resistencia: primero frente a los conquistadores, luego contra los terratenientes y, más recientemente, contra los distintos grupos armados que amenazan su autonomía, ganada tras décadas de lucha. Hoy, la unión de cabildos indígenas del Cauca es uno de los espacios

de mayor autonomía indígena de América Latina. Una autonomía desafiada día tras día por el Ejército, los grupos paramilitares y la guerrilla, un gobierno propio entre el fuego cruzado.

«Todos somos guardias indígenas»

Para llegar a la comunidad de Caldonon hay que tomar una buseta hasta el cruce del Pescador, pocos kilómetros al sur de Santander de Quilichao, sobre la Panamericana. Allí paran los *jeeps* que hacen la ruta a la comunidad. La carretera, agujereada, pasa entre casas de colores saturados y trincheras hechas de bolsas de plástico verde rellenas de tierra. Al borde de la ruta caminan soldados. Para cubrir más territorio, se desplazan separados, uno cada veinte metros, en una larga hilera. Entre casa y casa, y casa y trinchera, crecen en pequeñas plantaciones el plátano, la yuca, el aguacate y el fique, una palmera cuya fibra se utiliza para hacer tejidos y bolsas para transportar café. Y cómo no, en la parte alta también se cultiva café. Caldonon es territorio indígena, organizado dentro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una entidad donde se coordinan 115 comunidades y 320.000 personas.

Las calles de Caldonon son de tierra y gravilla. Los caballos que andan sueltos aprovechan la hierba que crece junto a las casas. Subiendo una de las calles, casi a las afueras de la comunidad, se llega a un cerro. Desde ahí se ven las montañas, la vegetación exuberante y las casas bajas violetas, amarillas, celestes, con tejados a dos aguas, algunos todavía con agujeros provocados por las granadas.

Pedro Huete señala dónde suelen producirse los combates. Este joven nasa forma parte de la Guardia Indígena, al igual que otros 15.000 hombres, mujeres y niños en los territorios indígenas del Cauca. Como distintivo utiliza un pañuelo rojiverde y un bastón de mando adornado con cintas de colores. Su trabajo es «defender la vida y el territorio», proteger los resguardos de las multinacionales, del narcotráfico o de grupos armados. Cuando las comunidades se ven atrapadas por los combates entre el Ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la Guardia se encarga de proteger a los vecinos en los lugares de asamblea permanente, marcados con telas blancas. Los integrantes de la Guardia, que no perciben salario alguno, trasladan a los heridos, avisan de los bombardeos y rescatan personas secuestradas.

Si encuentran armas, las destruyen. «En caso de que se nos salga de las manos, todos somos guardias. Todos nos cuidamos. Pertenecer a la Guardia Indígena es un honor», dice Pedro Huete.

Desde el cerro, Huete marca con el dedo uno de los principales problemas de Caldoño: la estación de la Policía Militar, ubicada en pleno centro de la población, junto a la plaza principal y la iglesia. Cuando las FARC se despliegan a las afueras de la comunidad, intentan apuntar a los soldados, pero las pipetas o tatucos¹ que tiran no tienen precisión. «Se queda usted todo loco, porque cuando entran cubren el pueblo, suena tiro acá, tiro allá, en todos lados —Huete señala los cuatro puntos cardinales— y usted no sabe ni para dónde correr». Según explica este comunero nasa, la Policía tiene miedo y en el centro de las comunidades se siente más protegida. El CRIC demanda que los puestos de Policía salgan de las poblaciones y «que se lleven su guerra a otra parte».

A unas cinco cuadras de la estación de Policía ha aparecido un objeto que parece fuera de lugar. Se trata de una retroexcavadora de dos pisos de altura y unos veinte metros de largo. La mole amarilla, de marca Komatsu, está aparcada junto a una humilde casa con un porche de madera. En 2010, el gigante minero Anglo Gold Ashanti comenzó a trabajar sin permiso de las comunidades sobre el río Mondomo, que pasa por Caldoño. «Fuimos y decomisamos la retroexcavadora. Ahora la tenemos aquí y sirve para hacer trabajo comunitario», explica Albiro Calambás, consejero mayor de Caldoño.

En julio de 2012, la Guardia Indígena y los cabildos del Cauca ocuparon la primera plana de los medios colombianos e internacionales. Después de que un tatuco de las FARC reventara el puesto de salud de Toribío y dejara más de siete personas heridas, la Guardia Indígena fue convocada. Más de 2.000 hombres, mujeres y niños, armados únicamente con bastones de madera, subieron al cerro Berlín y expulsaron a los soldados del Batallón de Alta Montaña n° 8. No era la primera vez que lo hacían, pero las imágenes de la Guardia Indígena sacando a los militares en volandas y la foto de un soldado llorando ocasionaron todo un revuelo mediático.

1. Granadas de mortero que contienen metralla artesanal y se lanzan a través de un tubo de metal. Su alcance es de unos ochocientos metros.

Menos repercusión tuvo la destrucción por parte de los comuneros de un campamento de las FARC y del armamento requisado a los guerrilleros en una concurrida ceremonia.

El escándalo llevó al propio presidente Juan Manuel Santos a viajar a la zona y pedir perdón por la violación de derechos humanos a la población indígena. Un mes después, en septiembre de 2012, la exigencia del CRIC y de otros sectores sociales —también de grupos económicos que buscaban seguridad para sus inversiones— cuajaba en forma de inicio de diálogo de paz entre el Gobierno y las FARC.

Una asamblea íntima de 5.000 personas

En una sala grande de la casa del cabildo se han dado cita para contar su historia más de veinte comuneros. Según explica Albiro Calambás, veinte es un número pequeño. En Caldono pueden llegar a convocarse asambleas de 5.000 personas. Y si es regional, de más de 8.000. Las asambleas vertebran la vida política. «Las autoridades y la Guardia tienen que obedecer los mandatos de las asambleas y congresos», explica el comunero nasa Robinson Estrada. Los consejeros se eligen cada dos años, por consenso y sin hacer campaña. «Se elige según la trayectoria», apunta.

«No se maneja un líder, los imperios que tuvieron líder, cuando le dan en la cabeza, se derrumban. Mañana a mí o a un compañero nos matarán y los demás llorarán, bailarán o tomarán chichita —risas en la sala de ladrillo—, pero siempre van a estar ahí», explica Vicente Chocué, miembro del área de jóvenes y de la Guardia Indígena.

La comunidad puede elegir o revocar a sus representantes en cualquier momento y participa de las decisiones importantes. «Los no indígenas tienden un poco a la ingenierización de la vida política —afirma Juan Carlos Houghton, investigador de la Casa del Pensamiento de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), una de las once asociaciones de cabildos que conforman el CRIC—. Esto hace que la gente no perciba las decisiones como propias. Nos pueden chocar cosas como las tres horas para saludar, “saludos de Menganito, saludos de Fulanita”, pero lo esencial del ejercicio es que es un proceso de construcción con los demás. Ante decisiones muy difíciles pero donde sí ha participado, la gente no tiene mucho lío en jugarse la vida».

Este sistema también tiene sus carencias, dice Houghton: «En un movimiento asambleario, las decisiones tienden a ser mucho más lentas, a cambiar constantemente, siempre con la incertidumbre de hacia dónde vamos. Pero al mismo tiempo está la potencia de una comunidad en su conjunto participando».

A través de las autoridades propias, la comunidad organizada ha consolidado un cambio en la identidad indígena. Para Gilberto Yafué, experto nasa en tierras, este es el mayor logro del CRIC. «En el ejercicio del despojo territorial, del exterminio físico y cultural, muchos indígenas nos avergonzábamos de serlo. El hecho de que hoy hablemos con mucha propiedad de que somos nasas, guambianos, coconucos, emberas, marca una diferencia. Ya no nos escondemos».

Pero el movimiento indígena del Cauca fue más lejos. En sus cuarenta años de historia, el CRIC consiguió abolir la estructura semifeudal de la tierra en el Cauca, echar a andar un sistema educativo, judicial y de salud propio, y recuperar más de medio millón de hectáreas de territorio ancestral. Juan Carlos Houghton analiza el proceso: «Hemos expulsado a los terratenientes de nuestras tierras, hemos cambiado una situación de servidumbre abierta a una situación de autonomía. En el Cauca se avanza hacia un territorio autónomo indígena, que va a ocupar la mitad de este departamento».

La abuela que convocó a los 12.000 guerreros

POPAYÁN / DEPARTAMENTO DEL CAUCA

La cuadrícula de la ciudad de Popayán está salpicada de iglesias barrocas y casonas blancas con artesonados. El conquistador cordobés Sebastián de Belalcázar dio por fundada esta ciudad, de las más antiguas de América, en 1537, como alto en la ruta comercial entre Quito y Cartagena de Indias. Popayán debía servir también como base para invadir más territorio. Pero las diversas fórmulas de esclavitud —el reparto, la encomienda o la mita— no tuvieron buena acogida entre las poblaciones locales. La insubordinación estaba servida.

Por orden de De Belalcázar, el capitán Pedro de Añasco se dispuso a fundar en 1538 un asentamiento al este de Popayán, para recaudar desde allí los impuestos de los pueblos indios de la zona. Para sentar las bases de la relación y aplacar la ya encendida

resistencia, Pedro de Añasco quemó vivo a un líder indígena, hijo de una de las cacicas más importantes de la región. Los españoles la llamaron *la Gaitana*. Wey Tana —abuela en lengua nasa— es descrita como una mujer viuda, fuerte y mayor. La mitología nasa cuenta que, con su grito, esta aguerrida mujer era capaz de convocar al trueno y la tormenta.

Al margen de estos fenómenos atmosféricos, Wey Tana sí fue capaz de convocar, y unir, a los pueblos indígenas acosados por los españoles. Los yancones, los pijaos, los piramas, los guanacas y los nasas, llamados páez por los españoles, dejaron de lado sus diferencias y sellaron un pacto. Seguida por más de 6.000 guerreros, la abuela emboscó a los españoles, apresó a Pedro de Añasco, le sacó los ojos y lo paseó por las comunidades, animando a la rebelión. Al final, se lo comieron, literalmente. Según cuenta la historiadora Marta Herrera Ángel, estos actos simbólicos fueron ampliando la resistencia hasta que 12.000 guerreros acabaron siguiendo a la Wey Tana, en una alianza indígena que le hizo la vida imposible a los invasores durante siglo y medio.

«Pero la pelea era muy despareja, unos con piedras, con flechas y con hondas, y los otros con armas de fuego. Al final fue mejor hacer un pacto», cuenta Ezequiel Vitonás, dirigente histórico del CRIC y alcalde de Toribío, como si lo hubiera vivido. Tras un siglo y medio de luchas, en 1702, se firmó un acuerdo que formalizaba la situación de facto: los españoles habían conseguido apropiarse de las tierras bajas y someter a su población, pero no vencer a los indios «tierra adentro», en las montañas, donde habían resistido la Wey Tana y los sucesivos caciques. La tradición oral nasa cuenta que el líder indígena Juan Tama, hijo de una estrella y de una laguna, fue a recoger los títulos coloniales expedidos por Felipe V montado en un cometa.

Pero los hacendados no tardaron en enterrar los títulos coloniales. A lo largo del siglo XVIII los grandes ganaderos, mineros y comerciantes de esclavos se hicieron con las tierras más fértiles y se convirtieron en poderes locales absolutos. El régimen de servidumbre impuesto sobre las poblaciones locales se llamó «terraje».

El huésped que, en vez de pagar, cobra

Los niños también pagaban terraje, así que Quintín Lame se crió trabajándole la finca Polindara a su patrón. De adulto quiso comprar su parcelita.

—¿Se te ocurre, indio, que voy a *pedaciar* mi tierra? —fue la respuesta obtenida, según cuenta el historiador Diego Castrillón Arboleda.

Quintín Lame pudo salir de la hacienda porque fue enrolado como soldado en la Guerra de los Mil Días, en los últimos años del siglo XIX. A su vuelta, Quintín Lame se instaló en Popayán, aprendió a leer y escribir, e inició una batalla legal para hacer valer los títulos coloniales que habían sido entregados doscientos años antes a los indígenas del Cauca. Memoriales, demandas, solicitudes, nada tuvo éxito².

Quintín Lame, que entonces tenía treinta años, empezó a recorrer las comunidades, casa por casa. Ezequiel Vitonás describe las arengas que se instalaron en la memoria de los mayores y que han pasado a la historia oral nasa.

—Yo no pago terraje. Tenemos el título colonial de propiedad colectiva y nosotros estábamos aquí antes que los blancos, ¿por qué pagarles a ellos? —preguntaba Lame en *nasa yuwe*, el idioma nasa—. Lo que hemos hecho es darle posada al blanco, y en vez de nosotros cobrarle el arriendo, él nos cobra a nosotros.

En 1914 estas ideas ya habían arraigado tanto como para desencadenar la Quintinada, una revuelta armada frente a los terratenientes. Por su propuesta de creación de «un gobierno chiquito» —por oposición al Gobierno grande de los blancos—, Lame fue encarcelado reiteradas veces. Mientras se encontraba preso en 1916, los indígenas se movilizaron en su defensa. Cuentan que, de tanta gente que salió a apoyarlo, «se oscurecieron las lomas» de las montañas. La figura de Lame, relata Vitonás, se volvió mito: «Dicen que a veces llegaba la Policía a cogerlo y él se escondía en un monte y lo que veían salir era un cerdo u otro animal, pero en realidad era Quintín Lame».

2. NÚÑEZ ESPINEL, L.A. (2008), «Quintín Lame: mil batallas contra el olvido», *Anuario de Historia Social y de la Cultura*, n. 35, Bogotá, p. 96.

Y llegaron los pájaros

En la primera mitad del siglo xx, al mismo tiempo que se extendían los latifundios de banano y café para la exportación, crecía entre los campesinos e indígenas la demanda de tierra. En 1948, el candidato a presidente del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, incluía una reforma agraria entre sus propuestas. Ante la posibilidad de que resultara elegido, Gaitán fue asesinado. Su muerte dio paso al Bogotazo, una revuelta protagonizada por las clases populares que destruyó 142 edificios de la capital e inauguró el periodo denominado la Violencia. Según denunció su hija, Gloria Gaitán, el crimen contó con apoyo de la CIA.

Para el historiador y experto en movimientos sociales Frank Molano, la Violencia no fue solo un conflicto entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, tal como cuenta la historia oficial. Se trató más bien, matiza, de un proceso de acumulación capitalista: la reconversión de zonas rurales a la economía de exportación a medida que los campesinos huían de las persecuciones. Mientras subía el precio del café y se expandía la caña de azúcar y el algodón, 200.000 personas fueron asesinadas y dos millones tuvieron que dejar sus tierras.

En el Cauca, la Violencia agudizó el terraje. Antes de 1948, Ezequiel Vitonás recuerda que su familia todavía tenía tierras en el plano, la zona más fértil. Pero a partir de ese año quedaron relegados a la cordillera central y occidental, terrenos altos, entre los 1.200 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar, y con gran pendiente.

En 1957, liberales y conservadores llegaron a un acuerdo de alternancia en el poder con el compromiso de no abordar el eterno reclamo de la reforma agraria. En algunas zonas, campesinos liberales con influencia comunista decidieron unirse para defenderse de los ataques del Ejército y de los paramilitares. La población, que venía huyendo de las masacres, organizaba de manera común la producción agraria y la autodefensa. En 1964, los conservadores se mostraron particularmente preocupados por la proliferación de estas comunidades, llamadas por el Gobierno «repúblicas independientes». Ya habían intentado anteriormente acabar con una de ellas, Marquetalia, pero esta vez sería la definitiva. Tras varias semanas de enfrentamiento, el Ejército zanjó la cuestión bombardeando la zona. En la operación se utilizaron helicópteros Huey, aviones de

combate T-33, siete batallones armados y dos compañías de contra-insurgencia. Las familias supervivientes huyeron una vez más, pero no pudieron asentarse de forma permanente en ningún lugar. En las selvas del suroeste confluyeron los campesinos armados procedentes de estas «repúblicas independientes». Habían nacido las FARC.

Millones de hectáreas recuperadas

En 1971, ante la acuciante demanda de una reforma agraria, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), creada en 1967, coordinó una movilización nacional. Se recuperaron 1.250 haciendas y latifundios improductivos. Ese mismo año, con el apoyo de este sindicato, nació el CRIC, donde convergieron las reivindicaciones campesinas y las demandas culturales y de autonomía propias del movimiento indígena.

Uno de sus primeros objetivos, que llevó años de trabajo, fue «reconstruir los cabildos», explica Houghton. Estas instituciones, de origen colonial, habían sido copadas por liberales y conservadores. «Los gobernantes indígenas del momento eran caciques partidistas, que siempre utilizaban a los indígenas como base electoral», dice. Con la creación del CRIC, las comunidades tomaron el control de los cabildos.

Según apunta Houghton, a la influencia de la teología de la liberación, representada por el padre Pedro León Rodríguez, se le sumó la decisiva influencia comunista de líderes como Gustavo Mejía, que procedía del Movimiento Revolucionario Liberal. Ambos fueron asesinados en 1974. «Donde había una recuperación de tierra, aparecían encapuchados con armas y mataban a tres o cuatro», recuerda Guillermo Tenorio, uno de los fundadores del CRIC.

Los asesinatos no consiguieron frenar el movimiento campesino: entre 1970 y 1980 se produjeron en los departamentos del Cauca, Tolima y Córdoba más de mil recuperaciones de tierras. La mayoría del medio millón de hectáreas que controla actualmente el CRIC es herencia de aquellos años. En 1964, el Gobierno reconocía 71 resguardos indígenas y 600.000 hectáreas como propiedad colectiva. Hoy, reconoce más de setecientos resguardos con más de treinta millones de hectáreas, el equivalente a la superficie de Italia. Gran parte de este territorio se conquistó durante los setenta.

La respuesta de los terratenientes a las ocupaciones de tierras cada vez era más violenta. El asesinato del padre Álvaro Ulcué en 1984 marcó un punto de inflexión. Había sido el primer sacerdote indígena de Colombia y hablaba *nasa yuuwe*. En seguida empezó a trabajar con el movimiento indígena del Cauca y participó en las tomas de tierras. «El CRIC ha avanzado y se logró tierra para la gente, pero ahora necesitamos avanzar en que la gente se capacite, se concientice... Necesitamos tener gente para la tierra», solía decir el padre Ulcué, según recuerda Ezequiel Vitonás.

Fue asesinado por paramilitares justo después de participar en la toma de una hacienda. Como fórmula de autodefensa frente a los hacendados, las comunidades crearon el Movimiento Armado Quintín Lame. No era la primera guerrilla en el Cauca. El departamento se había convertido en uno de los escenarios de la confrontación armada³. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y las FARC tuvieron una arraigada presencia en la zona.

«Se logró generar cierto equilibrio, cierto respeto —recuerda Ezequiel Vitonás—, pero a medida que fue creciendo, el Movimiento [Armado Quintín Lame] se volvió inmanejable. Algunos actuaban contra su misma gente. A finales de los ochenta, los cabildos se reunieron y decidieron entrar en un proceso de paz, aprovechando que el M-19 también estaba».

Una Constitución de dos cabezas

«¿Parásitos?... ¿Gusanos? Espere. M-19». «¿Falta de energía?... ¿Inactividad? Espere. M-19». «¿Decaimiento?... ¿Falta de memoria? Espere. M-19». «Ya viene el M-19». Tras varios días de anuncios en periódicos de tirada nacional, en 1974 el grupo guerrillero M-19 inauguraba su trayectoria robando la espada de Simón Bolívar de su casa museo en Bogotá. Entraron cuatro personas, intimidaron a

3. CORTÉS LANDÁZURY, R., y SINISTERRA RODRÍGUEZ, M.M. (2009), «Colombia: capital social, movilización social y sostenibilidad del desarrollo en el Cauca», *Revista Cepal* 99, diciembre de 2009, p. 159.

los vigilantes, rompieron el candado y huyeron con la espada en un Renault 12. No hubo heridos. Dejaron el lugar lleno de panfletos y pintadas: «Bolívar, tu espada vuelve a la lucha».

Las heterodoxas acciones del M-19 recibieron cobertura mediática internacional. Sus métodos, que ponían el acento en la comunicación, distanciaban al «Eme» de las guerrillas de corte tradicional. Al principio mantuvo una lucha urbana, donde se ganó el apoyo de amplios sectores de clase media, pero en los ochenta se desplazó a zonas rurales, entre ellas, el Cauca. Después de varios intentos fallidos de desmovilización, el «Eme» dejó las armas definitivamente el 8 de marzo de 1990.

La era de las guerrillas parecía llegar a su fin. Con la caída del muro de Berlín todavía reciente, guerrillas como el M-19, el EPL o el Movimiento Armado Quintín Lame vieron en la desmovilización una oportunidad de avanzar en sus demandas. Entre ellas, la reforma de la Constitución. Sin embargo, fue el movimiento estudiantil el que dio vida a esta reivindicación.

En las elecciones parlamentarias y municipales de 1990, los estudiantes consiguieron incluir una papeleta no prevista, una «séptima papeleta» que apostaba por la convocatoria de una Asamblea constituyente. Cuando los interventores abrieron las urnas, encontraron dos millones de votos que apoyaban la reforma constitucional, según un recuento informal. Una base que le pareció más que suficiente a la Corte Suprema para autorizar una votación adicional en las elecciones presidenciales de ese mismo año. Casi cinco millones de personas, frente a 226.000, votaron a favor de una nueva Constitución. La que seguía vigente era del 86: de 1886, y en el texto los indígenas eran calificados como «seres incipientes».

En la redacción de la nueva carta magna participaron representantes de las guerrillas desmovilizadas. El CRIC tendría un papel clave. El proceso de paz con el Movimiento Armado Quintín Lame sirvió para incluir a un representante en la Asamblea constituyente, Alfonso Peña. Junto al embera Rojas Birry y al guambiano Lorenzo Muelas, Peña trasladó a la Asamblea las reivindicaciones indígenas. Y muchas de las demandas fueron reconocidas. Entre ellas, la propiedad colectiva, los cabildos como autoridad tradicional especial y el derecho a ejercer la justicia propia, según usos y costumbres. «Los resguardos se convierten en unas pequeñas naciones dentro

de la nación. Es la primera vez en América Latina que ocurre algo así», remarca Ezequiel Vitonás.

Pero la Constitución tenía un reverso tenebroso. Los artículos sobre política económica eliminaban los últimos obstáculos para la aplicación del neoliberalismo. En la siguiente década las reformas laborales ahogaron el sindicalismo y la apertura de los mercados llevó a Colombia a triplicar la importación de alimentos. Cada vez más campesinos se veían obligados a recurrir al cultivo de la hoja de coca para sobrevivir. Según un informe de la OCDE, los cárteles de la droga fueron el sector más beneficiado con la implementación de las políticas neoliberales en el país⁴.

Mientras que en estos años el movimiento social se debilita, las FARC experimentarían un enorme crecimiento. Según describe el profesor Frank Molano, en las zonas rurales el desempleo se dispara, y muchos niños y jóvenes encuentran su espacio en la guerrilla. Según Molano, las FARC ingresarían grandes sumas de dinero a través del impuesto de guerra a los empresarios y el llamado *gramaje*, un impuesto al comercio de la hoja de coca. Esta guerrilla, que en los años setenta tenía un poder limitado en comparación con el M-19 y en los ochenta había estado «muy dispersa», explica este historiador, se convierte en los noventa en una poderosa estructura militar.

En algunas zonas del país, las FARC controlaron la distribución de tierras baldías y la tala de bosques, obligaron a los patrones a pagar un salario mínimo, construyeron obras públicas, resolvieron conflictos entre vecinos y desempeñaron funciones de protección y seguridad. En definitiva, en algunas regiones se convirtieron en autoridad⁵. Sin embargo, para Edison Peña, consejero nasa del CRIC, la guerrilla en el Cauca se degradó: «Dicen que [los muertos], ya sean militares o civiles, son víctimas de guerra, que quien debe responder de eso es el Estado, que ellos no se responsabilizan. Ya dejaron la política revolucionaria y se convirtieron en hombres bélicos».

4. HYLTON, F. (2003), «La hora crítica: perspectiva histórica de la Colombia de Uribe», *New Left Review*, n. 23, Madrid, p. 81.

5. URIBE DE HINCAPIÉ, M.T. (2002), «Emancipación social en un contexto de guerra prolongada: el caso de la comunidad de paz de San José de Apartadó, Colombia», en DE SOUSA SANTOS, B. (coord.), *Democratizar la democracia: los caminos de la democracia participativa*, Fondo de Cultura Económica, México, p. 194.

En el Cauca, la Constitución implicó un cambio de estrategia. Las recuperaciones de tierras se dejaron de lado y se buscó la negociación desde la vía jurídica. «Cuando el Estado te reconoce, tú debes reconocer al Estado —explica Juan Carlos Houghton—. Antes de 1991 aquí, en el Cauca, el Estado era el enemigo, así, sin ambages: el Estado era el que invadía, el que te reprimía, te negaba la tierra y los derechos. El otro es un Estado que dice que es multiétnico y multicultural».

Pese a los derechos conquistados en la Constitución, la violencia contra la población indígena vivió un nuevo auge a partir de 1997, cuando los incontables grupos de paramilitares se agruparon en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se estima que en tan solo cinco años las AUC llegaron a sumar más de 12.000 miembros. Un temible segundo ejército en cuya fundación y desarrollo, según han ido corroborando las investigaciones de la parapolítica, había participado Álvaro Uribe Vélez.

El riesgo es que te quieras quedar

SANTANDER DE QUILICHAO / DEPARTAMENTO DEL CAUCA

En el parque sobre la Panamericana, entre árboles gigantes y sombras de plástico amarradas con cuerdas, la gente bebe jugos de lulo, mango y mora. En la carretera, cientos de turistas hacen un transbordo atropellado entre busetas procedentes de Popayán y busetas en dirección a Cali. «Colombia, el riesgo es que te quieras quedar». El lema del Ministerio de Turismo hace hincapié en lo seguras que son las rutas entre los principales atractivos del país. Santander de Quilichao queda fuera del circuito turístico.

Entre las busetas, se cuela, se para, humea y arranca un reguero de mototaxis. «Ojo, uno de cada tres motorizados es paraco», nos previenen. Ana Deida Secué, coordinadora del área jurídica de la ACIN, pone en contexto la advertencia: «Acá, en el norte del Cauca, siempre han permanecido los paramilitares. Aun cuando dicen que se desmovilizaron en 2006 con la Ley de Justicia y Paz, siguen existiendo. En 2000, cuando empezaron a actuar en el norte del Cauca, muchos de nuestros compañeros no podían bajar aquí, al casco urbano. Fueron desaparecidos docentes, comuneros, líderes».

En Colombia, más de cinco millones de personas han tenido que abandonar sus casas, sus tierras y a menudo todos sus bienes, incluidos animales y huertos, para escapar de los actores armados, sobre todo de los paramilitares⁶. Una vez desplazadas, sus tierras no tardan en ser aprovechadas por grandes empresas para monocultivos de exportación, explotación petrolera y minera o, simplemente, para fines especulativos, según describe Frank Molano. Entre 1980 y 2010 se produjo el despojo de 6.638.195 hectáreas por acciones violentas atribuidas a grupos armados ilegales⁷.

Los beneficiarios de esta contrarreforma agraria han sido los ganaderos, los empresarios agroindustriales y los grandes terratenientes, muchos vinculados al narcotráfico. Según la Contraloría General de la República, el 48% de las mejores tierras del país están en manos de narcotraficantes como forma de lavado de dinero, mientras que el 62% de los pequeños campesinos solo posee el 5,2%.

Durante los primeros seis años de Gobierno de Uribe, los asesinatos a indígenas alcanzaron un nuevo récord. El movimiento liderado por el CRIC se convertiría en uno de los primeros y más incómodos desafíos a la política de «seguridad democrática» del presidente. En 2004, el CRIC convocó una gran marcha, la primera Minga por la Vida. En el mundo andino la minga es toda una institución, un momento de trabajo cooperativo en beneficio de la comunidad.

En esta primera minga, decenas de miles de indígenas salieron de sus comunidades y bloquearon las carreteras para mostrar su oposición a la firma del TLC con Estados Unidos y la militarización impulsada por Álvaro Uribe. «El Estado no había cumplido los acuerdos que habíamos firmado —explica Ezequiel Vitonás— por eso recurrimos al mejor senador que tenemos nosotros: la Panamericana».

Entre las demandas incumplidas por el Gobierno destacaba la cuestión de la tierra. Según un censo que realizó el CRIC en 2005, 75.000 jóvenes indígenas del Cauca carecen de tierras. En Caldon, esta carencia se traduce en una mayor tensión social. El movimiento

6. En su informe de 2011, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) cifra en 5.200.000 las personas desplazadas, más del 10% de la población.

7. Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado.

Nietos de Quintín Lame, corriente crítica compuesta mayoritariamente por jóvenes, aboga por generalizar las recuperaciones y cuestiona frontalmente al CRIC. Para esta organización, los Nietos desconocen las decisiones ya tomadas en el proceso de construcción de autonomía y carecen de legitimidad. Pero todos coinciden en que la raíz del problema es que, fuera de los resguardos, no se puede poner un pie en un palmo que no pertenezca a un terrateniente.

La líder que puso nervioso a Uribe

Aída Quilcué llega apresurada a la casa del CRIC en Popayán. En la recepción de la planta baja hay bancos poblados por personas mayores. Los niños entran y salen, algunas madres dan el pecho. Fuera, hay motos y bicicletas aparcadas en la acera. La gente se encuentra, se saluda y hace cola para resolver una gestión administrativa. Muchos llevan el bolso tradicional hecho de fique, y pañuelos rojos y verdes. Cada tanto se ve un bastón de madera con cintas de colores, los bastones de mando de la Guardia Indígena. Aída Quilcué atraviesa la recepción, saluda, sonríe y sube a la planta de arriba, donde tienen lugar las reuniones y los talleres, siempre con las puertas abiertas.

Hay mujeres en la dirección del CRIC, pero son pocas. «La invasión española dio el marco para la invisibilización de los pueblos indígenas y especialmente de la mujer», explica. Aída Quilcué fue consejera mayor del CRIC de 2007 a 2009 y lideró la Gran Minga de 2008, una de las mayores movilizaciones en la historia del movimiento indígena colombiano.

El 12 de octubre de 2008, 10.000 indígenas ocuparon la Panamericana cerca de La María, en el municipio de Piendamó, entre Popayán y Santander de Quilichao. Por segunda vez, el movimiento indígena desafiaba la «seguridad democrática» de Uribe. Los indígenas mantuvieron varios días el corte de carretera, hasta que el Gobierno desalojó con tanques, explosivos y fuego real. «¡Este país progresa cuando se mueran ustedes!», le gritaba un policía a los manifestantes en medio del tumulto. Tras la muerte de un indígena y con 120 personas heridas, la Minga desocupó la Panamericana, pero no se desmovilizó: el 21 de octubre se inició la marcha a Cali.

«En esa ocasión dijimos que si queremos construir un país distinto, un proceso de paz, no lo vamos a conseguir solo los indígenas,

porque también violan los derechos humanos de las organizaciones populares, campesinas, afros, urbanas, que somos mayoría en el país», dice Quilcué. A la Minga se unió la Central Unitaria de Trabajadores, los camioneros, el movimiento nacional y regional de mujeres, algunos sectores estudiantiles y los corteros de caña, que en 2008 estaban llevando a su vez huelgas en su sector. Cuando llegaron a Cali ya eran 40.000 personas. Las movilizaciones se habían extendido a dieciséis de los 32 departamentos del país.

El presidente Álvaro Uribe se vio obligado a tener un debate público con el CRIC en La María, un debate al estilo nasa, nada de puertas cerradas, abierto a la comunidad, en una explanada que se habilitó para la ocasión. Aída Quilcué fue la encargada de hablar en nombre de las comunidades. Al iniciar su discurso pidió a los comuneros indígenas que no aplaudieran. El auditorio, vestido de rojo y verde, casi lo consigue. «Se nos ha dicho a los pueblos indígenas que somos terroristas, y así se nos ha tratado [...], pero aquí se encuentran hoy nuestros pueblos dignos». Quilcué hablaba firme y lenta. La reverberación del sonido dejaba en el aire las últimas palabras de la frase: *pueblos dignos... pueblos dignos...* «Estamos aquí porque en nuestros territorios, indígenas, campesinos, afrocolombianos y todos los más vulnerables de nuestro país tenemos un riesgo inminente. Nuestra madre naturaleza está en riesgo, y ustedes han sido los responsables de entregar a las multinacionales nuestros territorios y de que hoy haya desplazamientos forzados, asesinatos y detenciones selectivas». Las cámaras registraron la acusación explícita y didáctica, al público entregado y a un Uribe que, literalmente, tomaba nota de la situación en un papelito.

La movilización no decayó. Dieciocho días más tarde, 12.000 indígenas llegaban a Bogotá tras haber recorrido 240 kilómetros. En una plaza Bolívar abarrotada, Quilcué volvía a hablar a indígenas y no indígenas sobre el acoso que los líderes sufrían: «No nos dé miedo si nos están filmando —cabeza alta, pausada, rotunda—. A mí ya me conocen, si me matan a mí aquí hay un pueblo. ¿Sí o no, compañeros?», preguntó Quilcué, levantando el bastón y la voz. Y la plaza estalló en vítores.

Pocos días después, una de las camionetas del CRIC fue emboscada por militares de la Compañía Galeón 7. En el ataque se dispararon más de quinientas balas de fusil. Diecisiete impactaron

en el vehículo. Creían que en la camioneta viajaba Aída Quilcué. Pero a quien asesinaron fue a Edwin Legarda, su esposo.

La Guardia Indígena de la comunidad de Totoró llegó en seguida e impidió que los militares huyeran del lugar. «La gente los rodeó y ahí los cogieron, les quitaron hasta las armas. Eso no lo puede hacer una gente si no está organizada», sentencia Ezequiel Vitonás. La rápida actuación de la Guardia permitió recopilar pruebas que luego se utilizarían en el juicio. La sentencia fue leída en septiembre de 2011: siete militares fueron condenados a cuarenta años de cárcel. «Condenaron solo a los soldados, que eran campesinos e indígenas que cumplieron la orden, mientras que el oficial se libró con cinco años —explica Quilcué—. Es un avance, pero falta por llenar un vacío muy grande. Sabemos que fueron el mismo Uribe y sus mandos los que ordenaron el asesinato».

Sentada a contraluz, Aída Quilcué habla sobre el proceso de movilización: «Lo que reafirma la minga es la visibilización, la globalización de la lucha, de la resistencia. Porque proteger la madre tierra no es solo responsabilidad de los indígenas, a pesar de que la hemos conservado de forma milenaria, sino de todos los seres que la habitamos».

Algunos meses más tarde del asesinato de su esposo, cuatro hombres armados rodearon la casa donde estaba su hija de doce años y la encañonaron. Los sicarios desistieron al ver que en la vivienda se encontraba la Guardia Indígena. «Perder a mi esposo y el atentado que sufrió mi hija fueron precios muy altos. Pero vale la pena hablar por la vida y la dignidad. Cuesta muchísimo, pero vale la pena», dice Aída Quilcué.

—¿Por qué sois tan incómodos?

—Porque no estamos golpeando solo a los gobiernos, estamos golpeando un modelo. Todo esto es un negocio, tiene que ver con el desarrollo económico, tiene que ver con el neoliberalismo y con el poder. Lógicamente, no van a permitir que hablemos de una vida distinta y una vida digna.

Para Gilberto Yafué, las raíces con las que cuenta el movimiento indígena en el Cauca son la mejor vacuna frente al desplazamiento, el robo de tierras y el empobrecimiento de la población: «Frente al ruido de las armas, frente al cruce de los disparos, hay miedos. Pero cuando hay sentido de la identidad y sentido de pertenencia no hay

posibilidades de desalojo, no hay posibilidades de desplazamiento». Una idea que comparte Juan Carlos Houghton: «La apuesta por ejercer la soberanía ha resultado ser la más exitosa y aleccionadora estrategia para enfrentar al gran capital que amenaza con cambiar el territorio y convertirlo en un supermercado de materias primas»⁸.

Palenques, cimarrones y comunidades negras

QUIBDÓ / DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

La cordillera de los Andes se abre en abanico al llegar a Colombia y se divide en tres sistemas montañosos. Entre el central y el oriental descende el río Cauca y la Panamericana. En los carteles de la autopista, las salidas posibles traen aires de otras tierras: Florida, Palmira, Cartago, Sevilla... Cualquiera diría que es la misma carretera que cruzaba el sur del país, en el departamento de Nariño. Ya sin agujeros y dotada de varios carriles, reparte a izquierda y derecha cultivos de caña. A medida que el autobús gira hacia el oeste, dirección Quibdó, la carretera vuelve a ser de tierra, angosta y agujereada. Diez horas tarda el trayecto desde Pereira, la ciudad más cercana, a la capital del Chocó, a pesar de que solo doscientos kilómetros las separan.

El departamento del Chocó, estrecho y largo, sigue la forma del río Atrato y corre en paralelo a la costa hasta desembocar en el norte caribeño, muy cerca de Panamá. Apenas hay carreteras en la región. Los pobladores se desplazan a través de los muchos afluentes de la cuenca del Atrato, pero el transporte fluvial no es barato.

El autobús remonta con dificultad la penúltima curva, hasta dar con un retén del Ejército. En el Chocó hay un soldado por cada 180 habitantes, y un médico por cada 10.000, según la diócesis de Quibdó. Los viajeros se bajan y abren sus maletas, bolsas, mochilas y cajas, chicas y grandes. La lluvia salpica los enseres esparcidos. La selva húmeda tropical del Pacífico colombiano es una de las zonas

8. AA. VV. (2008), *La tierra contra la muerte: conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia*, Centro de Cooperación al Indígena (Cecoin), Bogotá, p. 45.

más lluviosas y con mayor biodiversidad del planeta. El 80% del Chocó es selva. Y el 90% del territorio, cinco millones de hectáreas, corresponde a títulos colectivos de comunidades afros e indígenas.

A las afueras de Quibdó las casas son precarias y la basura se acumula en charcos de agua estancada. Frente al río Atrato, los hombres beben *tintos*, tazas de café solo, en bares aireados por pesados ventiladores. Al otro lado de la calle, en el mercado callejero se vende pescado seco, piñas, papayas, ropa y helados. Alguna persona lleva paraguas para defenderse del sol. Alguna otra, una toalla para secarse el sudor. Treinta grados y el nivel de humedad es muy alto: hace mucho calor.

Entre los puestos del mercado, en forma de cumbia, *reggaeton* y chirimía resuenan los ritmos afros. De los 450.000 habitantes del departamento, el 12% son indígenas, el 8% son mestizos y el 80% afrodescendientes.

La guerra de los cimarrones

Desde 1580 hasta 1640, Cartagena de Indias se convirtió en el principal puerto de esclavos de la América hispánica⁹. El historiador Howard Zinn calcula que cincuenta millones de personas fueron capturadas en África para ser vendidas como esclavas en América. Una de cada tres murió en el viaje¹⁰. Al llegar a Cartagena, los esclavos que estaban enfermos, agonizantes, eran hospedados en barracas al borde del mar. En la noche calurosa se escuchaban los cantos, los sollozos y el sonido del tambor que acompañaba a los muertos en su viaje al otro lado. Cuenta la antropóloga Nina S. de Friedemann que estas enfermerías populares, lugares de muerte, se convirtieron en un refugio de la memoria africana.

Los esclavos, catalogados según las normas vigentes como «bienes muebles», eran destinados a las labores domésticas, las plantaciones y la minería. Arrancarles una oreja, la nariz o el

9. Entre 1585 y 1601, llegaron a Cartagena más de 23.000 esclavos, sin contar los que entraban «de contrabando», según explica VILA VÍLAR, E. (1977), *Hispanoamérica y el asiento de esclavos: los asientos portugueses*, Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, Sevilla.

10. ZINN, H. (2006), *La otra historia de Estados Unidos*, Siglo XXI, Madrid, p. 30.

pene formaba parte de la tortura cotidiana. Eso sí, «quedaban prohibidas las mutilaciones que le impidieran al esclavo cumplir la jornada que por ley tenía que comenzar al alba y terminar doce horas después, al ponerse el sol»¹¹.

«Aunque mi amo me mate / a la mina no voy, / yo no quiero morirme en un socavón», dice la canción popular de origen cho-coano. Desde el principio, los esclavos llegaron a esta conclusión y no tardaron en unirse y rebelarse. Los que conseguían huir a la selva formaron comunidades de cimarrones¹² defendidas con empalizadas. De ahí el nombre de los nuevos asentamientos: palenques. Con el palenque como base, hacían incursiones para liberar a más esclavos. Desafiando a la milicia española, a sus armas y a sus perros, hombres y mujeres luchaban con flechas, piedras, lanzas y arcabuces.

Los palenques se replicaban, sus ataques eran rápidos y agresivos. La llamada guerra de los cimarrones duraría todo el siglo XVII, hasta que en 1691 la Corona concedió a todos los palenqueros la libertad. Pero quedaban tiempos muy duros por delante. El estado de Cartagena prohibió la trata de esclavos en 1812, pero Colombia no declaró la abolición de la esclavitud hasta 1851. Después, se redactaron nuevas leyes que permitían fórmulas veladas de servidumbre: el arrendamiento, el terraje, los trabajos forzados impuestos... Y, más tarde, cuando fueron abolidas también estas fórmulas, quedó la discriminación. En Colombia, al igual que en el resto de América Latina, el color de la piel condiciona el estatus social. El fisiólogo chileno Alejandro Lipschutz creó una palabra para este fenómeno: *pigmentocracia*.

La vida en comunidad

Los palenques no desaparecieron. Los descendientes de los esclavos libres conformaron cientos de comunidades negras en las orillas de los principales ríos de la región. «La población negra encontró

11. FRIEDEMANN, N.S., y AROCHA, J. (1986), *De sol a sol: génesis, transformación y presencia de los negros en Colombia*, Planeta, Barcelona.

12. *Cimarrón* quiere decir «salvaje, del monte, silvestre». Los españoles los llamaron así con desprecio, pero los cimarrones se apropiaron de la palabra y asumen esa identidad con orgullo y como forma de rebeldía.

en las selvas de todo el Pacífico sitios que eran muy difíciles de encontrar por el blanco. Las actuales comunidades, descendientes de población bantú y zulú, conservan la tradición de esos palenques y las prácticas culturales traídas de África», explica Richard Moreno, asesor jurídico de la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), organismo en el que se coordinan las comunidades negras del Medio Atrato. Cuando muere alguien, cuenta Moreno, la comunidad corre con todos los gastos del funeral. Se hacen listas y todo el mundo aporta lo que puede. «La familia solo tiene que preocuparse de su dolor». Si muere un bebé, la comunidad se reúne para hacerle un velorio especial, un *guali*, «como para despedirlo de forma alegre». A las ocho de la noche se le empiezan a cantar romances. Y, desde la medianoche hasta el amanecer, no solo se canta, sino también se baila alrededor del cuerpo.

La vida se sostiene en comunidad y gracias a la comunidad. Hay tierras comunes, donde todo el mundo puede ir a cazar o a recolectar, y hay parcelas pequeñas individuales. La *mano cambiada* es la forma de realizar grandes trabajos en los pequeños terrenos: un día varias personas trabajan en una finca, al otro se devuelve el favor. «La vida del Chocó es así: andamos en canoas, vamos a hacer nuestras actividades a los montes, sembramos plátanos, maíz, yuca, arroz, pescamos. Aquel que tiene le da al que no tiene. Como allá no hay mucho que comprar, la plata se va guardando y cuando se va a la ciudad se compra todo lo que se necesita», cuenta Ana Rosa Heredia, a la que le gustaría volver a su comunidad, de la que fue desplazada. Hasta mediados de los ochenta, las comunidades habían vivido relativamente aisladas del resto del país. Pero en esos años todo empezó a cambiar.

«Valía la pena organizarse»

La empresa Maderas del Darién empezó a abrir trochas de un kilómetro selva adentro para llevarse los árboles más frondosos. En el norte del Chocó, donde ya había talado amplias zonas, se decía que los pájaros, de puro cansancio, acababan posándose en raíces taladas al no encontrar las copas de los árboles. Para entonces, las comunidades ya llevaban años de organización y formación política, y se coordinaron ante la nueva situación. En 1986 se crearon los

primeros comités locales y, en 1988, la ACIA. Y esta no era la única comunidad de comunidades negras. En todo el Pacífico colombiano se crearon 132 entidades étnico-territoriales.

Ciento cincuenta representantes de las comunidades acudieron a la primera reunión con las instituciones que habían otorgado los permisos de explotación maderera. «Fue evidente la sorpresa de los funcionarios que llegaron desde Bogotá. Para ellos, acá, en estas selvas, lo que había era monos o micos y uno que otro negrito», contaba Nevaldo Perea, uno de los fundadores de la ACIA, en el libro *Soy Atrato*¹³. La ACIA consiguió acordar con el Estado un área de manejo conjunto. «El compromiso de las comunidades daba sus frutos y nos dimos cuenta de que valía la pena organizarse para defender los derechos porque, hasta ese momento, no teníamos asegurado *legalmente* nada de lo que nuestros ancestros nos dejaron como herencia».

Esta vez le habían parado los pies —y las motosierras— a Maderas del Darién, pero para oponerse a expropiaciones futuras necesitaban contar con los títulos de propiedad. La zona había pasado de ser marginada por el Gobierno a ser considerada una región estratégica, por sus recursos y por ser la salida a un emergente mercado asiático.

El telegrama negro

El momento clave en la lucha para titular los territorios vino con la Constitución de 1991 y no estuvo exento de sobresaltos. La persona elegida para representar a la población afrocolombiana en la Asamblea constituyente fue el conocido director técnico de fútbol Francisco *Pacho* Maturana, nacido en Quibdó. Pero en medio del proceso, Maturana renunció. «Ustedes lo llevaron para España porque Jesús Gil lo contrató como director técnico del Atlético de Madrid»¹⁴, se ríe Richard Moreno.

13. PEREA, N. (2012), *Soy Atrato: vida y amargos recuerdos de un líder negro*, Otramérica, Santander, p. 51.

14. Entre Colombia y el Atlético de Madrid, el fallido constituyente hizo escala en el Real Valladolid.

Por fortuna, uno de los constituyentes que representaba al movimiento indígena, Francisco Rojas Birry, era el fundador de la asociación de cabildos indígenas del Chocó (Orewa) y él se encargó de trasladar a la Asamblea las propuestas del movimiento afro. En la Asamblea, Birry contaba con el apoyo de los constituyentes de la ya desmovilizada guerrilla del M-19. «Pero no tenía mucho eco. Le decían que no había negros en el país», recuerda, todavía incrédulo, Richard Moreno.

La respuesta del llamado movimiento de negritudes fue inundar los buzones de la Presidencia y de los congresistas con cientos de miles de telegramas que decían «Los negros sí existimos» y «Díganles sí a las propuestas de las comunidades negras». Una líder negra relataba el proceso: «Todos los días la gente iba a Telecom [...], los telegramas fueron fundamentales, yo no sé si hay telegramas todavía, yo creo que ya no existen»¹⁵. Pero el «telegrama negro» no iba a ser suficiente. Así que idearon otro plan.

Si querían que funcionara no podían levantar sospecha. La guerrilla llevaba años en el Chocó y cualquier desplazamiento multitudinario iba a ser visto con recelo. Decidieron, entonces, anunciar un baile de chirimía en Quibdó. De las comunidades salieron cuatro grandes barcazas llenas a más no poder. Un poco antes de llegar a la ciudad, las barcazas se orillaron y se explicó al pasaje el motivo real del viaje: no iba a haber baile, se iban a ocupar tres edificios emblemáticos. Había que subir la presión a la constituyente si querían que sus derechos fueran incluidos. Unas pocas personas decidieron bajarse, pero la mayoría, cuenta Perea, dijo «vamos *pa'esa*». Al llegar a Quibdó se dividieron: un grupo fue a la catedral, otro a la alcaldía y otro al Incora, instancia gubernamental que gestionaba los títulos de tierra. Además, no estaban solos: en Quibdó los esperaba el refuerzo del movimiento indígena y de los integrantes negros de la Organización de Barrios Populares.

Mientras tanto, en la distante Bogotá, otro grupo ocupaba la embajada de Haití en una acción cargada de significado: Haití fue en 1804 el primer Estado de América Latina en proclamar la

15. CASTILLO GÓMEZ, L.C. (2007), *Etnicidad y nación: el desafío de la diversidad en Colombia*, Programa Editorial Universidad del Valle, Cali, p. 267.

independencia y abolir la esclavitud. Aparte, admite un risueño Richard Moreno, había motivos logísticos: «Sabíamos que si nos metíamos en la embajada de España o de Estados Unidos, nos sacaban a plomo de allá. Pero en la embajada de Haití el embajador no aceptó que la fuerza pública entrara». Las ocupaciones se mantuvieron cinco días. Los medios se apresuraron a decir que un grupo de guerrilleros había tomado Quibdo y los manifestantes empezaron a temer la respuesta policial.

Pero la presión funcionó. Casi a punto de clausurarse la Asamblea constituyente, se aprobó el artículo transitorio 55. Más tarde, este artículo se reglamentaría hasta desarrollar la actual Ley 70, una herramienta que ha permitido a las comunidades negras titular millones de hectáreas. El borrador de esa ley, reconoce Moreno, salió de la sede de la ACIA. Así describía Perea en *Soy Atrato* los primeros resultados de una larga lucha:

Qué momento ese en que nos dimos cuenta de que nuestro esfuerzo había tenido el resultado esperado, que los días que estuvimos hacinados en las instalaciones, en terribles condiciones, y que los años de lucha se traducían en el artículo transitorio... Todos salimos contentos de las tomas. Los botes estaban listos para regresar a las comunidades con esa esperanza enormemente grande de que por fin íbamos a tener las tierras tituladas.¹⁶

Pero el camino hacia el reconocimiento de las comunidades negras todavía no había terminado. En medio de la negociación, cuenta Richard Moreno, el ministro de Interior dijo que no, que no se iba a expedir ninguna ley.

—Pues, señor ministro, nosotros tenemos un bus ahí afuera, nos vamos y usted se va con nosotros en bus para el Chocó. Yo no sé cómo va a hacer —le dijeron los líderes negros.

Inmediatamente el ministro llamó al presidente César Gaviria y siguieron con el trámite.

Ya con la Ley 70 aprobada, se empezaron a solicitar los primeros títulos de propiedad colectiva, una fórmula que corresponde al modo ancestral africano de gestión de la tierra y que ha resultado

16. PEREA, N. (2012), *Soy Atrato...*, op. cit., p. 59.

ser la mejor herramienta de las comunidades para defender su territorio y sus derechos, explica Moreno. El primer título llegó en 1996 para la zona del Bajo Atrato, en el municipio de Riosucio. Y un año más tarde, la ACIA conseguía titular 800.000 hectáreas. «Los títulos colectivos tienen muchas ventajas. Son imprescriptibles, por lo que nadie te puede ganar esas tierras por ocuparlas durante un tiempo, ni nadie las puede ocupar sin el permiso de la comunidad. Son inembargables, así que no te las puede quitar el banco ni ninguna autoridad gubernamental. Y no se pueden vender», resume Moreno. Actualmente, en toda Colombia, los territorios colectivos de comunidades negras reconocidas por la Ley 70 llegan a los cinco millones de hectáreas, el 4,13% de las tierras del país, según cifras del Gobierno.

Octavio Rojas, representante legal de la ACIA, explica algunas de las reglas que comparten las 120 comunidades y las 45.000 personas que forman parte de esta organización. Para empezar, nada de cultivo de coca, «no solamente por las consecuencias para la comunidad, sino porque implica en términos jurídicos la expropiación del territorio». ¿Vínculos con los actores armados? Cero, «pues la autonomía se pierde». ¿Creación de un partido político? Tampoco: «La experiencia ha demostrado que cuando uno se vincula con esos procesos tiende a desaparecer». Estas directrices se combinan con un proyecto de etnodesarrollo que aspira a conservar los recursos naturales, las prácticas tradicionales y la producción de alimentos. «No solo por el miedo de las balas la gente se va, sino también por la escasez de comida. Si la gente tiene para sobrevivir puede permanecer en el territorio, si no, le toca salir».

La muerte y su juego

La modesta capilla de la diócesis de Quibdó es un refugio para el calor. De las cortinas cuidadosamente dispuestas cuelgan las fotografías de más de doscientas personas asesinadas en los últimos años.

Yair Elin Palacios Córdoba, 34 años, asesinado el 17 de abril de 2010 por los paramilitares en el barrio El Futuro, Quibdó.

Luisa Alejandra Perea Mosquera, cinco años, asesinada el 20 de febrero de 2011 por paramilitares en el barrio Caraño, Quibdó.

Las paredes se quedan pequeñas. «Es solo una muestra. En la base de datos tenemos alrededor de mil casos», explica Luis Felipe Flores López, miembro de la Comisión Vida, Justicia y Paz de la diócesis de Quibdó. En este contexto de violencia, la diócesis acompaña a las comunidades en su proceso de fortalecimiento y denuncia los crímenes que se cometen en su contra. A veces, son el único actor humanitario que llega donde se están produciendo los combates.

Para Ana Rosa Heredia, de la Comisión de Género de la ACIA, las mujeres son las que se llevan la peor parte: «Nosotras somos las paganinis. Cuando llegan los grupos armados, sea el que sea, las mujeres somos las que pagamos los platos rotos. Nos violan, nos reclutan, nos matan a los hijos». Flores López explica que en el Chocó los principales responsables de violaciones de los derechos humanos son los paramilitares, seguidos por el Estado y, en un tercer lugar, por la guerrilla. Aunque, matiza, «las prácticas contra las mujeres las hacen todos por igual».

En 1997 todavía había cuencas que se mantenían al margen. Pero el recrudecimiento del conflicto no tardó en llegar al Chocó. «Los actores armados, legales e ilegales, encontraron de sumo interés el control de la zona para hacer todo tipo de negocios con transnacionales», cuenta Flores López. Uno de los primeros casos fue la llamada *Operación Génesis*.

El 24 de febrero de 1997, apenas un par de meses después de que el municipio de Riosucio consiguiera sus primeras titulaciones colectivas, llegó a la zona la Brigada 17 del Ejército para llevar a cabo una supuesta ofensiva contra el frente 57 de las FARC. El general Rito Alejo del Río, que estaba al mando de la operación, se había coordinado con lo más selecto del mundo paramilitar de las entonces recién creadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Como consecuencia de los bombardeos y por el miedo a las matanzas, al menos 4.000 personas fueron desplazadas. Algunas huyeron a las ciudades, donde pasaron a malvivir en las periferias, otras se internaron en la selva, como habían hecho siglos atrás sus antepasados. Un superviviente de la masacre provocada en Cacarica reconstruye el asesinato del comunero afro Marino López Mena:

Uno de los criminales coge una macheta y lo corta en el cuerpo. Marino intenta huir, se arroja al río, pero los paramilitares lo amenazan: «Si

huye, le va peor». Marino regresa, extiende su brazo izquierdo para salir del agua. Uno de los paramilitares le mocha la cabeza con la macheta. Luego le cortan los brazos en dos, las dos piernas a la altura de las rodillas. Y empiezan a jugar fútbol con su cabeza. Todas y todos lo vimos. Ya no había nada más que decir, que hablar. Todo estaba dicho. Todo se hizo silencio. Todo fue terror. La muerte se hizo un juego¹⁷.

La mayoría de las personas desplazadas tardaron hasta cuatro años en volver. Cuando lo hicieron, encontraron que sus tierras habían sido ocupadas, entre otras empresas, por Urapalma S. A., Palmas de Curvaradó S. A., Palmadó Limitada, Inversiones Agropalma y Cía. Ltda., y Palmas S. A. ¿Adivinan qué sembraron? Efectivamente: palma aceitera.

No se trataba de una casualidad. Los terratenientes, muchos afiliados a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, estaban detrás de la operación militar. En 2010, la Fiscalía ordenó la captura de veinticuatro empresarios acusados de trazar «múltiples estrategias jurídicas para legalizar la adquisición y posesión de tierras, [para] lo cual combinaron una febril ofensiva paramilitar que resultó muy útil a la hora de contrarrestar la reticencia de los vendedores».

En agosto de 2012, el exgeneral Rito Alejo del Río fue condenado a veintiséis años de cárcel por el asesinato del campesino Marino López Mena, dentro del contexto de la *Operación Génesis* y con el agravante de «infundir terror en población civil no combatiente». El abogado del *Pacificador de Urabá*—como se le llama en algunos círculos a Rito Alejo Del Río— dijo en su defensa que la operación se realizó con el conocimiento del presidente Ernesto Samper, el consentimiento del Estado Mayor Conjunto y que en todo momento hubo una comunicación permanente con el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. En 1999, en un homenaje al general, Uribe lo había descrito como «un buen ejemplo para los soldados y policías de Colombia».

En la actualidad, las principales comunidades afectadas, Jiguamiandó y Curvaradó, luchan para recuperar los territorios que

17. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2011), «La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleva a la Corte el caso de la Operación Génesis», *Rebelión.org*.

legalmente les pertenecen. En el documental *El precio de la tierra*¹⁸, el empresario palmero Luis Ignacio Guzmán explica que los dueños desplazados siempre pueden volver y trabajar para las empresas en estas grandes haciendas, una posibilidad que contempla la ley de víctimas promulgada en 2011 por el presidente Juan Manuel Santos.

Y las agresiones no vienen solo del Ejército y los paramilitares. En mayo de 2002, en medio de un combate entre la guerrilla y las AUC, un cilindro de gas repleto de explosivos de las FARC cayó sobre la iglesia de Bellavista, la principal población del municipio de Bojayá, territorio colectivo de la ACIA. Murieron 87 personas.

Como no hay un reconocimiento formal de conflicto armado, dice Flores López, nadie siente la obligación de seguir las normas del derecho internacional humanitario. «Con tal de obtener los recursos que requieren para sus acciones militares hasta en algunos casos se coordinan para llevar a cabo operaciones militares entre bandos contrarios, o sencillamente prestan el servicio de sicariato. Acá la guerra se ha degradado mucho», explica.

Sin embargo, si no fuera por el trabajo de las organizaciones étnico-territoriales del Chocó la situación sería mucho más grave, sostiene este defensor de derechos humanos: «Estas organizaciones han logrado que todavía haya gente en las zonas rurales, en los ríos. Han visibilizado lo que estaba pasando en la región, han logrado consolidar expresiones unitarias y han logrado posicionar temas que eran ignorados, como los enfoques diferenciados, especialmente el derecho de las mujeres. Han logrado también sacar del anonimato prácticas tradicionales propias de la región... La esperanza está puesta en ellos».

* * *

La familia embera negocia un trueque con el conductor del autobús, maíz por trayecto, y entra en el vehículo. En total son unas diez personas, que se agolpan y acomodan en el pasillo; los asientos ya están ocupados. Las chicas llevan vestidos de manga

18. DURÁN TÉLLEZ, J.O. (2009), documental *El precio de la tierra*, Diócesis de Quibdó.

corta con colores intensos y botas de agua, algunas van descalzas. Los más pequeños se ríen sin parar y van desnudos. Algunas pasajeras increpan al conductor desde su sillón, los indígenas traen barro pegado y ellas no han pagado para ensuciarse, ¿qué se han creído? Una llega a bajarse del autobús.

«Este corrido se les ha terminado»

BARRIO DE LA CANDELARIA / BOGOTÁ

Bogotá se desparrama sobre los cerros que rodean la ciudad. Recuerda a Quito, por la altura y por la buena conservación del centro colonial, ahora remasterizado en epicentro cultural con tintes bohemios. Entre los muchos grafitis y dibujos callejeros que envuelven las casonas, Batman y Robin, dibujados con ceras de colores, se dan un apasionado y estático beso. Unas cuadras más al norte, junto al planetario, crecen rascacielos regados con el dinero del narcotráfico, cuenta el profesor Frank Molano.

Ocho millones de personas viven en Bogotá. Y cada día llegan doscientas más, desplazadas por el conflicto. Muchas de ellas recalán en el municipio de Soacha, una población de 700.000 habitantes en la periferia de la ciudad, donde se apiñan los asentamientos informales y viven más de 30.000 personas desplazadas. En el municipio hay industrias, tiendas de pintura y también gente con mucha *verraquera*¹⁹.

El 16 de septiembre de 2008, Luz Marina Bernal recibió una llamada. Una voz le decía que ya podía ir a identificar unas fotos de un cadáver, posiblemente su hijo, en Ocaña.

—¿En Ocaña? —Luz Marina necesitaba confirmar la información.

Ocaña está en el departamento de Norte de Santander, a casi setecientos kilómetros, doce horas de trayecto desde Soacha. ¿Cómo podía ser que su hijo hubiera acabado tan lejos? Fair Leonardo Porras

19. Coraje, valentía, tozudez.

Bernal tenía una discapacidad y, aunque su apariencia era la de un apuesto chico de veintisiete años de ojos azules, «por dentro era un niño de nueve», recuerda su madre. No había aprendido a leer ni a escribir, no conocía el valor del dinero. ¿Cómo fue a parar a Ocaña?

Cuando su hijo desapareció, meses atrás, la Fiscalía no aceptó la denuncia, así que Bernal inició un peregrinaje por cárceles, hospitales, albergues y morgues. Incluso salía a la calle a levantar las mantas de los indigentes, por si acaso. Su hijo trabajaba en la construcción y hacía recados a los vecinos. En el barrio todo el mundo lo echó de menos. Era «amable e ingenuo», describe su madre. Cuando fue a recoger el cuerpo de su hijo a Ocaña la conversación con el fiscal no podía ser más inverosímil.

—Su hijo era el jefe de una organización narcoterrorista. Portaba un arma en la mano derecha.

—¿Cómo un muchacho con una discapacidad del 53% permanente va a mandar a un grupo de hombres narcoterroristas? Yo creo que no es así. Además, ¡mi hijo era zurdo! —le espetó Bernal al fiscal.

En Ocaña, Bernal se dio cuenta de que su caso no era el único. Tenía constancia de que, al menos, otros dieciséis muchachos habían desaparecido en extrañas y similares circunstancias entre diciembre de 2007 y agosto de 2008. Cuando a otra vecina de Soacha, María Ubilerma Sanabria López, le dijeron que habían encontrado a su hijo Jaime Estiven Valencia también en Ocaña, Bernal se ofreció a acompañarla. «Lo sacaron de la fosa. Usted en la vida, Dios quiera, que nunca le suceda una cosa tan horrible. Yo veía mi vida, mi ser, tirado, inerte...», explica desgarrada Sanabria. Su hijo tenía dieciséis años, quería ser médico veterinario, tener caballos sementales y que su madre fuera «su reina», sacarla a pasear, que no le faltara de nada. También quería ser músico. El oído le venía de familia. Sanabria entona las primeras estrofas de un corrido que ha compuesto y que resume su historia. Lleva por título «La ley de democracia».

Señoras y señores,
vengo a contarles la historia de los muchachos de Soacha
que fueron asesinados en el año 2008
en el mandato de Uribe y su ley de democracia.
Los llevaron para Ocaña con propuestas de trabajo.
Lo que ellos nunca supieron

[es] que fueron víctimas de Estado,
siendo ministro de Defensa
el hoy en día presidente Santos.
El Gobierno los llamó
los falsos positivos.
Como los muertos ya no hablan
fue un negocio bien lucrativo.

Las Madres de Soacha habían destapado uno de los mayores y más macabros escándalos de la historia reciente de Colombia, los llamados «falsos positivos». Hasta 2012 se habían documentado hasta diecinueve casos de jóvenes secuestrados por el Ejército en Soacha. Pero, como advirtió Philip Alston, relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Soacha era «simplemente la punta del iceberg». ¿Cuántas de las 3.084 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2009 fueron «falsos positivos»? La Fiscalía estudia más de 1.700 casos, pero la cifra total se desconoce. Gracias a los informes de Alston y de organizaciones de derechos humanos, lo que sí se conoce bien es la manera en la que se perpetraban los asesinatos.

Los muchachos eran engañados por personas vestidas de civil. A menudo los convencían con falsas promesas de trabajo. «Con los 200.000 pesos [86 euros] que me dieron por llevarlo a Ocaña le pagué una deuda a un prestamista de Soacha que me estaba formando problemas —explicaba Alexander Carretero Díaz, el secuestrador de Fair Leonardo—. El único requisito es que no fueran mujeres ni viejos».

Cuando los jóvenes desaparecían, las familias acudían a presentar la denuncia, pero la Administración les negaba asistencia. En marzo de 2008, Ana Delina Páez enseñó la foto de su hijo Eduardo Garzón Páez, de 32 años, a los funcionarios, que contestaron entre risas: «Con esa pinta, ese *man* está con alguna vieja». Eduardo era atractivo y siempre iba muy «pintoso», recuerda Ana Delina. Con apoyo del personero²⁰ de Soacha y la ONU, las familias empezaron a indagar por su cuenta.

20. La Personería es un ente público encargado de la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Las investigaciones han ido confirmando que muchos de los asesinatos fueron llevados a cabo por la Brigada Móvil nº 15 y el Batallón de Infantería nº 41 del Ejército. Para escenificar que se había producido un combate y que los muertos eran guerrilleros o paramilitares, a los cadáveres de los secuestrados se les despojaba de identificación y se les vestía con traje de camuflaje. A veces la puesta en escena era tan burda que, misteriosamente, las balas no habían provocado agujeros en la tela o el uniforme estaba puesto encima de la ropa de calle. Junto a los cuerpos se depositaban armas que, según demostraron los peritajes, a menudo eran ya inservibles. En las manos de los supuestos combatientes no había restos de pólvora, porque sencillamente no habían disparado.

Según denuncia un informe de Fedes²¹, «para dar visos de legalidad», se falsificaron multitud de documentos, entre actas de operaciones, informes de inteligencia y supuestos pagos a informantes, «todo un aparato en función del encubrimiento de estos crímenes en contra de la población civil». Pero ¿para qué?

«La guerra se mide en litros de sangre»

Uno de los militares implicados en las desapariciones cuenta cómo la presión por conseguir «positivos» en combate se elevó a partir de 2002, el año en que Uribe llegó a la presidencia: «Nos dijo mi coronel Ramírez: “La sección segunda me debe responder por tres muertos al mes. En este momento la guerra se mide en litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la sanción correspondiente”»²². Unos años más tarde, dos leyes²³ impulsadas por el que fuera ministro de Defensa Camilo Ospina y puestas en práctica por su sucesor, el actual presidente Santos, recogían ascensos, pagos en metálico y vacaciones como recompensa por las bajas obtenidas. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos, el fenómeno de los falsos positivos

21. FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO (2010), *Soacha: la punta del iceberg. Falsos positivos e impunidad*, FEDES, Bogotá, p. 58.

22. FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (2012), *Colombia: la guerra se mide en litros de sangre. Falsos positivos*, FIDH, París, p. 10.

23. El Decreto 1400 de 2006 y la Directiva Ministerial 029 de 2005.

estuvo tan extendido que se puede concluir que estaba apoyado por los más altos mandos del Ejército, que habían ascendido también de esta forma.

Cuando Luz Marina Bernal y otras tres mujeres fueron a recoger los cadáveres de sus hijos, los medios de comunicación las acompañaron. «Sacaron ese día el comunicado y entonces se paró [se puso en pie] el presidente Álvaro Uribe Vélez a decir que los muchachos de Soacha no se habían ido precisamente a recoger café, sino con propósitos delincuenciales», denuncia Bernal. Ni Álvaro Uribe ni Juan Manuel Santos las recibieron. Tacharon a las Madres de «mamá chillonas» que no admitían que sus hijos pudieran ser delincuentes: «No hay muerto malo ni hijo feo», les decían. Los juicios que habían interpuesto las familias se postergaban una y otra vez. En enero de 2010, 46 militares quedaban libres por vencimiento de términos.

Para festejarlo, el Ejército organizó una fiesta para los encausados y sus familias. Celebraron una misa y un almuerzo con payasos y lechona. Después de comer, las mujeres fueron a un *spa* donde se les aplicó una mascarilla facial y los hombres recibieron apoyo psicológico con aromaterapia.

«No hay hijo feo, pero tampoco crimen perfecto»

Desde el principio, las familias de los muchachos de Soacha sufrieron amenazas. Y no solo amenazas. John Nilson Gómez fue arrojado por un puente cuando intentaba esclarecer la muerte de su hermano. Sobrevivió de milagro, pero fue asesinado poco después, al entrar en una tienda. El nivel de acoso que soportan los familiares y el estilo que se gastan los perpetradores queda patente en este anónimo que recibió Luz Marina Bernal:

A tu nena ya sele arbitio con nuestrabicitita esperamos que seballa en el tiempo que le pusimos ocino que se atenga alas consecuencias las tima por que son dos y espara que la prosimatodos ustedessaprendan aque darcen callados ya sabe después no diga que se arbitio (sic).

Pero no contaban con su «verraquera», mantiene María Ubi-lerma Sanabria. «No hay muerto malo, ni hijo feo; pero tampoco

crimen perfecto», replicaban las Madres en uno de los encuentros que organizaron para recordar a sus hijos. Con apoyo de colectivos colombianos, como la Ruta Pacífica de las Mujeres, e internacionales, como Mujeres de Negro o las Madres de Plaza de Mayo, las Madres de Soacha siguieron adelante con los juicios. Querían verdad, reparación y justicia. «No estamos pidiendo dinero —enfatisa Bernal— como hizo Álvaro Uribe, ofreciendo dieciocho millones de pesos. Yo le dije: “Si le puso dieciocho millones de pesos [7.776 euros] a los hijos de las Madres de Soacha, ¿será que usted me puede vender a uno de sus hijos por cuarenta millones [17.281 euros]? Yo veré qué hago con él”».

La primera condena llegó en julio de 2011. Fue en el caso de Ana Delina Páez, por su hijo Eduardo, y de Kelly Joana Ruiz, por su esposo Daniel Andrés Pesca, taxista de veintisiete años. En el proceso, ocho exmilitares fueron condenados a penas de entre veintiocho y 55 años de prisión. «Dios bendiga a ese fiscal y a esa juez, porque se dio justicia —dice Páez mirando por la ventana—. Falta conseguir a los grandes. ¿Cómo comenzó esto y por qué? Si hubieran sido uno, dos, tres, ¡pero es que son miles!».

Un año después, en junio de 2012, familiares, amigos y colectivos en apoyo de las Madres, se manifestaban durante el juicio por el asesinato de Fair Leonardo Porras Bernal. En primer plano, las fotos ampliadas de los muchachos de Soacha. Detrás del tumulto, una valla publicitaria recordaba el *marketing* de las Fuerzas Armadas: «Somos gente común que hace un trabajo excepcional». El fallo, leído en julio de 2013 por el Tribunal Superior de Cundinamarca, condenó a seis militares involucrados en el asesinato de Fair Leonardo a penas de entre 53 y 54 años de prisión. También, en un gran avance para la lucha de las Madres de Soacha, lo calificó de crimen de lesa humanidad.

La sentencia reconocía la naturaleza sistemática y generalizada de las ejecuciones, así como su carácter discriminatorio, ya que todas las víctimas eran jóvenes humildes. Para la abogada Gloria Silva, representante de Bernal, se trata de un fallo «histórico» porque abre la posibilidad de que el resto de casos sea considerado de igual manera. Como consecuencia del escándalo de los falsos positivos, veintisiete altos mandos fueron destituidos. Según explica la abogada, se trata

solo del principio: este fallo permite «subir en la cadena de mando y llegar hasta quienes promovieron esa estrategia»²⁴.

Con una sonrisa llena de «verraquera», María Ubilerma Sanabria llega a las últimas estrofas de la canción:

Y que quede comprobado
que a todos estos desgraciados
¡este corrido se les ha terminado!

La potencia del dolor

CONGRESO DE LA REPÚBLICA / BOGOTÁ

Desde los pisos superiores que dan al patio interior de mármol no es difícil identificar a Iván Cepeda entre los otros representantes a la Cámara del Congreso. Es el único que no lleva chaqueta y corbata. Desde que fue elegido en 2010 por el partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, Cepeda ha sido uno de los parlamentarios más críticos del Congreso. Su padre, el senador de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda, fue asesinado en 1994 por paramilitares a las órdenes del Estado. Desde entonces, a través del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Cepeda se ha dedicado a la lucha contra la impunidad. En agosto de 2011 consiguió que el Estado colombiano admitiera su responsabilidad en la muerte de su padre y en la aniquilación de la UP.

En 1986, tras un alto el fuego, la guerrilla de las FARC y otros sectores decidieron crear una expresión política legal, la UP, donde se unieron tanto militantes como personas procedentes de movimientos sociales y activistas sindicales. La UP llegó a controlar gobiernos locales, municipios y regiones. «Y eso preocupó a las élites, sobre todo a los terratenientes. La respuesta fue la organización de grupos paramilitares financiados por el narcotráfico en una alianza con los

24. SIMÓN, P., y ZAPICO, A. (2013), «Crónica de una sentencia histórica: los falsos positivos son crímenes de lesa humanidad», *Periodismohumano.com*.

militares», relata Frank Molano. Cerca de 5.000 integrantes de la UP fueron asesinados en la corta historia del partido.

Ya en su despacho del Congreso, Cepeda recuerda la investigación que tuvieron que realizar en el caso de su padre. «Las víctimas le hicimos buena parte del trabajo a la Fiscalía. Demostramos la responsabilidad material de los suboficiales del Ejército y su actuación con paramilitares. Y llegamos a la Corte Interamericana, que produjo una sentencia que no quiso acatar el Gobierno de Uribe y que tuvo que acatar el Gobierno de Santos», explica. En el acto realizado, el Estado reconoció haber matado a Manuel Cepeda y haber hecho lo imposible para mantener el crimen en la impunidad.

«¿Cuál es la importancia de este hecho? El Estado cierra la discusión: en Colombia la oposición fue masacrada. Es un crimen contra un senador de un partido exterminado, es el reconocimiento de que en un país considerado democrático se exterminó a la oposición —sentencia Cepeda—. El caso de la UP es emblemático porque implica la traición de un pacto de paz». Y es una continua referencia cuando se habla de los obstáculos que han impedido durante tanto tiempo avanzar en una salida negociada al conflicto. Una referencia todavía más presente desde que en septiembre de 2012 se iniciaran las negociaciones entre el Gobierno y las FARC.

«Sin nuestra acción no se hubiera suscitado ningún tipo de justicia en el caso de Manuel Cepeda. En Colombia, la impunidad se ha resuelto en buena parte por la acción de los movimientos sociales. Ha sido un trabajo de difusión, de movilización, que se expresó en la manifestación del 6 de marzo de 2008. No existiría una ley de víctimas si las víctimas no hubieran hecho todo ese proceso», subraya Cepeda. Sin embargo, para este activista la ley de víctimas, que incluye la restitución de tierras a las personas desplazadas, es una conquista magra: «Se trata de la típica leguleyada colombiana. Los grandes monopolios han conseguido legalizar esa tenencia y ahora son considerados de buena fe. Es una purificación de las transacciones, una legalización del despojo».

A las puertas del Ubérrimo

En 2008, el mismo año en que se producía la gran movilización de las víctimas, los indígenas del Cauca marchaban hacia Bogotá y los

corteros de caña reclamaban sus derechos, Iván Cepeda publicaba un libro de referencia sobre la figura de Álvaro Uribe: *A las puertas del Ubérrimo*²⁵, en referencia al nombre de la finca del expresidente. «Hacíamos el ejercicio de rodear esa finca de todo lo que estaba ocurriendo en el departamento de Córdoba, donde surgieron los paramilitares, para decir de forma esquemática que en esa zona no se movía la hoja de un árbol sin el consentimiento de los paramilitares. Significa que es imposible que el presidente no supiera, que no estuviera al tanto, que no ordenara, en medio de semejante contexto».

Cepeda explica que Uribe estuvo en la base de la fundación del paramilitarismo moderno: «Incentivó a través de formas institucionales los ejércitos paramilitares y el arrasamiento de regiones enteras del país a través de masacres y de desplazamientos para que círculos empresariales y terratenientes se quedaran con esas tierras. Esas son las motivaciones primigenias». Pero para Cepeda esta es solo una parte de los crímenes cometidos por el expresidente: «Para encubrir lo que hizo en aquellos años en que estaba ascendiendo políticamente, y durante sus ocho años de presidencia, creó aparatos criminales para frustrar las investigaciones, coaccionar a los jueces, borrar de la faz de la tierra a los defensores de derechos humanos, intimidar a los opositores políticos y disuadir a los periodistas críticos de cualquier tipo de investigación».

«El hombre más próximo a nuestra filosofía». Así definió a Álvaro Uribe el jefe paramilitar Carlos Castaño en su libro *Mi confesión*²⁶. Para Frank Molano, la alta política colombiana de las últimas décadas no se entiende sin la lucha entre los dos principales cárteles de la droga. En la pugna entre el cártel de Cali y el cártel de Medellín, años atrás el presidente Ernesto Samper se había aliado con el cártel de Cali²⁷. «Uribe estaba respaldado por lo que quedaba del cártel de Medellín, que ya no es un cártel, sino una estructura

25. CEPEDA, I. (2008), *A las puertas del Ubérrimo*, Debate, Bogotá.

26. CASTAÑO, C., y ARANGUREN MOLINA, M. (2001), *Mi confesión: Carlos Castaño revela sus secretos*, La Oveja Negra, Bogotá.

27. En 1995 estalló el escándalo conocido como *Proceso 8.000*: el presidente Ernesto Samper había utilizado dinero del narcotráfico, en concreto del cártel de Cali, para financiar su campaña electoral.

armada paramilitar, un proyecto de extrema derecha. Con esa estructura controlan todo el narcotráfico en Colombia. Ellos llegan a la presidencia, a la larga quien ganó fue el cártel de Medellín»²⁸, expone Frank Molano.

Según describe Cepeda, el movimiento por la justicia no ha estado quieto frente a todo esto. Aunque el empuje ha venido de las organizaciones de víctimas, de derechos humanos, del movimiento sindical, ha surgido un sector del poder judicial «muy respetuoso de los derechos humanos y de la Constitución», que está llegando hasta el final en los juicios, sostiene Cepeda.

Insobornables

Entre los delitos que llevó a cabo el Gobierno de Uribe para «encubrir sus crímenes» destaca el escándalo de las Chuzadas. *Chuzada* en Colombia significa «pinchazo», escucha. Las actividades ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que responde directamente al presidente, quedaron al descubierto a principios de 2009 gracias a una investigación de la revista *Semana*. La Fiscalía General de la Nación encontró pruebas según las cuales, desde 2004, los funcionarios del organismo de inteligencia estatal realizaron «seguimientos, interceptaciones telefónicas, hostigamientos y amenazas contra defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos del Gobierno de Uribe y magistrados de las Altas Cortes»²⁹.

La historia del DAS daría para una novela negra. Su exdirector José Miguel Narváez, acusado de estar implicado en el asesinato del humorista Jaime Garzón, impartió un curso entre 1998 y 2002 que llevaba por título «Por qué es lícito matar comunistas en Colombia». Según describía el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, el recurrente auditorio paramilitar lo estudiaba con avidez.

28. El cártel de Medellín estaba liderado por Pablo Escobar, que llegó a ser representante de la Cámara en 1982. Después de fugarse de la cárcel murió en 1993 de un disparo en el corazón mientras huía por un tejado.

29. Informe de la Red Oidhaco con ocasión del examen de Colombia por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ginebra, julio de 2010.

Hoy cincuenta funcionarios del organismo de inteligencia están procesados y veinte cumplen condena en prisión, incluido su máximo responsable, Jorge Noguera. En esto tuvo mucho que ver el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que representa a decenas de víctimas de la persecución política del DAS.

Alirio Uribe ejerce como director de este colectivo de abogados comprometidos, donde lleva participando más de veinte años. El escándalo de las Chuzadas permitió demostrar la íntima relación entre el paramilitarismo y el Gobierno de Álvaro Uribe: «El DAS utilizaba la inteligencia ilegal, hacía listas de personas que eran entregadas a grupos paramilitares, concretamente al Bloque Norte», explica.

El Colectivo Alvear Restrepo tiene su sede en un rascacielos de 41 pisos en el centro de Bogotá, junto a pequeñas iglesias barrocas y joyerías que despliegan esmeraldas en sus vitrinas. En sus más de treinta años de trabajo, los integrantes del colectivo han sufrido atentados y amenazas. Sin ir más lejos, se habían convertido en víctimas de las chuzadas del DAS. A veces tienen que llevar escolta. Para entrar en el edificio hay que atravesar varias barreras de seguridad.

Se habían vuelto peligrosos, cuenta Alirio Uribe: «Se consideró que desestabilizábamos el país y se nos acusó, de manera vulgar, de ser el aparato jurídico de las FARC. Somos abogados comprometidos con las víctimas, abogados insobornables, como somos los defensores de derechos humanos en general, que hacen que las reglas del juego de ellos, que son comprar, vender fallos, vender pruebas, no les funcionen».

El Colectivo Alvear Restrepo ha conseguido que la Corte Interamericana fallara en varias ocasiones contra el Estado colombiano, obligándolo a iniciar o retomar procesos. Entre ellos, el caso de Wilson Gutiérrez por un delito de torturas, y el caso de la masacre de la Rochela, en la que paramilitares y soldados asesinaron a trece integrantes de una comisión judicial que investigaba asesinatos en la zona del Magdalena Medio. Uno de los expedientes más importantes, por el número de víctimas y por la gravedad de la actuación, es la masacre de Mapiripán.

En julio de 1997 un grupo de paramilitares tomó durante cinco días la comunidad de Mapiripán, en la zona de los Llanos, al sureste del país, con una supuesta lista negra de colaboradores de la guerrilla. Durante ese tiempo, entre sesenta y cien personas fueron degolladas,

desmembradas y evisceradas. Los paramilitares hicieron un cerco a la comunidad. Los supervivientes no podían huir y tampoco podían enterrar a las personas que cada noche morían en un matadero. Durante estos cinco días de infierno, miembros del Gobierno y del Ejército no solo estuvieron al corriente de lo que sucedía, sino que aportaron apoyo logístico. En esta acción participaron coordinadamente 360 paramilitares y 160 miembros de las Fuerzas Armadas colombianas. En 2005, la Corte Interamericana condenó al Estado por estos hechos. Desde entonces, cinco militares y seis paramilitares han sido sentenciados a penas de entre veintiséis y cuarenta años. Uno de los últimos, en octubre de 2012, era el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que se encuentra desmovilizado como parte de la Ley de Justicia y Paz de 2006.

Para Alirio Uribe, aunque la desmovilización prometida por esta ley no fue completa y no se ha conseguido toda la verdad para las víctimas, se ha avanzado mucho en algunos aspectos: ahora se tienen datos de más de 5.000 fosas y la ficha completa de 35.000 paramilitares. «Y un fenómeno no previsto es que en la medida en que el Gobierno no cumplió con lo prometido, los paramilitares han empezado a hablar». Hoy, detalla, hay unos 6.000 paramilitares en la cárcel, unos 1.300 militares procesados, mientras que más de 130 parlamentarios afines al uribismo han sido enjuiciados. Cuarenta de ellos han ingresado en prisión.

Cuando Álvaro Uribe se presentó a las elecciones en 2002, el Colectivo Alvear Restrepo advirtió de que «el modelo mafioso paramilitar se iba a tomar el Gobierno». En 1984, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla ya había hecho declaraciones que vinculaban a Álvaro Uribe con el narcotráfico. Uno de los argumentos era que en el allanamiento de Tranquilandia se había incautado un helicóptero de la familia del político antioqueño. Y Tranquilandia no era un *resort* vacacional con *spa*, sino un conglomerado de diecinueve laboratorios en mitad de la selva, que contaba con ocho pistas de aterrizaje y donde se incautaron 13,8 toneladas de cocaína. Poco después del desmantelamiento de Tranquilandia, el ministro Lara Bonilla fue asesinado por miembros del cártel de Medellín a las órdenes de Pablo Escobar. La presentadora de televisión Virginia Vallejo, ex amante durante cinco años de este capo del narcotráfico, resumía la relación entre Escobar y Álvaro

Uribe en una entrevista en *El País*: «Pablo solía decir: “Si no fuera por este muchacho bendito tendríamos que estar nadando hasta Miami para llevar la droga a los gringos”». Por entonces, entre 1980 y 1982, Uribe ejercía de director de Aeronáutica Civil y concedió decenas de licencias de pistas de aterrizaje para el cártel de Medellín, afirma Vallejo. Gracias a Uribe, el sueño de Escobar de convertir Colombia en un «Narcoestado», según esta presentadora, se había convertido en realidad.

«Un lugar en la historia universal del crimen»

Durante las dos legislaturas del presidente Uribe, los escándalos fueron confirmando la predicción de este colectivo de abogados. Compra de votos para la reelección, las chuzadas del DAS, subvenciones millonarias a grandes terratenientes responsables de masacres, asesinatos de sindicalistas, falsos positivos... Los casos de corrupción y de violaciones de derechos humanos «eran tan evidentes que ya no era posible esconder la basura debajo de la alfombra», resume el director del colectivo Alvear Restrepo.

Este es uno de los motivos del cambio de estrategia llevado a cabo por el Gobierno de Juan Manuel Santos, infiere Iván Cepeda, un giro que en septiembre de 2012 se cristalizó en el inicio de las negociaciones de paz con las FARC. En un contexto de integración latinoamericana y en mitad de la crisis económica que afecta a Estados Unidos y a la Unión Europea, «Santos no puede presentarse con las manos untadas de sangre, por eso la política exterior tiene un componente de derechos humanos, que va dentro de lo políticamente correcto». Santos representa a inversionistas estadounidenses y europeos, recordaba Frank Molano, mientras que Uribe defiende intereses ganaderos y se ha apoyado «en una base social de carácter narcotraficante y paramilitar».

Para Iván Cepeda, la política de Santos es una continuación lógica de la estrategia iniciada por Uribe: «Ya hubo una fase acumulatoria, que consistió en producir movimientos de población gigantescos y barrer la superficie para llegar a la etapa en la que estamos, que es de reproducción intensiva del capital. El FMI le recomendó a Colombia entrar en un proceso de seguridad jurídica. Las empresas no pueden venir aquí, comprar unas tierras y que el

día de mañana le aparezca la sorpresa de que esa tierra es de unos campesinos que fueron masacrados. Para la inversión es necesario que haya seguridad».

Para Iván Cepeda, la detención de Álvaro Uribe es cuestión de tiempo. «En el futuro, cuando se pueda examinar lo que hemos vivido retrospectivamente, sin lugar a dudas el régimen de Uribe va a ocupar un lugar descollante en la historia universal de la criminalidad y del ejercicio arbitrario del poder, tanto por la cantidad como por la variedad de formas de acción criminal que se realizaron».

En el libro *A las puertas del Ubérrimo*, Cepeda demostraba que era imposible que Uribe no participase de todo lo que estaba sucediendo a las puertas de su hacienda. Ahora, sentado en su despacho de representante legislativo, sugiere la posibilidad de escribir un nuevo libro: *A las puertas de la Casa de Nariño*, en referencia al nombre del palacio de Gobierno. «¿Cómo pudo ocurrir durante ocho años toda esta vorágine de actuaciones ilegales, de violaciones de derechos humanos, de compra de parlamentarios, sin que el presidente supiera, sin que el presidente participara en todo eso?».

Iván Cepeda se muestra optimista: «Cada vez se cierra el círculo de una forma más estrecha en torno al propio expresidente, van cayendo sus exministros, van cayendo sus secretarios privados, ya fue condenado un primo del presidente, sus hijos están en proceso de ser investigados... Creo que dentro de poco podremos conseguir condenas legales contra las personas que pertenecieron a las más altas instancias del Gobierno».

«Guerra a la guerra»

GOLFO DE URABÁ / DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

En la región del golfo de Urabá, cerca de la frontera con Panamá, se superponen la ganadería extensiva, los pequeños caseríos tradicionales, los bosques primarios y el agronegocio bananero. Los departamentos del Caribe tienen el récord del país en congresistas envueltos en la narcopolítica. Fueron la cuna de los grupos paramilitares y donde siguen teniendo mayor presencia. Unos grupos

ilegales íntimamente relacionados con los grandes propietarios y las multinacionales. Según admitió la propia empresa bananera estadounidense Chiquita Brands³⁰, entre 1997 y 2004 la compañía pagó 1,7 millones de dólares a grupos paramilitares.

En 1995, con 35 años, Gloria Cuartas fue elegida alcaldesa de la ciudad de Apartadó, en Urabá, un puesto que equivalía por aquel entonces a una condena de muerte. De hecho, diecisiete de sus colaboradores fueron asesinados. Durante su mandato enfrentó el recrudecimiento de la violencia paramilitar. Su contribución fue decisiva para convertir el paramilitarismo en un tema nacional y también internacional. Cuartas sufrió varios atentados, pero eligió no usar escolta. Junto con el padre Javier Giraldo, participó en la creación de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. En marzo de 1996, cuatrocientos campesinos decidieron que no volverían a escapar. En su recién fundada comunidad todos los actores armados tenían prohibida la entrada. Le habían declarado «la guerra a la guerra». Una experiencia que se vería replicada en muchos rincones del país.

Ni el Ejército, que actuaba en colaboración con los paramilitares, ni las FARC, que históricamente habían tenido una gran presencia en la zona, respetaron la decisión de la Comunidad de Paz. Durante años se han sucedido los ataques y las masacres por parte de las Fuerzas Armadas y los paramilitares³¹.

Sin embargo, los habitantes de la comunidad decidieron permanecer. «San José de Apartadó es una resistencia política al sometimiento hegemónico del capital. Por su acumulado ético, por su fuerza, por todo lo que ha resistido, representa en sí misma una esperanza —sostiene Gloria Cuartas—. Las comunidades de paz están planteándole tanto a la insurgencia como al Gobierno la

30. En 1928, la United Fruit Company, antecesora de la Chiquita Brands, fue responsable de la llamada masacre de las Bananeras, en la que murieron trescientas personas. Un episodio reflejado en el libro *Cien años de soledad*, de Gabriel García Márquez.

31. Una de las mayores matanzas se produjo el 21 de febrero de 2005, cuando el Ejército y los paramilitares asesinaron a sangre fría a cinco adultos y a tres niños. Por estas muertes han sido condenados a veinte años el capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez y seis paramilitares.

necesidad de que se respeten las alternativas al desarrollo, que se consideren otras formas productivas, otras formas de solidaridad».

Gloria Cuartas insiste en la importancia de tratar el modelo de desarrollo del país en las conversaciones de paz iniciadas en septiembre de 2012 entre las FARC y el Gobierno: «Hay espacios distintos en Colombia que no tienen nada que ver con el modelo neoliberal, un acumulado muy grande, de organizaciones campesinas, sindicales, indígenas, de mujeres». En los últimos años han surgido varias plataformas de movimientos sociales que trabajan para incidir en las negociaciones de paz, para que se desarrolle una paz «con justicia social», que dé respuesta a las auténticas raíces del conflicto.

En 1996, Gloria Cuartas presenció cómo los paramilitares decapitaban a un niño en una escuela. «Eso marcó mi vida. Todas las veces recuerdo una mancha de sangre, como cuando uno ve una película en cámara lenta, la sangre se trasladaba... yo escondí a los niños... la escuela no tenía puerta, y empezó un cruce de balas», relataba Cuartas para Radio Nederland. Pero «el recuerdo más doloroso», confesaba, se produjo inmediatamente después, a las seis de la tarde, cuando logró sacar a los niños de la escuela y se encaró con el general Rito Alejo del Río —¿recuerdan?—, también conocido como el Pacificador de Urabá.

—General, yo vi que decapitaron a un niño —le dijo Gloria Cuartas.

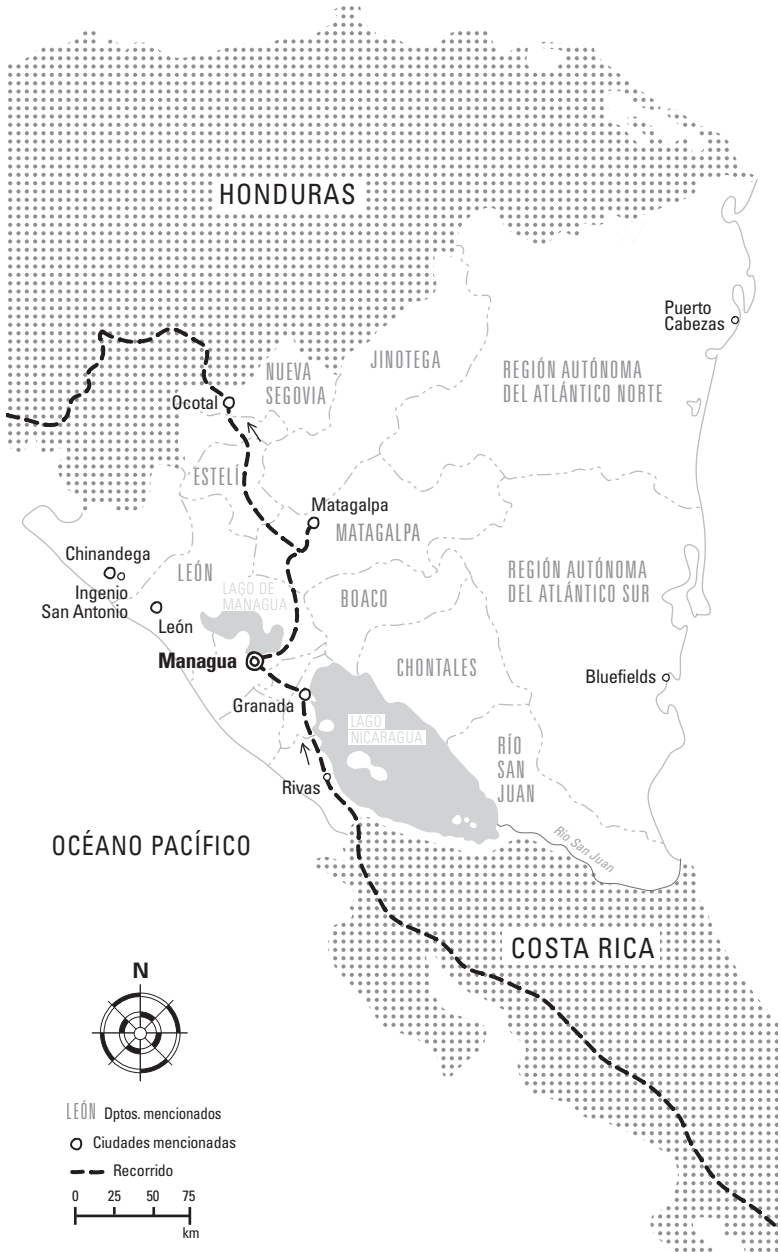
—Usted tiene que buscar descanso. Usted está loca, eso no pasó —le contestó.

Al año siguiente, en el Chocó, el general Rito Alejo del Río era cómplice del asesinato de Marino López Mena. Mientras los paramilitares jugaban al fútbol con la cabeza de este campesino, su batallón se encontraba a doscientos metros. Cuando en 2011 compareció ante la justicia por este crimen también negó que hubiera ocurrido. Pero esta vez no consiguió ascensos como en la década pasada, sino veinticinco años de prisión. Las organizaciones de derechos humanos —en el país y en el exilio— y el movimiento de víctimas habían conseguido que no pudiera seguir negándolo. «El pueblo había convertido su dolor en potencia política», condensa Gloria Cuartas.

* * *

En el golfo de Urabá desembocan varios brazos del Atrato. Río arriba se internaron los cimarrones que formaron las primeras comunidades palenqueras del Chocó. Río abajo huían hace no tanto las personas desplazadas por la *Operación Génesis*. Unos kilómetros más al norte se acaba la carretera. La Panamericana desaparece ante el tapón de Darién. Más allá es Panamá. La lancha bordea los peñascos y se adentra en un archipiélago caribeño de islas de arena fina, cocoteros y casas de madera sobre palafitos. Sus habitantes, indígenas kunas, organizados en comunidades, expulsaron a la Policía Republicana en 1925. Desde entonces viven en territorio autónomo. Lo llaman Kuna Yala.

MAR CARIBE



NICARAGUA

José, el pobre jornalero, se mecatella todito el día,
lo tiene con reumatismo el tequio de la carpintería,
María sueña que el hijo, igual que el tata, sea carpintero,
pero el cipotillo piensa «mañana quiero ser guerrillero»
(Carlos Mejía Godoy, «El Cristo de Palacagüina»)

Victorias y derrotas de la Nicaragua sandinista

DÍA 317 / 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011 / DE RIVAS A MANAGUA

Las primeras imágenes de Nicaragua parecen sacadas de los años ochenta. Desde el paso de la frontera resulta imposible encontrar un poste de electricidad o una parada de bus a salvo de la pintura roja y negra. Las banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ondean en los balcones, los mercados y las viviendas más precarias. Las caravanas de simpatizantes sandinistas aúpan la reelección del comandante y presidente de la revolución, Daniel Ortega. Cientos de vehículos, decenas de miles de personas bloquean la Panamericana durante horas. «Revolución», «El pueblo, presidente» o «Poder ciudadano» son algunos de los lemas que proliferan cuando faltan dos meses para las elecciones. Pero no son los ochenta, es septiembre de 2011.

Una mirada atenta no tardará en encontrar las siete diferencias, los detalles del paso del tiempo, tres décadas después del triunfo de la Revolución sandinista, dos décadas después de la derrota electoral del FSLN frente a Violeta Chamorro en 1990, cinco años después de la vuelta al poder del Frente, en las elecciones de 2006. El rojinegro ha sobrevivido en las banderas y pintadas, pero toda la propaganda oficial del partido hace tiempo que ha virado hacia el rosa y el amarillo, en estridentes combinaciones con símbolos de la paz y espirales.

También en el discurso se notan los años. Las referencias a la «revolución», al «cambio» y al «pueblo» siguen siendo constantes,

pero las expresiones más disonantes han sido reemplazadas por llamamientos a la «reconciliación», la «unidad», la «paz» y el «amor». Todo pasado por una luz *hippie* y religiosa. «Nicaragua cristiana, socialista y solidaria», era otro de los lemas electorales, amarillo sobre magenta, presente en cada rotonda.

Estados Unidos, cada vez más cerca

A pocos kilómetros de la frontera con Costa Rica, la Panamericana avanza hacia el noroeste bordeando la orilla del gran lago de Nicaragua. Es el segundo más grande de América Latina, más grande incluso que el Titicaca. Y es de los pocos en el mundo donde los tiburones se han adaptado al agua dulce. Los tiburones entran por el Caribe, recorren el río San Juan y llegan hasta el lago, donde apenas una franja de veinte kilómetros de tierra los separa del Pacífico.

La ruta de los tiburones dio ideas a los inversores de Estados Unidos. A mediados del siglo XIX, la fiebre del oro multiplicó el interés por Nicaragua, entonces un camino mucho más rápido y seguro hacia California. Mucho mejor que cruzar el estrecho de Magallanes o las salvajes tierras norteamericanas. Legendarias son las historias del pirata William Walker, que encabezó en 1854 la primera ocupación estadounidense de Nicaragua. En 1909, el proyecto del presidente José Santos Zelaya de construir un canal interoceánico con financiación de Alemania y Japón llevó a una nueva intervención estadounidense. La ocupación se extendió hasta 1933¹.

Pero desde 1927, los marines y el Gobierno títere nicaragüense tenían un problema. Se llamaba César Augusto Sandino. Durante seis años, el apoyo al «general de los hombres libres» fue creciendo, así como la fama de sus acciones. «La soberanía de un pueblo no se discute, sino que se defiende con las armas en la mano», decía. En 1930, Estados Unidos creó la Guardia Nacional para combatir la guerrilla. Para 1933, en plena depresión económica, los costes de una guerra que se alargaba contra las milicias de Sandino determinaron la salida de todos los marines de Nicaragua.

1. Salvo un periodo de dieciséis meses, entre agosto de 1925 y diciembre de 1926, cuando los marines estuvieron fuera de Nicaragua.

Pero quedó la Guardia Nacional. La misma que en 1934 emboscó y fusiló a Sandino. El responsable de la operación se llamaba Anastasio Somoza. En 1937, este multimillonario terrateniente, empresario y militar, se hizo con el poder del país, inaugurando una dictadura dinástica que duraría hasta 1979, cuando el FSLN consiguió vencer a la Guardia Nacional y expulsar al hijo del asesino de Sandino, Anastasio Somoza Debayle.

Ernesto Cardenal, escritor y ministro de Cultura del primer Gobierno sandinista, recordaba la emoción de aquellos momentos: «Estábamos viviendo un acontecimiento que en la historia del mundo nunca había habido antes: un Somoza había asesinado a Sandino cincuenta años antes, y ahora ese Sandino había salido de su tumba y derrocado a otro Somoza»². El 19 de julio de 1979, las banderas rojinegras tomaban Managua. «Hoy empieza la guerra contra el analfabetismo, contra la insalubridad, y contra la tristeza», decía un sandinista en una entrevista, según recuerda Cardenal.

Desde las colinas de la ciudad, Managua ofrece una imagen falsamente ideal: una especie de ciudad jardín donde unos pocos edificios altos sobresalen de las copas de los árboles. El terremoto de 1972, que provocó casi 20.000 muertos, destruyó buena parte del centro. Aún hoy gigantescos terrenos baldíos en medio de la ciudad quedan como recuerdo de aquel 23 de diciembre. Los lugares que ya no existen también quedaron grabados en la particular forma en la que los habitantes de Managua dan las direcciones: «Donde fue La Moneda, una cuadra al sur y una cuadra arriba».

En uno de esos descampados, ubicado cerca de la catedral moderna, trescientos extrabajadores del ingenio San Antonio llevan más de dos años durmiendo en un campamento improvisado, con techos de lona y plástico. Desde que empezaron a llevar la cuenta, 4.000 trabajadores de esta gran hacienda situada en el departamento de Chinandega han muerto por la misma enfermedad: insuficiencia renal crónica (IRC). Una epidemia provocada, según denuncian, por los agrotóxicos utilizados en las plantaciones de azúcar. El dueño del ingenio, Carlos Pellas, lo niega todo. Y Pellas no es un empresario

2. CARDENAL, E. (2004), *La revolución perdida: memorias III*, Trotta, Madrid, p. 211.

cualquiera, es el hombre más rico de Nicaragua. Una de las bases de su imperio es el cultivo de caña, de donde sale la materia prima para el azúcar, el ron y el bioetanol que exporta a Europa. Sus buenas relaciones con los sucesivos gobiernos, incluido el de Ortega, le han permitido consolidar su posición hegemónica.

En una larga lucha, iniciada en 1996, los extrabajadores del ingenio consiguieron que la insuficiencia renal crónica fuera catalogada como una enfermedad profesional y que 7.000 trabajadores de la caña tuvieran acceso a la Seguridad Social y a los costosos tratamientos de diálisis. Ahora reclaman en el campamento de Managua una indemnización para todos los extrabajadores y los familiares de trabajadores fallecidos por haber sido envenenados durante décadas. En 2013, Associated Press hablaba de una «enfermedad misteriosa» que había causado 24.000 muertes en todo el litoral del Pacífico centroamericano desde el año 2000. Para los extrabajadores del ingenio, que llevan más de quince años denunciando los efectos devastadores de los agrotóxicos en la salud de miles de personas, la enfermedad no resulta tan «misteriosa».

Juan Antonio Martínez Mendoza trabajó 42 años para la familia Pellas en el ingenio San Antonio, hasta que en 2005 le diagnosticaron IRC. Hace más de dos años vive en el campamento de Managua. «Estábamos viendo la cantidad de enfermos que estaban saliendo y nadie levantaba la voz para decirle a los Pellas que paren eso o que hagan algo, porque a la gente la estaban echando a la calle... A veces nos preguntan qué hacemos aquí, y nosotros decimos que aquí nos trajeron los Pellas. Hemos muerto 36 de este plantón. Los enfermos siguen saliendo. Pero no podemos perder las esperanzas... lo bueno no se consigue fácilmente, lo bueno siempre cuesta».

La revolución de las mujeres

MATAGALPA / DEPARTAMENTO DE MATAGALPA

A pesar de ser la tercera ciudad más grande de Nicaragua, Matagalpa tiene aire de pueblo campesino. Un ambiente de siesta solo alterado por los altavoces colocados en las tiendas de muebles de la avenida del

Comercio, la calle principal de la ciudad, plagada de tiendas de ropa barata y pantalones vaqueros de las maquilas. Al final de la avenida, la catedral sigue siendo el edificio más alto de esta ciudad de 200.000 habitantes. Bajo una champa, una larga fila de mujeres espera turno para ser peinada y maquillada gratuitamente por estudiantes de peluquería en una de las acciones sociales organizadas por el Gobierno. A pocos metros, tres enormes figuras de piedra en tensa posición de disparo coronan el *Monumento a los héroes y mártires de la Revolución sandinista*. El memorial fue levantado sobre el antiguo cuartel de la Guardia Nacional, destruido por una bomba rebelde en 1979.

El carácter rural de la ciudad no impide que Matagalpa sea uno de los lugares más activos del movimiento feminista en Nicaragua, con dos centros sociales gestionados por mujeres, dos edificios donde se realizan talleres, exposiciones, conciertos, consultas médicas y asambleas. Uno de ellos es el Centro Cultural Guanuca, regentado por Las Venancias. El otro es la sede del Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM), una organización que ha conseguido crear una amplia red de promotoras de salud y líderes comunitarias en las áreas más pobres del departamento.

El origen del Colectivo se remonta a la Revolución sandinista, concretamente a la segunda mitad de los ochenta. «Había todo un movimiento de transformación social y se hablaba del *hombre nuevo*... Y las mujeres decían: “Bueno, está bien lo del hombre nuevo, pero ¿y la *mujer nueva* cuándo viene?”», se ríe Bea Huber, una de sus integrantes. Para entender cómo surge este colectivo autónomo en medio de la revolución hay que remontarse unos cuantos años atrás.

El primer movimiento

En la primera mitad de siglo xx, mujeres de clase media alta ilustrada, como Josefa Toledo de Aguerri, se habían destacado en la defensa de los derechos de las mujeres, pero es recién en los años setenta cuando empezó a conformarse un movimiento como tal, «aunque todavía no se lo puede llamar feminista», comenta Patricia Orozco, periodista y activista. A partir de 1977, las mujeres se vincularon masivamente a las organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, coordinadas para acabar con el régimen de Somoza. También a las estructuras militares del Frente Sandinista.

Fue en el movimiento estudiantil donde Patricia Orozco inició su militancia en el sandinismo. «La mayoría éramos muy jóvenes, gente de trece, catorce, quince años... Con veinte años ya eras una persona adulta. Las mujeres nos metíamos directamente a la estructura del Frente, a jugar roles de organización, de seguridad, de correo, llevábamos cosas de arriba para abajo, o participábamos directamente en el enfrentamiento contra la Guardia somocista». También ocuparon puestos de alta responsabilidad, como fue el caso de las comandantes Mónica Baltodano o Dora María Téllez. Esta última fue una de las guerrilleras que lideró junto a Edén Pastora —el comandante Cero— la operación más espectacular del Frente Sandinista: la *Operación Chanchera*. El 22 de agosto de 1978, veinticinco guerrilleros disfrazados de guardias nacionales tomaron como rehenes a 3.000 personas en el mismísimo Palacio Nacional de Managua. Con esta acción, el FSLN logró la liberación de cincuenta presos sandinistas, medio millón de dólares para la organización y que los medios publicaran un comunicado de la guerrilla.

La épica de la lucha contra el somocismo está teñida de lo que Carlos Fonseca, fundador del Frente en 1961, llamaba la «mística» del militante. «Una mística de la honradez, del compromiso con el trabajo en la base y de la coherencia entre lo que decimos y hacemos», dice Dolores Jarquín, activista del colectivo Otro Mundo Es Posible. Las historias se han convertido casi en leyendas. Como la que contaba Cardenal del joven guerrillero que se había llevado de un banco tres valijas repletas de dólares y después de entregar todo el dinero al Frente solicitó sesenta córdobas para comprarse unas botas que necesitaba para seguir combatiendo. O aquella relatada por el que fuera vicepresidente sandinista Sergio Ramírez sobre el militante que después de atracar otro banco regresó a pie, todo por no utilizar dos córdobas del dinero para pagar el taxi.

En esos años, las militantes sandinistas habían creado la primera gran organización femenina: la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional. Para Patricia Orozco se trataba de un esfuerzo por aglutinar a mujeres de los barrios más pobres, de las comunidades campesinas y también a madres cuyos hijos estaban constantemente expuestos a los abusos de las fuerzas de Somoza. «La Guardia Nacional muchas veces mataba a las muchachas y a los muchachos por el mero hecho de ser jóvenes... No era un movimiento feminista,

pero sí de mujeres preocupadas por lo que le pasaba al país y a sus hijos, y eso se convirtió en un movimiento masivo».

Con el triunfo de la revolución en 1979, esta organización pasó a llamarse Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinoza (Amlae), una organización de masas encuadrada en la estructura del Frente Sandinista. Tanto a través de la Amlae como de las ramas femeninas de las distintas organizaciones partidarias, sobre todo la Juventud Sandinista, las mujeres se volcaron a la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización: 115.000 jóvenes se lanzaron a los caminos de Nicaragua y consiguieron reducir el analfabetismo desde el 50,3% a un 12,9% en unos pocos años.

A los espectaculares avances en educación y sanidad le siguieron algunas conquistas del movimiento de mujeres: la ley de divorcio, en la que se reconoce el derecho de las dos partes para romper una relación, o la equiparación de derechos de los antes llamados hijos ilegítimos. Pero los intentos de profundizar las reformas fracasaron. «Hubo iniciativas desde la organización, pero siempre la respuesta de la dirigencia del partido era “este no es el momento”», cuenta Orozco. Más aún cuando la Contra, un ejército de 15.000 combatientes financiado por Estados Unidos, comenzó a torpedear la economía del país y obligó al Gobierno a tomar medidas tan impopulares como el servicio militar obligatorio en 1983 o dedicar cerca de la mitad del presupuesto a los gastos de defensa.

«Cuando comenzó la guerra de agresión, la Amlae se transformó en una especie de reserva moral, unas madres que se enfrentaban directamente a la guerra», relata esta periodista. Memorable fue su papel en la visita del papa Juan Pablo II a Nicaragua en 1983. En la plaza 19 de Julio un amplio grupo de mujeres solicitó una y otra vez que el papa rezara una oración por sus hijos muertos en la guerra. Pero Juan Pablo II no accedió. Cánticos de «no pasarán» y «queremos la paz» interrumpieron su discurso una y otra vez. Después de pedir silencio, el pontífice llegó a gritar, ofendidísimo: «¡La primera que quiere la paz es la Iglesia!». Después de aplaudirle durante algunos instantes, los 700.000 concentrados siguieron con un clásico «po-der po-pular».

«El lugar donde las mujeres se hicieron diosas»

A medida que el conflicto con la Contra agudizaba la crisis económica, se radicalizaban las demandas de un sector del movimiento de mujeres sandinistas. «Hay dos asambleas fundamentales, una de ellas con el presidente actual [Ortega], en que la respuesta a todos estos planteamientos fue decir que el rol principal de la mujer era básicamente reponer a los caídos en la guerra», cuenta Patricia Orozco. Este sector no tardó en abandonar la organización partidaria y se volcó en la creación de una multitud de colectivos autónomos. Uno de ellos fue el Colectivo de Mujeres de Matagalpa.

Parte del colectivo provenía de un grupo de teatro llamado Cihuatlampa, que en náhuatl significa «lugar donde las mujeres se hicieron diosas». Ese grupo se había originado en una experiencia mixta de convivencia, en la que alternaban actividades agrícolas y artísticas. Los hombres de la cooperativa fueron llamados al servicio militar, donde crearon una brigada cultural. Las mujeres hicieron una obra de teatro sobre el trabajo doméstico, la violencia y el rol de las mujeres en la sociedad. Así lo recuerda Bea Huber: «Y cuando los compañeros regresaron, se pusieron furiosos, porque no les gustó que las mujeres les rompieran el estereotipo... Esa revolución ya no... Expulsaron a dos de las mujeres del grupo, a las que identificaron como “las malas”. Y las otras se solidarizaron con ellas y formaron el primer grupo de teatro de mujeres. Y seguimos con esa línea. Eso nos gustó. Pongamos en escena la vida de las mujeres, que es una vida oculta... Esa era la revolución de las mujeres». Era el año 1986.

La crisis económica y la guerra habían limitado los avances sociales de la revolución. Las elecciones de 1990 se convirtieron en un referéndum sobre la guerra. La diplomacia estadounidense se había encargado de dejarlo claro. El padre Arnaldo Zenteno, que participa en el movimiento de Comunidades Eclesiales de Base, lo explica con una anécdota: «En la plaza principal se reunió un montón de gente. Era el tiempo de la lambada, todo el mundo cantaba, bailaba... Ese día se esperaba que Daniel anunciara el cese del servicio militar obligatorio, pero no lo hizo. Mucha gente en edad de ir al servicio militar, sus madres y sus novias no iban a votar por el Frente». Esa tarde, el padre Arnaldo se encontró con una niña. Estaba oscureciendo y estaba sola. Terminó preguntándole por sus padres.

- ¿Y a quién van a votar tus papás?
Era un barrio humilde. «Será para el Frente», pensó.
—Por doña Violeta —contestó la niña.
—¿Y por qué?
—Si gana la Violeta se acaba la guerra.

La Violeta y la piñata

«Un día de luto». Así se vivió, cuenta el padre Arnaldo, aquel 25 de febrero de 1990, el día en que Violeta Chamorro ganó las elecciones presidenciales que ponían fin a diez años de revolución. Algunos exguerrilleros no lo vieron como una derrota. El comandante sandinista Luis Carrión llegó a decir que los dos mayores logros de la revolución fueron «el derrocamiento de Somoza y el reconocimiento de la derrota electoral»³. La verdadera derrota, para el escritor Ernesto Cardenal, empezaría poco después con el proceso que se conoció como «la piñata».

Para este poeta y teólogo de la liberación no cabe una lectura única de lo que ocurrió antes del traspaso del poder. La victoria de Violeta Chamorro sorprendió al FSLN. Todas las viviendas confiscadas a la oligarquía y las tierras que el Frente había distribuido entre la población estaban a nombre del Estado. La enorme mayoría de los títulos de propiedad no habían sido legalizados. Según escribe en sus memorias, el FSLN «decretó apresuradamente, antes del traspaso de Gobierno, una ley por la cual todo el que ocupaba una casa o una tierra del Estado pasaba a ser dueño de ella. Nada más justo que eso. Esa fue la repartición buena».

Sin embargo, «la piñata» tenía un reverso oscuro. El FSLN tampoco tenía legalizados bienes ni ningún tipo de renta que le permitieran desenvolverse como un partido de la oposición. «Apresuradamente se transfirieron edificios, haciendas, empresas, fábricas y toda clase de bienes del Estado a dirigentes que iban a administrarlo para el FSLN; pero se quedaron con ellos. Esa fue la repartición mala».

El Frente había abandonado el Gobierno, pero seguía manejando importantes resortes del poder. Controlaba el Ejército, los

3. CARDENAL, E. (2004), *La revolución...*, op. cit, p. 445.

sindicatos y gozaba del respaldo de los poderosos movimientos asociados al sandinismo. «No estaba en el poder, pero el Frente seguía gobernando desde abajo, con barricadas en la calle, organizados contra las políticas de ajuste de la Violeta», cuenta el padre Arnaldo. Las huelgas y las movilizaciones contra las políticas neoliberales de Violeta Chamorro y la destrucción de las conquistas de la revolución marcaron la primera mitad de la década de los noventa.

En medio de esta «efervescencia social», cuenta Patricia Orozco, «emergieron miles de organizaciones en el país, de todo tipo, y el movimiento de mujeres se multiplicó, surgían grupos y colectivos de mujeres por cualquier razón». Todos estos movimientos feministas confluyeron en 1991 en el gran Festival del 52%, llamado así para remarcar el porcentaje de mujeres en la sociedad nicaragüense, un encuentro convertido en un «grito de autonomía» frente a las iglesias, las empresas y los partidos políticos. «Creíamos que era posible la justicia social, y las mujeres estábamos decididas a batallar por la lucha propia».

Los primeros resultados de este pujante movimiento comenzaban a cristalizarse: «En este periodo, el movimiento feminista hizo un montón de propuestas que fueron adoptadas por el Estado», cuenta Bea Huber. Entre ellas, la ley contra los delitos sexuales de 1993 y la ley de violencia intrafamiliar de 1996, donde se establecían penas ejemplares y se reconocía la violencia psicológica, «algo muy avanzado», según Huber.

Otra de las viejas demandas del movimiento feminista, que las mujeres agredidas fueran atendidas por mujeres, también fue satisfecha en estos años. «Y ese es uno de los grandes logros que hemos tenido, un ejemplo para muchos sitios. Desde 1993 en Nicaragua existe la Comisaría de la Mujer y, aunque hay muchos problemas en la atención, ha tenido un impacto muy grande, porque a las mujeres les da un respaldo social», destaca Huber. Actualmente existen cuarenta oficinas de la Comisaría de la Mujer. En 2011 atendieron 33.535 denuncias de violencia machista.

Las llaves, en manos de las mujeres

Con la caída del Gobierno sandinista y la implantación progresiva del neoliberalismo, gran parte de los programas sociales fueron

cerrados. Las necesidades básicas de cientos de miles de personas quedaron desatendidas. Las conquistas de la década pasada comenzaron a perderse. Muchas de estas tareas fueron asumidas por las ONG y diversas organizaciones sociales. Entre ellas, el Colectivo de Mujeres de Matagalpa.

A finales de los ochenta, el colectivo había trabajado con las parteras tradicionales en las comunidades como parte de un programa del Gobierno sandinista. Tras la derrota electoral del FSLN, el Colectivo de Mujeres de Matagalpa lo asumió como una de sus principales tareas. «Lo primero que se miró es que las parteras son líderes en sus comunidades, líderes tradicionales, con un conocimiento y un pensamiento tradicional —comenta Bea Huber—. Muchas no sabían leer y escribir, y se empezó durante tres años un proceso de construcción colectiva, con la misma idea de Pablo Freire⁴ de que la alfabetización es un proceso de empoderamiento para las personas que participan y una reflexión sobre tu realidad, en este caso, sobre nuestra realidad como mujeres».

La formación también se extendió con la atención a las mujeres embarazadas, muchas de ellas menores de edad, y no solo en temas de salud. «Muchas de ellas no sabían cómo se habían quedado embarazadas. Si ni siquiera tenés la posibilidad de decidir frente a la otra persona con la que compartís la intimidad, ¿cómo vas a decidir en asuntos políticos? Empezamos a hablar de ese tipo de cosas y a la vez las parteras decían “yo he despertado, pero ¿y mi hija?”».

Además de las parteras y una red de promotoras de salud, formada por mujeres de las propias comunidades, el colectivo también impulsó una red de bibliotecas y una serie de iniciativas económicas para permitir la autonomía de las mujeres. «Trabajamos sobre el poder... el poder económico, también el poder simbólico. Por ejemplo, en las comunidades se construyeron casas de la mujer, un espacio comunitario, en algunas funciona la escuela, en otras un comedor, las iniciativas que quieran desarrollar, pero la llave, para hablar muy en concreto, está en manos de las mujeres. Ellas son las que deciden.

4. Paulo Freire (1921-1997) es un educador y teórico de la educación de origen brasileño. Con libros como *Pedagogía del oprimido* (Siglo XXI, México, 2005, 55^o ed. [1^a ed., 1970]) creó un ideario para otro tipo de enseñanza.

Si vos querés hacer algo ahí, tenés que ir donde la organización de las mujeres y le tienes que pedir la llave a ellas».

«Oenegización»

Los inicios del neoliberalismo en Nicaragua en los años noventa coincidieron con la edad dorada de las ONG. Según un estudio realizado en 2002 por Patricia Orozco y la activista feminista Sofía Montenegro⁵, al asumir las tareas sociales que el Estado iba abandonando, «los movimientos sociales contestatarios» comenzaron a convertirse en «empresas privadas de desarrollo». Esta «conversión en estructuras ejecutoras de proyectos, donde la cooperación impone formas de trabajo», iba a convertirse en otro obstáculo para la autonomía del movimiento feminista.

Esta deriva afectó también al Colectivo de Mujeres de Matagalpa. «Ha habido todo un efecto de oenegización y desmovilización a través de la cooperación... eso también ocurrió y no se puede negar. Si vos creás una serie de estructuras y decís “¿y ahora cómo consigo los reales...?”», señala Bea Huber en referencia a las «modas» en las líneas de cooperación que «no son marcadas por tu desarrollo, sino por lo que dice el Norte». La crisis económica iniciada en 2008 trastocó el panorama con el drástico recorte de los fondos destinados a la cooperación. Una crisis que abre la posibilidad, según apunta Bea Huber, de recuperar las dinámicas más propias de los movimientos: «La verdad es que la crisis económica nos ha venido muy bien, en el sentido de reposicionarnos muy claramente sobre qué queremos y dónde están nuestros aliados. Nuestro ideal es la solidaridad, no la cooperación».

El huracán *Mitch* en 1998, que provocó en Nicaragua 3.800 muertes y dejó sin vivienda a más de 500.000 personas, fue el punto más alto de esta edad dorada de las ONG. Entre 1990 y 2002, el 25% del PIB nicaragüense provino de la cooperación internacional. El Gobierno no solo fue acusado de pasividad ante el desastre, sino que transfirió parte del dinero de los donantes a cuentas de políticos y empresarios cercanos al presidente Arnoldo Alemán, que

5. MONTENEGRO, S., YLLESCAS, M., y OROZCO, P. (2002), *Volver al escándalo y la transgresión: por una agenda propia y autónoma*, Comité Nacional Feminista.

había llegado en 1997 al poder con el derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

No era la primera vez que pasaba. De hecho, las habilidades de Alemán para la prevaricación y el enriquecimiento personal fueron reconocidas por la organización Transparencia Internacional, que nombró a este presidente nicaragüense como el noveno más corrupto de la historia contemporánea, solo superado por maestros del desfalco como Mobutu Sese Seko, Mohammed Suharto, Ferdinand Marcos o Alberto Fujimori.

«Pacto con el diablo»

Paradoja o no, fue precisamente este plusmarquista de la corrupción quien se convirtió en el principal aliado de Daniel Ortega y el Frente Sandinista. «Pacto con el diablo», fueron las palabras que utilizó la excomandante sandinista Mónica Baltodano para definir la serie de acuerdos iniciados en los últimos años del siglo xx entre Ortega y este político neoliberal para repartirse el control de las principales instituciones del Estado y reformar las leyes que necesitaba el FSLN para regresar al poder.

A finales de 1999 y principios de 2000, el pacto Ortega-Alemán llevó a una reforma de la ley electoral: en adelante, el partido más votado podía ganar las elecciones en la primera vuelta si alcanzaba el 35% de los votos, aproximadamente la base electoral del FSLN en esos años, siempre que superase en un 5% al segundo partido. Lo que pedía el presidente liberal a cambio era, según denunció Mónica Baltodano, el fin de las huelgas y las movilizaciones en la calle: «El pacto le permitió a Alemán gobernar según su antojo. Durante su mandato no se produjo ninguna lucha social significativa, a pesar de que en ese periodo se aprobó la privatización de los servicios públicos y se produjo una dramática reducción de los derechos sociales, todo en medio de una danza de corrupción nunca vista en el país»⁶.

En 2002, llegaba a la presidencia Enrique Bolaños, del mismo partido que Alemán, pero representante del sector más conservador

6. BALTODANO, M. (2006), «Disputa por la herencia sandinista», *Le Monde Diplomatique*, noviembre de 2006, pp. 10-11.

de la élite económica. Según escribía Baltodano, las contradicciones fueron temporalmente aprovechadas por Ortega, que se alió con Bolaños para despojar a Alemán de su inmunidad parlamentaria. En 2003, la jueza sandinista Juana Méndez condenó al expresidente Alemán a veinte años de cárcel por lavado de dinero. ¿Se había roto el pacto?

Según la tendencia crítica con el *danielismo*, que se agrupó en torno al Movimiento por la Renovación del Sandinismo (MRS)⁷, de orientación socialdemócrata, solo habían cambiado las condiciones del acuerdo. En esta ocasión con una clara ventaja para Daniel Ortega. El FSLN tenía el control del poder judicial y, por lo tanto, el control sobre Alemán, que aún condenado y confinado en su propia hacienda, seguía mandando sobre buena parte de los diputados liberales. «La condena definitiva o la libertad de Alemán han sido durante años una carta de negociación de Ortega en función de sus intereses», escribía Baltodano, una de las primeras sandinistas en denunciar el pacto. De paso, Ortega fomentaba la división entre las dos corrientes del partido liberal. Las anteriores experiencias electorales lo dejaban claro: el FSLN nunca ganaría una segunda vuelta. Con los liberales divididos, el FSLN sí podía conseguir el 35% en la primera vuelta y llegar así al poder. Solo quedaba un obstáculo: la Iglesia.

«Pacto con Dios»

El desencanto con diez años de políticas neoliberales había permitido al Frente hacerse con importantes alcaldías, entre ellas la de Managua a finales de 2000. El poder parecía cada vez más cerca, pero los intentos del FSLN por llegar a la presidencia se habían topado una y otra vez con la oposición de la jerarquía eclesiástica.

7. La mayoría de los históricos del FSLN (Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez, Mónica Baltodano, Luis Carrión, Carlos Mejía Godoy, Víctor Hugo Tinoco, Dora María Téllez, entre otros) abandonaron el partido para formar el MRS. Dentro de esta formación convivieron una línea socialdemócrata o incluso «neoliberal» según sus críticos, representada por Sergio Ramírez y Edmundo Jarquín, y una tendencia más izquierdista, liderada por Mónica Baltodano.

Poco antes de las elecciones de 1996, el cardenal Obando y Bravo, calificado en los ochenta como «archienemigo de la revolución», había dado el famoso «viborazo»: durante una homilía presentó a los fieles la parábola de un parroquiano que cobija a una víbora golpeada y, cuando esta se recupera, lo muerde. Todos entendieron y el FSLN perdió las elecciones. Antes de los comicios de 2001, el cardenal Obando y Bravo volvió a hablar citando la Biblia: «Aparecerán falsos profetas que, vestidos de piel de oveja, se vuelven lobos feroces y por sus frutos los conocerán». Todos entendieron y Ortega volvió a perder las elecciones por un estrecho margen.

Al año siguiente, el 1 de octubre de 2002, el cardenal recibió una «visita de acercamiento» de Daniel Ortega y su compañera Rosario Murillo. El tema de conversación, que nunca ha trascendido, cambió radicalmente la opinión del cardenal sobre Daniel Ortega y sus aspiraciones presidenciales. Un escándalo de corrupción que afectaba en aquellos tiempos directamente al entorno del cardenal arroja algunas pistas de esta milagrosa conversión. La Comisión de Promoción Social de la Arquidiócesis de Managua había estado introduciendo de contrabando vehículos y otros bienes de lujo. El responsable de la operación era el protegido del cardenal, Roberto Rivas, hijo de la secretaria de Obando y presidente del Consejo Supremo Electoral.

Dos días después de la reunión entre Obando y Ortega, las acusaciones penales contra Rivas se diluyeron gracias a un cambio de opinión de los magistrados sandinistas, al tiempo que dejaban abierto el camino a la reelección de Rivas como presidente de este órgano del Estado, cosa que ocurrió poco después con los votos sandinistas. «¿Qué gana el FSLN con ayudar a proteger a Roberto Rivas?», se preguntaba ese mismo día un periodista de *El Nuevo Diario*.

Los resultados se vieron pronto. En 2004, el cardenal Obando y Bravo ofició una misa en el vigésimo quinto aniversario de la Revolución sandinista. Y el 5 de septiembre de 2005, un año antes de las elecciones presidenciales, en vez de hablar de víboras y falsos profetas, el cardenal fue el encargado de officiar el matrimonio religioso, retransmitido por televisión, entre Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes habían vivido veintisiete años «en pecado».

Una de las principales víctimas de este «pacto con Dios» fueron los derechos de las mujeres. En concreto, la penalización del aborto terapéutico como parte de la reforma del Código Civil, cuya trami-

tación coincidió con la campaña electoral de 2006. Era necesaria una «prueba de amor», ironizaba Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres. Y el FSLN la ofreció: sus votos para eliminar el último supuesto que no estaba penalizado en relación con el aborto, cuando la vida de la madre está en peligro. «Somos enfáticos: no al aborto, sí a la vida. Sí a las creencias religiosas, sí a la fe, sí a la búsqueda de Dios», dijo Rosario Murillo en plena campaña.

Rosita y Zoilamérica

Dos casos con nombre de mujer conmocionaron la sociedad nicaragüense de aquellos años. El primero fue el de Zoilamérica Narváez, hijastra de Daniel Ortega e hija de Rosario Murillo. En 1998, Zoilamérica denunció en una rueda de prensa y luego en los tribunales que el principal líder de la Revolución sandinista había abusado sexualmente de ella desde 1978, cuando tenía once años, hasta la fecha de la denuncia. La demanda no tardó en ser archivada por la jueza Juana Méndez, la misma del caso Alemán. Según esta magistrada, los delitos más graves descritos con detalle en las cincuenta páginas de la declaración, entre ellos repetidas violaciones, habían prescrito.

La denuncia afectó especialmente al movimiento feminista. «Cuando conocimos del caso de Zoilamérica, nunca dudamos de que fuera cierto, porque habíamos visto antes ese tipo de comportamientos —dice Patricia Orozco—. La denuncia impactó al país, el movimiento se dividió porque algunas todavía tenían la simpatía en Ortega y se negaban a creerlo. Pero nuestro principio es siempre creer a la víctima de un abuso sexual. La acompañamos, pero en el tema del abuso la víctima decide hasta dónde quiere ir. Su madre nunca le había perdonado haber hecho la denuncia pública». Era otro cabo suelto. El 8 de marzo de 2004, la madre llamó a Zoilamérica «y ahí empezó el proceso de reconciliación con la madre. La han buscado, le ofrecieron volver a integrarla a la familia», cuenta Orozco.

En 2007, Zoilamérica retiró la única denuncia que seguía prosperando, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para Patricia Orozco, detrás de la reconciliación con la madre se encuentran los propios intereses de Rosario Murillo, que se ha ido posicionando como la segunda persona con más poder en el Frente Sandinista. «La ganadora es ella, controla a la hija y al hombre», resume.

El otro caso que acaparó la atención del país fue el de Rosita, una niña de nueve años violada y embarazada en 2003. A pesar de que en esos años el aborto terapéutico todavía era legal, las presiones de la Iglesia cerraron la posibilidad de que fuera tratada en Nicaragua. El derecho de la niña a un aborto seguro que preservara su vida se convirtió en un emblema para el movimiento feminista. «La ministra de Salud dijo que no daban permiso —cuenta Orozco—. Hubo persecución, en la Iglesia se repartían hojas dominicales en contra del aborto de Rosita y en contra de nosotras, muchas con nombres y apellidos. La niña fue escondida durante mucho tiempo». Finalmente, de forma casi clandestina, un grupo de mujeres de organizaciones feministas junto con la familia acompañaron a Rosita a una clínica privada donde fue intervenida.

Las movilizaciones feministas por el caso de Rosita y contra la penalización del aborto terapéutico ayudaron a abrir el debate sobre una cuestión hasta entonces considerada tabú en el país, sostiene Orozco. En 2010, una encuesta de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales revelaba que aunque el 81% de la población nicaragüense se opone a la legalización del aborto, el 61% admite esta opción cuando la vida de la madre corre peligro.

¿Algo se perdió camino al poder?

Orlando Núñez es uno de los intelectuales más destacados del sandinismo. Y uno de los pocos de renombre que no rompieron con el partido. Este activista, identificado con la izquierda del FSLN, no comparte la narración del sector crítico del sandinismo sobre el pacto Ortega-Alemán. «En democracia, si pactas, pactas con tu enemigo», decía Núñez en una entrevista⁸. Según este analista, el «verdadero pacto» que actualmente rige es el que el FSLN firmó con Violeta Chamorro en 1990 cuando el Frente dejó el Gobierno: «Ahí aceptamos disputar el poder solamente a través de las elecciones. Y aceptamos vivir en una economía de mercado. A partir de ahí todo lo que pasa está contra nosotros. Es difícil para un partido de

8. CASTRO, S. DE (2005), «El verdadero pacto es el del '90 en el que la izquierda aceptó disputar el poder a través de las elecciones», *Rebelión.org*.

izquierdas enfrentar al sistema a través de las elecciones. ¿De dónde vas a agarrar los cinco millones de dólares que vale una campaña? Tienes que pedirselos a Gadafi o a Fidel, o a los empresarios cercanos. No se puede ser tan puro. Si lo fuéramos no hubiéramos firmado el Protocolo de Transición. Estaríamos como antes: guerra al mercado y guerra a la democracia burguesa».

Para Núñez, la crítica al pacto con Alemán y la escisión del sandinismo antes de las elecciones de 2006 tienen un trasfondo de clase: según afirmaba en la misma entrevista, muchos de los intelectuales sandinistas que engrosaron la filas del MRS provienen de sectores de una élite acomodada e ilustrada que combatió el somocismo junto al FSLN. Y ponía como ejemplo al candidato a la presidencia del MRS en 2006, Edmundo Jarquín, al que califica de «neoliberal».

En 2006, con el lema «Reconciliación y unidad nacional», el Frente inició una nueva campaña electoral. Como candidato a vicepresidente reclutó a otro viejo «archienemigo de la revolución», Jaime Morales Carazo, jefe negociador de la Contra y antiguamente uno de los principales banqueros del país.

El 5 de noviembre de 2006, Daniel Ortega recogió los frutos de un largo camino: el Frente ganaba las elecciones en la primera vuelta con el 38% de los votos. Hubo quien pensó que con el regreso del FSLN, la revolución continuaría donde se había quedado. Y algunas de las primeras medidas de Ortega podrían haber indicado que era así. Restableció la gratuidad de todos los servicios de educación y de salud, muchos privatizados parcialmente en los años del neoliberalismo. También anunció un programa para declarar Nicaragua libre de analfabetismo, algo que se consiguió en 2009.

Hambre Cero, Usura cero, Plan Techo, Patio Saludable... los planes sociales se multiplicaron gracias a la cooperación de Venezuela a través de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). En 2010, el petróleo barato suministrado por Caracas significó una inyección de 500 millones de dólares para el Gobierno de Ortega, según datos del Banco Central de Nicaragua⁹.

9. Esta ayuda se articula en una red de empresas que comercializa el petróleo que suministra Venezuela. Según el economista Adolfo Acevedo, estos fondos no pasan por el presupuesto del Estado, ni son fiscalizados por ningún organismo público.

El más ambicioso de los planes, el Programa Hambre Cero, planeaba sacar de la pobreza en cinco años a 75.000 familias mediante la entrega de un bono productivo que incluye animales de granja, semillas, plantas frutales y un biodigestor para generar gas metano.

Las cifras hablan de una reducción lenta pero sostenida de los niveles de pobreza. Según el Banco Mundial, en 2005 el 48% de la población vivía bajo el umbral de la pobreza. En 2009, la pobreza había caído al 42%. Aun así, Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina.

El padre Arnaldo Zenteno también identifica avances con el Gobierno del FSLN: los 136.000 títulos de propiedad entregados a campesinos y habitantes pobres de las ciudades, la ampliación de la red de agua potable o la Operación Milagro, que ha permitido atender los problemas de visión de 100.000 nicaragüenses con apoyo de Cuba. Sin embargo, en política económica, señala, solo puede hablarse de continuidad. «El Frente ha hecho una alianza fuerte con el sector empresarial. Hoy, los grandes empresarios de la patronal no atacan al Frente, hay una alianza mutua. Claro, ¿a cambio de qué? El Frente no ha hecho una reforma tributaria a fondo, los grandes empresarios, como Carlos Pellas, tienen grandes exenciones y exoneraciones. Nicaragua hace cosas con ayuda de Venezuela, pero podría hacer mucho más si subiera los impuestos». Una idea que comparte Dolores Jarquín, que participa activamente en los movimientos de base desde Ocotol, un pequeño pueblo cerca de la frontera con Honduras: «Cuando este Gobierno dice que uno de sus logros más importantes en materia económica es haber sido avalados por el FMI, yo me pregunto: ¿el FMI es de izquierdas, es revolucionario?».

Esta activista intenta escapar de los análisis simplistas al hacer un balance sobre la gestión del FSLN: «Es positivo que la gente esté accediendo a vivienda social de bajo costo y en mejores condiciones, porque mejora la calidad de vida de la gente. Es positivo garantizar la red de distribución de alimentos subsidiados a bajo costo. Eso funciona, eso ayuda a la gente. El mismo hecho de haber quitado una tarifa para que pudieras tener a tus hijos en los colegios, también es positivo». Sin embargo, señala la otra cara de las políticas sociales del FSLN: el «clientelismo político» y la ausencia de cambios estructurales en un modelo heredado tras diecisiete años de política neoliberal.

«Una de las cuestiones que podemos ver en las comunidades es el tema de los monocultivos y de los agrotóxicos, de la insuficiencia renal crónica. Este Gobierno se comprometió a solucionar ese problema, pero no vemos una solución concreta. Al contrario. Entonces llegan a la comunidad con un lote de Plan Techo¹⁰ y le resolvés el problema a la gente, pero a la par le estás aprobando toda una política bioenergética para que en ese lugar se pueda sembrar palma africana, y el nivel de pobreza de la gente impide que puedan decir algo, porque si dicen algo no son beneficiados por el Plan Techo. La misma pobreza tiene a la gente en un nivel de sometimiento que cada día profundiza aún más los niveles de miseria». Al mismo tiempo que el Gobierno reparte semillas y crédito barato, el TLC con Estados Unidos permite que los productos agropecuarios subsidiados del Norte sigan entrando en Nicaragua. En 2012, Nicaragua firmaba el acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, un acuerdo que el mismo Ortega había calificado dos años atrás como «una nueva forma de colonialismo».

Dolores Jarquín participó en el movimiento de oposición a la multinacional española Unión Fenosa, que monopoliza la distribución de energía en el país. Se trataba de un movimiento impulsado desde las comunidades más humildes que exigía la expulsión de esta empresa por los altos precios y los cortes de luz a las familias sin recursos. La fuerza de la protesta llevó al FSLN a asumir las demandas de los afectados. De hecho, en la misma cumbre de 2007 en la que Juan Carlos I soltó su famoso «¿Por qué no te callas?», las críticas de Ortega a Unión Fenosa llevaron al monarca a marcharse en medio de la cumbre. Sin embargo, señala Jarquín, Unión Fenosa no solo ha continuado haciendo negocios en Nicaragua, sino que «está mejor que nunca».

Otro ejemplo es el nuevo plan que resucita el proyecto de canal interoceánico a través del lago de Nicaragua. En junio de 2013, el Gobierno entregó a una firma china la concesión para la construcción del canal y los futuros beneficios por cincuenta años, prorrogada

10. El Plan Techo es un programa del Gobierno del FSLN, financiado con fondos del ALBA, que ha entregado más de un millón de láminas de zinc a los sectores más humildes del país.

bles por otros cincuenta. Un proyecto, según señalan más de veinte recursos interpuestos, que acarrea inmensos daños ambientales, la violación de los derechos de los pueblos indígenas de la costa del Caribe y una pérdida de soberanía sobre el territorio.

«La gente se desmoviliza cuando le hablan de “revolución”, cree que no hay que luchar contra la privatización de la energía, aunque la energía sigue privatizada. Te desmovilizan a la gente luchando contra la privatización del agua, te implementan los mismos megaproyectos, como las represas, y no hay resistencias, porque te lo está haciendo un Gobierno “revolucionario”. Es la misma represa que estaban haciendo los anteriores gobiernos, lo único que han cambiado son los socios. La lógica es la misma, es extractivista, desplazadora, violadora de derechos, pero con un discurso revolucionario, de avance y desarrollo. Ese sandinista coherente que dice lo que hace es el sandinista ausente ahorita. Pero creo que estamos a tiempo todavía, porque la gente que está abajo, en el partido, está soñando con ese cambio».

«Mujerismo»

Muchos de los planes sociales del Frente, como el Programa Hambre Cero o Usura Cero, están dirigidos a las mujeres, a quienes el Gobierno entrega créditos, semillas o animales de granja. ¿Feminismo? Bea Huber no lo cree así. Utiliza otro término para describir estos programas: *mujerismo*.

«Son proyectos de beneficencia, no de empoderamiento, no intentan generar organización autónoma. Están basados en regalos, yo te regalo y vos me tenés que agradecer, por lo tanto estás en deuda conmigo. Refuerzan una relación de poder de una forma muy perversa, muy sutil. Sí se tiene en cuenta a las mujeres, pero no se pretende cambiar las relaciones de poder», explica. Para esta activista, estos programas están dirigidos a las mujeres porque el Gobierno considera que esa es la mejor forma de que la ayuda llegue a las familias y, no menos importante, que sea devuelta, con la carga de trabajo adicional en los hombros de las mujeres.

Ante la pregunta de si se han producido cambios estructurales con el Gobierno sandinista, Bea Huber se muestra tajante: «El único cambio estructural que se está dando es la alianza con la Iglesia. Si

aquí la religión no fuera católica sino islámica, el resto del mundo hubiera pegado un brinco y hablaría de fundamentalismo».

El otro gran cambio, advierte Bea Huber, se ha producido en las vías de participación. Desde la llegada del Frente, la participación en las comunidades y barrios se ha canalizado a través de los consejos de poder ciudadano (CPC), creados en 2007 con la promesa de «devolver el poder al pueblo». Dolores Jarquín señala las limitaciones de estas estructuras: «En los barrios la gente se motiva a participar. Pero es ese tipo de participación... De estar en el CPC porque me van a dar diez láminas de zinc, para beneficiarse de una beca, pero a la vez se limita la participación de otros movimientos que son autónomos. Los CPC son una expresión válida de participación: alguien que no participa en una organización o en un movimiento participa en el CPC y tiene un espacio. Pero no puedo aceptar que sea la única instancia. A los CPC les llega la orientación del partido. Si vas a opinar, ahí no tenés espacio».

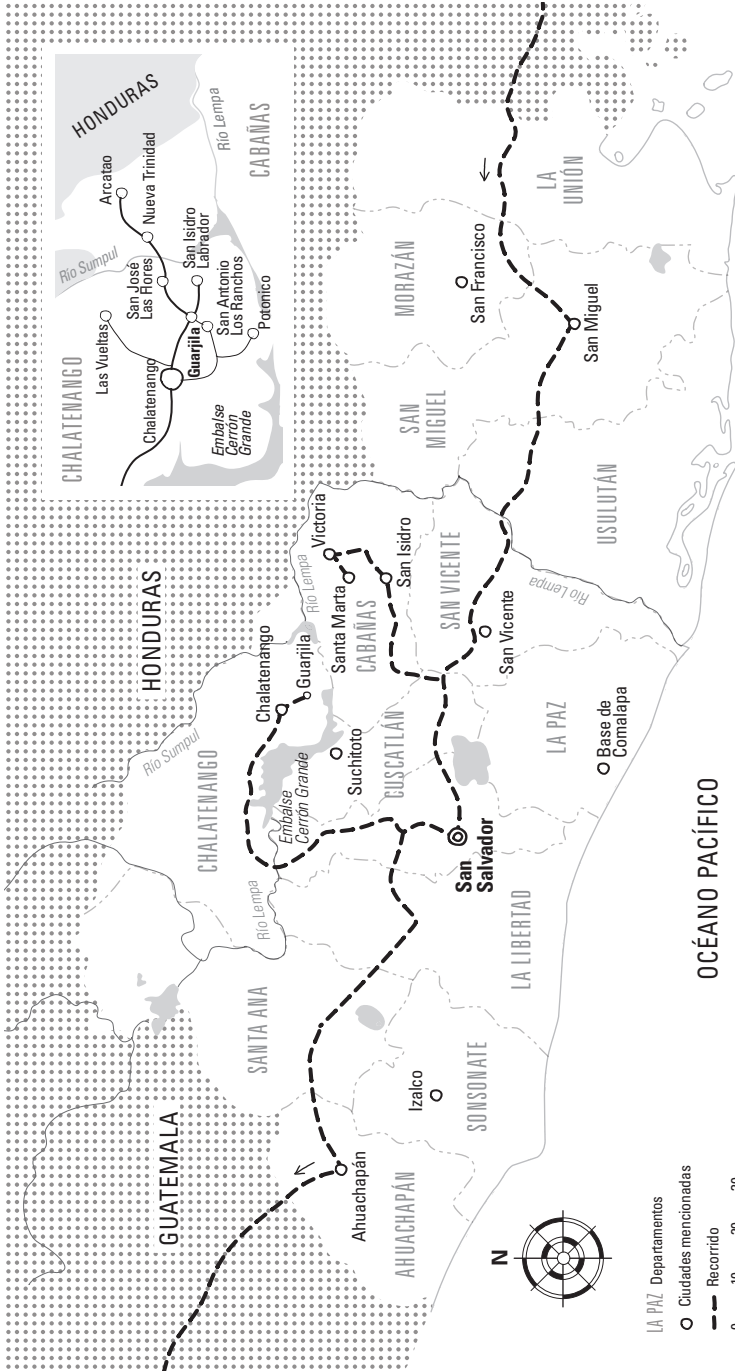
De todas formas, los CPC no son tan fáciles de controlar. En las comunidades en las que trabaja el Colectivo de Mujeres, muchas de las líderes reconocidas por la comunidad, la «gente que se mueve», se han integrado en estas estructuras, cuenta Bea Huber. «Les quieren condicionar, les dicen: “O estás aquí o estás con el colectivo”. Pero como las mujeres están plantadas, ellas responden: “Tengo derecho a organizarme con quien quiero”. Es impresionante cómo se paran en esa soledad de la comunidad, y reclaman que las mujeres tienen derechos, enfrentándose a situaciones de exclusión».

Esta activista confronta la «beneficencia» del Gobierno, con la forma de trabajar del colectivo: «Intentamos construir un empoderamiento desde la subjetividad, preguntar quién soy, qué relaciones establezco, no solamente con los hombres, como género, sino también con los hijos... Hay una relación de poder muy marcada aquí, que se refleja en una educación autoritaria, violenta, también una violencia hacia la tierra... Sola no vas a hacer nada, tienes que estar en un colectivo de mujeres, buscar un grupo donde tu sentir, donde tu pensamiento, se pueda articular, y por eso la idea de construir una organización comunitaria de mujeres». Una organización donde las mujeres tengan la llave.

Pese a la «oenegización» y a los reveses recibidos tras el pacto con la Iglesia, el movimiento de mujeres sigue siendo uno de los más fuertes de Nicaragua. «El movimiento feminista en cada sitio tiene un carácter, aquí se conoce porque es muy peleón», dice Bea Huber. Mónica Baltodano insistía en la misma idea: «Uno de los logros de la Revolución sandinista fue dar herramientas a las mujeres de todos los estratos para sentirse actores de las transformaciones. De eso queda bastante, organizaciones que siguen luchando por la equidad, por la inclusión social, y tal vez por eso son las mujeres uno de los sectores que más se ha resistido a la decadencia del actual Frente Sandinista¹¹».

¿Qué queda, entonces, de la herencia sandinista de los setenta y ochenta?, se preguntaba en la misma entrevista la excomandante Baltodano. Y se respondía: «Pues queda un pueblo ahí, con una cierta consciencia de que puede cambiar las cosas. En el sustrato de su consciencia está aquello que nos enseñó Sandino».

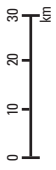
11. PRENDES, D. (2012), «Es necesario que la educación construya personas capaces de ser actores de la propia transformación», *Diagonal*, noviembre de 2012.



LA PAZ Departamentos

○ Ciudades mencionadas

--- Recorrido



OCEANO PACÍFICO

EL SALVADOR

Los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera, [...] los que apenas pudieron regresar, los que tuvieron un poco más de suerte, los eternos indocumentados, los hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo, los primeros en sacar el cuchillo, los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos.
(Roque Dalton, «Poema de amor»)

La campana que salvó a Guarjila

DÍA 337 / 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 / GUARJILA / CHALATENANGO

Guarjila es una pequeña comunidad en el departamento de Chalatenango, cerca de la frontera con Honduras. Sus 1.200 habitantes comparten con otras tantas comunidades del norte del país, como Santa Marta, en Cabañas, un pasado común. Antes de la guerra, inspirados por la teología de la liberación, intentaron construir «el cielo en la tierra». Durante la guerra y después del exilio y los acuerdos de paz siguieron intentándolo. Para ello, además de enfrentarse a la extrema derecha en el Gobierno, las comunidades tuvieron que detener a mediados de la década pasada a las multinacionales mineras que pretendían explotar sus territorios sin su consentimiento.

A finales de 2005, los vecinos de Guarjila habían detectado una presencia poco habitual en los cerros cercanos. Ingenieros y hombres de chaqueta mostraban un interés fuera de lo común por las nacientes de agua y las colinas boscosas de los alrededores. Trabajaban para la minera canadiense Martinique. En Radio Sumpul, la radio comunitaria de Guarjila, ya los conocían. Días antes, un empresario les había ofrecido 2.000 dólares en publicidad. Era más de lo que ingresaban en todo un año, cuenta Ana Dubón, una de las responsables de esta emisora. La oferta fue rechazada. Pero el empresario no tardó en volver. Esta vez con refuerzos.

Las pupusas son el plato nacional de El Salvador, unas tortillas gruesas de harina de maíz amasadas a mano, rellenas de quesillo, frijol, chicharrón, carne o marisco, entre un sinfín de ingredientes y combinaciones posibles. Todo bien aderezado de salsa de tomate, chile y encurtido de repollo. No es solo un plato típico. En El Salvador las pupuserías están en todas partes. El martes 28 de febrero de 2006, Ana Dubón comía pupusas en el único comedor de Guarjila cuando un vecino entró corriendo.

—¡Acaban de hablar de Chalate¹, dicen que ya vienen los soldados y que van allá a hacer las champas², van a empezar a explotar el cerro!

La campana del pueblo empezó a sonar. Y no paraba. No estaba en la iglesia, porque no había iglesia en el pueblo, sino en medio de la plaza principal, colgada de la rama de un árbol. La cadencia, el volumen, la insistencia de una campana pueden decir mucho. La forma en la que sonaba ese día no dejaba lugar a dudas. El pueblo estaba en peligro. Toda la población, en el núcleo urbano y en los caseríos de los alrededores, sabía perfectamente lo que ese sonido significaba y lo que tenía que hacer: dejarlo todo y congregarse en la rotonda de la calle principal. Desde Radio Sumpul se extendía el llamamiento y una consigna: la empresa minera no debía pasar. Unos meses antes, un grupo de vecinos de Guarjila, San José Las Flores y otras poblaciones de la zona había viajado al Valle de Siria, en Honduras, para ver con sus propios ojos los efectos de la megaminería en las comunidades y en el medio ambiente. No les gustó lo que vieron.

La población colocó grandes rocas en el camino. Cuando las camionetas y los soldados llegaron a Guarjila, todo el pueblo les impedía el paso. Los vecinos empezaron a tirar piedras a la comitiva. Las primeras bajas: un parabrisas y un foco. Cuando el empresario canadiense se bajó del coche, Ana Dubón lo reconoció de inmediato.

—Un momento... nosotros no venimos a dañar, nosotros venimos a iniciar un proceso de exploración, aquí tenemos un permiso del Estado —dijo el empresario canadiense poniendo las manos de por medio.

1. Chalatenango, capital del departamento de Chalatenango.

2. Tiendas de campaña, en este caso para el campamento minero.

—A nosotros no nos importa el Estado porque nosotros no le importamos al Estado. Aquí ustedes no pasan y punto —le respondieron desde el otro lado de la barricada.

Del otro lado de la barricada estaba todo Guarjila. También personas llegadas de las comunidades vecinas. El abuelo de Ana Dubón se encaró con los soldados.

—En la guerra hemos andado, ustedes tienen pistolas, pero miren lo que nosotros tenemos —dijo el abuelo señalando a la gente, a los niños que empezaban a tumbarse sobre el camino—. Y de aquí no pasan.

Esa fue la última vez que vieron al empresario canadiense. La comitiva dio media vuelta y volvió por donde había venido. Y nunca más se volvió a hablar de megaminería en Guarjila. En las comunidades vecinas, en San José Las Flores, Arcatao, Las Vueltas, Nueva Trinidad, San Antonio Los Ranchos, asambleas populares decidieron que llegarían «hasta las últimas consecuencias» si la empresa volvía.

Pero, un momento... ¿no había sido todo demasiado fácil? A lo largo del continente, decenas de comunidades necesitaron años de lucha para conseguir lo que Guarjila había logrado en unas pocas horas. Realmente se trata de una historia mucho más larga. Para entenderla solo se puede hacer una cosa: empezar desde el principio.

Cuando leer la Biblia es subversivo

En Guarjila a nadie le interesa demasiado hablar sobre aquel día en el que echaron a la minera. Unos cuantos comentarios de pasada y la conversación siempre termina en los años de la guerra. Las personas que se fueron hablan de los siete años de exilio en el campo de refugiados de Mesa Grande, en Honduras. Las que se quedaron, de las historias de la guerrilla, el hambre, los operativos en el monte y la toma de los cuarteles. Al fin y al cabo, después de lo vivido por Audelio Tobar, Teresa de Jesús, Manuel Beltrán o María Jesús Menjíbar, ¿a quién le puede interesar aquella insulsa historia de la mina?

Audelio Tobar nació en Corral Falso, un cantón cercano a Guarjila. Tenía que caminar todos los días una hora y media para ir a la escuela. Estudió hasta sexto grado. Empezó a trabajar muy joven, a finales de los sesenta. En toda la zona, solo había un terrateniente, el

dueño de toda la tierra. «Nosotros los campesinos trabajábamos en el pedacito de tierra que él nos quería alquilar. Y teníamos que trabajar para él, cercarle todos los potreros, sin pagarnos ni un centavo». Su tío repetía una y otra vez que no podrían soportar esa situación durante mucho tiempo. «El maíz mejorcito que salía iba para el patrón. Nos quedábamos con muy poco. La situación era terrible», cuenta.

En 1973 algo cambió. Cuatro sacerdotes de la teología de la liberación llegaron al cantón. Su primera actividad no podría parecer más inofensiva: un cursillo de iniciación cristiana de siete días. Pero todo dependía de las preguntas formuladas. O de los pasajes de la Biblia elegidos. «Después de los cursos bíblicos, se despertó la conciencia en nosotros de que como cristianos comprometidos teníamos que transformar esta sociedad, cambiar esta situación de injusticia, de explotación, de miseria... Antes en la iglesia nos decían que cuanto más hambre pasábamos más cerca estábamos de Dios. Y eso era mentira». Ya en esos años, Audelio comenzaba a componer canciones y a tocarlas con su guitarra y con su mano izquierda de seis dedos.

Les voy a cantar un corrido
para contar las grandes injusticias
que pasan en mi cantón,
dirán que sí, sí, sí,
dirán que no, no, no,
a los ricos sí les viene muy floja la situación
comen queso todo el año y venden el requesón.

Se reunían todos los meses con uno de los sacerdotes en un rancho para organizar a los campesinos en comunidades cristianas de base y en sindicatos. «Mira qué bonito, ahí hacíamos como la evaluación, presentábamos sociogramas, no sentíamos la noche... Y cuando ya vimos que las comunidades podían dar un pasito más, dijimos: ¿por qué no salir de esta miseria?». En 1974 centenares de campesinos ocuparon 120 manzanas en la playa del río Lempa, el más grande de El Salvador. Ciento veinticinco familias del cantón comenzaron a cultivar tomates, repollos, sandías, melones, frijoles, en las tierras ocupadas para poder alimentar a sus hijos.

Las comunidades de base fueron el origen de diversas organizaciones de campesinos, entre ellas la Unión de Trabajadores del Campo y la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños

(Feccas). «Algunos dicen “el pueblo unido jamás será vencido”, pero es mentira, unidas viven las vacas en los potreros y nunca pasan de ahí. Se juntan para dormir. La cuestión es diferente, el pueblo unido y combativo es la cosa, pero solo unido no».

Las lecturas bíblicas resultaron no ser tan inofensivas. Por lo menos en El Salvador de la década de los setenta. Una noche de 1975, después de una lectura bíblica en el pueblo de Potonico, uno de los participantes del curso fue detenido. Según Audelio, entre los ricos de la zona no gustó la elección del versículo, aquel que habla de los «fariseos hipócritas». «No viera los gritos que le sacaba la Guardia Nacional. Desapareció el señor ese, lo mataron, no lo volvimos a ver», cuenta. Esa noche, Audelio no durmió en su casa. Y no volvería a hacerlo de forma regular en muchos años. Los escuadrones de la muerte habían empezado a actuar. Diversas versiones de la misma historia se repetían a lo largo del país.

Tierra arrasada

Aunque cuatro de las cinco organizaciones guerrilleras que más tarde se unirían en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ya existían desde principios de los setenta, apenas se veían «fusilitos» por la zona, relata Audelio. «Éramos comunidades bien rojas, de verdad. A medida que hacíamos actividades, mítines en otras comunidades, los soldados se fueron dando cuenta. Entonces el Ejército empezó a asediarnos, a perseguirnos», dice Audelio.

El asesinato de monseñor Romero en 1980 convirtió el conflicto social en una guerra civil. El magnicidio había sido ordenado por Roberto d'Aubuisson, egresado de la Escuela de las Américas, fundador de los escuadrones de la muerte y del partido ultraderechista Arena³. Óscar Arnulfo Romero, como arzobispo de San Salvador, se había ganado la enemistad de los terratenientes cafetaleros y del Ejército con sus homilías. «Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial,

3. La Alianza Republicana Nacionalista (Arena) fue fundada en 1980. En 1989 sustituyó al Partido Constitucionalista Nacional (PCN) como representante de las élites económicas del país. Gobernó veinte años seguidos hasta que en las elecciones de 2009 el FMLN consiguió desbancarlo.

a los hombres del Ejército. Y en concreto, a las bases de la Guardia Nacional, de la Policía, de los cuarteles... Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos», había dicho monseñor Romero en uno de sus discursos más célebres.

Su asesinato, un disparo en el corazón en mitad de una misa, lo cambió todo. «Antes de que muriera monseñor Romero, no habían matado a ninguna persona de Corral Falso —dice Audelio—. Solo nos amenazaban, les decían a las mujeres: “Si tu marido luego no aparece por ahí, a vos te voy a matar”... Después, cuando murió monseñor Romero, ya hasta tres, cuatro o cinco días pasaban liando el cantón con un montón de soldados».

—Se murió el viejo que las defendía a ustedes, viejas putas —decían los soldados, recuerda Audelio.

Para Audelio, unirse a la guerrilla no fue una opción. No tenía otra salida. «Ya no aguantábamos en las comunidades, mucha gente murió entonces... En octubre de 1980 todos los campesinos organizados dejamos el cantón completamente, con todo lo que había, maíz, maicillo, frijoles, los tuncos⁴... con todo».

El Ejército había cambiado de estrategia. Ya no se trataba de asesinatos selectivos, sino de una política de tierra arrasada inspirada en la máxima de la contrainsurgencia: «Quitarle el agua al pez». El pez era la guerrilla. El agua, la población civil. En la masacre de El Mozote, en 1981, el batallón Atlacatl asesinó a más de mil civiles. Macabro récord: la mayor masacre cometida en la historia reciente de América Latina se realizó en el país más pequeño del continente.

Mano blanca, mano negra

Teresa de Jesús Serrano es otra de las vecinas de Guarjila, aunque no nació allí, sino en la comunidad cercana de San José Las Flores. Desde pequeña había sabido lo que era el compromiso social. «Mi papá era obrero de tejas y ladrillos, y estaba organizado de toda la vida. Escuchaba mucho la radio Habana Cuba, los discursos de Fidel. Vivía enamorado de la situación que se vivía allí». El éxito de la Revolución cubana, en 1959, había despertado esperanzas de

4. Cerdos.

cambio en amplios sectores de la población latinoamericana. De la misma forma que lo haría en 1979 la caída de Somoza en Nicaragua y el triunfo de la Revolución sandinista.

Con quince años, Teresa convenció a su padre de que la dejara ir al corte de café, como hacían todos los años sus hermanos, sus primos y sus tíos. Quería ver con sus ojos cómo era el trabajo de los jornaleros en las grandes haciendas. «Al final me dejó ir con unos primos. Cuando llegamos, no había nada que comer, no había agua, ni sitio para dormir, solo una tortilla nos daban a la mañana. Ya en la primera semana yo estaba bien enferma. Estaba tan enferma que no me podía levantar. Nunca volví a pedir que me dejaran ir a una finca».

Desde entonces empezó a participar en la Unión de Trabajadores del Campo. Trabajos de organización, luchas reivindicativas en los cafetales, formación para primeros auxilios... eran el tipo de tareas que realizaba en el sindicato. A finales de los setenta las amenazas de los grupos paramilitares, muchos de ellos entrenados directamente por Estados Unidos, se hicieron cada vez más insistentes.

Dentro de esta estrategia, unos 80.000 «orejas» en todo el país tenían la misión de señalar a los objetivos. A veces eran vecinos, cuenta Teresa. Otras veces venían de otros cantones. La mano blanca y la mano negra indicaban el tiempo de vida que le quedaba al amenazado. Si al amanecer aparecía una mano pintada de negro, relata mientras apoya su mano bien abierta contra la pared de cemento, significaba que le quedaba un día de vida. Al día siguiente estaría muerto.

«Eso lo descubrimos porque siempre pasaba igual, cada vez que se descubría una mano negra pintada, esa era la última noche que vivía... Había gente que, no más levantarse, miraba, agarraba sus cosas y se iba... A los que se quedaron, las siguientes noches los mataban. Y cuando amanecía la mano blanca, había más tiempo de vida».

En 1980, Teresa tuvo que abandonar su hogar junto con su familia. No estaban todos. Los escuadrones ya habían matado a dos de sus siete hermanos. «Tuvimos que dejar los animales, los graneros, todo se quedó... alguien nos avisó de que iba a pasar un operativo del Ejército».

Salieron por la noche. Poco tiempo después supieron que su casa había sido incendiada por el batallón. Sus padres y su hermano

menor se refugiaron al igual que 12.000 salvadoreños y la mayoría de la población actual de Guarjila en el campamento de Mesa Grande, en Honduras. Para Teresa y sus hermanos quedaban dos opciones. Una era agruparse alrededor del Ejército y convertirse en colaboradores. Eligieron la otra opción: ingresar en la guerrilla. Teresa tenía diecinueve años.

En el monte

Lo primero era ubicar un lugar que tuviera agua cerca. Cuando a los quince días las pisadas empezaban a secar el pasto y las huellas se convertían en evidentes, cambiaban la ubicación del campamento. Hacían sus necesidades en hoyos cavados en la tierra, que luego rellenaban aunque, según reconoce Teresa, «algo de trampa siempre quedaba». Dispersaban el humo de la cocina con un sistema de canales cubiertos con piedras y monte. Al dejar el campamento, un grupo se encargaba de borrar todos los restos. El abastecimiento de comida no era tarea sencilla. En los primeros meses eran sus mismas familias las que proveían. Pero los grandes operativos del Ejército pusieron las cosas muy difíciles. El otro gran problema era la falta de armas. Al principio, en el campamento de Teresa apenas tenían seis fusiles.

«Lo primero que hacíamos era ir donde los orejones y quitarles las armas, para que no siguieran matando a los compas». Ante la falta de armamento, la otra opción fue la fabricación de bombas caseras. Esa fue su primera tarea, confiesa Teresa bajando la voz. Un tubo de metal, un paquete de cartón con alambres y una batería eran la base de estas rudimentarias granadas de contacto. «A veces morían muchos compas porque se resbalaban y se caían con las bombas», recuerda.

La unificación de las cinco guerrillas existentes en el país en el FMLN y las demostraciones de fuerza del movimiento social en las principales ciudades llevaron a lanzar en 1981 la primera gran ofensiva contra el Ejército. Pero fracasó. «La inexperiencia nos llevó a pensar que uno se podía enfrentar con un gran monstruo armado. Y no era cuestión solo de bulla y discursos, era una cuestión de equilibrio de armas, de fuerza... nosotros prácticamente solo teníamos armamento casero». No solo se enfrentaban a las Fuerzas Armadas de El Salvador. Se calcula que Estados Unidos transfirió al Gobierno salvadoreño dos millones de dólares por día en los doce años de conflicto armado.

Las grandes ofensivas del Ejército contra la guerrilla y la población civil se hicieron habituales a partir de 1981. Entre operativo y operativo, Teresa tuvo su primer hijo. «Estando en la guerra me enamoré y salí embarazada», cuenta. Pero el padre no llegó a ver a su hijo. Murió al quinto mes de embarazo, en marzo de 1982, en un ataque para conseguir armas. El embarazo la obligó a quedarse en el campamento. Primero se dedicó a organizar tareas de formación política. Al octavo mes empezó a coordinar un taller de costura para confeccionar los uniformes de la guerrilla.

—La suerte va a ser suya, ya va a ver que cuando nazca el bebé no va a haber operativo —le decía un compañero.

Pero Teresa no tuvo esa suerte. En el octavo mes de embarazo entraron en Chalatenango todos los batallones, apoyados por la cuarta brigada. «Fue terrible eso. Anduvimos quince días por todos lados guindeando», narra Teresa con la voz temblorosa. En la jerga del conflicto, *guindear* significa huir del Ejército de forma organizada.

«Cuando estábamos en las faldas del cerro, venía esa avioneta que tiene ese sonido tan horrible, y se me ponía bien duro el estómago, y yo bajaba por todo un callejón para poder protegernos. En esa temporada no teníamos nada que comer». No dejaba de llover. El Ejército los tenía rodeados. Un contingente de masas, los civiles que buscaban la protección de la guerrilla, guindeaba con los guerrilleros.

—Estamos acorralados. Vamos a intentar salir. Recojan sus cosas. No se detengan, oigan lo que oigan no se detengan, porque nosotros o salimos de este cerco militar o nos aplastan a todos como ranas —intentaba hacerse oír uno de los cargos de la columna guerrillera.

Para huir del operativo había que subir una colina. «Y me acuerdo que empezábamos toda la gente a subir ese cerro. Lo terrible fue que cuando estábamos casi por llegar empezaron a venir los helicópteros bien bajito y sentíamos que ya nos levantaban. El cansancio era horrible. Cuando llegamos a la parte más alta, para bajar otra vez, para salir por esos cerros, se sentía la balacera que cruzaba, que cruzaba y no nos caía, y entonces, cabal, al otro lado había zanjonés, canales, más sitios donde cubrirse, pero fue horrible... nunca hubo un operativo como ese antes. Un hombre se quedó tendido sobre una piedra por el cansancio. Y más abajo había una bebecita como de un mes, estaba abajito de un palo, de una plantita. Tuve el reflejo de recogerla, pero me dije: “¿Cómo voy a recoger a un niño

si tengo el mío?”. Entonces me dolió en el alma dejarla allí, pero si me la llevaba podía perder al mío, y la dejé... ¡Qué feo se siente! Una enfermera se la terminó llevando, hasta que le encontraron a la mamá y se la dieron, aunque la había dejado botada. Eso fue la última guinda del embarazo».

Consiguieron superar el cerco. Habían caminado durante días, bebiendo agua en cualquier charco. Teresa enfermó. Disentería con sangre. Pero el descanso fue suficiente para curarse. Al mes nació su hijo Javier. Y durante tres meses no hubo ni un solo operativo. Y al tercer mes todo volvió a empezar. Escondidos en el monte, Teresa descubrió las complicaciones de cargar con un niño recién nacido mientras huía del Ejército.

«A un señor que vive ahora en Arcatao se le murió su niña en ese operativo, y también a una prima mía se le murió su niña, porque les tapaban la boca... Yo misma le tapaba la boca al mío para que no llorara, pero luego se la destapaba, solo para que no hiciera tanta bulla. Pero una vez ya estaba pataleando, hasta yo vi que se estaba poniendo morado... Después de eso, no volví a hacerlo». En la última noche del operativo terminaron durmiendo, sin saberlo, a pocos metros de uno de los batallones del Ejército. Teresa estaba tan cansada que no se enteró de nada.

—Su niño ha llorado toda la noche y viera cómo tiraban balas hacia ese lugar. Y usted dormida, nosotros le hablábamos y no se despertaba —le contaron sus compañeros.

«Nos fuimos para otro lado y nos encontramos con otros compañeros perdidos. Muchos habían perdido a sus niños —Teresa suspira y vuelve a llorar—. No había nada que comer. A veces cortaba algunas hojas de albahaca y las ponía a cocer y esa era la sopa que comíamos».

En esos tiempos, Teresa iba a cumplir veintidós años. Esa cifra tenía un especial significado para la familia. Era la edad que tenían todos sus hermanos cuando murieron a manos del Ejército.

—Si a mí no me matan este año, yo voy a vivir para dar guerra después de la guerra —le decía Teresa a sus compañeras—. Ya van a ver.

Llegó diciembre, y diciembre pasó.

—Y bueno... ya no me muero —dijo entonces Teresa.

Historias de la Radio Venceremos

Solo en los peores momentos, entre operativos del Ejército, Teresa y sus compañeros dejaron de oír las noticias de la guerra en la voz de Carlos Henríquez Consalvi, alias *Santiago*, retransmitidas en Radio Venceremos, una de las dos emisoras del FMLN. El 24 de diciembre de 1980, nueve meses después del asesinato de monseñor Romero, Santiago había entrado en El Salvador. Venía de Nicaragua, donde había participado en la Revolución sandinista. Su experiencia en la creación de medios de comunicación lo llevaron a viajar a El Salvador para fundar Radio Venceremos.

«Era un contexto muy difícil, de persecución al periodismo independiente, de asesinato de periodistas en la capital, bombas a las estaciones, bombas a la emisora de la Iglesia, los espacios de comunicación cerrados... La única posibilidad de un órgano de comunicación en ese contexto era una emisora, y una emisora clandestina», nos cuenta Santiago en el Museo de la Palabra y la Imagen en San Salvador.

El 10 de enero de 1981, desde una montaña del departamento de Morazán, comenzaron a emitir con un equipo de la Segunda Guerra Mundial, convertido en un transmisor de onda corta, y una sencilla antena sostenida por dos varas de bambú. «Con buenas condiciones, se podía escuchar en todo el mundo», comenta Santiago. Ante el bloqueo informativo y la censura del Gobierno en los años de guerra, Radio Venceremos se convirtió «en un referente informativo de la prensa internacional». Cuando en 1981, el batallón Atlacatl asesinó en El Mozote a más de mil personas, cuatrocientas de ellas menores de edad, Radio Venceremos fue el único medio que informó de la masacre y pudo entrevistar a la única superviviente.

Además de una función informativa y propagandística, donde «cada unidad guerrillera era un corresponsal de la radio», Radio Venceremos cumplió un papel estratégico en la guerra. «La radio paralizaba el país. Un comunicado decretaba un paro nacional de transporte y las carreteras del país se quedaban bloqueadas». En unos años en los que el Gobierno de Ronald Reagan machacaba con que el FMLN huía en desbandada hacia Honduras, la radio era también, comenta Santiago, un «componente de guerra psicológica». «La sola existencia de Radio Venceremos era una confirmación de que en El Salvador había territorios bajo el control de la guerrilla.

Cuando la radio hablaba con los prisioneros de guerra, entrevistaba al viceministro de Defensa⁵ después de que su helicóptero fuera derribado, se estaba demostrando el poderío de la insurgencia. Por eso la radio se convirtió en un objetivo que destruir».

Operativos de miles de soldados, bombardeos, incluso infiltrados, según recuerda Santiago, intentaron acabar con la radio. Sin éxito, por supuesto. «Emitíamos desde un territorio bajo control. Si el Ejército quería entrar tenía que hacerlo con cuatro batallones. Y cuando entraba, había que mover la radio, evitar los operativos y volver a transmitir... Eso sí, era religioso, tenías que volver a transmitir. Si no emitíamos era una crisis para los compañeros». El coronel Domingo Monterrosa, entrenado en la Escuela de las Américas y responsable de la matanza de El Mozote con su batallón Atlacatl, se convirtió en el mayor enemigo de Radio Venceremos.

«Nuestro eterno enemigo», lo llama Santiago. A finales de 1981, este coronel consiguió emboscar la emisora y capturar el transmisor. Tres compañeros murieron ese día. Fue uno de los momentos más duros que Santiago recuerda. Los hombres de Monterrosa los perseguían. Tuvieron que caminar, extenuados, más de cien kilómetros en la selva para llegar a la costa, donde los esperaba otro transmisor. Luego tuvieron que llevarlo una vez más hasta Morazán. «Una semana estuvimos sin transmisión... fue el tiempo más largo en el que la radio estuvo sin emitir».

Acabar con Radio Venceremos se convirtió en la principal obsesión del coronel Monterrosa. El sentimiento era mutuo. «Lo habíamos declarado nuestro enemigo número uno, y así llegamos a intentar montarle varias operaciones, de las cuales el baboso se nos escabullía, se nos escapaba», narra el comandante del FMLN Ramiro Vásquez en el libro *Canción a una bala*⁶. Pero habían encontrado su punto débil. Monterrosa era el mejor oficial del Ejército salvadoreño, dice este exguerrillero, pero no tenía «el reconocimiento que se merecía» en el escalafón de las Fuerzas Armadas. Su afán de

5. El entonces viceministro salvadoreño de Defensa, el coronel Francisco Adolfo Castillo, fue capturado por la guerrilla después de que su helicóptero fuera derribado en junio de 1982.

6. ECHEGARAY, J. (2007), *Canción a una bala*, América Libre, Buenos Aires.

protagonismo lo llevaba, cuenta Ramiro Vásquez, a «lucirse» frente a la prensa y la televisión, enseñando todo tipo de trofeos, ya fueran armas, municiones o cadáveres de guerrilleros.

La ocasión llegó en octubre de 1984, cuando Monterrosa lanzó un operativo de 2.000 soldados para acabar con Joaquín Villalobos, uno de los principales líderes del FMLN, y con Radio Venceremos, ambos ubicados en el departamento de Morazán. La guerrilla planeó hasta el último detalle. Durante tres días la radio había dejado de emitir, para dar a entender al enemigo que Radio Venceremos estaba en problemas. El señuelo era un transmisor inservible similar al que utilizaban, según el relato de Mariposa, una de las locutoras de la radio. Dejaron el aparato, entre rastros simulados de lucha, en un campamento guerrillero abandonado por donde las tropas de Monterrosa tendrían que pasar. «La operación se llamó TAC 8, porque fueron ocho tacos de dinamita y explosivos bien preparados y programados para explotar a través de control remoto los que llevaba el transmisor. La obsesión de Domingo Monterrosa de capturar a Radio Venceremos lo llevó a su propia muerte», contaba Mariposa.

Monterrosa imaginaba las entrevistas al hombre que había conseguido acabar por fin con Radio Venceremos cuando su helicóptero, que transportaba el falso transmisor de la radio, estalló en el aire. A los pocos minutos Radio Venceremos volvía a emitir para dar una exclusiva mundial: el FMLN había conseguido eliminar al responsable de la masacre de El Mozote. «La Asamblea legislativa declaró tres días de duelo nacional —contaba Ramiro Vásquez—. Por su parte, el FMLN decretó tres días de fiesta nacional, celebrados con baile hasta la medianoche».

Tierra liberada

Pese a los golpes esporádicos, la falta de armamento seguía siendo el principal problema de la guerrilla. Los ataques contra colaboradores del Ejército fueron sustituidos por emboscadas a patrullas militares, cuenta Teresa de Jesús. Y luego, por «golpes de mano» a los pequeños puestos.

Poco a poco, a partir de 1983, en Chalatenango la guerrilla iba pasando a la ofensiva. «Empezamos a dar ataques grandes, ya nada de ir atacando patrullajes... sino ataques a posiciones militares, y

fue así como empezamos aquí... Le dimos a Las Flores, le dimos a Potonico, después los soldados de San Isidro se fueron por su cuenta, del miedo; después los de Nueva Trinidad se fueron de miedo; los de Arcatao se fueron de miedo...». Cada vez se recuperaban más armas y los ataques eran más atrevidos.

Por esos años, Audelio Tobar se había convertido con su grupo musical M-60 en la banda sonora obligatoria de los campamentos guerrilleros de la zona. Tocaban en los bailes, en las fiestas, a veces algunos días antes de los ataques para subir la moral de la tropa. Cantaban canciones de batallas, actos heroicos de la guerrilla, como la toma del cuartel de la presa de Cerrón Grande.

Para ese entonces, cuenta Audelio, la guerrilla ya había formado compañeros en las fuerzas especiales selectas, que eran capaces «hasta de soltarle la hamaca a un soldado que estuviera durmiendo entre dos árboles y llevarlo más allá de la zona sin que se diera cuenta». En el caso del cuartel de Cerrón Grande, «los compas no empezaron a combatir de fuera para adentro sino de adentro para afuera». Audelio canta de memoria el corrido de la toma del cuartel, donde consiguieron 215 fusiles para la guerrilla.

El día 28 de julio ha quedado demostrado
que el asesino enemigo sigue siendo aniquilado.
La toma del Cerrón Grande fue un fulminante ataque,
aniquilamos el mando en diez minutos de combate.
A las seis de la mañana se definía la cosa.
¡Que viva nuestra brigada Felipe Peña Mendoza!

A medida que el Ejército iba retrocediendo se iban formando los poderes populares. «Empezamos con los poderes populares locales, había uno de Educación, otro de Salud, de Agricultura, otro de Propaganda, otro de Conflicto... Teníamos siete poderes populares locales en todo Chalate... De repente surgió la idea de formar un poder popular subregional», cuenta. El mismo Audelio formó parte de él como responsable de Asuntos Jurídicos. No solo el Ejército había tenido que abandonar la zona. También los terratenientes. «Toda la gente que era dueña de estas tierras se había ido quién sabe adónde. No había terratenientes. Estaban por Chalate o por San Salvador, huyendo de la guerra, acá se daban combates casi todos

los días. Esta calle no la iban a ver como está ahora —dice Tobar mientras señala la carretera semiasfaltada—, era un caminito con mil barricadas para que el Ejército no pudiera pasar con los camiones».

En el campo de refugiados

COMUNIDAD DE SANTA MARTA / DEPARTAMENTO DE CABAÑAS

Cuando la guerrilla fue recuperando las posiciones que el Ejército abandonaba en Chalatenango y Cabañas, las comunidades estaban deshabitadas. Casi toda la población había tenido que huir de los operativos militares y de los escuadrones de la muerte. La mayoría había terminado en el campo de refugiados de Mesa Grande, en Honduras. Allí, coincidieron durante más de cinco años los actuales habitantes de muchas comunidades del norte de El Salvador. Entre ellos, los de Guarjila y Santa Marta.

Santa Marta está ubicada a unos treinta kilómetros al sureste de Guarjila, ya en el departamento de Cabañas. Aída Hernández cuenta la historia de su salida de Santa Marta mientras prepara la masa de maíz para los tamales. Su nieta ahúma las grandes hojas de plátano para envolverlos. En el depósito de agua coletea un pez de tamaño considerable. «Es para que limpie el fondo y se coma las larvas de los mosquitos», cuenta Aída.

En 1980, los escuadrones de la muerte mataron a su marido. Las masacres, las desapariciones y los abusos del Ejército hacían imposible la vida en el cantón. Un operativo los obligó a congregarse e iniciar la huida hacia Honduras. «Nosotros éramos población civil que iba huyendo del Ejército. No dejaban cultivos, no dejaban casas, no dejaban animales, no dejaban gente. Eso era terminar con todo».

El 17 de marzo de 1980, cerca de 7.500 personas de la zona emprendieron el éxodo a Honduras. Era el único sitio hacia donde podían avanzar. Un operativo militar les cerraba las otras direcciones. Aída muestra una tela, bordada por ella misma, con la historia de Santa Marta. La primera imagen: el paso del río Lempa, que marca la frontera con Honduras. «La mayoría de las personas salimos solo con la ropa que llevábamos puesta, yo con los niños en los brazos. Muchas mujeres dieron a luz en el monte. A los ancianos

que no podían caminar los cargaban en hamacas. Bombas por el aire, ametralladoras desde los helicópteros y balas por tierra. Los que logramos llegar hasta el río comenzamos a pasar para el otro lado, y los que no podían nadar se ahogaban, otros caían muertos por las balas. El río se tiñó de sangre». Trescientas personas murieron aquel día según el relato de Aída. No fue el único caso. En mayo de 1980, en la famosa matanza del río Sumpul los paramilitares y el Ejército masacraron a seiscientos campesinos.

La siguiente imagen de la tela representa a los soldados hondureños apuntando a los desplazados, la particular bienvenida que obtuvieron de las fuerzas del país vecino. El primer destino hondureño de las miles de familias del norte de El Salvador fue un improvisado campamento en La Virtud. Después de casi un año fueron trasladados al campamento definitivo: Mesa Grande.

Aída nos acompaña hasta la casa de Carlos Bonilla, al igual que ella, dirigente comunitario de Santa Marta. «Llegamos a un terreno de piedras, no había ni una casa, no había agua potable, nos tiraron al campo como a una partida de ganado», cuenta Bonilla. Poco a poco, fueron llegando materiales. Los mismos refugiados fueron organizando la construcción. «Empezamos a montar primero carpas de lona, después viviendas provisionales de láminas, madera y mesones. Allí empezamos a construir centros de salud, un centro provisional para la desnutrición de los niños», cuenta Carlos, hoy presidente de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), la principal organización comunitaria de Santa Marta, con proyección en todo el país.

Los refugiados también se encargaron de organizar la educación, tanto de los menores como de los adultos.

—Al inicio se daban las clases debajo de los árboles, nada de sillas, sentados en raíces, en las piedras —dice Carlos.

—Escribiendo con carbón —añade Aída.

Al campamento llegaban víveres suficientes. Los refugiados habían organizado cultivos colectivos de maíz, frijol y hortalizas para completar la dieta. Pero a medida que avanzaba la guerra el hacinamiento era un problema cada vez mayor. Unas 11.500 personas llegaron a habitar los siete campamentos de Mesa Grande. Igual de problemática eran la falta de libertad, las continuas amenazas y la complicidad del Gobierno de Honduras con el Ejército

salvadoreño. A partir de 1985, cuenta Carlos Bonilla, algunas familias decidieron volver a El Salvador por su cuenta. Pero el mero hecho de haber huido del país los convertía en sospechosos de colaborar con la guerrilla. Cuando regresaron al país muchos de ellos fueron asesinados. Cuando los campamentos empezaron a debatir cuál iba a ser el destino de los 11.500 refugiados se fue dibujando una salida colectiva.

Las alternativas que había ofrecido el Gobierno salvadoreño eran tres y ninguna convencía a la población de Mesa Grande: la primera, quedarse en los campamentos; la segunda, aceptar una repatriación individual en el departamento que el Gobierno eligiera; la tercera, la emigración a otro país. A finales de 1986, en los campamentos fueron convocadas gigantescas reuniones para acordar una propuesta con Acnur, la agencia de refugiados de la ONU.

—Hemos decidido regresar a nuestros lugares de origen —fue el mensaje que transmitieron al enviado de Acnur.

—Pero ¿no saben que hay guerra? ¿No saben que todavía hay un conflicto serio? —intentaron disuadirlos.

—Esa es nuestra decisión y punto —confirmaba el representante de los refugiados.

No habían tomado esa decisión a la ligera. Las informaciones que llegaban desde la zona norte de Chalatenango y Cabañas decían que la guerrilla había conseguido expulsar al Ejército de buena parte de estos territorios. De hecho, habían sido representantes de la guerrilla quienes habían confirmado a los refugiados que el regreso era factible.

Los habitantes de Mesa Grande habían encontrado un eficiente sistema de organización. Cada diez familias elegían a un coordinador, una fórmula que permitía en poco tiempo transmitir informaciones y tomar decisiones de todo tipo. Fue de especial utilidad cuando el 8 de octubre de 1987 la delegada del Gobierno salvadoreño acudió al campamento de Mesa Grande para reunirse con los representantes de los refugiados.

—Ustedes están manipulando a la población —dijo la funcionaria.

Los representantes de los refugiados, Carlos Bonilla entre ellos, se negaban a aceptar cualquier otra opción que no fuera la decidida por las asambleas: el retorno a los lugares de origen.

—Nosotros estamos siendo portavoces de lo que nos pide la población —fue lo que dijo Carlos Bonilla.

—Ah... Yo mañana puedo tener una asamblea con la población.

A la representante del Gobierno se le iluminó la cara. Era la 1:30 de la madrugada. Suponía que sería imposible convocar a tanta gente para dentro de unas pocas horas.

—Con todo gusto, sin ningún problema —contestó Bonilla.

—A las seis de la mañana quiero esa asamblea.

—Con todo gusto.

«Y fíjese con qué seguridad decía que podíamos hacerlo —comenta Carlos Bonilla—. Éramos siete los que estábamos reunidos, uno por cada campamento. Vaya, como ya teníamos un coordinador por cada diez familias, de ahí nos fuimos a tocarle la puerta a cada coordinador, ya sabíamos dónde vivían».

A las seis de la mañana había 8.000 personas concentradas en el campamento 5, cuenta Bonilla.

—¿Qué es esto? —exclamó la funcionaria boquiabierta cuando vio la congregación humana que la aguardaba.

—Usted nos ha pedido una asamblea —le explicaron.

«La representante temblaba, no sé si sería del frío o del temor, pero la cosa es que le hicimos subirse a la tarima para que explicara, y la gente empezó a corear, sin que nosotros dijéramos nada: “¡Mañana nos vamos, mañana nos vamos!”». Para el 10 de octubre estaba programado el regreso, con o sin permiso del Gobierno. La presión surtió efecto: a las siete de la tarde del día anterior, el Gobierno les comunicó que tenían autorización para regresar. Al día siguiente, unas 4.500 personas marcharon en 43 autobuses y sesenta camiones. Tras cruzar la frontera dividieron sus caminos: Santa Marta, Guarjila, Arcatao, Los Ranchos, San José Las Flores... Encontraron la tierra devastada, sus viviendas incendiadas, con la permanente amenaza de los bombardeos y las patrullas militares. Pero algo había cambiado. Era verdad lo que contaban. La guerrilla había conseguido cambiar la correlación de fuerzas en muchas zonas del norte del país.

Audelio Tobar, que seguía cantando en las fiestas de los campamentos guerrilleros, recuerda bien ese día de 1987. Chalatenango ya era zona liberada, aunque los bombardeos y los operativos del Ejército, acuartelado en la capital del departamento, seguían siendo frecuentes. La compañera Evelyn, que con el tiempo se convertiría ya

con su nombre real, Violeta Menjívar, en alcaldesa de San Salvador, se acercó a Audelio con buenas noticias.

—Se va a venir una gente de Mesa Grande. Están preparando un buen grupo, está tu compa, que se va a venir de vuelta para acá.

El 11 de octubre de 1987, unas cuatrocientas familias de refugiados se instalaron en lo que quedaba de Guarjila, que era prácticamente nada. Entre los recién llegados estaba la esposa de Audelio. En medio de un operativo, salió disparado hacia Guarjila. «El mero Atlacatl andaba por ahí... y yo me vine sin pistola ni nada», cuenta.

La comunidad

Manuel Beltrán es el único habitante de Guarjila que nació en Guarjila. Cuando estalló el conflicto se unió a la guerrilla. Su función era garantizar la seguridad de la población civil en los largos desplazamientos. «Nos pegábamos unas grandes caminatas en la noche, en lo oscuro... Fue un tiempo difícil, un tiempo en el que uno amanecía, pero no estaba seguro de si iba a anochecer. O si anochecía, de si volvería a amanecer», relata sentado en el porche de su casa, a las afueras de Guarjila, rodeado de árboles frutales y altas plantas de maíz. Entre los refugiados que llegaron de Mesa Grande también estaba su esposa, María Jesús Menjívar. Había perdido diez hijos en la guerra.

Guarjila era tierra arrasada por el Ejército. No quedaba en pie ni una sola construcción. Montaron «chamпиты», improvisadas tiendas de campaña con plásticos, y empezaron a planear la reconstrucción, cuenta Beltrán. Tenían algo a su favor: la experiencia de organización anterior a la guerra y la de los años del campamento de refugiados. «De Mesa Grande venían organizados. Y empezaron a trabajar organizadamente, a hacer las casas provisionales, a poner agua, a sembrar maíz, frijol, arroz, a comprar ganado... Así convivieron».

María Jesús Menjívar recuerda aquellos años claves en la formación de la comunidad: «Hacíamos todo el trabajo en común. Ayudábamos a la otra gente a hacer la casita de ellos, y después nos ayudaban a nosotros. Sembrábamos maíz para toda la gente. Y eso entre todos lo sacábamos y lo repartíamos. Si la familia era grande, más le daban... si la familia era pequeña, más poquito les daban».

Cada vez que sonaba la campana de Guarjila, la población sabía que se acercaba un operativo del Ejército. No era la campana

de la iglesia, sino la campana de la plaza. El párroco de la zona, el padre Jon Cortina, insistía en que no permitiría que se construyera una iglesia hasta que todos los habitantes de Guarjila tuvieran una vivienda digna. «La comunidad es la mejor iglesia», solía decir. El retrato de este sacerdote vasco de la teología de la liberación sigue estando presente en cada rincón de la comunidad. También son omnipresentes los murales con su frase más conocida: «Hay que buscar la verdad sin ver a quien va a molestar».

El padre Jon también cumplió un papel fundamental en la creación de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos en el Conflicto Armado. Esta organización consiguió hasta 2011 encontrar a más de trescientos menores secuestrados por el Ejército y recoger 888 denuncias, unas cifras que superan según su actual directora, Esther Alvarenga, todas las experiencias similares en el continente. Cuando Jon Cortina falleció por un derrame cerebral en diciembre de 2005, Audelio volvió a cantar:

El 12 de diciembre, qué fecha inolvidable,
que todos recordamos con angustia y dolor,
ya que por la mañana doblaron las campanas,
todo el pueblo llorando, ha muerto el padre Jon.

El fin de la guerra: «Hasta el tope y punto»

A finales de 1988, los responsables de Radio Venceremos fueron convocados a una comisión de propaganda para preparar, esta vez sí, la ofensiva final. Para el ataque se necesitaba un nombre. Así describe el momento José Ignacio López Vigil, uno de los integrantes de la radio, en su libro *Las mil y una historias de Radio Venceremos*⁷:

—«¡Por la justicia social y la democracia todos juntos al combate contra los opresores hasta la victoria final!» —sugirió uno, no digo quién.
—Muy larga, hombre. Antes de acabar de pronunciarla, te habrán caído las bombas en la boca.
—«¡Aplastemos al fascismo criminal!» —dijo otro, tampoco lo descubro.

7. LÓPEZ VIGIL, J.I. (1993), *Las mil y una historias de Radio Venceremos*, UCA, San Salvador, pp. 521.

—Muy pesada.
 —«¡Construyamos la paz!»
 —Muy fría. Mirá a los nicaragüenses: «¡Echémosla toda todos!» ¿No podríamos inventar algo que tenga saborcito salvadoreño?
 —¿Salvadoreño? —habló Santiago—. Oí esta: «Con el dedo de la unidad en el culo del enemigo!» ¿Querés algo más guanaco?⁸
 Todos nos reímos de la jayanada, pero la consigna no salía. Al final, intervino Maravilla:
 —¿Qué dice un mando al dar la orden para el asalto final?
 —Nos vamos al tope.
 —Pues esa es la mejor consigna: «¡Al tope!» ¿Es muy militarista?
 —Ni tanto. Es también de amor. Cuando estás bailando, ¿no te topás con la muchacha?
 —«Al tope...» ¿Y qué más?
 —«Al tope y punto». Esto se acaba, ¿no? Va de ponerle punto final a este volado.

«Hasta el tope y punto». Ya había consigna para la gran ofensiva que debería poner fin a la guerra. Los intentos de negociación de los últimos meses habían fracasado. El Gobierno no parecía dispuesto a firmar nada que no fuera una rendición incondicional de la guerrilla. La comandancia del FMLN buscaba una demostración de fuerza antes de volver a una mesa de diálogo. Dos días después de que cayera el muro de Berlín, el 11 de noviembre de 1989, empezó la ofensiva «Hasta el tope y punto» en las principales cinco ciudades del país, sobre todo, en la capital.

Desde un túnel subterráneo de Morazán, los responsables de Radio Venceremos preparaban la retransmisión más importante de sus vidas. Sabían que iba a ser más necesaria que nunca. Tal como esperaban, en cuanto empezó la ofensiva, todos los medios fueron intervenidos por el Ejército. Además de los corresponsales habituales habían preparado un sistema inédito en El Salvador. «Entonces metimos los precedentes de internet en el país con un programa muy sencillo con esa computadora que ven ustedes ahí —dice Santiago, señalando la arcaica máquina situada en la recreación del túnel de Radio Venceremos en el Museo de la Palabra y la Imagen—. Se tra-

8. Salvadoreño.

taba de un transmisor pequeño con el que nosotros comunicábamos con Managua, con San Salvador o con cualquier punto. Con este programa lo que se escribía en una computadora aparecía en otra. Aquí, en la universidad, había un compañero con una computadora y todo lo que sucedía en la capital, toda la información, llegaba a esa computadora, y de ahí se transmitía al campamento. Con el micrófono íbamos dando las noticias en vivo. Logramos así una gran agilidad».

Con todo tipo de maniobras de distracción, los milicianos fueron desplegándose en los puntos estratégicos de la ciudad, sobre todo en los barrios más populares del extrarradio. Así lo describía López Vigil:

En la colonia Zacamil se celebró una boda donde la novia vestida de blanco, el novio encorbatado, los padrinos, los invitados, los músicos, los bolos, todos eran comandos urbanos. En las cajas de regalos venían los fusiles. Todo era un truco para concentrar gente, distribuir armas y tomarse un sector [...].

Y comenzó el gran desvergue, el mayor que se haya visto en estos diez años de guerra. A un tiempo, miles de hombres y mujeres saltaron a las calles de San Salvador, abrieron fuego en los barrios del norte, cavaron zanjas, levantaron barricadas, desconcertaron completamente al Ejército [...]. ¡Y ya estábamos dentro!

El Ejército se vio desbordado. El bombardeo de los barrios populares solo incrementó el apoyo a la guerrilla entre la población. En las calles de San Salvador se podía escuchar a todo volumen la sintonía de Radio Venceremos: «Transmite Radio Venceremos, voz oficial del FMLN, emitiendo su señal guerrillera desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo». Columnas de guerrilleros tomaron mansiones en los barrios ricos de la ciudad. Hasta el edificio vip del hotel Sheraton fue ocupado por las columnas del FMLN.

En medio de la ofensiva, el 16 de noviembre, un pelotón del batallón Atlacatl penetró en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y asesinó a dos trabajadoras del centro y a seis sacerdotes jesuitas adscritos a la teología de la liberación, cinco españoles y un salvadoreño.

Después de catorce días de combates en las calles de San Salvador, el FMLN comenzó la retirada. «Lo principal ya estaba ganado: le habíamos dado el vuelco estratégico a una guerra aparentemente

empatada», escribía López Vigil. En febrero de 1990, el general Maxwell Thurman, del comando de Estados Unidos en el sur de Panamá, reconoció frente al Congreso que el FMLN no podía ser derrotado militarmente por el Ejército salvadoreño y que no había otra salida que la negociación.

La ofensiva había forzado el diálogo en un contexto desfavorable, cuenta Santiago: «En ese momento nadie daba un céntimo por la lucha armada en Centroamérica... Pero la realidad es que no podían vencer a la guerrilla. En los acuerdos de 1992 se lograron propuestas de la guerrilla muy importantes, como la desarticulación de todos los batallones de contrainsurgencia, de la Policía Nacional, la Guardia Nacional, el desmontaje de toda esa estructura de represión, elecciones libres, cambios de leyes; en fin, una reforma política muy importante, que nosotros sentíamos como una victoria».

Habían tenido que cambiar las expectativas: «Cuando empezó la lucha se tenía la visión de que la victoria era entrar a las ciudades, barbudos con fusiles, a sentarse en los lugares de poder... y esa visión de victoria se fue transformando a partir de discusiones... La victoria era transformar la sociedad, acabar con lo que había antes».

Para el fundador de Radio Venceremos, los acuerdos de paz se limitaron a las reformas políticas. «Lo que se quedó en el tintero fueron las reformas económicas, porque no daba para más en ese momento», dice. Las últimas palabras del libro de López Vigil sobre Radio Venceremos resumen décadas de historia salvadoreña: «Nos hemos ganado la legalidad al margen de la ley, porque a nuestra emisora, igual que al pueblo salvadoreño, solo le quedó la montaña para hacer valer sus derechos y resonar su voz».

Un pueblo organizado

Los acuerdos de paz de 1992 significaron el fin del conflicto armado. Más de 80.000 personas habían muerto en la guerra, casi todas civiles. La abrumadora mayoría en manos del Ejército y los escuadrones de la muerte. De todas las denuncias recogidas por la Comisión de la Verdad de 1993, el 95% corresponde al Estado.

En Guarjila la producción colectiva en el campo no sobrevivió a los acuerdos de paz, pero sí perduró el sentido de comunidad.

Permaneció el carácter comunitario en la administración de los asuntos comunes, la salud, el agua o la educación. También permaneció la idea de gestión participativa de la comunicación. En 1994 nació Radio Sumpul, emisora comunitaria con cobertura en todo el departamento de Chalatenango.

«La radio nace con la idea de acompañar a las comunidades, que se habían visto muy afectadas por la guerra», cuenta Ana Dubón. Al igual que Guarjila, muchas comunidades del departamento habían surgido del repoblamiento desde los campamentos de Honduras. Muchas veces aisladas entre sí, las comunidades tenían que enfrentarse en solitario a las políticas neoliberales del Gobierno de Arena y a unas instituciones que veían en ellas la pervivencia de las ideas que habían intentado aniquilar.

La radio comunitaria era una forma de unir esas poblaciones con una historia y unos problemas comunes. Y Radio Sumpul no era la única. En El Salvador de posguerra había surgido un amplio espectro de emisoras comunitarias que funcionaban sin ningún tipo de licencia. Esta proliferación comenzó a preocupar a Arena. En diciembre de 1995 la Policía se presentó el mismo día, casi a la misma hora, en los locales de seis radios comunitarias de todo el país para decomisar el equipo. «Y si seguimos aquí, en esta casa, es porque la gente la ha sabido defender», dice Ana Dubón.

Ese día, un vecino vio pasar a la Policía y corrió hacia la plaza principal. Empezó a tocar la campana. A los veinte minutos, cuenta Ana Dubón, el local de la radio estaba rodeado de gente. Llegaban incluso de comunidades cercanas. Los agentes habían subido la consola y el enlace a la camioneta de la Policía. Habían conseguido entrar en Guarjila, pero no conseguirían salir, al menos no con el equipo de la radio. La Policía lo intentó por la carretera, pero se la encontró sembrada de piedras. «Regresaron y cuando intentaron salir por otro camino, un señor que es lisiado se tiró con toda la familia, con sus hijos, de panza, con su muleta, y no pasaron. Se regresaron nuevamente delante de la radio. Y la gente empezó a gritar: “¡Abajo, abajo!”. Se subieron al carro, bajaron el equipo y lo pusieron acá. Al final no se pudieron llevar la radio».

Audelio Tobar había escuchado la campana y había acudido a defender la emisora. «Era la consigna, cuando sonaban las campanas sin que hubiera una misa ni nada era señal de que algo bueno

había. Mire, hermano, estábamos recién salidos de la guerra, toda la gente estaba acostumbrada a gritar, y ¡en pleno día venían a robarnos la radio!», se escandaliza Audelio.

«Guarjila siempre se ha catalogado como bochinchera, guerrillera, peleonera —dice Ana Dubón—, es la organización que tiene Guarjila lo que los empresarios nunca pudieron derrotar».

Esta es la historia de por qué cuando, en febrero de 2006, volvió a sonar la campana, todo el pueblo acudió a la llamada, la razón por la cual Guarjila consiguió expulsar a la minera canadiense Martinique en apenas unas horas.

Las puertas sin cerrojo y las paredes sin alambres de espino, la ausencia de miseria y desigualdades, o la tasa de mortalidad infantil más baja del país son algunas de las ventajas de vivir en una comunidad como Guarjila, aunque en los últimos tiempos ha habido incursiones de las maras, reconocen los vecinos.

—¿Saben qué es lo mejor de Guarjila? —dice Manuel Beltrán en su porche antes de despedirse—. Es el estudio. No hay un solo niño que se quede sin estudiar.

En vez de un monumento a algún prócer de la independencia, la plaza central sigue conservando la campana que tantas veces salvó a Guarjila. «Todos sabían que cuando sonara la campana tenían que acercarse allá y preguntar qué sucedía. A veces es porque se ha muerto alguien, pero cuando suena fuerte, fuerte, es que algo está pasando, y entonces la gente sale. Esa es nuestra historia», dice Ana Dubón.

La mara neoliberal

SAN SALVADOR / DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

Por el día, el centro histórico de San Salvador se convierte en un gran mercado. La retícula que dejó la colonia apenas es apreciable entre el caos de puestos informales, autobuses y música a todo volumen. Discos piratas, ropa de marca —igualmente pirata—, bisutería, *frescos* de mamey, piña y otras frutas tropicales, pupusas y tenderetes de tortas mexicanas apenas dejan espacio para el tráfico. Las improvisadas tiendas se apoyan incluso contra las paredes de la

catedral, el palacio o el Teatro Nacional, los pocos restos que quedan de la *belle époque* cafetalera de principios del siglo xx.

Apenas unos pocos edificios han conseguido sobrevivir a los sucesivos desastres que cambiaron la fisonomía de la ciudad. Incendios, inundaciones, huracanes, deslizamientos de tierras, bombardeos y, sobre todo, terremotos. El más grande de una interminable lista, el del 10 de octubre de 1986, provocó 1.500 muertos. Ya los españoles del siglo xvi intuían que quizá no era el mejor sitio para instalar una capital cuando llamaron a la región «el Valle de las Hamacas».

Cuando anochece, el centro de San Salvador queda desierto. La inseguridad —según las encuestas, el principal tema de preocupación para los salvadoreños— se palpa en cada calle, en cada esquina. No solo en el centro, en toda la ciudad. Rejas en cada ventana y cada patio, botellas rotas en cemento y alambres de espino en cada muro y en cada azotea. Seguridad privada con recortadas en los bares de los barrios bien, urbanizaciones privadas y grandes centros comerciales a la vuelta de cualquier rotonda.

Tras los acuerdos de Chapultepec de 1992, el Ejército volvió a los cuarteles. Pero la derecha en el Gobierno no estaba dispuesta a ceder en los temas económicos parcelas de su poder. «Las negociaciones fueron un reflejo de la correlación de fuerzas, los acuerdos no dieron para más», explica Pedro Juan Hernández, profesor de Economía y activista del Frente Social por un Nuevo País. Con el fin del conflicto armado, el Gobierno de Alfredo Cristiani, de Arena, se lanzó a armar los cimientos de un Estado neoliberal perfecto, un trabajo terminado por los siguientes gobiernos de este partido.

En sus veinte años en el poder, Arena privatizó la banca y todas las empresas públicas, suprimió impuestos a las rentas altas y creó nuevas tasas para las rentas bajas, abrió las fronteras para la importación de productos agropecuarios, firmó el TLC con Estados Unidos, adoptó el dólar como moneda oficial y creó diecisiete zonas francas, un limbo de legislación laboral de excepción, abusos y bajos salarios en las maquilas.

Veinte años después del inicio de este experimento, la primera fuente de ingresos de El Salvador, el 17% del PBI, son las remesas de los migrantes que tuvieron que abandonar el país, en total 2,5 millones, uno de cada tres salvadoreños. Los primeros se fueron

con la guerra y la dictadura. Los demás, la mayoría, por la falta de trabajo y oportunidades en los años de las políticas neoliberales.

«El modelo que se configuró en los últimos años es un modelo expulsor de personas, receptor de remesas, importador de bienes, con un deterioro productivo interno», dice Pedro Juan Hernández. El café para la exportación dejó de ser el producto estrella de El Salvador tras la entrada en el mercado internacional de un café aún más barato, procedente del Sudeste Asiático. La supresión de aranceles a los productos del campo arruinó a los productores. Actualmente, el país se ve obligado a importar buena parte de la comida que consume, incluso maíz y frijoles, los dos principales ingredientes de la dieta salvadoreña. El Gobierno, cuenta Hernández, intentó «convertir todo El Salvador en una zona franca» para ofrecer al mercado del Norte manufacturas a bajo precio. Pero no funcionó. La entrada de los productos chinos, más competitivos que los salvadoreños, y la inseguridad del país, catalogado en 2011 como el segundo más peligroso del mundo⁹, han frenado la inversión extranjera, explica Hernández.

El fin de la guerra forzó los cambios. El FMLN, convertido en partido político, entraba con dificultades e innumerables divisiones en un terreno que desconocía: el electoral. Unos cambios que también se aceleraron en la clase empresarial, según Geovani Montalvo, periodista del *Diario Co Latino*: «Los terratenientes cafetaleros evolucionaron hasta convertirse en banqueros, empresarios, creando una clase dominante formada por este sector económico». Después de los acuerdos de paz, cada vez se hablaba menos de las «catorce familias» terratenientes y más de los ocho grupos económicos, herederos de esos apellidos, que dominan la economía del país.

La guerra no ha terminado

María Silvia Guillén lleva años trabajando como abogada por los derechos humanos. También con jóvenes mareros que quieren cambiar de vida. Desde la Fundación de Estudios para la Apli-

9. Según un estudio de la ONU de 2012, el país con más asesinatos por año era Honduras, seguido por El Salvador y Costa de Marfil.

cación del Derecho (Fespad), ha luchado contra las políticas de los gobiernos de Arena que buscaban acabar con el problema por una vía exclusivamente policial. Cuando la «Mano Dura» no dio resultado, Arena recurrió a la «Súper Mano Dura», pero, lejos de amainar, la violencia creció exponencialmente. Para Guillén, solo hay una solución posible: resolver los problemas estructurales que la alimentan. Para ello hay que comprender sus orígenes.

Cientos de miles de salvadoreños tuvieron que abandonar El Salvador durante los doce años de conflicto. La mayoría de ellos se instalaron en los barrios pobres de las principales ciudades de Estados Unidos. En Los Ángeles de las pandillas, los salvadoreños fueron los últimos en llegar, señalaba una investigación del periódico digital *El Faro*¹⁰. Esta situación de debilidad frente a otras pandillas chicanas o afroamericanas fue lo que llevó a los jóvenes salvadoreños a organizarse en maras. La mara Salvatrucha y Barrio 18 fueron las principales. Con la deportación de muchos de los mareros a El Salvador tras los acuerdos de paz, estas organizaciones se hicieron transnacionales. La calles de San Salvador en los años noventa y en la primera década del nuevo siglo eran un buen terreno para crecer.

«El proceso de migración ha significado que nosotros tenemos veinte años de una niñez y una juventud abandonada. Aquí, la mayoría de los grupos familiares tiene por cabeza una mujer, esa mujer se va para Estados Unidos y le deja sus hijos a la abuela, y en otras ocasiones a la vecina. “Ahí quedan mis hijos, por favor me les das una miradita”. Esos muchachos se han educado solos y eso ha traído que ellos han buscado “quién conmigo”, y ese “quién conmigo” es la pandilla», advierte María Silvia Guillén.

Esta situación se veía reforzada por una cultura de la violencia y el maltrato generalizado en el interior de los hogares, contra los menores y contra las mujeres, «en todos los estratos sociales», subraya. Una situación también agravada por el «abandono total de comunidades enteras por parte de las políticas públicas, gente viviendo en condiciones de extrema pobreza, en condiciones de no tener nada para subsistir», explica.

10. MARTÍNEZ, C., y LUIS SANZ, J. (2012), «I. El origen del odio», *El Faro.net*, 6 de agosto de 2012.

Al principio fue «ese grupo calentito que me protegió», dice Guillén, organizado desde la *clica*, la célula que controla un territorio, pero pronto fue evolucionando a grupos criminales relacionados con los cárteles de la droga de México.

Las dos principales maras trasladaron a los barrios de las principales ciudades salvadoreñas su particular guerra por el territorio, que ha provocado miles y miles de muertos. Allí encontraron, además de un montón de jóvenes necesitados de una «familia», unas estructuras heredadas de los escuadrones de la muerte que «nunca fueron investigadas», comenta María Silvia Guillén. Y un sistema judicial que nunca fue saneado tras décadas de gobiernos autoritarios de derecha.

Para esta abogada, en los años que siguieron al conflicto se encuentran las raíces de muchos de los problemas que atraviesan la sociedad salvadoreña. En agosto de 1993 la Asamblea legislativa decretó la ley de amnistía. Cinco días antes había finalizado el trabajo de la Comisión de la Verdad, que había documentado decenas de miles de casos de violaciones de derechos humanos, la inmensa mayoría por parte de las fuerzas gubernamentales. «Luego de la firma de los acuerdos de paz se lanzó un mensaje de que estamos en paz y aquí se terminó todo. Y esa paz significa que no tenemos por qué estar recordando todo lo que pasó. Esa ley de amnistía vino a poner un sello de absoluta impunidad a todo lo que había pasado en nuestro país», explica.

La ley de amnistía establecía algunas salvedades. Entre ellas, que no son amnistiables los delitos que traen consigo graves violaciones de los derechos humanos. «Y todos los delitos de guerra conllevaron graves consecuencias para los derechos humanos. A pesar de la vigencia de la ley de amnistía, hay posibilidades reales de juzgar a los criminales de guerra. El problema es que no tenemos funcionarios ni valientes ni independientes», dice. Y no es solo una cuestión del pasado.

Para María Silvia Guillén la Fiscalía y la prensa solo se ocupan de la criminalidad relacionada con las maras, sin indagar quiénes dan las órdenes o suministran las armas y las drogas. «Esta gran cortina de humo ha permitido que el crimen organizado, ese que se arropa con el poder político y el poder económico, recorra este país con total tranquilidad —denuncia Guillén—. Aquí no hay una Fiscalía fuerte que investigue. La impunidad del pasado se está reproduciendo día a día en la impunidad del presente».

La primera derrota de Arena

El movimiento social, debilitado por la guerra y los impactos del neoliberalismo, comenzó a rearmarse con la lucha por la Sanidad pública, uno de los frentes de la ola privatizadora de Arena. Ya desde 1994, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo habían incluido entre sus recomendaciones la privatización parcial de los servicios médicos. Margarita Posadas fue una de las caras de la defensa de la Sanidad pública, un movimiento que en 2002 se extendió a grandes sectores de la sociedad y consiguió frustrar por primera vez los planes de Arena.

Para Margarita Posadas, la degradación de la Sanidad pública y el proceso de privatización de los hospitales son inseparables. En 1989, cuando llegó al poder Alfredo Cristiani, de Arena, había 2,5 camas por cada mil usuarios en la Sanidad pública, señala esta activista, coordinadora de la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud. Cuando Arena dejó el poder veinte años después, apenas había 0,7 camas por cada mil usuarios. «Eso no es casual —dice Posadas—, obedece a una política deliberada de debilitar lo público y de decir que lo público no es eficiente y que lo mejor es la privatización de los servicios».

La privatización comenzó con los servicios «colaterales» en el seguro social, la cobertura sanitaria de los trabajadores formales, que en El Salvador representan un 17% de la población activa. La limpieza, la vigilancia, la alimentación, fueron entregadas a empresas privadas «adepas» al partido Arena. Pero la privatización no tardó en afectar a los servicios sanitarios. Los administrativos fueron los primeros en declararse en huelga. El personal médico, que había creado recientemente su propio sindicato, no tardó en sumarse. Entre 1998 y 2000, ambos sindicatos, con el apoyo del FMLN, sostuvieron dos huelgas, una de dos meses y otra de cuatro.

El 13 de enero y el 13 de febrero de 2001 dos sismos afectaron a casi la mitad de los municipios del país. El desastre coincidió con la dolarización de la economía. También con un nuevo salto en la privatización de la Sanidad. «Empezaron a decir: “Miren, se han dañado los hospitales nacionales y tenemos que comprar servicios privados”. Empezaron a comprar servicios de salud, ya no solo servicios colaterales», relata Margarita Posadas. Una privatización

encubierta, como suele ocurrir. El paciente no pagaba la clínica privada, el que pagaba era el seguro social con fondos públicos.

Margarita Posadas utiliza un caso verídico para ilustrar las consecuencias de este sistema. Una mujer estaba a punto de dar a luz. En los servicios sociales le dieron a elegir: un hospital público o una clínica privada con habitación propia, baño y teléfono, todo pagado por el seguro social. La elección estaba clara. Pero las cosas se pusieron complicadas después del parto, con un cuadro de atonía uterina, una hemorragia que requiere cirugía. «Eso no está en el contrato, solo cubre la atención del parto», fue la respuesta del gerente de la clínica privada según cuenta Posadas. En el traslado al hospital público la mujer murió desangrada. «Eso le costó la vida. Si esa mujer hubiera parido en el hospital público ahora estaría viva», dice.

La incipiente privatización del servicio se unió a la precarización de los contratos del personal médico. «Ya en 2002 comienza a cambiar la situación laboral del gremio, y a los médicos los empiezan a contratar por horas, como maquileros. Y ellos nunca esperaban eso. El gremio médico es algo elitista... Se consideran como intocables. Ellos se ven afectados y toman la decisión de irse a la huelga».

El contexto no podía ser más crítico. La dolarización de la economía llevó a un incremento de los precios. Después de los dos terremotos, una gran sequía «dio al traste con la producción de granos básicos» y la apertura de los mercados había provocado que el café importado desde el Sudeste Asiático arruinara toda la producción nacional. Para colmo, las remesas desde Estados Unidos habían caído en picado con los atentados contra las Torres Gemelas. En 2002, en medio de esta crisis económica, empezó una nueva huelga de la Sanidad. Esta vez duraría nueve meses.

La alianza entre trabajadores de la Sanidad y personal médico contó con el apoyo de amplios sectores de la sociedad. «Logramos un movimiento tan importante... Ahí estábamos las organizaciones que siempre nos pronunciamos, pero también el sector del transporte público, los buseros, los taxistas, los vendedores ambulantes, los empleados públicos y municipales, el movimiento de mujeres, el movimiento ecologista, las iglesias... Era una reunión impresionante, las marchas más fuertes después de la firma de los acuerdos de paz. La salud ha sido el tema que más ha convocado y que más ha motivado la participación ciudadana», dice Posadas. Fue así como

comenzaron las «marchas blancas». Blancas por las batas de los médicos, pero también como forma de abrir la convocatoria. «No queríamos colores políticos, partidarios. Nosotros dijimos: “Va a ser una marcha blanca y todo el mundo va a ir de blanco”, y así se hizo».

Siete marchas en total, algunas con más de 100.000 personas, recorrieron la capital. Por primera vez desde los acuerdos de paz un movimiento social conseguía enfrentar la política económica de Arena. Y lo obligaba a retroceder. «Se logró la combinación de acciones de calle, de acciones legislativas, marchas. Hacíamos acciones desconcentradas, cierre de calles a nivel nacional, cerrábamos hasta las fronteras, todas, las de Guatemala, las de Honduras, cerrábamos la carretera que lleva al aeropuerto, los puentes... Convocábamos a que la gente se organizara en sus comunidades y viera qué calle podía cerrar. Después hacíamos recuento y nos encontrábamos que, de repente, había veinticinco o treinta cierres en todo el país. Y como eran acciones desconcentradas la Policía no tenía capacidad de reacción».

Una huelga en la Sanidad no es cualquier huelga, sobre todo una tan prolongada. No solo se pueden poner vidas en peligro, sino que la misma población puede volverse en contra. Por eso se diseñó una estrategia. «Con los recursos de las organizaciones montábamos *canopis* [tiendas de campaña]. Y como éramos tantas organizaciones poníamos escritorios, sillas, volantes, megáfonos, los médicos especialistas daban consulta fuera de los hospitales. La gente sentía que sus médicos ahí estaban y les recetaban medicinas con sus sellos».

La movilización funcionó. «Conseguimos que no se privaticen los hospitales, ni los del seguro social ni los nacionales. También conseguimos imponer la idea de que la Sanidad no es un acto de caridad, no es responsabilidad privada, es un derecho, un derecho que debe asumir el Estado y no el mercado», dice Margarita Posadas.

«Ya no hay minería a gran escala en el país»

En 2005, al mismo tiempo que la minera Martinique intentaba instalarse en Chalatenango, la canadiense Pacific Rim se disponía a iniciar la explotación de El Dorado, a unos veinte kilómetros de la comunidad de Santa Marta. Con el inicio de las perforaciones comenzaron las llamadas a Radio Victoria, la emisora comunitaria de esta localidad de Cabañas. «Había gente que llegaba a la radio

a decir que se estaba muriendo su ganado... Empezaron a secarse pozos que nunca se habían secado, un río se había quedado casi sin agua», cuenta Óscar Beltrán, del equipo coordinador de esta emisora. Pacific Rim también intentó convertir la radio en un aliado con un suculento contrato publicitario: 8.000 dólares mensuales. Pero decidieron rechazar la oferta.

La actividad de Radio Victoria era reflejo de un movimiento social más amplio, que en 2006 se había extendido ya a todo el país. La creación de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica incluyó a comunidades y organizaciones ecologistas y campesinas de todos los departamentos. Esta plataforma permitió difundir los impactos que tendría el proyecto de El Dorado en un país como El Salvador, con la mayor concentración de población de América y azotado periódicamente por terremotos, inundaciones y huracanes. Un proyecto especialmente peligroso al estar ubicado a orillas del río Titihuapa, afluente del Lempa, que abastece de agua potable a todo El Salvador.

Las «marchas verdes» llevaron a las cabeceras departamentales y a San Salvador a miles de personas, convocadas por las organizaciones comunitarias de Cabañas y Chalatenango y por la Mesa contra la Minería Metálica. La denuncia contra la mina de oro de la Pacific Rim creó coaliciones inéditas. «Hubo gente con toda una trayectoria en el Ejército, de combatir al FMLN, que en este esfuerzo estaba con nosotros», cuenta Miguel Rivera, uno de los protagonistas de esta lucha desde la comunidad de San Isidro, ubicada a unos pocos kilómetros de la mina de El Dorado.

Entre los aliados inesperados estaba nada menos que la Iglesia. La empresa minera acudió a una reunión con el arzobispo Fernando Sáenz Lacalle, de origen español. A lo largo del encuentro intentaron convencerle de las bondades del proyecto. «El señor obispo terminó enojadísimo con los de la empresa, porque intentaron engañarlo. Cuando le hablaron del uso del cianuro, le dijeron que era algo que se podía controlar y que no era tan grave para la vida... Lo malo fue que la empresa no había revisado el currículum del obispo: además de religión había estudiado Química», se ríe Miguel Rivera. Sáenz Lacalle declaró poco después que los obispos «no desean que las aguas del subsuelo del país se contaminen con cianuro» y que «no es justo arriesgar la salud de un pueblo y dañar el medio ambiente para que unos pocos que no viven aquí se lleven el 97% de las jugosas ganancias».

Caminatas, marchas verdes, presencia en los medios de comunicación... poco a poco la opinión pública del país cambiaba. En una encuesta realizada por la UCA, casi el 85% de los consultados reconocía que las mineras eran perjudiciales para el medio ambiente. Hasta el presidente decidió cambiar de opinión. Tony Saca, de Arena, había concedido permisos de exploración y nunca había manifestado objeciones a esta actividad. En 2008, Saca negó a la empresa los permisos de explotación, declarándose «rotundamente» contrario a la minería metálica con cianuro.

A la empresa minera y a la élite «arenera» de Cabañas, que tradicionalmente había controlado el departamento, no sentó especialmente bien este nuevo protagonismo social. En 2009 cuatro vecinos que pertenecían al movimiento de oposición a la minería fueron asesinados, entre ellos Marcelo Rivera, el hermano de Miguel Rivera¹¹. También se multiplicaron las amenazas de muerte contra los periodistas de Radio Victoria. Algunos de ellos han tenido que dejar el país. Muchos otros tienen que llevar guardaespaldas.

Pero la radio continuó con su labor informativa y comunitaria. «Lo que más les molesta es que la radio no bajó el nivel de denuncia, sino que lo incrementó», dice Óscar Beltrán. Poco tiempo después de asumir la presidencia, el candidato del FMLN Mauricio Funes declaró que mientras él fuera presidente no habría minería a gran escala en El Salvador. La victoria fue doble: la minera canadiense tampoco consiguió los cien millones de dólares que pretendía ganar con la demanda internacional presentada contra el Estado salvadoreño en el CIADI¹².

«A partir de toda la bulla, todo lo que se empezó a hablar del tema se fue deteniendo, se fue deteniendo hasta este momento, en que podemos decir que no hay minería a gran escala en El Sal-

11. En la localidad de San Isidro fue asesinado en 2009 el activista antiminero Marcelo Rivera. En la cercana comunidad de Trinidad, fueron asesinados el mismo año los vecinos, también antimineros, Ramiro Rivera (sin parentesco con Marcelo Rivera), Felicita Echevarría y Dora Alicia Recinos Sorto. La muerte de Horacio Menjívar y Esperanza Velasco, padres de Óscar Menjívar, un vecino prominero con antecedentes violentos, es otro de los episodios sin descifrar en unas comunidades divididas tras la entrada de la Pacific Rim.

12. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, organismo dependiente del Banco Mundial.

vador», concluye Videlina Morales, líder comunitaria de ADES Santa Marta, una de las organizaciones que ha impulsado desde sus inicios el movimiento antiminero.

El fracaso de un modelo

Zulma Larín es una de las activistas que participó en la lucha contra el TLC y el Plan Puebla-Panamá. Se ríe al contar el principal argumento de Arena y de los expertos favorables al tratado de libre comercio: «Aquí se nos vendió la idea de que nuestra balanza comercial iba a mejorar porque íbamos a exportar a Estados Unidos pupusas, dulces, porotos, todo para el mercado nostálgico».

Pero los resultados no fueron los anunciados. Desde la entrada en vigencia del TLC, en 2006, el déficit entre las importaciones y las exportaciones no ha dejado de aumentar. Al igual que la ruina entre los agricultores, nos cuenta Lourdes Palacios, diputada del FMLN, sentada en su despacho de la Asamblea legislativa. «Con la apertura y la liberalización del comercio, las privatizaciones de todos los bienes del Estado y la dolarización, este país dejó de tener decisiones sobre sus cosas», denuncia Palacios.

La firma de los acuerdos de paz no solucionó muchos de los problemas sociales del país. Para Geovani Montalvo más bien los agravó: «Todos estos cambios, todas estas recetas neoliberales que se fueron introduciendo en el país profundizaron los problemas sociales que ya se arrastraban desde la década de los treinta: más marginalidad social, empobrecimiento, menos acceso a la educación, a la salud pública, menos acceso a las tierras, menos soberanía alimentaria... Todo eso se vino agudizando y propició que el movimiento social se fuera fortaleciendo».

A medida que las políticas neoliberales del Gobierno de Arena «empezaban a golpear a los sectores populares y el nivel de vida se iba deteriorando», comenzó un proceso de reorganización y de movilización. La oposición a este modelo económico se extendió en los primeros años del nuevo milenio a las ciudades con la defensa de la Sanidad pública, las luchas contra el TLC y las protestas de los trabajadores informales.

Este lento despertar estuvo acompañado en los años siguientes por las luchas del movimiento estudiantil, que consiguió

paralizar los intentos de privatizar la Universidad de El Salvador, con marchas, sentadas y tomas de las instalaciones. También por el movimiento contra la minería metálica, que logró boicotear todos los megaproyectos mineros en el país, y la lucha contra la privatización del agua.

Cuando Antonio Saca llegó con Arena al poder en 2004 quedaba poco por privatizar. Lo intentó con el agua bajo el rótulo de «descentralización». Pero no pudo seguir adelante con sus planes. El descontento popular con la medida tuvo su momento más alto el 2 de julio de 2007, cuando el plan iba a ser presentado en la antigua ciudad de Suchitoto. Cuando Saca se enteró de que el cuerpo diplomático y sus ministros no podían llegar al acto, bloqueados en la única vía de acceso por miles de manifestantes, entró en cólera. Mientras el presidente abandonaba en helicóptero el balneario a orillas del gran lago Suchitlán, rodeado por agua y tierra por los manifestantes, empezaron a silbar las balas de goma y los botes de gas lacrimógeno. Trece dirigentes comunitarios fueron apresados y procesados con cargos de terrorismo, en virtud de la ley aprobada unos meses antes por el Gobierno de Arena para aplacar la creciente oposición popular a las medidas neoliberales¹³. La política de «descentralización» nunca llegó a ser aplicada. El consenso en torno a las políticas de Arena se iba desarmando.

Geovani Montalvo coincide en el papel que tuvieron los movimientos en el cambio de paradigma: «Había un desgaste del partido gobernante, promovido por toda esta historia de movilizaciones de las organizaciones sociales, había también una derrota ideológica, y eso también influyó bastante para que la propuesta de Mauricio Funes creara bastante esperanza entre la población». En 2009, este

13. La ley antiterrorista fue aprobada en noviembre de 2006, poco después de que se difundieran las imágenes de la intervención policial en una protesta en la Universidad de El Salvador. En ellas, un joven llamado Mario Belloso disparaba contra la unidad de antidisturbios. Dos agentes murieron en circunstancias poco claras. Belloso había sido expulsado poco antes del FMLN por su conducta sospechosa. Las organizaciones sociales no tardaron en denunciar el caso como un montaje para justificar la aplicación de la ley antiterrorista a las organizaciones sociales. Además de a «los trece de Suchitoto», la ley antiterrorista fue aplicada a los vendedores informales.

periodista independiente en las listas del FMLN llegaba al poder. Quedaban atrás los veinte años de dominio del partido fundado por el asesino de monseñor Romero. Por primera vez en toda la historia de El Salvador un partido de izquierda llegaba al Gobierno.

El FMLN en el Gobierno ¿y en el poder?

En uno de los despachos de la Asamblea legislativa nos recibe la comandante Rebeca. Dirigió dos frentes guerrilleros al mando de más de mil milicianos durante el conflicto armado. Ahora, con su nombre de civil, Lorena Peña, es una de las diputadas del FMLN. «El FMLN llegó al Gobierno, pero no tiene el poder» fue una de las frases más repetidas en los meses siguientes a la histórica noche del 15 de marzo de 2009, cuando Mauricio Funes fue elegido como nuevo presidente de El Salvador. Cuatro años después no parecen haber cambiado mucho las cosas.

«El poder fáctico lo sigue teniendo la oligarquía —dice Lorena Peña—. El FMLN controla importantes palancas de poder, pero hay otros espacios en los que necesita mejorar su correlación para abordar cambios más profundos». La minoría de diputados del FMLN en la Asamblea legislativa ha limitado el alcance de las reformas. Tampoco han ayudado los recurrentes desacuerdos entre el presidente Funes y los diputados del FMLN en cuestiones como el ingreso en el ALBA, el envío de tropas a Afganistán o la firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea.

Para Lorena Peña, el principal cambio que hay que abordar es la reforma fiscal, obstaculizada por la derecha: «Tenemos que conseguir que los ricos paguen lo que tengan que pagar, para que con esos recursos podamos profundizar en las políticas de reactivación económica y otras políticas sociales importantes».

Sin grandes ingresos por exportaciones o por la explotación de recursos naturales, sin control sobre los clásicos resortes de la economía —la política monetaria y la política fiscal—, los cambios prometidos tardan en llegar.

Esta parlamentaria del FMLN reconoce que algunas expectativas de cambio no se han cumplido todavía. Aunque otras sí. «Es obvio que la opción preferencial por los pobres, que es muy marcada en este Gobierno, tiene un serio impacto en las comuni-

dades más necesitadas —dice—. Con un presupuesto tan rígido, lo que hemos hecho es quitarles subsidios y privilegios a los sectores de arriba, a los ricos, para darlos a los sectores de abajo. Pero no hemos logrado que paguen más».

Una de las primeras y más populares medidas del FMLN fue eliminar las cuotas de facto que se exigían en la Educación y la Sanidad públicas, asegurando un servicio gratuito. En el caso de la Educación, el Gobierno ha comenzado a entregar útiles, zapatos y uniformes a los niños de las familias más pobres. Una iniciativa también pensada para impulsar la recuperación del empleo, ya que todos estos productos deben ser comprados a pequeñas empresas. Los planes de desarrollo también han llegado al campo, con un programa de entrega de fertilizantes y semillas para reducir la importación de alimentos. Según Lorena Peña, en los últimos tiempos de Arena apenas el 20% de los granos básicos que se consumían en El Salvador eran producidos en el país. En 2012, afirma esta diputada, la cifra había trepado hasta el 60%. Otro logro del FMLN fue la aprobación de la ley que regula los precios de los medicamentos, considerados los más caros de todo el continente¹⁴.

También en política exterior se notó el cambio. El Gobierno abrió por primera vez relaciones diplomáticas con Cuba, reconoció el Estado palestino y se posicionó contra los golpes de Estado de Honduras en 2008 y Paraguay en 2012. Sin embargo, el presidente se ha opuesto a la entrada en el ALBA y se ha negado a discutir la salida del TLC con Estados Unidos y el envío de tropas a Afganistán.

Uno de los grandes avances del Gobierno del FMLN ha sido una reducción en el número de asesinatos cometidos por las maras: de catorce a cinco crímenes diarios. El secreto de este éxito ha sido una tregua pactada a principios de 2012 entre el Gobierno y los líderes encarcelados de las dos principales maras para que cese la guerra entre ellas. Los resultados de este alto el fuego, pactado

14. Según un estudio de 2009 de la Universidad de El Salvador, en los años previos a la llegada del nuevo Gobierno del FMLN, el 75% de los fondos disponibles del Ministerio para la compra de medicamentos favorecía a seis empresas, muchas pertenecientes a las familias de los expresidentes Saca y Cristiani, ambos de Arena.

a cambio de beneficios penitenciarios, son polémicos: al mismo tiempo que disminuían los asesinatos, han aumentado las denuncias de desapariciones y de que el poder de las maras es cada vez mayor.

Matrimonios de conveniencia

A la hora de elegir un modelo, Mauricio Funes siempre recurre a Lula o a Barack Obama. El FMLN, por su parte, busca su reflejo en los distintos gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI. Tal como reconoce Lorena Peña se trata de un «matrimonio de conveniencia». Funes solo nunca hubiera llegado a la presidencia. El FMLN lo habría tenido difícil para superar los miedos de los salvadoreños a una *chavezización* del país o a los supuestos obstáculos a las remesas que pondría Estados Unidos, dos de los demonios favoritos de los medios masivos, casi todos en manos de la derecha.

«En la política, con Funes o con quien diablos sea, el matrimonio siempre es de conveniencia. Porque aquí no estamos en sentimentalismos, aquí hay una política pública a la que yo le busco apoyos. Funes es nuestro aliado. Él lleva a otros sectores y ¿los lleva gratis? Ellos tienen puntos. Un programa menos rojo. Ahora hago la pregunta al revés, ¿cómo sería si Arena estuviera gobernando ahorita?, ¿cómo sería la película? Aquí la Policía la dirigían ya los narcos —hasta hay fotografías—, los directores de la Policía iban a las celebraciones con los cárteles de aquí, y con los jefes de pandilla salían a repartir. Ah... ¿cómo estaría el país? ¿Qué hubiera hecho Arena en esta crisis? Hubiera despedido a unos 20.000 como hizo en años anteriores. Hay que ver ante esta realidad yo qué hago y ver qué es lo mejor que puedo hacer en función de mis convicciones en cada momento. Para mí no ha habido nada más acertado que agarrar a Mauricio Funes», defiende Lorena Peña.

La llegada de Funes al Gobierno no solo abrió un escenario inédito para el FMLN. El movimiento social, que siempre se había identificado con el Frente, se encontraba con un problema de delicada solución: ¿cómo presionar al FMLN para que implemente el cambio de modelo sin debilitar al partido y propiciar el regreso de Arena? Por primera vez tenían que encontrar su papel en un país gobernado por la exguerrilla. «Para nosotros, como organizaciones sociales, también es una experiencia nueva —reconoce Pedro

Juan Hernández—. Antes, nosotros teníamos claro que había un Gobierno de derecha que respondía a los intereses de los grupos económicos dominantes de este país. Y contra él nos movilizábamos. Ahora, aunque no sea todo lo que quisiéramos, este no es un Gobierno de la derecha, no responde exactamente a los intereses de esos grupos dominantes. Jamás en mi vida había dicho “este es mi Gobierno”, pero ahora sí puedo decirlo. Nosotros contribuimos de forma decidida a que llegara al poder».

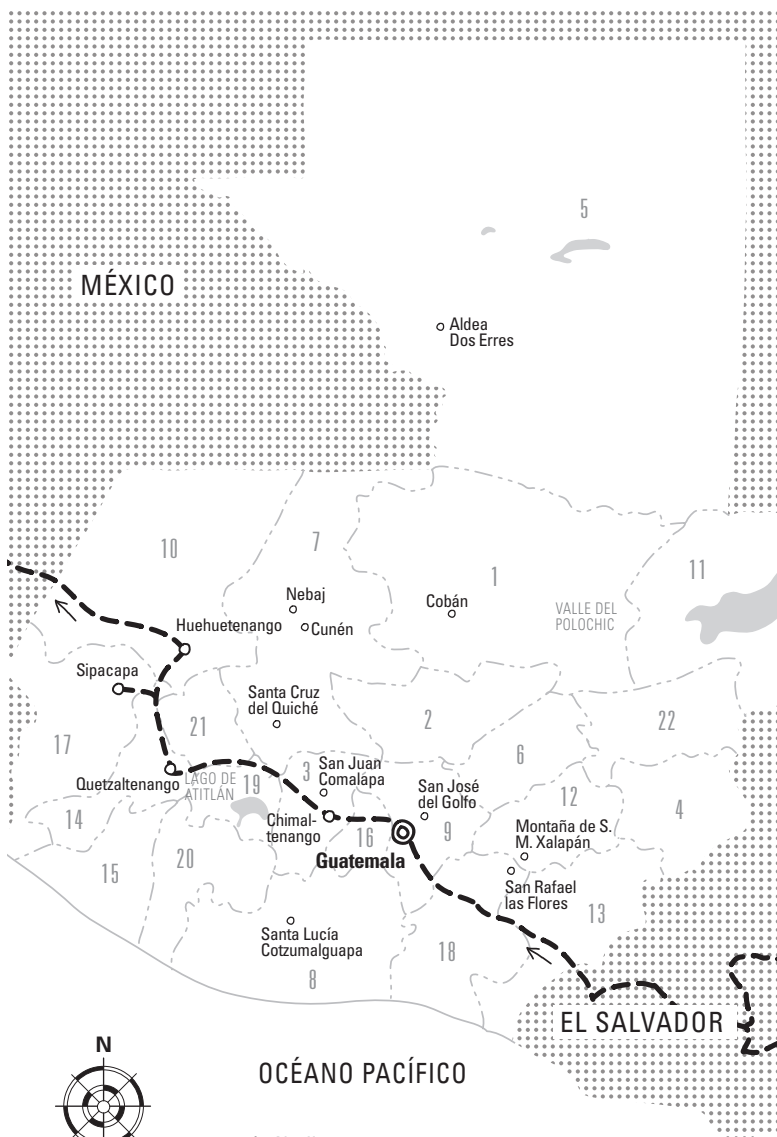
Geovani Montalvo, del *Diario Co Latino*, no comparte la visión de Hernández. Para este periodista, «lo que buscó el FMLN en las elecciones de 2009 fue sacar a Arena del poder, pero no supuso construir un proceso de cambio basado en una agenda socialista, como ha sido la tradición en el partido. El FMLN sacrificó ese punto. Y bajo ese principio hizo alianzas con otros sectores sociales, empresarios, partidos políticos, para conseguir ese objetivo».

Para Montalvo, la consecuencia de esta novedosa situación ha sido la disminución de las movilizaciones sociales: «Buena parte de las organizaciones afines al FMLN se comprometieron a cuidar la imagen del Gobierno, porque una derrota del Gobierno implica también una derrota del partido». Reconoce los avances en Sanidad y Educación, dos ministerios a cargo de pesos pesados del partido, pero señala que en política económica no se han producido cambios.

Como ejemplo, señala la demanda compartida por todo el movimiento social de incorporarse al ALBA. «Funes se ha caracterizado por una política pragmática, muchos sectores están pidiendo la adhesión al ALBA, pero eso no tiene solución, porque no responde a los intereses de Estados Unidos. El Salvador tiene una base militar estadounidense, en Comalapa, y funciona la Escuela Internacional de Policía (ILEA), donde oficiales estadounidenses capacitan a fiscales y policías en El Salvador», dice Montalvo.

Independientemente de lo que ocurra en las siguientes citas electorales, para Zulma Larín, la llegada del FMLN al Gobierno ya ha cambiado la política en el país. «Nunca en El Salvador habíamos sentido sabores de un Gobierno diferente. Primero con cincuenta años de dictadura militar. Luego, otros veinte años con la derecha financiera en el poder. En todo este proceso ha habido un aprendizaje. Tal vez el proceso sea más lento, con todos los

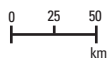
colores que mueven al pueblo. No es que estemos conformes con eso, para nada. Pero es un pilar para la democracia en El Salvador. Quizá nos toque ir de a pasito, pequeños pasos para ir nosotros construyendo los pilares y solucionar los problemas estructurales que nos llevaron a la guerra».



PETÉN Departamentos

○ Ciudades mencionadas

--- Recorrido



- | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 1 Alta Verapaz | 9 Guatemala | 16 Sacatepéquez |
| 2 Baja Verapaz | 10 Huehuetenango | 17 San Marcos |
| 3 Chimaltenango | 11 Izabal | 18 Santa Rosa |
| 4 Chiquimula | 12 Jalapa | 19 Sololá |
| 5 Petén | 13 Jutiapa | 20 Suchitepéquez |
| 6 El Progreso | 14 Quetzaltenango | 21 Totonicapán |
| 7 Quiché | 15 Retalhuleu | 22 Zacapa |
| 8 Escuintla | | |

GUATEMALA

«Todos nos piden que perdonemos, pero
¿a quién perdonamos si nadie dice “yo fui”?»
(Rosalina Tuyuc, fundadora de Conavigua)

¿Problemas de memoria?

DÍA 378 / 6 DE NOVIEMBRE DE 2011 / QUETZALTENANGO

A la salida del colegio de la 12ª Avenida de Quetzaltenango, tres mujeres —presumiblemente hija, madre y abuela— han dispuesto una mesa con fruta escarchada, camotes en dulce y un teléfono inalámbrico para cobrar llamadas por minutos. Es 6 de noviembre de 2011, domingo por la mañana. Dentro, las cocineras del comedor que ocupa la cancha de baloncesto vigilan ollas de treinta litros. Los vendedores de algodón de azúcar intentan transportar su mercancía sin aplastarla por encima de las cabezas de observadores internacionales, periodistas y señoras con huipiles —las blusas tradicionales— que buscan su mesa electoral. Un vendedor del periódico *Prensa Libre* se zafa del tumulto con una pila de ejemplares en la mano: «El pueblo decide», reza el titular impreso sobre las caras enfrentadas de Manuel Baldizón y el exgeneral Otto Pérez Molina. ¿Un empresario de éxito acusado de vínculos con el narcotráfico o un militar sospechoso de perpetrar masacres en un conflicto que dejó 200.000 muertos? Difícil elección.

En el cementerio, a unas cuerdas del colegio electoral, cohabitan los panteones que imitan iglesias góticas con tumbas sencillas pintadas de naranja y turquesa. En un nicho rosa está enterrada una gitana que se hacía llamar Vanushka Barajas. Se dice que murió por amor y que concede deseos a quien se los pide. Su nicho, cubierto por completo de caligrafía adolescente pidiendo novios y novias, se llena de flores el 1 de noviembre. En el Día de Todos los Santos,

la herencia colonial se suma a la tradición maya, donde el cuidado de las tumbas —como recuerdan las familias de desaparecidos— es esencial. «La memoria de los vivos hace la vida de los muertos», dice una placa en la entrada.

Para Claudia Samayoa, activista y directora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, esa es precisamente una de las causas que explican el triunfo del exgeneral Otto Pérez Molina en las elecciones de 2011. «Lo que pasa es que Guatemala tiene un problema de memoria», dice.

Mamita Yunai

Desde Argentina, pasando por Colombia y hasta sus oficinas centrales en Nueva Orleans, la Mamita Yunai —Yunai por United, de United Fruit Company— tenía más peso que muchos Estados latinoamericanos. En 1953, cuando el Gobierno de Jacobo Árbenz quiso terminar con la concentración de la tierra en Guatemala, heredada de la colonia, la Yunai tenía 220.000 hectáreas en el país, el 85% de ellas sin cultivar.

Medio millón de personas se beneficiaron directamente de la reforma, enmarcada en un proceso de cambio mucho más amplio. Diez años antes, en 1944, una oleada de movilizaciones pacíficas había derrocado la dictadura del general Jorge Ubico. El proceso de democratización posterior trajo consigo una nueva constitución, el impulso de la educación pública, el desarrollo industrial y un sistema de Seguridad Social. Pero los cambios se encontraron con la oposición de lo más conservador de la Iglesia católica, el rechazo de la élite cafetalera y la decisiva negativa de la United Fruit Company. En plena reforma agraria, en junio de 1954, el presidente Jacobo Árbenz fue depuesto por un golpe patrocinado por Estados Unidos. La propiedad de la tierra quedó intacta: en 1964, el 62% de los terrenos cultivables estaba en manos del 2,1% de los propietarios. Felicidades Mamita Yunai.

En adelante se sucedieron los gobiernos autoritarios, las desapariciones, las masacres y los ciclos de protestas periódicamente reprimidos con crueldad. En 1960, un año después del triunfo de la Revolución cubana, un fallido levantamiento de los sectores democráticos del Ejército desembocó en la formación de las primeras guerrillas. Pero lo que vendría después sería mucho más que un conflicto entre fuerzas

beligerantes. El combate entre Ejército y guerrilla solo provocó el 10% de las víctimas. El resto de las 200.000 muertes se produjeron por bombardeos y masacres de civiles, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos de lesa humanidad. En estos crímenes, la responsabilidad del Ejército es prácticamente total: el 93% de las violaciones de derechos humanos cometidas en los 36 años de conflicto es achacable al Estado, según detalla el Comité de Esclarecimiento Histórico (CEH), la comisión de la verdad guatemalteca.

Entre 1980 y 1983 —los dos últimos años bajo el régimen del general Efraín Ríos Montt— las masacres se volvieron rutinarias. Las tropas desmembraban, evisceraban, cortaban orejas y lenguas, violaban a las mujeres, y a los niños los estrellaban contra la pared «como aguacates», recuerdan los pobladores de Nebaj, una de las aldeas del territorio maya ixil, de los más castigados por el conflicto. Los campesinos de Nebaj recuerdan también cabezas clavadas con estacas, a modo de advertencia. Las masacres no eran indiscriminadas: ocho de cada diez personas asesinadas en el conflicto eran indígenas, en su gran mayoría mayas, según el CEH.

«¿Cómo pudo suceder esto? ¿Por qué tanta crueldad y tanto horror?», se preguntaba la socióloga Marta Casaús Arzú¹. Para esta profesora de la Universidad Autónoma de Madrid la respuesta a esta pregunta hay que buscarla «en el discurso racista de las élites de poder militares, políticas y económicas, que es el que va a justificar la eliminación». En 1979, esta socióloga participó en una encuesta a 110 miembros de la oligarquía guatemalteca. Entre las ideas más repetidas destacaba la creencia de que los indígenas pertenecían a una «raza inferior», así como la necesidad de «exterminarlos» o de «mejorar la raza» para permitir el progreso del país.

A la vieja táctica contrainsurgente de «quitarle el agua al pez», el Ejército guatemalteco le añadió la de «fusil y frijol», una estrategia en dos etapas. En la primera, el Ejército arrasaba las comunidades, a veces con la ayuda de las Patrullas de Autodefensa Campesina (PAC), una fuerza de 900.000 hombres armados por el Ejército, obligados

1. CASAÚS ARZÚ, M. (2009), «El genocidio: la máxima expresión del racismo en Guatemala, una interpretación histórica y una reflexión», *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, 23 de septiembre de 2009.

a denunciar, cazar y asesinar a otros campesinos indígenas. Ese era el fusil. El frijol eran las «aldeas modelo», una iniciativa impulsada por Ríos Montt con financiación de la Iglesia del Verbo, de la que el general era pastor. En las aldeas modelo, el Ejército concentraba a la población. Para «reeducar» a los campesinos y premiar su lealtad, el Gobierno ofrecía en teoría servicios básicos. Eso sí, dentro de una cerca con púas vigilada por cuarteles militares. «Si están con nosotros los alimentaremos; si no lo están, los mataremos», llegó a decir este pastor protestante convertido en dictador.

En este contexto de desplazamiento forzado, asesinatos y torturas, el actual presidente Otto Pérez Molina «coordinó la quema y el saqueo de la gente», según declaró en 2013 ante un tribunal Hugo Bernal, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército guatemalteco. Según este excolaborador de las Fuerzas Armadas, bajo el seudónimo de *Mayor Tito Arias*, Otto Pérez Molina ordenó ejecuciones y torturas en el llamado triángulo ixil, en el departamento de El Quiché, donde se encuentra Nebaj. «Tenemos las filmaciones en donde incluso el señor [Otto Pérez] está con los masacrados, asesinados, a sus pies, y él explicando la importancia de lo hecho», dice la analista Claudia Samayoa.

Alianzas frente al «Estado finquero»

La victoria electoral de Otto Pérez Molina es «digna de un estudio psicológico», afirma Domingo Hernández Ixcoy, uno de los fundadores en 1978 del Comité de Unidad Campesina (CUC). En su casa de Chimaltenango, este histórico líder maya k'iche' relata uno de los momentos más importantes en la historia de esta organización, el primer sindicato agrario liderado por mayas con presencia en todo el país.

En aquellos años, los trabajadores de las grandes haciendas de la costa, tanto ladinos² como indígenas procedentes del Altiplano, cobraban un quetzal diario por cortar una tonelada de caña o un quintal de café. Un salario que apenas alcanzaba para unos frijoles y unas tortillas de maíz con sal o con chile. Durante varios meses, el

2. La palabra *ladino* se utiliza en general como sinónimo de mestizo. Sin embargo, según explica el analista Andrés Cabanas, «ser mestizo implica voluntad de reconocerse parte de un país pluriétnico, al tiempo que se reconoce autocríticamente el racismo que los mestizos ejercen. El ladino no reconoce este racismo necesariamente».

CUC preparó una huelga en la finca Tehuantepec, la más grande de la costa, donde trabajaban de 3.500 a 5.000 personas. A Domingo le tocó llevar a la finca el dinero y los alimentos aportados por el movimiento estudiantil y los sindicatos para sostener la huelga, que había empezado el 14 de febrero de 1980.

«La huelga en Tehuantepec fue como una chispa. Y a partir de ahí se fue extendiendo hacia las demás fincas. Cuando llegué a Santa Lucía Cotzumalguapa, donde estaban concentrados los trabajadores en huelga, realmente no me imaginaba que iba a ver a 80.000 personas... Impresionante». Cuatro camiones de antimotines y dos camiones del Ejército llegaron al parque de Santa Lucía sobre la una de la tarde para deshacer la huelga. Cuando empezaron a caer las bombas lacrimógenas y el bloque de manifestantes perdía fuerza, Domingo corrió hacia el altoparlante y agarró el micrófono.

—¡Traemos machete, a la próxima bomba que tire la Policía vamos a responder! ¡Todos levanten sus machetes!

Los 80.000 campesinos levantaron sus machetes, recuerda emocionado Domingo. Los trabajadores tuvieron a la Policía rodeada hasta las seis de la tarde. En la espera, un campesino le dijo a un soldado que se aferraba a su arma:

—Si vas a disparar, a tu fusil se le terminan las balas, pero a mi machete no se le termina el filo.

Tras una semana de huelga, la más grande de la historia de Guatemala y la primera en la que unieron fuerzas ladinos e indígenas, los trabajadores consiguieron triplicar su salario. El CUC sacó conclusiones de su fuerza. El «Estado finquero» también. «El poder de convocatoria mostrado por el CUC fue percibido como una grave amenaza por parte del Ejército y un sector empresarial», relata el informe del CEH. En los siguientes meses, varios dirigentes de la huelga fueron asesinados, lo que confirmó la decisión de este sindicato de integrarse en la lucha armada. Una determinación, cuenta Domingo, que se había tomado un mes antes, en enero de 1980, después de que una delegación de campesinos mayas ixiles y k'iches del CUC ocupara pacíficamente la embajada de España para denunciar la política de «tierra arrasada» y las masacres.

Pese a las gestiones del embajador por evitar la matanza, las fuerzas de seguridad incendiaron el edificio. Los gritos de auxilio se escuchaban desde afuera, pero no los dejaron salir, ni permi-

tieron que los bomberos, que esperaban en la puerta del edificio, extinguieran el fuego. Murieron 37 campesinos³. Si antes existía la posibilidad —aunque remota— «de diálogo, de debate ideológico», dice Domingo, después de la masacre no quedaban dudas de que los iban a «matar siempre».

En 1982, el CUC pasó a la clandestinidad y se unió al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), una de las cuatro guerrillas que ese año se integraron en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNNG). «Nos dimos cuenta de que el movimiento guerrillero no era de gente extraña, eran nuestros vecinos, los muchachos con quienes jugábamos al fútbol, los que cargaban la procesión el Viernes Santo, que se volvieron guerrilleros porque no había otra alternativa». La clandestinidad en las comunidades —algunas estaban volcadas por completo en el apoyo al CUC— «era más fácil que en la ciudad», cuenta Domingo. Lo dice por experiencia propia: durante aquellos años le tocó ir a la capital y hacerse pasar por vendedor ambulante.

«En la ciudad no sabes quién es tu vecino, solo tenías contactos muy puntuales», recuerda. La disciplina marcaba los encuentros. Tu contacto te esperaba tres minutos, pasado ese intervalo, se iba. Tenías una segunda oportunidad. Si la perdías te habías desconectado porque no conocías nada más que los seudónimos. Un simple taller de formación requería, en la práctica, la complejidad de un dispositivo militar: había que planificarlo con mucho tiempo, nadie podía conocer el lugar de antemano, cómo iban a entrar los compañeros o en qué vehículos serían trasladados.

A lo largo de los ochenta, mientras el FMLN en El Salvador ganaba fuerza hasta la gran ofensiva de 1989, la guerrilla en Guatemala se deshinchaba. A la brutal represión que sufrió en 1982 y 1983, Domingo le añade otros motivos que explican el reflujo, sobre todo «la no comprensión profunda del papel que pueden desempeñar los pueblos indígenas y que, cuando comenzó la represión, la dirigencia se fue del país». Según el informe del CEH, el discurso de la guerrilla se circunscribía en la mayoría de los casos a la lucha

3. Entre las personas que murieron se encontraba Vicente Menchú Pérez, padre de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.

de clases⁴, dejando de lado las desigualdades y discriminaciones producidas por el color de la piel, la lengua y la cultura en un país con una pesada herencia colonial y un 40% de población indígena⁵.

«La estrategia de terror del Estado era para que nuestro pueblo ya no hable. Se impuso una cuestión mediática, de que estos son malos y hay que eliminarlos», dice Domingo Hernández Ixcoy. A mediados de los ochenta, por temor a ser víctima de tortura y desaparición, nadie se atrevía a protestar. Mejor dicho, casi nadie.

«Las mujeres rompen el terror en Guatemala»

ZONA 2 / CIUDAD DE GUATEMALA

Blanca Bernal reconoció a las otras mujeres que estaban en la morgue. Ella era de la capital y para mantener a sus hijos lavaba, planchaba ropa y vendía tortillas. A la morgue venía buscando a su hijo de veintidós años, bombero, desaparecido el 23 de febrero de 1984. En aquellos años todos los días aparecían tres o cuatro cadáveres en las calles, en los barrancos, jóvenes en su mayoría. A las dos o tres veces de encontrarse con las otras mujeres, ya comenzó la «media plática».

—¿Usted a quién busca? ¿Es su familiar?

«Surgió la idea de hacer una organización para denunciar lo que estaba sucediendo», explica Blanca Bernal, una de las fundadoras en 1984 del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Y lo explica en una sala forrada con los retratos ampliados en blanco y negro de las personas desaparecidas. Ellos con bigote, ellas con blusas. Según cuenta Bernal, los mismos agentes del G-2, el servicio de inteligen-

4. El EGP fue la guerrilla más numerosa dentro de la URNG y una de las que más incluyó, en el discurso y en su estructura, a la población indígena. Para Hernández Ixcoy esta aproximación no terminó de cuajar y llevó a la progresiva separación entre el CUC y el EGP, y entre este y las bases comunitarias.

5. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala, en 2002. Pero son datos polémicos. Como expone el analista Andrés Cabanas, «el INE y el PNUD parten de la autoidentificación de las personas. En un país donde ser indígena es sinónimo de exclusión, esta autoidentificación falsea las estadísticas. Además, las denominaciones del INE son parciales: no reconoce población mestiza».

cia militar, iban a la morgue. El G-2 llegó a acumular tanto poder que era considerado como «un ejército dentro del Ejército». En la morgue se presentaban disfrazados de empleados de la funeraria.

—¿Y usted a quién busca? —también preguntaban—. ¿Por quién viene? Déjeme una foto, su dirección, acá está mi tarjeta, cualquier cosa que sepa le aviso.

Por suerte para los familiares, la asesoría que brindó la CIA y el Ejército de Israel al G-2 no debía de incluir una formación en camuflaje demasiado rigurosa: «Estaban con traje y corbata como los de la funeraria, pero no podían cambiar su corte de pelo y las botas militares —cuenta Bernal—. El mismo guardián de la morgue en una ocasión me dijo que esa gente era del Ejército, que si alguien le decía a él que reconocía alguno de los cuerpos, de inmediato tenía que avisarles a ellos».

—Váyase usted del país, la van a secuestrar a usted también —le decían los abogados a Blanca Bernal cuando ella se empeñaba en preguntar por el paradero de su hijo.

El GAM empezó a convocar una misa cada ocho días en la catedral para recordar a los desaparecidos. Después de las ceremonias siempre se apuntaban a la asociación cinco o seis personas. Se plantaron en las embajadas, en la de España, en la de Francia, en la de Alemania. Los periodistas extranjeros empezaron a cubrir el tema. Todos los viernes hacían plantones frente al palacio de Gobierno para exigir «la liberación o el esclarecimiento». A pesar de que el Ejército hizo desaparecer a 40.000 personas a lo largo del conflicto, la gran mayoría en zonas rurales, el GAM en esos años no dejaba de ser una organización minoritaria y urbana.

En octubre de 1984, el grupo organizó una caminata de 34 kilómetros desde San Lucas Sacatepéquez a la catedral metropolitana. Las previsiones más optimistas auguraban una afluencia de no más de cien personas. Pero por la carretera aparecieron 50.000 manifestantes, mujeres indígenas en su mayoría, que bajaban de las comunidades. Cuando el CUC pasó a la clandestinidad, decenas de miles de personas vieron cómo se les cerraba la última vía para denunciar el genocidio que estaban sufriendo. El GAM se convertiría en una válvula de escape.

Entre 1984 y 1987, las líderes del GAM no dejaron edificio emblemático sin tomar: el Ministerio Público, la Corte Suprema o el Congreso, donde cada viernes celebraban una vigilia. La toma

que tuvo mayor impacto fue la de la catedral, que coincidió con las elecciones que llevaron a Vinicio Cerezo al Gobierno, y que cubrió toda la prensa internacional, recuerda Blanca Bernal. Era finales de 1985 y el GAM no paraba de crecer. De 1984 a 1986 pasó de integrar a un par de decenas de familiares de desaparecidos a estar formado por 1.300 personas, mujeres en su mayoría.

Pese a los asesinatos que pretendían acallarlas, activistas históricas como Blanca Bernal, Aura Elena Farfán, Nineth Montenegro y María Rosario Godoy de Cuevas siguieron levantando su voz. El esposo de Nineth, Fernando García, había desaparecido. El esposo de Rosario también. «Con un cigarrillo en una mano y la bocina en la otra, Rosario dirigía las protestas: “Vivos se los llevaron; vivos los queremos” era el eslogan del GAM», recuerda la fotógrafa Jean-Marie Simon, que con su cámara retrató magistralmente esa época⁶.

Durante la Semana Santa de 1985, las impulsoras del GAM habían acordado por seguridad no moverse de sus casas. Pero Rosario no pudo cumplir el acuerdo. Su hijo de dos años enfermó y salió a buscar pañales acompañada de su hermano. Sus cuerpos aparecieron de madrugada, envueltos en un inverosímil accidente de tráfico. Durante el funeral, sus compañeras se dieron cuenta de que al niño le habían arrancado las uñas.

Al año siguiente, la llegada al Gobierno de Vinicio Cerezo, el primer presidente civil en décadas, despertó expectativas de democratización. Pero no duraron: «Cerezo se enamoró de los militares y empezó a implementar las mismas tácticas. Cuando hacemos evaluación numérica de muertos o desaparecidos, resulta que con Cerezo hubo más que con algunos dictadores», explica Mario Polanco, actual director del GAM. Cuando nació el Grupo de Apoyo Mutuo, este abogado no tenía ningún familiar desaparecido. Sus motivos fueron otros.

Bomberos en las exhumaciones

Desde el suelo del vehículo donde lo transportaban, Mario Polanco solo alcanzaba a ver de reojo una pistola que apuntaba a su cabeza. Los

6. SIMÓN, J.M. (2012), *Eterna primavera, eterna tiranía*, en <http://primavera-tiranía.com/acercade.php>.

secuestradores tenían los pies encima de su cuerpo. «Yo me consideré muerto en ese momento», recuerda Polanco. Entonces tenía quince años. En otro automóvil llevaban a un amigo suyo, de catorce. Era 1981. Durante las cinco horas que el vehículo estuvo dando vueltas, Polanco hacía sus cábalas: ¿Será el Ejército? ¿Será la Policía? ¿Será un escuadrón de la muerte? En cuanto lo bajaron y vio que vestían uniformes, Polanco se apresuró a decir que tenía un familiar militar. «Hay un dicho aquí en Guatemala: “*Chafa* y cura, comida segura”, se ríe el abogado. Después de ser torturados, ambos fueron puestos en libertad. Tuvieron mucha suerte: *solo* estuvieron retenidos durante veinte horas. ¿El motivo del secuestro? Polanco y su amigo colaboraban con la Iglesia en barrios humildes de la ciudad. Para el Ejército, obviamente eran comunistas y, por tanto, objetivo militar.

Polanco se identificó con las personas desaparecidas y en 1986, mientras estudiaba Derecho, se unió al GAM. Participó en las vigiliadas, en las marchas y, más tarde, en las exhumaciones. «Venían personas de El Quiché, de Petén, de todos los departamentos, a poner la denuncia. Era así como entramos en contacto con familiares que sabían dónde habían quedado enterradas las víctimas», explica Aura Elena Farfán, una de las fundadoras del GAM y actual presidenta de la asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), nacida en 1991.

A cada exhumación acudían trescientas personas o más, en su mayoría familiares. El proceso, confiesa Polanco, al principio era muy tosco: las exhumaciones las hacían los bomberos excavando con una pala. «Si en 1987 alguien hubiera planteado que lleváramos una retroexcavadora a una exhumación, “póngala” hubiéramos dicho». Años después, las exhumaciones, ya con la ayuda del equipo argentino de medicina forense, se convirtieron en pruebas concluyentes en los primeros juicios.

La promesa incumplida de Rosalina Tuyuc

En 1988, Domingo Hernández Ixcoy, el líder del CUC, estaba exiliado en El Salvador cuando una organización de mujeres, mayoritariamente viudas, mayoritariamente indígenas, daba a conocer el trabajo que realizaba desde hacía varios años. Denunciaban las masacres y las violaciones, exigían el cese del reclutamiento forzoso

y recuperar los cadáveres de sus familiares para darles «cristiana sepultura». Venían de tres departamentos del Altiplano —El Quiché, Chimaltenango y Totonicapán— y llevaban sus exigencias a la capital. Hernández Ixcoy quedó impresionado por su fuerza. Se acuerda bien del título del documento que escribió entonces sobre la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua): «Las mujeres rompen el terror en Guatemala».

Rosalina Tuyuc acaba de llegar de Chimaltenango y entra apresurada en la sede de Conavigua, que a las ocho de la mañana es un trasiego de mujeres con huipiles y niños que corren por el pasillo de la antigua casona. Tuyuc, líder maya kakchiquel, fue vicepresidenta del Congreso justo después de los acuerdos de paz en 1996 y presidenta de la Comisión Nacional de Resarcimiento, aunque recuerda su etapa institucional con «frustración», por la falta de perspectiva étnica y de género. Tuyuc es una de las fundadoras de Conavigua, que hoy agrupa a más de 15.000 mujeres de 336 comunidades, no solo viudas sino también madres solteras, ladinas e indígenas, campesinas y obreras.

Cuando a principios de los setenta Tuyuc se inició en la vida política con el grupo de jóvenes cristianos de su comunidad, San Juan Comalapa (Chimaltenango), a las mujeres no se les permitía tocar la Biblia, por impuras. Pero como mucha de la gente vinculada al CUC, Rosalina Tuyuc se implicó en programas de alfabetización y se hizo catequista. La líder kakchiquel recuerda con cariño la época anterior a 1979 en su comunidad: «Había pobreza, pero la gente estaba feliz, había entusiasmo por apoyar el desarrollo de las comunidades a través de cooperativas, de artesanía, de animales. Y la movilización comunitaria fue mucho más fuerte a partir del terremoto de 1976».

La catástrofe provocó alrededor de 27.000 muertos y medio millón de personas perdió su casa. Tuyuc se involucró en las tareas de reconstrucción y ayuda. Acabó yéndose a Cobán (Alta Verapaz), más al norte, a estudiar enfermería. A la vuelta descubrió que muchos de sus compañeros del hospital se habían convertido en desaparecidos. Para el Ejército, su compromiso social la convertía también en guerrillera. Se tenía que ir si no quería ser la siguiente. Y se fue. En 1982, para obligar a Rosalina Tuyuc a entregarse, el Ejército secuestró a su padre, lo torturó y lo crucificó. Tres años después, su esposo fue desaparecido por agentes del G-2.

Rosalina Tuyuc dice que no tomó las armas porque cuando se «agarra una es para matar o que te maten». Y tenía dos niños menores de dos años, cuenta. Se fue a Chimaltenango a trabajar como «sirvienta». «Durante muchos años me sentí culpable. Nunca siente uno, cuando empieza, las consecuencias de trabajar por el pueblo», confesaba Tuyuc⁷. Juró «hincada», de rodillas, que no volvería a meterse en política.

Pero en 1986 empezaron a surgir de forma dispersa grupos de diez, quince mujeres indígenas, casi todas viudas, que buscaban ayuda en los ayuntamientos, en las iglesias y denunciaban las violaciones sexuales, las desapariciones y el reclutamiento forzoso de los más jóvenes ante los alcaldes y los comisionados militares. El Ejército se había llevado a sus maridos y, en muchas ocasiones, también a sus padres. No iban a permitir que se llevaran también a sus hijos. «Era quitarnos lo único que nos quedaba. De allí vino la fuerza. Ese largo caminar no lo diseñamos, la lucha nos fue involucrando, nos fue preparando, muchas de las mujeres no sabían ni leer ni escribir», cuenta Tuyuc.

—Rosalina, tú puedes hablar español —le dijeron para convencerla.

Y no pudo mantener su promesa.

Conavigua se constituyó formalmente en septiembre de 1988 y, en menos de un año, ya agrupaba a 3.560 mujeres, que trasladaban sus demandas —cada vez con más fuerza— al Gobierno, a los medios internacionales, a los obispos y a los rectores de universidad. Mujeres indígenas rurales que reclamaban frente a hombres ladinos de la ciudad. A principios de los noventa, las marchas ante el Congreso eran cada vez más numerosas. «Por la misma solidaridad de las comunidades llegamos a agrupar alrededor de 40.000 mujeres», explica Tuyuc. Con sus acciones y su participación en distintas leyes, Conavigua consiguió frenar paulatinamente el reclutamiento forzoso hasta terminar con esta práctica en los últimos años del conflicto.

«Hasta entonces nunca se nos hizo caso, porque éramos mujeres, víctimas... —dice Rosalina Tuyuc—. Luego nuestro trabajo trascendió y ya se visualizó que cuando decíamos exterminio, está-

7. HERNÁNDEZ PICO, J. (2005), «No hay que pintar de maya el Estado, pero...», *Envío*, n. 281, agosto de 2005.

bamos hablando de asesinatos, violaciones sexuales, quema de casas y cosechas. Todo eso junto era el efecto del genocidio. Lo importante es que nunca más se vuelva a repetir».

Después de la tormenta

SANTIAGO ATITLÁN / DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ

La depresión tropical número 12, originada en el Pacífico, se instaló sobre Centroamérica durante más de una semana. Ese octubre de 2011, el agua del lago Atitlán, custodiada por tres volcanes cónicos, subió todavía un poco más hasta cubrir los muelles de las aldeas ribereñas. Las comunidades quedaron aisladas del resto del país durante dos semanas. Entre ellas, solo se podía transitar en lancha o a pie. Cuando las lluvias amainaron, los comuneros hicieron una colecta para alquilar maquinaria y arreglar por su cuenta las carreteras. El Estado, según afirmaban las autoridades, estaba sobrepasado.

Santiago Atitlán, una de las mayores poblaciones del lago, conserva un fuerte sentimiento comunitario. En 1990, sus habitantes, mayas tz'utujil, desmantelaron la base militar del Ejército tras una protesta multitudinaria en la que murieron catorce personas. Santiago Atitlán se convirtió en la primera población de más de 10.000 habitantes sin base militar. Como parte del acuerdo con el Gobierno, los vecinos se comprometieron a mantener ellos mismos la seguridad de las comunidades. Para hacerlo, rechazaron las armas y los refuerzos que les ofreció la Policía. Las rondas se harían con banderas blancas, un palo y un silbato.

Ese mismo año, 60.000 personas participaban en una huelga convocada por el CUC en la Costa Sur, donde volvía a liderar movilizaciones. En 1991, al mismo tiempo que en Sevilla, España, se ultimaban precipitadamente las obras de la Exposición Universal del Quinto Centenario, en Quetzaltenango se celebraba el II Encuentro Indígena, Negro y Popular dentro de la campaña «Quinientos años de resistencia», que mostraba el nuevo impulso de las organizaciones indígenas en todo el continente. Estos sectores sociales, explica Claudia Samayo, van teniendo cada vez más «preeminencia en lo público» en

la medida en que se van ganando espacios de libertad, gracias en buena parte al movimiento de derechos humanos liderado por mujeres.

La labor de las organizaciones sociales que empujaban desde dentro se vio reforzada por el trabajo desde el exilio. En 1992, la líder maya Rigoberta Menchú recibía el Premio Nobel de la Paz por su contribución a difundir lo que estaba ocurriendo en Guatemala. Pese a los repetidos intentos de golpe de Estado a finales de los ochenta, los diálogos con la guerrilla de la URNG prosiguieron y la paz se instaló en el debate público. La amenaza de sanciones y el deseo de garantizar la inversión convencieron al sector empresarial de apoyar el proceso, siempre que no se abordara la cuestión de la tierra.

En 1996, junto con los acuerdos de paz, que acabaron por fin con las PAC, se definió Guatemala como «Estado multiétnico, pluricultural y multilingüe». Pero, para tranquilidad de los grandes propietarios, no se llevó a cabo ninguna reforma agraria. Según Claudia Samayoa, el movimiento de mujeres fue el que mejor aprovechó los acuerdos. «Consiguieron una política nacional de equidad y cambios en la legislación: casi todos los tipos delictivos, figuras tradicionales y conservadoras fueron eliminadas de los códigos. Consiguieron la creación de oficinas municipales de la mujer y presupuesto». Mujeres de distinta cara ideológica, explica Samayoa, se coordinaron para pedir justicia en el caso de las violaciones sexuales en el conflicto.

Las primeras victorias contra la amnesia

Otra de las consecuencias de los acuerdos de paz de 1996 fue la Ley de Reconciliación Nacional, una declaración general de amnistía, que sin embargo excluía «delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles». Un resquicio que fue aprovechado en el caso abierto por el asesinato de Myrna Mack, el primer juicio que envió a prisión a un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado por crímenes cometidos durante el conflicto.

El 11 de septiembre de 1990, la antropóloga Myrna Mack recibió veintisiete puñaladas en menos de un minuto. Sus asaltantes huyeron. La mataron de forma que pareciera un crimen común. Pero no lo fue: el Estado incluso había empleado a vendedores de *hot dogs* para que vigilaran su oficina. La joven antropóloga estudiaba las condiciones de vida de las comunidades de población en

resistencia (CPR), integradas por población desplazada que había huido del Ejército y que se organizaba en las montañas de manera comunitaria. Las CPR llegaron a levantar sus propios sistemas de educación, sanidad y defensa, según los modos ancestrales de los pueblos mayas de la región.

La hermana de Myrna, Helen Mack, una empresaria que nunca había participado en política, se presentó como acusadora particular en el proceso. Su lucha por esclarecer el asesinato la convirtió en una de las más destacadas activistas de los derechos humanos de Guatemala. En febrero de 1993, Helen Mack consiguió la primera condena contra un militar, el sargento Noel de Jesús Beteta, por crímenes realizados en el conflicto interno. Beteta había sido el «autor material» de una ejecución ordenada por el Estado. Pero Helen Mack no se conformó con esta victoria judicial y quiso llegar hasta los mandos militares que ordenaron la muerte de su hermana. En 2002, un tribunal halló culpable a un coronel en activo, Juan Valencia Osorio, por ser «autor intelectual» de un crimen político. Era la primera vez que se llevaba a cabo un proceso judicial por autoría intelectual y la primera vez que oficiales superiores se enfrentaban a los tribunales.

Aunque el coronel escapó, a lo largo del caso se consiguieron grandes avances en materia judicial. La disolución del Estado Mayor Presidencial, responsable del asesinato de Myrna Mack, fue uno de ellos, gracias a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte no solo le dio la razón a Mack, sino que describió la metodología de los asesinatos políticos: planificación y ejecución por estructuras clandestinas, jueces y fiscales engullidos por el aparato de corrupción y el desprestigio de la víctima a través de una campaña de difamación posterior.

En 1996, Mack participó en el grupo fundador del movimiento Alianza contra la Impunidad, junto con otras personas implicadas en la defensa de los derechos humanos, como Rigoberta Menchú y monseñor Gerardi. El obispo Juan Gerardi había sido testigo de la creciente violencia en El Quiché a finales de los setenta. En 1980, el mismo año en que fue asesinado el arzobispo Óscar Romero en El Salvador, Gerardi consiguió escapar de un atentado que pretendía terminar —al igual que en el caso de Romero— con sus críticas a las masacres del Ejército. Tras pasar unos años en el exilio, fue trasladado a la capital y nombrado obispo auxiliar. En 1990, todavía en un con-

texto de altísima represión, Gerardi se convirtió en una figura clave en la creación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag). En 1994, Gerardi, a través de la Odhag, impulsó el informe para la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi).

Gerardi planteaba este proyecto como un esfuerzo que pudiera «generar insumos» para el estudio que había iniciado el Comité de Esclarecimiento Histórico como parte de las negociaciones de paz. Con una población dispersa y que habla veintitrés idiomas distintos, solo una institución como la Iglesia católica, con implantación en todo el país, podía acometer un trabajo tan extenso. Cientos de voluntarios hicieron llegar los cerca de 6.000 testimonios a las oficinas de la Odhag, donde se centralizaron.

Después de tres años de trabajo, el 24 de abril de 1998 se celebró la presentación del informe, con cuatro tomos y 1.500 páginas, que llevaba por título *Guatemala: nunca más*. Acudieron seiscientas personas. Dos días después, Gerardi fue asesinado.

Gerardi: un asesinato en tres tiempos

En cada localidad guatemalteca hay una tortillería Los Tres Tiempos. Una o cientos, dependiendo de la población. Y no son una franquicia, como la conocida cadena de restaurantes de comida rápida Pollo Campero; los tres tiempos hacen referencia a las tres comidas del día: desayuno, almuerzo y cena. Aunque en la zona 1, el centro histórico de la Ciudad de Guatemala, quedan algunas, en el paseo de la Sexta Avenida, recientemente rehabilitado, ahora proliferan las cafeterías y los bares modernos. La iglesia de San Sebastián y un pequeño parque alledaño dan a esta vía. Durante el día, por el parque pasan jóvenes que van a hacer deporte, lavacarros que trabajan en una de las esquinas y lustrabotas. Algunos funcionarios vienen de los muchos edificios públicos de la zona a comer en los puestos callejeros bajo los árboles. Por la noche, el parque se vacía, solo queda una decena de indigentes, que suele dormir junto a la iglesia y la casa parroquial donde vivía monseñor Gerardi.

Cuando Helen Mack llegó allí la noche del 26 de abril de 1998, se encontró con una escena del crimen abarrotada. Habían asesinado al obispo. Su cadáver había aparecido golpeado en el garaje junto a un trozo grande de cemento. Su cara estaba desfigurada. Sus

compañeros de la Odhag se encontraban en estado de *shock*. Mack no dejó de hacer gestiones en toda la madrugada. El periodista Francisco Goldman investigó durante cerca de diez años el caso. En su libro *El arte del asesinato político*⁸, Goldman cuenta que en algún momento de esa larga noche varios de los colaboradores de Gerardi y Helen Mack hicieron un aparte y decidieron crear un equipo de investigación independiente de la Policía. Helen Mack sabía de sobra que si dependía de la Policía el asesinato nunca se esclarecería.

—Chafas cerotes, hijos de la gran puta. Estos pisados fueron —dijo Helen Mack y siguió desplegando su agilidad de gestión, según el relato de Goldman.

Nery Rodenas llegó sobre las dos de la madrugada. Catorce años después, en las oficinas de la Odhag, junto a la catedral, el actual director de este organismo relata las motivaciones de este asesinato político: «Una forma de parar los procesos que podían venir después era desacreditar a quienes elaboraron el informe». Gerardi, además, había comentado en alguna ocasión la posibilidad de iniciar otra investigación sobre los «autores intelectuales». Nery Rodenas habla pausado. Cuenta que Gerardi le hizo la entrevista para entrar en la Odhag, que le gustaba platicar y que le encantaba contar chistes. «Pensaba que estar en la oficina era una forma de protegernos a nosotros». Es probable que creyera que su cargo eclesiástico lo mantenía a salvo.

A tan solo 150 metros del lugar del crimen se ubicaba la sede del Estado Mayor Presidencial, encargado en teoría de proteger al presidente y a su familia. Tal como se demostró poco después, en la práctica, también tenía entre sus tareas investigar y eliminar a adversarios políticos. «Cuando ellos se percatan de que la paz viene y que no hay vuelta de hoja, lo que hacen es convertir en clandestina la estructura de seguridad», afirma la maestra y activista Claudia Samayoa.

Con el objetivo de esclarecer el asesinato, cuatro investigadores que no superaban los treinta años integraron el equipo independiente de la Odhag. Se los empezó a conocer como «Los Intocables». Todos los que se adentraron en el caso y señalaron la posibilidad de que

8. GOLDMAN, F. (2009), *El arte del asesinato político: ¿quién mató al obispo?*, Anagrama, Barcelona, p. 79.

los militares tuvieran algo que ver en la muerte de Gerardi sufrieron amenazas o atentados. «Nos han llamado por teléfono a altas horas de la noche diciéndonos que nos iban a matar, que no nos querían ver vivos», cuenta Rodenas. Durante una temporada, alguien siguió a sus hijos desde la escuela. Tres testigos tuvieron que salir al exilio y otros murieron en extrañas circunstancias. Según relata Goldman, en la casa de la última jueza del caso, Jazmín Barrios, estallaron varias granadas. Sobre su patio sobrevolaba un helicóptero del Ejército haciéndole fotos. Recibió incontables llamadas y visitas amenazantes. Un día, al mirar hacia su tejado, vio a un hombre con metralleta apuntándole. Estuvo a punto de exiliarse, pero no lo hizo.

Pese a todo, el equipo de la Odhag, que compareció como acusación particular del proceso, consiguió reunir pruebas y encontrar a tres testigos claves para el caso: un taxista, un indigente y un militar que había trabajado para Inteligencia escuchando y transcribiendo conversaciones telefónicas de activistas, Rosalina Tuyuc entre otras. Desde 1992, cuando se le asignó a Gerardi un dossier en calidad de enemigo, este testigo lo vigilaba. Y no solo él: el indigente también testificó que había sido contratado por Inteligencia para mantener un ojo sobre el obispo. Era el tiempo número 1: la preparación.

El tiempo número 2 consistía en una ejecución precisa. Al menos dos personas ejecutaron el asesinato, varias vigilaron los accesos a la iglesia para sacar de escena a los perpetradores y otras de alto rango supervisaron la operación desde una tienda de alimentación cercana. Entre los pesos pesados que se encontraban en esa tienda, la famosa tienda de Don Mike, estaba el coronel Byron Lima Estrada, responsable directo al menos de cinco masacres en El Quiché. El informe del Remhi lo nombraba tres veces. Su hijo, Byron Lima Oliva, también implicado en el asesinato, era un joven oficial en la guardia de seguridad del presidente Álvaro Arzú. Era un kaibil tan orgulloso de serlo como para plantarse en el juicio con el uniforme de esta letal, y muy sangrienta, tropa de élite. Según el CEH, el entrenamiento de los kaibiles incluía matar un animal, a veces previamente domesticado por el ejecutor, y comerlo crudo.

El periodista Francisco Goldman explica que los abogados de los militares, el Estado y medios afines se esforzaron en presentar el asesinato de Gerardi como un crimen «doméstico». Una de las

teorías que los abogados defensores pusieron en pie era que Gerardi había descubierto a una banda de criminales saqueadores de iglesias y que ellos lo mataron. Otra, la que tuvo más éxito, aseguraba que se trataba de un crimen pasional entre homosexuales. En la trama del asesinato se incluía —como quien incluye un maniquí en un escaparate— a un perro, un viejo pastor alemán llamado Balú, que llegó incluso a estar detenido por la Policía. Desprestigiar a Gerardi, a su entorno y a la Odhag era el último, pero también el más importante de los objetivos: el tiempo 3.

En el primer año, la investigación «se desvió completamente», nos cuenta Nery Rodenas, que actuó como fiscal auxiliar en el juicio: «Hubo un fiscal del Ministerio Público encargado de la persecución penal que llevó toda la investigación hacia el tema del homosexualismo y la participación del perro Balú. Un antropólogo forense español, José Manuel Reverte Coma, vino a decir que demostraba las heridas de un canino». Cuando la tesis del perro Balú y otras inconsistencias fueron demasiado evidentes, el relevo del fiscal y el juez que habían llevado hasta entonces el caso permitió «una investigación seria y objetiva sobre la participación política».

En 2001, después de tres meses de debates, fueron condenados a treinta años de prisión por ejecución extrajudicial cuatro personas: el joven capitán Byron Lima Oliva, su padre el coronel Byron Lima Estrada, el sargento Obdulio Villanueva —que fue asesinado más tarde— y el sacerdote Mario Orantes. El fallo los identifica como coautores de un asesinato político perpetrado por el Estado y deja abierto el proceso de investigación contra la cadena de mando del Estado Mayor Presidencial. La sentencia por el caso Gerardi marcaba otro hito en la lucha contra la impunidad en Guatemala.

La campaña de descrédito de monseñor Gerardi traspasó de largo las fronteras de Guatemala. En 2003, dos años después de la sentencia, Maite Rico, del periódico español *El País*, y Bertrand La Grange, del diario francés *Le Monde*, publicaron el libro *¿Quién mató al obispo?*⁹ Nery Rodenas se escandaliza al recordarlo. Según

9. RICO, M., y LA GRANGE, B. (2003), *¿Quién mató al obispo? Autopsia de un crimen político*, Planeta, Barcelona.

Rico y La Grange, los abogados defensores de derechos humanos vinculados a la Odhag eran autores intelectuales de una gran conspiración contra los militares. Según ellos, todos los testigos, avalados por la Misión de Naciones Unidas, eran falsos. Mario Vargas Llosa, basándose en ese libro, llegó a escribir en 2004 un artículo en *El País* en el que también reproducía las tesis de los militares. Cuando parecía que ya había terminado, el tiempo se desplegó con toda su fuerza.

«La muerte de Gerardi provocó un retraso de varios años en el seguimiento de los procesos judiciales», dice Nery Rodenas. Sin embargo, para este abogado la sentencia fue histórica: «En Guatemala es muy difícil conseguir justicia. Estos casos son ejemplificantes. De una parte muestran cómo las estructuras paralelas funcionan en Guatemala, cómo los tribunales de justicia muchas veces obedecen a las directivas de estas estructuras. Y también demuestran que en ocasiones es posible conseguir justicia».

La Odhag tradujo el informe *Guatemala: nunca más* al quechú y publicó una edición resumida con imágenes para que fuera distribuida en las comunidades. «Los violadores de los derechos humanos no querían que se conociera la verdad, por esa razón decían que este informe solo servía para mantener las heridas abiertas. Hubo mucha oposición, y hasta la fecha sigue habiéndola», explica Rodenas. En la actualidad, la Odhag actúa como querellante en casos de genocidio en Nebaj y por desapariciones forzadas. También sigue investigando la autoría intelectual del crimen de Gerardi. ¿A que no saben a quién identificó un testigo en la tienda de Don Mike, desde la que se coordinó el asesinato, la misma noche del crimen? Al actual presidente Otto Pérez Molina¹⁰.

Fuegos artificiales sobre la Ciudad de Guatemala

A partir de 2007, el movimiento contra la impunidad experimentó un vuelco inesperado. Años atrás, en 1999, la Fundación Rigoberta Menchú Tum y otras organizaciones de derechos humanos habían

10. GOLDMAN, F. (2009), *El arte...*, op. cit., p. 436.

presentado una denuncia en España, aprovechando la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional¹¹, contra el exgeneral Efraín Ríos Montt y otros altos mandos del Ejército. La orden de captura de Ríos Montt no se hizo efectiva, pero muchas víctimas pudieron por primera vez testificar ante un juez. Según explica Claudia Samayoa, que participó al lado de Rigoberta Menchú en esta primera denuncia, el juicio a Ríos Montt en España sirvió para alentar en Guatemala el debate sobre la necesidad de justicia.

El debate se convirtió en polémica cuando a finales de 2007, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca negó la jurisdicción universal española y paralizó la aplicación de una serie de convenios internacionales. Las acusaciones de complicidad con los altos mandos militares «generaron un cierto revulsivo en jueces y fiscales», explica Claudia Samayoa: ante la mirada acusadora de sectores de la opinión pública, muchos quisieron desmarcarse. Es el caso, según explica esta activista, de la Fiscalía de Chimaltenango, que retomó entonces por su cuenta «un viejo expediente cubierto de polvo». En 2008, el ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj fue condenado a 150 años de prisión en la primera sentencia en el país por desapariciones forzadas. Fue un juicio que abrió camino a todos los siguientes procesos: determinaba que la desaparición forzada era un crimen de «carácter permanente», un delito que se sigue cometiendo hasta que se encuentra el cuerpo del delito.

Para Mario Polanco, otro factor que permitió este vuelco fue la Ley de Comisiones de Postulación. Desde que se aprobó esta norma, en 2009, las reuniones en las que se nombran magistrados son públicas. Muchos grupos, como el GAM y Famdegua, se encargan de asistir y procurar que los jueces de la «lista negra», aquellos que «siempre votan a favor de los militares», no sean ascendidos.

En 2011, Famdegua logró una de las sentencias más relevantes en la historia reciente de Guatemala: cuatro militares fueron conde-

11. Este fuero de la Audiencia Nacional española se convirtió a finales de los noventa en uno de los pocos espacios donde las demandas de las organizaciones de derechos humanos pudieron prosperar y generar debate en países con alto grado de impunidad como Chile, Argentina o Guatemala. Esta disposición fue eliminada tras un acuerdo entre el PP y el PSOE en 2009, limitando la jurisdicción universal a los casos en los que ciudadanos españoles hayan resultado afectados directamente.

nados a 6.060 años de prisión cada uno por la matanza de la aldea Dos Erres, en la que el Ejército torturó y asesinó a 201 personas. Durante el juicio, varios kaibiles que dieron su testimonio como testigos colaboradores contaron cómo fue planificada la masacre y describieron los actos de brutalidad cometidos. Era la primera vez en Guatemala que en un juicio hablaban también los perpetradores.

«Es una dinámica en donde los casos empiezan a apoyarse unos a otros», dice Samayoa. El de Mack apoya al de Gerardi y viceversa, y el de Cusanero les abre camino a los siguientes. Solo entre los juicios que impulsa el GAM, 112 están avanzando, pero hay muchos más. No faltan pruebas para sostenerlos. Y no solo gracias al enorme trabajo de investigación realizado por las organizaciones de derechos. También gracias a algunos golpes de suerte.

Se ha escrito un crimen

El hermano de Aura Elena Farfán, el sindicalista Rubén Almícar, había sido secuestrado y desaparecido en 1984 por el Gobierno de Óscar H. Mejía Vítores. Tiempo después Aura Elena, activista primero del GAM y luego de Famdegua, consiguió acercarse al general. «Nos dijo que Guatemala no era Chile, no era Argentina, no era Perú». Mejía Vítores se refería, cuenta Farfán, a que las organizaciones de derechos no podrían encontrar pruebas que los incriminaran. Pero los hechos no tardaron en contradecirle. Por si fueran poca evidencia las miles de fosas comunes desparramadas por el país, en 1999 salió a la luz un documento salvado milagrosamente de la destrucción, el llamado *Diario militar*. Las 53 páginas mecanografiadas con esmero y taladradas para ser archivadas eran un listado de detenciones realizadas desde 1983 a 1985. Entre las fichas de 183 personas desaparecidas, con su correspondiente foto de carné, se encontraba la del líder sindical Fernando García, esposo desaparecido de una de las fundadoras del GAM, Nineth Montenegro.

La letanía del horror escrito en letra Courier no terminaba ahí. En 2005, la Procuraduría de los Derechos Humanos inspeccionó un antiguo edificio policial para comprobar si había explosivos. Lo que halló fue el archivo histórico de la Policía Nacional, ochenta millones de folios apilados sobre el suelo formando rascacielos de papel mohoso en habitaciones a medio construir. El archivo docu-

mentaba 116 años de la historia de Guatemala, desde la creación de la Policía Nacional, en 1881, hasta la firma de la paz, en 1996. El sorprendente hallazgo completó la información sobre el caso del sindicalista Fernando García. En 2011, dos de los policías que lo secuestraron fueron condenados a cuarenta años de prisión cada uno. El GAM también logró la detención de un mando intermedio y de uno de los mayores mandos del Ejército, el coronel Héctor Rafael Bol de la Cruz. Fue el primer caso en el que se utilizó el material del archivo. Desde entonces, la inesperada y mohosa documentación ha resultado determinante para muchos otros juicios.

«Sí hubo genocidio»

El juicio que levantó más expectativas, tanto en Guatemala como en el resto del mundo, fue el de Efraín Ríos Montt en 2013. Al general se le acusaba de ordenar la muerte de 1.771 indígenas mayas ixiles, una minúscula parte de los 100.000 asesinatos que se produjeron según las estimaciones en su escaso año y medio de Gobierno. Durante los primeros meses de 2013, los noventa testimonios de las matanzas desbordaron la cuota de horror del público presente en las sesiones y proporcionaron desgarrados titulares a la prensa internacional.

El 10 de mayo llegó la sentencia. Tras horas de retraso, leía por fin el veredicto la jueza Jazmín Barrios, la misma que no dejó el país pese a los atentados que sufrió por el caso Gerardi. Con la voz a ratos entrecortada, repasaba los peritajes y las conclusiones hasta llegar al fallo: Ríos Montt era condenado a cincuenta años de prisión por genocidio y treinta años por delitos de lesa humanidad. Un clamor recorrió la sala. Las seiscientas personas presentes, entre activistas, familiares y periodistas, se pusieron de pie. Vítores. Aplausos. Cánticos. Entre los espectadores, unos cien ixiles, las mujeres con huipiles, los hombres con chaquetas rojas y sombreros de paja, se abrazaban, lloraban. Las autoridades indígenas alzaban sus varas de mando tradicional.

La primera noche que Ríos Montt durmió en la cárcel hubo fuegos artificiales sobre la capital. El veredicto, además, ordenaba investigar a todos los responsables de las matanzas, lo que significaba un mandato legal para iniciar la investigación sobre la responsabilidad, entre otros, del actual presidente Otto Pérez Molina. La importancia de la sentencia trascendía las fronteras de Guatemala.

Era la primera vez en América Latina que un jefe de Estado era condenado por delitos de genocidio¹².

La alegría no duró demasiado. A los diez días de la sentencia, la Corte de Constitucionalidad anulaba todo el proceso realizado desde el 19 de abril en adelante, lo que incluía la condena. No invalidaba el juicio, pero, una vez más, los militares conseguían tiempo. Sin embargo, los medios de comunicación nacionales e internacionales ya habían reflejado los testimonios de noventa supervivientes de las masacres y habían servido de altavoz a las acusaciones sobre Otto Pérez Molina. El día del fallo, uno de los testigos, anticipando que el juicio apenas acababa de empezar, decía: «Pase lo que pase, esto ya no nos lo pueden quitar».

Una nueva era para las comunidades mayas

CONGRESO DE LA REPÚBLICA / CIUDAD DE GUATEMALA

«Si los mayas hubieran sido buenos para predecir el futuro, todavía habría mayas». La broma, atribuida al humorista estadounidense Jon Lovett, recorría Facebook y Twitter en los días previos al 21 de diciembre de 2012. Como buenos matemáticos y astrónomos, los antiguos mayas utilizaban el número cero y preveían eclipses. Pero no pronosticaron un desplazamiento del eje de rotación de la Tierra, ni que el Sol recibiría un rayo sincronizador procedente del centro de la galaxia, ni llamaradas solares asesinas. El 21 de diciembre de 2012 simplemente marcó el comienzo del decimotercer *b'aktún*, un periodo de cuatrocientos años, el último de una «cuenta larga» de 5.126. Y sí, Lovett, todavía hay mayas: unos nueve millones entre Honduras, Guatemala, Belice y México.

12. En 2006 fue condenado por genocidio Miguel Etchecolatz, responsable de los centros de exterminio de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, pero no era jefe de Estado. El general Rafael Videla y otros jefes de Estado argentinos fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. En 2009, el expresidente peruano Alberto Fujimori fue condenado por violación de los derechos humanos, pero no por genocidio.

Mientras el Gobierno hacía los preparativos para acoger a más de 150.000 turistas y conmemorar a los antiguos mayas, las organizaciones mayas de ahora criticaban la folclorización de la fecha y le daban un significado muy distinto. El inicio del decimotercer *b'aktún* sirve para «cuestionar de raíz el modelo económico actual», para reconstruir el «pensamiento maya» y «cuestionar la propiedad privada impuesta sobre la madre tierra», escribía Domingo Hernández Ixcoy. El cambio de *b'aktún* coincide con la reorganización del movimiento indígena en torno a la defensa del territorio frente a la imposición de megaproyectos, una nueva vía, según denuncian, para la privatización de los recursos naturales y la expropiación de las tierras comunales. Entre 2005 y 2012, junto con los clásicos cortes de ruta y las marchas, las comunidades han realizado 74 consultas populares que han rechazado la entrega del territorio a las multinacionales¹³. Aunque no son vinculantes, muchas de ellas han conseguido paralizar los proyectos.

En nombre del «desarrollo»

Un grupo de unos diez hombres camina a paso ágil por la Sexta Avenida. Van dejando atrás afiches a medio despegar con las caras en blanco y negro de personas desaparecidas. Dejan atrás la escultura de un puma, pintada de laca celeste, colocada en la remodelación del paseo. Algunos llevan sombreros de paja con una franja negra; otros, bolsos de lana roja y elegantes chaquetas rojas con bordados en negro. Vienen del municipio de Nebaj, en el departamento de El Quiché. Son ixiles y se dirigen al Congreso de la República a pedir explicaciones. En mayo de 2011, un ingeniero del Fondo de Tierras se presentó en Tz'albal, una microrregión de catorce comunidades situada en Nebaj, para decirles a los vecinos que estaban viviendo sobre un «bien de la nación», que esa tierra ya no era suya¹⁴.

Tras meses de investigación, en octubre de ese año, las autoridades indígenas locales convocaron una asamblea. Setecientas personas

13. *Informe anual de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos*, Naciones Unidas, enero de 2013, p. 16.

14. Datos extraídos de las entrevistas realizadas por los autores durante la visita de los representantes de Nebaj al Congreso y del artículo de DECOODT, F. (2011), «Esta tierra es nuestra», *Otrámerica*, 4 de diciembre de 2011.

venidas de todas las comunidades cercanas se quedaron atónitas al conocer que su tierra había sido nacionalizada en 1984. Y que se lo comunicaban veintiocho años después. «En 1982, todas nuestras aldeas habían sido destruidas y la mayoría de la población del municipio de Nebaj había sido desplazada. Fue entonces cuando el Inta¹⁵, junto al Ejército, comenzó a medir nuestras tierras», explica el profesor ixil Jacinto Ramírez Cobo, ya en una de las salas del Congreso. La operación estaba coordinada por un oficial que se hacía llamar *Tito Arias*, el seudónimo de Otto Pérez Molina, cuenta Ramírez Cobo.

Las 33 *caballerías* expropiadas, 1.495 hectáreas de tierras comunales, fueron nacionalizadas gracias a una ley aprobada durante el Gobierno militar de Carlos Arana Osorio en 1970, el Decreto 60/70, que estipulaba de «interés público y urgencia nacional» el establecimiento de zonas de *desarrollo* agrario en los departamentos del norte del país. El proyecto estaba enfocado a la producción y exportación de petróleo, energía eléctrica, minerales, madera y monocultivos. De su gestión se encargarían mandos militares y personas afines. Los departamentos calificados de «interés público» coinciden precisamente con los de mayor cantidad de masacres y desplazados. Para Claudia Samayoa, esta situación solo puede entenderse rompiendo algunos esquemas: los militares no se limitaban a defender los intereses de la oligarquía, sino que pretendían reemplazarla como clase dominante.

«La propuesta del Ejército en la década de los setenta fue tratar de cambiar la correlación de fuerzas entre el Ejército y la oligarquía. Para los militares era inaceptable que ellos estuvieran poniendo los muertos y los ricos siguieran así de ricos». Esta búsqueda de ascenso social del Ejército, sostiene Samayoa, le llevó a vincularse primero con el contrabando y más tarde con el narcotráfico. Y en esa estratégica escalada, el proyecto contrainsurgente resultaba útil para la acumulación de territorio y recursos.

—¿Quién dio la orden de nacionalizar nuestra tierra? ¿Para qué nacionalizaron nuestra tierra? —pregunta ante los representantes del Congreso el líder ixil Francisco Chávez Raymundo, aunque conoce de sobra la respuesta. En el municipio de Nebaj, en te-

15. Instituto Nacional para la Transformación Agraria.

ritorios que pertenecían a la comunidad desde 1903, ya se han entregado dos concesiones para hidroeléctricas y otra para minería.

Mientras los comuneros relatan cómo vieron morir a sus familias, cómo fueron quemadas sus milpas —las plantaciones de maíz— y cómo descubrieron que su tierra fue robada, los funcionarios cuchichean. Uno de ellos incluso atiende el móvil.

—Queremos que nos devuelvan la tierra como estaba. No podemos hablar de desarrollo mientras nos han quitado nuestra tierra. Por esta razón decretaron la ley, para robar. Por eso venimos ante ustedes. Disculpen, pero esta es la realidad —dice el comunero Herrera Bernal. El representante de la institución de tierras comienza a bostezar y a charlar con el compañero. Herrera Bernal levanta la voz—. ¡Disculpen, señores, si soy analfabeto! ¡Ahí no podemos hablar de desarrollo!

Para la mayoría de las comunidades guatemaltecas, el término desarrollo es una palabra con trampa. En nombre del «desarrollo» se expropiaron las tierras ejidales y comunales para entregarlas a los grandes hacendados cafetaleros durante la reforma liberal de 1870. Un siglo más tarde, el Gobierno militar decretó la Ley 60/70 dentro del Plan de Desarrollo, y más tarde creaba los «polos de desarrollo», que no eran otra cosa que las famosas «aldeas modelo». En la actualidad, bajo un nuevo «Plan de Desarrollo» avanza el proyecto Franja Transversal del Norte y el Corredor Tecnológico Interoceánico, un canal seco de 140 metros de ancho que incluiría una autopista, un oleoducto y una vía de ferrocarril para conectar el Pacífico y el Atlántico. En nombre del «desarrollo» continúan los desplazamientos. Es el caso de las comunidades del valle del Polochic, en el departamento de Alta Verapaz, donde 769 familias fueron desalojadas violentamente en 2011 para entregar sus tierras a proyectos de cultivo de caña de azúcar y palma aceitera.

«Las autoridades por sí solas no pueden decidir sobre el desarrollo de las comunidades», afirma Pedro Sicá, que también forma parte de la comitiva. El municipio del que procede, Cunén, vecino de Nebaj, realizó en 2009 la primera consulta comunitaria en la zona: 18.924 personas de 71 comunidades votaron en contra de la implementación de megaproyectos y en concreto contra la minería metálica. «El resultado es que los pueblos se juntan y emiten una misma opinión y dejan plasmado en un acuerdo municipal el respeto sobre esa decisión. Las mismas comunidades vigilan el cumplimiento», dice Sicá.

«Sipacapa no se vende»

SIPACAPA / DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

La camioneta sube las cuestas sin asfaltar que llevan a Sipacapa, situada a 1.970 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de San Marcos. A unas cuadas del parque central, rodeada de jardines, está la iglesia principal, pintada de verde agua y blanco. Junto a ella, sobre un tejado de chapa roja todavía se lee en grandes letras blancas el lema del movimiento: «Sipacapa no se vende». En este municipio se realizó en 2005 la primera consulta popular en Guatemala para prohibir la megaminería.

Élida Martina López Tojil, líder comunitaria de Sipacapa, recuerda el momento en que la minera Montana Exploradora, subsidiaria de la multinacional GoldCorp, se acercó a la iglesia para comprar el terreno. Las hermanas religiosas y el párroco de entonces, el padre Roberto Marani, se negaron a vender. La Montana se había instalado en 2003 en el municipio vecino, San Miguel de Ixtahuacán, donde se encuentra el 85% de las instalaciones de la mina Marlin. El otro 15% de la explotación, de veinte kilómetros cuadrados, estaba ya instalado en Sipacapa. Su intención era ampliar el proyecto en este municipio.

«Una mina con tecnología segura para la salud humana y el medio ambiente fortaleciendo el desarrollo integral en San Marcos». Los anuncios de la Marlin no convencieron a los 17.500 sipacapenses. La propuesta, que incluía una mina subterránea y otra a cielo abierto, pretendía utilizar seis toneladas de cianuro por día y 250.000 litros de agua por hora. Desde que se instalaron en el municipio vecino, las comunidades de Sipacapa ya sufrían problemas de abastecimiento. No hacía falta una gran investigación para conocer los desastres ambientales y sociales causados por GoldCorp en sus proyectos mineros anteriores: Bajo de la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, en Argentina; o la mina San Martín, en el Valle de Siria, en Honduras.

«Vinieron del Banco Mundial. Nos entrevistaron, dijeron que ellos estaban financiando y que nos iban a dar un apoyo. Creen que nosotros somos unos tontitos. Pero no, nosotros queremos nuestras tierras. Aquí la tierra produce de todo», explica doña Élida bajo el tejado rojo de la casa parroquial. En 2004, el Banco Mundial otorgó

a la Montana un préstamo de 45 millones de dólares¹⁶. Tras meses de coordinación, las trece comunidades de Sipacapa celebraron el 18 de junio de 2005 una consulta popular simultánea. Cada una según su fórmula: mano alzada, con una cruz en una casilla, con una huella digital... En todos los casos, bajo la supervisión de observadores internacionales, se levantó acta. Los días previos la minera imprimió *volantes* diciendo que la votación se había suspendido. Pero los vecinos de Sipacapa tenían medios para desmentirlo. Durante todo el proceso, la radio local habilitó un número de teléfono para que la población pudiera participar. Ese sábado de 2005, Sipacapa se convertía en el primer municipio de Guatemala en celebrar una consulta para oponerse a los megaproyectos. Una aldea aprobó la mina, otra se abstuvo y otras once la rechazaron. El alcalde del pueblo se comprometió a respetar la decisión. Sipacapa se convertía en un ejemplo para otras comunidades guatemaltecas, sobre todo indígenas, que no tardaron en trasladar la fórmula a sus territorios.

En el departamento vecino de Huehuetenango, al año siguiente, se realizaron cinco consultas que imitaban la experiencia de Sipacapa, cuenta Francisco *Chico* Mateo, de la Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH). Desde entonces, se han celebrado cerca de treinta consultas en el departamento. Como novedad, cuenta Chico, se realizaron por municipio y por comunidad lingüística, declarando sus territorios libres de minería a cielo abierto.

En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó la suspensión de la mina Marlin. El fallo de la CIDH se basa en un estudio de la Universidad de Michigan, que encontró un elevado nivel de contaminación en el río y en la sangre de los habitantes de la zona. Según la Corte, hay dieciocho comunidades en peligro. Aunque la consulta de Sipacapa impidió la ampliación de la mina, no pudo evitar que el proyecto siguiera operando en el vecino municipio de San Miguel. Ni tampoco en el sector del municipio de Sipacapa que ya ocupaba. En 2010, la empresa comenzó a pagar las regalías que corresponden a Sipacapa por ese 15%. En ese momento se inició el declive del movimiento antiminerero en este municipio.

16. REVENGA, Á. (2005), documental *Sipacapa no se vende*.

Algunos de los dirigentes más implicados en la consulta «se voltearon para apoyar a la mina», cuenta doña Élide. Ocho millones de quetzales, unos 980.000 dólares, no suponen una diferencia para la multinacional. Concretamente, representan el 0,19% de los quinientos millones de dólares que la minera obtuvo por la exportación de oro y plata en 2010, según sus propios datos. Pero para un municipio como Sipacapa, con el 84% de la población bajo el umbral de la pobreza, semejante inyección de dinero tiene un significado muy distinto.

Sin embargo, para doña Élide, esos fondos «no rinden», no compensan la contaminación y las divisiones que están produciendo en las comunidades. Un estudio realizado por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala¹⁷ concluía que los costos económicos, ambientales y sociales para la sociedad guatemalteca y, en especial, para las comunidades vecinas a la explotación, suman más de 176 millones de dólares anuales. Según este mismo informe, en 2008 el costo que significaba para Guatemala la mina Marlin era tres veces y medio superior al beneficio que sacaba de ella¹⁸. ¿Qué pasará en 2019 cuando cierre la mina, los pozos subterráneos estén agotados y las fuentes de agua potable se hayan contaminado tal como prevén los estudios de impacto ambiental independientes? ¿De qué vivirán unas comunidades que consiguen subsistir gracias a la agricultura y la ganadería?

«Lo bueno es que ahorita la gente ya despertó», sonríe doña Élide. Para enfrentar el empuje minero, que se presenta como única alternativa a la pobreza, más de trescientas personas de siete comunidades de la zona han creado la Asociación de Caficultores y Agricultores de Sipacapa. Están plantando café en la parte baja, manzanas en la parte media y hortalizas en la parte alta. En términos alimentarios, Guatemala ha pasado en los últimos años de ser un país autosuficiente a depender del maíz, el arroz y el trigo importados de Estados Unidos, según denuncia la ONG Intermón Oxfam. En 2011, doña Élide se animó a plantar una cuerda —un tercio de hectárea aproximadamente— de melocotón.

17. ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (2010), *Estudio costo-beneficio de la mina Marlin en San Marcos*, Asies, Ciudad de Guatemala, p. 11.

18. VIVES, J., y MURPHY, M. (2011), «¿Perciben los indígenas que son justas estas inversiones?», *Envío*, n. 355, octubre de 2011.

Se ha hecho de noche. Empieza a chispear. Las gotas suenan como piedras en el tejado de chapa. «¡Qué bueno que llueva, porque necesitamos agua para el café!», exclama doña Élide¹⁹.

«El primer territorio, el territorio-cuerpo»

El 10 de julio de 2012, Domingo Hernández Ixcoy entró en su casa y se la encontró patas arriba. En el suelo había un papel con un croquis de la vivienda y, en el anverso, una instrucción que lo dejó helado: «Dejar el mensaje sobre el cadáver». Nunca sabrá si los asaltantes olvidaron por error el papel o lo dejaron como advertencia. Sí cree saber quiénes estaban detrás del atentado: «Los grupos que impulsan la minería y las hidroeléctricas en Guatemala». Unos días antes, también habían sido atacadas dos líderes comunitarias, Lolita Chávez y Yolanda Oquelí, con las que Domingo había participado en una serie de movilizaciones contra la imposición de megaproyectos. Oquelí iba conduciendo su coche cuando dos motoristas le dispararon tres tiros. Una de las balas le rozó varios órganos internos antes de alojarse junto a su columna vertebral. Pero sobrevivió.

Actualmente, Oquelí sigue participando en la lucha de San José del Golfo. En este municipio cercano a Ciudad de Guatemala, las comunidades organizadas lograron detener en 2012 la mina El Tambor cuando todavía se encontraba en su primera etapa. Junto a Yolanda Oquelí, alrededor de un millar de personas se instalaron en marzo de 2012 en un lugar llamado La Puya, a la entrada del codiciado terreno. En septiembre de 2013, el campamento no solo seguía en pie, sino que contaba con cocina, bodega, baños, dormitorios, tribuna y dos altares, uno maya y otro católico. Un grupo de mujeres gestiona la logística y alimenta a los participantes con frijoles, tortillas, verduras y atol²⁰, que proveen las comunidades cercanas. La toma retrasó los trabajos y la minera Radius Gold Inc. no consiguió terminar la exploración en el tiempo de

19. Por desgracia, Élide Martina López Tojil no llegó a ver la lucha antiminera de Sipacapa reflejada en este libro. Murió a principios de abril de 2012.

20. Bebida a base de maíz que se sirve caliente, muy común en Centroamérica.

licencia, que venció en 2012. La multinacional acabó vendiendo la concesión a precio de saldo²¹.

El compromiso de Oquelí y de tantas líderes comunitarias no es inusual en el país. Por su papel en la lucha contra las multinacionales mineras, contra las hidroeléctricas y por el cuidado de la salud en las comunidades, las mujeres están desempeñando un papel clave en el proceso de consultas²².

Uno de los casos más destacados es el de las mujeres xincas²³. Desde 2004, han desarrollado un proceso de organización política para defender sus derechos y los bienes naturales de la Montaña de Santa María Xalapán, donde no solo hay minerales sino también petróleo. «Defender un territorio ancestral de la minería sin defender los cuerpos de las mujeres de la violencia sexual es una incoherencia cósmica y política», dice la feminista maya y xinca Lorena Cabnal. Desde la óptica del feminismo comunitario, defiende el concepto de *territorio-cuerpo*: «La defensa del territorio-tierra para que esté libre de minería está muy generalizada, pero dentro de este viven los cuerpos de mujeres, que están viviendo opresiones y violencias. De ahí nace el planteamiento de recuperación y defensa del primer territorio, que es el territorio-cuerpo»²⁴.

En el año 2012 fueron asesinadas 573 mujeres en Guatemala. Una violencia y un control que también se ejerce dentro de los propios pueblos indígenas: «Hay mujeres que siguen teniendo un precio en las comunidades, que son intercambiadas por tres gallinas, cinco vacas o 20.000 quetzales», denuncia Cabnal. Para esta líder comunitaria conviene «abrazar aquello aprendido de las

21. En septiembre de 2013 una de las comunidades opositoras a El Tambor, San José Nacahuil, sufrió un ataque por parte de sicarios que dejó once personas muertas y quince gravemente heridas.

22. GIOVANNA TEJIDO, M., y SCHRAMM, W. (2010), *Mujeres indígenas guatemaltecas en resistencia: protagonistas en la defensa comunitaria de la Madre Tierra y sus bienes naturales*, Brigadas de Paz Internacionales, Valencia.

23. Según el censo de 2002, hay 16.214 xincas en Guatemala. Por su parte, el Parlamento del Pueblo Xinca, la autoridad tradicional, defiende que existen 164.613 personas que se reconocen como tales.

24. GRACIA, T. DE, y JIMÉNEZ, D. (2013), «Defender un territorio de la minería sin defender a las mujeres de la violencia sexual es una incoherencia», *Diagonal*, 23 de mayo de 2013.

abuelas y los abuelos del ciclo de la tierra y criticar y descartar lo que permite la opresión de las mujeres»²⁵.

En junio de 2011, la multinacional Tahoe Resources anunció un plan de exploración en el municipio de San Rafael Las Flores, en el departamento de Santa Rosa, que afectaba a tres áreas, una de ellas la vecina comunidad indígena de la Montaña de Santa María Xalapán. Las comunidades xincas iniciaron un proceso de organización para oponerse a la explotación de este yacimiento de plata, conocido como El Escobal. Ocho consultas, la última realizada a principios de 2013, rechazaron el proyecto. A medida que crecía la oposición, también crecía la violencia de las autoridades y de la empresa minera contra la población. El 19 de marzo de 2013, cuatro miembros del Parlamento xinca fueron secuestrados cuando regresaban de una de las consultas comunitarias en la aldea Volcancito. Los tres que lograron escapar señalan a la minera y al Partido Patriota del presidente Otto Pérez Molina como responsables del hecho. El secretario de la junta directiva del Parlamento xinca, Exactación Marcos Ucelo, no logró huir: su cadáver fue hallado dentro de un vehículo con las manos atadas.

La oposición de las comunidades no evitó que el Gobierno renovara la licencia de la minera. Como respuesta, en abril de 2013, los comuneros se plantaron en la entrada de El Escobal para impedir el paso a la multinacional. La intervención de la seguridad privada de la empresa provocó dos muertos y varios heridos. El Gobierno decretó el estado de sitio y envió un contingente de 3.500 militares, kaibiles incluidos. Con un listado de personas buscadas en la mano, situaron *checkpoints* en todas las vías. Más allá de la pintura de las tanquetas, que ahora imita un pixelado en tonos verdes estilo Tetrix, los habitantes de la zona encontraban alarmantes semejanzas con la década de los ochenta. Pérez Molina debió pensar que no quería otro bloqueo similar al de San José del Golfo. Acciones cada vez más comunes y más aceptadas por la opinión pública.

Según una encuesta realizada por el periódico *Prensa Libre*, en enero de 2013, el 66% de la población guatemalteca estaba en contra de la megaminería, más si sus ingresos son bajos (68%), y más

25. OTRAMÉRICA TV (2013), «El feminismo comunitario visibiliza el patriarcado ancestral originario», 1 de mayo de 2013.

incluso si viven en zonas rurales (72%). Para Domingo Hernández Ixcoy, lo que antes se justificaba porque los indios eran «infeles» o «no tenían alma» hoy se justifica diciendo que «no saben», que son «ignorantes», que no entienden cómo «generar desarrollo». Sin embargo, según Hernández Ixcoy, ese 66% ya no «se deja engañar», en gran parte, gracias al proceso de consultas.

Una lección de democracia

Domingo Hernández Ixcoy explica cómo el discurso militar se coló y se instaló en las comunidades durante los años ochenta, potenciado por el sentimiento de culpa espolcado por las diferentes iglesias. «Como yo me organicé, me pasó esto, mejor no me hubiera organizado» es uno de los argumentos enquistados entre quienes se opusieron a un modelo que los excluía. La propaganda llegó a convencer a grandes sectores de la población de que los desmanes del Ejército estaban justificados y que los únicos capaces de garantizar el orden y la seguridad eran los militares, apunta Hernández Ixcoy, sobre todo ante el incremento de la violencia de las maras y el crimen organizado en los últimos años. Aunque en los departamentos de mayor presencia indígena Otto Pérez no fue el candidato más votado en las elecciones de 2011, la diferencia con Manuel Baldizón fue mínima. Claudia Samayoa lo llama «populismo de la seguridad».

Otras razones que permiten entender la victoria de este general retirado y sus relativamente altos niveles de aceptación son las distintas fórmulas de clientelismo político que ha desarrollado, según denunciaban los partidos de la oposición. Guatemala también participa del *boom* de los planes sociales, muchos de ellos iniciados con el Gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom. Bono Seguro, Bolsa Segura, Comedores Solidarios y Comedores Móviles, Hambre Cero o Súper Tortilla son algunos de los nombres de estos programas. Una forma de «combatir la pobreza» que es criticada desde los movimientos sociales. En una de las concentraciones durante el juicio a Ríos Montt, en los primeros meses de 2013, una joven indígena sostenía una pancarta reveladora: «Prefiero no recibir fertilizante a negar el genocidio».

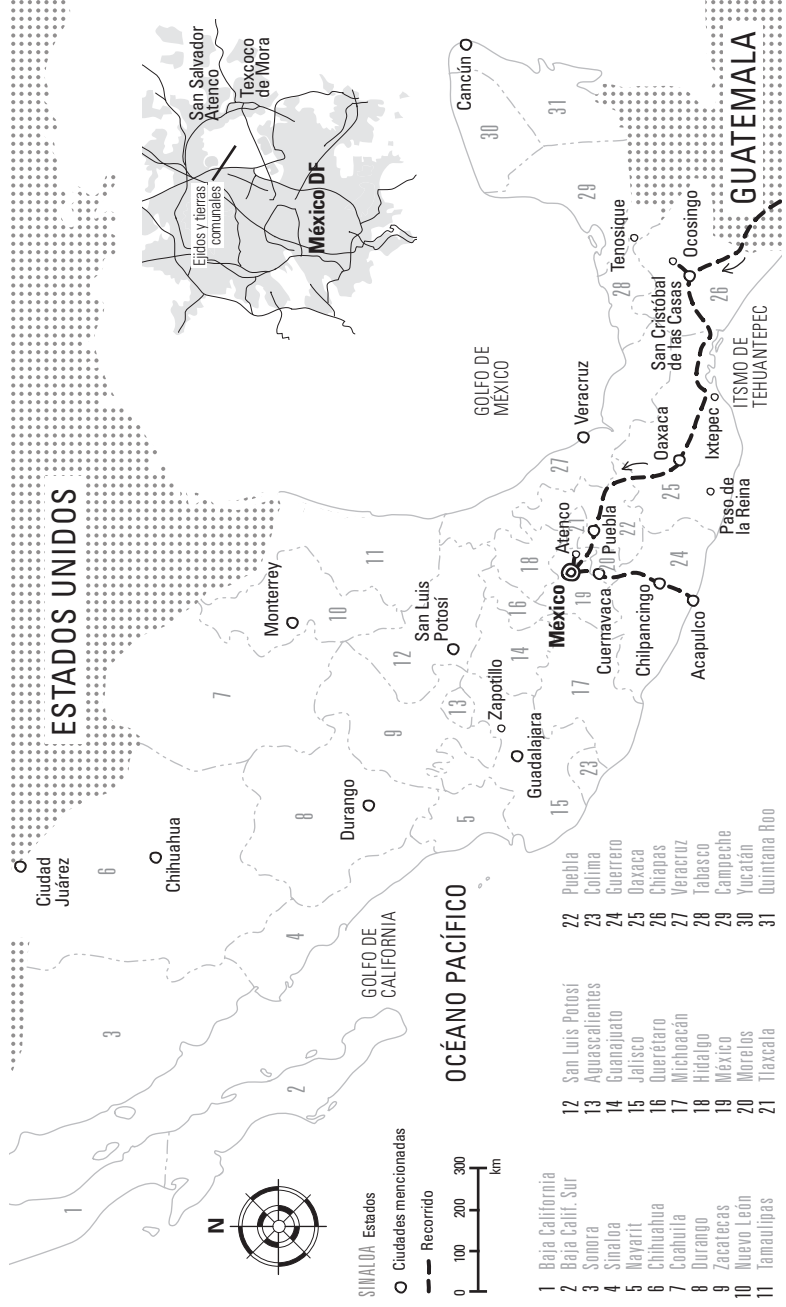
El conflicto dividió y descabezó liderazgos, explica Hernández Ixcoy, y ese déficit de «buenas cabezas» en el movimiento popular y en el movimiento indígena, dice, ha lastrado la movilización durante

años. El actual proceso de consultas hoy está consiguiendo reparar ese tejido social dañado. «Las consultas demuestran cómo la articulación es posible. El sector de magisterio, las iglesias, las radios comunitarias, los centros de salud, se han involucrado en esto», explica María Concepción Sáenz, directora del Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala. «A las empresas no les importa si eres indígena o mestizo. No les importa si eres patriota, si eres FRG²⁶ o URNG, porque si estás en esa región vas a ser afectado por ese proyecto. Y eso permite una mayor unificación», dice Hernández Ixcoy.

«Yo diría que hay un resurgimiento muy profundo —resume Rosalina Tuyuc—. Es algo novedoso porque ya no son las organizaciones las que abanderan estas luchas, sino que son las comunidades». Y no es que se firme el convenio 169 de la OIT y las comunidades se lancen a hacer consultas «así de repente», añade Hernández Ixcoy: «La consulta es una forma ya ancestral de ponerse de acuerdo, de apoyar o rechazar un proyecto. En las consultas participan personas de diferentes edades, los niños de la escuela opinan, hablan, votan, participan. Es diferente. Implica, además, una relación con la madre tierra, una cosmovisión».

Las consultas y la renovada lucha por el territorio están ayudando «a reconstruir un tejido social destruido por la guerra», dice Chico Mateo, de la Asamblea Departamental de Huehuetenango. «Con esta articulación, estamos en un proceso de reflexión sobre el modelo económico —añade—. Si no queremos la minería, entonces ¿qué modelo necesitamos?». Un proceso que, además, está innovando en las fórmulas anquilosadas de la democracia liberal: «Es un valioso trabajo de prevención. Estamos haciendo un trabajo pacífico y eminentemente democrático. Es más, con el proceso de consultas le estamos diciendo al Estado de Guatemala que aquí está la verdadera democracia, participativa». Según añade Claudia Samayo, la alta participación de jóvenes facilita los procesos de reconciliación, incluso entre familias enfrentadas por el conflicto. A través de las consultas, se está empezando a «superar el miedo», resume.

26. El Partido Patriota (PP) es la formación de Otto Pérez Molina. El Frente Republicano Guatemalteco (FRG) fue el partido fundado por Efraín Ríos Montt.



ESTADOS UNIDOS

GUATEMALA

OCEANO PACÍFICO

GOLFO DE MEXICO

GOLFO DE CALIFORNIA



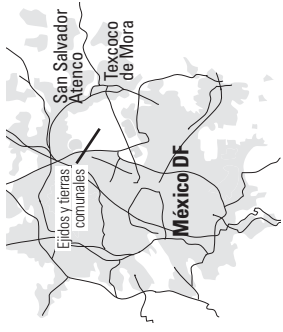
SINALOA Estados

○ Ciudades mencionadas

--- Recorrido



- 1 Baja California
- 2 Baja Calif. Sur
- 3 Sonora
- 4 Sinaloa
- 5 Nayarit
- 6 Chihuahua
- 7 Coahuila
- 8 Durango
- 9 Zacatecas
- 10 Nuevo León
- 11 Tamaulipas
- 12 San Luis Potosí
- 13 Aguascalientes
- 14 Guanajuato
- 15 Jalisco
- 16 Querétaro
- 17 Michoacán
- 18 Hidalgo
- 19 México
- 20 Morelos
- 21 Tlaxcala
- 22 Puebla
- 23 Colima
- 24 Guerrero
- 25 Oaxaca
- 26 Chiapas
- 27 Veracruz
- 28 Tabasco
- 29 Campeche
- 30 Yucatán
- 31 Quintana Roo



Ciudad Juárez

Chihuahua

Monterrey

Durango

San Luis Potosí

Guadalajara

Puebla

Colima

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Atenco

Puebla

Cuernavaca

Chilpancingo

Acapulco

Paso de la Reina

Ixttepec

Ocosingo

San Cristóbal de las Casas

Veracruz

Tenosique

Cancún

ITSMO DE TEHUANTEPEC

México DF

San Salvador Atenco

Texcoco de Mora

Eidos y tierras comunales

San Salvador Atenco

San Salvador Atenco

MÉXICO

«Ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los veinte años». (Poema de José Emilio Pacheco, *Islas a la deriva*, 1976)

«Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada» (EZLN, Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, 1996)

De Chiapas al cielo

DÍA 396 / 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 / SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Unas 50.000 personas con pasamontañas y pañuelos rojos desbordaron cinco municipios de Chiapas el 21 de diciembre de 2012. Algunas con huipiles, algunos con chubasqueros —el decimotercer *b'aktún* empezó con lluvia—, recorrieron a buen paso las calles de San Cristóbal de las Casas y las aceras que hace tan solo unas décadas tenían prohibido pisar. Con esta marcha, los zapatistas le daban la *bienvenida* al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se había mantenido en el poder durante más de setenta años y, tras un receso de doce, volvía al Gobierno. Si el PRI no se había ido —la narcodictadura PRIerfecta, que dicen— tampoco el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Marcharon en silencio. «¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo», decían los zapatistas.

El EZLN lleva asombrando a México y al mundo dos décadas, desde su primera aparición pública en la madrugada del 1 de enero de 1994. El día que entraba en vigor el TLC con Estados Unidos y Canadá, 4.500 indígenas tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales,

zoques y mames tomaron el control de siete cabeceras municipales, entre ellas San Cristóbal de las Casas. Un día antes del levantamiento, el subcomandante Marcos enumeraba las principales demandas del EZLN: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Eran indígenas, pero aclararon que «no solo luchaban por los pueblos indios», se reclamaban como «herederos de los verdaderos forjadores» de la nación, como defensores de la soberanía frente al neoliberalismo, se identificaban con los millones de desposeídos que se resisten a «morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de setenta años».

Cuarenta y seis rebeldes cayeron en los doce días que duró el combate. En las filas del Ejército, murieron veintisiete soldados y 180 militares fueron hechos prisioneros, entre ellos el exgobernador de Chiapas, el odiado general Absalón Castellanos Domínguez. Pero fueron liberados al poco tiempo. Los indígenas se empeñaban en marcar las diferencias: nada de robos, ni secuestros, ni muertes fuera del combate.

Querían marchar a la capital y derrocar al «usurpador», Carlos Salinas de Gortari, que había llegado al poder a través de un fraude electoral en 1988, y volver a desatar «la bola», como se le llama a la Revolución mexicana. Pero el EZLN no era una guerrilla más. Sí lo era en 1983 cuando seis personas, tres mestizas y tres indígenas, se instalaron en la selva Lacandona, con la idea de crear un foco revolucionario con el referente de las guerrillas de los sesenta y los setenta. Pero no se encontraron con un terreno baldío, con «unas masas a las que hay que iluminar», dice Lola Cubells, del Col.lectiu Zapatista El Caragol. Por el contrario descubrieron unas comunidades indígenas «fuertemente radicalizadas y concienciadas» tras años de trabajo organizativo influido por diversos grupos maoístas, pero sobre todo por la teología de la liberación, representada en Chiapas por la diócesis de San Cristóbal y el obispo Samuel Ruiz. Tras diez años de aprendizaje y convivencia en las comunidades, la propuesta política del EZLN se había convertido en una síntesis entre el marxismo y la cosmovisión y las prácticas indígenas. No era la última guerrilla del siglo xx como se dijo en un primer momento. Era más bien «el primer movimiento social antisistémico del siglo XXI», apunta Carlos Antonio Aguirre Rojas, profesor de Historia de

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro del colectivo *Contrahistorias*¹.

El germen

La caída del precio de las materias primas, entre ellas el petróleo, a partir de 1981, la devaluación de las monedas nacionales y el fin del crédito barato, enterraron México y buena parte de América Latina en la crisis. Si en adelante estos países querían acceder a la financiación internacional tendrían que aplicar una batería de medidas neoliberales ideadas en la Escuela de Chicago, y defendidas por el FMI y el Banco Mundial, como única vía posible para salir del «subdesarrollo».

La aplicación de las políticas neoliberales comenzó en México con la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988), pero se intensificó durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Muchos sectores de la economía que seguían en manos del Estado —telefonía, bancos, industrias estratégicas, ferrocarriles, líneas aéreas— fueron privatizados. En el campo, la apertura de las fronteras a los productos agropecuarios y el crecimiento de la agroindustria obligó a cientos de miles de campesinos a emigrar a la periferia de las grandes ciudades y a Estados Unidos. Entre 1984 y 1994, la cifra de pobres en México creció en doce millones².

Aún hoy en Chiapas, el Estado más pobre de México, el 78,5% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, según datos oficiales. Y la situación era aún peor en los años ochenta y noventa, dice Marina Pagés, coordinadora del equipo del Servicio Internacional para la Paz en San Cristóbal: «La población indígena vivía en unas condiciones extremas, de esclavitud, incluso con derecho de pernada».

En este contexto de pobreza y discriminación, crecía lentamente el germen del EZLN en la selva Lacandona. Según afirma Aguirre

1. Aguirre Rojas es autor de varios libros sobre zapatismo, entre ellos *Chiapas, planeta Tierra* (2006) y *Mandar obedeciendo: las lecciones políticas del neozapatismo mexicano* (2007). Es también autor del libro *Antimanual del Buen Rebelde* (2013).

2. LUSTIG, N., y SZEKELY, M. (1997), *La evolución de la pobreza y la desigualdad en México*, Programa de Desarrollo de la ONU, Banco Interamericano de Desarrollo y CEPAL.

Rojas, un factor determinó la transformación de esta guerrilla en un movimiento de masas: en 1992, como parte de la adaptación a la firma del TLC, el Gobierno aprobó la reforma del artículo 27 de la Constitución para permitir la compraventa de ejidos y tierras comunales. Este «último agravio», explica Aguirre Rojas, provocó que el EZLN experimentara un «crecimiento explosivo» hasta convertirse en un movimiento de decenas de miles de personas, como se reflejó aquel 1 de enero de 1994.

Dos semanas después del alzamiento zapatista, el 12 de enero de 1994, miles de mexicanos colmaron el Zócalo, la plaza principal de la capital, para pedir el alto el fuego en Chiapas. Las concentraciones se replicaron en muchas capitales del mundo. Para acabar con la rebelión habían sido movilizados más de 3.000 soldados, tanquetas, helicópteros y aviones. El EZLN se encontró con un panorama inesperado, «un mundo que entendió sus causas, pero que marchó y se movilizó para que callaran los fusiles de ambos lados», escribía la periodista Gloria Muñoz, directora de la revista *Desinformémonos*³. Para Muñoz, que vivió durante esos años en comunidades zapatistas, ese fue un momento decisivo. Al EZLN se le presentaba una disyuntiva trascendental: o bien «escuchar a la sociedad civil, detenerse y enfrentar un mundo desconocido, para lo que obviamente no estaba preparado; o de otra manera, continuar con la lucha armada, para la que sí se preparó durante largos diez años». Eligieron la primera opción, «utilizar la palabra como principal arma, escuchar, preguntar y tratar de entender los reclamos de esa sociedad civil que lo apoyó, pero no lo siguió con un fusil al hombro».

La movilización paró la guerra y obligó al Gobierno a dialogar, aunque nunca se detuvieron los atentados y los hostigamientos contra las bases zapatistas. Dos años después, en febrero de 1996, se firmaron los Acuerdos de San Andrés. El Gobierno se comprometía, entre otras cuestiones, a reformar la Constitución para reconocer la autonomía indígena, el derecho a elegir sus propios representantes y a decidir sobre los recursos naturales en sus territorios. Era mucho menos de lo que pedían los zapatistas y solo reflejaba las

3. MUÑOZ RAMÍREZ, G., (2003), *EZLN: 20 y 10. El fuego y la palabra*, Virus, Barcelona, p. 107.

exigencias referentes a los pueblos indígenas, cuando los delegados gubernamentales y del EZLN también habían negociado durante meses puntos que afectaban a toda la población mexicana, como la justicia, la democracia o el desarrollo. Pero el EZLN decidió poner su firma en los acuerdos como muestra de buena voluntad. Sin embargo, poco tiempo después el Gobierno se retractó. El secretario de Gobernación Emilio Chuayffet adujo en su descargo haber firmado los acuerdos bajo la influencia de «una conocida bebida llamada chinchón». Durante los siguientes años el cumplimiento de estos acuerdos se convirtió en una de las principales demandas del EZLN.

Una tra(d)ición muy mexicana

Al mismo tiempo que negociaba, el Gobierno había desplegado una estrategia basada en la «guerra de baja intensidad desarrollada por los gringos después de Vietnam», explica Marina Pagés. Como resultaba imposible descabezar al movimiento, optó por dividir a las comunidades y recurrir a grupos paramilitares. Máscara Roja, uno de los seis grupos paramilitares creados en Chiapas desde el levantamiento, fue el responsable el 22 de diciembre de 1997 de la masacre de Acteal. Ese día asesinó a 45 tzotziles de la asociación civil Las Abejas, un grupo simpatizante del EZLN. Durante las seis horas de balacera, la fuerza pública se mantuvo a doscientos metros sin intervenir.

Según Aguirre Rojas, la matanza fue una respuesta del Gobierno al éxito que tuvo ese año la marcha de 1.111 zapatistas a la capital, entre otros factores. Para las comunidades, Acteal fue una confirmación más de que el Gobierno no tenía interés real en el diálogo⁴. Pero no recurrieron a los fusiles —que todavía guardan— sino a la movilización. En 1998, el EZLN convocaba una consulta popular en todo el país sobre los Acuerdos de San Andrés. Cinco mil zapatistas salieron de sus comunidades. Fuera de Chiapas, 120.000 personas y 1.141 organizaciones participaron en la preparación de la consulta. Se realizaron miles de asambleas. En marzo de 1999,

4. Los diálogos se habían interrumpido a mediados de 1996 por distintos casos de persecución política, entre ellos la sentencia por «terrorismo» para los luchadores sociales Javier Elorriaga y Sebastián Entzin.

más de 2,8 millones de personas votaron por el cumplimiento de los acuerdos. Aunque el Gobierno ignoró los resultados, la consulta sirvió para estrechar lazos con otros movimientos del país, una táctica de apoyo mutuo que los zapatistas ya habían impulsado desde sus inicios. En 1996, el I Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, el «intergaláctico», fue considerado como el punto de partida del movimiento antiglobalización. Ese mismo año, el Congreso Nacional Indígena, en el que participó la comandanta Ramona, una de las figuras más destacadas del EZLN, permitió avanzar en la coordinación entre los 65 pueblos originarios que habitan en territorio mexicano.

En el año 2000, Vicente Fox, exgerente de Coca-Cola reconvertido en candidato del derechista Partido Acción Nacional (PAN), incluía entre sus promesas electorales resolver la situación de Chiapas en quince minutos. Sus dotes para el *marketing* y el descrédito del PRI —en el que habían influido decisivamente los zapatistas— hicieron que tuviera la oportunidad de demostrarlo. Después de setenta años, el PRI dejaba el Gobierno. Pero pronto quedó claro que el PAN no era muy distinto.

A principios de 2001, el EZLN inició la Marcha del Color de la Tierra para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, una marcha de dos semanas que fue recibida el 11 de marzo en México DF por más de un millón de personas. La amplia comandancia del EZLN entraba en el Zócalo sobre un tráiler blanco y con una enorme bandera que decía «Nunca más un México sin nosotros».

Tras una primera negativa, el Congreso permitió que el EZLN expusiera sus argumentos ante el hemiciclo. Cuando todos los diputados —casi todos hombres blancos y mestizos— esperaban que hablara el subcomandante Marcos, a la tribuna subió la comandanta Esther: «Por mi voz habla la voz de millones de indígenas de todo el país». La comandanta habló de la triple discriminación de las mujeres pobres indígenas y exigió delante de las cámaras de televisión el cumplimiento de los acuerdos. En ese momento, sostiene Aguirre Rojas, todavía los zapatistas albergaban alguna esperanza de que «un sector de la clase política se hiciera eco de las demandas indígenas».

Pero un mes más tarde, en abril de 2001, todas las formaciones políticas, incluyendo el Partido de la Revolución Democrática (PRD), rechazaron la iniciativa de ley derivada de los Acuerdos de

San Andrés y votaron una contrarreforma diametralmente opuesta. Para el EZLN fue una traición mayúscula. Con el rechazo a los acuerdos «se establece un foso, una brecha y ahí se entierra cualquier posibilidad de colaboración entre el zapatismo y las expresiones de la izquierda institucional», dice Luis Hernández Navarro, director de opinión de *La Jornada*.

Una política muy otra

Pero los zapatistas no iban a esperar a que el «mal gobierno» cumpliera su parte para ejercer sus derechos. Ya desde finales de 1994, 38 municipios se habían declarado «en rebeldía» y se organizaban según la práctica del «mandar obedeciendo», que consiste, según resume Aguirre Rojas, en que «el Gobierno simplemente ejecuta los acuerdos de la asamblea». Los zapatistas lo dicen todavía más sencillo: «Si el que manda no obedece al pueblo, lo corretean, se sale de autoridad y entra otro».

La «gran traición» de la clase política llevó a que el EZLN decidiera el cumplimiento «solo y por su lado (o sea lo que se dice *unilateralmente*, porque es solo un lado) de los Acuerdos de San Andrés», ironizaba una de las declaraciones zapatistas. Durante cuatro años, desde 2001 hasta 2005, el EZLN se centró en fortalecer las comunidades y la autonomía indígena que el Gobierno y los partidos políticos le negaban.

En 2003, los municipios autónomos zapatistas se organizaron en cinco comunidades de comunidades llamadas caracoles⁵. Los programas de salud, educación, equidad de género, los proyectos productivos y «el sistema de justicia con valores que no son de castigo», cuenta Marina Pagés, son administrados en los caracoles por las llamadas Juntas de Buen Gobierno. Con la creación de los caracoles no solo se avanzaba en la autonomía de las comunidades con respecto al «mal gobierno», sino también en la autonomía con respecto al aparato militar zapatista. «El EZLN con su parte político-militar se estaba metiendo en las decisiones que le tocaban a las autoridades

5. Entre noviembre y diciembre de 2011, los caracoles se encontraban cerrados, por lo que resultó imposible realizar entrevistas en las comunidades zapatistas.

democráticas, como quien dice *civiles*», reconocía la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Una deriva que era preciso solucionar para que «lo político» mande y «lo militar» obedezca. «Los caracoles son un ejemplo de democracia directa que sí funciona. El poder es una escuela más que un fin en sí», dice Marina Pagés en relación con la rotación de los miembros de las Juntas de Buen Gobierno. Aunque resulta imposible saber con exactitud cuántas personas viven en los caracoles, Aguirre Rojas no duda en afirmar que las bases zapatistas están formadas por centenares de miles de indígenas.

Mercedes Olivera, fundadora del Centro de los Derechos de la Mujer en Chiapas, lleva trabajando con las comunidades desde los años setenta. Para esta antropóloga y militante, «el zapatismo renovó las esperanzas y las posibilidades de cambio social y político» frente a una «izquierda tradicional que es excluyente y permite la acumulación de poder». Para esta histórica pensadora feminista, entre 1994 y 2002 el EZLN realizó grandes avances «para la construcción de su proyecto político», pero «parecía quedarse a nivel de discurso porque en las propias comunidades seguía habiendo mucha desigualdad». Y pone como ejemplo la situación de las mujeres: «Si toda la sociedad es sexista, ¿por magia iban a ser los zapatistas diferentes?».

El esfuerzo por identificar estos problemas y establecer una prioridad para resolverlos es para Olivera «una de las enseñanzas políticas más importantes, porque aun sacrificando la extensión de sus bases, consolidan el proyecto político, hacia dentro». A partir de 2003, al mismo tiempo que se consolidaban los caracoles, Olivera participó en talleres «de género» en las comunidades zapatistas.

El EZLN ha demostrado «la posibilidad de otras formas de vida y de relacionarse», afirma la activista. Un buen ejemplo es la sanidad, gratuita en las comunidades. En los caracoles, las clínicas están abiertas también para la gente que viene de otras zonas. «Tienen que pagarse la medicina, pero no la consulta. La gran ventaja que valoran los indígenas no zapatistas es que hablan el idioma y respetan la idea de intimidad», explica Marina Pagés. Otro de los logros es la estructura de la educación, «totalmente diferente al sistema escolar occidental y el eje de la vida política y de las transformaciones», cuenta Mercedes Olivera. Pero, más allá de todos estos cambios palpables, Olivera insiste en que «el principal logro es haber persistido, a pesar de la guerra, las oposiciones, las críticas y el aislamiento».

En 2005, el EZLN dio a conocer su Sexta Declaración de la Selva Lacandona, donde hacía un llamamiento a la unión y al apoyo mutuo de «todos los explotados y desposeídos de México» y del mundo. Más de 15.000 colectivos, grandes y pequeños, y personas a título individual firmaron como adherentes. «En México, vamos a caminar por todo el país, por las ruinas que ha dejado la guerra neoliberal y por las resistencias que, atrincheradas, en él florecen», decía la Sexta Declaración. El 1 de enero de 2006, coincidiendo con el año electoral, el EZLN inició La Otra Campaña, una interminable marcha por los 32 estados mexicanos. Con este recorrido los zapatistas pretendían construir un programa político en el que se unieran las demandas de todos los sectores excluidos por el neoliberalismo. Diferentes y unidos, venía a decir Marcos mientras enseñaba ante la multitud un bordado de franjas de colores paralelas tejido por la comandanta Ramona, que murió ese año. Para Lola Cubells, La Otra Campaña colocó a intelectuales, activistas y simpatizantes de la izquierda electoral ante una «bifurcación». Si antes parecía compatible proclamarse zapatista y apoyar el PRD, después de la Sexta Declaración esto ya no era posible, dice Cubells, había que elegir: «Abajo o arriba». Muchos de ellos pidieron el voto para el PRD. Muchos otros se sumaron a la larga marcha del EZLN, que con los hechos demostraba que hay otra forma de hacer política.

«Un nuevo estilo de revolución»

El levantamiento zapatista y el ideario que fue construyendo el EZLN se convirtieron en un referente inevitable. «Contra su propia voluntad y su modestia, los zapatistas se vuelven la vanguardia de los movimientos sociales en México. Su impacto es mundial», dice Aguirre Rojas. Para este historiador, la experiencia zapatista es un hito para entender cómo «los movimientos indígenas pasan de una posición defensiva a una ofensiva».

El neozapatismo es uno de los movimientos que mayor visibilidad ha tenido en la historia, apunta Gustavo Esteva, intelectual «desprofesionalizado», activista y fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca. Para explicar una de las principales ideas de este movimiento, que la revolución no implica necesariamente la toma del poder, Esteva describe una de las fotos más famosas de la Revo-

lución mexicana. El 6 de diciembre de 1914, las tropas de Pancho Villa y Emiliano Zapata acaban de entrar en la ciudad de México. Pancho Villa en la silla presidencial y Zapata, sentado a su lado, con su legendario sombrero en las rodillas, posan ante la cámara. Esteva recrea lo que estaban pensando mientras el fotógrafo accionaba el obturador: «¿Qué estamos haciendo aquí? No hicimos la revolución para gobernar este pinche país. Hicimos la revolución por nuestra tierra, por nuestra libertad». Los dos líderes no tardaron en volver al frente. Años después fueron asesinados mientras luchaban por esos dos ideales. Según Esteva, los neozapatistas recuperan aquella idea: «Estamos en lo mismo. No se trata de conquistar el poder. No se trata de levantarnos para nosotros gobernar sobre los demás».

«Su discurso representa un cambio en la lucha transformadora. Cuando plantean que no se trata de tomar el poder para hacer la revolución, esa postura trae el ánimo de transformación a ti y a mí, a cada pueblo y cada comunidad. Se dejan de ver las cosas desde el Estado y hacia el Estado. Es un nuevo estilo de revolución y esto prende. Estamos en un momento de despertar colectivo», dice Esteva. Para este analista, el significado decisivo del neozapatismo es la fuerza de un «no transformador», que va más allá de la resistencia. Gracias al neozapatismo, «hay una posibilidad mucho mejor de lucha», que influye en miles de movimientos de México y de todo el mundo.

La lógica cambia y lleva a un paradigma de «movimientos no violentos pero convencidos de llevar sus demandas hasta el fondo», dice Hernández Navarro. «Hubo un cambio de horizonte del nivel de radicalidad que pueden tener los movimientos: se puede, se puede o, por lo menos, se intenta. Antes del zapatismo un movimiento como Atenco hubiera sido prácticamente imposible».

Los machetes de Atenco

SAN SALVADOR ATENCO / ESTADO DE MÉXICO

El Registro Civil recibe al año unas 7.000 rectificaciones de actas de nacimiento. Algunas modificaciones son cuestión de una letra mal escrita; otras buscan dejar atrás nombres como Pocahontas,

Ladydi, Anivderev —por el aniversario de la Revolución mexicana—, Terminator o Masiosare. ¿Que quién es Masiosare? En el acervo popular, Masiosare es «un extraño enemigo» por confusión con la letra del himno nacional: «Mas si osare un extraño enemigo / profanar con su planta tu suelo».

Para San Salvador Atenco, en las afueras de México DF, el líder del PAN Vicente Fox se convirtió el 22 de octubre de 2001 en su Masiosare o Terminator. Ese día, el presidente emitió diecinueve decretos para expropiar 5.474 hectáreas de los municipios de Atenco, Chimalhuacán y Texcoco para construir un nuevo aeropuerto para la ciudad de México. El proyecto abarcaba terrenos de quince pueblos y expropiaba mil hectáreas, el 90% del territorio de San Salvador Atenco, una zona dedicada principalmente a la agricultura en pequeñas parcelas. La mayor parte de los ejidatarios, que no habían sido consultados, se enteraron por las noticias de que el Gobierno les compraría el metro cuadrado a 7,20 pesos (0,43 euros). Todas las personas que vivían de la actividad agrícola pero no eran propietarias no recibirían compensación alguna.

En los pueblos afectados se convocaron asambleas de urgencia. La conclusión fue que la tierra no se vendía. El día después del decreto, cerca de quinientos campesinos de Atenco bloquearon la carretera federal Texcoco-Lechería. En la mano llevaban su instrumento de trabajo, el machete, que desde entonces se convirtió en el símbolo de su resistencia. No había terminado noviembre, y entre 3.000 y 5.000 personas habían llevado ya tres veces su demanda, y sus machetes, al Zócalo del DF. Unos meses más tarde fundaban el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Cuando se acercaba la Navidad, una fuente anónima avisó de que el Ejército iba a ocupar las tierras en disputa, así que el Frente plantó tiendas de campaña para vigilar el terreno día y noche.

Como casi todo el mundo en la zona, Heriberto Salas lleva el machete en la barra de su bicicleta. Para este integrante del FPDT, el despliegue de fuerza del movimiento solo se explica por la tradición de lucha en la zona. Desde finales de los setenta, contra el alza de impuestos; luego, por el agua potable y la luz; y, a mediados de los ochenta, para impedir la extracción de agua para surtir al DF. Según explica Heriberto, entonces se consiguió frenar los pozos, pero el movimiento acabó descomponiéndose por intereses partidistas.

«Esa experiencia de lucha se recoge en 2001. Y volvimos a poner condiciones: aquí ningún partido va a entrar».

Memoria del agua

En una de las zonas comunes de los ejidos, en un cerro junto a una extensa nopalera⁶, hay unos troncos a modo de mesa y un círculo de piedras para cocinar bajo la sombra de un árbol. Hoy domingo, Felipe Lauro Cruz es de los primeros en llegar. «Al poniente iban a estar las pistas», dice señalando una amplia área de pasto llano. Junto a él, su hija juega a cazar chapulines, pequeños y comestibles saltamontes. «Aquí tienes como para mantenerte: un maicito, unos nopales, unos quintoniles [una planta medicinal]. En el aeropuerto no seríamos más que trabajadores mal pagados por el contratista». A Felipe le preocupaba vender la tierra y que su familia tuviera que malvivir o emigrar.

Los terrenos donde se iban a emplazar el aeropuerto y un gran corredor industrial eran parte del lago, ya seco, de Texcoco. Más allá de los campos de cultivo, se distingue entre la contaminación la ciudad de México —el Detritus Federal como la llaman—, la tercera ciudad más poblada del mundo, con 27 millones de habitantes, según el último censo.

Las intervenciones titánicas en el lago Texcoco no son ajenas a la historia del DF. La antigua capital azteca, Tenochtitlán, estaba construida en una isla en el lago, con calzadas que la conectaban con la orilla. En 1521, Hernán Cortés ordenó rellenar extensos sectores del lago con toneladas y toneladas de escombros para penetrar en la ciudad, ya en esa época una de las más grandes del mundo, con 300.000 habitantes. Desde entonces, se entubaron ríos, se desecaron amplios sectores y se deforestaron otros. Los terrenos en disputa son de las pocas partes del antiguo lago Texcoco que quedan sin urbanizar, una gigantesca mancha verde en el desparramado mapa grisáceo del DF.

—Todas estas tierras pertenecían a los hacendados. —Filemón Rojas Ramos, uno de los integrantes del FPDT, señala los campos de cultivo—. Cuando se les expropió, hubo la repartición. La sangre

6. El nopal es un cactus utilizado en la cocina mexicana y uno de los símbolos nacionales. También tiene usos medicinales. En España se conoce como chumbera.

de nuestros abuelos no se puede vender, no se negocia, por eso fue la revolución, por la tierra.

A partir de enero de 2002, el FPDT empezó a requisar las máquinas y camionetas que aparecían para realizar estudios de mecánica de suelos. Mientras tanto, avanzaban las diecisiete demandas de amparo y las marchas machete en mano. En marzo, emplazaron al Gobierno a un debate público. Hasta el Auditorio Nacional se desplazaron veinte ejidatarios a caballo acompañados de autobuses, gente a pie y algún que otro perro. Los jinetes cabalgaron sobre el asfalto con enormes banderas mexicanas. Ningún representante del Gobierno se presentó a la cita.

Medirle el agua a los camotes⁷

La carne y los nopales se han dorado sobre el fuego en una plancha metálica ahuecada y apoyada sobre las piedras. Ahora se calientan las tortillas. Entre la decena de personas que rodean el tronco hecho mesa está Héctor Galindo, uno de los cientos de estudiantes que acompañaron al Frente en sus marchas y que se convirtió en abogado del FPDT sin haber terminado la carrera. Unos años antes había formado parte del Consejo General de Huelga de la UNAM, un movimiento que consiguió entre 1999 y 2000, tras diez meses de huelga, que esta universidad pública siguiera siendo gratuita.

—¡Me enchilé! —se queja alguien, taco en mano.

Bajo el árbol continúa la narración de la historia de Atenco. En mayo de 2002, la justicia anunció acciones penales contra seis miembros del FPDT. La tensión aumentó hasta que el 11 de julio una marcha de 120 personas fue reprimida por un millar de policías. Los manifestantes respondieron con machetes y piedras. Entre los uniformados, hubo seis heridos. Entre los campesinos, unos veinte. Catorce personas fueron detenidas, incluidos dos de los principales líderes, Jesús Adán Espinoza e Ignacio del Valle, Nacho. Hubo varios heridos de bala: las fuerzas policiales habían usado munición real.

En ese momento Atenco estalló. Más de 3.000 personas cortaron la carretera en cuatro puntos. Pusieron trincheras con costales y

7. Boniato, batata.

barricadas, y prepararon al pueblo para la defensa, incluso cavaron zanjas. Trescientas personas del Frente fueron a buscar a sus compañeros Nacho y Adán a la Subprocuraduría de Justicia. Como ya los habían trasladado, se trajeron a cambio a siete funcionarios como rehenes. «Los agarramos de las greñas y los sacamos a machetazos en las nalgas: “¡Órale, cabrón, vamos!”», relata alrededor de la mesa de troncos Felipe Álvarez, *Finini*, uno de los integrantes más destacados del Frente. Los funcionarios lloraban de miedo. «Aguántese, cabrón, que nuestra gente sí está herida y a usted no lo estamos agrediendo». Los llevaron al Auditorio Municipal. «Si se hubiese producido una agresión al municipio, hubiera prendido algo que a lo mejor no se paraba. Ya había muchos ojos: podían masacrarnos, pero no lo iban a poder tapar. Fox le midió el agua a los camotes y dijo: “Para atrás”».

Lograron la liberación de sus compañeros y el 20 de julio de 2002, después de nueve meses de conflicto, se iniciaron los diálogos entre el FPDT y el Gobierno. Cuatro días después, a raíz de los golpes de la Policía en la batalla del 11 y 12 de julio, murió José Enrique Espinoza Juárez, uno de los tantos campesinos del Frente que no poseía tierras. El día 2 de agosto, Fox anunció la cancelación del proyecto.

Por la noche hubo baile y fuegos artificiales en San Salvador Atenco. «Estaba todo el valle de México a favor de nosotros y toda la gente de las comunidades de alrededor: de Teotihuacán, de Texcoco y de Ecatepec. Del Distrito Federal, del estado de Puebla y de Tlaxcala venían a apoyarnos», recuerda Heriberto. En palabras del periodista Luis Hernández Navarro, la lucha de Atenco demostró que «es posible enfrentar exitosamente las decisiones arbitrarias del poder, sin tener que echar mano de negociaciones oprobiosas». Encima del tronco mesa, los tacos de carne y los nopalitos se han acabado. Quedan unas piezas de fruta en una cesta. Los amigos siguen bebiendo cervezas. En la etiqueta de las botellas se lee —¿cómo decirlo sin que parezca inventado?— «Victoria».

El contagio de lo posible

El sol empieza a ponerse más allá de donde estarían las pistas de la terminal aérea. Heriberto se tendría que ir a regar, pero se queda. Corre un poco de aire fresco. Mientras se va la luz, los integrantes del Frente continúan el relato. En 2003, el FPDT llegó a un acuerdo

con el Gobierno por el que se le reconocía como promotor social de la región. Igual que los estudiantes se solidarizaron con Atenco, el Frente apoyaba otros movimientos, como fue el caso en 2006 de los floristas de Texcoco, que luchaban para que el Gobierno les dejara vender sus productos en las afueras del mercado municipal.

El 2 de mayo de 2006 estalló la represión policial contra los vendedores. Como respuesta, una vez más, los habitantes de San Salvador Atenco cortaron la carretera. El duopolio mediático de Televisa y TV Azteca grabó desde un helicóptero cómo unos quinientos policías huían a zancadas al ser replegados por los campesinos. También emitieron las imágenes de un grupo de manifestantes que pateaba a un agente tendido en el suelo. «¡Es una vergüenza! ¡La Policía corriendo! ¡A qué esperan para dar una orden más eficaz?», azuzaban los presentadores. Por contra, decidieron omitir que Javier Cortés, de catorce años, había sido asesinado por una bala calibre 38 de la Policía. Como respuesta, los atencenses retuvieron a quince policías.

Esa acción y la cobertura de las televisiones proporcionaron la justificación perfecta para un operativo coordinado entre el presidente Vicente Fox, el jefe de Seguridad del estado de México, Wilfredo Robledo, y el entonces gobernador del estado por el PRI, el ahora presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Entre los días 3 y 4 de mayo, 3.500 agentes de Policía ocuparon San Salvador Atenco y se dieron a la caza. Iban armados con munición real.

Catalina González Rosas, Cata, recuerda a unos metros del árbol grande donde hace unas horas preparaba los tacos cómo buscó refugio casa por casa hasta que alguien le abrió. Lo cuenta ya casi sin luz. Con la Cruz Roja y los medios de comunicación confinados en un perímetro cerrado, las fuerzas policiales allanaron viviendas, golpearon, detuvieron y dispararon indiscriminadamente. Veintisiete mujeres fueron sometidas a tortura sexual. Al menos siete de ellas fueron violadas.

En el operativo, que Peña Nieto calificó en la televisión de «limpio», Alexis Benhumea, de veinte años, murió por el impacto de una granada de gas. Fueron detenidas 217 personas. En solidaridad, el mismo 4 de mayo, grupos de estudiantes bloquearon varias avenidas del DF. Y el día 5, una marcha convocada por los adherentes de La Otra Campaña llegó a Atenco encabezada por el subcomandante Marcos e hizo retroceder a los retenes que la Policía había dejado en el pueblo. Al entrar en territorio del FPDT, las 5.000 personas

que integraban la marcha gritaban: «¡Atenco, hermano, el pueblo te da la mano!». Cientos y cientos de personas, muchas de las cuales habían sido víctimas de la represión, saludaban emocionadas a la columna de manifestantes con pañuelos blancos.

Ya es casi de noche y los compañeros del Frente han prendido una hoguera. Están cantando. Un poco alejada, Cata habla de los días que siguieron a la intervención de la Policía. Poco a poco, los detenidos fueron liberados. Pero quedaron doce en prisión, entre ellos su esposo, Finini, Ignacio del Valle y el abogado del FPDT, Héctor Galindo. Cuando por fin consiguió ver a Finini en el penal de La Palma no lo reconoció. Estaba hinchado, pelón y sin bigote:

—¿Qué pasó, vieja? —le dijo a través del cristal. Cata rompió a llorar—. No llores, no les des el gusto a estos hijos de... —le dijo Finini, señalando la cámara de seguridad de la prisión.

—¡Dime si te están madreando [golpeando], que ahorita está *La Jornada* tras de nosotros, para denunciar! —Cata quería que la cámara registrara bien sus palabras.

—¿Cómo hiciste para entrar?

—No me preguntes. —Cata había pasado por innumerables trámites y había tenido que rentar ropa porque «no podía entrar de deportista»—. Voy a tardar en venir porque piden muchos documentos... ¿Y Nacho? —Cata preguntaba por Ignacio del Valle.

—Él está bien... Dile a la gente que no baje los machetes. Dale un beso a mi madre, no le digas que estoy golpeado. Dile a mis hijas que las quiero mucho y a mis nietos que estoy trabajando lejos.

Al año de esta conversación, a Finini y a Héctor los condenaron a 67 años. A Nacho, a 112. Los tres en un penal de máxima seguridad y otras nueve personas en otra cárcel. Durante el tiempo que pasaron en prisión, el Frente y La Otra Campaña no dejaron de hacer marchas y mítines. Los plantones frente a los penales se mantuvieron hasta que en junio de 2010, más de cuatro años después, Trinidad Ramírez, Trini, una de las portavoces del FPDT y esposa de Nacho, bajó las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia con la noticia: «Por fin libres. Lo conseguimos... Han dictado su liberación inmediata», dijo levantando el machete ante la gente congregada. La Corte consideró que las acusaciones se basaron en premisas falsas y que se utilizaron pruebas ilícitas. «Vencimos al Gobierno federal y a Peña Nieto. El mensaje es “organícense,

podemos ganar»», exclamó Trini. Para Atenco, se trataba de una segunda victoria.

«Cayó abatido a balazos / ese líder campesiii-i-noooooo / y en el palacio central / se burla-ba el asesiii-i-noooooo». La voz de Finini cantando corridos clásicos a pleno pulmón junto a la hoguera se cuele en el relato de Cata. «Yo le doy las gracias a toda esa gente que nos apoyó a gritar lo que estaba pasando, porque si no, no lo oyera yo cantar».

Galletas y estrategia

Ya es noche cerrada. Heriberto, que decidió que ya regaba mañana, ofrece café de olla, agua fresca y un surtido de galletas en la mesa del comedor de su casa. Los nietos de Finini se acercan a por un dulce y vuelven a jugar cerca de la televisión. De lejos se escuchan los cohetes por la Virgen de Guadalupe, patrona de México.

—Sabíamos que íbamos a llegar a la cárcel, pero no a una de máxima seguridad —admite Héctor.

—Nos tenían con los chapos, con los mochaorejas⁸, con violadores. ¡Desde luego que ese no es un lugar de máxima seguridad! —se ríe Finini.

A pesar de que Nacho, Finini y Héctor estaban en la misma prisión, permanecían separados por muros o por tiempos. Héctor, todavía estudiante, interponía demandas por malos tratos contra el director del penal, no porque fueran a cesar los malos tratos, sino para poder citarse los tres y platicar.

—Pensaron que iban a descabezar el movimiento. Pero no es un movimiento en vertical. Nos liberaron y el proyecto, a pesar de todo, sigue detenido —dice Héctor, que al salir se tituló y se especializó en derecho penal.

—Lo que pasó en 2002 fue un mal ejemplo: por ahí, en Yucatán, salieron machetes; acá, en el norte, salieron machetes. —Heriberto gesticula casi como si de la geografía mexicana crecieran machetes

8. El Chapo Guzmán es el narcotraficante más buscado de México. Varios de sus familiares y allegados coincidieron con los presos de Atenco en el penal de máxima seguridad del Altiplano. El Mochaorejas es el seudónimo de un conocido extorsionador que cortaba las orejas de sus secuestrados.

como plantas—. La gente empezó a decir: «Si Atenco pudo, ¿por qué no nosotros? Hay que organizarse».

Los amigos están de acuerdo en que la represión de mayo de 2006, las violaciones y las penas de prisión tenían como objetivo darles un escarmiento: poderosos intereses inmobiliarios y políticos perdieron su negocio y no debía cundir el ejemplo. «Tú ordenaste el operativo. No fue una situación fortuita, fue una venganza planeada», le espetó Trini a Enrique Peña Nieto en un encuentro público en 2012. La cámara enfocaba al entonces candidato electoral que, con un aspecto tan inmaculado y plástico como un muñeco Ken, parecía asentir.

Mientras terminan el café, la conversación se anima aún más. Hace tiempo que no coincidían en una mesa. Cuentan la vez que consiguieron salir de un cerco de la Policía haciendo un cerco todavía más grande alrededor de los agentes.

Algunos representantes del Frente habían acudido en abril de 2006, un mes antes de la gran represión, a una mesa de diálogo para mejorar las condiciones en las escuelas para niños con diversidad funcional. Llevaban un año reclamándolo y la Gobernación les daba largas. Ese día la respuesta no fue distinta. Así que dijeron, Finini entre otros, que de ahí no salía nadie sin un compromiso. Las autoridades lo consideraron un secuestro y una fuerza de acción rápida de la Policía rodeó el edificio. «Nos tienen rodeados. Háblale a los compañeros para que vengan, que nos pueden golpear», le pidió Finini a Heriberto por el celular. Y, entonces sí, los funcionarios se convirtieron en rehenes.

—Rodeamos el cerco policial. —Heriberto hace un esquema sobre la mesa con el surtido de galletas—. Llegaron los *panchos-villa*⁹, de Ecatepec, de Teotihuacán, de toda la región. Llegaron las señoras y, escondidos en las faldas, nos pasaban los machetes: «Órale, compañero». Ellas entraban y salían, iban por más machetes, nos daban más y más. ¡Yo no llevaba machete y al rato ya tenía dos! —La gente en la mesa se ríe—. Entonces llegó la Policía estatal y nos rodeó a las organizaciones. —Heriberto dispone sobre el mantel varios círculos concéntricos de galletas de chocolate, de

9. Integrantes del Frente Popular Francisco Villa.

limón y con virutas de coco—. Estaban los compañeros adentro, luego la Policía de acción rápida rodeándolos, luego nosotros rodeándolos a ellos, y luego otro círculo de Policía rodeándonos a nosotros. Entonces vino la gente de Atenco y de la Universidad de Chapingo. —Heriberto echa mano de los caramelos porque ya no quedan más galletas que distribuir en el esquema—. El helicóptero andaba arriba y muchos de los policías agarraban sus bolsitas y snif, snif. —Hace como que esnifa—. Se estaban preparando. Agarran y cortan cartucho¹⁰. «¡Pinches macheteritos, ahorita!». Nosotros agarramos con el piso... —Heriberto gesticula con un machete invisible que arrastra contra el suelo—. Al final la Policía echó a correr, al trote y dejaron ahí sus camionetas y todo.

La brutal represión del mes siguiente no solo fue una cuestión de «venganza» por el asunto del aeropuerto. El Gobierno recelaba de los machetes de Atenco, a tan pocos kilómetros del centro del poder. Más aún con La Otra Campaña tan cerca.

Aunque ningún policía ha sido condenado¹¹ y en diciembre de 2012 Enrique Peña Nieto se convirtió en presidente de la nación, su responsabilidad en los crímenes de Atenco lo persigue. En plena campaña electoral fue a dar una charla a la Universidad Iberoamericana. Tras unos veinte minutos, fue interrumpido por decenas de estudiantes. «Todxs somos Atenco», decía uno de los muchísimos carteles que desplegaron. Entre gritos de «la Ibero no te quiere» y «asesino», el candidato terminó huyendo por la puerta de atrás, arropado por unos veinte guardias de seguridad. Algunos periódicos y Televisa reseñaron el «éxito» de Peña Nieto en la Ibero, pese al boicot de los «acarreados».

Como respuesta, 131 alumnos se grabaron a sí mismos con sus credenciales de estudiantes para demostrar el carácter auténtico de la protesta y pronto, gracias a las redes sociales, miles de personas se incorporaron al movimiento Yo Soy 132. Un movimiento horizontal y apartidista que llegó a contar con 130 asambleas en universidades

10. Amartillan, preparan el arma para disparar.

11. En 2009, la Suprema Corte de Justicia exculpó a todos los altos cargos implicados en la represión. Ninguno de los veinte policías procesados por torturas sexuales fue condenado. Sin embargo, once mujeres han conseguido que su caso se encuentre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

de todo el país y que hace hincapié en la transparencia, el respeto a los derechos humanos y la democratización de los medios.

En la mesa, el número de galletas ha menguado. Uno de los compañeros canta un corrido que compuso para recordar la lucha de Atenco:

Da principio la pelea, una pelea campal,
los campesinos valientes nunca se saben rajar.
Luego nos llega la calma, comenzamos a avanzar
y entonamos esas notas de nuestro himno nacional
Zócalo lindo y querido, testigo de tantas marchas,
cuánta injusticia has vivido, la causa es la burocracia.
Queremos justicia y la vamos a lograr.
No queremos aeropuerto, queremos tranquilidad.

Por la noche, los accesos al DF están colapsados. Seis millones de peregrinos se dirigen en estos días hasta la basílica de la Virgen de Guadalupe. Petardos. Cohetes. Camiones con crucifijos fluorescentes de tamaño gigante. Figuras de yeso cabalgando a hombros de unas y de otros. Agentes de Policía: 13.250. Toneladas de basura: 520.

La Comuna de Oaxaca

UNIVERSIDAD DE LA TIERRA / OAXACA

En México, 2006 fue un año movido. En enero empezó La Otra Campaña. En mayo, la Policía reprimía en Atenco. En julio, el candidato del PAN, Felipe Calderón, ganaba las elecciones por el 0,5% entre denuncias de fraude. En septiembre, tras una sentencia del Tribunal Electoral que confirmaba la victoria de Calderón, los seguidores del candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, se lanzaban a las calles y tomaban el Paseo de la Reforma. El 1 de diciembre, Calderón asumía la presidencia entrando por la puerta trasera del palacio legislativo, entre silbidos y resguardado por un operativo militar. El 11 de diciembre, lanzaba la «guerra contra el narcotráfico».

Pero en esta sucesión de acontecimientos que marcaron la historia reciente de México falta un episodio clave: la llamada

Comuna de Oaxaca. Según el analista Gustavo Esteva, el pueblo oaxaqueño funcionó «como antena sensible de lo que estaba ocurriendo en el mundo», de una conciencia de la necesidad de cambio por parte de «la gente común»¹².

Todo empezó el 15 de mayo de 2006 por una huelga de maestros. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es el mayor de América Latina y su histórica presidenta, Elba Esther Gordillo¹³, representa tan fielmente el concepto de charrismo —entreguismo— como para haber ocupado altísimos cargos en el aparato del PRI. Sin embargo, muchas secciones magisteriales son muy combativas. Ese mayo de 2006, la Sección 22 pedía un incremento de salarios y recogía demandas para el alumnado, como becas y desayuno. Oaxaca es uno de los estados más pobres de México y muchos niños llegan a clase con el estómago vacío. Unos 70.000 maestros secundaban la huelga.

Cuando en la madrugada del 14 de junio 3.000 policías intentaron desalojar el plantón que habían instalado en el zócalo de la ciudad, se desencadenó «una masiva organización social que nadie pudo prever», describe el activista Sergio de Castro Sánchez, que cubrió la revuelta para el periódico *Diagonal* y escribió el libro *Oaxaca: más allá de la insurrección*¹⁴. Marchas de 800.000 personas, cuando en Oaxaca solo viven 300.000, inundaron la ciudad. No era cosa de un día, el hartazgo hacia el gobernador priísta Ulises Ruiz —*Ulises Ruín*— se había cocinado desde el fraude electoral de 2004. Los casos de corrupción y de represión se multiplicaban.

Pero la recién fundada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) no se quedó en reivindicar la dimisión de Ulises Ruiz. Más de trescientas organizaciones populares, indígenas, sindicales, anarquistas, incluso estalinistas o cercanas al PRD, y miles de personas que no estaban integradas en ninguna plataforma, debatieron sobre el concepto de democracia y crearon, según explica el historiador Aguirre Rojas, «todo un programa de Gobierno alternativo». Para romper el bloqueo mediático se creó Radio Plantón y, cuando fue atacada, los

12. ESTEVA, G. (2009), «Presentación», en CASTRO SÁNCHEZ, S. DE, *Oaxaca: más allá de la insurrección: crónica de un movimiento de movimientos (2006-2007)*, ¡Basta!, Oaxaca, p. 13.

13. En febrero de 2013, fue detenida con diversos cargos de corrupción.

14. CASTRO SÁNCHEZ, S. DE (2009), *Oaxaca...*, op. cit.

estudiantes tomaron Radio Universidad. El 1 de agosto, después de una cacerolada, un grupo de mujeres se dirigió a las instalaciones de radio y televisión estatales para contar lo que estaba sucediendo. La directora del Canal 9 se negó en banda a cederles un espacio, así que tomaron pacíficamente el canal. Ninguna tenía conocimientos técnicos previos, pero emitieron durante tres semanas.

La Virgen de Guadalupe lleva máscara de gas

Algunas recetas de mole, la tradicional salsa con chile y chocolate, llevan hasta sesenta ingredientes diferentes. En Oaxaca, cuna de alguno de los moles más reputados, se cocieron juntos varios ingredientes decisivos durante la rebelión. Entre ellos, una larga, muy larga, historia de autonomía indígena. Oaxaca es el estado de México con más población originaria: dieciséis etnias, que representan el 60% de sus habitantes. Tras el levantamiento zapatista, para evitar que se extendiera allí la rebelión, el Gobierno reconoció parcialmente la autonomía de las comunidades: les autorizó a elegir a sus propias autoridades según «usos y costumbres», y admitió la extensión de la justicia comunitaria. En 1995, 412 comunidades de 570 optaron por formalizar este sistema, que ya era una realidad en muchas zonas de Oaxaca. Esta fórmula, caracterizada por una organización asamblearia, «se contamina al resto de la sociedad y se demuestra que ese mismo estilo puede funcionar para otras capas sociales», explica Esteva. La autonomía indígena se mezcla con el movimiento docente, urbano, joven, grafitero, y con sectores marginales.

Oaxaca entera estaba tomada por este «movimiento de movimientos». La ofensiva paramilitar de «los convoyes de la muerte» no se hizo esperar. Cuando se produjeron los primeros asesinatos, se levantaron barricadas para impedir el tránsito de los sicarios. Según explica Sergio de Castro, se llegó a hablar de hasta 3.000 barricadas. Las más pequeñas se construían de noche y se desmontaban de día. Todas funcionaban de forma autogestionaria y horizontal, y se mantenían con los víveres y medicinas que traía la población. A menudo las defendían chavos limpiabotas, lavacarros o vendedores ambulantes, hartos de soportar la extorsión policial y el maltrato de las instituciones.

Y entre automóviles quemados, carritos de la compra con piedras y chapas metálicas, una noche se apareció la Virgen. La Virgen de

las Barricadas. Una representación de la Guadalupeana con máscara de gas. Una Virgen que protegería al pueblo de Oaxaca, que se aparecería en decenas de muros. Unas veces sola, otras acompañada de multitudes, de hombres y mujeres con pasamontañas, de un Zapata o una Frida Kahlo reivindicada. Sobre los muros de las casas bajas de la ciudad, la Virgen de las Barricadas sintetiza, en su manto estampado de diminutos neumáticos en llamas, la confluencia entre cultura popular y lucha social.

«Se nos olvidó que estábamos en México»

Durante los primeros meses se habían producido ya varios asesinatos, algunos de menores y en algún caso por francotiradores. Pero en octubre, al cuarto mes del levantamiento popular, la violencia se recrudeció: decenas de personas heridas de bala, decenas de detenciones ilegales y desapariciones... El 27 de octubre murieron en la ciudad cinco personas, entre ellas el periodista independiente Brad Will, que filmaba a sus asesinos cuando fue disparado. El 28 de octubre, Fox enviaba fuerzas federales a Oaxaca.

«Parece muy loco decirlo, pero se nos olvidó que estábamos en México. Estaba de tal manera claro el control en Oaxaca... No había Policía ni para el tráfico. Los medios locales, el estado estaba en nuestras manos. Estábamos tan seguros que se nos olvidó que esto tenía repercusión en México», explica Esteva. El poder, según dice, tuvo pánico. «Ulises Ruiz le dijo a Calderón: “Si la gente aprende a tirar gobernadores, después van a tirar a otros y después al presidente”. Es un argumento astuto, pero totalmente válido». El PRI —el RIP, como le dicen— en la gobernación del estado y el PAN en la presidencia del país estaban condenados a entenderse. Calderón todavía no había asumido la presidencia, pero lo último que quería, además de la ciudad de México sublevada por el fraude electoral, era heredar una revolución en marcha. Según Esteva, el fin de la Comuna y la continuidad de Ulises Ruiz fue el precio exigido por el PRI por apoyar a Calderón en su disputa electoral con el PRD de López Obrador.

El 25 de noviembre, durante una multitudinaria marcha, el Gobierno del PAN decidió acabar de una vez con la insurrección en Oaxaca con la ayuda de helicópteros, tanquetas, gases lacrimógenos, equipo antimotines y fuego real. De las seiscientas detenciones que

dejaron los seis meses de rebelión, 250 se produjeron ese día. Al estilo de Atenco, se registraron violaciones sexuales e incontables casos de tortura. En todo el conflicto, veintiséis personas fueron asesinadas, según la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos. Pero podrían ser muchas más: varios testigos aseguran que la noche del 25 varios detenidos fueron subidos a helicópteros de la Policía y nunca más se supo de ellos.

La intervención de las fuerzas especiales, la represión, la cárcel y las divisiones internas marcaron el declive de la APPO. Sin embargo, el modo de hacer de la Comuna de Oaxaca no se perdió del todo. Según Rubén Valencia¹⁵, que participó activamente en el movimiento de la APPO, cada vez hay más radios comunitarias, más espacios urbanos de intervención social, más experiencias de medicina alternativa, agricultura urbana y comercio solidario. «No volveremos a ser como antes; no podemos y no queremos» y «ya nada será igual» eran frases repetidas una y otra vez. Según Sergio de Castro, «los largos meses de lucha y de organización popular — sobre todo la de carácter urbano— profundizaron unas prácticas que ya eran de por sí una característica propia de los modos de ser de la sociedad oaxaqueña, especialmente de los pueblos originarios».

Para Esteva, Oaxaca fue un laboratorio político: «Sabemos que lo que se puede hacer a nivel de comunidades y municipios se puede hacer a nivel de estado y funciona muy bien». Ahora el estilo ha cambiado, «la gente está hasta la madre de marchas, nuestra estrategia es hacer las cosas y, en los casos que haga falta, no permitir que ocurran las cosas que quieren hacer». Ejemplos de ello son las resistencias frente a la minería, el maíz transgénico o el corredor eólico en el istmo de Tehuantepec. En este lugar de la costa de Oaxaca, las comunidades zapotecas han conseguido hasta la fecha parar este proyecto impulsado por Gas Natural y Unión Fenosa, y financiado por La Caixa.

Según Aguirre Rojas, Atenco y Oaxaca son ejemplos de un clima de «vísperas de estallido». Según explica, si se compara la situación actual con la que existía antes de la Revolución de 1810 y la Revolución mexicana de 1910, se dan dos grandes similitu-

15. VALENCIA, R. (2009), «Prólogo», en CASTRO SÁNCHEZ, S., *Oaxaca...*, op. cit., p. 42.

des: una crisis económica de grandes dimensiones y una pugna entre las propias clases dominantes. En el caso actual, «entre una burguesía comercial transnacional entreguista, y una burguesía más nacionalista, representada por López Obrador, cuyo aliado principal es Carlos Slim». Para Aguirre Rojas, el análisis es válido para América Latina: «Estos gobiernos progresistas son una etapa intermedia que se explica por la presión desde abajo. Son todavía neoliberales, pero moderados, empiezan a ser neokeynesianos, a nacionalizar ciertas áreas y a distribuir más el gasto social para paliar un estallido. Los movimientos se van a seguir radicalizando y van a romper con esos gobiernos progresistas, y van a empezar a reivindicar gobiernos que manden obedeciendo».

Gustavo Esteva no habla de futuras revoluciones. Defiende que ya estamos en una. «Frente a amenazas muy serias hay una apuesta también muy seria desde abajo no por el gran partido, no por el gran ideólogo, sino por montones y montones de formas», dice. Formas que no buscan ya un modelo concreto, tampoco el modelo de «buen vivir, indígena, con la Pachamama, que es muy atractivo, pero se echa a perder» si se intenta extrapolar a todos los contextos por igual. «No tenemos un modelo, ni queremos tenerlo», resume Esteva. Para este intelectual «desprofesionalizado», el descrédito del modelo y la suma de todas las propuestas anticapitalistas, en particular por la soberanía alimentaria, reflejan un cambio sistémico.

«Estamos en una insurrección. Lo que pasa es que las viejas revoluciones ya no tienen ninguna posibilidad de éxito y estamos en una nueva revolución, tan nueva, que no podemos verla —sostiene Esteva—. Las grandes revoluciones no son la toma de la Bastilla o del palacio de Invierno, sino aquellas en que la gente hace las cosas de otra manera. La Revolución francesa es cuando la gente descubre que Dios no tiene nada que ver con el rey. Cuando la gente piensa así, ese es el momento del cambio». Estos cambios profundos son los más difíciles de ver, afirma. Y de escuchar. Por eso preguntaban los zapatistas: «¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose».

Presidente deslegitimado busca guerra

SEDE DE LA JORNADA / CIUDAD DE MÉXICO

El 25 de noviembre de 2011, se presentaba en el Tribunal de La Haya una denuncia por delitos de lesa humanidad contra el presidente Felipe Calderón. La demanda, respaldada por 23.000 firmas, presenta cargos que incluyen asesinatos selectivos, tortura y complicidad en el secuestro de migrantes en el marco de la guerra contra el narco. Una guerra que en 2013 ya había provocado más de 60.000 muertes y una cifra de desaparecidos que varía según las fuentes entre 24.000 y 70.000. Para Luis Hernández Navarro a la demanda no le faltan motivos: «Calderón se mete en la guerra contra el narcotráfico para ganar la legitimidad que no le dieron las urnas».

A pesar de su nombre, «las drogas no han sido el principal objetivo» de esta guerra, declaraba Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas. «Las políticas contra las drogas son más peligrosas que el mismo consumo. Se trata de políticas de control social reforzadas a nivel internacional que nacen de la necesidad de crear un enemigo externo para concentrar poder en la presidencia»¹⁶. Entre estos refuerzos internacionales destaca el Plan Mérida —también conocido como Plan México— iniciado por George W. Bush y ampliado por Barack Obama. Una intervención, según explica Carlsen, que sigue las líneas del Plan Colombia.

Para Aguirre Rojas esta guerra tiene dos lecturas. Por un lado, es resultado de un enfrentamiento entre los grupos que controlan el narco y que, ante el descabezamiento de algunas zonas, pugnan por las plazas disponibles. Pero también es una guerra, sostiene, de «las clases dominantes contra la población, para criminalizar la protesta social». En particular, según añade Carlsen, contra los movimientos defensores de recursos naturales: «Es necesario eliminar dirigentes sociales que están al frente de la resistencia, y eso se logra fácil disfrazando su muerte como una más del crimen organizado».

16. CANAL PROYECTO ECOS (2013), vídeo *Las políticas prohibicionistas de la droga como políticas de control social*.

No es personal, es feminicidio

Hombres obligados a trabajar para los cárteles, migrantes que desaparecen en su viaje al norte, periodistas que escribieron el artículo equivocado, mujeres secuestradas por las redes de trata, jóvenes sin opciones... Entre las víctimas que ha dejado la guerra contra el narco, también se encuentran miles de jóvenes asesinadas, sometidas «a una feroz violencia sexual», según denuncia la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una de las más representativas en la lucha contra el *feminicidio*. No es un fenómeno nuevo, ni todos los asesinatos están relacionados con los cárteles, pero la guerra contra el narco ha disparado los índices de violencia contra las mujeres.

«Está documentado que hay violencia contra ellas tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, pero cuando se incrementa la violencia social se incrementa de manera exponencial el riesgo específico hacia las mujeres», expone Andrea Medina, de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. En 2010, en México se produjeron 2.335 asesinatos de mujeres por razones de género, según un informe de ONU Mujeres¹⁷, más del doble que en 2007, el año de inicio de la guerra contra el narco.

Según este mismo informe, una de las principales causas que explican esta situación son «los altísimos niveles de impunidad». Las autoridades, por complicidad o por indiferencia, ni buscan ni encuentran a los responsables. Precisamente por este motivo el Estado mexicano fue condenado en noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los cargos: no haber hecho absolutamente nada ante el asesinato de tres mujeres, dos de ellas menores de edad, encontradas en 2001 en un campo algodonero de Ciudad Juárez. Sobre todo, según reconoce la sentencia, cuando el Estado tenía «pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas». La activista feminista Marcela Lagarde fue una de las impulsoras de la investigación, también una de las principales teóricas del concepto de *feminicidio*.

17. INCHÁUSTEGUI ROMERO, T., y LÓPEZ BARAJAS, M.P. (coords.) (2012), *Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 1985-2010*, ONU Mujeres, México, p. 23.

Durante su etapa como diputada independiente en el PRD, entre 2003 y 2006, Lagarde impulsó la tipificación del delito de feminicidio, incluido ahora en las leyes de diecinueve estados mexicanos. Esta activista también propició la aprobación de la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se reconoce la existencia de una situación estructural e histórica de violencia contra la mujer. Gracias al trabajo de Lagarde y de tantos colectivos feministas, como Mujeres Libres en Resistencia o Ali Somos Todas, estos asesinatos han dejado de entenderse como una «cuestión personal», para convertirse en una «cuestión de Estado», reflejo del control que los hombres ejercen sobre las mujeres, explica Mercedes Olivera. Sobre todo, indica esta pensadora, en un momento en que la violencia feminicida se ve potenciada por un incipiente «cuestionamiento y deslegitimación del poder masculino»¹⁸ y multiplicada por el desempleo y otros problemas sociales derivados de las políticas neoliberales.

«Entrégueme a mi hijo»

En medio del acto oficial se coló una mujer pequeña vestida de luto: «Ciudadano Echeverría. Entrégueme a mi hijo»¹⁹. Era el 1 de diciembre de 1976. Se trataba del último acto de Luis Echeverría como presidente de la nación. La mujer vestida de luto era Rosario Ibarra de Piedra. Hasta en 38 ocasiones Rosario Ibarra le reclamó al presidente por su hijo desaparecido. Se colaba en las inauguraciones, en las celebraciones, en sus apariciones públicas. Para los medios de comunicación y gran parte de la opinión pública mundial, en México se respetaban las garantías constitucionales. Sin embargo, desde 1968 se habían incrementado las desapariciones de activistas políticos. El colectivo Eureka, formado por Rosario Ibarra y otros familiares de desaparecidos, fue clave para la liberación de 1.500 presos políticos y de 148 personas detenidas y desaparecidas en

18. OLIVERA, M. (2008), «Violencia feminicida en México: expresión de la crisis estructural», en OLIVERA, M. (coord), *Violencia feminicida en Chiapas*, Unicach, Tuxtla Gutiérrez, p. 32.

19. HERNÁNDEZ NAVARRO, L. (2008), *En sentido contrario*, La Jornada, Ciudad de México, p. 127.

cárceles clandestinas²⁰. En la actualidad, la guerra contra el narco ha creado una nueva generación de Rosarios, sobre todo mujeres, sobre todo madres, mexicanas y centroamericanas, que buscan a sus familiares desaparecidos en México.

La primera caravana, organizada por el Comité de Familiares de Migrantes de Progreso, partió en 1999 de esta localidad hondureña. Desde entonces la fórmula se ha repetido casi todos los años. Mujeres de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y México no han parado de buscar a sus familiares, desaparecidos en el viaje a Estados Unidos. Tampoco han dejado de denunciar la complicidad de las autoridades de México en los secuestros y la responsabilidad del Gobierno por las consecuencias de la guerra contra el narco en miles y miles de migrantes. Cuatrocientas mil personas atraviesan México todos los años hacia Estados Unidos. Solo entre abril y septiembre de 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó el secuestro de 11.333.

En octubre de 2012, arrancó desde Guatemala una caravana de 38 madres centroamericanas. Con las fotos de sus hijos e hijas, recorrieron catorce estados de México, dieron conferencias de prensa, hicieron plantones y se reunieron con funcionarios de migración. También sembraron flores en las vías y «tomaron» *La Bestia*, el tren sobre el que viajan miles y miles de migrantes en su ruta hacia el norte.

En su recorrido, las madres buscaron indicios de sus familiares en cárceles, hospitales, prostíbulos y morgues. Fueron recibidas en los refugios que acompañaron el recorrido de sus hijos. En Tenosique, Tabasco, visitaron el albergue La 72, que con su nombre recuerda la matanza de 72 migrantes perpetrada en agosto de 2010 por los Zetas. En Ciudad Ixtepec, Oaxaca, visitaron el albergue Hermanos en el Camino. Pese a las represalias, se cuentan a puñados los ejemplos de solidaridad con los migrantes. En Veracruz, desde 1995 las mujeres conocidas como Las Patronas preparan y entregan bolsas de comida a los migrantes que pasan a toda velocidad, montados en *La Bestia*. En el albergue de San José de Huehuetoca, estado de

20. Rosario Ibarra de Piedra ha sido diputada, senadora y la primera mujer, en 1982 y 1988, en ser candidata a la presidencia de la República. En 2006 apoyó la candidatura de López Obrador.

México, el colectivo Ustedes Somos Nosotros ofrece un alto en el camino y consejos para sobrevivir en la ruta al norte.

La búsqueda ha empezado a dar sus primeros resultados. La notoriedad pública de las desapariciones es uno de los principales logros de este movimiento. También la denuncia de la responsabilidad del Gobierno mexicano. Un Gobierno que, tal como recuerda Gloria Muñoz, «durante años negó la existencia de desaparecidos»²¹. Algo en lo que insistía Alejandro Solalinde, responsable del albergue Hermanos en el Camino, amenazado de muerte por denuncias como esta: «Desde Chiapas hasta Tamaulipas existe una cadena de corrupción que incluye a autoridades federales, corporaciones policíacas federales, estatales y locales, así como agentes del Ministerio Público. Todos, de una forma u otra, aliados a bandas delincuenciales que violentan a los migrantes»²².

Desde 2006, el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Salvador ha conseguido localizar con vida a 66 migrantes y el hondureño Comité de Familiares de Migrantes de Progreso, a 144. Elvira Arellano, del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), explica que con sus «escasos recursos» su organización ha encontrado a 67 personas. Martha Sánchez, una de las fundadoras del MMM, hacía balance de los logros de la caravana en unas declaraciones a CNN: «Sesenta y siete localizaciones, comparadas con las cifras de los desaparecidos, no parece mucho, pero los logros cualitativos son más, logramos la vinculación entre las madres de los desaparecidos, logramos la sensibilidad del pueblo mexicano. La fuerza moral de la caravana ya permeó».

El caso de Javier Sicilia, cuyo hijo de veinticuatro años fue ejecutado por el cártel del Golfo, proporcionó difusión a un movimiento ya emergente de familiares de víctimas. Con el lema «Hasta la madre», este conocido poeta mexicano denunciaba que la guerra contra el narco estaba matando dos veces a sus hijos: primero con las balas; después diciendo que eran delincuentes. Entre las exigen-

21. MUÑOZ RAMÍREZ, G. (2012), «Los de abajo», *La Jornada*, 13 de octubre de 2012.

22. CASTRO BIBRIESCA, S. (2011), «Solidaridad con los migrantes en México», *Desinformémonos*, febrero de 2011.

cias de la Caravana de la Paz, que en mayo de 2011 recorrió los 77 kilómetros que separan Cuernavaca del DF, destacaban el fin de la guerra contra el narco así como la lucha contra la corrupción, contra la impunidad y la «raíz económica» del crimen. Hasta ahora, para Hernández Navarro, el principal logro del movimiento liderado por Sicilia ha sido borrar el calificativo de criminales y cómplices que se utilizaba para desacreditar por igual a víctimas y familiares.

«La Parota ya cayó»

ALREDEDORES DE ACAPULCO / ESTADO DE GUERRERO

En 1948, el director de cine Robert Florey eligió Acapulco, en la tropical costa del estado de Guerrero, para el rodaje de *Tarzán y las sirenas*. Años más tarde, su protagonista, Johnny Tarzán Weissmüller, se quedó a vivir en la ciudad. Estaba prendado de Acapulco. Él y cualquiera que presumiera de *glamour* durante esas décadas. Por las playas de su bahía pasearon, entre otras muchas personalidades, el shah de Irán, Rita Hayworth, Frank Sinatra y los Kennedy en su luna de miel. Desde que La Habana era revolucionaria, Acapulco se convirtió en el primer destino turístico de Hollywood.

En la actualidad, junto a la avenida Costera, los hoteles altos, de colores claros y albercas [piscinas] azules, coleccionan desconchones. Las moles de la bahía permanecen encendidas de noche, pero están casi deshabitadas. No han soportado bien la competencia de Cancún como destino turístico ni la guerra contra el narco. Según la Procuraduría General de la República, en 2006 el cártel de Sinaloa rivalizaba con el cártel del Golfo por la plaza de Guerrero. Una competición que se fue ampliando cada vez a más jugadores y que ha dejado un macabro reguero de cabezas decapitadas por toda la ciudad. Para 2013, la llamada «Perla del Pacífico» había pasado a ser la segunda ciudad más peligrosa del mundo²³.

23. Por detrás de San Pedro Sula (Honduras) y con más homicidios que Ciudad Juárez, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Bajo las filas de palmeras de las avenidas de la ciudad, se pasea cada tanto un *pick up* oscuro de la Policía Federal. En la parte de detrás, abierta, dos oficiales de pie vigilan lados opuestos de la calle con las manos sobre armas de gran calibre. A las críticas por las *mordidas* que piden los oficiales, se suman las denuncias por connivencia entre altos funcionarios y narcos. Frente a esta situación, más de cien comunidades de la sierra de Guerrero se han integrado en un sistema de justicia indígena propio. La llamada Policía Comunitaria nació en 1995 para hacer frente a asaltos, robos o violaciones sexuales, pero desde 2011 también intenta poner freno al narcotráfico. Se trata de una guardia comunitaria parecida a la Guardia Indígena del Cauca colombiano, aunque en este caso los agentes van armados.

El Acapulco real

Por las noches, algunas familias acapulqueñas venden crema de nácar y *souvenirs* en el paseo marítimo de la ciudad, que conecta el Acapulco Náutico con el Acapulco Dorado. Al sur, el lujo sube todavía un escalón más hasta llegar al Acapulco Diamante. Y después del Acapulco Diamante, unos treinta kilómetros hacia el interior, se sitúa un buen ejemplo del Acapulco real, donde existen 110 «colonias de alta marginación», según publicó la edición de Guerrero de *La Jornada*. Allí, 36 comunidades campesinas han conseguido desde 2003 defender su derecho a la tierra, al agua... a sobrevivir, en definitiva, frente al megaproyecto de La Parota.

La parota es un árbol tropical que puede llegar a medir 45 metros. Pero los empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no llegaron al cauce del río Papagayo para proponer un área natural que protegiese la selva caducifolia de la zona. Su idea era, más bien, construir una presa que sepultaría bajo el agua miles y miles de hectáreas de tierras que los pobladores poseían desde la Revolución mexicana.

A mediados de 2003, sin avisar a las comunidades, ya habían cavado dos túneles profundos y habían talado árboles frutales y sembradíos de maíz. Había unas cuatrocientas personas trabajando en una obra que se intuía enorme. Tras meses de coordinación y dudas, las comunidades de Garrapatas, Arroyo Verde y San José tomaron

una resolución: pararla hasta que hubiera información. La mañana del lunes 28 de julio de 2003, cuando los ingenieros volvían de Acapulco de «reventarse» en los locales nocturnos, se encontraron con 120 personas que habían bajado del cerro de madrugada. Bien despiertas los estaban esperando con su herramienta de trabajo, el machete, en la mano.

—Aquí van a detenerse. Queremos que traigan al ingeniero jefe, que tiene que decir qué es lo que están haciendo y por qué.

Tres funcionarios de la CFE fueron retenidos hasta las cuatro de la tarde. El ingeniero jefe no respondió a las llamadas. «Ese día detuvimos dieciséis camionetas, tres maquinarias pesadas y seis vehículos particulares», cuenta Felipe Flores Hernández, comunero de Garrapatas y ahora vocero de la organización que se creó a raíz de esos primeros días de confrontación: el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (Cecop). En ese paraje, conocido como El Fraile, se mantuvo el plantón durante diez días. Los trabajadores tuvieron que irse y se llevaron la maquinaria con ellos.

Para impedir el acceso a la obra, las comunidades llegaron a mantener en los siguientes años hasta seis plantones simultáneos. Unos estaban cerca de los pueblos, otros se situaban junto al río o en los cerros. Las comunidades afectadas se turnaban. Eran unas treinta personas en cada plantón, los hombres de noche, las mujeres de día.

—¡Las vamos a violar! —les gritaron un día los conductores de las camionetas.

—¡Bájense, hijos de su chingada madre! —dijeron ellas machete en mano.

«La lucha es por el agua»

Marco Antonio Suástegui nació en Garrapatas y de niño se trasladó a la ciudad de Acapulco, donde acabó estudiando arquitectura en la universidad. Estaba trabajando en un puesto de alquiler de motos de agua en la bahía, junto a los altos hoteles blancos, cuando algunas personas de la comunidad se acercaron a pedirle ayuda. Habían conseguido unos planos de la represa, pero no sabían leerlos. Él sí sabía. «Empecé a ver planos topográficos, de altimetría y ahí me di cuenta de la dimensión de la presa: el “vaso de agua” era diez veces más grande que la bahía de Acapulco», dice Suástegui mientras

señala el mar y dibuja sobre la arena seca. El muro de contención, también llamado cortina de agua, mediría 182 metros de altura.

Según datos del Tribunal Latinoamericano del Agua, el proyecto tenía previsto sumergir 17.300 hectáreas de selva no intervenida de alta biodiversidad y el territorio no ya de tres, sino de 36 comunidades. Habría unas 25.000 personas afectadas directas cortina arriba y unas 70.000 afectadas cortina abajo y en los alrededores. El proyecto no solo no especificaba dónde se reubicaría a toda esa gente, sino que rebajaba el cálculo de la población desplazada a 3.048 personas²⁴.

«Nada más tenían registrado a mi padre, como comunero, pero no a mi mamá ni a mi hermano, que son mayores de edad», explica Suástegui. Según denunciaron desde el Cecop, la compañía pretendía expropiar sus tierras pagando setenta centavos de peso el metro cuadrado, el equivalente a cuatro céntimos de euro. Con esa suma les quedaban dos opciones: emigrar o trabajar de vendedores ambulantes en Acapulco.

Los integrantes del Cecop siguieron investigando. Poco a poco fueron saliendo a flote más y más datos que la CFE había omitido en el informe de impacto ambiental. La presa afectaría a 113 especies en peligro de extinción y se situaría encima de un área de intensa actividad sísmica, la llamada Brecha de Guerrero, donde se juntan tres placas tectónicas²⁵. Toda la vegetación sumergida en descomposición produciría grandes cantidades de dióxido de carbono, por lo que no se trataba de «energía limpia». De cortina para abajo quedaría la sequía y no podrían seguir bebiendo el agua del Papagayo «tal como viene». Tampoco podrían, al contrario de lo que se les había dicho, pescar en esa agua. Y comprobaron que su caso no era excepcional. En México, 167.000 personas han sido desplazadas por la construcción de represas, según datos de la ONG International Rivers. Muchas otras han conseguido hasta la fecha paralizar los proyectos, como en el caso de la presa Paso de la Reina (Oaxaca) y del Zapotillo (Jalisco).

24. CENTRO POR EL DERECHO A LA VIVIENDA Y CONTRA LOS DESALOJOS (2007), *El derecho a la vivienda y a la tierra frente a los proyectos de desarrollo: el caso de México*, Programa COHRE, Ciudad de México.

25. AIDA (2009), *Grandes represas en América, ¿peor el remedio que la enfermedad?*, p. 91.

«Hay quien piensa que el ecologismo es un lujo de los ricos, que hay que preocuparse por la naturaleza solamente cuando ya tienes de todo en casa»²⁶, escribía en 2007 Joan Martínez Alier, autor del libro *El ecologismo de los pobres*. Y en un contexto de crecientes conflictos de carácter medioambiental, según expone este economista, existe «un desplazamiento de los costos ambientales del Norte al Sur».

Al principio, a las comunidades se les dijo que la presa servía para abastecer de agua Acapulco. Luego no era agua, sino energía. Y, al final, resultó que no era para Acapulco porque, según reveló el diputado José Antonio Almazán, Acapulco no tenía déficit energético. La Parota estaba ideada para exportar electricidad a Estados Unidos como parte del Plan Puebla-Panamá, un plan enfocado, tal como denuncia el Cecop, a la explotación de recursos naturales en el marco de los tratados de libre comercio.

Los taxistas del Anticristo

Casi diez años después de iniciar la lucha contra la presa, las asambleas del Cecop se siguen celebrando cada domingo, cada semana en una comunidad diferente. Una señora ofrece agua de Jamaica fresca entre las cincuenta personas que han acudido hoy. La cancha de baloncesto techada y sin muros hace las veces de plaza principal de la comunidad de San Antonio. «Vamos a luchar hasta que se cancele la presa, hasta que llegue otro proyecto, el del pueblo: una universidad campesina, un hospital...», dice Marco Suástegui. En las asambleas ya no se habla solo de La Parota. Las comunidades empezaron a utilizar la estructura creada para tratar otros temas que les afectaban. Aquel domingo por la mañana, la asamblea habló de la gestión del agua potable, los sobornos de un programa de ayudas del Gobierno, y las novedades judiciales relativas a la represa.

Para aparentar legalidad, entre 2003 y 2011 la CFE celebró al menos once consultas comunitarias, siempre envueltas en irregularidades, tal como luego reconoció la justicia: se celebraban en otro

26. MARTÍNEZ ALIER, J. (2007), «El ecologismo popular», *Revista Ecosistemas*, septiembre de 2007.

municipio o sin respetar los plazos, acudían taxistas pagados para hacerse pasar por comuneros y ejidatarios, o se impedía la votación de los opositores al proyecto. En la primera consulta de 2004 había seiscientas firmas falsificadas.

En agosto de 2005, en otra consulta amañada, 5.000 personas opuestas a La Parota se enfrentaron a un millar de policías. «El pueblo se cansa de tanta pinche tranza²⁷» es uno de los lemas mexicanos por excelencia. Y ese día se cansó de verdad. Entraron al lugar de la asamblea con machetes, piedras, resortes [tirachinas] y arrasaron. Según cuenta Rodolfo Chávez, uno de los portavoces del Cecop, tiraron la barbacoa al suelo, quemaron los listados y rompieron los instrumentos de la banda de música. Sí, en las asambleas fraudulentas había musiquita y barbacoa. Los notarios salieron corriendo. La puntería de las mujeres con los resortes quedó registrada en la memoria colectiva.

Pero en menos de quince días ya se había convocado una nueva —y muy lejana— asamblea. Los agentes de Policía que custodiaban la consulta, enfundados en sus hombreras negras y capeadas, parecían un ejército de armadillos. Cuando los comuneros consiguieron atravesar los retenes que habían detenido sus buses, se encontraron con el recinto vallado y que la asamblea ya había terminado. ¡Había terminado treinta minutos después de empezar! La rabia volcó las vallas y los antimotines armadillos «cortaron cartucho». Entre ambas asambleas hubo decenas de heridos. «El Gobierno es el Anticristo, porque está vendiendo la tierra de los campesinos», resumía un comunero.

Para Rodolfo Chávez estas semanas fueron claves para el movimiento. «Hubo un cambio en la correlación de fuerzas», porque más allá de rebasar las vallas, se rebasó a los comisariados comunales vinculados con el PRI, «que estaban todos maiceados», comprados, según un esquema ya histórico de clientelismo político. Aunque no solo el PRI insistía en llevar a cabo como fuera La Parota. En contra de lo prometido durante su campaña, Zeferino Torreblanca, del PRD, se convirtió al llegar a la gubernación del estado en 2005 en un irreductible defensor de la represa.

27. Robo, engaño.

«La mera mera»

Cuando la parcela es demasiado grande como para que una familia la trabaje sola, se contrata a alguien o se «gana un brazo» de otra persona, a la que se le devuelve el favor más adelante. El Cecop ganó brazos chiapanecos cuando en 2006 una comisión zapatista fue a visitarlos a Aguascalientes. «Marcos dijo que una agresión a La Parota sería una agresión al EZLN, una declaración de guerra», recuerda Rodolfo Chávez. También ganó brazos atenuenses: Trinidad Ramírez e Ignacio del Valle fueron a mostrar su solidaridad. «Si en Atenco pararon el aeropuerto, ¿por qué nosotros no vamos a luchar por frenar La Parota?», fue lo que pensó Felipe Flores.

En el patio central de su casa, Flora cuenta que el nombre de su comunidad, Salsipuedes, tiene un origen preventivo, para espantar a potenciales ladrones. Dice que incluso los guachos [soldados] tienen miedo de este pequeño pueblo de algo menos de cuatrocientos habitantes que en abril de 2006 dejó sin agua a la ciudad de Acapulco. «Cerramos aquí [el sistema de bombeo de] Papagayo II cuando a un compañero lo echaron preso. Y aquí estuvimos dos días y dos noches en un plantón para que lo liberen», recuerda Flora. Sentados junto a ella, su esposo Margarito, Rodolfo Chávez, Lina Ramírez Dorantes y Marciano Cruz asienten. Las albercas, los hoteles, los campos de golf y 700.000 personas de Acapulco se quedaron sin agua. Hasta que el compañero fue liberado. Según cuentan, los guachos no entraron porque Salsipuedes solo tiene una salida.

Tras las batallas de las dos asambleas de 2005 y el corte de agua, en seguida llegaron los calificativos de «macheteros» y «terroristas». El Cecop presentó una demanda a la justicia por cada asamblea ilegal que la CFE les había intentado colar. En los juicios celebrados entre 2006 y 2011, el Tribunal Unitario Agrario declaró nulas las cinco asambleas que la CFE había intentado hacer pasar por válidas, la última ya en 2010. Todavía en los muros de una y otra comunidad se lee «cinco victorias del Cecop». Otra pintada cercana resume el final de esta historia: «La Parota ya cayó».

«¿Por qué hemos hecho nosotros valer los juicios? Por la fuerza del movimiento. El juicio tiene que ser algo que apoye, pero lo que vale es el movimiento y su fuerza», reflexiona Rodolfo Chávez. Mientras en el fogón construido fuera de la vivienda se cocina una calabaza dulce, en el patio la conversación salta a la «comandanta Mago».

—Había una señora en Aguascalientes, se llamaba doña Margarita. Ella fue la que nos insistía —cuenta Flora.

—Del plantón se iba a su casa, donde daba de comer, pero estaba pendiente, cuando le venían personas desde la entrada a avisarle que venía una máquina, decía «vénganse mujeres, pónganse las pilas» —recuerda Lina.

—Pero no lo decía tan bonito lo de la máquina —precisa Roldolfo. Todos se ríen—. Doña Margarita ya estaba grande. Ella era la comandanta. Decía: «¡Órale, pinche, viejas huevonas, párense ya, que ya llegó la maquinaria!». No llamaba a todos, llamaba a las mujeres. Y cruzaba una cadena pesada de lado a lado del camino. Y les decía a los conductores: «¡Lárgate, ándale, hijo de la chingada!, ¡hijo de la verga!». Margarita tenía entonces ochenta años, pero era la mera mera.

—No tenía esposo ni nada. Ella sola se mandaba y se desmandaba —añade Lina.

Poco antes de morir, Margarita Mendoza Solís, *la Comandanta Mago*, considerada símbolo de la resistencia de La Parota, le dijo al marido de Lina: «No dejen de luchar». Y eso hicieron. En agosto de 2012, después de todas las sentencias a su favor y casi una década de resistencia, se daba un paso fundamental para la cancelación definitiva de La Parota. A través de la firma de los Acuerdos de Cacahuatpec, el estado de Guerrero se comprometía a respetar la decisión de las comunidades. La firma de los acuerdos era la confirmación: habían ganado.

«Dicen que las tierras no son fértiles», se ríe Flora. Esa fue una de las excusas para ofrecer tan poco dinero por metro cuadrado. «Para quien que no las sabe sembrar no son fértiles», añade. Pasado el patio, Flora tiene plantada flor de Jamaica. Explica que el tallo se corta en diagonal con el machete. De otra forma resulta imposible. Detrás de las flores, hay árboles grandes y un cactus de unos siete metros. Más allá cae el cerro. Y abajo, donde hubiera estado la represa, sigue corriendo el río Papagayo.

